

COLECCIÓN NUESTROS PAÍSES

SERIE ESTUDIOS

CHILE AL DESNUDO

La historia del Chile contemporáneo
y los antecedentes del estallido social
de octubre de 2019

LUIS CORVALÁN MARQUEZ



casa de las américas

 **Universidad
de Valparaíso**
CHILE
Instituto de Historia
y Ciencias Sociales

 **INUBICALISTAS**

Edición: *Nisleidys Flores Carmona*
Diseño: *Ricardo Rafael Villares*
Corrección: *Ana María Caballero Labaut*
Diagramación: *Luis Moya Medina*

© Luis Corvalán Marquez, 2022
© Sobre la presente edición:
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2022

ISBN 978-959-260-612-8
ISBN 978-959-9301-75-9

Ediciones Inubicalistas
www.edicionesinubicalista.cl

casa

Fondo Editorial Casa de las Américas
3ra. y G, El Vedado, la Habana, Cuba
www.casadelasamericas.org

Todos los gobiernos que planificaron genocidios siempre comenzaron por destruir, a los ojos de sus fieles, la imagen del enemigo, futura víctima.

HannaH arEndt: *Los orígenes del totalitarismo.*

Al volver de Londres el '74 quedé choqueada. El ambiente generalizado, un año después del 11, era de que ojalá no hubiera un solo marxista en Chile. Los debieran matar a todos, decían mis amigos.

EVEl yn Mat t t HEi: *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1999.

También son corresponsables los que inconscientemente aplaudimos, cuando sabíamos de las acciones militares en las calles; y esos amigos que a veces uno encuentra en ciertas comidas y dicen sin más al pasar: todo el problema radica en que no se mataron suficientes [...]. Cuando sea la hora de la verdad, quisiera que todos nosotros -me incluyo yo en primer lugar-, los que de afuera aplaudíamos y alentábamos para que otros hicieran lo que hicieron, también reconozcamos nuestra propia cuota, y no miremos para el lado con la hipocresía clásica chilena.

Luis ValEntín Ferrada: *exparlamentario de Renovación Nacional, Ercilla*, núm. 310, p. 13.

Con gratitud y reconocimiento, a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, las que en medio de la corrupción general, representan la reserva moral de Chile.

Introducción

El presente libro fue estructurado a partir de una serie de ensayos que proponen una interpretación posible sobre la historia del Chile reciente. Algunos de ellos ya han sido publicados, mientras que otros fueron expresamente redactados a los fines de esta edición. Un tercer grupo yacía archivado en espera de un desarrollo posterior.

Entre los textos ya publicados y que fueron incluidos en la presente edición, destaca un par de capítulos del libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, los cuales he incorporado aquí con adaptaciones, sea ampliándolos o abreviándolos. En relación con estos textos y con otros, al comienzo de cada capítulo, en nota al pie de página, hago la respectiva precisión sobre el punto. Debo señalar que al emprender este trabajo la idea inicial consistía en recopilar algunos textos que ya había publicado y otros cuya publicación tenía pendiente. Sin embargo, este plan pronto debió ser modificado cuando comprobé que su implementación conllevaba no abordar aspectos importantes de los procesos históricos en estudio, los cuales debían ser considerados. Para responder a tal constatación durante un lapso relativamente prolongado procedí a elaborar varios textos adicionales que llegaron a constituir la mayor parte de este libro.

1

Al redactar esta publicación, la pregunta inicial a la que se intentó responder fue cuál es el contenido fundamental de la historia del Chile reciente. La respuesta dada en estas páginas a tal interrogante sostiene que, en último término, ese contenido está constituido por: a) los conflictos sociales y políticos desarrollados desde mediados de los años cincuenta en adelante en torno a tres proyectos globales, cada uno apoyado por sectores políticos y sociales distintos: los llamados «tres tercios», izquierda, derecha y centro Demócrata Cristiano, los que, en un marco crecientemente polarizado, lucharon por sustituir el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en crisis; lucha que finalmente se resolvió a través del golpe del 11 de septiembre, en favor del proyecto del gran capital y de la derecha aliados con las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos; b) los crímenes masivos que cometiera la dictadura salida de ese golpe, en indisoluble correlación con la instauración que llevara a cabo del modelo neoliberal; y c) la trayectoria que a partir de 1990 siguieran los gobiernos civiles (instalados por Washington), los que profundizaron, consolidaron y legitimaron dicho modelo.

2

Uno de los rasgos más notables del señalado proceso histórico fue el carácter extraordinariamente violento que adoptó entre 1973 y 1989, lapso caracterizado por los crímenes masivos arriba referidos, sin los cuales era imposible implantar y proyectar en el tiempo el modelo neoliberal que respondía a los intereses de la oligarquía plutocrática y las empresas transnacionales, ambas aliadas, de hecho, con las Fuerzas Armadas. De allí que, parafraseando a Carlos Marx, se pueda sostener que ese modelo, existente hasta hoy, vino al mundo «chorreando sangre y lodo por todos sus poros».

Este hecho, obviamente, debía ser blanqueado e incluso invisibilizado; tal cosa a los efectos de la legitimidad del dominio fáctico de los triunfantes grupos económicos y del capital extranjero, con su correspondiente superestructura política institucional. En esa tarea, entre otros recursos ideológicos, inevitablemente debía

entrar la historiografía, en particular la conservadora. Para esta, una historia nacional, que en teoría debiera ser digna y edificante, no podía presentarse como lo que realmente es: una interminable cadena de crímenes y violencias extremas de las clases dominantes sobre las clases subalternas a fin de mantener a estas en su condición de tales y de castigar con sangre todo intento que pudieran emprender para emanciparse. Desde las masacres obreras de fines del siglo *xix* en adelante, hasta 1990, fecha desde la cual esas violencias permanecen en estado potencial, siempre ha sido lo mismo.

El cometido de la historiografía conservadora –es decir, de aquella ligada a las clases dominantes– consiste precisamente en borrar esos hechos y en elaborar, en contradicción con ellos, la historia edificante requerida por la legitimidad de las clases en el poder, presentando a sus prohombres –cuyo prototipo sería Diego Portales– como modelos de virtud y «patriotismo», solo empeñados en construir la grandeza nacional.

La elaboración de esa leyenda fue la tarea que iniciaron sobre todo Alberto Edwards y Francisco Encina, seguidos luego por Jaime Eyzaguirre y muchos más, cuya otra cara consiste en conceptualizar a quienes cuestionaran la dominación como «antipatriotas» vinculados a «ideologías foráneas», a los que habría que reprimir a los efectos de garantizar la salvaguarda nacional. Este esquema, por lo demás, fue copiado literalmente, por tales historiadores, del pensamiento reaccionario europeo (o sea, de un pensamiento «foráneo»), nacionalista, corporativista e hispanista, al cual, adecuándolo a las condiciones locales, intentaron hacer pasar por concepciones genuinamente «chilenas» o nacionales, de las que no se podía discrepar sin ser calificado de «antipatriota».

Los mencionados fueron los supuestos subyacentes en la interpretación que hizo la historiografía conservadora de la historia de Chile en general, y también –al menos por muchos de sus representantes–, de la historia del Chile reciente. De tal modo, consciente o inconscientemente, se aspiró a legitimar la dominación de clases para invisibilizarla e identificarla con los intereses de la nación, blanqueando los crímenes que ha supuesto, cuando no justificándolos explícitamente, demonizando, a la par, a las expresiones políticas, ideológicas y organizativas de las clases subalternas; tareas todas

propias de la ideología, de la cual la historiografía conservadora, sin fundamento alguno, se proclama ajena.

Acorde a la lógica arriba descrita, Gonzalo Vial en su *Historia de Chile* -en la cual se propuso justificar el golpe del 11 de septiembre y la subsiguiente dictadura- sostiene que los crímenes cometidos por esta se hallaban vinculados a las necesidades de la nación, particularmente a los imperativos de recuperar su unidad, perdida desde fines del siglo *xix*, cuestión que se habría visto agravada a lo largo de todo el siglo *xx*. Vial señala: «una nación no puede subsistir como tal si pierde su unidad nacional», a la cual define como «el consenso mínimo que evita que un país se destruya por la anarquía».¹ Se infiere de esto que la violencia y los crímenes masivos, como los cometidos por la dictadura pinocheteana, serían una forma de recuperar dicha unidad; mecanismo que, por otra parte, a juicio de Vial, sería recurrente en la historia universal. «La persecución medieval contra los cátaros, las posteriores a la Reforma en toda Europa -católica y protestante-, la guerra civil norteamericana y, ya durante el presente siglo, la española y los genocidios comunistas, han sido liquidaciones (buenas o malas) de problemas de unidad nacional».²

Bajo tales supuestos, los crímenes de la dictadura quedarían justificados: se habrían realizado a los fines de recuperar la perdida unidad nacional, sin lo cual el país se autodestruiría por la anarquía. En consecuencia, la dictadura y sus crímenes habrían salvado a la nación de ser disuelta. Dentro de esta lógica, se subentiende que las víctimas de dichos crímenes (la izquierda y las organizaciones populares) habrían sido los agentes de la disolución nacional, portadores del ahondamiento de la ruptura de los consensos que harían posible la existencia del ser nacional.

Los supuestos de este esquema interpretativo son claros: la nación, a través de su «reserva última», las Fuerzas Armadas, debía destruir necesariamente a las fuerzas disolventes que la amenazaban.

Por su parte, Mario Góngora, en su *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos *xix* y *xx**, postula análogo esquema interpretativo. En efecto, vincula al gobierno de Salvador

¹ Gonzalo Vial: *Historia de Chile (1891-1973)*, t. II, *Triunfo y decadencia de la oligarquía (1891-1920)*, Editorial Santillana, Santiago, pp. 33-34.

² Ídem.

Allende con los intereses de entidades extranjeras, de lo cual se derivaría la pérdida del carácter nacional del Estado chileno, en tanto que el golpe del 11 de septiembre figura como una recuperación de ese carácter, siempre por obra de las Fuerzas Armadas. Al respecto, dice Góngora: «la Unidad Popular se ligó a la causa del marxismo internacional, a la Unión Soviética y a Fidel Castro»,³ mientras que «la victoria sobre el internacionalismo marxista-leninista y la toma del poder por las fuerzas que han sido la columna vertebral del Estado chileno [a su juicio, las Fuerzas Armadas] pudo representar la reanudación de la idea de Estado Nacional».⁴

Estamos en presencia del típico discurso conservador en el cual, de manera implícita, la clase dominante, a través de sus prohombres, aparece encarnando a la nación o a «la patria», mientras las clases subalternas, sus organizaciones y líderes que cuestionan esa dominación figuran como contrarios a los valores nacionales o, derechamente, como fuerzas «antipatrióticas» instrumentos de potencias extranjeras. Se trata de una concepción cien por ciento clasista, cuyo real carácter requiere ser velado por la ideología –en este caso historiográfica–, a fin de que no pierda su capacidad hegemónica, o sea, su aptitud para ejercer en la sociedad una dirección intelectual y moral también sobre las clases subalternas.

Bernardino Bravo Lira representa cierta variante respecto del esquema descrito. En efecto, a diferencia de Vial y Góngora, quienes se sitúan dentro de la historiografía nacionalista, Bravo construye su hermenéutica desde el corporativismo. Dentro de este marco doctrinario, su esquema interpretativo postula que desde los comienzos del siglo xx en Chile habría existido una insalvable contradicción entre las instituciones demoliberales –sobre todo el sistema de partidos– y el «Chile organizado», esto es, «el país real de quienes trabajan y producen» (en el fondo, los empresarios). Frente a este país real –organizado en sus gremios, dice Bravo–, desde los comienzos de la centuria se habría venido fortaleciendo el sistema institucional de «partidos-elecciones, Parlamento,

³ Mario Góngora: *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx*, Editorial Universitaria, Santiago, 2006, p. 288.

⁴ *Ibidem*, p. 294.

convertido en una carga inútil»;⁵ tal cosa hasta llegar a los años sesenta y comienzos de los setenta, cuando los gobiernos de Eduardo Frei primero y Salvador Allende después, apoyados en sus respectivos partidos o coaliciones de partidos, habrían intentado, desde el Estado, imponerle al país real, gremialmente organizado, sendas programaciones globales. Como respuesta a ello, los gremios se rebelaron y sus protestas se tradujeron en el golpe del 11 de septiembre. Este, por tanto, habría resuelto la prolongada «tensión (que por decenios existiera) entre partidismo y patriotismo»,⁶ entre la institucionalidad demoliberal y «el Chile real» donde las Fuerzas Armadas vendrían a representar a este último.

Por tanto, tal desenlace representaría la imposición de los intereses de la nación frente a los intereses particulares de los partidos. De este modo, como ocurre en las distintas variantes de la historiografía conservadora, en la hermenéutica de Bernardino Bravo, las Fuerzas Armadas emergen como las salvadoras de los intereses nacionales en peligro. Este autor sostiene que en 1973 «los militares debieron enfrentar una tensión a punto de estallar entre partidismo y patriotismo»,⁷ haciendo valer «los intereses del todo (de la nación) frente a los de las partes (los partidos)»; es decir, habrían hecho prevalecer «lo nacional por encima de lo particular».⁸ De tal manera, como ocurre con toda la historiografía que expresa los intereses de las clases dominantes, en la interpretación de Bernardino Bravo el golpe del 11 de septiembre y las Fuerzas Armadas aparecen salvando a la patria.

3

El análisis precedente demuestra que el discurso historiográfico conservador universaliza los intereses de las oligarquías dominantes. Requiere hacerlo, ciertamente, por cuanto esos intereses son del todo contrarios a los de las mayorías, cuestión que las clases subalternas no deben percibir si la dominación ha de permanecer

⁵ Bernardino Bravo Lira: *Una historia jamás contada. Chile 1811-2011: Cómo salió dos veces adelante*, Origo Ediciones, Santiago, 2016, p. 346.

⁶ *Ibíd.*, p. 347.

⁷ *Ídem.*

⁸ *Ibíd.*, p. 357.

estable. A estos efectos, los intereses de las clases dominantes requieren ser identificados con un concepto más universal, que en nuestra época es precisamente el de patria o nación.

A través de este operativo de la ideología, el cuestionamiento de la dominación por parte de las clases subalternas puede ser presentado como contrario a los intereses nacionales o, incluso más, como una «traición a la patria», merecedor del castigo más radical posible, desde ya, la muerte. Así, por otra parte, la ideología puede llegar no solo a justificar los crímenes, sino también a fundarlos. No es casualidad que el esquema que identifica a las clases dominantes con la nación y a los que se oponen a estas con la disolución nacional esté presente en gran parte de los historiadores conservadores. Ya en 1903, Alberto Edwards, en su *Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos*, utilizaba la amenaza de la anarquía conducente a la disolución nacional para pedir la cuasi erradicación de los liberales, que estarían llevando a la nación al despeñadero. En 1929, en su libro *La fronda aristocrática en Chile*, Edwards es aún más radical, particularmente cuando, como antídoto a la consabida decadencia y disolución nacional que asocia a la irrupción de las masas populares a través del voto —siempre por obra de los liberales—, propugna una «dictadura de espada», o sea, militar, recurso último de las clases dominantes. Mientras, Francisco Encina, en 1934, en su libro *Portales*, hacía de la dualidad entre «patriotas» y «antipatriotas» el punto central de su interpretación de la historia de Chile. A su juicio, el acatamiento al orden autoritario implantado por las elites oligárquicas sería sinónimo de actitud patriótica, mientras que su alteración representaría un atentado en contra de la patria. En efecto, señala: «el orden emana del patriotismo. El que atenta contra él, atenta contra la prosperidad y contra el porvenir de su patria». De allí que «el revolucionario sea un mal ciudadano que *se coloca en el mismo plano moral que el enemigo extranjero*; más aún, *se confunde con el traidor*».⁹

A su vez, desde una óptica neotradicionalista e hispanista, Jaime Eyzaguirre aportó a las concepciones historiográficas conservadoras locales la temática sobre las «ideas foráneas» (liberalismo, socialismo, comunismo, etc.), las cuales se infiltrarían en el país

⁹ Francisco Encina: *Portales*, Ed. Nascimento, Santiago, 1964, p. 211. Las cursivas son mías.

gracias al régimen demoliberal. Este autor, siguiendo literalmente a Ramiro de Maeztu, reputa a estas ideas como disolventes de la nación. Ellas cuestionarían la identidad hispánica del país al infiltrarse en él mediante la acción de determinados actores políticos, sociales y culturales –liberales, socialistas, comunistas, etc.–, a los que cabría enfrentar. Tal cosa a través de la instauración de un régimen de autoridad que dejaría atrás al régimen demoliberal favorable a la infiltración de las mencionadas «ideas foráneas» disolventes del ser nacional. Cuando Vial y Góngora justifican los crímenes de la dictadura al considerar que ellos habrían sido un medio para impedir la disolución nacional, se sitúan dentro de la lógica de los autores referidos.

Las Fuerzas Armadas, salvo excepciones, asumieron del todo este ideologismo, de hecho, clasista, el que, por lo demás, coincide con la lógica básica de la Doctrina de la Seguridad Nacional que los uniformados recibieron desde los Estados Unidos. A partir de la lógica de tales ideologismos, la dictadura pinochetana identificó sus crímenes con la «defensa de la patria» (a la que en la práctica entregaba a las empresas transnacionales y a la política estadounidense), repitiendo, de paso, los lugares comunes provenientes de las doctrinas «foráneas» de la extrema derecha europea.

4

Los planteamientos hechos a lo largo de estas páginas cuestionan explícitamente las hermenéuticas de la historia de Chile arriba señaladas, así como también sus bases teóricas y metodológicas. En su lugar este libro asume otras, caracterizadas por tener en cuenta a las clases sociales, sus expresiones políticas e ideológicas, sus conflictos, proyectos y, en fin, las plasmaciones estatales de los desenlaces de sus luchas.

Desde tal óptica, una de las tesis principales de este libro se refiere a los factores conducentes a los crímenes masivos cometidos por la dictadura cívico militar entre 1973 y 1989. Dicha tesis parte del supuesto de que existe una fuerte conexión entre las extremas violencias desde el Estado y ciertas ideologías, por cuanto es en este plano –en el de la ideología– donde se define (y demoniza) a un enemigo al que cabría destruir, incluso físicamente, lo cual

sería indispensable a los efectos de conservar un valor más alto (como la patria, la religión, etc.). Sostenemos que en Chile esa cultura existió tanto en el campo civil como en el militar, la que se fue conformando desde comienzos del siglo xx, y está constituida por el nacionalismo, el corporativismo y, luego, en parte, por el hispanismo. No obstante –hasta mediados de la década de los sesenta, siempre pronosticando la inminente disolución nacional por obra del marxismo y de su premisa, la institucionalidad demoliberal–, esa cultura se mantuvo en la marginalidad, desde donde insistentemente clamó por la instauración de un régimen autoritario apoyado en las Fuerzas Armadas, a las que concibió como el último recurso con que contaría la nación para revertir el proceso de decadencia que la afectaría. Ese régimen autoritario debía erradicar a los supuestos enemigos de la patria causantes del proceso disolvente hipotéticamente en curso.

Tales concepciones dejaron de ser marginales a mediados de la década de los sesenta cuando, sobre todo con la formación del Partido Nacional, el conjunto de la derecha las hizo suyas. Ese tránsito desde la marginalidad a la centralidad que experimentó dicha ideología fue el resultante del proceso político que empezó a vivir el país desde los años cincuenta en adelante, con la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el alza de los sujetos populares. Por entonces los grupos económicos, de carácter monopólico u oligopólicos, conformados durante los años anteriores como producto de dicho modelo, empezaron a ver en este, con su correspondiente intervencionismo estatal, y también en el alza de los sujetos populares estimulada por el «estado de compromiso», un obstáculo estructural a la acumulación del capital, a la cual concebían como la premisa del progreso del país. De allí que los grupos económicos –y la derecha– se propusieran remover ese modelo y reemplazarlo por otro en el cual el mercado y la empresa privada, y no el Estado, desempeñaran un papel fundamental. A la larga, sin embargo, este objetivo no podrá ser conseguido por vía institucional debido a que la expresión política del gran capital –esto es, la derecha– fue quedando en notoria minoría cultural y política, sobre todo a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, disolviendo sus partidos tradicionales, conservador y liberal, la derecha procedió a unificarse en el Partido Nacional y asumió un ideologismo nacionalista

funcional al golpe. Con base en tal ideologismo, sostuvo que los partidos tanto de centro como de izquierda constituían meros instrumentos de intereses extranjeros y que los verdaderos intereses nacionales tenían su expresión solo en las Fuerzas Armadas y en la derecha misma. E, incluso más, esta derecha reorganizada afirmó que la propia persistencia del régimen demoliberal representaba un peligro para los destinos nacionales, razón por la cual debía ser reemplazado por un régimen de «orden y autoridad». De este modo, el pensamiento antidemocrático chileno, asumido del todo por la derecha, transitó desde la marginalidad a la centralidad con la correlativa asunción de una perspectiva golpista.

En este contexto, la derecha se empeñó en establecer una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas. Esto le pareció urgente, sobre todo en la medida en que sus intereses fundamentales estaban siendo afectados de manera considerable por las reformas emprendidas por Frei, particularmente en la estructura de la propiedad agraria. Frente a esa amenaza, el ideologismo nacionalista y antiliberal entonces asumido por el conjunto de la derecha emergió como funcional en su totalidad a los fines de establecer la señalada alianza con los uniformados, la que, de hecho, terminaría por orientarse a suprimir por la vía del golpe el orden institucional vigente y a establecer un régimen «de orden y autoridad» (intento de golpe que fuera materializado en octubre de 1969 y luego en octubre de 1970).

Bajo el gobierno de Salvador Allende, el golpe, ahora con la decisiva participación estadounidense, se le planteó a la derecha, ya definida como nacionalista —y a los grupos económicos—, con mayor urgencia aún, precisamente porque el gobierno de la Unidad Popular puso en juego el problema del poder en función de un proyecto de perspectiva anticapitalista. En tales circunstancias, el discurso que debía legitimar al golpe se basaría en el ya referido ideologismo nacionalista, lo que no impedía que en ciertas coyunturas fueran utilizados instrumentalmente con ese fin ciertos elementos del discurso liberal. La funcionalidad de las concepciones nacionalistas asumidas por la derecha radicaba en que, junto con justificar la supresión de la institucionalidad demoliberal, a la cual concebía como un peligro para el país, hacía lo propio respecto de la eliminación, incluso física, de los sujetos populares —con sus partidos, sindicatos, su presencia en la cultura y en la instituciona-

lidad estatal–, a quienes el ideologismo nacionalista conceptuaba como un verdadero mal absoluto al que la nación debía destruir a través de sus Fuerzas Armadas como condición para salvarse.

Fue bajo tales supuestos ideológicos –coincidentes con la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos– que la dictadura cívico militar instaurada como producto del golpe del 11 de septiembre –heredera de todo el pensamiento antidemocrático chileno– procedió por años a cometer los crímenes masivos requeridos por la destrucción de los históricos sujetos populares. Esos crímenes no fueron sino la premisa de la instauración del modelo neoliberal, cuyo rasgo más importante consistió en subordinarlo todo –tanto el orden jurídico, político, institucional, social y cultural– a la acumulación del capital. En esa perspectiva la dictadura procederá a entregar a vil precio a los triunfantes grupos económicos las empresas públicas creadas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) durante treinta años de industrialización sustitutiva.

Entre 1973 y 1989, la dictadura obtuvo un claro éxito en su tarea, instaurando a plenitud la dominación de dichos grupos, derrotando a las clases y segmentos de clase que pugnaban por otros proyectos de país. El papel de los gobiernos civiles establecidos a partir de 1990 mediante una transición diseñada por Washington consistió en consolidar y dotar de nuevas legitimidades a ese modelo, aunque introduciéndole variaciones menores a los efectos de darle gobernabilidad.

En función de la tesis expuesta, en los primeros capítulos de este libro, luego de hacer ciertas referencias teóricas e históricas, procedemos a describir la cultura nacionalista y corporativista chilena –civil y militar– para luego visualizar su tránsito como producto del proceso político verificado en el país desde la marginalidad a la centralidad. Ello con su función práctica, esto es, fundamentar y legitimar el golpe, que de modo exitoso (exitoso para la derecha) se produjo el 11 de septiembre, con sus posteriores crímenes masivos.

Este proceso, por las razones que se aducen a lo largo de este libro, luego dio paso a una transición hacia una democracia de fachada que consolidó el incontrapesado dominio de los grupos económicos (y de las empresas transnacionales) instaurado por la dictadura. Este carácter adoptado por la «transición» –uno de cuyos

componentes fue la reconversión política e ideológica de la gran mayoría de la izquierda histórica— le permitió a la derecha prescindir del ideologismo nacionalista y corporativista que por años profesara, el que en las nuevas circunstancias se volvía disfuncional. Acorde con ello la derecha ahora se proclamó partidaria de la democracia e, incluso, defensora de los derechos humanos; todo esto de modo tan instrumental como antes lo fuera su adhesión a las doctrinas nacionalistas. El modelo neoliberal así instaurado y consolidado en el país —después de décadas de implementación práctica—, en virtud de las inequidades que le son inherentes, terminó, no obstante, entrando en una profunda crisis, cuya manifestación más visible fue el estallido social comenzado el 18 de octubre de 2019, el cual, más allá de ser mencionado, no es objeto del presente libro, aunque en sus dos últimos capítulos se estudian con detenimiento los factores que desembocaron en él.

5

Los textos que componen este volumen no pretenden agotar los temas que se abordan, más bien aspiran a plantearlos, sin perjuicio de lo cual se ha procurado dotarlos del correspondiente respaldo documental y bibliográfico a fin de otorgarles mayor solidez.

Para terminar, debo transmitir mis agradecimientos al historiador Aníbal Pérez y a la profesora Roberta Sanhueza, mi mujer, por haberse dado el trabajo de llevar a cabo una lectura crítica de la primera versión del presente texto. Por cierto, los defectos de este no son de su responsabilidad, sino del suscrito. Igualmente debo hacer un reconocimiento al Fondo Editorial Casa de las Américas por decidirse a publicar un libro que dista mucho de alinearse con las concepciones políticamente correctas y de ceñirse al formato académico.

Luis CorValán MarquEz
Diciembre de 2019

CAPÍTULO I

Dos palabras acerca de los crímenes masivos de la dictadura cívico militar

Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.

Pablo Neruda. *Alturas de Macchu Picchu*

Los procesos que desembocaron en el golpe del 11 de septiembre, con la subsecuente dictadura instaurada entonces; los crímenes masivos cometidos por esta en indisoluble correlación con el montaje que hiciera del modelo neoliberal; y los gobiernos civiles advenidos a partir de 1990 para consolidar dicho modelo constituyen los elementos centrales de la historia política del Chile reciente.

El golpe del 11 de septiembre –preparado y llevado a la práctica con la decisiva intervención del Gobierno de los Estados Unidos– resolvió la lucha entre los tres proyectos globales que se levantarán en los años cincuenta cuando el modelo de industrialización por sustitución de importaciones entrara en crisis. Desde el punto de vista histórico, el significado del golpe consistió en la violenta intervención de las Fuerzas Armadas, de hecho, en favor del proyecto de la oligarquía local, de las empresas transnacionales y de los intereses estadounidenses, proyecto que finalmente resultó siendo el neoliberal.

Como resultado de tal desenlace, tanto la oligarquía en recomposición como las empresas transnacionales, se reapropiaron del país, en una primera fase bajo el paraguas de la misma dictadura, y, desde 1990 en adelante –siempre a iniciativa de Washington– a través de los gobiernos civiles. Estos fueron en el fondo el fruto de la cooptación del conjunto de la clase política –salvo excepciones– por el gran capital local y extranjero, e indirectamente por el gobierno estadounidense, de los cuales dicha clase terminó convirtiéndose

en personal tercerizado, todo esto en el contexto de la ubicación del país dentro de un incondicional alineamiento con el gobierno de Washington, el gran *factotum* de la política chilena.

El mencionado proceso distó mucho de ser idílico. A partir del golpe tuvieron lugar extremas violencias estatales, crímenes masivos, desaparecimientos forzados de personas y torturas generalizadas, cuyo grado de horror no tiene antecedentes en la historia nacional, cuestiones respecto de las cuales se requiere un juicio histórico.

Uno de los casos que mejor ilustra las señaladas prácticas del régimen es el del asesinato de Marta Ugarte. El modo en que los órganos de la dictadura realizaron ese crimen grafica uno de los aspectos esenciales del régimen pinocheteano, al tiempo que ilustra similar suerte corrida por miles de otros dirigentes y cuadros políticos, sindicales y administrativos de la vía chilena al socialismo de Salvador Allende.

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la muerte enfrentada por estos, indefensos y muchas veces en medio de horribles torturas, representa la respuesta final dada, a través de la dictadura, por el triunfante gran capital nacional y extranjero –y el gobierno de Washington– a las clases subalternas de nuestro país, las que, para disputar el poder político, quisieron ir más allá del capitalismo e instaurar una sociedad distinta.

Los mencionados crímenes de la dictadura vinieron a poner de manifiesto adicionalmente el carácter de clase que a esta le fuera propio. Esto es, a mostrar que ella se constituyó como un órgano de intereses locales e internacionales bien precisos. El modelo neoliberal implantado en beneficio de esos intereses vino al mundo «chorreando sangre y lodo por todos sus poros». El modo en que fue asesinada Marta Ugarte representa una manifestación particular de ello. De allí la necesidad de referirse al caso, más aún si retrata muy bien la configuración moral tanto de sus perpetradores directos como de sus responsables políticos e intelectuales, civiles y militares. Su muerte –análoga a la de muchísimas otras personas– habla por sí sola y dice más que mil explicaciones y análisis.

Marta Ugarte

24 La relevancia del caso de Marta Ugarte radica en que confirmó lo que ya con anterioridad se creía había sido el destino final de los

detenidos desaparecidos. En efecto, puso en evidencia definitivamente los procedimientos aplicados por la dictadura para ocultar los cuerpos de más de mil de sus víctimas. (Dentro de estas, por cierto, no incluimos aquí a los ejecutados, los muertos en supuestos enfrentamientos, los asesinados en el país y en el exterior, y otros análogos, quienes deben ser contabilizados aparte).

La verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos –que como sabemos consistió en que sus cuerpos mayoritariamente fueron lanzados al mar desde los helicópteros Puma del Comando Aéreo del Ejército (CAE)– terminó siendo confirmada mediante la prolongada investigación que llevara a cabo el juez Juan Guzmán, asesorado por un equipo de detectives.

Esa terrible verdad fue reconocida por varios de los mismos perpetradores cuando fueron sometidos a juicio por dicho magistrado. Por cierto, que no todos los involucrados y partícipes en los crímenes y desaparición de los cuerpos de las víctimas admitieron sus responsabilidades. Estas fueron reconocidas solo por los enjuiciados de rango más bajo, en especial por los mecánicos de los helicópteros del Comando Aéreo del Ejército, suboficiales hoy retirados de las filas, quienes ante el juez Guzmán quebraron el pacto de silencio acordado por los uniformados, al cual los rangos más altos siguen acatando.

Algunos datos biográficos

Marta Ugarte Román nació el 29 de julio de 1934. Se tituló de profesora, fue militante del Partido Comunista y llegó a ser miembro de su Comité Central. Se desempeñó como encargada nacional de Educación de su colectividad y, durante el gobierno de Salvador Allende, como jefa provincial de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) en Santiago.

Después del golpe, como todo su partido y las colectividades de la Unidad Popular, pasó a la clandestinidad, en la cual se desempeñó hasta el 9 de agosto de 1976, cuando fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).

Cautiverio y torturas

Luego de su detención, Marta Ugarte fue conducida a Villa Grimaldi y, según testigos, recluida en el sector denominado «La Torre».¹⁰ También pasó por el cuartel de la Dina ubicado en la calle Simón Bolívar número 8630, y quedó bajo el comando Lautaro de dicha entidad del régimen. En ambos lugares fue bárbaramente torturada.

Durante su estadía en Villa Grimaldi, un testigo, preso sobreviviente –al parecer de su mismo partido–, la vio y conversó con ella. «Ahí estuvimos charlando [relató después]. Me contó que la colgaban por horas, casi día por medio, cuando la sometían a interrogatorio. También me contó que el compañero Víctor Díaz estaba en otra celda y que la habían careado con él».¹¹

Las torturas dejaron a Marta Ugarte al borde de la muerte. Su gravedad se adivina al leer la autopsia de su cadáver, verificada posteriormente, la cual dice así: «la afectada sufrió en vida una luxa fractura de columna, traumatismo toraxoabdominal [sic] con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 9 de septiembre de 1976».¹² La gravedad de sus torturas también se manifiestan en el estado en que fueron entregados sus restos a sus hermanas más tarde. El cadáver, según testigos, mostraba que «sus manos, pequeñas en vida, estaban muy largas y sin uñas, lo mismo ocurría con sus pies. Las piernas estaban casi desprendidas a la altura de la ingle; la piel, en muchas partes presentaba huellas de quemaduras recientes y heridas punzantes. A las hermanas les permitieron ver sólo el lado izquierdo del cuerpo. Observaron que le faltaba una parte de la lengua».¹³

¹⁰ «Ugarte Román Marta Lidia», en *Memoria viva. Archivo digital de las violaciones a los derechos por la dictadura militar en Chile (1973-1990)*. <http://www.memoriaviva.cl/Ejecutados/Ejecutados_U/ugarte_roman_marta_lidia.htm>.

¹¹ Ídem.

¹² Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, febrero de 1991, tomo 2. Secretaría de Comunicación y Cultura. Ministerio Secretaría General de Gobierno, p. 551.

26 ¹³ «Ugarte Román Marta Lidia», art. cit.

Luego de torturarla repetidamente, los organismos de la dictadura decidieron que debía morir y que, como otros miles de detenidos y torturados, su cadáver debía ser lanzado al mar por los helicópteros Puma del Comando Aéreo del Ejército.

El procedimiento de las desapariciones en general

El procedimiento que se le aplicó a Marta Ugarte a los fines de hacer desaparecer su cadáver dista mucho de ser excepcional. En efecto, respondió a una mecánica que se venía repitiendo con sistemática regularidad al menos desde 1974, a cargo, en su materialización final, de los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del CAE, unidad que entonces estaba al mando del coronel Carlos Mardones Díaz.

Una descripción somera de dicho procedimiento tendría que considerar una serie de pasos. En primer lugar cabría mencionar la decisión sobre cuáles prisioneros debían morir. Según los datos aportados por «el comisario (R) Nibaldo Jiménez, exagente Dina con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, la mencionada decisión se tomaba en una reunión en la que participaban los jefes de grupo, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima y otros [...]». Entre esos figuraban «Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA».¹⁴

El excomisario Jiménez sostuvo que los mencionados oficiales «se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado de Puerto Montt».

Una vez tomada la decisión sobre quiénes debían morir, la lista «era enviada al general Contreras, jefe máximo de la DINA [...]». Este la revisaba «y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos».

Después de prolongadas torturas, los prisioneros que debían morir solían ser inyectados, fuera para provocarles la muerte o solo para adormecerlos durante el trayecto seguido por el helicóptero

¹⁴ Ídem.

Puma que los conduciría en dirección a alta mar donde sus cuerpos serían lanzados. En el cuartel de Simón Bolívar la norma era inyectar cianuro para acelerar o asegurar la muerte de los detenidos, lo que corría a cargo de la enfermera teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño.

Luego de inyectados, los cuerpos eran conducidos al Comando Aéreo del Ejército donde se los ensacaba y, con alambre, se les amarraba un riel con el fin de que cuando cayeran al mar se fueran al fondo y no flotarían. A este respecto, en sus declaraciones ante el juez Guzmán, el ya mencionado exagente de la Dina, Nibaldo Jiménez, relató que cuando cierto día en el CAE preguntó para qué eran los rieles cortados en trozos que había a la vista, recibió por respuesta: «esos son pa los paquetes». Cuando preguntó «¿qué paquetes?», sostiene que le respondieron «los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo».

Según relatos de involucrados sometidos posteriormente a juicio, cuando los cadáveres ya estaban colocados al interior de los helicópteros, era posible ver

[...] desde los sacos papeiros que los cubrían, cómo sobresalían las pantorrillas y los pies de los prisioneros muertos. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expe-
lían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos.¹⁵

Algunos de los procesados por el juez Guzmán relataron que «antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del helicóptero Puma (18 a 20) y el estanque de combusti-

ble adicional. La autonomía de vuelo del helicóptero sin el segundo estanque era de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados». ¹⁶

Uno de los mecánicos de los helicópteros, partícipes de estas prácticas, relató que apenas se iniciaron estos vuelos el comandante Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les hizo ver que las misiones que llevaban a cabo eran «secretas», por lo cual no debían comentarlas con nadie que no fuera partícipe en ellas. Ni siquiera debían hablarlo con sus familias. Esto, una vez más, avala la tesis según la cual los crímenes cometidos por la dictadura tenían un carácter institucional y no respondían a meras decisiones o excesos individuales.

Realizadas las operaciones descritas, los helicópteros despegaban desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde a la fecha funcionaba el Comando de Aviación del Ejército, aunque, al parecer, en otros casos lo hacían desde el campo de Peldehue. Desde allí se dirigían hacia la costa de la Quinta Región. A la altura de Quintero giraban hacia mar adentro, donde tiraban su carga de cuerpos. Luego de ello el helicóptero retornaba a su base en Tobalaba. Aquí, señalan los testigos:

[...] desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. ¹⁷

Se cree que entre cuatrocientos y quinientos fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones, las que en una primera fase se realizaron entre 1974 y 1978, aunque también algunos casos se habrían verificado durante las últimas semanas de 1973. Por su parte, las cifras oficiales del Informe Rettig y sus entidades

¹⁶ Ídem.

¹⁷ Ídem.

continuadoras indican que los desaparecidos de la Dina en la Región Metropolitana, solo entre 1973 y 1978, fueron 590.

A lo señalado hay que agregar los casos de desaparecidos ocurridos en otras partes del país, tanto en el norte como en el sur, de los que no se tiene conocimiento exacto. Sobre esto es importante la declaración realizada por el campeón de pesca submarina Raúl Choque, quien en la década de los ochenta dijo a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua.¹⁸

El caso excepcional de Marta Ugarte

En ese contexto, ¿en qué radica la excepcionalidad del caso de Marta Ugarte? Radica en que su cuerpo fue el único lanzado al mar por los militares que salió luego a la superficie y varó en la playa La Ballena, ubicada cerca de la caleta Los Molles de la V Región el 9 de septiembre de 1976. Su cadáver fue encontrado allí semidesnudo y dentro de un saco amarrado con un alambre a su cuello. ¿Qué había pasado?

Los hechos que se han logrado reconstituir señalan que Marta Ugarte fue trasladada desde Villa Grimaldi al sector de Peldehue, en terrenos del Ejército, donde –por órdenes del oficial de la Dina, coronel de Carabineros Germán Barriga Muñoz– debía ser asesinada por medio de una inyección que debía colocarle el doctor Osvaldo Pincetti, conocido en la Dina como *el Brujo*.¹⁹

Lo que vino después fue relatado ante los tribunales de justicia por un exagente, de iniciales EVT, que perteneció a la Brigada Tucán mandada por el mismo coronel Barriga. Dicho agente sostuvo: «la inyección que el doctor Pincetti le puso a Marta Ugarte parece que no la dejó totalmente muerta o adormecida. Nos percatamos de que, al momento de ensacarla, todavía se seguía moviendo».

Este descubrimiento –dice la misma fuente– se produjo en un momento cuando en Peldehue todos estaban nerviosos y apurados. El motor del helicóptero Puma, ya encendido y listo para elevarse, aportaba con su ruido una cuota adicional a la tensión existente.

¹⁸ La información aparece de manera sumaria, entre otros, en <<http://piensachile.com/2011/01/memoria-historica-detenedos-desaparecidos-iv-lanzados-al-mar/>>.

¹⁹ Ídem.

En esas circunstancias, uno de los agentes de la Dina que se hallaba en el helicóptero procedió a sacar un cuchillo y a abrir el saco que envolvía al cuerpo de Marta Ugarte aún viva, al tiempo que cortaba un trozo del alambre con el que se sujetaba el riel a su cuerpo. Luego procedió a ahorcarla con él. Hecho esto, apurado, el agente de la Dina rehizo como pudo la amarra del saco, nervioso en razón de que su jefe, Germán Barriga, gritaba urgiendo para que fuera cargado el último cuerpo a bordo del helicóptero. Por esto, el cuerpo de Marta Ugarte quedó mal adherido al riel que debía garantizar que permaneciera en el fondo del mar una vez lanzado.

El helicóptero se elevó en dirección a la costa de la V Región, dirigiéndose mar adentro, donde fueron arrojados ocho cadáveres, entre ellos el de Marta Ugarte. Ya en el fondo del mar, el riel adherido a su cuerpo se desprendió, lo que le permitió a este emerger a la superficie y ser llevado a la costa por el movimiento del mar.

Se ha señalado que esta «fue la única falla del sistema de exterminio entonces en curso por la dictadura, dando lugar a una pista que más tarde permitiría investigar y condenar a los culpables».²⁰

La prensa y los tribunales ante el caso de Marta Ugarte

La aparición del cadáver de Marta Ugarte en la playa de La Ballena fue reportada por la prensa escrita de la época como un crimen pasional. Los periódicos sostuvieron que sus posibles autores serían el marido o el amante de la víctima, la cual fue presentada como una hermosa joven de alrededor de veintitrés años, cuando en realidad Marta Ugarte tenía cuarenta y dos. En este montaje les correspondió un papel relevante a los periodistas Pablo Honorato y Beatriz Undurraga, quienes pudieron ver el cadáver de Marta Ugarte comprobando que todavía conservaba el alambre en torno a su cuello.²¹

En los Tribunales de Justicia las cosas no fueron mejor. El 16 de agosto de 1976, es decir, a una semana de la detención de Marta Ugarte, sus familiares interpusieron un recurso de amparo en su favor, el que llevaba el rol 761-76. Sin embargo, el recurso no fue acogido ni por la Corte de Apelaciones ni por la Corte Suprema.

²⁰ Ídem.

²¹ Ídem.

Los familiares remitieron entonces todos los antecedentes al Juzgado del Crimen de San Miguel acusando presunto secuestro, denunciando que los autores del hecho eran agentes civiles. También llevaron a cabo variadas gestiones orientadas a que las autoridades reconocieran la detención de Marta Ugarte e indicaran en qué lugar se hallaba recluida. Tampoco obtuvieron nada. Nunca la dictadura reconoció haberla detenido.

Incluso más, el presidente de la Corte Suprema negó audiencia a los familiares de Marta con el argumento de que los Servicios de Inteligencia habían informado que en el país no existía detenida alguna que respondiera a este nombre.

En esta misma línea, meses después, el 18 de noviembre de 1976, Manuel Contreras se dirigió al juez Rafael Mera diciéndole que Marta Ugarte «nunca había sido detenida por personal Dina». En tanto que, por su parte, el ministro de Interior, general César Benavides, dos semanas antes le había dicho lo mismo al magistrado, con el agregado de que le recordó que estaban vigentes instrucciones expresas que, por razones de «seguridad nacional», obligaban a los tribunales a abstenerse de solicitar a la Dina información sobre personas detenidas o desaparecidas.

El cadáver de Marta Ugarte fue entregado a sus familiares con bastante tardanza. Fue sepultado en el cementerio general el 8 de octubre de 1976.

La operación Retiro de Televisores

A fines de 1978 se produjo un hecho que alarmó profundamente a la dictadura: fueron descubiertos en los hornos de Lonquén los cadáveres de quince campesinos de la zona de Isla de Maipo a quienes se les había perdido el rastro después de haber sido detenidos por fuerzas policiales luego del golpe. Con el referido descubrimiento quedaba de manifiesto cuál había sido su destino.

El hecho preocupó hondamente al general Pinochet y a los mandos del Ejército, debido a que se volvía innegable el riesgo de que se produjeran otros descubrimientos análogos al de los hornos de Lonquén, en escala aún mayor, lo que pondría en evidencia el destino reservado a los detenidos desaparecidos, cuya existencia, por lo demás, la dictadura obstinadamente se negaba a admitir.

Para evitar estos riesgos, el general Pinochet ordenó llevar a cabo una operación que denominó Retiro de Televisores, la cual consistió en desenterrar los cuerpos de aquellos detenidos desaparecidos que se hallaban sepultados en tierra a fin de que luego fueran lanzados al mar, donde nadie podría hallarlos.

Como resultado de lo dicho, hacia fines de 1978, se inició una segunda fase del procedimiento descrito arriba –el lanzamiento de cadáveres al mar–, la cual se extendió al menos hasta 1981-1982. La existencia de esta fase –también denominada como de «las remociones» clandestinas– fue incluso reconocida por el propio general Odlanier Mena, exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Respecto a esta fase han prestado igualmente declaraciones judiciales exagentes partícipes en los operativos.²²

A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región, los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue y las veintiséis víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama.

Es probable que, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase se realizó por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está aclarado judicialmente en su totalidad. Lo que sí se sabe es que los comandantes de dicho Comando después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; el coronel Fernando Darrigrandi Marqués, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.²³

Las interrogantes

Los hechos arriba descritos representan solo una parte de la implementación de una política estatal dirigida a erradicar físicamente a un segmento de la población; política ejecutada fría y planificadamente por la dictadura cívico militar constituida el 11 de septiembre de 1973.

²² Ídem.

²³ Ídem.

A lo dicho cabe agregar algo no menos importante, en lo que normalmente no se repara: los mencionados crímenes de la dictadura tuvieron un fuerte, aunque soterrado, respaldo de parte de amplios sectores civiles, sobre todo conservadores, cuyas subjetividades, en el contexto de sus miedos, venían modeladas desde muchos años atrás por la campaña del terror que durante tanto tiempo se desplegara en el país. A esto se suma el ideologismo de la extrema derecha nacionalista, con su discurso sobre la necesidad de erradicar a los «enemigos de la patria». Este discurso, por lo demás, terminó siendo compartido por la propia derecha tradicional durante la segunda mitad de los años sesenta. En ese contexto es que cabe mencionar a las Fuerzas Armadas, igualmente ideologizadas, tanto por su adhesión a las Doctrinas de la Seguridad Nacional, como por su dependencia respecto de los Estados Unidos. Esto las llevó a compartir y a ejecutar lo que los mencionados sectores civiles pensaban y deseaban.

No está de más señalar que la instalación de gobiernos civiles en 1990 no modificó el ideologismo de los uniformados. Así, el sucesor del general Pinochet en el mando del Ejército, general Oscar Izurieta, declaró su respaldo a la visión ideológica con que estos justificaban las extremas violencias desde el Estado ejercidas por la dictadura, visión que, dijo, era propia del conjunto de la institución. En efecto, con fecha 8 de noviembre de 1999, en un discurso en la Academia de Historia Militar, «ante una platea conformada por oficiales activos y retirados», Izurieta sostuvo que el Ejército se sentía «emocional y afectivamente solidario con quienes, arriesgando sus vidas a diario, debieron enfrentar a la subversión en forma directa y valerosa». Y agregó: «no nos parece éticamente aceptable caer en la tentación de juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba *la lógica de la guerra* y el *odio impuesto por los enemigos de Chile*». ²⁴ El general Izurieta, en plena «democracia», no solo justificó los crímenes masivos de la dictadura ocurridos entre 1973 y 1989 –a los que, de hecho, definió como parte de una «guerra» en contra de «los enemigos de Chile»–, sino que también sostuvo que la ideología que le dio el fundamento teórico a esa supuesta «guerra» se mantenía del todo vigente en el Ejército. «Subversión», «lógica de la guerra», «enemigos de Chile»

34 ²⁴ General Oscar Izurieta en *Ercilla*, núm. 3, 124, p. 29. Las cursivas son mías.

(término este último aplicado a la izquierda chilena) constituyen, en efecto, los conceptos centrales del ideologismo existente tras los asesinatos en masa cometidos por la dictadura cívico militar entre 1973 y 1989.

Es cierto que con posterioridad el general Emilio Cheyre proclamó su «nunca más». Pero ¿en qué medida respondió con ello a ciertas necesidades políticas del momento y no a cambios ideológicos profundos entre los uniformados? Ese es un punto que habría que dilucidar. Pero, como fuere, ante la magnitud de los crímenes cometidos en el país entre 1973 y 1989, se requiere proponer una explicación de ellos que, entre otras cosas, haga posible asentar un necesario e inevitable juicio histórico.

En esa perspectiva se vuelve pertinente la pregunta sobre cuáles son, en general, los factores que hacen que un Estado, a través de los organismos de sus Fuerzas Armadas, emprenda violencias de tal magnitud en contra de una parte de su población. Dicho de otra manera, cabe preguntarse cómo esas extremas violencias estatales pueden ser explicadas, cuáles son los factores que las sobredeterminan y en qué medida, dentro de lo posible, se las puede predecir y, por tanto, evitar.

CAPÍTULO 2

Los crímenes masivos desde el Estado. Una explicación posible

Las extremas violencias desde el Estado, con sus correspondientes asesinatos en masa, no han constituido fenómenos aislados en la historia humana. Sin ir más lejos, durante el siglo recién pasado representaron un fenómeno recurrente que tuvo su expresión principal en el genocidio judío por el nazi-fascismo. Buscando comprender el fenómeno, Ervin Staub, en un libro titulado *The Roots of Evil (Las raíces del mal)*, elaboró una teoría explicativa de dicho fenómeno, que nos parece de extraordinario interés. Su modelo explicativo se apoya en una considerable base empírica, proporcionada por el estudio de cuatro casos relevantes verificados durante el siglo xx. Tales son el holocausto judío, el genocidio camboyano bajo Pol Pot, los asesinatos de armenios por el Estado turco durante la Primera Guerra Mundial y las desapariciones masivas ocurridas en Argentina durante la dictadura militar instalada en este país entre 1976 y 1982. En lo que sigue exponemos los elementos principales de dicho modelo.

Las raíces del mal, según Ervin Staub

Ervin Staub parte del concepto de genocidio, al que define como «un intento para exterminar a un grupo racial, étnico, religioso, cultural o político, sea directamente a través de asesinatos, o indirectamente, creando condiciones que conducen a la destrucción

del grupo».¹ La pregunta que Staub se plantea al iniciar su investigación es la siguiente: «¿cómo emerge la motivación (para ejecutar crímenes contra grupos de personas) frente a la poderosa prohibición de matar que la mayoría de nosotros tenemos?».²

Origen de las motivaciones de los genocidios: difíciles condiciones de vida y cultura

La premisa más general de la que parte Staub para responder la pregunta enunciada arriba se plantea así: «los seres humanos poseen propensiones genéticas tanto para el altruismo como para la agresión. Depende de la socialización y la experiencia del individuo cuál de esas propensiones se despliega más».³

Este planteamiento remite a las condiciones existentes. En tal sentido, Staub pone de relieve dos variables principales: 1) ciertas condiciones de vida caracterizadas por la extrema dureza; y 2) la cultura del o los grupos que experimentan tales situaciones.

Las condiciones de vida duras y difíciles tienden, según Staub, a cuestionar e invalidar las concepciones del mundo y de sí mismos que hasta entonces tenían los individuos y grupos que se encuentran involucrados en ellas. Generan sentimientos de incertidumbre y ansiedad. En tales circunstancias se pueden producir procesos psicológicos que llevan a un grupo a volverse en contra de otros. Entonces se definen chivos expiatorios a los que se responsabiliza de las difíciles condiciones existentes. Staub subraya que el identificar un chivo expiatorio tendrá «beneficios» psicológicos puesto que con ello «se encuentra una causa, y los problemas de la vida se vuelven comprensibles. Un peligro conocido es preferible a una ansiedad vaga o una amenaza no especificada».⁴

Sin perjuicio de los señalados procesos psicológicos derivados de situaciones difíciles de vida, Staub sostiene que «por sí mismas», esas difíciles condiciones «no conducirán al genocidio. Tienen el

¹ Ervin Staub: *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Others Group Violence*, Cambridge University Press, 1989, p. 8. Todas las traducciones de las citas de esta fuente son mías.

² *Ibíd.*, p. 3.

³ *Ibíd.*, p. 24.

⁴ *Ibíd.*, p. 48.

potencial, el motivo fuerza». Pero son «la cultura y la organización social las que determinan si el potencial es realizado dando lugar a la devaluación y a la hostilidad hacia un subgrupo».⁵

En las circunstancias críticas es donde se revela el rol de la cultura y de las ideas y es en tales condiciones cuando suelen aparecer nuevas ideologías –o pueden reemerger antiguas que hasta entonces ocupaban un lugar marginal en la cultura–, las que pueden tener un carácter extremo, y que resurgen ofreciendo a los individuos y a los grupos sociales en crisis una renovada comprensión del mundo y de sí mismos.

La creación de chivos expiatorios por la cultura

El camino al genocidio comienza a pavimentarse, entonces, cuando tales ideologías dan una respuesta a las difíciles condiciones de vida existente responsabilizando de ellas a un grupo determinado: los judíos, los comunistas, los negros, otra nación, etc. Se producen así los procesos que llevan a un grupo de la sociedad a volverse en contra de otro, el que es identificado como el causante de todos los males en curso.

Si en la cultura prevalecen otras ideas, que valoran intrínsecamente a todo ser humano, el camino al genocidio, aún en difíciles condiciones de vida, puede quedar bloqueado. Sin embargo, lo que tiende a ocurrir, según Staub, es que las difíciles condiciones de vida, con los trastornos psicológicos que acarrearán y con su inherente cuestionamiento de los valores anteriores, tienden a otorgarle a los portadores de las ideologías más extremas que entonces emergen o reemergen, una mayor capacidad de interpelación sobre el o los grupos afectados. Estos pueden así convertirse en seguidores de ellas. El caso del nazismo alemán sería paradigmático al respecto. De allí que Staub sostenga que el «cómo la cultura o la sociedad forma la evaluación de sus miembros respecto de la otra gente es profundamente importante. Raramente dañamos a la gente que valoramos altamente».⁶

⁵ *Ibidem*, p. 14.

⁶ *Ibidem*, p. 60.

Es en el plano de la ideología, entonces, donde se define la devaluación o la no devaluación de subgrupos de la sociedad. Es, por lo mismo, que en este plano es donde se construye y define al «enemigo». Al proceder así, la ideología en cuestión proporciona al grupo que se identifica con ella un sentimiento de superioridad, a la par que el antagonismo generado en contra del chivo expiatorio –el grupo devaluado– intensifica sus sentimientos de pertenencia.

Las ideologías que devalúan a determinados subgrupos proceden, según Staub, mediante etiquetas descalificadoras. Los grupos devaluados aparecen en el discurso de aquellas como indignos, moralmente inferiores, lo que llevaría a dos consecuencias en extremo importantes. A saber, su exclusión del campo moral, por un lado; y por el otro, la negación de su humanidad con su correspondiente corolario: la justificación de su muerte física.

El cumplimiento de las condiciones para el genocidio

En esas condiciones, el genocidio se abre paso cuando: a) los portadores de las ideologías que devalúan a otros grupos forman organizaciones que logran acceder al poder; b) cuando desde el poder pueden crear lo que Staub denomina como una «máquina de destrucción»; y c) cuando no hay una reacción suficiente de aquel sector de la sociedad no afectado por la violencia de los detentadores del poder –los *bystanders* en la terminología de Staub–. Adviene así, según este autor, lo que denomina «continuum de destrucción».

En relación con este último punto, Staub sostiene que los genocidios no se consuman de golpe. Existiría, en efecto, una especie de escalada ascendente, que se aceleraría al no encontrar resistencia ni rechazo por parte de los *bystanders*. De aquí la importancia fundamental que estos tendrían. Porque el genocidio puede ser detenido en sus fases iniciales. Pero tal posibilidad dependería en gran medida, como se dijo, de la reacción de los *bystanders*. Avanzado el «continuum de destrucción», y no producida la reacción de aquellos, su reversión se tornaría en extremo difícil.

El liderazgo genocida: ideología y psicología

Según Staub, un elemento muy importante en los crímenes en masa está constituido por lo que él denomina como «liderazgo genocida». A su juicio, hay que distinguir entre este liderazgo y los perpetradores directos de los crímenes. El liderazgo genocida constituye un grupo pensante y hacedor de decisiones, mientras que los perpetradores no hacen más que ponerlas en ejecución.

Respecto de los perpetradores directos, podrían destacarse al menos los siguientes tres rasgos. En primer término, su sentimiento de responsabilidad frente a su práctica de violencia suele ser revertido por ellos en gran medida mediante la asunción de la responsabilidad de los líderes. En segundo término, su adecuación a sus funciones se ve enormemente facilitada en el caso de que el valor más alto que profesen sea el de la obediencia, en cuya eventualidad, señala Staub: «la autonomía deviene imposible».⁷ Estos dos factores, en tercer término, son los que hacen que «los grupos que perpetran genocidios sean habitualmente militares o creados en un molde militar».⁸

En cuanto al liderazgo genocida, Staub, citando a Irving Janis, sostiene que su característica principal no solo reside en que constituye un grupo pensante y hacedor de decisiones, sino también en que sus miembros son renuentes a contradecirse entre sí. «Una vez que una idea ha ganado algún apoyo, especialmente de parte del líder, los miembros restantes del grupo se abstienen de criticismo», evitan introducir nuevos planteamientos, lo que, según Staub, limitaría sus alternativas de acción.

Por otra parte, este autor acepta que las decisiones del liderazgo genocida puedan dar lugar a resultados imprevistos, no calculados, o que van más allá de lo inicialmente esperado. No obstante, agrega, es más probable que los genocidios sean el producto de las decisiones previas del liderazgo. Hitler y el holocausto judío serían nuevamente paradigmáticos al respecto en la medida que las ideas de aquel conducentes al genocidio se desplegaron con bastante antelación a los hechos mismos.

⁷ *Ibidem*, p. 74.

⁸ *Ibidem*, p. 78.

Sin embargo, apunta Staub, las personalidades del liderazgo genocida no están necesariamente predispuestas a la violencia masiva. Estarían más bien orientadas al fanatismo, «el cual a su vez eventualmente conduce a los asesinatos en masa».⁹ Los fanáticos «están bajo la influencia de un sistema de creencias a las cuales ellos subordinan todo lo demás. Interpretan y evalúan la realidad desde la perspectiva de este sistema. Todo medio para cumplir las prevalecientes metas de la ideología viene a ser visto por ellos como aceptable».¹⁰ El fanático, en fin, es capaz de sacrificar su propio bienestar personal y subordinar toda su vida al servicio de los objetivos de su ideología. Esta, a su vez, tiene sus raíces en una cultura que sería precisamente una cultura de fanatismo.

Dentro de este contexto, en el liderazgo genocida –y también entre los perpetradores directos– se producirían, según Staub, dos desarrollos psicológicos de gran importancia. Por un lado, «una reversión de la moralidad», y, por el otro, «un abandono del sentimiento de responsabilidad por el bienestar de las víctimas».¹¹

Los sentimientos de responsabilidad respecto del bienestar de las víctimas serían subvertidos por la vía de excluir a estas del campo de lo humano, o bien a través de su calificación como peligrosas en relación con la persistencia de ciertos valores o modos de vida considerados muy altos, lo cual conduciría a suponer que los asesinatos se hacen «en servicio de la humanidad».¹²

Temáticas complementarias

El modelo que Staub nos propone para explicar los genocidios y los asesinatos en masa tiene en consideración, además de las señaladas arriba, otras variables en cierto modo complementarias. Al respecto cabe señalar tres puntos.

Primero. El lugar de las difíciles condiciones de vida como eventuales puntos de partida conducentes a los genocidios puede ser ocupado por el conflicto social (como fuera el caso de Chile). En particular, según Staub, esto ocurriría cuando las clases dirigentes

⁹ *Ibidem*, p. 76.

¹⁰ *Ídem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 83.

¹² *Ídem*.

se ven amenazadas por las subalternas las que, interpeladas por determinada ideología, proyecto o liderazgo, reivindican transformaciones que suponen un trastrueque de las jerarquías sociales. Entonces los grupos dominantes se sienten amenazados. El orden que estos representan ha sido justificado por la ideología y la cultura, lo que da como resultado una elevada visión de los dominantes respecto de sí mismos y una correlativa devaluación de las clases subordinadas. De tal modo, las demandas de estas por cambios sociales pueden parecerles a aquellos como una amenaza para un orden que consideran legítimo, natural e intrínsecamente bueno.

Y es aquí donde interviene el liderazgo y la ideología. El liderazgo, apoyado en una ideología reactiva, puede responder a las amenazas planteadas definiendo chivos expiatorios, siguiéndose a partir de allí todo el proceso descrito más arriba, que eventualmente podría desembocar en un *continuum* de destrucción, esto es, en el genocidio y los asesinatos en masa.

Segundo. El tipo de cultura y sociedad de que se trate desempeña un papel importante en lo referente a si el conflicto social y las respuestas reactivas que genera conducirán o no al genocidio. En este sentido, Staub distingue las sociedades de cultura monolítica de las pluralistas. En las primeras los agentes sociales y las instituciones aparecen organizados en torno a un solo set de valores y metas. Mientras que en las segundas tales metas y valores aparecen diferenciados. En este último caso, los conflictos entre los grupos de la sociedad son regulados por un sistema de reglas compartidas, como podría ser una Constitución, que refleja los consensos esenciales entre los diferentes sectores de la sociedad.

Pues bien, para Staub, pese a los conflictos que le son inherentes, las culturas y sociedades pluralistas tienden a bloquear el camino al genocidio y a los asesinatos en masa. La razón radicaría en que en ellas, precisamente debido a su naturaleza diversa y tolerante, son más probables reacciones oportunas a los pasos iniciales en el *continuum* de destrucción.

Tercero. Cualquiera sea el tipo de cultura y sociedad, los genocidios y asesinatos en masa requieren una progresión de cambios en la cultura y en los individuos. «En ciertos casos la progresión toma lugar sobre décadas y aún centurias, y crea una preparación en la cultura. En otros casos hay una rápida evolución de la ideología,

personalidades o condiciones sociales que preparan a la gente para los crímenes masivos». ¹³

Este planteamiento adquiere extraordinaria relevancia para comprender los genocidios en las sociedades pluralistas. En estas, dado su mismo carácter, existen también corrientes ideológicas y culturales que devalúan a ciertos sujetos y que son funcionales a prácticas violentas y excluyentes. El punto es que siendo por lo común marginales, tales corrientes pueden devenir en dominantes en determinadas condiciones críticas y abrir paso a los crímenes masivos, como ocurrió en Chile.

Esta constatación es la que hace necesario, para entender cualquier genocidio, analizar la historia de la ideología que lo fundamenta y lo hace posible en su transición de marginal a dominante. Dominante, por cierto, al menos en un sector de la sociedad: en el que lleva a cabo la práctica de crímenes masivos.

Para finalizar, cabe señalar que al proponer su modelo explicativo, Staub subraya que todos los elementos de dicho modelo «no necesitan existir en una sociedad para que comience el *continuum* de destrucción; parte del modelo es suficiente». ¹⁴ «Sin embargo, la ausencia de una característica crucial puede inhibir el maltrato o la violencia, o conducir a contrarreacciones que detienen la progresión. Por ejemplo, señala, en un sistema pluralista la gente puede hablar contra y prever el progreso hacia el genocidio». ¹⁵

«Bien absoluto» versus «mal absoluto»: la lógica de los crímenes masivos desde el Estado

Es indudable que todas las violencias extremas desde el Estado están cruzadas por muchas variables que permiten explicarlas, aunque, por cierto, nunca justificarlas. De nuestra parte, quisiéramos poner énfasis en una de ellas, a saber, la variable ideológico-cultural. Aparte de Staub, existen no pocos estudiosos del tema que consideran que a la mencionada variable le corresponde un rol esencial en lo referente a las violencias masivas desde el Estado,

¹³ *Ibidem*, p. 85.

¹⁴ *Ibidem*, p. 66.

¹⁵ *Ídem*.

constituyendo uno de sus prerequisites ineludibles. Así, por ejemplo, Ryszard Kapuscinski nos dice que «en el origen de todo acto genocida se halla [...] una ideología del odio, amplia y metódicamente propagada».¹⁶ Y agrega: «todos los gobiernos que planificaron genocidios siempre comenzaron por destruir, a los ojos de sus fieles, la imagen del enemigo, futura víctima».¹⁷ En esta misma línea, Hannah Arendt sostiene que «el terror tiene que ser presentado como un instrumento de realización de una ideología específica, y esta ideología debe haberse ganado la adhesión de muchos, de una mayoría, incluso antes de que el terror pueda ser estabilizado».¹⁸

A nuestro juicio, las corrientes ideológicas y culturales que se constituyen en prerequisites para las violencias extremas desde el Estado evidencian poseer una serie de rasgos típicos. En particular cabe mencionar su estructuración en torno a la dualidad entre un bien absoluto –que suele ser la patria, la raza, la religión, etc.– y un mal absoluto, especie de chivo expiatorio creado por la misma ideología –el marxismo, el anarquismo, etc.–, al que se requeriría erradicar como condición para la pervivencia del primero. Esa dicotomía, en efecto, es la que prepara la satanización de quienes se supone son los portadores del mal absoluto, lo que, por cierto, pone las bases para su posterior destrucción física, siempre, sin dudas, en aras de un valor superior.

De más está decir que el estudio del marco histórico concreto, sus conflictos y crisis es el que permite explicar el porqué se crean las condiciones para el apareamiento y desarrollo de tales ideologías, así como también cuáles son los sujetos que asumirán un lugar u otro en la polaridad descrita. En los capítulos siguientes intentamos un estudio tal para el caso chileno.

¹⁶ Ryszard Kapuscinski: «La cacería del Otro», *Le Monde Diplomatique*, núm. 021, marzo de 2001, p. 34.

¹⁷ Ídem.

¹⁸ Hannah Arendt: *Los orígenes del totalitarismo*, Editorial Taurus, Buenos Aires, 1998, p. 31.

CAPÍTULO 3

La democracia como antivalor¹

En el capítulo precedente quedó de manifiesto que las extremas violencias desde el Estado requieren de ciertas ideologías para ser posibles; y que esas ideologías, desde nuestra óptica, se caracterizan por poseer una estructura dicotómica que opone un bien absoluto a un mal absoluto al cual cabría erradicar a fin de preservar al primero. La pregunta surgida a partir de aquí es si en Chile se han dado, o existen, ideologías o culturas que respondan a esas características; esto es, con su correspondiente matriz conceptual dicotómica, que las hace funcionales, por tanto, a los crímenes masivos desde el Estado.

Como se señaló en la Introducción, nuestra respuesta a la mencionada pregunta es positiva. En efecto, tales ideologías y culturas han existido en Chile, aunque primero en forma más bien marginal, para solo durante la segunda mitad de los años sesenta del siglo ^{xx} predominar en el conjunto de la derecha. Se trata de lo que se podría denominar como pensamiento conservador antiliberal: el nacionalismo y el corporativismo.

Sin embargo, hay que precisar que el pensamiento conservador antiliberal chileno dista mucho de representar una elaboración

¹ Ponencia leída en el V Seminario Internacional «Democracia, diferencias culturales y biodiversidad», efectuado en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), entre el 3 y el 11 de enero de 1999.

original. Por el contrario, constituyó una importación de esquemas ideológicos europeos, básicamente de origen español y alemán. Se trataba del conservadurismo antiliberal en la versión predominante en esos dos países. Tales concepciones fueron recepcionadas en Chile ya desde comienzos del siglo xx, y adaptadas a las condiciones locales, recepciones que operaron por las vías que señalaremos más adelante.

No obstante, antes de abordar este punto es conveniente despejar tres cuestiones previas. La primera es cuáles son las características del pensamiento conservador antiliberal en general. La segunda apunta a precisar cuáles son las características propias de sus versiones española y alemana, bajo cuyas modalidades este pensamiento se asumió en Chile. Y la tercera se refiere a la valoración –negativa– que hace el conservadurismo antiliberal de la democracia (liberal).

Rasgos principales del pensamiento conservador antiliberal

Se podría decir que en sus orígenes el pensamiento conservador antiliberal, en particular el europeo, fue una respuesta específica a la emergencia de la modernidad racionalista. Constituyó una crítica a esa modernidad, sin necesariamente ser él antimoderno en todos los aspectos. A nuestro juicio, las tesis principales que postula podrían resumirse así:

1. Existe un orden natural, que en el terreno de la cultura se manifiesta en la tradición.
2. Tal orden natural, en el plano social, supondría jerarquías; y en el orden político, aristocracias.
3. El sustento del orden social y político natural reside en las creencias y en las tradiciones. La erosión de estas, por tanto, implicaría su disolución.
4. Desde dichos supuestos el pensamiento conservador despliega una crítica radical al liberalismo y al racionalismo modernos. Estos, a su juicio, al cuestionar las creencias tradicionales y al someter todo al libre examen de la razón, traería consigo

el nihilismo y la disolución de la tradición y, en consecuencia, del orden natural que se sustenta en ella. Este orden sería el único posible, en cuyo reemplazo ilusamente pretende el liberalismo construir otro derivado de una razón abstracta y ahistórica.

5. El resultado final de este proceso macrohistórico sería el hundimiento de la auténtica cultura, es decir, del conjunto de valores transmitidos de generación en generación a través de un proceso histórico que le ha dado su identidad a la nación.
6. La democracia liberal operaría en esta dirección y constituiría el marco político del proceso conducente al nihilismo y a la pérdida de la identidad de la nación al garantizar la libertad de pensamiento y de debate. Así mismo, al asegurar la libertad de asociación, dividiría artificialmente a la comunidad nacional en fracciones y partidos que expresarían intereses subalternos de caudillos y profesionales de la política que, persiguiendo el poder y las granjerías que creen inherentes a él, manipulan a las multitudes mediante la demagogia. Estas multitudes, provistas del arma del voto, adquirirían así un lugar preponderante en la vida social y política, lo que es opuesto a la ubicación subalterna y obediente que les corresponde en el orden natural.
7. El Estado, mediante el sistema de partidos, es vaciado de un contenido y de una misión trascendente y se transforma en un mero botín en manos de una partitocracia necesariamente corrupta y corruptora.
8. La democracia liberal, al terminar legitimando el relativismo y al incentivar la demagogia, da lugar al apareamiento del anarquismo, el socialismo y el comunismo, los que constituyen la fase final del proceso de disolución de la cultura occidental. De tal modo se evidenciaría que la democracia liberal, en cuyo seno aquellos necesariamente nacen, constituye parte de un proceso de decadencia. Desde esta óptica ella es concebida como un antivallor.
9. Llegada la fase final de descomposición social, el conservadurismo antiliberal postula la necesidad de una reacción salvadora de la cultura, la que no puede llevarse a cabo mediante la democracia liberal, pues esta en sí misma es parte

de la enfermedad. Tal reacción salvífica ha de ir por otras vías y deberá ser total o no será. Por lo mismo, sus medios deben ser radicales, excluyendo transacciones de cualquier tipo. Su meta debe dar lugar a la extirpación del mal desde sus raíces. En este sentido, el conservadurismo antiliberal pone su mira en las Fuerzas Armadas –instrumentos del decisionismo–, a las cuales considera como reserva última de la tradición nacional. El nacionalismo europeo hizo suya esta lógica, solo que reemplazando el orden natural, en tanto orden bueno, por la nación.

El conservadurismo antiliberal español

En el marco descrito cabe referirse en primer lugar al conservadurismo antiliberal español, el cual identifica la identidad nacional con la tradición católica y con el pensamiento escolástico y neoescolástico. La modernidad racionalista, así como su reivindicación de las libertades de pensamiento, la tolerancia, la diversidad y la democracia política son vistas por él como medios de destrucción de la esencia católica de la nación y del orden social y político tradicional que le sería propio.

En esta línea cabe mencionar en primer lugar a Juan Donoso Cortés. No ahondaremos mayormente en la tesis de este autor según la cual toda cuestión política es primero una cuestión teológica. Nos limitaremos a señalar que con este supuesto la defensa del libre albedrío y de la libertad moderna sería antes que todo expresión de la soberbia de la razón que cree prescindir de Dios y ser autónoma. Por tanto, las tesis racionalistas contendrían desde ya una implícita afirmación teológica, errónea, por cierto. La expresión política que complementa a la posición teológica racionalista sería el parlamentarismo y la democracia, los que pretenderían decidir sobre la verdad mediante votaciones y mayorías en lugar de someterse a la palabra de Dios expresada en la Iglesia y en la tradición católica.

La autonomía de la razón y la libertad humana desligada de la Iglesia lleva al desorden, que se define como la negación del orden querido por Dios. Por tanto, el mal provendría del libre albedrío y de la libertad humana, de los cuales serían portadores el liberalismo y el racionalismo.

Por obra de la independencia de la razón eclosionada mediante la difusión del paganismo literario inaugurado con el Renacimiento, el paganismo filosófico generado por la Ilustración y del paganismo político representado por la democracia liberal, el mal se habría vuelto universal. Su resultado sería la revolución, liberal primero; y la socialista y comunista después. Para Donoso Cortés estas revoluciones nunca vienen del pueblo, sino de los tribunos y de la propia clase alta en la medida en que esta ha renegado de la tradición y ha asumido el racionalismo y el liberalismo.

Corrompidos los pueblos por obra de aquellos, se hace muy improbable retornar al orden natural espontáneamente, de ahí que Donoso postule la necesidad de una dictadura conservadora. De lo contrario, a su juicio, dado el grado de disolución alcanzado por la sociedad y la cultura, advendrá la dictadura popular.

Donoso critica al liberalismo por ser ciego ante estas realidades. Hace lo propio con la burguesía liberal, a la cual califica de «clase discutidora», es decir, incapaz de tomar decisiones radicales ante los problemas en curso. Aquí, y en sus tesis sobre la dictadura, se evidencia con toda claridad el decisionismo de este autor. A su juicio, los soldados y los sacerdotes serían los medios salvadores de los que se valdría el decisionismo, mientras que las ideas y los intelectuales aparecen como los causantes de la ruina de la sociedad. Así, Donoso puede preguntarse: «¿qué sería del mundo, que sería de la civilización, que sería de la Europa si no hubiera sacerdotes ni soldados?».² «Cuándo señores, cuándo ha visto el mundo, si no hoy, que se vaya a la civilización por las armas y a la barbarie por las ideas?».³

José Antonio Primo de Rivera no es menos drástico en su crítica a la democracia liberal. Califica al sufragio como «una farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, que tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la Patria debía permanecer o si era mejor que, en un momento, se suicidase».⁴

² Juan Donoso Cortés: *Escritos políticos*, Ed. Riald, Madrid, 1954, p. 155.

³ Ídem.

⁴ José Antonio Primo de Rivera: *El pensamiento de José Antonio*, Agustín del Río Cisneros (introducción y sistematización de textos), Ediciones del Movimiento, Madrid, 1971, p. 68.

Ante la crisis del país, Primo de Rivera postula la necesidad de una revolución nacional que armonice con la tradición y que supere el cuadro de división interna que presentaría la nación española por obra de la democracia liberal y del marxismo. Sin embargo, esta revolución ha de encarnar una voluntad nacional que esté por sobre derechas e izquierdas y represente a la nación en su unidad; lo cual, a su vez, ha de permitir materializar una comunidad de destino en lo universal. El Estado debía ser la expresión de esa unidad nacional e impulsor de ese destino.

Como puede verse, en el pensamiento de Primo de Rivera la diversidad política aparece como un antivisor en la medida que constituye un factor disgregador de la patria y de su comunidad de destino.

En la perspectiva de la revolución nacional, según Primo de Rivera, el Ejército desempeñaría un papel fundamental, por cuanto, especialmente en un periodo de crisis y disolución, guardaría «las únicas esencias y los únicos usos integralmente reveladores de una permanencia histórica».⁵ De allí que –dice– «al Ejército le va a corresponder, una vez más, la tarea de reemplazar al Estado inexistente».⁶ O sea, al igual que para Donoso Cortés, los militares aparecen aquí como instrumento clave del decisionismo.

Por último, cabe señalar que en reemplazo del sistema de partido y sus divisiones, Primo de Rivera postula la participación de la comunidad nacional en organismos naturales e intermedios, los cuales, aparte de la familia, eran básicamente los gremios y los municipios. Este corporativismo conformaría una barrera contra la omnipotencia estatal, en lo cual se diferenciaría el decisionismo español del fascismo. Esto sin perjuicio de que Primo de Rivera defienda un Estado fuerte.

En tercer lugar, cabe referirse a Ramiro de Maeztu. No nos detendremos en todas aquellas ideas que este autor comparte con los dos ya mencionados, como las relacionadas con la crítica al liberalismo, a la democracia y al socialismo. Nos centraremos tan solo en una tesis que nos parece capital: la dialéctica entre el ser y no ser de la nación como síntoma de la tensión existente entre lo nacional y lo extranjero.

⁵ *Ibidem*, p. 204.

⁶ *Ídem*.

El ser de la nación, a juicio de De Maeztu, viene a constituir algo así como su identidad, la que estaría conformada por una esencia espiritual. Obviamente, para él tal esencia se vincularía al catolicismo. El no ser sería la pérdida de dicha identidad, lo que operaría mediante una renuncia a lo propio y una correlativa asunción de lo extraño, de lo extranjero.

De Maeztu explica la historia y principalmente la decadencia española desde esta óptica. A su juicio, los problemas de la nación derivarían de una admiración por lo extranjero, ocurrida desde el siglo XVIII en adelante, cuando lo francés, que advino con la dinastía borbónica, habría pasado a ser el modelo de la clase dirigente hispana. Desde entonces, señala, «surgió el ideal de convertir a España en otra Francia».⁷ Pero tal desvarío no fue exclusivo de la clase dirigente, sino también de la intelectualidad. «Durante siglos [sostiene] los escritores españoles han vivido en su patria como desterrados, leyendo todo el tiempo libros extranjeros».⁸ A este proceso de enajenación nacional lo denomina De Maeztu como «revolución», la que llevaría ya dos siglos, y a la que califica de «antipatria» en la medida en que conformaría una negación de esta. Obviamente, el liberalismo anglofrancés, el parlamentarismo y el racionalismo figuran en esta visión como elementos ajenos y destructores de la identidad nacional y, por tanto, como disolventes de la nación. Como respuesta a ello, De Maeztu llama a reconstruir la hispanidad recobrando su identidad, restaurando una monarquía católica y organizando la sociedad corporativamente.

Lo esencial de este enfoque reside en identificar la identidad nacional con ciertas concepciones del mundo y con ciertas fórmulas sociales y políticas, definiendo a las otras como destructoras del ser nacional. La historia de la nación pasa a ser así una especie de drama entre el ser y el no ser donde algunos personificarían la afirmación y otros la negación, lo que implícitamente prefigura la dualidad entre patriotas y antipatriotas. La diversidad aparece como disolvente en esta visión, y la democracia, una vez más –aparte de extranjera–, en la medida que supone una diversidad que da carta de ciudadanía a lo foráneo, se muestra como un antivallor.

⁷ Ramiro de Maeztu: *Defensa de la hispanidad*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1975, p. 145.

⁸ Ídem.

Conservadurismo antiliberal alemán

En relación con el conservadurismo antiliberal alemán, nos referiremos exclusivamente a Oswald Spengler. Su reflexión sobre la democracia se sitúa sobre un trasfondo macrohistórico en el que destacan tres elementos centrales:

1. La tesis según la cual la cultura occidental se encontraría en un tránsito que iría desde «los Estados organizados en el siglo XVIII al Imperium Mundi»,⁹ es decir, al imperio mundial.
2. La existencia paralela de lo que este autor denomina como «revolución de la raza blanca».
3. Detrás de esta, y vinculada estrechamente a ella, vendría una segunda revolución mundial, que sería la de los pueblos de color.

Spengler sitúa el tema de la democracia dentro de la revolución de la raza blanca. ¿Cuál sería el contenido de esta revolución? No sería otro que el de la igualación, esto es, el de la rebelión de los plebeyos en contra de las aristocracias depositarias por naturaleza del poder, de la propiedad y la riqueza, que serían las premisas de toda alta cultura y refinamiento.

Según este autor, la revolución de la raza blanca aparece en la fase postrera de la cultura occidental, cuando esta deviene en civilización (esto es, la fase declinante de una cultura) y aparecen las megalópolis que albergan a gigantescas masas de habitantes. La democracia vendría a representar a estas multitudes, desprovistas de todo vínculo con la tradición, y caracterizadas por su afán nivelador. Sus líderes provendrían de los estratos resentidos de la intelectualidad, de grupos marginales de la propia clase alta e incluso de la Iglesia, que recelan de los felices y exitosos. Por tanto, su principio sería el resentimiento del hombre medio frente a las aristocracias.

La democracia, de este modo, constituiría una expresión de la decadencia de la cultura occidental. Con estos supuestos Spengler puede afirmar que «la igualdad de derechos [postulada por la democracia] es contraria a la naturaleza, es el signo de degene-

ración de las sociedades envejecidas, y el comienzo de una nueva descomposición imposible de detener».¹⁰

En este proceso de decadencia y disolución, señala Spengler, la democracia liberal y el comunismo serían parte de un mismo y único movimiento orgánico. El liberalismo «avanza constantemente desde el jacobinismo hacia el bolchevismo. Entre ambos no hay oposición de pensamiento y voluntad. Es la forma temprana y la tardía, el principio y el fin de un solo desenvolvimiento».¹¹ Más adelante agrega que «el liberalismo es la forma en que se suicida la sociedad enferma».¹²

Por otra parte, Spengler sostiene que la revolución blanca ha dado alas a la revolución de los pueblos de color. Estos habrían perdido el respeto y el temor a la raza blanca desde que ella, con las ideas de democracia e igualdad de derechos, renunciara a la creencia de su propia superioridad. De tal modo, se habrían creado las condiciones para la revancha de los pueblos de color, cuya revolución ya estaría en curso.

En el plano político, el contenido de la revolución blanca no sería otro que el debilitamiento del Estado, primero; y su destrucción, después. Ello operaría precisamente por medio de la democracia, que da lugar a gobiernos débiles, a autoridades condicionadas por las presiones de los sindicatos y los partidos.

Para Spengler, el Estado es una unidad para la guerra. Las divisiones internas, inherentes a cualquier democracia, obstaculizarían el cumplimiento de esa naturaleza. En este sentido elabora el concepto de «Estado en forma», que constituiría la unidad de todo un pueblo plasmada y representada por el Estado para hacer la guerra. Por lo tanto, la democracia, al dividir a la nación en bandos, destruye el Estado y da pie a la decadencia.

Este proceso habría comenzado en Occidente durante el siglo XVIII, cuando las propias aristocracias gobernantes empezaron a dudar de la legitimidad de su poder exclusivo, y fueron ganadas gradualmente para las ideas liberales. Dentro de este proceso de decadencia de la idea de Estado, según Spengler, los ejércitos representarían un contrapeso y un pivote para superar la revolución blanca.

¹⁰ *Ibíd*em, p. 93.

¹¹ *Ibíd*em, p. 107.

¹² *Ibíd*em, p. 118.

Dicha revolución, que ya llevaría dos siglos, no podría ser vencida mediante soluciones intermedias y transacciones. Mientras estas continúen, será todavía el tiempo de aquella. Su derrota, por el contrario, estará asociada al cesarismo, es decir, a un poder personal apoyado en el Ejército. En efecto, «el cesarismo del futuro no se preocupará de convencer, sino que vencerá con las armas»¹³ y excluirá a los partidos de los esquemas del poder. Y agrega: «El cesarismo perfecto es la dictadura, pero no la dictadura de un partido, sino la de un hombre contra todos los partidos, sobre todo contra el propio».¹⁴ De allí que, a su juicio, sean los ejércitos y no los partidos la forma futura del poder.

Por fin, resuelto lo anterior, el cesarismo triunfante deberá avanzar hacia el gobierno mundial. Este sería el desafío que tendría la raza céltica germánica, la que, luego de la superación de la revolución blanca, estaría en mejores condiciones de cumplirlo con éxito en virtud de que sería la raza de más fuerte voluntad que ha existido en la historia.

En conclusión, la democracia es vista por Spengler como un antivisor en la medida que aparece como destructora de la cultura superior, del orden natural donde gobierna una raza de señores ricos, bellos, felices y cultos. Por tanto, constituiría parte relevante de la decadencia de Occidente.

Como se ve, para el pensamiento conservador antiliberal en general, así como también para sus versiones española y alemana, la democracia aparece vinculada a la decadencia y a la disolución del orden bueno, razón por la cual sería necesaria su erradicación, siempre en beneficio de regímenes de autoridad. Aún más, la democracia (liberal) sería parte de un proceso macrohistórico conducente a la disolución del orden bueno (en la medida en que) en su seno se desarrollaría el mal absoluto (el comunismo, el marxismo, etc.), del cual ella no sería sino la primera etapa; mal absoluto que, a su vez, sería el agente que llevaría el proceso disolvente de la nación a su remate lógico y final. Desde esta óptica, para el conservadurismo antiliberal la democracia liberal aparece como algo históricamente negativo y, en fin, como un antivisor. Este es el supuesto, no solo

¹³ Oswald Spengler: *Años de decisión*, ed. cit., p. 172.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 174.

implícito, sino también explícito, tanto del nacionalismo como del corporativismo tal como se desarrollaron en Europa.

Frente a los males inherentes a la democracia, con su correspondiente amenaza de la disolución nacional, el conservadurismo antiliberal propicia la necesidad de una decisión salvadora, que visualiza vinculada a las Fuerzas Armadas. Se trata de lo que Carl Schmitt denominó como «decisionismo». Según Schmitt, el decisionismo es el resultado de cierta caracterización de la realidad según la cual se vivirían momentos decisivos en el enfrentamiento entre el bien y el mal. Entre ambos no habría transacción posible, por lo cual solo cabría precipitar el enfrentamiento a través de una decisión salvadora encaminada a restaurar un orden considerado natural e intrínsecamente bueno.¹⁵

La recepción del conservadurismo antiliberal español y alemán en Chile

La recepción del conservadurismo antiliberal español y alemán en Chile quizás haya encontrado en la historiografía su expresión más importante, desde donde influirá en el pensamiento político. En efecto, apoyados en los esquemas de la tradición conservadora alemana y española se han escrito las más difundidas interpretaciones de la historia de Chile. Tales son la de Alberto Edwards, contenida en *La fronda aristocrática de Chile*, y la de Jaime Eyzaguirre, en particular la plasmada en *Fisonomía histórica de Chile*.

Como es sabido, Edwards asumió la visión de Spengler. Articuló su hermenéutica en torno a los conceptos de «Estado en forma» y «decadencia». El Estado en forma, en la hermenéutica de Edwards, aparece como la obra de Diego Portales; y la decadencia, como el resultado de la recepción por parte de la elite aristocrática de lo que este autor denomina como la «religión liberal». Esto habría implicado negar las tradiciones nacionales y permitido la irrupción de las masas populares mediante el voto universal, para dar paso a la anarquía que prefiguraría la disolución nacional. Ante ello, Edwards, siguiendo el esquema spenglereano, postula la dictadura

¹⁵ Carl Schmitt: *Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía*. Ed. Struhart & Cía, Buenos Aires, 1985.

de un hombre fuerte, la cual vio materializada en el régimen del general Ibáñez, del cual, por lo demás, fuera ministro. Francisco Encina, también marcado por la influencia de Spengler, profesa una concepción análoga.

Por su parte, Jaime Eyzaguirre, recepcionando la versión española del pensamiento conservador antiliberal, visualiza el contenido de la historia de Chile como el despliegue de la antítesis entre lo propio –vinculado con la hispanidad y con un régimen de orden y autoridad– y lo foráneo –relacionado con el racionalismo, el liberalismo francés y la democracia liberal–, que asumirían sectores dirigentes del país (los liberales). Estos, al proceder así, negarían el ser nacional (ligado a la hispanidad). La historia de Chile, de tal modo, sería una especie de drama en que la nación, en recurrente conflicto consigo misma, lucharía por afirmarse, debatiéndose, al modo de De Maeztu, entre el ser y el no ser.

La derecha chilena y su recepción del ideologismo conservador antiliberal

Haciendo suyas las mencionadas nociones historiográficas y adaptándolas a sus necesidades políticas, la derecha chilena, sobre todo desde los años sesenta del siglo xx hasta el fin de la dictadura cívico militar, estructuró en grado importante su visión de país; en particular, utilizando los conceptos de «decadencia», «penetración de ideas foráneas» y «disolución (nacional)», los cuales vinculó a la acción de la izquierda y del movimiento popular. Estos procesos, a su juicio, deberían ser revertidos mediante un acto decisionista, en el cual le cabría un papel relevante a las Fuerzas Armadas, con su correspondiente costo en sangre.

Hasta los años sesenta, las mencionadas ideas eran patrimonio solo de la extrema derecha nacionalista, por lo que se hallaban en una situación marginal, de la que saldrán durante la referida década cuando la derecha tradicional las haga abiertamente suyas y renuncie al liberalismo que profesara con anterioridad.

La visión conservadora antiliberal del país se fue imponiendo en la derecha en correlación con el creciente cuestionamiento de los intereses de las clases dominantes por parte de las organizaciones sociales y políticas de las clases subalternas. En la medida en que

el alza de estas se hacía más potente, las concepciones conservadoras antiliberales, nacionalistas y corporativistas, por mucho tiempo marginales en la política nacional, se volvieron del todo hegemónicas entre la derecha civil, mientras que entre los militares ya lo eran desde mucho antes.

Precisamente en base a los mencionados ideologismos conservadores antiliberales, durante los años sesenta la derecha terminó viendo en la democracia (liberal) un peligro, más aún cuando fuera a través de ella que se impulsaran ciertos cambios en el país –bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva–, los cuales atentaban en contra de sus intereses. Así, a través de los procesos descritos, se fueron configurando en Chile las premisas culturales e ideológicas que harían posible y justificarían los crímenes masivos que estaban por advenir.

No es extraño que la derecha, por un lado –como veremos más adelante–, aspirara entonces a reemplazar la democracia por regímenes autoritarios y, finalmente, por una dictadura militar; y, por el otro, ya instalada esta, coherente con sus definiciones ideológicas de corte decisionista, apoyara la eliminación física de un sector del país (supuesta encarnación del mal absoluto), a través de extremas violencias estatales, o crímenes masivos, cuestión que se verificó entre 1973 y 1989.

Las mencionadas premisas culturales de estas prácticas, basadas sobre todo en los esquemas del pensamiento de la extrema derecha española y alemana (o sea, en «ideas foráneas»), fueron paradójicamente presentadas por la derecha local y sus intelectuales como expresión de un alma nacional incontaminada por lo extranjero, cosa que también hará la dictadura cívico militar, heredera final del pensamiento antidemocrático chileno. Con base en este pensamiento, la derecha civil chilena, por muchos años, intentó legitimar su proyecto de modernización y la práctica de la dictadura militar que lo hizo posible, es decir, con los correspondientes crímenes masivos que le fueran inherentes.

Los militares, particularmente a partir de 1891 en adelante, habían venido experimentando una análoga evolución ideológica, la cual también fue tributaria de ciertas recepciones conservadoras antiliberales. Estas operaron a través de instructores alemanes primero, y estadounidenses después, tema que será abordado en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO 4

Las Fuerzas Armadas: algunos hitos de una trayectoria histórica

Como se señalara en el capítulo anterior, las Fuerzas Armadas experimentaron su propio camino en el proceso de asumir las concepciones ideológicas que son prerequisites de las extremas violencias desde el Estado en contra de un sector de su propia población. Ese camino, en el caso de los militares, se halla vinculado, primero, a la acción de los instructores alemanes que profesionalizaron al Ejército chileno; y, más tarde, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, a la decisiva influencia estadounidense en sus filas. A una y otra influencias nos referiremos a continuación.

La acción de los instructores alemanes

La acción de los instructores alemanes en el Ejército de Chile está ligada a la verdadera refundación que este experimentara desde fines del siglo xix en adelante. Como se sabe, a partir de entonces, el Ejército fue reorganizado por instructores alemanes que por muchos años se mantuvieron en su cúpula, y cuyo representante principal fue Emilio Körner. Se puede sostener que lo que se intentó a través de dicho proceso fue producir con los uniformados chilenos una copia acrítica del Ejército germano. Por entonces el idioma alemán se hizo obligatorio en la Escuela Militar y, como parte de su proceso formativo, gran parte de los oficiales empezaron a viajar a Europa, donde cumplían servicio en la guardia imperial del

káiser. El resultado de ello fue un ilimitado afán imitativo por parte de los uniformados chilenos respecto de su congénere alemán. Evidenciando esta actitud, el capitán Alberto Muñoz, allá por la década de los veinte, escribió: «es muy común entre nosotros oír de labios de oficiales que han estado en Alemania, frases como estas: ¡Esto no se hace en Alemania! ¡Así no se piensa en Alemania. En Alemania se practica así, se exige acullá, etcétera».¹

Pero lo más importante que debemos subrayar es que ese mimetismo no se refería tan solo a aspectos técnicos, sino también doctrinales e ideológicos, los que fueron traspasados casi en su integridad a los uniformados chilenos.

Uno de los elementos doctrinales más importantes que los uniformados locales recibieron de sus instructores prusianos fue un nacionalismo extraordinariamente conservador. Una de sus tesis fundamentales sostenía que existirían ideas disolventes que penetrarían desde el exterior, las cuales pondrían en peligro la subsistencia de la nación; y, más aún, que existiría un enemigo interno que asumiría tales ideas. Frente a ese enemigo –y a los de naturaleza exógena–, las Fuerzas Armadas serían la reserva última de la nación.

Las revistas militares de la época, particularmente *La Bandera* –la que según Genaro Arriagada fuera creada en 1922 por el alto mando a fin de adoctrinar a la suboficialidad–, difundieron sistemáticamente tales concepciones. Estas postulaban que entre los enemigos internos de la nación figuraba «el socialismo». En virtud de ello fue que, entre los uniformados, se pasó a conceptualizar como traidores a la patria a quienes lo profesaran.

Igualmente se consideraron como enemigos de la patria a aquellos segmentos intelectuales y dirigencia estudiantil universitaria de la época que, sin necesariamente ser socialistas, profesaban ideas internacionalistas o americanistas. A este respecto es gráfico cómo *La Bandera* se refería a ellos. Sobre los dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) decía: «hombres sin conciencia ni patriotismo, que preparan la ruina de la misma patria que los alimenta, destilan hiel y amargura [...]

¹ Capitán Alberto Muñoz, citado por Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», en Eduardo Devés y otros: *El pensamiento chileno en el siglo xx*, FCE, México, 1999, pp. 24-25.

enemigos de la patria, fracasados, amargados, cobardes que la nación entera sabe acallar indignada [...] hombres sin patria, sin familia, de almas innobles y mezquinas».²

Recordemos, por otra parte, que desde muy temprano, los gobiernos oligárquicos de la época asignaron al Ejército prusianizado la función de reprimir a las clases subalternas. Algunos hitos al respecto, de todos conocidos, fueron la huelga de 1905 en Santiago, la de 1907 en Iquique y las represiones generales en la pampa. De hecho, a lo largo del siglo *xx*, los uniformados nunca tuvieron una guerra con el exterior. Solo enfrentaron a las clases subalternas, y las violencias que entonces ejercieron sobre ellas no respondían solo a las órdenes de los gobiernos oligárquicos que debían cumplir. Tales violencias obedecían también a sus propias convicciones ideológicas, que veían en las luchas obreras y populares la expresión de las ideas disolventes de origen foráneo y al enemigo interno en acción, ideas que habían recepcionado de sus instructores alemanes.

Lo dicho, entre otros casos, se comprueba con claridad en las represiones de 1925, después del golpe del 23 de enero, cuando los militares tenían todo el poder en sus manos y la oligarquía defenestrada ya no los mandaba. Las descripciones que hace Carlos Vicuña, contemporáneo de las masacres de Marusía y La Coruña en su libro *La tiranía en Chile*; Gonzalo Vial, en su *Historia de Chile*, y Patricio Manns, en su libro *Chile: una dictadura militar permanente*, son muy ilustrativas al respecto. Los uniformados, según tales relatos, al reprimir a los obreros no parecen, en efecto, actuar respondiendo a ineludibles obligaciones, sino convencidos de que, en cumplimiento de un deber patriótico, estaban destruyendo a un enemigo interno.

No obstante, y paradójicamente, el Ejército, sobre todo su oficialidad media de carácter mesocrático —la misma que llevaba a cabo las represiones indicadas arriba—, desempeñaba a la fecha un papel antioligárquico. En efecto, fue la oficialidad media la que puso fin a la dominación tradicional de la oligarquía a través de su movimiento de septiembre de 1924 y enero de 1925, proceso

² Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», en Eduardo Devés y otros: *El pensamiento chileno en el siglo *xx**, ed. cit., p. 59.

que culminó dos años después con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo.

Fue esta dictadura –con apoyo del Ejército– la que, de hecho, puso término definitivo a dicha dominación, reorganizó el aparato estatal y lo modernizó, inició la intervención del Estado en la economía, promulgó la legislación laboral traducida en el Código del Trabajo, e intentó avanzar hacia una sociedad más meritocrática, según los criterios de las clases medias de la época, insertando a miembros de esta en puestos decisivos del Estado. Con la misma fuerza reprimió al movimiento obrero clasista, puso fuera de la ley al Partido Comunista, disolvió a la Federación Obrera de Chile (FOCh), al tiempo que reprimía a representantes de la oligarquía (exilió al propio Alessandri y a otros próceres oligárquicos) en el marco de un estado policial y de repetidas declaraciones contrarias al régimen demoliberal y de partidos, cuya otra cara era la exaltación del hombre providencial y un notorio culto nacionalista. Todo ello, al menos en sus comienzos, la dictadura de Ibáñez lo llevó a cabo con el apoyo de numerosos movimientos sociales asalariados, no pocos de los cuales pronto se apartaron de él, e incluso luego fueron reprimidos.

Hay que decir, por otra parte, que bajo la dictadura ibañista se restableció la influencia de los alemanes en el Ejército, la cual se había debilitado transitoriamente ante el retorno que dichos instructores habían debido hacer a su país por el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Terminada la guerra, ya en 1924 estaba de vuelta en Chile el general Hans von Kiesling, quien, con la ayuda del coronel Ibáñez y del general Javier Díaz, fuera prontamente reincorporado a las filas. A él luego se sumará el general Hans von Knauer. Von Kiesling se gloriaba de que ya en 1926 había logrado restablecer a plenitud la influencia alemana en el Ejército chileno. Por entonces –relata el mismo Von Kiesling–, «el comandante alemán Otto Zippelius se sumó a mi trabajo y aumentó rápidamente el número de oficiales chilenos que se incorporaron a la Reichwehr. El número de instructores alemanes aumentó a doce. Pertenecían a todas las diferentes armas y ejercieron en todos los institutos militares».³ Según Carlos Maldonado, en 1928 había «18 instructores germanos en el país,

64 ³ Víctor Farías: *Los nazis en Chile*, Ed. Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 380.

los que se encargaban de adiestrar a la oficialidad del Ejército, la Fuerza Aérea e incluso Carabineros. También se volvió a hacer frecuente el envío de militares chilenos a Alemania. En 1928 había 17 oficiales estudiando allí».⁴

Para el periodo que estudiamos, según Maldonado, «la influencia militar alemana fue una de las fuentes más significativas para el surgimiento y desarrollo de la ideología fascista en Chile».⁵ Los militares locales eran sensibles a esa ideología debido a su desencanto respecto al régimen demoliberal, el que, a su juicio, permitía el agudizamiento de los conflictos sociales y el crecimiento del comunismo, del cual eran acérrimos enemigos.

Según Víctor Farías, tanto Von Kiesling como Hans von Knauer, que se integraron al ejército luego de retornar de Alemania, llegaron a ser miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). Von Knauer lo fue desde 1931, mientras que Von Kiesling desde mayo de 1933, cuando ingresó en Landesgruppe Chile, es decir, en la sección chilena del NSDAP.⁶ El comandante Otto Zeppelius, que se desempeñara como instructor de Carabineros, habría hecho lo propio en 1935.⁷ Esto no impidió que tanto Von Kiesling como Von Knauer ocuparan los grados de general dentro del escalafón del Ejército chileno, desde donde ejercieron un considerable liderazgo.

A la caída de Ibáñez, ocurrida en julio de 1931 –hecho que la oligarquía celebró–, los militares prusianizados quedaron en una situación difícil, quienes, de composición predominantemente mesocrática y todavía fieles al caído Ibáñez, conspiraban. La oligarquía, por su parte, tanto antes como después de 1932 –cuando con Alessandri se recuperara el orden institucional–, sabía que la mesocracia militar seguía acechando dispuesta al golpe, por lo cual decidió enfrentarla. A tales efectos creó la Milicia Republicana, un ejército paralelo con cincuenta mil civiles, perfectamente armados y entrenados, que pronto suscitó el apoyo del presidente Alessandri

⁴ Carlos Maldonado: «La Prusia de América del Sur: Acerca de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945», *Estudios Sociales*, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), núm. 73, trimestre 3, Santiago, 1992, p. 76.

⁵ *Ibidem*, p. 75.

⁶ Víctor Farías: *Los nazis en Chile*, ed. cit., pp. 363-364.

⁷ *Ibidem*, p. 364.

y de los tres poderes del Estado. Respaldo en esa fuerza armada paralela, Alessandri descabezó y purgó al Ejército, y le impuso una doctrina de no deliberación y de acatamiento a los civiles, creando el Ministerio de Defensa y rebajando drásticamente los presupuestos militares. De esta manera, y en el marco del llamado «estado de compromiso», la mesocracia militar prusianizada sufrió una derrota en manos de la oligarquía y fue confinada a sus cuarteles y al desempeño de sus labores profesionales, prescindiendo de toda deliberación, debiendo someterse al orden constitucional.

Carlos Maldonado sostiene que los militares acataron, por razones corporativas y solo formalmente, el orden constitucional que se les imponía. De allí que, afirma, «no hubo una auténtica despolitización de las instituciones castrenses». ⁸ En la práctica los militares terminaron cultivando un «constitucionalismo formal [...] que era lo suficientemente inconsistente como para permitir que en las unidades militares siguieran incubándose supuestos decididamente antidemocráticos», ⁹ es decir, las concepciones nacionalistas provenientes de la prusianización.

En tanto, a la fecha, en Alemania existía plena conciencia de que las Fuerzas Armadas chilenas, en particular el Ejército, por razones históricas, constituían un punto de apoyo para ejercer su influencia y penetración en el país. En esa perspectiva los germanos se empeñaron en fortalecer su ascendiente entre los uniformados locales (y, en realidad, en los de toda Latinoamérica). A tales fines le correspondió un papel relevante al Instituto Iberoamericano de Berlín, dirigido por el general Wilhelm Faupel. Uno de los instrumentos principales utilizados fue la revista *Ejército-Marina-Aviación*, publicación mensual en castellano que alcanzaba los diez mil ejemplares por número. Víctor Farías sostiene que la revista combinaba temáticas técnicas y científicas al más alto nivel con elementos ideológicos que marcaban una clara identificación nazi-fascista. ¹⁰ La publicación circulaba ampliamente entre los uniformados chilenos. En ese marco, a mediados de 1932, el general (R) Francisco

⁸ Carlos Maldonado: *Entre reacción civilista y constitucionalismo formal: las Fuerzas Armadas chilenas en el período 1931-1938*. Documentos de trabajo núm. 55, Flacso, 1988, p. 83.

⁹ Ídem.

¹⁰ Víctor Farías: *Los nazis en Chile*, ed. cit., p. 404.

Díaz fundó el primer partido nazi chileno, y llamó a los militares en retiro a unirse a él.

Según Carlos Maldonado, a lo largo de los años treinta, sobre todo durante su segunda parte, hubo recurrentes actos de camaradería entre altos oficiales en servicio activo y en retiro del Ejército con organizaciones alemanas vinculadas de una u otra forma a la sección local del Partido Nacional-socialista Obrero Alemán (NSDAP).

«Sorprendente y casi increíble resulta comprobar la simpatía sin límites hacia la ideología fascista que profesaban los uniformados chilenos», agrega Maldonado. Uno de los tantos indicadores de ello, añade, es «la activa participación del Orfeón de Carabineros en los más importantes actos públicos y privados de los nacional-socialistas alemanes». Asimismo, señala: «la música de la policía chilena amenizó las celebraciones con motivo del plebiscito del Sarre, de los aniversarios de la toma del poder por los nazis, la recordación en honor del mártir nazi Wilhelm Gustloff y del general Erich Ludendorff, de los cumpleaños de Hitler, de las fiestas del NSDAP por el 1ro. de mayo, del Día del Soldado de los Clubes Militares Alemanes y hasta del recibimiento del líder [nazi] Willi Kohn que llegaba de participar en el Congreso del Partido en Nürnberg en 1936».¹¹

También era habitual la participación de los jefes máximos del Ejército chileno en actos organizados tanto por la colonia, la embajada y el NSDAP. En el acto de recordación de Hindenburg, realizado el 5 de agosto de 1934 en el Teatro Nacional, participó «casi todo el cuerpo de oficiales chileno de Santiago». En esa ocasión hablaron el encargado de negocios alemán, el general Kiesling y el jefe del partido nazi, Zeissig.¹²

A fines de los años treinta, oficiales alemanes trabajaban como profesores, instructores y asesores en casi todos los puestos importantes de las Fuerzas Armadas chilenas, con excepción de la Marina.

Los resultados de la penetración ideológica germana en el Ejército chileno no fueron menores. Cuando estalló la Segunda

¹¹ Carlos Maldonado: «La Prusia de América del Sur: Acerca de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945», art. cit., p. 89.

¹² Ídem.

Guerra Mundial, no fue casualidad que el Ejército se mantuviera férreamente germanófilo.

A este respecto no deja de ser sugerente el hecho de que, a comienzos de octubre de 1939, a poco más de un mes de que se desatara dicha conflagración, los generales en retiro Arturo Ahumada, Javier Palacios, Francisco Javier Díaz, Carlos Vergara Montero, Guillermo Novoa y el coronel Luis Varela, exdirector de la Academia de Guerra, procedieron a crear la Asociación de Amigos de Alemania (A. A. A.), la que llegó a tener más de cinco mil miembros. Carlos Maldonado sostiene que dicha organización era un «organismo de fachada con una evidente posición fascista y apoyada por la embajada del Reich».¹³ Mientras que Víctor Farías afirma que la A. A. A. «dirigida por oficiales chilenos [...], debía ser el punto de encuentro entre oficiales alemanes y chilenos, con permanente presencia de la dirección del NSDAP(AO)-Chile y los diplomáticos del Reich en el país».¹⁴ En este contexto, justo en los días en que se verificaba la invasión a Francia, el general (R) Luis A. Varela, sostuvo que Hitler era «un monumento de la humanidad». A esa fecha Varela se dedicó a dictar charlas en locales de la A. A. A., después de un viaje suyo a Alemania hecho en 1939. El 29 de marzo de 1940 impartió una conferencia en Valparaíso, cuyos temas eran «Impresiones de un chileno recientemente llegado de Alemania» y «La campaña de Polonia en 18 días». «Repitió su conferencia el 9 de febrero de 1940 en Santiago. Sus auditorios eran corrientemente militares en servicio activo».¹⁵

En un Informe Confidencial elaborado en mayo de 1942 por Marcial Martínez, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se decía que la Dirección General de Investigaciones poseía en sus archivos la nómina de todos los miembros de la A. A. A. «No deja de llamar la atención que muchos de ellos sean militares en retiro y de alta graduación».¹⁶

¹³ Carlos Maldonado: *Entre la reacción civilista y el constitucionalismo formal: las Fuerzas Armadas chilenas en el periodo 1931-1938*, ed. cit., p. 73.

¹⁴ Víctor Farías: *Los nazis en Chile*, ed. cit., p. 375.

¹⁵ Carlos Maldonado: «La Prusia de América del Sur: Acerca de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945», art. cit., pp. 83-84.

¹⁶ Citado por Víctor Farías: *Los nazis en Chile*, ed. cit., p. 254.

Por su parte, Hernán Ramírez Necochea hace ver que, «en junio de 1943 el embajador norteamericano en Santiago, Claude Bowers, comunicaba a su gobierno que, según el agregado militar de su embajada, en el ejército chileno había una cantidad de influyentes jefes y oficiales pro-nazis». Añadía que «la certeza de la derrota de las potencias del Eje influyó para que esos militares dejaran de manifestar abiertamente sus simpatías; pero tales oficiales, de los cuales hay muchos en el ejército chileno, se cree que todavía son nazis de corazón».¹⁷

Y, en fin, el líder del nazismo criollo, Jorge González von Marées, sostuvo que «el noventa y cinco por ciento de los oficiales y jefes de nuestras Fuerzas Armadas simpatizaban con la causa de Alemania», afirmación que, adicionalmente, coincide con lo que en sus *Memorias. Testimonios de un soldado*, sostuvo el general Carlos Prats, en el sentido de que las generaciones egresadas de la Escuela Militar entre 1939 y 1948 «se caracterizaron por su simpatía inocultable hacia la causa nazi».¹⁸ Dada esta situación no sería extraño que existieran tensiones entre las instituciones armadas y el orden institucional.

En 1943 el gobierno de Chile rompió con el de Alemania producto de las presiones estadounidenses. Maldonado sostiene que:

[...] en enero de 1944 la inteligencia británica informó reservadamente al gobierno chileno sobre preparativos avanzados de un golpe militar contra el presidente Ríos con el evidente propósito [a lo menos], de restablecer las relaciones con el Eje, rotas un año antes. Se sindicaba como los principales implicados a conocidos jefes castrenses y líderes nacionalistas civiles [...]. Los cabecillas militares de la conspiración fueron llamados a retiro solapadamente y sin mayor sanción.¹⁹

¹⁷ Citado por Hernán Ramírez Necochea: «El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970», *Araucaria de Chile*, núm. 1, p. 20.

¹⁸ Carlos Prats: *Memorias. Testimonio de un soldado*, Ed. Pehuén, Santiago, 1985, p. 61.

¹⁹ Carlos Maldonado: «La Prusia de América del Sur: Acerca de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945», art. cit., pp. 91-92.

En resumen, la acción de los instructores alemanes en el Ejército conllevó una ideologización de corte nacionalista en las filas de este. Tal ideologización postulaba la existencia de un enemigo interno –el socialismo, el comunismo, etc.–, el que constituiría las fuerzas disolventes de la nación contra las cuales los uniformados, como reserva última de esta, debían estar prestos a combatir.

La acción estadounidense

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial cambió totalmente el panorama dentro del Ejército. A este respecto el general Prats en sus *Memorias* dice que a la fecha la admiración incondicional de los uniformados hacia Alemania fue siendo reemplazada por una admiración análoga por los Estados Unidos. Como es sabido, en 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que obligaba al país a participar del lado de los Estados Unidos en cualquier conflicto bélico que estos tuvieran, implícitamente con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). También por entonces fue creada la Escuela de las Américas, destinada a proporcionar formación técnica y doctrinaria anticomunista a los uniformados de todo el continente. El ideologismo así impuesto conceptuó a las fuerzas nacionales, antimperialistas y antioligárquicas como instrumentos de Moscú y como enemigos de la patria. También se establecería el Pacto de Ayuda Militar (PAM), por el cual misiones permanentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses se establecieron en Chile para asesorar a los militares locales. Estos quedaron así sujetos a ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses.

La situación se agudizó luego de 1959, cuando se produjera el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, los Estados Unidos impusieron a los ejércitos latinoamericanos la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo objeto sería la guerra antisubversiva en contra de un enemigo interno, al que habría que destruir valiéndose de todos los medios. Como se sabe, el resultado más radical de esta doctrina serán las dictaduras de la Seguridad Nacional, con su escuela de muertos y desaparecidos, lo que en Chile vino unido a la implantación del modelo neoliberal que hasta hoy nos rige.

De este modo, en conclusión, el adoctrinamiento ejercido tanto por los alemanes como por los estadounidenses sobre el ejército chileno tuvo un elemento en común: introducir en la institución aquella ideología que tenía como uno de sus supuestos fundamentales la existencia de un enemigo interno destructor de la nación que los uniformados debían combatir.

En el capítulo siguiente insistiremos en este punto, en particular sobre sus orígenes, que se vinculan al quehacer de los instructores alemanes.

CAPÍTULO 5

Profesionalización e ideologización en el ejército chileno. Los orígenes de su asunción del concepto de enemigo interno¹

Como se afirmó en el capítulo precedente, el supuesto según el cual existiría un enemigo interno disolvente de la nación al que las Fuerzas Armadas deberían enfrentar –supuesto que constituye una de las premisas ideológicas de los crímenes masivos desde el Estado– fue introducido entre los uniformados chilenos por los instructores alemanes encargados de su profesionalización. La posterior influencia estadounidense sobre las Fuerzas Armadas chilena reforzó ese supuesto, pero desde la óptica de los intereses de Washington. Tales fueron la doctrinas de la Seguridad Hemisférica y la de la Seguridad Nacional.

En el presente texto nos proponemos volver al papel de los alemanes. Con el fin de abordar de mejor manera el tema, procederemos a exponer ciertos antecedentes sobre la profesionalización del ejército chileno junto a determinadas características del ejército germano. Luego, en ese marco, insistiremos en algunos de los elementos ideológicos que el ejército chileno terminará recepcionando de parte de sus instructores prusianos.

¹ Este texto fue publicado en la *Revista Mapocho*, núm. 58, segundo semestre de 2005.

La profesionalización del ejército chileno por instructores prusianos

La profesionalización del ejército chileno fue iniciada con posterioridad a la Guerra del Pacífico. Respondió a los imperativos geopolíticos derivados del desenlace de ese conflicto y, por tanto, a la necesidad de disponer de instituciones de la defensa cuyos niveles de eficiencia se aproximaran lo más posible a los estándares europeos.

En esa perspectiva, las autoridades del país llegaron a la conclusión de que la profesionalización del ejército chileno debía quedar en manos de instructores alemanes; ello en razón de que los resultados de la guerra franco-prusiana de 1870 habían demostrado que el ejército germano era el más eficiente de Europa.

Alemania se hallaba por entonces profundamente interesada en aportar sus instructores militares a los más diversos países que lo demandaran. Esto, como parte de sus esfuerzos por ampliar sus esferas de influencia. Recordemos que, debido a su unificación nacional más tardía, Alemania había llegado atrasada al reparto colonial del mundo y rivalizaba con Inglaterra y Francia buscando enérgicamente su «lugar bajo el sol». América Latina era otro de los ámbitos donde ese empeño se desplegaba. En tal contexto, las misiones militares alemanas orientadas a modernizar a varios ejércitos de la región constituían una faceta más de una penetración que también se manifestaba en los planos económico, político y cultural.

En este continente Chile vino a representar el caso más temprano y donde la acción de las misiones militares alemanas alcanzó mayor éxito. Esta cuestión, en realidad, vino seguida de una importante penetración germana en el plano económico, cultural y político. La magnitud de esta penetración quedó claramente de manifiesto en la neutralidad que Chile mantuviera a lo largo de todo el conflicto mundial iniciado en 1914.

La recepción del doctrinarismo de los instructores prusianos

Fue bajo el presidente José Manuel Balmaceda que el gobierno chileno llegó a un acuerdo con Emilio Körner para que encabezara

la modernización del Ejército. Por tanto, Körner pasó a desempeñarse como instructor y subdirector de la Escuela Militar. Más adelante procedería a crear la Academia de Guerra. A lo largo de los años noventa, bajo su mirada inspiradora, se sucedieron misiones de oficiales alemanes, quienes fueron asimilados al ejército chileno. Como contrapartida, oficiales chilenos empezaron a viajar a Alemania donde «estudiaban con distinción en Charlottenburg y prestaban servicios con la elite de la Guardia Imperial». ² «Entre 1895 y 1913 estos viajeros de uniforme [señala Gonzalo Vial] totalizaron 130». ³ Fueron «las cabezas de la germanización militar. Entre ellos destacan Jorge Boonen, Barceló, Javier Díaz, Arturo Ahumada, Juan Pablo Bennet, José María Bari, Bartolomé Blanche, entre otros». ⁴

El proceso de modernización del ejército chileno avanzó raudamente, lo que en gran medida fue posible debido al alejamiento de las filas de quienes le manifestaban reservas, esto es, las generaciones más antiguas del mando, las cuales fueran desplazadas por la guerra civil de 1891, en la que, entre paréntesis, Körner se alineara con el Congreso en contra del presidente Balmaceda.

La señalada modernización se tradujo en una recepción total, incluso acrítica, del modelo militar prusiano, a cuyos parámetros el ejército chileno terminó asimilándose a plenitud. Sin embargo, no faltaron los jefes militares que, con la perspectiva del tiempo, manifestaron sus reservas críticas sobre la materia. Así, el general Carlos Sáez sobre el punto escribió: «en nuestro afán de imitar al ejército alemán, un día resolvimos adoptar su uniforme [...] por 1904, se generalizó este uniforme para todo el ejército; nos transformábamos así en soldados prusianos [...]. Tras la adopción del uniforme alemán vino la copia de la organización del ejército prusiano». ⁵ Y, refiriéndose a la reforma de 1906, el mismo general Sáez añadió: «era preciso ir mucho más lejos. Y dimos el gran salto,

² Frederick M. Nunn, citado por Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 21.

³ Gonzalo Vial: *Historia de Chile (1891-1973)*, t. II, p. 801.

⁴ Ídem.

⁵ General Carlos Sáez: «Recuerdos de un soldado», citado por Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», en Eduardo Devés y otros: *El pensamiento chileno en el siglo xx*, ed. cit., pp. 21-22.

implantando, de golpe y porrazo, la organización y una gran parte de los reglamentos alemanes».⁶

A su vez, el general Indalicio Téllez afirma sobre el punto:

[...] lo que nos perjudicó y mucho, fue la desgraciada tendencia que tenemos a copiar servilmente lo que creemos bueno. La trama de los ejércitos, anteponiéndoles el decreto que los declaraba chilenos, sin considerar si había en ellos algo que no debíamos o no nos convenía adoptar. Era alemán y bastaba. Yo protesté cien veces, desesperadamente, pero era como gritar en un desierto.⁷

Y el capitán Alberto Muñoz, en el *Memorial del Ejército* de 1913 afirmaba: «icuantos errores gravísimos no se han cometido al querer trasplantar doctrinas extranjeras en abierta oposición con nuestro espíritu nacional! La copia servil de instituciones europeas sin un conocimiento profundo de la idiosincrasia de nuestro pueblo y de la del modelo, será un mal tanto más grave cuanto afecte a las partes vitales de nuestra nacionalidad».⁸

Como fácilmente se comprenderá, los procesos modernizadores del Ejército operados bajo la dirección de instructores prusianos no podían constituir adquisiciones limitadas a los exclusivos terrenos de la tecnología y el equipamiento militar. En efecto, debieron ser, a la vez, procesos de recepción ideológica en el sentido más amplio. Esto significa que a la par tuvieron que verificarse en el nivel de la concepción de la sociedad, del Estado –por tanto, de la política– y del rol que le cabía a las instituciones armadas dentro de todo ello. Los contenidos que al respecto se recepcionaran en una medida muy importante correspondieron a un ideologismo conservador antiliberal que era propio de las instituciones de donde procedían los instructores prusianos. Para ponderar mejor esto último se hace

⁶ *Ibidem*, p. 22.

⁷ General Indalicio Téllez: *Recuerdos militares*, Santiago, Imprenta del Instituto Geográfico Militar, 1949, citado por Genaro Arriagada: *Ob. cit.*, p. 22.

⁸ Capitán Alberto Arriagada F.: «El problema de nuestra educación militar», *Memorial del Ejército*, 1913, p. 961, citado por Genaro Arriagada: *Ob. cit.*, pp. 24-25.

necesario trazar un breve perfil de la *Imago mundi* del ejército alemán de la época y del lugar que este ocupaba en su país.

Características del ejército alemán de fines del siglo xix y comienzos del xx

El imaginario colectivo del ejército alemán de fines del siglo xix y comienzos del siglo xx era el de la cultura prusiana y del giro intelectual de fines de siglo. Involucraba, en consecuencia, nacionalismo, organicismo, autoritarismo, militarismo, elitismo e imperialismo. Tales rasgos fueron particularmente acentuados bajo el káiser Guillermo II, quien ejerciera su cargo entre 1888 y 1918. Ese lapso coincide casi del todo con el proceso de prusianización del ejército chileno, el que, en efecto, se verificó esencialmente entre 1890 y 1914.

Desde el punto de vista de su composición social, la oficialidad del ejército alemán estaba conformada por miembros provenientes de la aristocracia terrateniente –los Junker–, quienes, a su vez, constituían la clase dirigente del país. El carácter socialmente elitista de la institución era, por lo mismo, muy marcado.

Como es sabido, el predominio político de la aristocracia alemana –es cierto que en alianza con la gran burguesía– se realizaba mediante un régimen autocrático y monárquico. El Parlamento poseía un poder más bien nominal. En ese contexto, en particular bajo el káiser Guillermo II, las cúpulas militares terminaron formando un estrecho círculo alrededor del monarca. Coincidían con este en sus recelos frente al Parlamento, también en lo relativo a la influencia que el socialismo iba adquiriendo en el movimiento obrero alemán.

El desprecio al constitucionalismo que le era típico llevaba a las cúpulas del ejército alemán a ver con malos ojos el control parlamentario sobre su presupuesto y quehacer, control respecto del cual tratarán de librarse con éxito. En esa línea la institución tendió acentuadamente a constituirse en una especie de compartimento estanco, no solo en relación con la sociedad civil, sino también del propio Estado. En tal calidad sus cúpulas se vinculaban con el káiser, quien, caracterizado por su plena adhesión a las ideas nacionalistas, les brindara su total confianza.

En fin, el ejército alemán de la época era una institución signada por ideas muy tradicionales. Como lo señala Genaro Arriagada: «su cuerpo de oficiales sería cada vez más una corporación elitista, adscrita a una ideología nacionalista conservadora, caracterizada por una ética y un estilo de vida que eran el reflejo de valores propios de la nobleza y del periodo preindustrial».⁹

Al ponderar las concepciones nacionalistas del ejército alemán hay que subrayar el hecho de que una de las características más típicas del nacionalismo germano era su carácter étnico. Ello suponía la identificación de la nación con la raza, cuestión que, como se verá, dejó su impronta en el ejército chileno.

En ese marco, entre las concepciones nacionalistas y conservadoras del ejército alemán cabe sobre todo destacar su idea sobre el Ejército como la esencia de la germanidad y reserva última de la nación. El Ejército sería el baluarte final «contra el cual se estrellarían las doctrinas y los movimientos que buscaban la desintegración del orden político y social que había hecho la grandeza de Alemania».¹⁰ Estos planteamientos, desde una óptica autoritaria, en el fondo apuntaban tanto en contra del liberalismo como del socialismo, a los que implícitamente se conceptualizaban como elementos extranjeros, ajenos a la nación y, lo que es más importante, contrarios a ella. La carga deslegitimante de estos supuestos es evidente por sí misma. Desde ya, de algún modo, aquí está contenido el concepto de «enemigo interno», aunque por entonces no se utilizara este término.

Con base en los mencionados puntos de vista, el ejército alemán se atribuía roles no solo en lo externo, sino también en lo interno. En lo externo, obviamente, su labor debía consistir en encarar las amenazas representadas por los demás Estados, mientras que en lo interno, él «sería la salvaguarda en contra de la revolución social».¹¹ La connotación política de estas ideas es clara.

Tales concepciones del ejército alemán, a su vez, hay que vincularlas a la exacerbación del imperialismo y del colonialismo pro-

⁹ Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», en Eduardo Devés y otros: *El pensamiento chileno en el siglo xx*, ed. cit., p. 28.

¹⁰ Ídem.

¹¹ *Ibidem*, p. 29.

ducida a fines del siglo ^{xix}, y, en particular, a la decisión alemana en orden a forzar un nuevo reparto colonial en su beneficio, apoyada en su relativamente más alto crecimiento tecnológico y económico, el que, obviamente, requería complementarse con un mayor desarrollo militar y naval, como el que realmente estaba en curso.

En el plano ideológico estos hechos tuvieron una de sus expresiones principales en una creciente glorificación de la guerra, cuestión que en todo caso –y no por casualidad– figuraba de modo destacado en la tradición nacionalista alemana. Tal glorificación se fundaba en las concepciones organicistas propias del giro intelectual finisecular y en un tipo de darwinismo social, a lo cual se agregaría la naciente geopolítica. Como es sabido, el organicismo concebía a la sociedad como un organismo que en su desarrollo natural requería crecer, adquiriendo un espacio vital más amplio en lucha en contra de otros organismos nacionales. Esto inevitablemente daría lugar a las guerras y a la imposición del más poderoso y apto.

En la inevitable lucha entre naciones, postulada por las concepciones organicistas, junto a las cuales se situaba la geopolítica, la sociedad, como organismo biológico, sería más fuerte en la medida en que su cohesión interna fuera mayor. Por tal concepto la acción del movimiento obrero y socialista, así como también del propio liberalismo, aparecía afectando la cohesión del organismo nacional y, por tanto, como un factor de su debilidad; mientras que en las antípodas, el autoritarismo nacionalista y el fortalecimiento de los sentimientos patrióticos entre la población desempeñarían un papel opuesto, es decir, potenciarían al organismo nacional.

A partir de estas concepciones, en el ejército alemán existía un fuerte rechazo a las ideas y organizaciones socialistas de la época, encarnadas en la Segunda Internacional. Tal rechazo se veía acentuado aún más ante el sesgo pacifista e internacionalista que les era inherente a esas ideas. Su actitud contraria a la guerra, estrechamente ligada a la solidaridad internacional entre los pueblos y a su oposición al imperialismo y al colonialismo, conducía a dichas organizaciones a un profundo antagonismo con el Ejército, de cuya utilidad dudaban. Este, por lo mismo, conceptuaba a las organizaciones socialistas como traidoras y enemigas de la patria, como fuerzas profundamente antinacionales. No es menos cierto que esta

posición no era privativa del ejército alemán. Por el contrario, en mayor o menor grado era compartida por sus homólogos europeos.

El ideologismo recepcionado por los militares chilenos

Las concepciones descritas, en mayor o menor medida –y de acuerdo con las realidades nacionales–, terminarían siendo asimiladas por el ejército chileno. Lo primero que sobre el punto habría que señalar es el lugar destacado que comenzó a ocupar el concepto de raza en el pensamiento del Ejército. Como se dijo arriba, el nacionalismo alemán se había distinguido precisamente por el importante papel que otorgara a este elemento. En el caso chileno ello se traducirá en el concepto de «raza militar». La chilena sería una raza tal. Ella sería el producto del cruzamiento de dos etnias guerreras, la española y la araucana. Emilio Körner enfatizó este concepto a través de la tesis del chileno como «soldado de nacimiento».

Los militares, a partir de lo anterior, postularon la existencia de una homogeneidad racial del pueblo chileno, la cual estaría basada en la mezcla de los dos elementos étnicos ya indicados. Dicha homogeneidad constituiría una ventaja para el país, sobre todo considerando que los países vecinos carecerían de ella. Desde tales supuestos, entonces, «las Fuerzas Armadas pasaron a considerarse como la avanzada de una raza militar».¹²

No es menos cierto que estos énfasis en la raza terminaron batiéndose en retirada, sobre todo bajo la posterior influencia estadounidense y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que desacreditó al ideologismo nacionalista, en particular alemán, caracterizado justamente, como hemos dicho, por sus connotaciones racistas.

Otros elementos relevantes de la *imago mundi* de los militares chilenos asumidos durante su proceso de modernización bajo los instructores prusianos fueron el organicismo y el darwinismo social. Desde estas concepciones se apuntaba a explicar la inevitabilidad de las guerras y, por tanto, la importancia de las Fuerzas Armadas.

¹² Patricio Quiroga: «El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas», *Revista Andes*, núm. 1, septiembre de 1984, p. 111.

Lo primero operó a través de una marcada insistencia en reducir las sociedades a organismos regidos por leyes naturales, siendo las guerras una expresión de esas leyes y de los inevitables conflictos darwinianos entre las naciones. Así, por ejemplo, el capitán Fabio Galdámez Lastra, en un artículo aparecido en la revista *Memorial del Ejército de Chile*, de 1909, señalaba sobre el punto: «la guerra no es un hecho social, es una ley natural, es una condición fisiológica de la humanidad».¹³ Y el capitán J. C. Pérez, siempre dentro de la misma concepción, postulaba que la guerra sería la expresión de «una ley natural [...] que participa de las condiciones de todas las leyes naturales, crear y destruir».¹⁴

Dentro de estas concepciones organicistas el Ejército se pasó a autoconcebir como el organismo principal del «organismo social», o, como lo afirmara el general Juan de Dios Guzmán en una conferencia que luego fuera publicada por el *Memorial del Ejército de Chile*, como «el miembro principal del organismo de las sociedades humanas».¹⁵ En este contexto, el Ejército se veía a sí mismo como el núcleo y reserva última de la nación chilena. Si, por otra parte, se tiene en cuenta cierta tendencia a identificar a la nación con la raza –la «raza chilena» en este caso–, resultaba que el Ejército se concebía como «la avanzada de una raza militar y aglutinador de la chilenidad».¹⁶

A partir de tales supuestos se asumía otra de las tesis más caras al pensamiento conservador antiliberal, a saber: la referente a la lucha en contra de las «ideas disolventes» de la nación que penetrarían desde el extranjero. Tal sería en particular el caso del anarquismo, el socialismo y, después, el comunismo. El Ejército, autodefinido como el núcleo principal de la nación, siguiendo en este punto el esquema ideológico del ejército alemán, pasó

¹³ Capitán Fabio Galdámez Lastra: «El ejército y la civilización», *Memorial del Ejército de Chile*, 1909, pp. 104-105, citado por G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 46.

¹⁴ Capitán J. C. Pérez: *Memorial del Ejército de Chile*, julio de 1916, p. 484, citado por Genaro Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 47.

¹⁵ General Juan de Dios Guzmán: *Memorial del Ejército de Chile*, 1911, p. 423, citado por G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 46.

¹⁶ Patricio Quiroga: «El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas», art. cit., p. 113.

entonces a autoconcebirse como la valla última en la contención de las mencionadas ideologías y de sus propósitos revolucionarios.

En ese contexto es que «desde muy al inicio del siglo, el socialismo y el movimiento socialista aparecen en las publicaciones militares como un asunto de referencia central y de la mayor importancia en la definición política de los militares».¹⁷

Así, por ejemplo, en el *Memorial del Ejército de Chile* de enero de 1916, se hacía referencia al anarquismo y al socialismo en los siguientes términos: «Los elementos disolventes, llámense anarquistas, socialistas, etc., generadores todos ellos del antimilitarismo, no existen en Chile en sectas seriamente organizadas. Hay, es cierto, un Partido Socialista, pero su influencia es insignificante. Sin embargo, es preciso recordar que los elementos de disociación crecen aquí y se justifican ya que nuestra tierra es propicia para recibir toda clase de calamidades».¹⁸

Anarquismo y socialismo, como puede verse, aparecen en el citado texto como sectas disolventes de origen extranjero, que constituyen una «calamidad», a cuya recepción, al igual que otras, el país sería propicio. Bajo estos supuestos fue que, al igual que su símil alemán, el prusianizado ejército chileno consideró que le correspondía un rol muy importante en la lucha en contra del socialismo y la revolución social. Incluso más, él se autoconcibió como la última valla que la nación opondría a aquellos.

En tal sentido, siguiendo una vez más al modelo alemán, el ejército chileno pasó a estimar que el servicio militar obligatorio –instaurado en 1900– debía ser una de las vías más eficaces a emplear en esa lucha. De acuerdo con ello, asumió explícitamente que al servicio militar le correspondía una función ideológica y política. Esta, como se señalara en un artículo publicado en enero de 1914 por el *Memorial del Ejército de Chile*, debía consistir en «arrancar poco a poco esas ideas torcidas de nuestro pueblo (las ideas socialistas), debiendo sembrar otras a cambio».¹⁹ Tal fue la misión que se encomendó a lo que se denominó «oficial educador».

¹⁷ G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 44.

¹⁸ Capitán Alberto Muñoz: «El problema de nuestra educación militar», *Memorial del Ejército de Chile*, enero de 1916, p. 68, citado por G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 47.

¹⁹ *Memorial del Ejército de Chile*, enero de 1914, p. 68, citado por G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 53.

Con tales fines, alrededor de 1910 era utilizado al interior de los cuarteles un folleto titulado *Ejército y socialismo*. En realidad, se trataba de una traducción de la revista *Deutsches Offizierblatt*. El capitán Alberto Muñoz, en un artículo aparecido en el segundo semestre de 1913 en el *Memorial del Ejército de Chile*, ponderaba las bondades de dicho texto y asumía su tesis central en el sentido de que al socialismo no se lo podía derrotar con meras medidas policiales al interior de los cuarteles. Se requería, a la inversa, crear un vínculo afectivo y de gratitud entre los conscriptos y los oficiales. En ese marco, señalaba el capitán Muñoz, estos debían llevar a cabo su labor educadora antisocialista y los resultados de esa labor debían trascender los estrechos límites del cuartel. Así, cuando el conscripto finalizara su servicio militar, lo sembrado por esa educación debía perdurar, «aunque la sirena de socialismo u otras ideas perniciosas lleguen hasta él».²⁰

En resumen, el servicio militar obligatorio aparecía como un instrumento de primer orden en la lucha en contra de las «ideas disolventes» y de origen foráneo encarnadas en el anarquismo y el socialismo, concebidas como destructoras de la nación, de la que el Ejército sería la reserva última. Como puede verse, la idea de enemigo interno está plenamente prefigurada en estas concepciones, mucho antes de que aparecieran las Doctrinas de la Seguridad Nacional.

Las referidas preocupaciones del Ejército en torno a la difusión de las ideas socialistas en el país, eventualmente incluso al interior de sus filas mediante los reclutas del servicio militar, se vieron acentuadas luego de la revolución rusa de 1917. Desde entonces, en efecto, el fantasma del sóviet se hizo recurrente entre los mandos militares.

Bajo el signo de las definiciones ideológicas descritas, fue que en el Ejército comenzó a ser abordado otro problema de la mayor significación, a saber, la elaboración de las primeras doctrinas militares sobre la seguridad del país. Sus autores fueron los generales Jorge

²⁰ Capitán Alberto Muñoz: «El problema de nuestra educación militar», *Memorial del Ejército de Chile*, 1913, segundo semestre, p. 785, citado por G. Arriagada: «El pensamiento político de los militares», art. cit., p. 53.

Boonen y Javier Díaz, ambos con estudios en Alemania y, según Vial, verdaderos «cabezas de la germanización del ejército chileno».²¹

En esa elaboración Boonen definió el gasto militar como «la prima de seguro que la nación se pagaba a sí misma» para garantizar su seguridad externa e interna. Cabe subrayar esto último, es decir, que se atribuyera a las Fuerzas Armadas un papel en lo relativo a la seguridad interna del país. El general Javier Díaz, por su parte, compartió el criterio según el cual debía existir una dimensión interna de la acción militar, la que, a su juicio, debía apuntar en contra de los «rebeldes de Estado». Estos, a la larga, se encarnarían en las acciones del movimiento obrero, cuya expresión principal a la fecha fueran las huelgas de la pampa salitrera y otras no menores desarrolladas en Valparaíso, Santiago y Magallanes. Entonces, en medida fundamental, los emergentes actores obreros y anticapitalistas constituirían los «rebeldes de Estado» a los que se refería Díaz. Este, como lo indica Vial, además hizo ver expresamente las potencialidades de transformación social anexas a las ideas socialistas y anarquistas, lo que, por tanto, las convertiría en blancos de la acción de las Fuerzas Armadas concebidas como garantes de la seguridad interna del país.

Conclusiones

A modo de conclusión, y de acuerdo con los antecedentes aportados más arriba, es posible afirmar que los procesos de profesionalización del ejército chileno a manos de instructores prusianos no solo implicaron una capacitación en materias técnicas, sino también supusieron una recepción ideológica por parte de los uniformados locales, la cual tuvo un carácter nacionalista y conservador respaldada por una *imago mundi* organicista. Desde esa ideología el ejército chileno pasó a ver en ciertos sujetos populares e ideas anticapitalistas un enemigo de la nación al que las instituciones armadas debían combatir. Estas concepciones, por lo tanto, con mucha antelación a la recepción de las Doctrinas de la Seguridad Nacional, configuraban el concepto de enemigo interno, cuestión tanto más grave si se constata que tales concepciones –plenamente

importadas, por lo demás– tienen entre los uniformados chilenos un origen más lejano y profundo de lo que pudiera creerse a primera vista, lo cual, en consecuencia, las hace más difíciles de superar. Sobre ese trasfondo, reforzado por la influencia estadounidense, es que cabe comprender las extremas violencias que las Fuerzas Armadas desplegaron a partir del 11 de septiembre, con su respectiva cuota en sangre de un sector del país.

CAPÍTULO 6

Las masacres de La Coruña y Marusía: un fruto de las concepciones conservadoras antiliberales en Chile¹

Las masacres obreras de Marusía y de La Coruña, ambas verificadas en 1925 después de que Arturo Alessandri fuera repuesto en el gobierno por los militares, son muy ilustrativas de la relación existente entre la ideología nacionalista –en este caso de los uniformados– y las extremas violencias desde el Estado. Ambas masacres encarnan similares supuestos: que lo que se estaba reprimiendo mediante la extrema violencia estatal constituía un enemigo al que había que eliminar. En tal sentido, tanto Marusía como La Coruña se distinguen de las masacres verificadas con anterioridad cuando, por medio del Ejército y la Marina, los movimientos obreros –con enorme cuota en sangre– eran reprimidos bajo las órdenes de los gobiernos de la oligarquía. Estas represiones operaban normalmente con los propósitos de reponer los procesos productivos detenidos por las huelgas. Las masacres de Marusía y La Coruña, en cambio, fueron mucho más allá, y se distinguieron de las anteriores al menos por dos factores fundamentales. Primero, que no se realizaron bajo la dominación de la oligarquía ya que esta, a partir del golpe del 23 de enero de 1925, había sido reemplazada en el poder por la mesocracia militar –particularmente del Ejército–,

¹ La descripción de las masacres de Marusía y La Coruña que figura en este capítulo encuentra su primera versión en mi libro *Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo xx en Chile. Los orígenes, 1903-1931*, Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago, 2009, séptima parte, capítulo II, pp. 407-412.

liderada por el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Es cierto que en marzo de 1925 los uniformados repusieron a Arturo Alessandri en el Gobierno, pero solo como un presidente nominal que debía poner en práctica el programa de los militares, quienes, por tanto, seguían con el poder real en sus manos. Tales masacres, en consecuencia, no fueron ordenadas por la oligarquía, como ocurriera antaño.

En segundo lugar, ellas se distinguieron por el hecho de que lejos de realizarse con los fines exclusivos de reponer el proceso productivo paralizado por los movimientos huelguísticos, como ocurriera bajo la dominación de la oligarquía, buscaban eliminar a un enemigo interno. Se trataba de represiones más ideologizadas, si cabe decirlo así, o racionalizadas por el ideologismo nacionalista que existía entre la mesocracia militar. Ese ideologismo permite explicar por qué en las dos masacres mencionadas se procedió a dar muerte a los sobrevivientes y a mostrar una voluntad de exterminio total una vez rendidos los obreros.

A continuación, haremos una breve descripción de ambas masacres a fin de visualizar algunas de las consecuencias prácticas que conllevó el ideologismo nacionalista inducido entre los uniformados locales por los instructores prusianos.

Marusía

La masacre de la Oficina de Marusía se produjo en marzo de 1925. Su punto de partida se remonta a la discusión de un pliego de peticiones entre los trabajadores y la parte patronal. Desde sus inicios la negociación se dio en un ambiente tenso, en razón de que entre los obreros todavía estaba fresco el recuerdo de los sucesos de la masacre de San Gregorio. En ese contexto, a finales de febrero, un administrador inglés apareció muerto en una de las calles de la oficina. Rápidamente se culpó a un trabajador boliviano, quien fue detenido por carabineros con el objeto de ser conducido a Iquique, destino adonde no llegaría. Se dijo que había sido asesinado en la pampa por los funcionarios policiales. Advinieron, entonces, ciertos incidentes violentos en los cuales murió un carabinero y luego su victimario, al parecer un trabajador. A partir de ese momento se hizo claro que las tropas subirían al campamento, el cual se divi-

dió en dos: los trabajadores, por un lado; y los administradores y empleados, por otro.

En ese contexto, los obreros tomaron la decisión de resistir a las tropas que llegarían desde Iquique. Estas arribaron prontamente al mando del coronel Pedro Shultz, y dieron lugar a un enfrentamiento armado, ya que los trabajadores se habían apoderado del polvorín de la oficina.

Lo particular del caso reside en que una vez vencida la resistencia, advino una matanza generalizada por parte de los militares. Los cineastas alemanes Walter Heynowski y Heineman, que investigaron el tema, encontraron a uno de los sobrevivientes, ya anciano. Este les relató que los obreros «cuando ya no había nada que hacer, caminaron hacia la tropa desnudando el pecho. Iban hombres, mujeres y niños, sostuvo el anciano. Los militares los balearon a todos».²

Patricio Manns sostiene que un arquitecto de Iquique, de nombre Patricio Advis, le dio a conocer una colección de fotos en sepia sobre esta masacre. Manns afirma que una de las fotografías mostraba

[...] a centenas de trabajadores de frente a uno de los muros exteriores [de la Oficina]. En primer plano se perciben cuatro ametralladoras. Algunos trabajadores están cayendo contra los muros, otros yacen en el suelo, y otros, aún, se desploman de espaldas con los brazos abiertos. Sobre un montículo, a la derecha de la foto un grupo de mujeres vestidas de negro contemplan el asesinato de sus maridos.³

Antes del desenlace, los obreros heridos «fueron reunidos [por sus compañeros] en la Escuela [de la Oficina], sobre cuya puerta se pintó una gran cruz roja, para señalar que se trataba de un hospital de campaña. [Pero] los militares la incendiaron de inmediato exterminándolos prácticamente a todos».⁴ Cuando los sucesos llegaron a su fin, «la Oficina fue cañoneada y luego incendiada, para que nunca más volviera a funcionar».⁵

² Patricio Manns: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, Ed. Sudamericana, Santiago, 1999, p. 139.

³ *Ibidem*, p. 138.

⁴ *Ídem*.

⁵ *Ibidem*, p. 139.

Una visión un tanto superficial de los acontecimientos podría llevar a la conclusión de que esta masacre evidencia los rasgos propios de los que ocurrieron bajo la dominación de la oligarquía. En efecto, se verifica una negociación salarial que deviene en desórdenes que los militares conjurarían mediante la fuerza armada. Sin embargo, si nos atenemos a los testimonios citados, desde la entrada se perciben elementos nuevos. Al respecto sobresale el hecho de que, más que restituir el orden alterado, la violencia castrense parece encaminarse a destruir a un enemigo. Los baleos de hombres rendidos que han dejado de resistir y las masivas ejecuciones posteriores lo evidencian.

En cambio, terminada la represión, en las masacres producidas bajo la dominación oligárquica no se continuaba rematando a los sobrevivientes. En este punto se comprueba que la violencia estatal había adquirido en Marusía no solo una mayor saña, sino también un componente ideológico más alto. Los uniformados parecen evidenciar una convicción en orden a que estaban enfrentando a un mal por antonomasia. Eso sería lo que los llevaba incluso a violar las normas de la guerra, las cuales, como es sabido, prohíben ejecutar a hombres rendidos.

Quizás el ideologismo nacionalista de los militares afluía ahora con más fuerza debido a que la presencia del movimiento obrero en el país era mayor, y ante el hecho de que la amenaza del sóviet, derivada del triunfo bolchevique de 1917, lo robustecía. A ello quizás quepa agregar el mayor peso que las Fuerzas Armadas habían adquirido en el poder, cuestión que les permitía expresar con más libertad su verdadera conciencia política. La masacre de La Coruña, sucedida tan solo dos meses después, evidenció el mismo patrón de conducta por parte de los uniformados que el exhibido en Marusía.

La Coruña

Los sucesos culminados en la masacre de La Coruña se desarrollaron entre mayo y junio de 1925. Su punto de partida fue una serie de huelgas llevadas a cabo a lo largo de la pampa centradas en ciertas reivindicaciones gremiales, entre las que figuraban la abolición de las «fichas-salario» y el establecimiento de la jornada

de ocho horas, reivindicaciones que eran comunes al conjunto de los trabajadores salitreros.

Entre las clases dirigentes, asustadas por el ascenso de los sujetos obreros y mesocráticos –y permeadas por el ideologismo nacionalista–, esos sucesos fueron decodificados en términos de la inminencia de la revolución social financiada por el disolvente «oro peruano». Como dice Gonzalo Vial, por entonces la clase alta consideraba «que el “oro peruano”, buscando impedir el plebiscito y recuperar Tacna y Arica, impulsaba y financiaba los desórdenes revolucionarios».⁶

Al parecer, el ministro de Guerra Carlos Ibáñez planteaba las cosas en términos análogos. Su diagnóstico sobre la situación de la pampa supuso que allí estaba en preparación la revolución soviética. Incluso más, llegó a considerar que ella estaba programada para el 1ro. de junio.

Bajo esos supuestos, y en el marco de las agitaciones laborales mencionadas, el Gobierno procedió a declarar el Estado de sitio en Tarapacá y Antofagasta. A su vez, Ibáñez envió un telegrama al general Florentino de la Guarda, máxima autoridad militar de Tarapacá, para alertarlo de la situación. En él le señalaba:

[...] se tiene conocimiento que para el 1 de junio, prepárase movimiento subversivo, [de] carácter comunista. El gobierno ordena que en caso de producirse este movimiento o confirmarse su preparación, se proceda con la mayor energía a fin de mantener [el] orden público y [la] libertad de trabajo [...] es indispensable, desde el primer momento, apresar [a los] cabecillas y retenerlos incomunicados hasta recibir orden del Ministerio, ajustando US sus actuaciones al estado de sitio, y por consiguiente asumir ya el mando de todas las fuerzas armadas de la provincia y censurar la publicidad verbal o escrita si fuese necesario.⁷

Llevando a la práctica las órdenes mencionadas, el general De la Guarda procedió a implementar fuertes medidas en contra del

⁶ Gonzalo Vial: *Historia de Chile (1891-1973)*, t. III, Arturo Alessandri y los golpes militares, Ed. Zig-Zag, Santiago, 2001, p. 246.

⁷ Citado por Gonzalo Vial en *ibídem*, pp. 246-247.

movimiento laboral. Desde ese momento clausuró su prensa –que apoyaba activamente las reivindicaciones arriba descritas– y confinó en el crucero *O'Higgins* a gran cantidad de sus dirigentes. La respuesta no se hizo esperar: a comienzos de junio estalló la huelga en gran parte de la pampa dando lugar a diversos incidentes, incluso violentos. En tales circunstancias algunas oficinas fueron tomadas por los obreros. Ante ello el general De la Guarda despachó sus tropas al lugar de los hechos. «Sumaban dos regimientos completos: el "Rancagua" y el "Granaderos"; y un batallón de infantes, del regimiento "Carampangue"; la batería artillera del "General Salvo", y marineros con ametralladoras de la Armada».⁸

Los militares, dirigidos por el coronel Acasio Rodríguez, procedieron entonces a atacar a los trabajadores. Comenzaron mediante un bombardeo de la artillería en contra de las oficinas de La Coruña, Pontevedra y Barreñechea, según consta en informe militar. Luego siguió la investida de la infantería. Los sucesos tuvieron su centro en la primera de las oficinas nombradas.

Carlos Vicuña Fuentes, basándose en relatos de testigos, hizo la siguiente descripción de los acontecimientos de La Coruña.

El primer bombardeo no hizo muchas víctimas. Los obreros, inermes como estaban y sin propósitos revolucionarios, en cuanto vieron las tropas se rindieron sin proferir palabra. Pero los tenientes y capitanes, por saña y placer, fusilaron a mansalva a hombres, mujeres y niños, en grupos, al montón, y después aisladamente a todo aquél que los pulperos señalaban como subversivo o rezongón. No dieron cuartel, no recogieron heridos, no perdonaron la vida a nadie, el que huía por las calicheras era alcanzado por las balas. A muchos infelices los hacían cavar sus propias fosas y los fusilaban enseguida, sin piedad alguna. A uno un teniente le voló por placer, la nariz de un pistoletazo. A otro le aconsejaron huir y luego se dedicaron al deporte dantesco de dispararle a la distancia.⁹

⁸ *Ibíd.*, p. 247.

⁹ Carlos Vicuña Fuentes: *La tiranía en Chile*, Ed. LOM, Santiago, 2002, pp. 321-322.

Patricio Manns sostiene que el máximo dirigente del movimiento, el obrero, militante del Partido Demócrata, Carlos Garrido, fue fusilado, mientras que «el sindicalista Ruperto Barahona, del Consejo Nacional núm. 6, fue amarrado a un poste telefónico y atravesado con bayonetas».¹⁰

Vicuña relata que: «mujeres y niños se colgaban de los pantalones de los oficiales para implorarles que no matasen a sus maridos o a sus padres. Nada encontró piedad en esos tigres. Adquirieron la ebriedad de matar». Y más adelante añade: «se cuenta el caso espeluznante de un carro de ferrocarril lleno de hombres, despachado desde la pampa a la ciudad, que no llegó a su destino, y hasta hoy nada se sabe de la suerte de los infelices que iban en él».¹¹

Luego de los sucesos mencionados –en el contexto del estado de sitio y la ocupación militar de la pampa–, siguió una fuerte represión dirigida a los sobrevivientes considerados como revoltosos, muchas veces objeto de delaciones. Algunos optaron por huir y esconderse en los piques de las minas abandonadas. Sin embargo, las tropas les seguirían el rastro. Según Vicuña:

Como no podían permanecer allí indefinidamente pues debían procurarse víveres y agua, los militares los acechaban durante largas horas, parapetados tras las dunas y montículos, y cuando veían salir a alguno agazapado por entre las costras de caliche, le disparaban a distancia y los mataban en plena carrera, como quien dice al vuelo. El hombre caía como una paloma herida, y los militares inventaron para designar este deporte macabro el verbo «palomear».¹²

Elías Lafferte, en su autobiografía, coincide con Vicuña en la descripción de estas prácticas de «palomeo». Gonzalo Vial también,¹³ mientras que Patricio Manns señala que su creador fue

¹⁰ Patricio Manns: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, ed. cit., p. 140.

¹¹ Carlos Vicuña: *La tiranía en Chile*, ed. cit., p. 322.

¹² *Ibídem*, p. 323.

¹³ Véase Gonzalo Vial: *Historia de Chile*, ed. cit., vol. III, p. 248.

el comandante Acasio Rodríguez, que las bautizó con el nombre de «palomeo de rotos».¹⁴

Concluidos estos acontecimientos –que a decir de Vicuña dejaron a infinidad «de niños pequeños [vagando] por la Pampa, en pleno desamparo, sin padre ni madre»–,¹⁵ siguieron otros centrados en Iquique, que consistieron en la aplicación de torturas, nuevos fusilamientos y «fondeamiento» de prisioneros en el mar.

Vicuña sostiene que los militares «arrearon a miles» de obreros en dirección de esa ciudad, y

[...] encerraron a muchos a bordo del *O'Higgins* y en el fatídico Velódromo que queda hacia el lado de Cavancha. Todos fueron sometidos a inicuas torturas. Los del *O'Higgins* eran amenazados cada día con que serían fondeados. Una carta anónima que recibí en Iquique fechada el 14 de agosto de 1925, me cuenta entre otros horribles pormenores que a bordo del *O'Higgins* falleció de un ataque el teniente Lizama, a causa de la impresión que le causó la orden de fondear a un grupo de obreros, que arrodillados, llorando, sobre la cubierta le pedían piedad.¹⁶

Y continúa el relato:

[...] de las salidas nocturnas del *O'Higgins*, mar afuera, a fondear subversivos contaban en Iquique cosas espeluznantes. Me resisto a creer esas infamias pero sí es cierto y me consta que los desgraciados prisioneros del Velódromo fueron sumariados militarmente por el indigno capitán Arturo Picón, incomunicados y torturados. Muchos de ellos, sesenta días después de los sucesos, aún no habían sido interrogados por el fiscal.¹⁷

Patricio Manns coincide sobre las torturas practicadas en el Velódromo de Iquique, señalando que allí las sufrieron «más de

¹⁴ Patricio Manns: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, ed. cit., p. 140.

¹⁵ Carlos Vicuña: *La tiranía en Chile*, ed. cit., p. 322.

¹⁶ Ídem.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 322-323.

quinientos presos».¹⁸ Por otra parte, Vicuña relata: «la gente del pueblo me aseguraba, en agosto, que del Velódromo, por orden de Picón, todas las noches sacaban prisioneros hacia el desierto y eran fusilados en la arena solitaria. Hablé en agosto de 1925 con algunos de los que habían estado ahí recluidos y guardaban un sello de espanto que movía a piedad».¹⁹

Posteriormente, a muchos de esos detenidos se les relegó a la Isla de Más Afuera, Juan Fernández, Melinka y Tierra del Fuego, procedimiento que luego se generalizaría bajo la dictadura de Ibáñez. Todo sin juicio. Gonzalo Vial sostiene que no «existían cargos ni sumario» en contra de tales relegados. Y agrega: «había sido suficiente para aprehenderlos, que los motejasen de “agitadores” [...] los dueños o administradores de oficinas».²⁰

El mismo Gonzalo Vial se pregunta por el saldo final de víctimas. «Imposible saberlo», se responde. Y agrega: «la prensa popular habló de 2 000; los informes diplomáticos de Gran Bretaña, de 600 a 800».²¹ Por su parte, Vicuña sostiene que «todas las voces hacían subir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos».²² Mientras que en el informe presentado por la delegación de Iquique al Congreso del Partido Comunista, celebrado en 1925, se afirmó que el general Florentino de la Guarda «emprendió en la pampa salitrera una campaña de fusilamientos y matanzas colectivas en las que cayeron los dirigentes que más se habían distinguido en los sindicatos legales constituidos en conformidad a la ley respectiva, dejando la Pampa transformada en un vasto y macabro cementerio».²³

A modo de conclusión, es posible constatar que existieron ciertas coincidencias fundamentales entre la matanza de La Coruña y la de Marusía. Al respecto, en primer lugar cabe destacar el hecho de que los obreros en uno y otro caso fueron vistos por los uniformados como verdaderos enemigos a los que había que

¹⁸ Patricio Manns: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, ed. cit., p. 140.

¹⁹ Carlos Vicuña: *La tiranía en Chile*, ed. cit., p. 323.

²⁰ Gonzalo Vial: *Historia de Chile*, ed. cit., vol. III, pp. 248-249.

²¹ Ibídem, p. 248.

²² Carlos Vicuña: *La tiranía en Chile*, ed. cit., p. 322.

²³ Citado por Hernán Ramírez Necochea: *Origen y formación del Partido Comunista de Chile*, Ed. Progreso, Moscú, 1984, p. 206.

aniquilar. De allí que las tropas actuaran con más saña que en un conflicto externo, no respetando incluso las reglas de la guerra.

En segundo término, en particular en la masacre de La Coruña, el enemigo a destruir –esto es, los obreros en huelga– aparece vinculado a entidades exteriores: la revolución soviética y el oro peruano, que son precisamente las amenazas construidas por la ideología. En este sentido –y en tercer lugar– se puede afirmar que en ambos casos se está frente a una violencia muy ideologizada que se basaba en la lógica de amigo/enemigo propia del ideologismo nacionalista que profesaba el Ejército.

Por último, esa violencia, en el caso de La Coruña, no terminó limitándose a los disparos en contra de la masa laboral, sino que también se materializó en formas extremas, como lo fueron las torturas, los fusilamientos y los fondeamientos en el mar. En cuanto a este último proceder, cabe señalar que posteriormente le será atribuido con insistencia a la dictadura de Ibáñez.

Como se ve, los crímenes masivos practicados por la dictadura militar luego del 11 de septiembre de 1973, tenían antecedentes que registran una notable similitud tanto por la forma como por el fondo, lo cual, ciertamente, no puede ser casual.

CAPÍTULO 7

Notas sobre el pensamiento antidemocrático civil en Chile: La derecha nacionalista y corporativista hasta 1958

El pensamiento antidemocrático requerido por las extremas violencias estatales tuvo en Chile su expresión no solo en el mundo militar, sino también en el civil, donde adquirió su propia dinámica, y alcanzó pronto presencia en el plano de la política práctica.

Como viéramos en capítulos anteriores, ese pensamiento, con su dualidad de bien absoluto y mal absoluto, tuvo, sin embargo, sus precursores fuera de la política contingente misma. En efecto, como lo hemos señalado en otro lugar, encontró su punto de partida en la historiografía. Fueron los historiadores conservadores clásicos –Alberto Edwards y Francisco Encina, y mucho más tarde Jaime Eyzaguirre– quienes asumieron las concepciones conservadoras antiliberales europeas nacionalistas y corporativistas en su versión spengleriana e hispanista respectivamente, las que veían en la democracia liberal un antivalor y un factor de decadencia y disolución nacional. Bajo estos supuestos, dichos historiadores nacionales elaboraron una interpretación de la historia de Chile estructurada en torno a la oposición entre el orden y la anarquía, el apogeo y la decadencia, las últimas conducentes a la disolución nacional, cuyos agentes serían los liberales (y para los epígonos, los marxistas).

A juicio de los mencionados autores, el liberalismo conducía a la disolución nacional en la medida en que permitía el ascenso de las clases subalternas, las que cuestionarían el gobierno de las elites tradicionales. Frente a tales supuestos, estos historiadores 97

propugnaron un retorno a los esquemas autoritarios de la primera mitad del siglo xix, a los que idealizaron a propósito de la figura de Diego Portales.

En una fecha tan temprana como 1903, Alberto Edwards –creador del mito portaliano–, en su libro *Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos*, en referencia a los liberales, sostuvo: «ellos debilitaron el principio de autoridad; ellos dividieron por dogmatismos de dudosa utilidad a las clases responsables del país, ellos fueron los padres del parlamentarismo y los abuelos legítimos de la anarquía».¹ Frente a este cuadro, Edwards postuló la necesidad de retornar a un régimen de orden en manos de las «clases responsables del país» (es decir, de la oligarquía), único medio que permitiría revertir los procesos de decadencia y disolución en curso resultantes del liberalismo. Incluso más, en 1929 Edwards señaló la necesidad de instaurar una dictadura. Eso es lo que expresamente sostuvo en su obra más importante, *La fronda aristocrática en Chile*. En ella, en efecto, manifestó su esperanza en el advenimiento de una «dictadura de espada»,² o sea, militar.

Francisco Encina, por su parte, en su libro *Portales*, que fuera publicado en 1934, culminó la construcción del mito portaliano y, siempre sobre el supuesto de la existencia de un mal encarnado en los liberales, mal que conduciría a la disolución nacional, hizo una apología de la represión estatal. Al respecto planteó que uno de los elementos esenciales del pensamiento de Portales radicaba precisamente en revalorizar la «sanción» –esto es, la coacción del Estado–, cuya ausencia habría sido uno de los factores que abrieran paso a la anarquía. La sanción, «severa y justa» –dice Encina–, sería el irrenunciable instrumento requerido por la autoridad a los efectos de impedir que afloren los particularismos. A través de la coacción estatal se garantizaría el orden, la cohesión y la realización de los intereses nacionales.

¹ Alberto Edwards: «Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos», en Cristian Gazmuri (ed.): *El Chile del centenario, los ensayistas de la crisis*, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2001, p. 52.

² Alberto Edwards: *La fronda aristocrática en Chile*, Ed. Universitaria, Santiago, 98 1982, p. 297.

Por otra parte, esta temática en el pensamiento de Encina se vincula a la dualidad entre patriotas y antipatriotas, que es tan propia del ideologismo autoritario y nacionalista. A juicio de este autor, el acatamiento al orden autoritario implantado por las elites sería sinónimo de actitud patriótica, mientras que su alteración representaría un atentado en contra de la patria. «El orden emana del patriotismo. El que atenta contra él, atenta contra la prosperidad y contra el porvenir de su patria». De allí que «el revolucionario sea un mal ciudadano que *se coloca en el mismo plano moral que el enemigo extranjero*; más aún, *en Portales se confunde con el traidor*».³

Jaime Eyzaguirre, a su vez, consecuente con sus concepciones neotradicionalistas y corporativistas, que a partir de los años treinta defendiera a través de la revista *Estudios*, sometió a crítica al régimen liberal a propósito de su sistema de partidos. Eyzaguirre consideraba a estos como un producto «foráneo», de raíz principalmente francesa, inherente a la sociedad liberal individualista. A su juicio, la política partidista destruía, corrompía e impedía realizar el bien común, a la par que dividía a la comunidad nacional.⁴ De tal modo, desde una óptica autoritaria, este autor asumió las críticas al régimen demoliberal, las que eran propias tanto del tradicionalismo como del nacionalismo. Una de los tópicos principales que, sin embargo, Eyzaguirre aportó en este quehacer fue el referente a las «ideas foráneas» (liberalismo, socialismo, etc.), las que se infiltrarían en el país, gracias precisamente al régimen demoliberal; ideas a las que reputó como disolventes de la nación. Ellas, cuestionando la identidad hispánica del país, se infiltrarían en él mediante la acción de determinados actores políticos, sociales y culturales –los liberales, los socialistas, los comunistas, etc.– a los que cabría enfrentar a través de la instauración de un régimen de autoridad (que, sin embargo, respetaría la autonomía de los cuerpos intermedios) y superaría el régimen demoliberal que habría abierto las puertas de la nación a las «ideas foráneas» generadoras de la disolución nacional.

³ Francisco Encina: *Portales*, Ed. Nascimento, Santiago, 1964, p. 211. Las cursivas son mías.

⁴ Cristian Gazmuri y otros: *Perspectiva de Jaime Eyzaguirre*, Ed. Aconcagua, Santiago, 1977, p. 65.

De este modo, los mencionados autores, cada uno a su manera, desde comienzos del siglo xx en adelante, fueron conformando un sistema ideológico basado en las concepciones del nacionalismo y del corporativismo europeo; sistema que se estructuraba en torno a la dualidad entre la nación y ciertas entidades que, alojadas en su seno, apuntarían a disolverla, frente a lo cual la nación debía reaccionar. Este ideologismo, que tiñó la cultura intelectual de los sectores más conservadores del país, pronto pasó a la política, encarnándose durante los años treinta y siguientes en organizaciones de extrema derecha –básicamente marginales–, las que le dieron su particular desarrollo. Luego, cuando durante los años sesenta los intereses de la oligarquía dominante empezaron a verse amenazados –desde ya con la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva–, ese ideologismo, dejando atrás su anterior marginalidad, en 1966, con la conformación del Partido Nacional (PN), pasará a ser profesado por la derecha en su conjunto. Esta, a su vez, mediante sus cuantiosos recursos mediáticos, intentará difundirlo entre las clases medias y la pequeña burguesía, logrando en parte generar entre estas miedos que, acentuados por la campaña del terror impulsada en ese entonces por la CIA, a larga buscarán ser superados mediante la erradicación, incluso física, de aquellos que la ideología señalaba como su causa. Es cierto que ese proceso recién culminará durante el gobierno de Salvador Allende, al conformarse las bases ideológicas y culturales no solo del golpe, sino también de los crímenes masivos desde el Estado que, con considerable apoyo civil, entonces advendrán.

A partir de los planteamientos señalados en el presente capítulo procederemos a visualizar cómo el pensamiento antidemocrático chileno desarrollado por los autores arriba mencionados fue siendo asumido, entre 1932 y 1958, por organizaciones políticas de extrema derecha nacionalista y corporativista, las que, en todo caso, como dijimos, permanecieron dentro de cierta marginalidad.

La derecha nacionalista

La derecha antiliberal, o extrema derecha, fuera en sus versiones nacionalista o corporativista, posee en el plano propiamente político una larga trayectoria en el país. En efecto, ya marcaba presencia a

comienzos del siglo xx, al menos en lo que se refiere a sus tendencias nacionalistas. A la fecha entre sus principales ideólogos figuraban Nicolás Palacios, proveniente de la pequeña burguesía, y Alberto Edwards, de las filas de la oligarquía.⁵ Durante los años siguientes, sobre todo durante los treinta, se crearon organizaciones políticas caracterizadas por profesar estas concepciones, a las cuales nos referiremos a continuación.⁶

El Movimiento Nacional Socialista⁷

El Movimiento Nacional Socialista (MNS) de Jorge González von Marées y Carlos Keller fue fundado en 1932. Dicho movimiento, haciendo gala de formas de acción agresivas signadas por la violencia en contra de las manifestaciones obreras y de la izquierda en general, exhibió una fuerte ideología decisionista que apoyaba su visión de país en las elaboraciones de los historiadores nacionalistas clásicos, sobre todo en Edwards y Encina.

De tales historiadores, este movimiento tomó la consabida referencia al papel de Portales en el apogeo del país, y la correlativa crítica al liberalismo, cuya emergencia habría dado lugar a la decadencia, esquema al cual González von Marées y Carlos Keller introdujeron ciertas variantes. En este sentido ratificaron que destruida la autoridad de cuño portaliano a través de la guerra civil de 1891, el poder se trasladó al Congreso, lo que dio lugar al régimen parlamentario. Producto de ello –sostuvieron–, el sistema político chileno fue corrompido «por la infiltración cada vez más audaz del dinero en sus capas dirigentes y por el veneno del marxismo

⁵ Como textos fundacionales, véase, Alberto Edwards: *Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos*, cuya primera edición es de 1903; y Nicolás Palacios: *Raza chilena*, editado por primera vez en Valparaíso en 1904.

⁶ Las manifestaciones de esta ideología que en el plano propiamente político se dieran entre comienzos del siglo xx y 1931 han sido objeto de estudio en mi libro *Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo xx en Chile* (Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago, 2009), al cual remito. De allí que en el presente texto para estudiar el mismo fenómeno, parta desde 1932.

⁷ El tema lo desarrollo con mayor profundidad en «Identidad, ideología y política en el Movimiento Nacional Socialista de Chile, 1932-1938», *Izquierdas*, núm. 25, octubre de 2015, pp. 76-119, editada por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago.

internacional en sus capas proletarias»⁸ por lo que se avanzaría hacia un verdadero proceso de disolución nacional.

Frente a este diagnóstico, que mostraba al país al borde de su disolución final por obra de actores bien precisos –la plutocracia y el marxismo–, el Movimiento Nacional Socialista mostró una radical voluntad refundacional. Declaró que trabajaría «bravamente y hombro contra hombro, por la reconstrucción de la Patria»,⁹ tarea que visualizaba en una verdadera perspectiva salvífica. «Nos sentimos con la misión de salvar a Chile», sostuvo sobre el punto el líder de este movimiento.¹⁰

Muy relevante para nuestros efectos resulta la cuestión de los medios que el Movimiento Nacional Socialista dijo estar dispuesto a utilizar en la señalada labor salvífica. Tales medios consistían en el uso abierto de la violencia en contra de los que consideraba eran los «enemigos de Chile», quienes estarían llevando al país a la decadencia y la disolución. Al respecto, el movimiento planteó su voluntad de aniquilar a la «reacción plutocrática» y al «comunismo», sin cuya destrucción, incluso física, el país no podría rehacerse. «El capitalismo parasitario, que oprime y asfixia nuestras fuerzas productoras –agregó–, y el comunismo moscovita, aliado de aquél, que pretende anarquizar y derribar toda la estructura social y económica de la República, serán aniquiladas por el nacismo [sic]. Sobre sus ruinas, levantaremos el nuevo edificio de nuestra nacionalidad [...]».¹¹ El mismo texto del movimiento, reconociendo el carácter violento que tendría dicho aniquilamiento, agregaba: «ni el comunismo ni la anarquía política se vencen con discursos académicos. Para aniquilar[los] [...] es necesario recurrir a la lucha

⁸ Jorge González von Marées: *Pueblo y estado*, Imprenta y Litografía Antares, Santiago de Chile, 1936, p. 5.

⁹ *El Movimiento Nacional Socialista de Chile. Declaraciones fundamentales. Plan de Acción. Organización. Programa*, Imprenta Tracción, Santiago, 1932, p. 21.

¹⁰ Jorge González von Marées: *La mentira democrática*. Versión taquigráfica del discurso pronunciado por Jorge González von Marées con motivo de la tercera concentración nacional del Movimiento Nacional Socialista, Imprenta La Ilustración, Santiago, s. a., p. 10.

¹¹ *El Movimiento Nacional Socialista de Chile. Declaraciones fundamentales. Plan de Acción. Organización. Programa*, ed. cit., p. 14.

franca y abierta, a la lucha sin cuartel, tanto en el campo de las ideas como en el de los hechos».¹²

González von Marées, en otro texto, se preguntaba: «¿qué significan unos cuantos cadáveres y algunos centenares de heridos, ante el espectáculo de una raza entera llevada al borde de la degeneración y de la tumba?».¹³ Al respecto, el Movimiento Nacional Socialista reconocía que «el sentimentalismo humanitario» «ocupaba el último lugar en [sus] afecciones».¹⁴ De tal modo, esta entidad profesaba con toda claridad aquella cultura e ideología que es la precondition de los crímenes masivos desde el Estado.

En 1938 el Movimiento entró en una profunda crisis luego del fallido *putsch* golpista que llevara a cabo durante ese año, cuya culminación fuera la matanza del Seguro Obrero que en contra de sus militantes perpetrara Carabineros.

Hernán Ramírez Necochea sostiene que, pese al limitado arraigo social y electoral alcanzado por el Movimiento Nacional Socialista, su importancia radica en que «formó varias generaciones de fascistas esenciales que se diseminaron por distintas agrupaciones políticas de derecha divulgando la ideología a la que se habían consagrado [...] estimulando posiciones ultraderechistas».¹⁵

La Milicia Republicana

La Milicia Republicana –fundada en 1932 bajo el liderazgo de Eulogio Sánchez– fue otra entidad de carácter nacionalista en la cual cabe detenerse de forma sucinta.¹⁶ Se trataba de una organización estructurada militarmente y fuertemente armada que la oligarquía y el Partido Radical pretendieron utilizar para descabezar

¹² *Ibíd.*, p. 17.

¹³ Jorge González von Marées: *La mentira democrática*, ed. cit., p. 9.

¹⁴ *El Movimiento Nacional Socialista de Chile. Declaraciones fundamentales. Plan de Acción. Organización. Programa*, ed. cit., p. 25.

¹⁵ Hernán Ramírez Necochea: «El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970», art. cit., p. 20.

¹⁶ Un texto relevante sobre este tema es el de Verónica Valdivia: *Las Milicias Republicanas. Los civiles en armas. 1932-1936*, DIBAN y Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 1992. También Carlos Maldonado Prieto: *La Milicia Republicana: historia de un ejército civil en Chile, 1932-1936*, Flacso, Santiago, 1988.

al Ejército y cerrar el ciclo golpista que los uniformados iniciaran en 1924, mientras que otro de los sectores de la Milicia, de extracción preferentemente pequeñoburguesa, sin perjuicio de lo anterior, concebían a la entidad como una fuerza que reorganizaría al país desde una óptica nacionalista.

Felipe Portales, en su libro *Los mitos de la democracia chilena*, sostiene que la Milicia Republicana tenía como subyacente orientación principal prevenir la «revolución socialista»,¹⁷ mientras que Carlos Maldonado postula que la mayoría de sus miembros veía en ella «un grupo de combate contra el comunismo y una reedición de las guardias cívicas de 1931, a semejanza de los Freikorps alemanes, o sea, una alianza cívico-militar contra revolucionaria».¹⁸

Desde el punto de vista ideológico, sobre todo el sector pequeñoburgués de la Milicia –que no provenía de ningún partido y que había apoyado la dictadura de Ibáñez y luego se había desilusionado de ella–, se caracterizaba por un ideologismo nacionalista y refundacional, basado en la dialéctica de apogeo y decadencia. Se trataba, claro está, de la concepción cíclica de la historia, de cuño spengleriano, pero tomada de los textos de Alberto Edwards, *Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos* y, sobre todo, de *La fronda aristocrática en Chile*.

A juicio de este sector, la superación de la fase decadente del ciclo histórico que reconduciría al país a su fase de apogeo, no operaría en Chile de manera espontánea. Muy por el contrario, dependería de la existencia de un grupo de hombres enérgicos, de fuerte voluntad y elevada conformación moral, capaces de tomar conscientemente la decisión salvadora. Ese grupo se encarnaría en la Milicia Republicana, que a los efectos debería estar dispuesta a utilizar las armas, que poseía en abundancia.

En un artículo publicado en el *Boletín de la Milicia Republicana*, uno de los dirigentes e ideólogos de la entidad, Jorge de la Cuadra Poisson, argumentó el punto en los siguientes términos: «cuando un país no encuentra un camino que sea la digna continuación

¹⁷ Felipe Portales: *Los mitos de la democracia chilena, volumen II. Desde 1925 a 1938*, Editorial Catalonia, Santiago, 2010, p. 231.

¹⁸ Carlos Maldonado: *La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile, 1932-1936*, Servicio Universitario Mundial, Comité Nacional, Santiago, 1988, p. 75.

de su historia, no sigue cualquiera, sino que se abre uno». «Esto equivale a decir que es necesario coger las armas, que es imperioso batirse antes que seguir cayendo».¹⁹

Desde esta óptica decisionista –tan propia de la extrema derecha–, De la Cuadra, en el artículo señalado, sometió a crítica a la ideología que aceptaba el compromiso con los supuestos forjadores de la decadencia. «Los pueblos no pueden vivir eternamente de componendas y transacciones», sostuvo, en efecto. «Hay problemas que exigen resolverse con las armas en la mano; y a éstos hay que darles la solución adecuada y no otra».²⁰ En resumen, un decisionismo schmittiano funcional a la erradicación de los supuestos «enemigos de la patria», a través de las armas.

La Milicia Republicana se disolvió en julio de 1936. A los pocos meses, Eulogio Sánchez, su fundador, creó otra organización a la que denominó Acción Nacional. Esta, rechazando a los partidos políticos, al liberalismo y al comunismo, se definió como corporativista, al tiempo que asumió del todo el mito portaliano con su correspondiente tesis sobre la República autoritaria. Con esa lógica, se propuso crear una «nueva República» basada en el principio de autoridad. A los pocos meses de fundada, alarmada por la conformación del Frente Popular, Acción Nacional se unió a otra organización conservadora antiliberal, la Unión Republicana, dando lugar a Acción Republicana, la cual vio en el Frente Popular un instrumento de Moscú para controlar el país, contra lo que se propuso luchar, incluso utilizando las armas.

Evidentemente, la tesis que atribuía al Frente Popular de ser un mero instrumento de Moscú, cuyo objetivo consistiría en posesionarse del país en beneficio de aquel, no era más que la adecuación a las nuevas circunstancias de los clásicos planteamientos de Edwards y Encina referentes a la disolución nacional por obra de un factor interno que había que excluir.

¹⁹ Jorge de la Cuadra Poisson: «A los compañeros de la Milicia Republicana», *Boletín de la Milicia Republicana*, noviembre de 1932, p. 20.

²⁰ Ídem.

Movimientos nacionalistas entre 1938 y 1945: Partido Nacional Fascista, Partido Popular Socialista, Frente Nacional Chileno, Movimiento Nacionalista Chileno y Unión Nacionalista Chilena

Luego del fallido *putsch* del 5 de septiembre de 1938 que fuera impulsado por el Movimientoo Nacional Socialista, y después de la asunción del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, los movimientos nacionalistas civiles experimentaron significativos procesos de fragmentación, reorganización y fusión, y debieron asumir los cambiantes desafíos que se les presentaban. Estos provenían tanto de la nueva situación nacional, consistente en el ascenso de un gobierno de centro izquierda, como del cuadro internacional, el que pronto se hallará signado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y las presiones estadounidenses orientadas a que América Latina se alineara con el bando aliado en contra del bloque nazi-fascista.

Fue en los umbrales de este periodo que el Movimiento Nacional Socialista, como efecto del fallido *putsch* del 5 de septiembre de 1938, entró en una profunda crisis de la cual no se recuperaría. La entidad terminó entonces escindiéndose y dio lugar, por una parte, al Partido Nacional Fascista, de Raúl Olivares; y, por la otra, al Partido Popular Socialista, de Jorge González von Marées; organizaciones que, en todo caso, fueron marginales dentro de la política chilena y a las cuales se integraron diversas vertientes nacionalistas. Pronto se disolverían confluyendo sus miembros en otras orgánicas de análoga ideología.

En forma casi paralela los sectores provenientes de la Milicia Republicana, en acelerado proceso de fragmentación, se fueron incorporando a distintas orgánicas nacionalistas más o menos efímeras que se fueron constituyendo, como fuera la Legión Cívica, el ya nombrado Partido Nacional Fascista, el Frente Nacional Chileno y, más adelante, la Acción Chilena Anticomunista.

El Frente Nacional Chileno (FNCh) se fundó a fines de 1938, precisamente por exmiembros de la Milicia Republicana. Su líder fue Ernesto Prieto Trucco. Desde sus posiciones antiliberales y anticomunistas, se opuso al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, al que acusó de ser portador de la penetración comunista en el país.

Por otra parte, en febrero de 1940, luego del fallido golpe del general Ariosto Herrera, y reivindicando los ideales que lo presidieran, se fundó el Movimiento Nacionalista Chileno (MNCh), cuyo dirigente máximo fue Guillermo Izquierdo. Como otros movimientos análogos de la época, este profesó una mezcla de concepción organicista de la sociedad, corporativismo y apología de un gobierno fuerte en manos de una elite de selección encabezada por una personalidad providencial. Al igual como sucediera con otros movimientos nacionalistas de la época, el Frente Nacional Chileno vio en el triunfo del Frente Popular un hito en la penetración soviética en Chile. En ese marco se conceptuó a la democracia liberal y al sistema de partidos como funcionales a esa penetración y, adicionalmente, en razón de la cultura materialista que les sería inherente, como un factor de pérdida del sentimiento nacional. El programa de la organización revelaba claramente su tendencia fascista. Su texto decía: «¡Los chilenos al servicio de Chile! ¡Vivir para Chile! ¡Luchar y morir por Chile! ¡Contra el comunismo! ¡Contra el judaísmo! ¡Por un orden nuevo! ¡Patria, Familia, Justicia y Bienestar, dentro de una Nación con Jerarquía y Disciplina! ¡Chile! ¡Uno e indivisible! ¡Chile! ¡Grande y eterno! ¡Viva Chile!». ²¹

Todos los grupos nacionalistas mencionados arriba –unos más, otros menos– evidenciaron la influencia del fascismo italiano, así como también una admiración por el germanismo. Muchos profesaban al pie de la letra las concepciones de Spengler, con sus tesis sobre la decadencia de Occidente y la necesidad del cesarismo.

En cuanto a la política interna, cabe subrayar que, pese a su intenso activismo, nunca fueron capaces de labrarse un apoyo popular significativo. Este hecho, junto a las concepciones decisionistas que profesaban, hizo que debieran poner su mirada en las instituciones armadas, de cuyas demandas corporativas se hicieron eco: con su apoyo aspiraban a imponer su proyecto. No fue, pues, casualidad que todas las organizaciones nacionalistas intentaran interpelar permanentemente a los uniformados, otorgándoles un lugar relevante dentro de su propuesta de país.

En cuanto al comportamiento político práctico de estos movimientos –y más allá de su retórica contraria a la democracia liberal–, hay que decir que ellos –con la excepción del Movimiento Nacional Socialista–, en las coyunturas de alza de la izquierda,

²¹ Del Programa del Frente Nacional Chileno.

siempre tendieron a cerrar filas con la derecha tradicional sin, no obstante, conformar con esta una alianza estable. Tal fue la lógica que subyaciera tras el apoyo que la Acción Republicana prestara a Gustavo Ross en las presidenciales de 1938. Al mismo móvil respondió el respaldo que el Movimiento Nacionalista Chileno otorgara al Partido Conservador en las complementarias de abril de 1940.

En las presidenciales de enero de 1942, derivadas de la muerte de Pedro Aguirre Cerda en el año anterior, se manifestó a plenitud lo dicho. Entonces las organizaciones nacionalistas confluyeron del todo con los grupos ibañistas y con la derecha tradicional en torno a la candidatura de Carlos Ibáñez. A través de esta candidatura se pretendía frenar al representante de radicales y comunistas, Juan Antonio Ríos.

No está de más hacer notar que, durante esa misma campaña, Carlos Ibáñez recibió respaldo financiero de la embajada alemana. A este respecto son de interés las consideraciones que, para fundamentar la necesidad de ese respaldo, hiciera ante su gobierno el embajador germano barón Von Schoen en Santiago. En una comunicación fechada el 6 de diciembre de 1941, este informó a Berlín que Ibáñez tenía «grandes posibilidades de ser elegido», en cuyo caso, agregó el embajador alemán:

[...] tendríamos abiertas todas las posibilidades de defensa y espionaje. Debido a que el trabajo de los EE. UU. lo hace todo cada vez más difícil, esta oportunidad no debe ser perdida. De Ibáñez cabe esperar que nos ayude y cubra en todo sentido y que proteja a los alemanes en lo personal y lo económico contra las potencias enemigas y que actúe siempre en nuestro favor en el concierto de los Estados sudamericanos. Solicito, por lo tanto, la autorización para pagarle una suma de dólares USA de entre 100 y 150 000 en apoyo a su candidatura presidencial. La discreción está garantizada. El pago, incluso en el caso de que no sea elegido, siempre va a servir a los intereses alemanes porque Ibáñez y sus seguidores van a conservar su importancia. Ibáñez es un amigo y un admirador del pueblo alemán, totalitario y completamente imbuido del nacionalsocialismo.²²

Después de las elecciones presidenciales de 1942, en que Ibáñez fuera derrotado, se constituyeron nuevas orgánicas nacionalistas. Así, por una parte se formó el Partido Obrero Ibañista, y por la otra, la Unión Nacionalista de Chile (UNCh). Liderada por Juan Gómez Millas, esta entidad pretendió agrupar a los diversos sectores nacionalistas, golpeados por sus recientes reveses, admitiendo en su seno tanto a seguidores de Ibáñez –desde ya al Partido Obrero Ibañista–, como a independientes. De lo que se trataba era de aunar fuerzas para ejercer influencia en el cuadro nacional.

La conformación de la Unión Nacionalista señala un hito importante en la evolución del nacionalismo chileno. En buena medida su quehacer estuvo marcado por la guerra mundial entonces en curso, en particular por los inicios de la derrota del Eje, y por el aumento de las presiones estadounidenses sobre el gobierno de Juan Antonio Ríos orientadas a que este se alineara con la causa aliada y rompiera sus relaciones con Berlín, Roma y Tokio. En contraposición a ello, la Unión Nacionalista sostuvo que el país debía mantenerse neutral, identificando esta posición con la autonomía e independencia nacional. En tal perspectiva la entidad dio vida a un llamado Frente de Neutralidad. También otorgó su apoyo a la Asociación de Amigos de Alemania, al tiempo que, desde una perspectiva iberoamericanista, rechazó las presiones de Washington. Este aspecto particular la llevará a desarrollar ciertas consideraciones vinculadas al patrimonio común de los pueblos iberoamericanos, signado por el idioma y ciertas tradiciones culturales; cuestión que, en fin, gradualmente conducirá al nacionalismo chileno por la senda del hispanismo e incluso del justicialismo argentino. En este sentido, la Unión Nacionalista marca una transición.

Cabe subrayar que mientras el Eje se mantuvo triunfante en los campos de batalla, la adhesión abierta de los nacionalistas chilenos al fascismo y al nazismo permaneció vigorosa. Pero el cambio del signo del conflicto vino a modificarlo todo, aunque de manera muy gradual. En estas circunstancias ya no parecía posible presentarse como un abierto partidario de las potencias nazi-fascistas. Reflejando esa realidad, las tesis americanistas utilizadas por el nacionalismo para rechazar las presiones de los Estados Unidos parecían ser el comienzo de un camino hacia el hispanismo, el que, a su vez, era expresión ideológica de un nacionalismo que había triunfado en España con el régimen de Franco.

Dentro de esta visión iberoamericanista, la Unión Nacionalista se manifestó dispuesta a estrechar lazos con los generales argentinos del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), decididos partidarios de Alemania en la guerra, los cuales igualmente resistían las presiones estadounidenses orientadas a imponerles la ruptura con el Eje.

A comienzos de 1943, respondiendo a dichas presiones, el gobierno chileno cortó sus relaciones con Alemania y sus aliados. Para la Unión Nacionalista esto significó una derrota de magnitud. Desde entonces decayó. Es posible que miembros de la entidad hayan estado involucrados en el fallido intento golpista que, según la Inteligencia Británica, en 1944 –con el apoyo tácito de los militares argentinos–, se preparara en contra del gobierno de Juan Antonio Ríos para buscar con su caída la instauración de un régimen que repusiera las relaciones con Alemania. Acumulando derrotas, a comienzos de 1944, el Movimiento Nacionalista Chileno terminó disolviéndose.

Considerando ese desenlace, junto al definitivo alineamiento del país del lado de los aliados, se puede decir que el lustro se cerraría para el nacionalismo local con un claro signo negativo.

El nacionalismo en la posguerra: Estanquero y Acción Chilena Anticomunista

Durante la posguerra, sin embargo, el nacionalismo chileno, superando sus reveses anteriores, se verá revitalizado hasta cierto punto. Dos factores contribuyeron a ello. Uno fue la Guerra Fría, con sus correspondientes énfasis anticomunistas. El otro, de signo contrario, fue el alza de la izquierda y, en particular, del Partido Comunista, el que con el triunfo de Gabriel González Videla por primera vez ocupó cargos en el gabinete. Tal fenómeno vino unido al creciente peso del movimiento laboral, todo lo que generaba temores no solo entre el gran empresariado, sino también entre ciertos sectores mesocráticos, estimulando con ello las correspondientes tendencias reactivas, dentro de las cuales se situaban las organizaciones nacionalistas.

Por otra parte, lo dicho explica el porqué la revitalización del nacionalismo verificada entonces viniera de la mano de una relativa disminución de la connotación antioligárquica que con anterioridad

caracterizara a algunos de sus sectores, y de un aumento de sus énfasis anticomunistas. Este hecho, a su vez, permitió a los grupos nacionalistas morigerar su aislamiento, y facilitó su vinculación con distintos sectores de la derecha y del propio radicalismo –incluso con segmentos del Partido Socialista–, todo a propósito de la lucha anticomunista que se desatara en el contexto de la Guerra Fría.

La mencionada revitalización del nacionalismo supuso una renovación de sus fuentes inspiradoras en virtud de que la Guerra Fría imposibilitó toda adhesión explícita al nazi fascismo. Ello llevó al nacionalismo chileno a buscar otros paradigmas, cuestión que, según se viera, se evidenció ya durante el curso mismo de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que se materializó en su gradual paso hacia las concepciones hispanistas y en la admiración que empezó a mostrar por los regímenes de Franco y Salazar. Cabe subrayar que durante este periodo determinados sectores del nacionalismo chileno también se vieron atraídos por el peronismo, fenómeno que tendrá innegables consecuencias.

Entre las entidades nacionalistas destacadas durante este lapso figuran el grupo Estanquero, la Acción Chilena Anticomunista (ACHA), el grupo Cóndor y la Acción Chileno-Argentina, estos dos últimos vinculados al peronismo. Todas ellas se caracterizaron por reconocer el liderazgo de Carlos Ibáñez y, en mayor o menor medida, por secundarlo en las labores conspirativas que el viejo caudillo solía llevar en contra de todos los gobiernos de la época.

Las ideas nacionalistas, aunque de manera soterrada, eran ampliamente compartidas en las Fuerzas Armadas, en buena medida, aunque no exclusivamente, a través del virtual liderazgo que el general Ibáñez todavía ejercía sobre un sector de la oficialidad. Ello se tradujo en ciertas intentonas golpistas, como el complot de las Patitas de Chancho en 1949, y el de Colliguay, en 1951, en los que participaron sectores nacionalistas, incluyendo Cóndores y Acción Chileno-Argentina, vinculados al peronismo.

El grupo Estanquero

Durante la posguerra el nacionalismo chileno encontró su principal representante en Jorge Prat, antiguo militante del Partido Conservador, del cual tempranamente se desilusionara y abandonara sus

filas. En 1946 Prat fundó la revista *Estanquero*, la cual se convirtió por muchos años en la más importante tribuna del nacionalismo local. Sus ediciones se extendieron hasta 1954, cuando dejó de circular.

Estanquero agrupó a un núcleo de intelectuales conservadores muy críticos del sistema de partidos, del marxismo, del Partido Radical y, en menor grado, de la derecha tradicional, en la medida en que esta era partícipe del régimen partidario. Entre sus colaboradores más importantes, aparte de Jorge Prat, cabe mencionar a Clemente Díaz, Salvador Valdés, Roque Esteban Scarpa, Enrique Rodríguez, Oscar Salas, Jorge Iván Hübner, y, más adelante, Mario Arnello y Gonzalo Vial.

La tesis principal postulada por *Estanquero* fue la misma sustentada por todo nacionalismo: la referente a la decadencia y a la crisis nacional. «Nuestra patria ha vivido en los últimos diez años un doloroso proceso de desintegración cívica», sostenía uno de sus primeros números.²³ Para *Estanquero* la causa de fondo de ello residía en el régimen demoliberal existente en el país, caratulado como sistema de partidos. Asimismo planteaba que a dicho sistema le sería inherente la politiquería, la demagogia y el comunismo; sería él quien traería consigo la decadencia, la cual, por otra parte, se manifestaría como «crisis moral». *Estanquero* afirmaba: «el régimen de partidos es la disputa del botín estatal entre algunos grupos particulares».²⁴

La otra faceta de la crisis nacional estaba constituida, según *Estanquero*, por el comunismo, el que aparece conceptualizado en sus páginas de un modo ortodoxamente nacionalista. En efecto, constituiría una especie de mal absoluto encaminado a dividir a la nación, a la que infiltraría desde el extranjero, siempre en aras de intereses foráneos. En su número 44, *Estanquero* decía que el comunismo era «una secta atea y deshumanizadora, cuyo orientalismo bárbaro choca violentamente con las convicciones cristianas y occidentales de la enorme mayoría de la población».

²³ *Estanquero*, núm. 2, 30 de noviembre de 1946, transcrito por Carmen Fariña Vicuña, en «El pensamiento corporativista en las revistas "Estanquero" (1946-1955) y "Política y espíritu" (1945-1975)», *Revista de Ciencia Política*, vol. XII, núm. 1 y 2, 1990. Las citas que se hacen en adelante de *Estanquero* han sido extraídas de este texto de no indicarse lo contrario.

112 ²⁴ *Estanquero*, núm. 34, 6 de septiembre de 1947, p. 15.

El comunismo sería también enemigo de la unidad nacional a la que destruiría «mediante la lucha de clases y el quebrantamiento de su ritmo de trabajo en beneficio del imperialismo ruso».²⁵

Como puede verse, *Estanquero* se caracterizaba por asumir del todo el enfoque marcadamente maniqueo que es propio del nacionalismo. En ese enfoque, por un lado, figura la nación; y por el otro, el régimen de partidos y el comunismo, los que llevarían a aquella a su crisis y eventual disolución. Como se ve, énfasis más, énfasis menos, nada que no se hubiera dicho antes.

Una de las ideas más distintivas de *Estanquero*, y de Jorge Prat, era aquella que decía postular «un portalismo contemporáneo». «Queremos un portalismo contemporáneo que repita la creación del gran ministro estanquero con los muy diversos materiales del Chile de hoy», señaló un artículo de marzo de 1947.²⁶ A juicio de Prat, esos materiales contemporáneos no estarían constituidos por la aristocracia, como en el siglo *xix*, sino por la clase media. De este modo, Prat concebía un nacionalismo de amplia base social, único apto para enfrentar a la ascendente izquierda.

En la perspectiva de abrir paso a ese «portalismo contemporáneo» Prat sostuvo que había que «extirpar todos los gérmenes de desintegración nacional que, como el comunismo», están «barreando día a día [...] las fuerzas morales de [la] nacionalidad».²⁷ En un artículo de 1947 agregó que para esos efectos era indispensable «arrancar la ideología del siglo *xix* de los Derechos del Hombre, de la soberanía del pueblo, del sufragio universal y del progreso indefinido; crear una autoridad no sometida a las veleidades partidistas [y] una estructura social jerárquica, que represente al país que trabaja».²⁸ Igualmente Prat postuló el imperativo de forjar «una coraza para defenderse del liberalismo y del marxismo [coraza] que, con mente clara y *puño firme*, implante su nuevo estilo [...]»,²⁹

²⁵ *Estanquero*, núm. 44, 15 de noviembre de 1947, p. 47.

²⁶ *Estanquero*, núm. 11, 29 de marzo de 1947, p. 9.

²⁷ Jorge Prat: «Política nacional y joven para Chile», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 202.

²⁸ Jorge Prat: «Chile, problema de juventud», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, ed. cit., p. 217.

²⁹ Jorge Prat: «Hacia un nuevo estilo», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, ed. cit., pp. 230-231. Las cursivas son mías.

el cual debía traducirse en un gobierno con fuerte «voluntad de mando, que imponga el orden en el caos demagógico».³⁰

No deja de ser sintomático que, en correlación con los planteamientos expuestos, en las páginas de *Estanquero* no estuvieran ausentes ciertos alegatos orientados a justificar un eventual golpe militar. Este, a juicio de uno de sus articulistas, tendría razón de ser en el caso en que se produjese «un caos interno o un grave peligro para la soberanía del Estado».³¹ Dentro de estos argumentos se mencionaban a los enemigos internos de la nación. El objetivo de las Fuerzas Armadas sería defender al Estado de estos, y no solo de los externos.³²

Con no menor fuerza Prat reivindicó la raíz hispánica de la nación, con lo cual consolidó el paso del nacionalismo chileno desde el germanismo –ya indefendible– al hispanismo en el contexto de los ingentes esfuerzos del régimen del general Franco orientados a ejercer su influencia ideológica en Iberoamérica. En coherencia con lo dicho, los miembros de *Estanquero* declararon su explícito respaldo al régimen franquista y al de Oliveira Salazar.

La Acción Chilena Anticomunista (ACHA)

Otra organización vinculada al nacionalismo aparecida en la época fue la Acción Chilena Anticomunista (ACHA), la cual se creó a fines de 1946 ante el alza del Partido Comunista y su ingreso al Gobierno. La particularidad de esta entidad, aparte de su carácter armado, residió en que en ella confluyeron individuos provenientes de variadas organizaciones de extrema derecha, oficiales en retiro y personeros de distintos partidos, sobre todo del conservador, pero también del liberal, radical y del socialista, los que así dieron vida a un amplio frente anticomunista.

A través de la ACHA los grupos nacionalistas interpellaron a la derecha tradicional a propósito de la «amenaza comunista», cuestión que, a su vez, en términos relativos, les permitió morigerar su anterior aislamiento político.

³⁰ *Estanquero*, núm. 4, 28 de diciembre de 1949.

³¹ Pedro Ortiz Muñoz: «La misión de las Fuerzas Armadas», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, ed. cit., p. 208.

³² Ídem.

Los miembros de la ACHA formaban parte de la entidad a título personal sin dejar de pertenecer a sus agrupaciones de origen. Entre las personalidades relevantes que la integraron figura su fundador, Arturo Olavarría, Jorge Prat, de Estanquero, Guillermo Izquierdo, de Los Cóndores, y otros personajes que pertenecían a los partidos tradicionales, a cuya militancia no renunciaban. Aparte de Arturo Olavarría, del Partido Radical, y Jorge Prat de Estanquero, cabe mencionar a Sergio Fernández Larraín, Jaime Bulnes Sanfuentes, Héctor Correa Letelier y otros, del Partido Conservador; Raúl Marín Balmaceda y Miguel Luis Amunátegui, del Partido Liberal; Carlos Sánchez, del Partido Agrario Laborista; a lo que cabe agregar muchos dirigentes del Partido Socialista, como Óscar Schnacke, Juan Bautista Rosseti, Bernardo Ibáñez, Lisandro Cruz Ponce, etc. También participaban de la ACHA numerosos miembros de organizaciones nacionalistas ya fenecidas, como Humberto Truco Prieto, del Frente Nacional Chileno, y elementos provenientes de las Milicias Republicanas y del Movimiento Nacional Socialista. A estos se sumaban numerosos uniformados en retiro, entre otros, el coronel Ramón Álvarez Goldsack, jefe de Acción y Organización de ACHA, y del teniente de Ejército, Esteban Rojas. El primero, típico representante del oficial prusianizado, había hecho estudios en Alemania y en 1945 ocupaba el cargo de director de la Escuela Militar.

La ACHA poseía fuertes vínculos con Cóndores, con la Acción Chileno-Argentina e indirectamente con el Ejército. Tenía un carácter paramilitar, estaba organizada en regimientos y poseía armas, muchas de ellas provenientes de las Milicias Republicanas. Al igual como estas lo habían hecho años atrás, sus miembros eran entrenados en el uso de las armas por oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y realizaban periódicamente ejercicios militares en terreno,³³ en particular en distintos fundos, sobre todo de la zona central, pero también en domicilios particulares. Su propósito fundamental era obtener la exclusión del Partido Comunista tanto del Gobierno como de la legalidad. No obstante, sus metas iban más allá al representar la sensibilidad refundacional de los grupos

³³ Carlos Maldonado: *Acha y la proscripción del Partido Comunista en Chile, 1946-1948*, Programa Flacso-Chile, núm. 60, marzo de 1989, pp. 59-60.

nacionalistas. En tal sentido, sus postulados doctrinarios iniciales se semejaban extraordinariamente a los del movimiento Estanquero.³⁴ Sin perjuicio de estas definiciones de largo plazo, ACHA concentró todos sus esfuerzos en lo inmediato en la tarea de obtener la exclusión del Partido Comunista del Gobierno y, más aún, su definitiva proscripción. Lo primero fue conseguido en 1947, mientras que lo segundo lo logró mediante la aprobación de la Ley Permanente de Defensa de la Democracia, que fue sometida a discusión en el Congreso.

A propósito de la discusión de esta ley, ACHA llegó a amenazar públicamente a los parlamentarios que no le dieran su apoyo. En efecto, en una proclama publicada el 30 de junio de 1948 en *La Opinión*, la entidad puntualizó:

[...] es necesario advertir [...] a los políticos que por candor, idealismo exagerado, ambición u odiosidad, están haciendo el juego al comunismo, que ACHA no les permitirá continuar en una actividad que, a la postre, sólo conducirá a que el país retorne a los días aciagos en que el comunismo perturbaba la vida económica de la nación y constituía una permanente amenaza para nuestras instituciones democráticas. La acción de ACHA no está limitada, ni puede estarlo, a combatir únicamente a los comunistas. Se erigirá también amenazadora contra todos los que de algún modo pretendan que la secta internacional recupere su preponderancia entre nosotros.³⁵

Dentro de esta lógica, la acción de ACHA se desplegó también en el campo social, y se caracterizó siempre por el uso de métodos violentos. Al respecto Carlos Maldonado sostiene:

Incontables fueron las provocaciones que sus grupos de choque cometieron contra militantes y simpatizantes comunistas, estudiantes universitarios y huelguistas de distinto credo. Por ejemplo, según versiones periodísticas, personeros de ACHA, desde vehículos en marcha, dispararon contra rompehuelgas que manejaban microbuses, lo que provocó la represión militar

³⁴ *Ibidem*, p. 51.

³⁵ *Ibidem*, p. 69.

posterior en la huelga de choferes en el invierno de 1947. La intervención de la tropa causó cuatro muertos. En julio del mismo año, achistas dieron muerte al obrero comunista Luis Alberto Ramírez y dejaron grave a otro. En agosto, miembros del ACHA provocaron a los estudiantes de Derecho que protestaban por las alzas, causando varios heridos de gravedad. La policía se limitó a observar los incidentes que se generalizaron en el centro de Santiago.³⁶

Uno de los énfasis de ACHA orientado a legitimar su acción violenta en contra del Partido Comunista consistió en atribuirle a este planes dirigidos a atentar, mediante asonadas, contra los domicilios particulares y la propiedad privada en general. Bajo tales supuestos, ACHA llamó a la población a organizar una defensa armada. A este respecto es muy ilustrativa la proclama que la entidad hiciera pública con fecha 1ro. de mayo de 1948. Por su interés procedemos a transcribir *in extenso* una de sus partes. Bajo el encabezamiento «Acción Chilena Anticomunista. Departamento de Acción y Organización. A la ciudadanía», y luego de casi dar por hecho de que multitudes comunistas atacarían las viviendas particulares, ofrecía una serie de «consejos y principios» desglosados en diez puntos, que eran los siguientes:

- 1° Ningún patriota u hombre de bien ejerce acciones en contra de la propiedad particular. Téngalo presente. Quienes actúan en tales actos son enemigos de la Patria y hay que eliminarlos lo más rápidamente posible.
- 2° Hay que ir a destruir y eliminar las turbas o grupos que asaltan o saquean. La impasividad hace que esas muchedumbres refuercen su moral, crezcan y puedan seguir su obra criminal hasta nuestro propio hogar.
- 3° Los cobardes esperan escondidos.
- 4° Hay que engrosar las filas de los que atacan a los revolucionarios.
- 5° No disparar al aire. Disparar a eliminar, especialmente a los cabecillas.

³⁶ *Ibidem*, p. 64.

- 6° Tiroteos o explosiones en el día o en la noche deben poner en estado de alerta a todos los que aman a su Patria y tienen por lo menos que defender su libertad.
- 7° En los días álgidos evite que sus familiares se alejen de sus hogares.
- 8° No salga a la calle ante llamados intempestivos en la noche o en la madrugada. Instruya a sus empleados. No confíe en la vestimenta de quienes lo buscan.
- 9° Conserve la calma aun en la situación más desesperada. Recuerde que de su acción decidida y eficaz depende la vida de muchos.
- 10° No se entregue. Si lo atacan es porque tienen el deseo de eliminarlo. Igual lo harán si usted no les causa bajas. Por último más vale prevenir que curar. Ojalá que todo esto no sea necesario, en cuyo caso no se ha perdido nada. Si, por el contrario, puede serle de utilidad, comprenderá la razón que hemos tenido para dirigirnos a usted. Con nuestros cordiales saludos. ACHA.³⁷

El texto concluía solicitando a los destinatarios «entregar los ejemplares adjuntos a otros tantos amigos suyos». La proclama, a modo de denuncia, fue publicada por *Ercilla*, núm. 680, del 11 de mayo de 1948.

A mediados de ese mismo año, ACHA consiguió su segunda gran meta: la proscripción del Partido Comunista. Luego se procedió a abrir el campo de concentración de Pisagua, donde terminarían siendo reclusos no tan solo muchos de los miembros de la colectividad, sino también dirigentes sociales de distinta orientación política, en particular, aquellos involucrados en el movimiento sindical. Luego de promulgada la Ley de Defensa de la Democracia, ACHA empezó a decaer aceleradamente. A comienzos de 1949 se disolvió. Gran parte de su núcleo central, de ideas nacionalistas, desde ya estanqueros, civiles y militares en retiro, pero también socialistas, como Schnake y Rosseti —y finalmente todo el Partido Socialista Popular dirigido por Raúl Ampuero—, una vez más pasaron a agruparse en torno a la figura de Carlos Ibáñez, orientando sus esfuerzos en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1952.

³⁷ Transcrito por Carlos Maldonado: *Acha y la proscripción del Partido Comunista de Chile, 1946-1948*, ed. cit., pp. 65-70.

Nacionalismo y peronismo: los Cóndores y la Acción Chileno-Argentina

Entre las organizaciones nacionalistas chilenas creadas durante la segunda posguerra, hubo algunas que experimentaron la influencia del peronismo, con el cual establecieron fuertes conexiones. Tales fueron los casos de los Cóndores y de la Acción Chileno-Argentina. La primera era una organización secreta cuya vida se extendió entre 1945 y 1950, aproximadamente. La mayor parte de las informaciones que se dispone sobre ella proviene de cierta correspondencia de su líder y fundador, Guillermo Izquierdo, la cual fue incautada con motivos del complot de Colliguay.

Los Cóndores se fundó el 12 de febrero de 1945, a los pocos meses de que fuera disuelta la Unión Nacionalista encabezada por Juan Gómez Millas. Una cantidad de miembros de esta última pasó a integrar la nueva organización. Según Alejandro Magnet, Cóndores estaba integrado por elementos nacionalistas, de tendencia nazi o fascista más o menos acusada. Al parecer, desde sus comienzos se relacionaba con personas o grupos de inspiración parecida en diversos países de Sudamérica y, especialmente, de la Argentina.³⁸

La entidad alcanzó a tener alrededor de ciento cincuenta miembros en Santiago, y otros cien en Valparaíso y Concepción. En 1947 su líder, Guillermo Izquierdo, recibió una beca por parte de la Comisión Nacional de Cultura del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina con el fin de que llevara a cabo cierta actividad académica en Buenos Aires. En razón de ello pasó a dirigir la organización desde la capital argentina. En Santiago los subrogaría un triunvirato formado por Nilo Rosenberg, Víctor M. Vergara y Octavio O'Kingston, quienes recibían las orientaciones del líder mediante correspondencia. En Chile, los Cóndores desarrollaron fuertes vínculos con la ACHA, de la cual muchos de sus miembros se hicieron partícipes.

Por su parte, la Acción Chileno-Argentina fue creada en 1948, al parecer por el mismo Izquierdo, mientras que en Buenos Aires se creaba una Acción Argentina-Chilena. El directorio de la Acción Chileno-Argentina quedó presidido por Conrado Ríos Gallardo, y

³⁸ Alejandro Magnet: *Nuestros vecinos justicialistas*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1953, p. 161.

formaban parte de él Ernesto Barros Jarpa, el general Jorge Ber- guño, el exdirigente del Movimiento Nacional Socialista, Carlos Keller, Jaime Larraín García Moreno, Eugenio Orrego Vicuña, Andrés Feliú y Guillermo Izquierdo. Su secretario general era Carlos Sán- chez Hurtado, y su tesorero, Sergio Onofre Jarpa.³⁹ Al parecer, en Chile Cóndor solía actuar a través de la Acción Chileno-Argentina.

Hacia 1950 tanto Cóndores como Acción Chileno-Argentina se desintegraron gradualmente. Con antelación, es probable que algunos de los miembros de ambas entidades –con apoyo trasandino– hayan estado involucrados tanto en el complot de las Patitas de Chanco, como posteriormente, con toda seguridad, en el de Colliguay; ambos encaminados a producir el derrocamiento del gobierno de Gabriel González Videla.

Al igual que como sucediera con las organizaciones nacionalis- tas referidas anteriormente, tanto los miembros de los Cóndores como los de la Acción Chileno-Argentina, confluyeron en 1952 en la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez y luego apoyaron a su gobierno e incluso participaron de él.

El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS)

Otra entidad de extrema derecha que entonces se formó fue el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS). Sus an- tecedentes se remontan a fines de los años cuarenta cuando, en efecto, en torno a la revista *Bandera Negra*, comenzó a reunirse una serie de personajes entre los que figuran Ramón Callís Arri- gorriaga, Delfín Alcaide Wetson y el sacerdote Osvaldo Lira. Estos, en 1952, dieron lugar a la constitución formal del Movimiento.

Según Verónica Valdivia, a diferencia del pratismo, que sería más «proyectual», el Movimiento Revolucionario Nacional Sindi- calista representaría una vertiente emotiva, misional, articulada en torno a valores «heroicos» y a un catolicismo vinculado a la idea de «cruzada».⁴⁰ En este sentido dicho movimiento era crítico tanto

³⁹ *Ibidem*, p. 164.

⁴⁰ El tema del nacionalismo en Chile Verónica Valdivia lo trata, entre otros, en *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*, Ed. LOM, Santiago, 2008. También en *Nacionalismo e ibañismo*, Serie de Investigaciones núm. 8, Universidad Blas Caña, 1995; y *Camino al golpe: el*

de la variante católica practicada por el Partido Conservador, como de la variante social cristiana encarnada en la Falange Nacional. A ambas opuso un catolicismo intransigente, que no transaba con sus enemigos, dispuesto a imponer sus valores incluso mediante la violencia. Un artículo de *Bandera Negra* reflejaba bien esta postura cuando decía:

[...] estamos de pie para defender al Hombre –hijo de Dios– y a la Patria –hechura de Dios– con la virilidad de los guerreros y dispuestos a poner la otra mejilla cuando se trate de ofensas personales, pero a dar tajos con la espada cuando se trate de defender el catolicismo y a Chile –nuestra Patria– frente a los masones, comunistas, social cristianos y ateos [...]. Ha terminado la hora de espera, el catolicismo debe salvar al mundo con las armas si es necesario.⁴¹

Las influencias franquistas que permeaban al grupo –operadas sobre todo a través de Osvaldo Lira– eran considerables. En este sentido, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista reivindicaba el corporativismo, con la respectiva defensa de los «cuerpos intermedios» –al estilo de Vázquez de Mella–, cuya autonomía el Estado (autoritario) debía respetar. Esta concepción debía materializarse en un Estado orgánico y funcional, que sería la resultante de una Revolución Nacional Sindicalista.

El nacionalismo y el segundo gobierno de Ibáñez

A comienzos de los años cincuenta, los distintos grupos nacionalistas se unieron en torno a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez, aunque el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista dijo apoyar al ibañismo desde fuera, desde una posición

nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Serie de Investigaciones núm. 11, Universidad Blas Cañas.

⁴¹ Citado por Aníbal Pérez: «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», tesis de grado para optar a los grados de licenciado en Historia, licenciado en Educación y título profesional de Profesor de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Facultad de Humanidades, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, agosto de 2010, p. 30.

que se autopresentaba como más radical y que decía no querer insertarse en la institucionalidad capitalista a fin de mantener su independencia. El grupo se mantuvo así durante todo el gobierno del caudillo.

A la fecha el discurso antipartidario y crítico de las prácticas políticas vigentes del que se valió Ibáñez —discurso que estaba dentro de la lógica de la derecha nacionalista— prendió entre la población. Esto hay que situarlo en el contexto de los comienzos de la crisis del modelo sustitutivo y de las prácticas consensualistas que le eran inherentes, las cuales se encontraban desprestigiadas, y se asociaban con la componenda y la corrupción, de lo cual el Partido Radical sería el principal exponente. Los grupos nacionalistas y el mismo general Ibáñez se beneficiaron de tal desprestigio. En esas condiciones de crisis de la cultura política transaccional, el discurso ibañista, entre una ciudadanía desencantada, alcanzó gran capacidad de interpelación. En consecuencia, las posibilidades de ganar en las presidenciales de 1952 eran considerables.

Los grupos nacionalistas, por su parte, estimaron que el triunfo del general Ibáñez sería su propio triunfo. La hora del nacionalismo estaría entonces por llegar. Las «fuerzas vivas» de la nación, barriendo con las prácticas de la politiquería liberal, se unirían tras el caudillo y este, desde el Gobierno, procedería a llevar a cabo una reforma del Estado que incluiría la representación gremial en coexistencia con la representación política, recortándose así sustancialmente las cuotas de injerencia de los partidos en la conducción de la cosa pública e integrando a las Fuerzas Armadas al desarrollo del país. A partir de allí se debían realizar otras reformas, como las referentes a la integración entre el capital y el trabajo, el desarrollo de las cooperativas, los gremios, etc., todo unido a un papel más activo del Estado en la economía y a la recuperación del sentido de nacionalidad. De este modo, la nación sería salvada y su decadencia revertida.

Estas perspectivas de los grupos nacionalistas finalmente resultaron fallidas. El general Ibáñez, en efecto, no pudo llevar a cabo las transformaciones que prometiera. Al comienzo de su administración hizo los esfuerzos pertinentes. Pidió facultades extraordinarias con el fin de aumentar la regulación estatal en la economía. En ese contexto creó el Banco del Estado (1953). Al año siguiente integró

al grupo Estanquero a la conducción económica. Fue así como su líder, Jorge Prat, asumió como titular de la cartera de Hacienda.

Prat se esforzó por materializar la apuesta nacionalista. Un intento por integrar el capital y el trabajo que llevó a cabo se tradujo en la propuesta sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo que tendría como contrapartida una limitación del derecho a huelga. Las Juntas de estabilización económica –en las que tendrían participación trabajadores y empleados junto a los empresarios–, que debían definir los aumentos salariales y el porcentaje de las utilidades, debían materializar la solidaridad entre el sector laboral y empresarial en aras de un crecimiento económico concebido como objetivo nacional.

Pero estos esquemas concitaron la férrea oposición tanto de la derecha tradicional como de la izquierda. Ello se manifestó en una fuerte oposición en el Parlamento, donde, entre otras cosas, se rechazaron las facultades extraordinarias pedidas por Ibáñez. Tal oposición también se manifestó en el movimiento sindical, articulado en torno a la Central Única de Trabajadores (CUT), la que, oponiéndose a la supresión del derecho de huelga, desató una ola de paros. De este modo resultó que en lugar de la unidad, el orden y la armonía propiciados por el nacionalismo ante el ascenso de los sujetos populares, se produjeron en el país más divisiones e incipientes tendencias a la ingobernabilidad, y como contrapunto, el régimen carecía de apoyos políticos cohesionados y capaces de concitar el respaldo ciudadano.

Surgió entonces la inevitable tentación de acudir a una solución de tipo decisionista, tan propia del nacionalismo; es decir, cerrar el Parlamento, dejar atrás las trabas impuestas tanto por la institucionalidad demoliberal como por la agitación social implementada por una Central Única de Trabajadores de clara inspiración comunista y anarcosindicalista, para simultáneamente concentrar todo el poder en un caudillo que por vía autoritaria impondría los cambios requeridos para la regeneración del país.

El general Ibáñez contó con el apoyo de un sector de la oficialidad del Ejército para llevar adelante esa perspectiva. Dicho sector se agrupó en una organización denominada Línea Recta. A juicio de ella, había que secundar al general para dar lugar a un eventual intento de golpe de Estado. Sin embargo, Ibáñez finalmente no

se atrevió a dar el paso. Desde ya no contaba con la unanimidad de las Fuerzas Armadas. Existía un sector de los mandos que se oponía a un curso tal en razón de que para los uniformados implicaba serios riesgos de divisiones internas, así como también la posibilidad de que quedaran sujetos a caudillismos que inevitablemente afectarían su carácter institucional. A esto hay que agregar la cerrada oposición de la clase política tradicional en su conjunto, incluyendo la derecha conservadora y liberal, sin decir nada sobre el potente movimiento obrero organizado que estaba surgiendo bajo la influencia de la izquierda.

El resultado final no fue otro que el sometimiento del general Ibáñez a las reglas de la clase política. Desde ya el mandatario excluyó al grupo Estanquero del Gobierno, decidió respetar el orden constitucional y, en el plano económico, optó por las soluciones estabilizadoras más ortodoxas, es decir, el ajuste fiscal recetado por la misión Klein-Saks.

De tal modo los arrestos transformadores del régimen ibañista llegaron a su fin. El caudillo terminaría administrando el sistema que antes dijo querer sustituir, lo cual, por cierto, constituyó a la vez un mayúsculo fracaso para la derecha nacionalista que había puesto su fe en él.

Conclusiones

Desde comienzos del siglo xx en adelante, se fue desarrollando en Chile una corriente ideológica y cultural nacionalista y corporativista cuya tesis central era que el país se hallaba en un avanzado proceso de disolución por obra del régimen demoliberal. Este, por razones intrínsecas, incubaría en su seno a aquellos factores que, como el socialismo y el comunismo, llevarían a cabo esa labor disolvente, la que estaría pronta a culminar.

Estos supuestos, por cierto, respondían a los esquemas del nacionalismo y del tradicionalismo europeo, los que en Chile fueran asumidos primero por la historiografía conservadora (Edwards, Encina, Eyzaguirre), desde donde, respecto de la interpretación de la historia nacional, pasarán a las organizaciones políticas nacionalistas y corporativistas locales.

Desde los mencionados supuestos doctrinales, la derecha nacionalista y corporativista arribaba a una conclusión irrevocable: la imperiosa necesidad de poner fin a la democracia liberal y, conjuntamente, hacer posible con ello la erradicación de los sujetos disolventes que esta incubaría (socialismo, comunismo); erradicación que incluso debía operar físicamente a través de una especie de violencia salvífica. Según viéramos, diversas organizaciones nacionalistas fueron explícitas en cuanto a este punto.

Tales planteamientos constituían las bases ideológicas y culturales necesarias para los crímenes masivos que pronto advendrían. Claro que para que se produjera este resultado se requería que previamente concurrieran otros factores, entre ellos, que la mencionada cultura fuera profesada por un sector mucho más amplio de la sociedad y que en esta, en razón de sus conflictos, se instaurara un liderazgo genocida dispuesto a crear una máquina de destrucción capaz de llevar a cabo el respectivo *continuum* de destrucción, para decirlo con palabras de Ervin Staub. El proceso social y político verificado durante la segunda mitad de los años sesenta y comienzos de los setenta irá generando esos factores, los cuales se constituirán del todo particularmente en la medida en que las clases dominantes se vean cuestionadas por el alza de las clases subalternas y sus proyectos anticapitalistas. La hora de los crímenes masivos vendría cuando tales proyectos empezaran a materializarse, o amenazaran con hacerlo. Solo en esas condiciones la cultura arriba referida, en respuesta, se masificaría suficientemente y el régimen demoliberal parecería un estorbo para los detentadores del poder y la riqueza. Solo entonces —y si la correlación de fuerzas lo permitía—, sería la hora de la dictadura y de su violencia salvífica, cuyos discursos legitimantes, por lo demás, serían exactamente los del nacionalismo, lo que pondría de manifiesto la funcionalidad histórica que a este le fuera propia.

En las páginas que vienen se examinan los rasgos principales del proceso político conducente a tales resultados.

CAPÍTULO 8

El paso del pensamiento antidemocrático a la primera línea de la política durante la segunda mitad del siglo xx y sus consecuencias

A los efectos de analizar el proceso político en el cual las concepciones nacionalistas y corporativistas expuestas en el capítulo anterior dejaron de ser marginales para ser asumidas por el conjunto de la derecha, es conveniente remontarse mucho más atrás en el tiempo, en particular, a los antecedentes que desembocaron en la década de los cincuenta del siglo pasado. En ese periodo empezaron a configurarse los conflictos que luego llevaron a la derecha a proclamarse nacionalista y avanzar hacia la ruptura institucional. Una mirada a esos antecedentes nos muestra el panorama que se expone a continuación.

Los comienzos del siglo xx

Al menos entre 1891 y la década de los veinte del siglo pasado existió en Chile un patrón de desarrollo que llamaremos oligárquico monoexportador. Sus rasgos principales consistían en una economía orientada «hacia afuera», sustentada fundamentalmente en la exportación salitrera; una estructura social muy polarizada, hegemonizada por una poderosa oligarquía, y excluyente de los sectores medios y obreros; un régimen político institucional de corte parlamentario que expresaba el predominio de la elite oligárquica; una hegemonía cultural de tipo liberal y una inserción internacional que marcaba una dependencia respecto de Inglaterra.

Ese patrón de desarrollo entró en crisis ya durante la Primera Guerra Mundial, y dio origen a considerables conmociones, lo que se manifestó en el plano de la política, en los años siguientes –en particular desde 1924 en adelante–, entre otras cosas, junto a la emergencia al protagonismo histórico de nuevos sujetos –como las clases medias y obreras–, en la ruptura del orden institucional. Esto conllevó al derrumbe del régimen parlamentario y de las formas tradicionales de la dominación de la oligarquía. Mediante la irrupción del Ejército en la vida política –cuya oficialidad joven en alguna medida expresaba la sensibilidad de ciertas clases medias animadas de un espíritu de reforma–, se reemplazó el régimen parlamentario por otro de presidencialismo fuerte, todo lo cual culminó y se consolidó con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Esta, a su vez, se derrumbó en 1931 como producto de la crisis mundial de 1929, la que, por otra parte, terminó de poner la lápida al modelo monoexportador ya en crisis.

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)

En el contexto de estas nuevas realidades políticas y económicas, el país vio acelerada una serie de cambios en todas las esferas de la vida. Fue así como durante la década de los treinta –luego de la caída de la dictadura de Ibáñez–, ya dejados atrás los efectos más devastadores de la crisis del 29, la sociedad chilena pasó a sustentarse en lo económico en un tipo de desarrollo hacia adentro, empeñado en una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones y un capitalismo regulado que suponía una considerable intervención del Estado. Ello encontró su expresión principal durante los gobiernos radicales (1938-1952), cuando se creara la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad que contribuyó poderosamente al desarrollo industrial del país, aunque a la larga en beneficio de la oligarquía, la cual, gracias a la acción estatal, pudo pasar a desplegar sus negocios no solo en los planos financiero, comercial y agrario (cuya estructura tradicional no se modificó), sino también en el industrial. Como señala Víctor

128 Brodersohn, en Chile,

[...] el Estado fue el instrumento crucial en el proceso de formación del capital y en el desarrollo de una economía industrial [...] ya sea a través del financiamiento interno y externo que obtiene para la expansión de las firmas industriales, ya sea a través de su acción expansiva sobre la demanda, etc. Sin embargo, la consecuencia de esta política no fue la constitución y consolidación de un sector industrial bajo el control del Estado (aún cuando esto sucedió en ramas productivas que aparentemente eran desechadas o estaban fuera del alcance de la empresa privada local, como es el caso de ENDESA [Empresa Nacional de Electricidad], ENAP [Empresa Nacional de Petróleo], etc.), sino que, por lo contrario, la consecuencia fue el fortalecimiento y expansión del empresariado industrial.¹

Este proceso, ya a comienzos de los años cincuenta, dio lugar a un fenómeno de la mayor importancia: la formación en el país de conglomerados de empresas vinculadas por paquetes accionarios; grupos que, crecientemente diversificados y poderosos (Matte, Edwards, etc.), abarcaban no solo diversos rubros productivos, sino también financieros. Desde sus comienzos esos conglomerados adquirieron características oligopólicas o francamente monopólicas, tendiendo, por otra parte, a ser penetrados por el capital extranjero, con el cual se aliaron subordinadamente. Ellos, junto a los terratenientes, serán la base social de los partidos de la derecha.²

Paralelamente, en este contexto, en lo social se fue consolidando un orden caracterizado por un crecimiento, mayores niveles de organización y fortalecimiento de la capacidad de negociación dentro del sistema por parte de los sectores medios y obreros —estos últimos muy acrecentados y físicamente concentrados por efectos de la industrialización en curso—, lo cual, en los términos ya señalados, vino de la mano de una diversificación y modernización de la clase alta. En lo político se consagró un régimen de presidencialismo fuerte en el que, por lo demás, se daba una mediación del dominio

¹ Víctor Brodersohn: «Sobre el carácter dependiente de la burguesía industrial», en *Chile, hoy*, Siglo XXI Editores, Santiago, 1970, p. 337.

² Luis Corvalán Marquez (comp. y pról.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, Ed. Usach, Santiago, 2012, p. 301.

de los grupos oligárquicos a través de ciertos sectores mesocráticos (fuertes en el gobernante Partido Radical) normalmente cooptados; en tanto que en la cultura, la hegemonía de las visiones liberales cedió ante distintas concepciones socializantes; todo lo anterior en el marco de una inserción internacional caracterizada por la dependencia del país respecto de los Estados Unidos. En resumen, terminó imponiéndose a plenitud un nuevo patrón de desarrollo (que había empezado a insinuarse ya a fines de los años veinte bajo la dictadura del Ibáñez), que fue el de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Detengámonos brevemente en un rasgo fundamental evidenciado en los planos político y social por este nuevo patrón de desarrollo. Durante él se constituyó el llamado estado de compromiso, el que, a nuestro juicio, implicó una modalidad de estructuración del poder de acuerdo a la cual los grupos oligárquicos reformularon su forma de dominación, mediatizándola a través de un régimen que implicó cierta participación de sectores mesocráticos. Se consolidó así un orden en el que las clases medias se insertaron crecientemente en la gestión del Estado y adquirieron determinadas cuotas de influencia en él, en particular a través del Partido Radical. A la par, los sectores obreros vieron reconocidas sus organizaciones por el orden jurídico y político, y adquirieron creciente capacidad para presionar al interior de este por sus intereses corporativos.

Tal resultado supuso que la radicalización que anteriormente habían evidenciado los sectores obreros y las propias clases medias pudo ahora canalizarse institucionalmente y, por lo mismo, morigerarse. En el régimen de partidos ello se tradujo en que las colectividades extrasistema terminaron integrándose al orden existente, aunque contribuyeron a su relativa democratización. Esos fueron especialmente los casos del Partido Socialista y del Partido Comunista, los cuales pasaron a reemplazar su inicial énfasis en la revolución, por otro centrado en la democratización, en cuyo marco los sujetos populares que representaban, más que destruir desde sus bases mismas el orden establecido, podrían pasar a negociar sus demandas dentro de él en mejores condiciones.

De tal modo, este nuevo patrón de desarrollo se tradujo en un complejo entramado de intereses diversos que supuso delicados equilibrios, donde se consideraban en mayor o menor medida

las demandas de los diversos estratos sociales (con excepción del campesinado y los sectores populares no organizados), aunque se mantenía el predominio –ahora hasta cierto punto mediatizado mesocráticamente– de los grupos oligárquicos.

Como resultado de lo dicho, advino en la política chilena una fase en la que predominaron los consensos, lo que fortaleció al orden institucional, el cual terminó siendo reconocido por los diversos actores como el marco legítimo para dirimir los conflictos. Esto, por otro lado, supuso el reconocimiento por parte de cada actor de la legitimidad de los demás.

En el marco de este patrón de desarrollo, el país experimentó un considerable proceso de modernización del que los distintos suscriptores del estado de compromiso, en mayor o menor medida, se beneficiaron. Dicho proceso de modernización encontró su apogeo durante los gobiernos radicales (1938-1952), y culminó así la historia de la primera mitad del siglo xx.

No es menos cierto que la Guerra Fría y la Doctrina Truman, enunciada en 1947, cuya principal expresión en Chile fue la proscripción del Partido Comunista y la ruptura de las alianzas de centroizquierda base a las cuales desde 1938, venían estructurándose los gobiernos, cambiaron las cosas al restringir los procesos de relativa democratización entonces en curso.

La crisis del modelo ISI

A comienzos de los años cincuenta, ya con toda claridad en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), se empezó a gestar una nueva crisis en el país, que era la resultante del agotamiento del modelo ISI con las modalidades que había adoptado hasta entonces.

Los indicadores de esa crisis fueron un bajo crecimiento económico, a nivel incluso de estancamiento, una inflación que pronto se haría galopante, bajas tasas de inversión, elevada cesantía y conflictividad social, expresada esta última sobre todo en el descontento de amplias capas populares, sobre todo asalariadas, las que, a través de paros y huelgas, perseguían recuperar el poder adquisitivo de sus salarios recortados por la constante subida de los precios. Téngase en cuenta que los sectores asalariados, debido al proceso

de industrialización en curso, habían crecido considerablemente. El estado de compromiso, por lo demás, les había dado una influencia cada vez mayor. En 1953, bajo el liderazgo de Clotario Blest, se fundó la Central Única de Trabajadores (CUT), la que pronto haría sentir su presencia a través de sucesivos paros nacionales, para reivindicar sobre todo demandas salariales.

Los factores de fondo de la referida crisis, que era la del modelo ISI, yacían en la insuficiencia de la demanda agregada, expresión de la estrechez del mercado interno, lo que al frenar la inversión, impedía el crecimiento industrial y productivo en general, con su consecuencia, la insuficiente oferta de puestos de trabajo y la subsecuente cesantía estructural. A su vez, esta hacía más notorio el contraste entre la riqueza del megaempresariado y de los terratenientes, y la pobreza de amplios sectores, muchos de ellos emigrados recientemente del campo a las ciudades, quienes conformaron en los bordes de estas extendidas poblaciones marginales. Jorge Ahumada, en la primera edición de su libro *En vez de la miseria*, en 1958, decía al respecto: «es difícil encontrar en América Latina otra ciudad como Santiago, con residencias tan lujosas y poblaciones *callampas* tan miserables».³

Otro factor importante de la crisis estaba constituido por la estructura agraria tradicional –intocada por el ISI–, con sus latifundios de baja tecnología que funcionaban mediante el sistema de inquilinaje, incompatible con la formación de un mercado interno. Este sistema, aparte de la extrema pobreza que generaba en el mundo rural, era incapaz, dado su atraso, de abastecer suficientemente con bienes alimenticios a las ciudades, haciendo que estos, con su relativa escasez, alcanzaran altos precios, lo cual contribuía a la inflación y obligaba, por otra parte, al Estado a destinar cuantiosas divisas a importarlos. En respuesta a la referida crisis del modelo ISI, durante los años cincuenta comenzaron a emerger a lo menos tres proyectos globales que buscaban su reemplazo: el de la izquierda, el del centro y el de la derecha empresarial.

Diagnóstico y proyecto alternativo del gran empresariado

El gran empresariado que, producto del modelo ISI y su principal consecuencia –la industrialización del país–, se había venido estructurando en poderosos grupos económicos oligopólicos vinculados por la posesión de paquetes accionarios, fue uno de los primeros en plantear el tema de la crisis. Esta, a su juicio, se debía a que existían factores estructurales que obstaculizaban la rentabilidad de las empresas, o sea, la acumulación del capital. Tales factores eran variados y abarcarían desde las «excesivas rentas del trabajo» y la considerable influencia del movimiento sindical, hasta el elevado gasto fiscal y la intervención del Estado que ahogaba a la empresa privada, pasando por las políticas de reajustes automáticos de remuneraciones del Gobierno, el sistema previsional y la demagogia que caracterizaría al sistema político. Todo ello –según el diagnóstico de los grupos económicos– elevaría los costos de las empresas y disminuiría su rentabilidad, impidiendo así el ahorro y la inversión requeridos por el crecimiento económico.

A través de sus diagnósticos y estudios, el megaempresariado procedió entonces a demandar cambios de fondo. Uno de los planteamientos más importantes que hiciera al respecto corrió por cuenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), su principal expresión gremial, la que entonces se hallaba presidida por Jorge Alessandri Rodríguez. En septiembre de 1955 este, a través de una exposición pública, dio a conocer de manera cruda los puntos de vista del megaempresariado sobre la crisis en curso.

El tema de fondo expuesto allí por Alessandri fue precisamente el de los obstáculos con que se encontraba la capitalización del país, es decir, la reproducción ampliada del capital, o, lo que es lo mismo, la rentabilidad de las empresas privadas. En el fondo, la crisis en curso, a su juicio, se debía a la existencia de factores estructurales que atentaban en contra de dicha rentabilidad y, por tanto, en contra del ahorro-inversión requerido por el crecimiento, ambos entendidos como premisa para enfrentar y resolver no solo los problemas económicos del país, sino también sus problemas sociales.

En su exposición Alessandri planteó abiertamente esta tesis. Sostuvo que «en parte fundamental los males del país derivan de haber debilitado la situación económica de las empresas [y] de haber rebajado en todo sentido la posición que corresponde al empresario [...]»,⁴ con su inevitable consecuencia: «la disminución notoria de las rentas del capital»,⁵ debido a los excesivos impuestos que se les aplicaba a la empresa privada, a lo que se sumaba «la pesada carga que [para estas] representaba la previsión, tal como está organizada».⁶

La otra causa determinante de la crisis, a juicio de Alessandri, residía en el movimiento sindical que presionaba por elevar «las rentas del trabajo», o sea, los niveles salariales, los cuales se habrían incrementado en exceso dando lugar –en conjunto con el excesivo gasto fiscal– no solo a la disminución de la rentabilidad de las empresas, sino también a la espiral inflacionaria entonces en curso. Según Alessandri: «Las alzas de los precios actuales, son, en parte, el fruto de la elevación de los costos que determinan los sueldos y jornales»,⁷ los cuales, por otra parte, serían el fruto de «la desnaturalización experimentada por el régimen sindical contemplado en nuestra legislación social».⁸

En consecuencia, a juicio de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), gran parte de la responsabilidad de la crisis del país residiría en el movimiento de los asalariados. Según Alessandri: «Los gremios no deben, en beneficio del país y de sus componentes, desconocer las responsabilidades indirectas que les corresponde en la actual situación»;⁹ y agregó: «la influencia de los organismos gremiales ha sido, cada vez, más preponderante, no solo en las actividades económicas particulares sino que [también] en la vida pública».¹⁰

⁴ Jorge Alessandri Rodríguez: «La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001, p. 229.

⁵ *Ibidem*, p. 234.

⁶ *Ibidem*, p. 235.

⁷ *Ídem*.

⁸ *Ibidem*, p. 231.

⁹ *Ídem*.

¹⁰ *Ídem*.

El otro factor de la crisis, a juicio de Alessandri, radicaba en «la acción del Estado [traducida] en aumentos imprudentes de los gastos públicos»,¹¹ lo que incidiría en la elevada inflación existente. Siempre sobre lo mismo, Alessandri en otra parte sostuvo: «hemos señalado [que] el crecimiento inmoderado de los gastos públicos y la falta de normas modernas y adecuadas en la legislación social [son] otro de los factores decisivos y fundamentales en la aceleración del proceso inflacionista» en curso.¹²

A lo dicho, Alessandri agregó la responsabilidad de los partidos, que eran los que controlaban a los gobiernos y al Congreso. Ellos, en busca de los votos que requerían para posesionarse en las instituciones estatales, fomentaban los ya referidos elementos de la crisis, particularmente mediante la política de permanentes reajustes salariales. Esto, a su vez, estimularía la inflación, con sus correspondientes secuelas.

En resumen, a juicio de la CPC, la crisis por la que atravesaba el país se debería a la lenta acumulación del capital derivada de factores estructurales. Estos factores, como dijimos, se localizarían en el excesivo nivel de los salarios, consecuencia del enorme poderío del movimiento sindical, a lo que se sumaría el sistema de pensiones y la excesiva carga tributaria que debían soportar las empresas privadas, cuyas consecuencias eran la elevación de sus costos y la disminución de sus ganancias. Esto, en fin, impediría su capitalización y la inversión requerida por el crecimiento del país. El otro factor de la crisis sería el elevado gasto fiscal, las políticas gubernativas de reajustes salariales, lo cual conduciría a la espiral inflacionaria. A esto se sumaría el sistema político con las prácticas «demagógicas» de los partidos, los cuales, con el propósito de disponer de los apoyos electorales requeridos para controlar el Parlamento y el gobierno, estimularían los males ya indicados.

Las soluciones que planteó Alessandri ante el diagnóstico que trazara fueron precisas. Estas consistían en «restringir los gastos públicos a proporciones compatibles con las posibilidades del país, modificar el sistema de reajustes de sueldos y jornales, así como los regímenes de previsión». Para contribuir a «la capitalización»

¹¹ *Ibíd.*, p. 233.

¹² *Ibíd.*, p. 230.

del país, se debía acudir a la «ayuda del capital extranjero»,¹³ es decir, abrir la economía. Otras soluciones solo quedaron implícitas, como las referentes a la necesidad de rebajar los niveles salariales y poner fin al poderío del movimiento sindical.

Volviendo a las referencias críticas que hiciera Alessandri sobre la demagogia del sistema de partidos, cabe decir que el punto es muy relevante. Constituye la evidencia de que el megaempresariado ya no confiaba en el sistema político ni se sentía representado por él, al cual más bien veía como un factor de la crisis, ya que a través de ese sistema, particularmente de los partidos, se expresaban los intereses de otras clases sociales contrarios a los suyos. La referida exposición de Jorge Alessandri lo explicita del todo, particularmente cuando dijera: «una solución del problema económico de la naturaleza que exponemos sólo podrá alcanzarse siempre que hubiese un gobierno y una fuerte mayoría Parlamentaria que, consciente de sus responsabilidades y ajenos a toda consideración demagógica o electoral, estuviesen dispuestos a convencer al país de su necesidad, o a imponerla».¹⁴ Pero, agregó: «con sentido realista no creemos en tal posibilidad, porque los acontecimientos acaecidos en el país desde 1952 en adelante hasta ahora ningún cambio han producido en la actitud de la mayoría de los sectores políticos».¹⁵

La surgente desconfianza del megaempresariado en el sistema de partidos y, por tanto, en el orden institucional, al que acusara de no favorecer suficientemente la acumulación del capital y, con ello, contribuir a la crisis del país, es uno de los factores más importante al momento de explicar la crisis política que pronto se abrirá, crisis que a la larga desembocará en el golpe del 11 de septiembre.

Por último, luego del diagnóstico de la realidad nacional que hiciera desde la cúpula de la CPC, Alessandri terminó emergiendo como el líder indiscutido de la derecha, la que, con su visión crítica al sistema de partidos –y, pronto, en favor de un gobierno «fuerte»–, lo proclamó como su candidato para las elecciones presidenciales de 1958.

¹³ Jorge Alessandri Rodríguez: «La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad», art. cit., p. 234.

¹⁴ *Ibidem*, p. 235.

¹⁵ *Ídem*.

De este modo, el megaempresariado, políticamente representado por los partidos de la derecha –conservadores y liberales–, empezó a levantar un proyecto basado en la empresa privada, cuya prosperidad y «capitalización» identificó con la prosperidad del país. La otra cara de dicho proyecto consistía en la crítica al modelo ISI –en los términos arriba expuestos– y al sistema de partidos que expresaba una pluralidad de intereses de otras clases, a todo lo cual identificó con las causas de la crisis económica entonces en curso.

El proyecto Chile

Paralelamente a lo señalado, se produjo otro fenómeno de gran importancia para el gran empresariado, que consistió en la implementación del llamado Proyecto Chile, firmado en marzo de 1956 entre la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chicago. El proyecto, en su parte central, consignaba el envío de egresados chilenos a la universidad estadounidense y la creación de un Centro de Investigaciones Económicas, localizado en Santiago, con tuición académica de Chicago.¹⁶ Según Sofía Correa, el proyecto fue financiado por el Departamento de Estado.¹⁷ Por entonces, en los Estados Unidos existía un fuerte interés en difundir en América Latina una corriente de pensamiento funcional a la expansión de sus transnacionales y que justificara la erradicación de las trabas que a ello oponía el modelo de industrialización sustitutiva, caracterizado por su proteccionismo y su intervencionismo estatal. Con tales propósitos se requería refutar al pensamiento estructuralista que predominaba en la región, cuyo representante principal eran las concepciones cepalianas, las que, a su vez, postulaban que para superar el subdesarrollo había que profundizar el ISI, con una activa participación del Estado y una democratización de los sistemas políticos. Las doctrinas de Chicago tenían precisamente entre sus funciones importantes cuestionar este enfoque y, a la par, generar una capa de intelectuales capaces de fundamentar e implementar un modelo de desarrollo económico distinto, basado

¹⁶ Gonzalo Cáceres: «El neoliberalismo en Chile: implantación y proyecto. 1956-1980», *Revista Mapocho*, núm. 36, segundo semestre de 1994, p. 160.

¹⁷ *Ibíd.*, p. 161.

en la disminución del tamaño del Estado y en la absolutización del mercado. Estas concepciones, expresadas en el nivel teórico y con pretensiones de cientificidad, le vendrán como anillo al dedo a los sectores más poderosos del megaempresariado local, el que pronto pasará a disponer de una capa de economistas de significativa solvencia técnica.

Las concepciones de los neoliberales empezarán a socializarse en el seno del gran empresariado sobre todo cuando, a fines de los cincuenta, regresen al país los primeros egresados de Chicago. Entretanto, antes de que aquellos retornaran, el gobierno de Ibáñez, dejando atrás los arrestos populistas de sus inicios, contrató a un equipo de economistas estadounidenses –la misión Klein-Saks– con el fin de que definiera las políticas destinadas a contener el fuerte proceso inflacionario entonces en curso en el país. Lo interesante del caso radica en que las propuestas hechas por dicha misión fueron muy próximas a los esquemas neoliberales. En efecto, postularon el control de remuneraciones y la eliminación de los reajustes automáticos; la reducción del gasto público; la limitación del crédito bancario y la implantación de una tasa de cambio única.¹⁸ No es extraño que el megaempresariado les haya prestado su apoyo. Las movilizaciones de los asalariados, sin embargo, obligaron al gobierno de Ibáñez a suspender su aplicación.

Al margen de ello, las organizaciones del empresariado desde el comienzo de la década se hallaban lanzadas en una verdadera campaña que pedía dejar atrás el modelo ISI y avanzar hacia uno basado en la empresa privada y en el «libre mercado»; modelo que, aparte de meter en cintura a las organizaciones sindicales, junto con garantizar la rentabilidad empresarial, disminuyera al mínimo las funciones del Estado. En esa línea se empeñaron no solo la CPC, sino también la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Central de Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, *El Mercurio* y los partidos de la derecha, el conservador y el liberal.¹⁹ Todos argumentaban que un proyecto tal respondía exclusivamente a criterios técnicos, ajenos a consideraciones políticas, como las que regirían al modelo ISI.

¹⁸ *Ibidem*, p. 161.

¹⁹ Sofía Correa: *Con las riendas del poder, la derecha chilena en el siglo xx*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2004, p. 191.

Los otros proyectos y sus consecuencias para el gran empresariado y la derecha

Frente al emergente proyecto del gran empresariado, políticamente expresado en los partidos de la derecha, durante los años cincuenta se levantaron a lo menos otros dos. Uno fue el proveniente del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El otro fue el de la izquierda, cuyos partidos principales eran el socialista y el comunista, aliados en el Frente de Acción Popular (FRAP), bajo el liderazgo de Salvador Allende.

El Partido Demócrata Cristiano fue fundado en 1957 como resultado de la fusión de la Falange Nacional con el Partido Conservador Social Cristiano, a los que se sumaron algunos miembros provenientes del Agrario Laborismo, entonces en descomposición. Basada en la doctrina social de la Iglesia, en su «Declaración de principios» la colectividad sostuvo que luchaba «por la realización de una verdadera Cristiandad» y por instaurar una «economía humana». «Un régimen semejante habrá sobrepasado los marcos del sistema capitalista, como así mismo las diversas formas de socialismo colectivista». Proclamaba, además, la «vocación popular del partido en orden a liberar a los trabajadores de la injusticia». En cuanto a la propiedad, la Declaración sostenía que ella podía ser «privada o colectiva». «Ambas son conformes a la naturaleza y pueden ser usadas para asegurar a los hombres el desarrollo de su personalidad y el bien de su familia». En otra parte señalaba: «la economía será humana si los hombres [...] se integran en comunidades de trabajo, cuyos intereses están ligados y coordinados entre sí. Sólo en tal caso el Estado como expresión de esa vida solidaria y garante del bien común, deja de servir a los grupos opresores».

Para avanzar hacia la economía humana que postulaba, la «Declaración de principios del Partido Demócrata Cristiano» proponía ciertas medidas de transición, las que consistían en: 1) la estabilidad de los trabajadores en el empleo; 2) la participación del trabajo en las utilidades de la empresa; 3) la participación de dicho trabajo en la gestión de esta; y el acceso paulatino del trabajo a la propiedad de la empresa». ²⁰ El punto de llegada de tal perspectiva sería la

²⁰ «Declaración de principios del Partido Demócrata Cristiano», en George Grayson: *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, Santiago de Chile, 1968, pp. 482 y ss.

fusión del capital y el trabajo y la conversión de la empresa en una comunidad. De este modo se configuraría una sociedad «comunitaria», ajena tanto al individualismo capitalista como al socialismo estatista. Tal era la utopía de la colectividad.

Esta, en lo político, basó su proyecto en las tesis de Jorge Ahumada que postulaban que el país atravesaba una «crisis integral» frente a la cual se requería implantar «transformaciones estructurales». En su «Declaración de principios», la colectividad se había definido como contraria tanto al capitalismo liberal como al socialismo marxista. Representaría, por tanto, una tercera posición la que, dentro de la lógica cepaliana, en la práctica encarnó un proyecto de modernización capitalista dentro del cual destacará la propuesta sobre la necesidad de implementar una reforma agraria. El Partido Demócrata Cristiano interpelará sobre todo a sectores profesionales, juventud universitaria, a amplios segmentos de las clases medias y, en general, a personas ubicadas dentro del ámbito cultural católico.

Por su parte, la izquierda —que políticamente expresaba al movimiento obrero organizado, a segmentos de pobladores, de campesinos y clases medias pobres— se unificó en 1956 en el Frente de Acción Popular (FRAP). Identificando la crisis del modelo ISI con la crisis del capitalismo en general, este frente postuló un proyecto de perspectiva socialista, el cual, sin embargo, dio lugar a divergencias importantes entre socialistas y comunistas. Así, mientras que para los primeros, en franca etapa de radicalización, el socialismo emergió como un objetivo inmediato, para los segundos se configuraba como la culminación de fases intermedias, antimperialistas y antioligárquicas. En capítulos posteriores ahondaremos en este punto.

En ese contexto, en el cual los sujetos populares iban al alza y cuando el proyecto de la Democracia Cristiana y el de la izquierda sumados concitaban el apoyo de la mayoría de la población, las posibilidades del megaempresariado de imponer sus concepciones disminuían drásticamente. Más aún cuando el sistema político del país se democratizaba. Una expresión fundamental de esto último fue la conformación del Bloque de Saneamiento Democrático, el que en 1958, constituyendo una mayoría parlamentaria *ad hoc*, logró aprobar una reforma electoral que estableció la cédula úni-

ca, con la cual se impedía el cohecho que por décadas le había proporcionado a los partidos de la derecha los votos suficientes no solo para elegir gobiernos, sino también para tener una importante presencia en el Congreso Nacional. Junto con la nueva ley electoral, el Bloque de Saneamiento Democrático derogó la Ley de Defensa de la Democracia y así puso fin a la proscripción del Partido Comunista, el que, por tanto, volvió a la legalidad y fortaleció al Frente de Acción Popular. Nada de esto favorecía al gran empresariado ni a su expresión política, los partidos de la derecha.

Las elecciones presidenciales de 1958

A la altura de 1958, el cuadro político nacional se configuraba, por tanto, en torno a tres fuerzas principales: la derecha, la izquierda y el Partido Demócrata Cristiano. Cada una de ellas era portadora de un proyecto de solución a la crisis en curso en el país, la que, como hemos visto, era la crisis del modelo ISI. A este cuadro, que anticipaba los futuros «tres tercios», se agregaba una cuarta fuerza: el Partido Radical, el que después de gobernar entre 1938 y 1952, se negaba a reconocer su decadencia y aspiraba a reaccionar a la primera magistratura. Durante los años sesenta, luego de experimentar distintas derrotas, esta colectividad se dividió, y uno de sus sectores se plegó a la izquierda, y el otro, a la derecha. Sería recién entonces cuando los tres tercios quedaron plenamente configurados. Pero en 1958 todavía no era el caso. No por casualidad en los comicios presidenciales de ese año compitieron cinco candidaturas: la de Jorge Alessandri Rodríguez, del megaempresariado y de la derecha; la de Salvador Allende Gossens, por el Frente de Acción Popular; la de Eduardo Frei Montalva, por el Partido Demócrata Cristiano; la de Luis Bossay Leiva, por el Partido Radical; y la del independiente de corte populista de Antonio Zamorano, quizás levantada para restarle votos a Salvador Allende. Los resultados fueron los que se muestran en la tabla 8.1.

Tabla 8.1. Resultados de las elecciones presidenciales de septiembre de 1958

<i>Candidato</i>	<i>Votación</i>	<i>%</i>
Jorge Alessandri	389 909	31,8
Salvador Allende	356 493	28,5
Eduardo Frei M.	255 769	20,45
Luis Bossay	192 077	15,36
Antonio Zamorano	41 034	3,30

Fuente: Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, ed. cit., p. 561.

Del análisis de estas cifras se pueden colegir tres cuestiones principales: a) que si bien en los comicios se impuso el candidato de la derecha y del gran empresariado, Jorge Alessandri, este lo hizo por un margen muy estrecho, ya que no alcanzó ni un tercio de la votación total, lo cual significa que la derecha era minoría en el país; b) que la izquierda, con Salvador Allende, estuvo a punto de ganar, lo cual evidencia que, apoyada en un amplio movimiento popular, se había convertido en una alternativa de poder, como lo demostrarán los acontecimientos por venir; y c) que el Partido Radical confirmaba su decadencia, y estaba en proceso de ser reemplazado como principal fuerza de centro por el Partido Demócrata Cristiano, el cual empezaba una rápida fase ascendente que, al igual que como ocurría con la izquierda, lo llevaría a convertirse en una alternativa de poder. En ese contexto Jorge Alessandri asumió el Gobierno.

El «gobierno de los gerentes»

Luis Convalán Marquez

El triunfo obtenido por la derecha en las presidenciales de 1958 creó las condiciones para que, con la presidencia de Jorge Alessandri, se verificara un esfuerzo por llevar a la práctica un proyecto modernizador que respondía a las visiones del gran empresariado. Este proyecto se autopresentaba, no obstante, como la expresión de soluciones técnicas. Sin embargo, todavía no constituía un proyecto propiamente neoliberal ya que, más allá de los discursos, los grupos empresariales, salvo excepciones, no podían aún prescindir del apoyo del Estado ni elevar sustancialmente sus tasas de inversión.

Coherente con la desconfianza que, por las razones indicadas más atrás, Alessandri sentía hacia los partidos, su primer gabinete estuvo conformado por tecnócratas provenientes del mundo de la gran empresa, de allí que se le denominara como el «gobierno de los gerentes». Los objetivos inmediatos propuestos por este consistieron en frenar la inflación y en reactivar la economía, lo que respondía a problemas derivados del Gobierno anterior. A más largo plazo, Alessandri se planteó liberalizar los salarios y los precios, abrir la economía al exterior y atraer la inversión extranjera entendida como uno de los requisitos para impulsar el crecimiento. La otra cara de estos objetivos era la disminución del papel del Estado en la economía y de los partidos en las decisiones políticas. Se trataba, pues, de los objetivos del gran empresariado, que el mismo Alessandri había planteado cuando se hallaba a la cabeza de la CPC.

Durante su primer año, el Gobierno obtuvo buenos resultados. La inflación bajó sustancialmente y la economía se reactivó, y disminuyó la cesantía, aunque gracias a la inversión pública. Luego las cosas cambiarían. La inversión extranjera no llegó en la medida esperada, la relativa apertura al exterior generó déficit en la balanza de pagos, el Estado debió seguir sosteniendo la inversión para hacer posible el crecimiento y evitar una recesión, la inflación renació, con lo cual hicieron lo propio la protesta social y las huelgas. Esto último obligó a restaurar el control de precios y los reajustes compensatorios por ley. De este modo, el Gobierno fracasaba en su propósito de liberalizar salarios y precios; y, a su vez, el Estado debía seguir desempeñando un papel importante en la economía, mientras que la empresa privada no lograba suplir a la inversión pública, y la inversión extranjera fallaba como palanca del crecimiento. A estos fracasos se agregaron las presiones estadounidenses orientadas a que, siguiendo los lineamientos de la Alianza para el Progreso, el régimen llevara a cabo una Reforma Agraria destinada a modernizar el agro y a evitar el peligro de insurgencias sociales. La Reforma se aprobó efectivamente en el Congreso, pero no afectó en absoluto la estructura de la propiedad de la tierra.

En resumen, un fracaso palpable. A eso se agrega el que, ante su carencia de mayorías parlamentarias, Alessandri debió incorporar el Partido Radical al ministerio, rompiendo así su perfil tecnocrático

original y debiendo hacer concesiones de diversa índole, para caer así en los «vicios de la política partidista» que tanto decía combatir.

Entretanto, los egresados de Chicago ya habían comenzado a retornar al país desde tiempo atrás. A su regreso, a fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, la mayoría se instaló en la Universidad Católica, desde donde procedieron a formar nuevas generaciones de neoliberales entre los estudiantes, en tanto que otros se insertaron en la empresa privada. En 1963, por iniciativa de Agustín Edwards, se formó el Centro de Estudios Socio Económicos (Cesec) dedicado a socializar las tesis neoliberales sobre libertad de mercado y análogas. De este modo, el neoliberalismo empezaba a hacer su camino en el país, pero solo entre ciertas élites, por el momento. La otra cara de la medalla estaba constituida por el mencionado fracaso del gobierno de Alessandri y de sus recetas tecnocráticas, que fue lo que marcó el periodo.

Por otra parte, dicho fracaso trajo consigo un fuerte descrédito de la derecha y, a contrapelo, un alza del prestigio de los proyectos de cambio encarnados en el Frente de Acción Popular y en el Partido Demócrata Cristiano. Se abrió así paso un nuevo *ethos* cultural en el cual la idea de revolución comenzó a gozar de creciente atractivo. Esto debía proyectarse en las presidenciales de 1964, en la cuales la izquierda parecía perfilarse con posibilidades.

Hacia la crisis de la derecha

Junto con lo señalado arriba, durante la primera mitad de los años sesenta se hicieron sentir situaciones nuevas importantes. Al respecto, en el plano internacional destaca la Revolución Cubana, que había triunfado en enero de 1959 y había desplegado luego una amplia influencia en el conjunto de América Latina. Esto obligó a los Estados Unidos a desarrollar nuevas estrategias orientadas a conservar el dominio de su patio trasero para impedir con ello que surgiera una nueva Cuba. Entre esas estrategias sobresale la creación de la Alianza para el Progreso, que consistía en un programa, financiado por los Estados Unidos, de reformas modernizadoras de nuestros países, cuyo fin era liquidar el caldo de cultivo revolucionario en el continente, sobre todo al modernizar la estructura agraria a través de reformas *ad hoc*. La otra estrategia

que elaboraron los Estados Unidos consistió en la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas del continente, el cual debía pasar desde la defensa hemisférica contra el bloque soviético, al combate en contra del «enemigo interno», o sea, contra las fuerzas nacionales y populares que buscaban emancipar a sus países de la tutela estadounidense mediante el avance hacia un desarrollo independiente, muchas veces de perspectiva socialista.

Según el Informe Church, a Chile le correspondió desempeñar un papel importante dentro de la estrategia estadounidense de la época. Como se verá en el capítulo 10, en el espíritu de la Alianza para el Progreso, se le encomendó la tarea de encarnar un contramodelo progresista a la Revolución Cubana. En esa perspectiva, los Estados Unidos apoyaron al Partido Demócrata Cristiano, lo financiaron clandestinamente desde 1962 en adelante, y contribuyeron a su organización y modernización. Washington buscaba que la colectividad triunfara en las elecciones de 1964, y le cerrara el paso al Frente de Acción Popular, que en 1958 había estado a punto de ganar. Con esas miras, en 1964, los Estados Unidos financiaron la mitad de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva, así como también elaboraron la llamada «campaña del terror», omnipresente cruzada publicitaria que científicamente apuntaba al subconsciente del hombre común demonizando a las fuerzas de izquierda al sostener, según la lógica de la Guerra Fría, que perseguía establecer un «régimen totalitario».

Otro de los cambios importantes de la época estuvo constituido por el *aggiornamento* de la Iglesia Católica, cuya expresión principal fue el Concilio Vaticano II que reconcilió al catolicismo con el mundo moderno y, por tanto, con la idea de progreso. Este catolicismo renovado, que rápidamente transitaba «del anatema al diálogo» con la modernidad y sus expresiones laicas, se hizo presente con particular fuerza en América Latina. En este contexto se produjo una confluencia entre Washington y el Vaticano, el cual, al igual que aquel, en respuesta al peligro revolucionario estimulado por la Revolución Cubana en América Latina, empezó a apostar por la reforma.

En Chile, en ese contexto –dentro del cual también hay que considerar el alza de la izquierda–, se generó un *ethos* cultural progresista, al que la derecha, por los intereses de clase que

representaba, no quiso ni pudo sumarse. El resultado de ello fue la pérdida de su hegemonía intelectual y moral a muy corto plazo, sobre todo en beneficio del Partido Demócrata Cristiano, crisis que tendrá una traducción directa en el plano electoral y, por tanto, político. En tales circunstancias, la derecha pasó a ser vista como la expresión de un pasado que irremisiblemente debía quedar atrás. No por casualidad se le aplicó el apelativo de «momia».

En tales condiciones se verificó la campaña para los comicios presidenciales de 1964. La derecha tradicional –liberales y conservadores–, evidenciando su aislamiento, no pudo levantar un candidato de sus filas, y optó, para tener viabilidad, por apoyar al radical Julio Durán, con cuyo partido formaron el Frente Democrático. El Partido Demócrata Cristiano, por su parte, repostuló a Eduardo Frei, mientras que el Frente de Acción Popular hizo lo propio con Salvador Allende.

No obstante, ante los resultados de unas elecciones complementarias realizadas en Curicó, zona agraria y conservadora, en las que triunfó el candidato del FRAP, mostrando con ello que en las presidenciales a tres bandas triunfaría Salvador Allende, la derecha decidió restar su apoyo a Julio Durán y traspasárselo a Frei con el fin de evitar el «mal mayor», esto es, el triunfo de Salvador Allende. Lo más notable consistió en que el apoyo de la derecha al candidato de la Democracia Cristiana debió hacerse incondicionalmente, es decir, sin negociación alguna de por medio. Esta cuestión resulta relevante si se tiene en cuenta que el programa del eventual gobierno de Frei contemplaba importantes cambios estructurales, difícilmente conciliables con los intereses y el proyecto de la derecha y del gran empresariado. Dicho programa incluía una Reforma Agraria, con su correspondiente ley de sindicalización campesina; la asociación del Estado chileno con las empresas estadounidenses del cobre a las que se les compraría la mitad de sus propiedades (la llamada «chilenización del cobre»); una profunda reforma a la educación; la «promoción popular», programa que aspiraba a organizar a los sectores poblacionales asociándolos a la solución de sus problemas más acuciantes; un reimpulso a la industrialización sustitutiva con apoyo del Estado; la integración latinoamericana para generar los mercados regionales requeridos por dicha industrialización; la reforma a la empresa apuntando a

que parte de sus ganancias fueran repartidas entre sus trabajadores; el impuesto patrimonial, entre otros.

En ese espíritu, ante cientos de miles de seguidores enfervorizados, Frei dijo en su «Discurso de la Patria Joven»: «vamos a construir una nueva patria».²¹ Y, aún más, consciente de que en la coyuntura la derecha no tenía opciones, declaró que no cambiaría ni una coma de su programa ni por un millón de votos. La derecha quedaba así cazada dentro de una situación de gran debilidad política.

La campaña electoral de Frei fue avasallante: movilizó ingentes masas populares a lo largo y ancho del país, en gran parte apelando a la juventud. «Brilla el sol de nuestras juventudes, la noche muere en el ayer», rezaba su himno en referencia al orden tradicional representado por la derecha. «Todo tiene que cambiar» fue otra de sus consignas más repetidas.

Por su parte, la izquierda, hasta entonces en alza, no pudo enfrentar exitosamente a las poderosas fuerzas que, de una u otra forma, de hecho, se coaligaban: el Partido Demócrata Cristiano y los Estados Unidos, la Iglesia Católica y el conjunto de la derecha. Fue así como Eduardo Frei se impuso por un margen importante de votos, y accedió a la presidencia de la República.

En tales circunstancias, el Partido Demócrata Cristiano emergió como la principal fuerza política y cultural del país, y dispuso de un considerable aval ético asentado tanto en su afán transformador, como en su adhesión a los valores cristianos que, aún sin ser un partido confesional, decía profesar.

En noviembre de 1964, Eduardo Frei asumió el Gobierno. A los pocos meses, en marzo de 1965, se realizaron elecciones parlamentarias. En ellas el Partido Demócrata Cristiano arrasó, obteniendo el 42,29 % de los votos (en los comicios de 1961 había conseguido solo el 15,42 %). En cambio, los partidos de la derecha tradicional, conservadores y liberales, experimentaron un verdadero desastre. Juntos obtuvieron solo el 12,47 %, los conservadores el 5,17 %, los liberales el 7,30 %). En las parlamentarias de 1961 ambos partidos, sumados, habían recibido el 30,35 % de las preferencias, mientras que en la década de los cuarenta captaban sobre el 40 % en 1945 juntos obtuvieron el 41,53 %, en 1949 el 40,21). ¿Qué había

²¹ Eduardo Frei Montalva: «Discurso de la Patria Joven», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, ed. cit., p. 251.

pasado? Lo que había sucedido era que una parte muy considerable del voto de la derecha se había trasladado a la Democracia Cristiana. Todo indica que un factor importante de ese desplazamiento se vincula a la posición adoptada previamente por la Iglesia Católica respecto a la realidad del país. Lo central sobre el punto radica en que hacía mucho que ella se había separado del partido conservador pasando a ver, a partir de los años sesenta, en el Partido Demócrata Cristiano y sus respectivas reformas, la actitud consecuentemente cristiana. A través de ello, por lo demás, a su juicio, se contribuía de mejor manera a detener el avance del comunismo. Por su parte, los partidos comunistas y socialistas, con un 22,61%, de las preferencias en los comicios parlamentarios de marzo de 1965, prácticamente mantuvieron su votación, con una leve alza respecto a la de 1961.

El importante triunfo obtenido entonces por el Partido Demócrata Cristiano lo dejó con el total control de la Cámara de Diputados y con la mayoría relativa del Senado; cámara a la que, no obstante, podía controlar con el apoyo de la izquierda. En esas favorables circunstancias, el gobierno de Frei Montalva comenzó a aplicar su programa de cambio estructural.

Para la derecha, los mencionados resultados significaron una verdadera catástrofe. En efecto, en los hechos ella quedó aislada, flanqueada por dos propuestas de cambio estructural, la de la Democracia Cristiana y la del Frente de Acción Popular, ambas críticas al orden entonces vigente y que, en términos electorales, concitaban el apoyo mayoritario del país, que representaba dos tercios de los votos. Mientras, el Partido Radical –que pronto se dividirá y su mayoría se integrará a la izquierda– mantenía el 13% de los sufragios.

En cuanto a la situación de la derecha, lo más novedoso, incluso inédito, consistió en que quedó sin los recursos políticos necesarios para cooptar al centro, como durante los años cuarenta lo hiciera con el Partido Radical entonces en el Gobierno. Las razones de esta novedad eran principalmente dos. La primera y más importante residía en la baja representación parlamentaria y electoral a la que ella quedó reducida en 1965, lo que la convirtió en una fuerza menor, no indispensable al momento de aprobar leyes. En cambio, durante los años cuarenta, la derecha era políticamente fuerte, y su

apoyo electoral, como dijimos, oscilaba en alrededor del 40 % de los votos, manteniendo con ello –gracias al cohecho– una importante representación parlamentaria, lo que le permitía negociar con el Partido Radical, al tiempo que integraba a algunos miembros de esta colectividad a sus círculos sociales y a los directorios de sus empresas, cooptándolos. La segunda razón que ahora le impedía a la derecha cooptar al centro tenía que ver con el carácter casi mesiánico y altamente ideologizado propio del nuevo centro, esto es, el Partido Demócrata Cristiano, muy lejano al pragmatismo del Partido Radical de los años cuarenta y, por tanto, no dispuesto a dejarse cooptar por una fuerza –la derecha– que, a su juicio, representaba un orden caduco en tránsito a desaparecer.

Los comienzos del camino conducente al derrumbe institucional del 11 de septiembre con sus crímenes posteriores residen en esa situación casi dramática en que quedó la derecha luego de 1965, impotente dentro del orden institucional. Dicha situación empeoró dramáticamente para la derecha y el gran empresariado, sobre todo rural, durante los años posteriores a 1965. Por entonces, en el Congreso Nacional se aprobó una reforma a la Constitución que estableció que la propiedad debía cumplir una función social, con lo cual se le quitó el carácter absoluto que tenía hasta la fecha. Luego se aprobó la ley de Reforma Agraria, con el apoyo de la izquierda, y la de sindicalización campesina, lo que vino seguido de la aplicación de ambas. Así comenzó la expropiación de parte de los fundos que excedían las ochenta hectáreas de riego básico, todo unido a la conformación de un poderoso sindicalismo campesino que posicionó a este segmento social –junto al proletariado urbano– como un actor relevante en el país, el cual presionó al Gobierno a los fines de que acelerara el proceso de expropiación de tierras.

Por tanto, la conflictividad social en el agro se elevó sustancialmente. En muchas partes los terratenientes resistieron incluso con violencia las expropiaciones. Todo ello condujo a la polarización de las luchas sociales y políticas. Las viejas clases dominantes defendían sus prerrogativas históricas, mientras que un insondable abismo se abría entre la derecha y el Partido Demócrata Cristiano, al cual aquella acusó pronto de «cripto-comunista». Rápidamente, ante la aludida reforma constitucional que establecía que la propiedad

debía cumplir una función social, lo que venía unido a la aplicación de la Reforma Agraria, la derecha empezó a temer que en el futuro se llegara a cuestionar a la propiedad industrial.

De forma paralela se llevaba a cabo una profunda reforma educacional y se aplicaba el impuesto patrimonial a las clases pudientes, al tiempo que estallaba la reforma universitaria que exigía la adecuación de los planteles de educación superior al proceso de cambios en curso, que terminó con sus estructuras oligárquicas para democratizarlos. Pronto las fuerzas de izquierda, con la idea de cogobierno, desplazaron a la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) de la conducción de ese proceso, mientras la Central Única de Trabajadores movilizaba a sus bases en aras de reivindicaciones salariales y por cambios de fondo en el país.

En resumen, las clases subalternas, los obreros, parte de la mesocracia y el campesinado, con un predominante apoyo de los intelectuales, seducidos por la idea de cambio, e incluso de revolución, se alzaban en contra del orden vigente cuestionando la dominación de los grupos económicos y su expresión política: la derecha. La pregunta que entonces debió plantearse esta fue: ¿cómo enfrentar el amenazante panorama descrito en el cual sus partidos habían perdido no solo un lugar importante en el orden institucional convirtiéndose en una minoría política, al tiempo que como tal también fuera derrotada en la batalla por la hegemonía intelectual y moral de la sociedad? La respuesta a esta interrogante no demoraría en llegar. La tenían los grupos nacionalistas y corporativistas de extrema derecha. Consistía en llevar a cabo una alianza con las Fuerzas Armadas, a su juicio, única opción que le permitiría a la derecha iniciar una contraofensiva, cuyo centro no estaría ya en el sistema institucional, sino fuera de él, al que optarían por romper, ya durante el mismo gobierno de Frei Montalva.

En la versión de la derecha, tal alianza incluiría a los militares, al gran empresariado y a la derecha misma (a los cuales, a partir de septiembre de 1970, se sumarían los Estados Unidos), bloque que debía cooptar –como carne de cañón– al empresariado medio, a la pequeña burguesía y a las clases medias conservadoras, formando así un frente orientado a instaurar un régimen de «orden y autoridad», cuyo objetivo, de hecho, era imponer la primacía del gran empresariado y reestructurar el Estado a fin de optimizar

la reproducción ampliada del capital. En resumen, un programa contrario a los intereses de la mayoría de la nación, lo que hacía que, para velar su esencia –y para enlazar con las Fuerzas Armadas– debiera revestirse de retórica patriótica.

La elaboración del curso estratégico resultante de lo anterior requirió en la derecha tradicional de profundos cambios ideológicos. Estos, en lo fundamental, consistieron en su tránsito desde el liberalismo al nacionalismo, ahondando con ello su crítica al sistema de partidos, precisamente por cuanto a través de él se plasmaban en el Estado las reivindicaciones de una variedad de sectores sociales cuyos intereses eran contrarios a los suyos.

En el curso de este proceso, verificado durante la segunda mitad de los años sesenta y consolidado y profundizado durante los setenta, el pensamiento y la cultura antidemocrática chilena (nacionalista y corporativista) descritos en capítulos anteriores, pasaron desde la marginalidad en que se mantuvieron por decenios, a la primera línea de la política. Esto fue resultado de su asunción por la derecha tradicional, la que así se reformulaba. Nos estamos refiriendo, obviamente, a aquel pensamiento nacionalista y corporativista cuyas matrices conceptuales se importaron desde Europa, pensamiento descrito reiteradamente en capítulos precedentes, el que suponía que la nación –en decadencia debido a la infiltración de un elemento foráneo (el marxismo, el comunismo, etc.)– se hallaba en proceso de disolución, precisamente por obra de ese elemento, al que se requería erradicar mediante la acción salvífica de las Fuerzas Armadas. Se trataba del discurso que legitimaba los crímenes masivos desde el Estado, previa destrucción del orden institucional demoliberal, supuestamente causante de fondo de esos procesos disolventes, contra los cuales la derecha, en nombre de la patria, decía reaccionar.

Esta pasó a ser la lógica subyacente de los discursos nacionalistas utilizados por la derecha desde la segunda mitad de los años sesenta en adelante. Mediante tales discursos pretendía abrir paso a su alianza con las Fuerzas Armadas con la aspiración de reestructurar el Estado, excluyendo de él a los representantes de las otras clases, para hacerlo funcional a la reproducción ampliada del capital, tan obstaculizada por el modelo ISI, y por la presencia en las instituciones públicas –desde ya en el Congreso Nacional

a través del sistema de partidos— de los sujetos populares y otros que obstaculizaban la rentabilidad de las empresas, al igual como lo hacía el orden constitucional vigente, según lo planteara Jorge Alessandri ya en 1955 cuando se desempeñaba como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.

Se trataba de un proyecto estrechamente clasista, tanto que, como se dijo, no podía operar sin revestirse de la máxima universalidad operante posible. Esto es, valiéndose de los conceptos de patria y nación, a los cuales de hecho negaba, como se verá en el futuro cuando la derecha triunfe y la dictadura cívico militar que encarnará ese triunfo entregue en bandeja el país a las empresas transnacionales y a los grupos económicos locales, luego de asesinar a miles de chilenos. En lo internacional, ese proceso se traducirá en la conversión de Chile en una pieza incondicional subordinada dentro del esquema de dominación mundial de los Estados Unidos.

El referido tránsito desde el liberalismo al nacionalismo que por entonces llevó a cabo la derecha se tradujo en el plano orgánico en la disolución de sus dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, y en la creación, en 1966, del Partido Nacional (PN). En este, además de las dos colectividades mencionadas, confluyó en Acción Nacional, de Jorge Prat, grupo de extrema derecha fundado antes de 1964, que aportó al Partido Nacional casi todo su ideologismo nacionalista, a lo que se agregan algunos elementos provenientes del Partido Agrario Laborista, como Sergio Onofre Jarpa. El profundo viraje político e ideológico que significó para la derecha la formación del Partido Nacional se inspiró en gran medida en las concepciones de Prat. Así, la nueva colectividad asumió del todo los paradigmas conservadores antiliberales y autoritarios referentes a la decadencia nacional, proceso cuya causa estaría en el sistema demoliberal, el cual favorecería la infiltración y el desarrollo de la concebida amenaza socialista y comunista; todo lo que prefiguraría la disolución del país y su sometimiento a una potencia extranjera.

Se puede decir que la apelación al nacionalismo se revelaba en el Partido Nacional como un mero recurso para concitar el apoyo de las Fuerzas Armadas con vistas a «tirar el mantel» institucional en el cual el gran empresariado y la derecha habían quedado aislados y sin fuerzas suficientes para enfrentar los peligros que los

acechaban. En esa perspectiva el Partido Nacional llamó a los militares a superar la «anarquía» e imponer el «orden» para instaurar un «gobierno fuerte impersonal y nacional», identificado con «los superiores destinos de la patria».

¿Existían en las Fuerzas Armadas condiciones que favorecieran una positiva recepción de las demandas que la derecha les empezó a hacer a través de sus discursos nacionalistas y «patrióticos»? Ciertamente, sí. Entre tales condiciones cabe al menos destacar las siguientes. En primer lugar, aunque en las instituciones de la defensa existían oficiales constitucionalistas, pesaba en ellas cierta larga tradición ideológica antiliberal y anticomunista proveniente primero de la influencia prusiana y, después, estadounidense. Esta última registraba dos momentos principales. El primero era el referente a la Defensa Hemisférica plasmada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y en los Pactos de Ayuda Militar (PAM), y el segundo era el correspondiente a la Doctrina de la Seguridad Nacional que apuntaba en contra del «enemigo interno». Ambos momentos se articulaban con una sólida dependencia técnica y doctrinaria de los uniformados locales respecto de los militares del país del Norte, la que se ejercía en buena parte a través de la Escuela de las Américas.

Tanto el nacionalismo asumido por el Partido Nacional –que por años se mantuviera en la marginalidad profesado tan solo por la extrema derecha–, como el mencionado ideologismo de los militares, constituían dos expresiones del pensamiento antidemocrático chileno referido en capítulos anteriores. En situaciones de agudo conflicto social, como las que estaban en curso, ambas podrían confluír, como pronto se demostrará.

Sobre este trasfondo cabe mencionar, para la segunda mitad de los años sesenta, la existencia entre los uniformados de fuertes demandas corporativas insatisfechas, salariales y de equipamiento, las que, en el contexto de los problemas limítrofes con Argentina, el gobierno de Frei no detectó oportunamente. En cambio, los grupos nacionalistas apoyaron esas demandas, todo lo cual llevó a gran parte de los militares a considerar que «los políticos» tradicionales y el régimen de partidos no eran conscientes de los problemas de la seguridad nacional, poniendo así a esta y al país mismo, en peligro, más aún cuando cundía el «desorden social».

Tal era la lógica que la derecha requería incentivar entre los uniformados, cuestión que venía acompañada de un concepto que atribuía a las Fuerzas Armadas un papel importante en los destinos del país, que los restantes partidos no parecían ofrecerles.

En tales circunstancias el Partido Nacional, intentando empatizar con los militares, pasó a poner énfasis en sus discursos precisamente en los problemas fronterizos y en las demandas de los uniformados sobre presupuesto y equipamiento adecuado ante las amenazas externas que se percibían; insistió en calificar al centro y a la izquierda de indiferentes ante estos problemas, precisamente porque no estarían comprometidos con el destino nacional, sino más bien ligados a intereses foráneos. Esta tesis adquirirá creciente peso en su pensamiento.

En relación con tales problemáticas –más las referentes al caos y al desgobierno, a la asfixia de la iniciativa privada y de la propiedad, especialmente a través de la Reforma Agraria–, el Partido Nacional impulsó una enérgica contraofensiva política que contribuyó considerablemente a polarizar el escenario nacional.

En 1967, sin embargo, el gobierno de Eduardo Frei Montalva respondió con no menor radicalidad frente a la prédica del Partido Nacional sobre las cuestiones fronterizas y militares: procedió a encarcelar a la directiva de la colectividad. Entonces, esta, en sus discursos, se vio obligada, al menos por el momento, a colocar en un segundo plano la temática de las Fuerzas Armadas aunque, en la práctica, no dejó de dedicarle esfuerzos, como pronto se verá.

Otro aspecto a tener en cuenta en este desenvolvimiento de las concepciones de la derecha es el referente a la recepción del neoliberalismo. En efecto, paralelamente a la alianza que forjaba la derecha con las Fuerzas Armadas, avanzaba en algunos de sus sectores la recepción de las ideas de Chicago. Esto se fue acentuando gradualmente sobre todo desde el retorno a Chile de los egresados de la Universidad estadounidense. Como dijimos arriba, desde fines de la década de los cincuenta, gran parte de ellos se habían establecido en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. En 1965 pasaron a controlar esta Facultad cuando uno de los suyos, Sergio de Castro, fuera elegido como su decano. En 1967, bajo la dirección de Emilio Sanfuentes, otros retornados comenzaron a publicar a través de las ediciones de *El Mercurio*, una «Página Económica», mientras que un año después se fundaba la

revista *Polémica Económica-Social*, igualmente neoliberal. Así, el neoliberalismo se difundía y ganaba adeptos tanto entre los grupos económicos, a cuyos intereses respondía, como en la derecha en general.

Al mismo tiempo, personeros de los grupos económicos se esforzaban por cooptar a los uniformados y alinearlos con sus intereses de clase. En esa perspectiva, en 1968, se conformó, con la participación de destacados empresarios, la Cofradía Náutica del Sur, la cual, según Hernán Cubillos, miembro del grupo Edwards, tenía como objetivo ser:

[...] una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas del mar con los marinos profesionales. La evolución hacia los temas políticos fue un proceso natural a medida que se agravaba la situación del país. De ese club fue naciendo una relación que nos permitió ir pasando información a las Fuerzas Armadas e ir recibiendo nosotros sus inquietudes. Más que nada yo me dediqué a conversar con la Marina. El que tenía muchos contactos con el ejército y la Fuerza Aérea era el entonces director de *El Mercurio*, René Silva Espejo.²²

En el contexto de las estrechas relaciones que empezaron a verificarse entre miembros del megaempresariado y las Fuerzas Armadas se fueron produciendo, y no por casualidad, los inicios de la crisis del constitucionalismo formal en el seno de las instituciones castrenses —en especial en el Ejército—. Esta crisis marcaba la tendencia al afloramiento en las filas de ciertas adhesiones ideológicas nacionalistas disimuladas tras el acatamiento formal de los uniformados al orden demoliberal. Dicha crisis se manifestó durante la segunda mitad de los años sesenta en una cadena de hechos aparentemente menores, hasta que eclosionó en el acuartelamiento del general Viaux en el regimiento Tacna de Santiago, ocurrido el 21 de octubre de 1969.

El catalizante del movimiento fue el ya mencionado descontento que por razones corporativas reinaba entre los uniformados,

²² Entrevista en la revista *Qué Pasa*, 1ro. de septiembre de 1996, citada por Mónica González: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, Ediciones B, Santiago, 2000, p. 118.

centrado en cuestiones de equipamiento y remuneraciones. En razón de su histórico ideologismo nacionalista, para gran parte de ellos la causa de sus problemas profesionales –según hemos dicho– yacía en el régimen político demoliberal, que sería indiferente ante los problemas de la defensa.

El general Roberto Viaux, jefe de la guarnición de Antofagasta –y bajo el segundo gobierno de Carlos Ibáñez partícipe del movimiento golpista Línea Recta–, intentó ponerse a la cabeza de la inquietud corporativa, la que con posterioridad –solo con posterioridad– se articularía con una visión nacionalista y antiliberal. Sus pasos, sin embargo, fueron descubiertos por el mando. De allí que el 16 de octubre el comandante en jefe de la institución le pidiera presentar su expediente de retiro. Viaux, según relata el general Carlos Prats, en principio se negó a ello y retornó a Antofagasta. Allí demoró un par de días el traspaso del mando de la guarnición, después de lo cual se desplazó hacia Santiago, donde el 21 de octubre se atrincheró en el regimiento Tacna, apresó a su comandante contando con el apoyo de un decidido número de oficiales. Sus expectativas, obviamente, consistían en provocar una adhesión generalizada de otras unidades militares.

En este sentido, el acuartelamiento del general Viaux, pese a que, por razones tácticas, trató de revestirse de motivaciones gremiales, era un golpe de Estado en regla. Distanto mucho de ser un conato aislado dentro de las instituciones militares, contó con la adhesión de «la Escuela de suboficiales, del Batallón Blindado No. 2 y del Batallón de Transporte No. 2. A ello hay que sumar los oficiales que cursaban en la Academia Politécnica del Ejército que se hicieron presentes en las dependencias del Regimiento Tacna».²³ Y antes de que se precipitara el acuartelamiento del Tacna, cuando recién Viaux fuera llamado a retiro, la mayoría de los oficiales de la guarnición de Antofagasta le manifestaron su respaldo a través de una declaración publicada en *El Mercurio* de esa ciudad. Viaux, pues, distaba mucho de carecer de apoyos entre los uniformados.

En sus *Memorias* el general Carlos Prats sostiene que en la intentona había civiles involucrados.²⁴ Tales eran, entre otros, los

²³ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2002, p. 132.

²⁴ Carlos Prats: *Memorias. Testimonio de un soldado*, ed. cit., p. 127.

dirigentes del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, Mario Arnello y Engilberto Frías, quienes luego fueron citados por la Fiscalía Militar a declarar por el caso. El movimiento fue sofocado cuando el mando constitucionalista rodeó al regimiento Tacna con tropas leales, lo que evitó que nuevos destacamentos militares le manifestaran su apoyo. Viaux entonces debió rendirse.

El Partido Nacional, que durante los años anteriores aparentemente no había obtenido éxito en su prédica en torno a las cuestiones militares, pronto, como todos los otros partidos, se pronunció sobre la intentona, siempre en la perspectiva de materializar una alianza con los uniformados. Cuidándose de no entrar en conflicto ni con el movimiento militar ni con el mando constitucionalista de las Fuerzas Armadas –que rápidamente adoptó medidas para sofocar el conato–, el Partido Nacional culpó al gobierno demócrata cristiano de ser el causante de una «anarquía general» que viviría el país. Al mismo tiempo, solidarizó con las demandas profesionales de los uniformados, aunque subrayando que no propiciaba acciones extraconstitucionales y que sus metas las llevaría a la práctica dentro de la vía legal. Desmintiendo estas declaraciones, tres de sus dirigentes, Sergio Onofre Jarpa, Engilberto Frías y Mario Arnello, fueron formalizados por la Fiscalía Militar acusados de intentar levantar al Grupo 7 de la FaCh en apoyo al movimiento del Tacna.

Cerrado el episodio –aunque solo parcialmente puesto que, en apoyo a Viaux, luego se detectaron otras conspiraciones militares–, el país se vio abocado a una nueva elección presidencial, que debía celebrarse el 4 de septiembre de 1970. El Partido Nacional, ante el panorama electoral que se abría, debió ahora apostar –no ciertamente por razones de principio– a su triunfo en las urnas en septiembre de 1970, sin, por cierto, cerrarse a otro tipo de opciones, como lo demostrarían los sucesos por venir.

A los comicios de septiembre de 1970 se presentarían tres candidaturas: la de Radomiro Tomic, por la Democracia Cristiana; la de Salvador Allende, por la Unidad Popular; y la del empresario Jorge Alessandri, por la derecha, la que, de hecho, jugaba la carta electoral al tiempo que hacía lo propio con la golpista, como se viera con el Tacnazo.

Frente a esos comicios, Washington, a diferencia de lo que hiciera en 1964, no apoyó a ningún candidato en particular, sino

que se centró en una llamada «campaña de sabotaje» dirigida en contra de la candidatura de Salvador Allende, a cuyos efectos financió la acostumbrada campaña del terror, que fue uno de los factores que más contribuyó a la polarización de la política chilena. En tanto, la derecha, particularmente el Partido Nacional, profundizó sus definiciones nacionalistas, antiliberales y críticas al orden institucional entonces vigente, y favorables a una intervención de las Fuerzas Armadas en el acontecer del país. Tales definiciones quedaron plasmadas en un voluminoso texto sugestivamente titulado *La Nueva República*, publicado por el Partido Nacional en 1970 como respaldo programático de la candidatura de Alessandri. En el capítulo 10 nos abocamos al análisis de este documento y de otros emanados del Partido Nacional.

Por ahora nos limitamos a decir que en la elaboración de la parte económica de *La Nueva República* participaron los economistas de Chicago, ya plenamente integrados al quehacer de la derecha. Sin embargo, sus tesis sobre el tratamiento de *shock* no fueron aceptadas, pues amplios sectores empresariales requerían de cierta protección estatal. Por eso los esquemas neoliberales que propiciaban fueron asumidos por la Nueva República como algo que había que implantar gradualmente.

En este devenir, sobre todo durante la última parte del gobierno de Frei, la derecha logró concitar ciertos apoyos a sus planteamientos autoritarios, en particular entre algunos sectores de las clases medias, asustadas por el alza de los sujetos populares. De este modo, ella logró remontar en parte la situación crítica que enfrentara a mediados de los años sesenta. Aún así, no pudo triunfar en las presidenciales de 1970, que eran a tres bandas, cuyos resultados se muestran en la tabla 8.2.

Tabla 8.2. Resultados de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970

<i>Candidatos</i>	<i>Votos</i>	<i>%</i>
Salvador Allende	1 070 334	36,22
Jorge Alessandri	1 031 159	34,89
Radomiro Tomic	821 801	27,81

Estos resultados dejaron a la derecha en estado de *shock*, y la llevaron a retomar la vía golpista, que no había abandonado sino transitoriamente. Mientras, en Washington, el presidente Richard Nixon daba órdenes a la CIA para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia. A estos efectos, la agencia estadounidense montó los llamados Track I y Track II.

La derecha, al menos fácticamente, colaboró con la CIA, particularmente empeñándose en implantar la anormalidad en el país mediante corridas bancarias concertadas vía telefónica, a la par que sus sectores más radicalizados llevaban a cabo atentados terroristas para crear las condiciones del golpe. Este –coordinado por la CIA– advino en octubre, nuevamente encabezado por el general Viaux. Su planificación contemplaba el rapto del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, de lo cual se culparía a la izquierda, para luego declarar el estado de sitio que, en medio del masivo apresamiento de dirigentes de las organizaciones populares, permitiría que los militares tomaran el poder. El plan golpista se vino al suelo cuando Schneider se defendió, ante lo cual fue ultimado por sus raptos. Así, el golpe fracasó, mientras que el Congreso Nacional, luego de un acuerdo entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano, consagraba a Salvador Allende como presidente de la República.

La ofensiva final y el triunfo de la oligarquía

Luego de que Salvador Allende asumiera el Gobierno, de inmediato se activaron los preparativos para otro golpe, con la diferencia de que ahora la CIA se involucró aún más en ello, a diferencia de años anteriores cuando Washington protegiera al gobierno de Frei, el cual debía encarnar un contramodelo atractivo a la Revolución Cubana.

El gran empresariado, por su parte, junto a la derecha –y a la larga, con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano– se jugó por el golpe. La mecánica de este contemplaba: a) generar la anormalidad en el sistema político impidiendo que el Gobierno estabilizara sus equipos de trabajo, para lo cual la oposición se empeñó en una permanente campaña de acusaciones constitucionales en contra de ministros, intendentes, etc.; b) la unidad entre el Partido Nacional

y el Partido Demócrata Cristiano; c) la conversión, sobre esa base, de cada conflicto local en nacional; d) la instauración de la ingobernabilidad mediante paros y huelgas organizadas por los gremios empresariales, con el respaldo político del Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano; e) una intensa campaña del terror, favorecida por el control de la mayoría de los medios de comunicación por parte de la oposición, campaña que acusaba al Gobierno de salirse de la legalidad y pretender instaurar un sistema totalitario. A lo dicho –en lo exterior– se agregaba el bloqueo económico estadounidense que perseguía arruinar a la economía chilena a fin de facilitar la ofensiva opositora; todo finalmente complementado con un terrorismo generalizado llevado a cabo por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), según Roberto Thieme, su jefe operativo, con el apoyo logístico de los militares.²⁵ En fin, esta estrategia multifacética contaba con el financiamiento y apoyo político de los Estados Unidos, como se verá en el capítulo 12.

Cuando este verdadero proceso insurreccional de la oligarquía empresarial se encontró en una fase avanzada, se procedió a dar otro paso: disponer de un programa económico. A tales efectos, los gremios empresariales y la derecha, más un par de demócratas cristianos, formaron un grupo de economistas neoliberales, quienes debían elaborar dicho programa. El resultado fue el llamado «ladrillo», texto que luego del golpe llegó a manos de la dictadura con el propósito de que lo llevara a la práctica, lo que esta efectivamente hizo.

La Unidad Popular y la izquierda en general no fueron capaces de enfrentar con éxito la confluencia de enemigos tan poderosos, locales y extranjeros, coaligados de manera estrecha. Incluso más, durante su Gobierno se dividió en dos bloques: el llamado «polo revolucionario» y el «polo reformista». El primero –desafiando con frecuencia a Salvador Allende– impulsaba estrategias rupturistas (normalmente de manera retórica); y el segundo, gradualistas e institucionales. En este marco, con sus apoyos políticos divididos, fracasaron todos los intentos de Salvador Allende dirigidos a llegar a acuerdos con el Partido Demócrata Cristiano –de hecho, comprometido con los Estados Unidos–, a fin de dotar de una base jurídica

²⁵ Véase entrevista a Roberto Thieme en *Ercilla*, núm. 3.134, abril de 2000, pp. 33-34.

sólida a la formación del Área de Propiedad Social y al conjunto del proceso de cambios.

El resultado de todo fue el golpe del 11 de septiembre y el derrumbe del orden institucional, por años buscado por la clase empresarial y su expresión política, la derecha. Esta, consumado el golpe, junto con declararle su incondicional apoyo, procedió a disolver al Partido Nacional, delegando el ejercicio de todo el poder político en las Fuerzas Armadas. La dictadura así constituida, colocando a los Chicago Boys en las palancas fundamentales de la conducción económica del Estado, terminó implantando el modelo neoliberal. Se desechaba así el modelo ISI contra el cual por años reclamaran la Sofofa, la CPC, *El Mercurio*, en fin, el megaempresariado, para instaurar en su lugar un modelo económico y un proyecto global —el de estos sectores— que traspasó a los grandes grupos económicos (y a algunos funcionarios suyos) la propiedad de casi todas las industrias que se habían logrado crear durante las décadas anteriores, a la par que se ponía fin a las regulaciones estatales que obstaculizaban la reproducción ampliada del capital, entregando el país a las empresas transnacionales. En función de esos mismos propósitos, la dictadura se esforzó por destruir, mediante crímenes masivos a las organizaciones populares y a los partidos de izquierda, refundando el Estado, y la cultura, en función de optimizar la acumulación capitalista.

En lo externo, la dictadura salida del golpe, a contrapelo de su constante apelación a «la patria», cumplió el papel histórico de relocalar al país en la condición de peón del gobierno de Washington entonces empeñado en instalar en América Latina dictaduras de la seguridad nacional que le permitieran recobrar el control sobre su patio trasero, el cual fuera amenazado por la emergencia de los pueblos y el triunfo de la Revolución Cubana. En ese contexto cabe ubicar la Operación Cóndor, con su correlativa política de asesinatos a líderes de izquierda —e incluso populistas— a nivel continental, todo en parte coordinado desde Chile con la dirección de Manuel Contreras y Augusto Pinochet.

En el cumplimiento de las funciones señaladas, la dictadura, desde el punto de vista proyectual, rápidamente terminó por ser controlada por grupos civiles prooligárquicos y proimperialistas: el gremialismo y los Chicago Boys. Ambos, ubicados en los lugares

claves del régimen, constituían un personal político, ideológico y técnico de la plutocracia empresarial y de las empresas transnacionales, cuyo proyecto fue llevado a la práctica a plenitud por el régimen pinocheteano.

Desde 1990 en adelante ese proyecto entró en una segunda fase, configurada a través de una transición diseñada en los Estados Unidos. Washington utilizó a los efectos a gran parte de la oposición a la dictadura. Esta última, por su parte, en los años ochenta, después de serle útil, se había convertido en un problema para el país del Norte.

Esta segunda fase de la dominación del triunfante gran capital ganó en legitimidad al ser administrada por gobiernos civiles que restauraron las libertades públicas y pusieron fin a los crímenes propios del periodo anterior, pero sobre todo pudo operar debido a que, en el marco de grandes cambios en el plano internacional, con el patrocinio estadounidense, las fuerzas políticas que antaño habían levantado proyectos propios, esto es, el Partido Demócrata Cristiano y gran parte la ex Unidad Popular, desde ya el Partido Socialista, fueron cooptadas por el capital deviniendo en neoliberales, al menos fácticamente, administrando el modelo triunfante a cambio de la satisfacción de los intereses corporativos de sus cúpulas y clientelas. Tales partidos, instalados en el Gobierno en marzo de 1990, en la práctica pasaron a cogobernar con la derecha en el contexto de la fusión entre política y negocios, que pronto advino. En esas circunstancias, los grupos económicos —una verdadera oligarquía plutocrática—, particularmente durante los procesos electorales, llegaron a financiar a gran parte de la clase política, articulada en dos bloques: uno conservador de «centro derecha»; y otro «progresista», de «centro izquierda»; ambos desarrollándose al interior del modelo neoliberal, coherente con lo cual elevaron los conceptos de «acuerdos», «diálogos» y «consensos», a la categoría de valores superiores e indiscutidos.

En tal contexto, la política sistémica, con sus respectivos operadores y clientelas, tendió a ser percibida por el hombre común como sujeta a una corrupción orgánica, desprovista de toda consideración ideal, traducida en una competencia entre los partidos por repartirse prebendas de diversa índole, percepción que terminó llevando a dicha política al total desprestigio en un país desencan-

tado y despolitizado que, adicionalmente, descendía cada vez más en cultura y humanidad.

Dentro de ese proceso, la derecha renunció al ideologismo nacionalista y corporativista que profesara por más de dos décadas, el que le había sido útil a los efectos de su alianza con las Fuerzas Armadas en función del golpe y de sus subsecuentes crímenes. Incluso más, ahora la derecha declaró desconocer esos crímenes, a los que antes apoyara, de los cuales en las nuevas circunstancias pretendió distanciarse. En este marco, reorganizándose partitocráticamente en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y en Renovación Nacional (RN), ya desde fines de la dictadura, ella se proclamó partidaria de la democracia y dejó de cuestionar al sistema de partidos.

En dicho contexto, con su adhesión a una democracia (de fachada) y su correlativa renuncia al nacionalismo y al corporativismo que por muchos años profesara, la derecha demostraba, en fin, que su adhesión a tal o cual ideologismo es meramente instrumental y que su verdadero compromiso es con la reproducción ampliada del capital y con las premisas políticas que la optimizan, de lo cual los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, dentro del régimen «democrático» y de partidos, le darán plenas garantías.

A partir de este marco interpretativo, y con el fin de otorgarle un fundamento adicional, en los próximos capítulos volveremos sobre la mayoría de los tópicos aquí tratados, intentando ahondar en ellos, aunque focalizándonos ahora en los distintos actores políticos, tanto internos como externos. Partiremos desde fines de los años cincuenta en adelante con la descripción de los movimientos nacionalistas y corporativistas desilusionados de la administración de Ibáñez, para seguir con la relación que tempranamente estableció el Partido Demócrata Cristiano con los Estados Unidos; con un análisis de ciertos documentos del Partido Nacional expresivos de la conversión de la derecha tradicional al nacionalismo; y, en fin, con los avatares del proceso político conducente al golpe del 11 de septiembre, considerando a los efectos el posicionamiento que en tal proceso asumieron los distintos partidos, incluyendo en ese cuadro la decisiva intervención estadounidense, para terminar con un análisis crítico de la llamada «transición a la democracia».

CAPÍTULO 9

La rearticulación posibañista del nacionalismo y del corporativismo

Con el fracaso del gobierno de Ibáñez, que finalizara en 1958, se cerró un ciclo en la historia de los movimientos nacionalistas. Estos, al frustrarse la segunda administración del General, en cuya persona habían cifrado tantas esperanzas, sufrieron una derrota de magnitud.¹ Dicho Gobierno había terminado sometiéndose al orden demoliberal, definido por el nacionalismo como factor de crisis y decadencia nacional. La conclusión que sacaron los nacionalismos de esta experiencia fue categórica: su ideario no podía basarse en la fragilidad de los caudillos, sino que requería sustentarse en algo más sólido. A partir de esta premisa pusieron su vista en las Fuerzas Armadas institucionalmente consideradas. Coherente con dicha conclusión, la derecha nacionalista hizo ingentes esfuerzos durante los años sesenta por estrechar vínculos con los uniformados. Estos debían materializar su proyecto.

Las Fuerzas Armadas hacía mucho tiempo que habían recuperado el espíritu de cuerpo perdido a comienzos de los años treinta, cuando se insertaran en la política a través de una serie de golpes de Estado, iniciados en 1924; y, sobre todo, distaban mucho de ser las mismas, principalmente en razón de que habían pasado de la égida alemana a la estadounidense. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial y la subsecuente Guerra Fría habían hecho

¹ Sobre este tema, véase Verónica Valdivia: *Nacionalismo e ibañismo*, Serie de Investigaciones, núm. 8, Universidad Blas Caña, 1995.

irreversible ese tránsito, consolidado mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado por Chile en 1947 durante la Conferencia de Río de Janeiro. El tratado reforzó el lugar de las Fuerzas Armadas chilenas dentro de los esquemas de la defensa hemisférica que los Estados Unidos habían impuesto a las naciones latinoamericanas, primero –antes del mencionado tratado–, en contra de las potencias del Eje; y luego, una vez vencidas estas, en contra de la URSS. Todo ello vino unido a las correspondientes misiones militares estadounidenses en el país, las asesorías, los ejercicios conjuntos e, inevitablemente, las influencias ideológicas, cuyo elemento central no sería otro que la consideración del comunismo y de sus aliados como enemigos de la nación e instrumentos del bloque soviético.

Como se dijo en el capítulo anterior, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 vino a modificar en alguna medida el esquema señalado. Desde ya obligó a los Estados Unidos a reconceptualizar el papel de las Fuerzas Armadas del continente, postulando que su tarea principal no sería ya la defensa hemisférica, ni de las fronteras, sino el combate, dentro del respectivo país, en contra de las emergentes corrientes anticapitalistas y, por tanto, anties-tadounidenses, las que pasaron a ser rotuladas como el «enemigo interno». Esto se expresó en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), la cual se estructuró con base en la misma matriz dicotómica que caracterizara al conservadurismo antiliberal, la que oponía un bien absoluto a un mal absoluto a erradicar.

Agreguemos que a la fecha la derecha antiliberal –nacionalista y corporativista– debió recomponerse en un contexto caracterizado por otro factor relevante: el alza del movimiento popular y de la izquierda. Esta última, organizada en el Frente de Acción Popular (FRAP) –cuyo núcleo estaba compuesto por los partidos comunista y socialista–, había estado a punto de ganar las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, en las que se impusiera la derecha, con su candidato Jorge Alessandri Rodríguez. Salvador Allende quedó en segundo lugar por una diferencia de solo treinta mil votos. El alza de las luchas populares y el auge de las ideas anticapitalistas advenidas en el continente luego de la Revolución Cubana pronto harían prever a no pocos que Salvador Allende obtendría el triunfo en las presidenciales de 1964.

Tradicionalismo y nacionalismo antes de 1964

El nacionalismo no se desanimó ante la clara tendencia izquierdizante que, sobre todo en los años sesenta, se insinuó en el país. A contrapelo, terminó radicalizándose aún más. Por entonces, los grupos nacionalistas –y corporativistas– pasaron a considerar que ante el alza de la izquierda la hora decisiva se acercaba, la cual requeriría no de soluciones parciales, sino más bien totales. Desde dichos supuestos estimaron que la propia dinámica de los hechos llevaría a los militares a intervenir en política y a asumir el nacionalismo, desechando su adhesión al orden institucional demoliberal y, correlativamente, enfrentando a la izquierda. A juicio del nacionalismo, lo que tendría que quedar cada vez más en claro era que las disyuntivas presentadas al país eran en el fondo solo dos: o el comunismo o el nacionalismo, materializado este último en la acción de las Fuerzas Armadas. Esto equivalía a decir que la institucionalidad demoliberal era incapaz de detener el ascenso izquierdista. Por lo mismo, la única solución ante ello sería el golpe militar. Por cierto, esto último no se explicitaba del todo, pero constituía el punto de llegada de estas tesis.

Fiducia

Los primeros pasos, casi testimoniales, que evidenciaron el renacimiento de la derecha antiliberal en el país vinieron de parte del tradicionalismo. Este se organizó aproximadamente hacia fines de 1962, con la constitución de Fiducia, organización que publicó una revista del mismo nombre.² Todo indica que la entidad se inspiró en la obra del brasileño Plinio Corrêa de Oliveira, quien, a su vez, repitiera al pie de la letra las tesis de Agustín Barruel, Joseph de Maistre y Juan Donoso Cortés. El tema central de Fiducia fue el de la revolución y la contrarrevolución. Su propósito principal consistió en combatir al comunismo y en argumentar la tesis sobre la necesidad de una contrarrevolución orientada a restaurar el orden católico, con su correspondiente sociedad jerárquica, materialización del orden querido por Dios.

² Hernán Ramírez Necochea: «El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970», art. cit., p. 27.

Los miembros de Fiducia fueron escasos. De preferencia provenían del ámbito universitario, sobre todo de la Universidad Católica. Una parte importante de sus críticas se dirigieron en contra de las expresiones políticas del catolicismo *aggiornado*, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, al que acusaron de haberse pasado al campo de la revolución y traicionar las esencias católicas.

Acción Nacional

El nacionalismo se reorganizó al año siguiente al calor de la campaña presidencial de 1964. Entonces Jorge Prat, antiguo fundador del grupo Estanquero, levantó su propia candidatura fundando el Movimiento Acción Nacional. La entidad, a su juicio, debía ser el «dique que salvara a la nación, en el momento del inevitable desastre, y emprendiera la reconstrucción definitiva».³ Teniendo a la vista ese objetivo, Prat acentuó notoriamente la visión bipolar, que es tan típica del nacionalismo, articulada en torno a un sumo bien y un sumo mal disolvente de la nación, visualizando dicha dualidad a nivel planetario, con evidentes consecuencias para Chile. Prat sostuvo que «hoy día el mundo es presa de una lucha espantosa, de una lucha a muerte entre dos conceptos de la vida: el materialista y el cristiano».⁴ Y, en obvia referencia al bloque soviético, agregó: «el concepto materialista se ha encarnado en un imperio político que se expansiona por la conquista, por el terror o por la convicción y que está con el arma lista para dejarla caer sobre aquellos que se descuidan en su progreso, o que se esterilizan en la discusión».⁵

En este contexto, a juicio de Prat, Chile se hallaba en un acentuado proceso de disolución por obra del sistema de partidos, lo que equivale a decir, del régimen demoliberal, lo que facilitaría la conquista del país por el «comunismo internacional». En virtud de ello, Prat consideraba que los partidos «en vez de ser los pilares

³ Recopilación de discursos de Jorge Prat, en Mario Arnelo: *Proceso a una democracia. Pensamiento político de Jorge Prat*, Talleres Gráficos El Imparcial, Santiago, s. f., p. 145.

⁴ Jorge Prat: en Mario Arnelo: *Proceso a una democracia. Pensamiento político de Jorge Prat*, ed. cit., p. 217.

⁵ Ídem.

de la República, de la democracia, son precisamente, los cuchillos que están matando a la República y a la democracia».⁶

Frente a este cuadro, durante la campaña electoral, Prat propuso un régimen de autoridad que limitara la acción de los partidos y también la del Parlamento; que otorgara al Ejecutivo la iniciativa exclusiva en materia económica, y, en fin, que se gobernara con criterio técnico, sin injerencia partidista. El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), por su parte, lo apoyó.

El otro elemento de la propuesta de Prat se vinculaba con las Fuerzas Armadas. Estas, a su juicio, junto al poder judicial, eran las únicas instituciones sanas que le quedarían al país. Ellas constituirían las reservas últimas de la nación, razón por la cual debían hacerse cargo «no sólo de la integridad territorial, sino también de la integridad moral del país, y de la defensa de su organización interior y de sus leyes».⁷ Agregó Prat: «Naturalmente, en esta misión [...] no están en vitrina y son necesariamente pensantes».⁸ «Tenemos que ir preparando nuestras Fuerzas Armadas. ¡Cuán abandonadas las tenemos! ¡Cómo un concepto oligárquico, aristocrático ha ido, poco a poco, en nuestro país despreciando a la expresión de las Fuerzas Armadas! Y las ha ido dejando, en primer lugar, sin armas; en segundo lugar, sin hombres, porque los ha ido sitiando por el hambre».⁹ «Yo os digo que este movimiento [Acción Nacional] tiene que reivindicar para nuestro país una Fuerza Armada eficiente y capaz».¹⁰ «¿Es posible que por los temores de los políticos se esté negando a las Fuerzas Armadas la capacidad de actuar?».¹¹

A lo largo de 1964, Prat recorrió el territorio difundiendo estos planteamientos. Más adelante logró que esas concepciones fueran hechas suyas por la derecha refundada a través del Partido Nacional, al cual ingresó temporalmente.

La candidatura presidencial de Prat, sin embargo, al igual como ocurriera con la de la derecha tradicional, que apoyara a Julio Durán, terminó siendo bajada con el fin de unificar fuerzas en torno a la

⁶ *Ibíd.*, p. 179.

⁷ *Ibíd.*, p. 334.

⁸ *Ídem.*

⁹ *Ibíd.*, pp. 337-338.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 348.

¹¹ *Ídem.*

candidatura de Eduardo Frei Montalva y permitir así la derrota del candidato de la izquierda Salvador Allende, quien se perfilaba con posibilidades. De este modo, el nacionalismo volvía a postergar sus aspiraciones. Su momento todavía no llegaba, pero estaba cercano.

El triunfo del Partido Demócrata Cristiano en 1964 no hizo más que reforzar la radicalización de la extrema derecha, tanto nacionalista como corporativista. Los grupos nacionalistas vieron en el ascenso de dicho partido un paso más dentro del proceso de avance del comunismo y de la decadencia de la nación, proceso que, como se ha señalado, a su juicio solo los militares podrían detener.

CAPÍTULO 10

El Partido Demócrata Cristiano en los planes de los Estados Unidos y algunos textos representativos de la conversión de la derecha tradicional al nacionalismo

En los dos capítulos precedentes hemos sostenido que la cultura nacionalista y corporativista –es decir, el pensamiento antidemocrático chileno– que conceptuaba la realidad nacional como sujeta a un proceso de decadencia y disolución por obra de entidades infiltradas de origen extranjero a las que había que erradicar, vio ampliada su influencia en el país durante los años sesenta. Hemos sostenido que ello fue posible a través de la conversión de la derecha tradicional a tal ideologismo, ocurrida a partir de 1966 con la fundación del Partido Nacional, cuestión que fue correlativa a la disolución de los partidos conservador y liberal.

También hemos afirmado que los factores de esa reconversión fueron variados, pero los fundamentales se relacionan con el alza de dos fuerzas políticas que, como parte de sus proyectos de cambio, postularon modificaciones importantes en la estructura de la propiedad, lo que puso a la derecha –sustancialmente disminuida en los planos político y cultural– a la defensiva. Tales fuerzas fueron el Partido Demócrata Cristiano y el Frente de Acción Popular (FRAP), que agrupaba a la izquierda, la que en Chile se orientaba hacia el socialismo.

Al analizar en el capítulo 8 la redefinición ideológica y política nacionalista de la derecha, con sus respectivas condicionantes, sostuvimos que ella fue un factor fundamental en el derrumbe del orden institucional, materializado en el golpe del 11 de septiembre. Sin embargo, hay otro factor al que en el citado capítulo

mencionamos solo de pasada: la vinculación clandestina del Partido Demócrata Cristiano con los Estados Unidos, relación que, como veremos en capítulos posteriores, también incidirán en el golpe.

A partir de tales supuestos, el objeto de este capítulo es ahondar en ambas cuestiones. En lo que atañe a la Democracia Cristiana nos referiremos exclusivamente a los inicios de la relación clandestina que ella estableciera con agencias estadounidenses, según lo acredita el informe del Senado de los Estados Unidos, «Acciones encubiertas en Chile». Y en lo que se refiere al Partido Nacional, nos limitaremos a analizar ciertos documentos y pronunciamientos suyos para intentar visualizar su radicalidad y su lógica contraria a las instituciones demoliberales. Agregaremos ciertos antecedentes sobre otras fuerzas de extrema derecha actuantes a fines de los años sesenta; todo de acuerdo con el marco interpretativo perfilado en el capítulo 8.

La influencia estadounidense en el Partido Demócrata Cristiano

Si bien ideológicamente el Partido Demócrata Cristiano perfiló sus concepciones bajo influencias ideológicas europeas (Jaques Maritain y la Doctrina Social de la Iglesia Católica), a comienzos de los años sesenta su organización y no pocas de sus concepciones políticas fueron subrepticamente moldeadas en importante medida por agencias estadounidenses, las que pasaron a financiarlo. Esto hizo que, entre los partidos políticos chilenos, a la larga el Partido Demócrata Cristiano fuera el más ligado a la política exterior de los Estados Unidos.

Son numerosos los antecedentes que atestiguan lo dicho, los cuales se hallan sobre todo registrados en documentos desclasificados estadounidenses, especialmente en el llamado Informe Church, elaborado por el Senado de los Estados Unidos y dado a conocer en 1974 con el nombre de «Acciones encubiertas en Chile».

La estrecha relación que a poco de fundado terminó generándose entre el Partido Demócrata Cristiano y Washington en lo esencial tuvo su raíz en el cuadro político que, como producto de la Revolución Cubana, se configuró en la región. Como se sabe,

dicha revolución cuestionó la dominación estadounidense sobre América Latina –su «patio trasero»–, lo que obligó a Washington a tomar medidas dirigidas a contrarrestar ese riesgo. Antes que nada, había que impedir que surgiera una nueva Cuba. A esos fines, como se dijera en el capítulo 8, los Estados Unidos, por una parte, impulsaron la Alianza para el Progreso, la que debía llevar a cabo un proceso de modernización capitalista de nuestros países evitando así el caldo de cultivo revolucionario; y, por la otra, asignar a las Fuerzas Armadas de la región la tarea de combatir al «enemigo interno», es decir, combatir a las fuerzas anticapitalistas y antimperialistas.

El Informe Church dice que, en ese marco, Washington decidió seleccionar un país latinoamericano donde la implementación práctica de la Alianza para el Progreso alcanzara un rango modélico para mediante ello levantar un exitoso contramodelo a la Revolución Cubana.

El país donde debía implantarse ese contramodelo era Chile. Para optar por esta alternativa, se tuvieron en consideración dos razones fundamentales. La primera se relacionaba con la suficiente solidez que tenía el aparato institucional del país como para ejecutar exitosamente el programa de modernización capitalista que había que llevar adelante. La segunda se refería a la existencia en Chile de una poderosa izquierda marxista que, con Salvador Allende, había estado a punto de ganar las elecciones presidenciales de 1958, a la cual había que cerrarle el paso en las presidenciales de 1964 en las que presentaba posibilidades ciertas de éxito.

Conjuntamente otra decisión importante tomada por Washington fue seleccionar y apoyar a un partido político chileno para que se encargara de llevar a cabo el proyecto de modernización capitalista implicado en la Alianza para el Progreso, asegurando que triunfara en las presidenciales de 1964 y accediera al gobierno. Ese partido fue el Demócrata Cristiano.

A este respecto, en el informe del Senado de los Estados Unidos «Acciones encubiertas en Chile» se dice que «el 2 de abril de 1962 la CIA entregó dos informes al grupo especial referente a qué partido respaldaría Washington en las presidenciales de 1964. Uno de ellos proponía apoyar al Partido Demócrata Cristiano, [y] el otro recomendaba al Partido Radical». Pese a que esta decisión,

agrega el informe, «parece haber comenzado como un esfuerzo por aumentar las posibilidades [de derrotar a la izquierda en las elecciones de 1964 respaldando] a dos candidatos a la presidencia, terminó siendo una estrategia para apoyar al candidato demócrata cristiano».¹ Sería este partido el que, en consecuencia, llevaría a cabo en Chile el proyecto de cambio estructural y de modernización capitalista que a nivel continental debía convertirse en un atractivo contra modelo a la Revolución Cubana.

Una vez que Washington tomó la referida decisión, comenzó el financiamiento clandestino del Partido Demócrata Cristiano por la CIA. «Acciones encubiertas en Chile» –de ahora en adelante Informe Church por el nombre del senador que presidió su confección–, sostiene que, en efecto, el mismo año de 1962 «el Grupo Especial aprobó 50.000 dólares para fortalecer al partido demócrata cristiano (PDC)»,² y que «el 27 de agosto del mismo año aprobó el uso de un canal de financiamiento a través de un tercer país, presupuestando ciento ochenta mil dólares (US\$180.000) para los demócratas cristianos chilenos durante el año fiscal de 1963».³ El Informe añade: esa «asistencia de la CIA ayudó a que el Partido Demócrata Cristiano estableciera una extensa organización a nivel de barrios y pueblos».⁴ Igualmente el Informe sostiene que en mayo de 1964, «el grupo especial aprobó 160.00 dólares para apoyar a pobladores y organizaciones campesinas del PDC»,⁵ y que lo que se pretendía con ello era «contrarrestar el crecimiento de un sólido espíritu izquierdista y organizacional entre trabajadores, campesinos y pobladores».⁶ El informe menciona también que la CIA, desde antes de 1964, financió un programa destinado a aumentar el apoyo demócrata cristiano entre sectores del campesinado y pobladores para ayudar a capacitar y organizar «anticomunistas» y que una

¹ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», en Cristian Opaso (comp. y trad.): *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Ed. Ornitorrinco, Santiago, s. f., p. 49.

² *Ibidem*, p. 131.

³ *Ibidem*, p. 50.

⁴ *Ibidem*, p. 54.

⁵ *Ibidem*, p. 131.

⁶ *Ibidem*, p. 58.

denuncia pública sobre el financiamiento a dicho programa por parte de la CIA «forzó su clausura».⁷

Así, desde muy temprano, Washington vio en el Partido Demócrata Cristiano un instrumento apto para llevar a cabo sus objetivos en Chile y en América Latina, particularmente aquellos dirigidos a frenar a la izquierda y levantar un contramodelo atractivo a la Revolución Cubana. A tales efectos, la CIA financió a la colectividad y contribuyó a su desarrollo organizacional. Sin embargo, debe precisarse que ese financiamiento fluía hacia el sector conservador del partido, el que era más proclive al país del Norte, como lo argumentaremos más adelante.

Durante la campaña presidencial de 1964 el mencionado financiamiento alcanzó dimensiones considerables. Entonces, dice el Informe Church, los Estados Unidos «financiaron más de la mitad de la campaña del candidato demócrata cristiano [Frei]», aparte de que «la oficina local [de la CIA] brindó apoyo a una variedad de grupos pro-demócratas cristianos del ámbito estudiantil, femenino, profesional, campesino».⁸ Adicionalmente, el Informe sostiene que la oficina local de la CIA «asistió a los demócratas cristianos para llevar a cabo una campaña al estilo “norteamericano” que incluyó sondeos de opinión pública, registros de nuevos votantes, y campañas intensivas de captación de votos, [además] de acciones encubiertas de propaganda».⁹

A esto se agrega el financiamiento de la CIA a la llamada «campaña del terror» en contra de la izquierda. El Informe Church añade al respecto que dicha campaña:

[...] hizo abundante uso de imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos, que estuvo dirigida especialmente a la mujer. Cientos de miles de copias de la carta pastoral anticomunista del Papa Pío XI fueron distribuidas por organizaciones demócrata cristianas. Se recurrió también a campañas de «desinformación» y «propaganda negra» —material que supuestamente provenía de otra fuente, por

⁷ *Ibidem*, p. 56.

⁸ *Ibidem*, p. 38.

⁹ *Ibidem*, p. 39.

ejemplo, del Partido Comunista. La campaña propagandista fue enorme.

El Informe agrega que «la CIA considera la campaña anticomunista del terror como la actividad más eficaz que realizaron los EE. UU. a favor del candidato demócrata cristiano». Las posibilidades de triunfar en los comicios de septiembre de 1964 se vieron ampliadas para el candidato de la Democracia Cristiana cuando la derecha le brindó su incondicional apoyo con el fin de evitar el «mal mayor», esto es, el triunfo de la izquierda.

Este hecho, más la fuerte «campaña del terror» financiada por la CIA en contra de la izquierda, se tradujo en un claro triunfo del candidato demócrata cristiano, el que obtuvo más del 50 % de las preferencias.¹⁰ Luego de los comicios, «un estudio de la CIA concluyó en que la intervención estadounidense permitió que Eduardo Frei obtuviera mayoría absoluta en la elección de 1964 en vez de una mayoría relativa».¹¹

La mencionada relación entre los Estados Unidos y el Partido Demócrata Cristiano no cesó en 1964. El Informe Church sostiene que entre ese año y 1970, «la CIA llevó a cabo diversas acciones clandestinas en Chile. Operando en medio de distintos sectores de la sociedad, esas actividades tenían por objeto fortalecer los grupos que apoyaban al Presidente Frei y que se oponían a las influencias marxistas».¹² A ello se agregaba un abundante apoyo crediticio al Gobierno del Partido Demócrata Cristiano. El Informe Church señala que durante el gobierno demócrata cristiano, Chile recibió el promedio de ayuda per cápita más alto que ningún otro país del hemisferio. Añade que «entre 1964 y 1970, de 200 a 300 millones de dólares en líneas de crédito de corto plazo estaban continuamente disponibles para Chile en bancos privados americanos».¹³

De este modo, la Democracia Cristiana se convirtió en una aliada extremadamente importante para la ejecución de los objetivos estadounidenses en Chile y en América Latina, lo que, por otra parte, no significa que la colectividad no tuviera sus propios inte-

¹⁰ *Ibidem*, p. 51.

¹¹ *Ibidem*, p. 54.

¹² *Ibidem*, p. 55.

¹³ *Ibidem*, p. 29.

reses y que no luchara por ellos, aunque lo hiciera en el marco de una soterrada alianza con Washington, al menos por parte de su sector conservador.

La metamorfosis conservadora antiliberal de la derecha según sus documentos

Como viéramos en el capítulo 8, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, por las razones que allí se señalan, la derecha tradicional redefinió sus identidades ideológicas transitando desde el liberalismo al nacionalismo. La radicalidad de esas redefiniciones se pone de manifiesto cuando se examinan algunos de sus documentos.

La «Declaración de principios» del Partido Nacional partía del supuesto de que Chile vivía una «etapa de decadencia que [era] necesario superar reviviendo el impulso vital del pueblo». A partir de tal diagnóstico este partido se propuso «instaurar un nuevo orden político, económico y social»,¹⁴ con lo que, en el fondo, sostenía una voluntad dirigida a modificar el sistema institucional en un sentido autoritario, vinculado a la instauración de un proyecto global que contenía un capitalismo modernizado; proyecto que más adelante –solo más adelante– devendrá en neoliberal.

En cuanto a la institucionalidad política, la «Declaración de principios» del Partido Nacional, distanciándose de los esquemas demoliberales, postuló que la colectividad lucharía «por instaurar una democracia orgánica»,¹⁵ fórmula que hasta entonces era privativa de los grupos nacionalistas y corporativistas del país.

Otra de las formulaciones relevantes de la «Declaración de principios» del Partido Nacional guardaba relación con las Fuerzas Armadas. Al respecto asumía las reivindicaciones corporativas de estas al plantear que se las debía dotar «de los medios necesarios para el cumplimiento integral de sus funciones propias», para incorporarlas al desarrollo nacional.¹⁶ Igualmente ilustrativo es el

¹⁴ Partido Nacional: «Fundamentos doctrinarios y programáticos», Chile, 1966. <www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0037002.pdf>, p. 1.

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ *Ibidem*, p. 9.

llamado que hace a los chilenos la Declaración a «participar en una gran lucha por vencer su sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, [y] a entregarse a ideologías foráneas».¹⁷

En lo que se refiere al plano económico, la «Declaración» evidencia el rechazo de la derecha al modelo ISI, lo que se manifiesta cuando el texto postula que «el Partido Nacional reconoce la importancia de los capitales extranjeros en el desarrollo económico, pero dentro de una absoluta igualdad con los capitales chilenos»,¹⁸ cuestión esta última en lo que difería del todo con dicho modelo. Esto queda aún más claro cuando la Declaración llega a insinuar el principio de subsidiaridad, tan propio no tan solo del neoliberalismo, sino también del corporativismo y su teoría de los cuerpos intermedios. Dice al respecto: «la intervención del Estado es necesaria en la orientación del desarrollo económico y *en todos aquellos aspectos en que la iniciativa privada sea insuficiente*».¹⁹

A partir de las mencionadas definiciones contenidas en la «Declaración de principios» del Partido Nacional, la preocupación principal de esta «derecha renovada» pasó a ser una lucha sistemática en contra del gobierno demócrata cristiano. Un profundo abismo se había abierto entre este y los sectores derechistas luego de que el presidente Eduardo Frei Montalva llevara a cabo un programa de cambios significativos que hería los intereses conservadores. Entonces, desde su ideologismo nacionalista, el Partido Nacional acusó a la Democracia Cristiana de «pavimentar el camino al comunismo» y, todavía más, de ser ella misma «cripto comunista». A la par vio en Eduardo Frei Montalva una especie de Kérenski que inconscientemente arrastraba al país al caos, acusación que se vio acentuada en la medida en que las movilizaciones sociales y la radicalización política se hacían más amplias durante los últimos años del gobierno del Partido Demócrata Cristiano.

En este contexto, la derecha fue radicalizando su discurso. Frente a la crisis del país de la que responsabilizó al gobierno de Frei, y ante el alza de las luchas populares, apeló sintomáticamente a aquellos componentes del Estado cuyo personal no dependía del

¹⁷ *Ibidem*, p. 11.

¹⁸ *Ibidem*, p. 9.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 7-8. Las cursivas son mías.

comportamiento electoral de la población: las Fuerzas Armadas y el poder judicial. Así, ya a poco más de un año de ser creada, en agosto de 1967, la colectividad sostuvo:

El gobierno de Frei es víctima, en lo interno, de la crisis de autoridad más aguda de este siglo en nuestro país [...], como en anarquías anteriores, tal estado de cosas sólo puede ser detenido con un régimen de autoridad encausado por un gobierno fuerte, impersonal y nacional [...]. Mantenemos toda nuestra fe en los superiores destinos de la patria y en el sentido de acendrado deber de justicia que siempre ha distinguido tanto al Poder Judicial como a las Fuerzas Armadas.²⁰

Como se ve, la «Declaración» deja en evidencia que las reformas llevadas a cabo por Frei –y el alza de los sujetos mesocráticos y populares– eran homologadas por el Partido Nacional con la anarquía, debiendo, a su juicio, ser las Fuerzas Armadas y el poder judicial el antídoto a ella. Tal era la lógica que se abrió paso en su seno.

No está de más insistir en que la dicotomía entre anarquía y orden era en realidad una antigua herencia del pensamiento conservador antiliberal, la que en Chile fuera ya planteada en 1903 por Alberto Edwards –creador del mito portaliano–, y fuera siempre utilizada como argumento principal para postular la supresión del régimen demoliberal –que llevaría al país a la decadencia y a la disolución–, y para proponer su reemplazo por distintas modalidades de autoritarismo. El modelo que estaba por entonces en el subconsciente de los dirigentes del Partido Nacional –y a veces en su conciencia explícita– era precisamente ese, encarnado en la figura de Diego Portales, quien ponía fin, con un golpe de fuerza, a la anarquía que durante los años veinte del siglo ^{xix} amenazaba con la disolución nacional, golpe que, según la historiografía conservadora, habría dado paso a un régimen de orden y autoridad que conduciría al país a su apogeo. Esta creciente radicalidad que fue caracterizando al Partido Nacional pronto se verá acentuada, como se argumenta a continuación.

²⁰ «Declaración del Partido Nacional». Citada por Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile* (2da. edición), Ed. América en Movimiento, Santiago, 2018, pp. 118-119.

La Nueva República: consolidación del nacionalismo y del antiliberalismo en el Partido Nacional

Con motivo de las elecciones de 1970, el Partido Nacional expuso el conjunto de sus concepciones políticas, económicas e ideológicas en un voluminoso documento titulado *La Nueva República: respuesta al desafío de Chile*. Aparte de exponer en él los rasgos fundamentales de su proyecto global, el Partido Nacional evidenció al mismo tiempo cuánto había avanzado en la consolidación de su identidad nacionalista y antiliberal. De allí que el estudio de este texto revista gran importancia.

Entrando en ese propósito, cabe decir que de partida *La Nueva República* diagnosticó una crisis integral en el país, al tiempo que hizo gala de una clara voluntad refundacional de este, antes que nada en lo relativo al régimen político, cuestión que consideró urgente. «Chile vive la peor crisis política de este siglo. Nuestras instituciones políticas son peligrosamente inadecuadas para la época actual, comprometiendo la estabilidad del país. Los partidos políticos perdieron de vista sus verdaderos objetivos, transformándose en sociedades de socorros mutuos, esclavos de su ideologismo excesivo y de intereses extranjeros».²¹ Y agregaba: «la nueva república significa una renovación política total a través de la reforma constitucional y de profundos cambios en el espíritu y conducta de los partidos».²²

Como puede verse, este texto explicitó dos tesis clave a los efectos de discernir la identidad nacionalista y antiliberal del Partido Nacional. La primera es la referente a que las instituciones democráticas entonces vigentes serían «peligrosamente inadecuadas»; y la segunda, que los partidos eran instrumentos de intereses extranjeros disolventes de la nación. Claro está que, respecto a esta segunda tesis, curiosamente *La Nueva República* exceptuó de tal acusación a las colectividades derechistas. Los instrumentos de los intereses extranjeros, por tanto, serían solo los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana. En esta línea *La Nueva República* señaló:

²¹ Partido Nacional: *La Nueva República: respuesta al desafío de Chile*, p. 15.

²² Ídem.

El mayor perjuicio causado a Chile por los partidos de izquierda [es] de orden espiritual, porque atentan contra el sentido mismo de nacionalidad. La izquierda ha demostrado un creciente desapego de la realidad y la tradición chilenas, y un afán no disimulado de ligar su suerte y su destino a movimientos políticos internacionales con dirección y financiamiento foráneo. La proyección de estas actitudes hacia las actividades culturales ha significado una pérdida progresiva de la conciencia nacional, de la independencia de criterio para abordar los problemas del país y, lo que es lo más grave, el debilitamiento de la fe en el porvenir de Chile como nación independiente.²³

Y con respecto al Partido Demócrata Cristiano, *La Nueva República* argumentó el carácter foráneo que tendría señalando que se hallaba «afiliada a la democracia cristiana internacional, de la cual ha recibido financiamiento».

Según *La Nueva República*, las soluciones propuestas al país tanto por la izquierda como por el Partido Demócrata Cristiano estaban condenadas al fracaso justamente debido a que «sus teorías [tenían] un origen extranjero y no correspond[ían] en absoluto a la realidad nacional».²⁴ En este esquema, adicionalmente, los partidos de centro e izquierda figuraban como obstáculos en la tarea de superar la decadencia en la cual Chile se hallaría sumido. Ello no solo debido a que expresarían intereses extranjeros, sino también en virtud de que serían funcionales a la lucha de clases, la que, a su vez, impediría la unidad nacional, la cual constituiría un requisito de la recuperación del país. La lucha de clases, según *La Nueva República*, habría sido instaurada en Chile por los partidos izquierdistas, los que habrían contado para ello con la complicidad del centro. Tal lucha le parecía al Partido Nacional artificial y destructora, por lo cual había que erradicarla reemplazándola por un espíritu de unidad nacional. Pero en tal perspectiva, por las razones anotadas, se chocaría de nuevo con el negativo papel de los partidos.

El sistema de partidos –lo que equivale a decir el régimen demoliberal– era en síntesis lo que, a juicio del Partido Nacional, antes

²³ *Ibíd.*, p. 11.

²⁴ *Ibíd.*, p. 17.

que nada había que cambiar. Sin ello no se revertiría el proceso de decadencia que conducía a la disolución nacional. De tal modo, el discurso de la derecha a través de *La Nueva República* terminó estructurándose en torno de aquella dicotomía en la que aparecían enfrentados la nación y los intereses extranjeros, en donde los partidos (con excepción de los de la derecha) se hallarían vinculados a estos últimos. Tal lógica, sin duda, es altamente expresiva del viraje radical que por entonces experimentó la derecha, el cual, dicho sea de paso, la historiografía no ha ponderado suficientemente.

Es cierto que en *La Nueva República* el Partido Nacional todavía no propuso poner fin al sistema de partidos, aunque sí afirmó la necesidad de avanzar hacia su reforma radical, al minimizar su papel dentro del sistema institucional. Sin embargo, lo fundamental no reside aquí, sino en el hecho de que caracterizó al grueso de los partidos políticos como instrumentos de intereses foráneos destructores de la nación, lo cual los hacía potencialmente ilegítimables; por tanto, entre tal conceptualización y la posible proscripción del sistema partidario había una coherencia lógica. Tres años después, en el mismo momento de su autodisolución luego del golpe militar, el Partido Nacional dará tal paso al apoyar incondicionalmente la clausura de la institucionalidad democrática existente, luego de esforzarse durante ese mismo lapso en crear las condiciones de ingobernabilidad requeridas para ello.

En resumen, estamos en presencia de una gran inflexión ideológica, de enormes consecuencias prácticas. ¿Cuál es la esencia de tal inflexión? Su esencia consistió en que el Partido Nacional asumió el ideologismo conservador antiliberal de tipo nacionalista desarrollado sobre todo durante el siglo ^{xix} y primera parte del ^{xx} en Europa, y cuyo apogeo se diera entre ambas guerras mundiales; ideologismo que encontró su forma más radical en el fascismo y el nazismo, y su forma algo más moderada en el franquismo y el integralismo portugués. Este esquema ideológico postula la existencia de un absoluto positivo —que suele ser precisamente la nación—, el que se supone amenazado por un enemigo externo que se infiltraría en su seno, dando lugar a un «enemigo interno», el cual suele ser la masonería, el judaísmo, el marxismo, el comunismo, la subversión, etc. Dentro de este esquema ideológico, la persistencia del bien absoluto (la nación) supone la destrucción

del mal absoluto, siempre concebido como vinculado al extranjero. Tal destrucción, por lo demás, requeriría necesariamente el reemplazo del régimen demoliberal, suponiendo que este sería la premisa para la exitosa infiltración del enemigo destructor de la nacionalidad. Dicha infiltración, por lo demás, en la medida en que progresara, daría lugar a la decadencia del país en la perspectiva de su disolución final. Para estas concepciones nacionalistas antiliberales, liberalismo y comunismo son dos momentos de un proceso histórico único conducente al aniquilamiento de la nación. Frente a tal proceso este ideologismo, como lo hemos señalado reiteradamente, postula la necesidad de una decisión salvadora, que suele asociar a las Fuerzas Armadas concebidas como última reserva de la nación amenazada.

Este esquema doctrinal –en realidad «foráneo»– fue profundizado en lo esencial por el Partido Nacional en *La Nueva República*. Los acontecimientos en curso entonces en el país –es decir, la emergencia de los sujetos mesocráticos y populares, con sus correspondientes proyectos anticapitalistas– pasaron a ser decodificados por dicho partido en clave de tal esquema. Eso explica que todos los partidos, con excepción de los de la derecha, en la visión del Partido Nacional terminaran apareciendo como «instrumentos de intereses extranjeros»; del mismo modo como la institucionalidad demoliberal que entonces tenía el país pasara a figurar como «peligrosamente inadecuada».

A través de tales esquemas apriorísticos, que ciertamente deslegitimaban al orden demoliberal y al sistema de partidos, el Partido Nacional sentaba las bases teóricas de la futura dictadura militar y sus correlativos crímenes masivos considerados como indispensables para salvar a la «patria» de sus enemigos internos, tanto más cuando como parte del mismo ideologismo, la colectividad introdujera en el debate político el tema del papel de los militares en el orden institucional.

Esta temática fue planteada por el Partido Nacional de modo bastante coherente con las premisas doctrinales nacionalistas que había sentado. En efecto, la dualidad entre la nación y los elementos extranjeros que pretenderían destruirla desde dentro suponía, a su juicio, identificar una fuerza lo suficientemente poderosa, concebida como esencialmente ligada al ser nacional, capaz de servir a los

fines de una reacción salvadora y rectificadora. Tal fuerza, a juicio de *La Nueva República*, eran los militares, porque así como el polo contrario a la nación estaría encarnado en los partidos de izquierda y de centro, beneficiados por una institucionalidad demoliberal «peligrosamente inadecuada», el polo de la nación se personificaría en alto grado en las Fuerzas Armadas (y políticamente en el propio Partido Nacional). Por lo mismo, la lógica del pensamiento de este partido y de su documento *La Nueva República* conducía a la minimización del papel de los partidos y a la potenciación del rol de las Fuerzas Armadas dentro del sistema político.

Estas premisas en *La Nueva República* se tradujeron en la tesis según la cual las Fuerzas Armadas debían responder de la seguridad interna del Estado para evitar que este pudiera ser destruido desde dentro por las fuerzas contrarias a la nación o por organizaciones internacionales al servicio de intereses foráneos. Para cumplir con eficacia todas estas tareas, las Fuerzas Armadas debían «disponer de los medios necesarios y de una adecuada intervención en la administración y el desarrollo del país».²⁵

A través de tales definiciones, la derecha, al concebir el eje de la lucha política en torno a la oposición de intereses nacionales y extranjeros, construía una visión de la política entendida como una guerra entre patriotas y antipatriotas. En ella, como se ha visto, debían involucrarse las Fuerzas Armadas por cuanto en el conflicto en curso supuestamente se decidiría la supervivencia de la nación. En esta guerra la persistencia del sistema demoliberal jugaría a favor del «enemigo», que lo utilizaría en su beneficio.

Estas tesis ya habían sido formuladas durante los años cuarenta por Jorge Prat a través de la revista *Estanquero* y luego de *Acción Nacional*. Aunque en rigor quizás quepa remontarse incluso a los años treinta, en particular a los planteamientos de Jorge González von Marées, y al Movimiento Nacional Socialista (MNS) y sus vástagos, quienes ante la falta de apoyo electoral que concitaran sus planteamientos, confiaban en que estos podrían ser llevados a la práctica mediante la acción de los uniformados.

²⁵ Partido Nacional: *La Nueva República: respuesta al desafío de Chile*, ed. cit., p. 89.

En 1970, y aun desde 1966, tales puntos de vista fueron asumidos por la derecha tradicional a través del Partido Nacional sin que nadie se percatara de sus profundas implicancias. Estas, por cierto, eran todavía mayores si además se tiene en cuenta que en su lógica fundamental tal ideologismo coincidía con la Doctrina de la Seguridad Nacional que las Fuerzas Armadas habían recepcionado a instancia de los Estados Unidos.

Estamos, pues, en las antípodas de las concepciones democráticas y liberales hasta entonces predominantes en Chile. En el contexto descrito ¿no era inevitable que dadas sus definiciones ideológicas nacionalistas, la derecha tendiera a identificar cualquier proceso de cambios que afectara a sus intereses con una amenaza a la nación misma y acudiera por este concepto a las Fuerzas Armadas? Tal fue precisamente lo que ocurrió durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y con más fuerza aún una vez verificado el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.

Luego del 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet reiterará hasta el infinito durante toda su dictadura las mismas tesis de la derecha civil, en las cuales, por lo demás, fundará la llamada «nueva institucionalidad» contenida en la Constitución de 1980. También se fundará en ellas, y en las Doctrinas de la Seguridad Nacional, la llamada «guerra interna», es decir, la política de eliminación del «enemigo interno», cuya consecuencia más notoria fue los detenidos desaparecidos y otros crímenes masivos.

El que las Fuerzas Armadas pudieran compartir las concepciones nacionalistas de la derecha referidas arriba ni remotamente figuraba en el imaginario de los políticos de entonces, imbuidos en la campaña presidencial de 1970. Esto, en buena parte, se hace comprensible a la luz de la total ignorancia que reinaba en los distintos partidos sobre los procesos ideológicos y políticos que se verificaban al interior de los cuarteles, sobre lo cual en otro lugar hemos dado algunos antecedentes. El mito sobre unas Fuerzas Armadas profesionales, desideologizadas, apolíticas y no deliberantes desempeñaba así su pernicioso papel.

Las otras organizaciones nacionalistas y tradicionalistas: gremialismo, Tradición, Familia y Propiedad, y Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista

La conformación del Partido Nacional no fue obstáculo para que otros grupos nacionalistas siguieran existiendo. El propio Jorge Prat pronto se retiraría de este partido con la convicción de que la única manera de enfrentar los problemas del país era desde fuera del sistema de partidos y mediante la acción directa de las Fuerzas Armadas. Fue así como, en el marco de la considerable alza de los sujetos populares y la radicalización del país hacia la izquierda, Prat enunciara en 1968 su tesis sobre el «vacío de poder». Este vacío, a su juicio, producido durante los últimos años en el país, habría de ser necesariamente llenado por una de las dos fuerzas decisivas existentes: «la internacional que representa el Partido Comunista, monolítico, prudente y premunido de un eficaz y probado plan de acción; o la nacionalista que ante la crisis partidista representan las fuerzas armadas chilenas, unificadoras y también preparadas».²⁶

Estos planteamientos equivalían evidentemente a un velado llamado a un golpe de Estado de extrema derecha, del cual las Fuerzas Armadas serían su órgano. También, como se señaló arriba, suponían que la institucionalidad demoliberal era impotente para detener a la izquierda en alza. Por lo mismo, se imponía una opción decisionista. Paralelamente se fueron desarrollando nuevas expresiones de la derecha corporativista, entre ellas el Movimiento Gremialista y Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

El gremialismo apareció como una respuesta de los estudiantes más conservadores de la Universidad Católica a la Reforma Universitaria entonces en curso, a la que consideraron como un medio que utilizarían los partidos a los fines de instrumentalizar a esa casa de estudios. De este supuesto se derivó la inicial pretensión de apoliticismo que caracterizara al movimiento. Su principal líder e ideólogo fue Jaime Guzmán —discípulo de Jaime Eyzaguirre y Osvaldo Lira—, quien le imprimiera a dicho movimiento una defi-

²⁶ Tacna núm. 3, citado por Verónica Valdivia: *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas*, ed. cit., p. 26.

nición ideológica corporativista y, por tanto, contraria a los esquemas partidistas propios del régimen demoliberal. El gremialismo se adhirió sobre todo a las formulaciones neotradicionalistas de Juan Vásquez de Mella, con su tesis sobre los cuerpos intermedios, la distinción entre soberanías sociales y políticas, y el principio de subsidiaridad. A partir de estos planteamientos el gremialismo no solo fue muy crítico de los partidos en general, sino también de los de la derecha, esto es, del Partido Nacional. Todo bajo el supuesto de que los problemas del país no podrían ser resueltos dentro del régimen partidista y del orden institucional vigente, al que consideraba agotado. Coherente con ello, la forma de hacer política del movimiento se verificó a través de la movilización de los gremios, lo cual por entonces parecía una novedad.

Tradición, Familia y Propiedad se constituyó en 1967. Según Hernán Ramírez Necochea, fue una derivación directa de Fiducia.²⁷ Sus definiciones ideológicas eran claramente tradicionalistas. Se hallaba fuertemente vinculada al tradicionalismo brasileño, a las concepciones de Plinio Corrêa de Oliveira y al régimen de Oliveira Salazar en Portugal. Su ideal apuntaba a una contrarrevolución católica que repusiera el orden natural. Desde esta óptica llevó a cabo una fuerte crítica doctrinaria al gobierno de Eduardo Frei Montalva, al que acusó de servir al comunismo. Incluso más, hizo publicar en Brasil por Fabio Vidigal Xavier da Silveira el libro, *Frei, el Kerensky chileno*, que luego haría circular profusamente en el país. Uno de los miembros destacados de Tradición, Familia y Propiedad fue nuevamente Jaime Guzmán.

Por su parte, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), cuyos principales ideólogos –discípulos de Osvaldo Lira– eran Juan Antonio Widow y Misael Galleguillos, fue aún más radical. En efecto, insistió en que se aproximaba la hora decisiva. Al igual que Jorge Prat, sostuvo que, ante la ejecutoria del gobierno de Frei, la opción que se le planteaba el país era el nacionalismo o el comunismo, y que el primero estaba encarnado en la intervención de las Fuerzas Armadas. Estas representarían a la «nación en armas», de donde resultaba su inevitable papel salvífico.

²⁷ Hernán Ramírez Necochea: «El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970», art. cit., p. 27.

Tales planteamientos eran argumentados y difundidos por el MRNS a través del periódico *Forja*, que según Aníbal Pérez, empezó a circular a mediados de 1969, cuyo propietario era Misael Galleguillos.²⁸ Análogos planteamientos eran hechos por el periódico *Tizona*. Estas publicaciones, según Verónica Valdivia,²⁹ llegaron a circular al interior de los cuarteles, donde sus artículos eran debatidos por los uniformados.

Luego del Tacnazo, las páginas de *Forja* hicieron la apología del general Viaux, ya en retiro. El número 8 del periódico incluso transcribió íntegramente el discurso que el general pronunciara el 7 de febrero de 1970 en el Círculo Español en una comida que en su homenaje le ofreciera el personal en retiro de las Fuerzas Armadas,³⁰ personal que de esta manera podía explicitar el ideologismo que, por razones legales, sus colegas de dentro de las filas no podían reconocer.

La irrupción del nacionalismo de derecha en el Ejército: hacia el golpe de Estado

La Reforma Agraria –que puso fin al orden tradicional en el campo–, el alza de la izquierda y del movimiento popular y su contrapartida, la radicalización de la derecha –que transitara desde el liberalismo al nacionalismo–, más la campaña del terror que la CIA implementara en el país a propósito de los comicios presidenciales de 1964 constituyeron un conjunto de procesos que polarizaron a la sociedad chilena. Tales procesos y la prédica de los distintos sectores de la derecha ya devenida en nacionalista –o que lo era con antelación– no dejaron de influir en las Fuerzas Armadas. Su efecto en estas fue estimular la irrupción del soterrado ideologismo nacionalista y antiliberal que subyacía en ellas, disimulado detrás de su constitucionalismo formal. Tal emergencia se verificó ante todo

²⁸ Aníbal Pérez: «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», cit., p. 56.

²⁹ Verónica Valdivia: *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas*, ed. cit., p. 45.

³⁰ Aníbal Pérez: «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», cit., p. 53.

en el Ejército, particularmente en el acuartelamiento del general Roberto Viaux Marambio en el regimiento Tacna, en Santiago.

Pero allí no terminó todo. En efecto, una vez separado de las filas, el general Viaux –como ocurriera desde los años treinta con muchos de los uniformados que dejaban el servicio activo– no hizo misterio de su ideologismo nacionalista. Contando con la simpatía de los oficiales en retiro agrupados en el regimiento Simbólico Santa Bárbara, Viaux, convertido ya en un verdadero líder del nacionalismo, en un banquete organizado en su honor por el general (R) Martínez Amaro, sostuvo que el país necesitaba un régimen de orden y autoridad. Agregó que «había llegado la hora de las grandes decisiones» conducentes a la construcción de un «nuevo régimen».³¹ El texto fue profusamente distribuido y dio lugar al movimiento Viene Viaux, del cual después saldría el Movimiento Nacionalista Tacna.

Mientras, en los cuarteles la inquietud se mantenía. «Entre otros, lo evidencia el hecho de que trescientos oficiales y suboficiales acudieran a presenciar los alegatos del caso Viaux en la Corte Marcial en una muda muestra de solidaridad».³² El nuevo comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider –que al año siguiente sería asesinado como producto de otro golpe nacionalista, esta vez con el fin impedir el ascenso de Salvador Allende al Gobierno–, debió prohibir dicha asistencia.

De tal modo, el general Viaux se fue transformando en el vínculo privilegiado entre una extrema derecha nacionalista sin grandes líderes y unas Fuerzas Armadas que eran concebidas por aquella como la institución destinada a llevar a la práctica su proyecto autoritario y antiliberal.³³ Aparte del amotinamiento del regimiento Tacna encabezado por Viaux, antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 1970 se registraron al menos otros dos complots golpistas, ambos llevados a cabo por seguidores de dicho caudillo. Uno se verificó en diciembre de 1969 y fue encabezado por el coronel Raúl Igualt, suegro de Viaux. El otro fue descubierto en

³¹ Citado por Verónica Valdivia: *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas*, ed. cit., p. 42.

³² Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., p. 132.

³³ *Ibíd.*, p. 133.

marzo de 1970. Su líder era el general Horacio Gamboa. De este complot también participaba el mayor Arturo Marshall, quien pronto se vinculó a diferentes movimientos nacionalistas, siempre encaminados al golpe.

Junto con la conversión del general Viaux en un verdadero líder del nacionalismo, proliferaron las publicaciones de la extrema derecha, como las ya mencionadas *Forja* y *Tizona*, que azuzaban a los uniformados para que dieran un golpe. Como ya se dijo, estas publicaciones circulaban dentro de las unidades militares. Según Verónica Valdivia, sus textos «fueron ampliamente discutidos por los oficiales llegándose, incluso, a que el Alto Mando debiera ordenar la requisición de los ejemplares para mantener la disciplina».³⁴

Los comicios presidenciales de septiembre de 1970 y la actitud de la derecha

Las expectativas del triunfo de Jorge Alessandri en los comicios presidenciales de septiembre de 1970 atenuaron la actividad golpista con la que terminó el gobierno de Frei. En esas circunstancias, la derecha nacionalista y corporativista se integró al Movimiento Independiente Alessandrista y al comando electoral de este candidato, confiando en su triunfo. Pero los resultados distaron mucho de ser los esperados. En efecto, en los comicios Salvador Allende obtuvo la primera mayoría con un 36,22 % de los votos. A muy poca distancia se ubicó el candidato de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, con un 34,89 %. Mientras que el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic llegaba en tercer lugar, con solo un 27,81 % de la votación.

Según estos resultados, la izquierda, agrupada en la Unidad Popular, debía asumir el Gobierno, previa ratificación de su candidato, Salvador Allende, por el Congreso Pleno, el cual –según lo estipulaba la Constitución–, cuando ninguna de las candidaturas obtuviera la mayoría absoluta, debía elegir entre las dos primeras mayorías relativas. Sin embargo, existía una tradición según la cual

³⁴ Verónica Valdivia: *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas*, ed. cit., p. 45.

el Congreso solía ratificar a la primera mayoría relativa, lo que en este caso favorecía a Salvador Allende.

El trauma que esta situación implicó para la derecha fue enorme, y se tradujo en el replanteamiento de las soluciones golpistas que había estado elaborando –e impulsando– durante el gobierno de Frei Montalva; ello, con sus correlativos discursos ideológicos que postulaban el enfrentamiento entre un bien absoluto y un mal absoluto. Pero esta vez las consecuencias serían trágicas.

CAPÍTULO I I

El gobierno de la Unidad Popular y la izquierda

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la derecha, en relación con sus posturas de fines de los años sesenta, se radicalizó todavía más, siempre manteniendo, y ahondando, las bases ideológicas nacionalistas y corporativistas que había venido asumiendo la casi totalidad de sus expresiones. Este decurso, claramente polarizador, se comprende adicionalmente a la luz de la radicalidad que, a su vez, evidenciara el proyecto de la Unidad Popular, el que, por lo demás, se comenzó a llevar a la práctica desde los mismos comienzos del gobierno de Salvador Allende. Las características de dicho proyecto quedaron con toda claridad perfiladas en el Programa de la Unidad Popular que la candidatura de Salvador Allende difundió a lo largo y ancho del país durante la campaña presidencial de 1970. Un breve esbozo de sus contenidos esenciales nos revela su naturaleza.

El programa de la Unidad Popular

El programa de gobierno de la Unidad Popular se sustentó en una caracterización precisa de la realidad nacional. A este respecto en sus páginas leemos lo siguiente: «Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan

precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente».¹

En referencia a la desnacionalización de los recursos fundamentales, principalmente en manos de capitales provenientes de los Estados Unidos, el programa señalaba además:

[...] los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por vía de los excedentes agropecuarios.²

En el plano político, la caracterización de la realidad nacional hecha por el programa de la Unidad Popular no fue menos categórica. Al respecto, sostuvo: «en Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto».³ Añadió que «a los dueños de capital», en favor de quienes se gobernaba, «les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno».⁴

Frente a esa realidad, el Programa definió el carácter que tendría el proceso de cambios que la Unidad Popular pretendía impulsar: «La tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo».⁵ La consecución de estos objetivos solo sería posible «si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente».⁶

¹ *Programa de la Unidad Popular*, Editorial 30 Años, s. f., pp. 12-13.

² *Ibídem*, p. 14.

³ *Ibídem*, p. 15.

⁴ *Ídem*.

⁵ *Ibídem*, p. 18.

⁶ *Ibídem*, p. 23.

Luego, el programa describió las transformaciones que en el plano político se implantarían en el país en el caso de que su candidato resultara triunfante. Al respecto afirmó que la Unidad Popular en el gobierno se empeñaría en «preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y en transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder».⁷

Seguidamente, el programa se refirió a los rasgos que caracterizarían a ese Gobierno: «El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un Ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado».⁸ Y añadió: «el Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de los marcos legales».⁹

El Programa también describió las profundas transformaciones que, en función de lo dicho, implementaría el gobierno de la Unidad Popular en el plano de la organización del Estado. Sobre el punto, señaló: «a través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura de poder», la cual se traduciría en una nueva constitución política. Esta, institucionalizará «la incorporación masiva del pueblo al poder estatal». Con tales fines, «se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder». Dicha Asamblea «será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión».¹⁰

El Programa precisó que «la generación de todo organismo de representación popular [se realizaría] por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles, militares, alfabetos y analfabetos». Y, aún más, precisó que «los integrantes de la Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular [estarían] sujetos al control de los electores,

⁷ Ídem.

⁸ Íbidem, p. 25.

⁹ Ídem.

¹⁰ Íbidem, p. 27.

mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos». ¹¹

El Programa señaló que el conjunto de estas transformaciones «abrirá paso al régimen político más democrático de la historia del país». ¹² Por otra parte, en el plano económico postuló la instauración de tres áreas de la propiedad: la social –base de un funcionamiento planificado de la economía–, la privada y la mixta. Formarían parte del área social:

- 1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
- 2) el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
- 3) el comercio exterior;
- 4) las grandes empresas y monopolios de distribución;
- 5) los monopolios industriales estratégicos;
- 6) en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país. ¹³

En cuanto al área de propiedad privada, el Programa la definió como la conformada por «aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanecerá vigente la propiedad privada de los medios de producción. Estas empresas en número serán la mayoría». Por otra parte, ellas serían «beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir la importante función que desempeñan en la economía nacional». ¹⁴ Asimismo el Programa agregó que el sector mixto «se compondrá de empresas que combinen capitales del Estado y de particulares». ¹⁵

Junto a la reestructuración de la economía en tres áreas, el Programa señaló la necesidad de acelerar el proceso de Reforma Agraria. En cuanto al plano externo, sostuvo: «la política inter-

¹¹ *Programa de la Unidad Popular*, cit., p. 28.

¹² *Ibíd.*, p. 23.

¹³ *Ibíd.*, pp. 31-32.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 32.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 33.

nacional del Gobierno Popular estará dirigida a afirmar la plena autonomía política y económica de Chile». Según ese criterio, el país establecería «relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su posición ideológica y política», todo ello «sobre la base del respeto a la autodeterminación y los intereses del pueblo de Chile». ¹⁶ El Programa también planteaba que el gobierno de la Unidad Popular en su política exterior promovería «un fuerte sentido latinoamericanista y antimperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías». ¹⁷

Aparte de lo dicho, el Programa de la Unidad Popular hizo una detallada exposición de medidas dirigidas a satisfacer las reivindicaciones populares en los planos de la salud, la educación, la cultura y otros. En resumen, postuló una profunda reestructuración del país, tanto en el plano de las relaciones de poder como en el de las relaciones de propiedad, y de la ubicación de Chile en el mundo. En consecuencia, su implementación práctica suponía el desplazamiento de las antiguas clases dominantes de su control del Estado y la riqueza, al tiempo que debía sacar a Chile de su tradicional subordinación a los Estados Unidos, es decir, toda una revolución: la revolución chilena. ¿Qué de extraño tiene que los poderes locales e internacionales afectados reaccionaran frente a ella con inusitada furia?

Lo paradójico del caso radica en que en el curso de la implementación de dicho Programa –al tiempo que los intereses afectados confluían en una verdadera «unión sagrada»–, los partidos de izquierda –desde ya dentro de la Unidad Popular– registraban importantes desencuentros. Al interior de la Unidad Popular, tal cosa sobre todo se verificó entre sus partidos eje –el Partido Comunista y el Partido Socialista–, los que, en efecto, evidenciaron divergencias tanto en cuestiones tácticas como estratégicas, lo cual debilitó al bloque de gobierno. Tales desencuentros, por cierto, distaban mucho de ser casuales: reflejaban las concepciones distintas que los mencionados partidos mantuvieron por décadas. En lo que sigue nos referiremos a ellas, sin lo cual el proceso político chileno se hace difícilmente inteligible.

¹⁶ *Ibidem*, p. 45.

¹⁷ *Ídem*.

La izquierda chilena

Lo primero que cabe reconocer al analizar la izquierda chilena durante los años sesenta es el hecho de que en ella predominaban abrumadoramente los paradigmas marxistas; por lo tanto, sus miras se orientaban en una perspectiva anticapitalista y socialista, la cual, acorde con sus paradigmas ideológicos, debía materializarse por medio de una revolución. Pese a este punto en común, la izquierda chilena en casi todo lo demás carecía absolutamente de homogeneidad, al punto de que es posible sostener que en la práctica lo que existían eran al menos dos izquierdas. Incluso más: solo por un limitado lapso histórico ambas marcharon juntas. Como dijimos, sus expresiones históricas principales, aunque no únicas, eran el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Una de esas izquierdas, al menos desde comienzos de los años sesenta en adelante, muy influida por la Revolución Cubana, hizo suya una concepción ortodoxa y rupturista sobre el tránsito al socialismo. Era el caso del Partido Socialista. En esa fecha, este partido ideológicamente giraba de manera esencial en torno a una mixtura trotskista-leninista, a lo que hay que agregar ciertas minoritarias incrustaciones socialdemócratas. Aquellos paradigmas ideológicos terminaron inclinando al partido hacia la temática de la resolución plena del problema del poder, fuera y en contra de la institucionalidad burguesa. El Congreso de Chillán, efectuado en 1967, fue claro al respecto. En sus resoluciones señaló:

[...] la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados

de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.

El congreso de La Serena, que celebrara este partido a comienzos de 1971, no derogó estas tesis. La otra y decisiva cara de dicha radical identidad del Partido Socialista era su total incapacidad para ligar su ortodoxia revolucionaria con su práctica real. De allí se derivaba un hecho de la mayor importancia; a saber, que su radicalidad no podía materializarse sino en el plano de la retórica. Esto venía unido a un notorio sectarismo expresado principalmente en la clara estrechez de su concepción de las alianzas sociales y políticas, cuestión que se manifestaba en su tesis sobre el Frente de Trabajadores. Con esta tesis, en efecto, el Partido Socialista se oponía en lo político a toda apertura de la izquierda hacia el llamado centro progresismo y, en lo social, hacia el pequeño y mediano empresariado.

Lo paradójico del caso residió en que más allá del referido ideologismo, como en una especie de evidente esquizofrenia, la colectividad seguía participando en el Parlamento, en las elecciones, en los sindicatos y, en general, en el sistema institucional vigente. Imbuida en estas prácticas, nunca se avino a materializar sus tesis radicalizadas ni alterar el orden establecido, lo que no quitaba que insistiera en su retórica radical.

Quizás una de las claves para entender esa dualidad radique en el hecho de que más allá de su importante influencia en el movimiento obrero, el Partido Socialista era en el fondo un partido de la pequeña burguesía intelectual radicalizada, normalmente influida por los distintos paradigmas de moda en la izquierda mundial. En ese contexto, su manera natural de existencia consistía en una permanente oscilación y fragmentación interna. En alguna medida, constatando esta realidad fue que un documento autocrítico de su Comité Central, en marzo de 1974, inspirado por Exequiel Ponce y Carlos Lorca, sostuvo que debido a la composición pequeño burguesa de su dirección, el Partido Socialista bajo la Unidad Popular había sido «en gran medida el portador de la dispersión política».¹⁸

¹⁸ Comité Central del Partido Socialista: «Documento de marzo de 1974», mimeografiado.

Frente al Partido Socialista figuraba el Partido Comunista, principal exponente de la izquierda gradualista e institucional. Este partido se asentaba, sobre todo, aunque no únicamente, en los núcleos obreros más antiguos y en cierta intelectualidad. Sus posiciones consistían, dicho esquemáticamente, en transitar al socialismo sin enfrentamiento armado, modalidad que durante un tiempo denominó «vía pacífica» y, más adelante, como «vía no armada». Esta modalidad tenía como premisa la conformación de mayorías sociales y políticas expresadas electoralmente, las que debían permitir ganar el gobierno para, desde allí, apoyado en la movilización social-popular, operar, sin ruptura legal, las transformaciones institucionales hacia un Estado popular; todo esto en correlación con transformaciones en la estructura económica. Tal concepción llevaba a este partido a impulsar alianzas sociales y políticas muy amplias. En lo social estas incluían, junto al proletariado y al campesinado, no solo a la pequeña burguesía y las capas medias, sino también al empresariado no monopolístico. Con ello, correlativamente, se propendía a aislar y derrotar exclusivamente a «la oligarquía y al imperialismo». En el plano político esto se expresaba en la pretensión de ampliar la alianza de izquierda hacia el centro progresismo, al que identificaba con el grueso del Partido Demócrata Cristiano y con el Partido Radical. Esta era la concepción de la Unidad Popular amplia, antípoda del Frente de Trabajadores del Partido Socialista.

La concepción del Partido Comunista suponía en los hechos profundizar la democracia política. Ello se traducía en una práctica democrática y pluralista, en cuyo contexto, por otra parte, la colectividad profesaba una visión idealizada y acrítica respecto de la URSS y del socialismo real; cuestión que venía acompañada de una concepción centralista de la vida partidaria interna. En todo caso, la política del Partido Comunista distaba mucho de decidirse en el

plano de una ortodoxia teórica, sino que, más bien, tendía hacia una especie de pragmatismo que alguien calificó de «iluminado»,¹⁹ es decir, algo parecido a un sentido común muy adecuado a las realidades del país.

En una izquierda tan diversa, Salvador Allende se ubicaba dentro de las concepciones gradualistas e institucionales. Por lo mismo, no respondía a los parámetros políticos e ideológicos predominantes en su propio partido. No fue entonces casualidad que durante sus tres años de gobierno encontrara en el Partido Comunista su principal fuerza de apoyo, y no en el Partido Socialista, que de manera constante lo cuestionó y lo acusó, abierta o veladamente, de socialdemócrata.

De lo anterior no debe, ni mucho menos, deducirse una identidad plena entre Salvador Allende y el Partido Comunista. Existían diferencias entre uno y otro, las que en todo caso no se situaban en el plano de la política contingente, sino en el de las concepciones teóricas. En realidad, Allende no solo postulaba un camino nuevo al socialismo —en lo que coincidía con el Partido Comunista—, sino también conceptuaba a aquel de manera muy distinta al socialismo real, asumiendo teóricamente este hecho. Esto se materializaba en su intuición sobre la vía chilena, sin dictadura del proletariado. Y era en estos planos conceptuales en los cuales el Partido Comunista se mantenía dentro de la visión tradicional al concebir la posibilidad de que la experiencia chilena estuviera abriendo nuevas formas de socialismo, que incluían el pluralismo y el pluripartidismo, lo que la colectividad valoraba positivamente y llevaba a la práctica,²⁰ pero nunca pretendió sacar consecuencias teóricas de ello; es decir, nunca, a diferencia de Salvador Allende, se avino a innovar en cuestiones teóricas. Esto, entre otras cosas, se expresaba en la tesis sobre la vigencia de leyes generales que regían el paso del capitalismo al socialismo, dentro de las cuales

¹⁹El concepto lo tomamos de Eduardo Sabrovsky: *Hegemonía y racionalidad política*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1988.

²⁰Al respecto, véase la larga conversación de Eduardo Labarca con el entonces secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán Lepe, en Eduardo Labarca: *Corvalán 24 horas. El PC chileno por fuera y por dentro*, Ed. Quimantú, Santiago, 1972, especialmente p. 84.

figuraba el concepto de dictadura del proletariado,²¹ la que, sin embargo, el Partido Comunista concebía, en cuanto a sus formas, vinculada a las particulares realidades de cada país, lo que en el caso chileno suponía el pluralismo y el pluripartidismo incluso en la fase propiamente socialista, y en cuanto a su fondo, significaba la conformación de un Estado en el cual el poder fuera ejercido por el proletariado en alianza con todas las otras capas del pueblo. Esto, más allá de la cuestión terminológica, le daba al concepto un claro contenido democrático.

No es menos cierto que estas diferencias teóricas entre Allende y el Partido Comunista nunca afloraron. Tanto más cuanto que este último no solía hacer alardes de teorismo ni fundar su práctica en una ortodoxia teórica, sino por el contrario, evidenciaba altas cuotas de «pragmatismo iluminado». A contrapelo, entre Salvador Allende y el Partido Socialista existían profundos desencuentros tanto políticos como teóricos.

Las mencionadas diferencias entre las dos izquierdas se harían presentes más tarde en el seno de la Unidad Popular, al ponerse de manifiesto que esta constituía una fuerza muy heterogénea. Tal heterogeneidad estuvo en la base de su incapacidad para materializar una conducción unitaria del movimiento popular entre 1970 y 1973, lo que afectó gravemente la marcha del Gobierno.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe reconocer que el gobierno de la Unidad Popular siempre siguió las orientaciones del presidente Allende; es decir, materializó la concepción de la izquierda gradualista e institucional, con los acentos personales del mandatario. Por tal concepto el Gobierno recibió la permanente crítica de la izquierda rupturista, la que finalmente se agrupó en el Polo Revolucionario, cuyas organizaciones principales terminaron siendo el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

²¹ Véase sobre el punto el Informe de Luis Corvalán Lepe: «La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota», en Luis Corvalán Lepe: *Tres periodos de nuestra vía revolucionaria*, Verlag Zeit im Bild, Berlín, 1982, pp. 149 y ss.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

El cuadro de la izquierda chilena durante los años sesenta se vio complejizado con la aparición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La formación de esta entidad se produjo luego de la derrota electoral sufrida por el Frente de Acción Popular (FRAP) en las elecciones presidenciales de 1964, cuando se impusiera el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Esto último decepcionó a amplios sectores izquierdistas, que ya desde antes venían dudando de la vía institucional, lo cual dio lugar a fuertes cuestionamientos a esta. Tales sectores, que experimentaron una fuerte influencia de la Revolución Cubana, llegaron a la conclusión de que la única vía revolucionaria posible era la insurreccional. Bajo estos supuestos, muchos militantes, especialmente jóvenes, sobre todo del Partido Socialista, fueron abandonando sus partidos de origen acusándolos de reformistas y electoralistas. No pocos se propusieron conformar una agrupación verdaderamente revolucionaria, lo que identificaron con la adhesión a una particular forma de lucha: la armada. A partir de esta premisa rechazaron insertarse en el orden institucional. Tales fueron los antecedentes de la formación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fundado en Concepción en 1965. La entidad terminó por ser encabezada por exmilitantes del Partido Socialista, entre los que sobresalen Miguel Enríquez, Bautista von Schowen, Luciano Cruz y otros.

En su «Declaración de principios» el Movimiento de Izquierda Revolucionaria sostuvo que su objetivo era «el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por los órganos de poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases».²² En otra parte, el texto planteaba que el MIR rechazaba «la teoría de la vía pacífica» por cuanto desarmaba «al proletariado y por resultar inaplicable ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente

²² «Declaración de principios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria», Chile, septiembre de 1965. Las citas que siguen corresponden a esta misma declaración. Para la versión completa: <<https://institutobautistavanschouwen.wordpress.com/1965/08/15/declaracion-de-principios-del-mir-aprobada-en-el-congreso-fundacional-de-1965/>>.

el poder». Con este supuesto la «Declaración» dijo reafirmar «el principio marxista leninista de que el único camino para derrocar al régimen capitalista es la insurrección popular armada».

Del mismo modo, la «Declaración de principios» de dicho movimiento hizo una fuerte crítica a los partidos de la izquierda tradicional, acusándolos de burocráticos y de defraudar «las esperanzas de los trabajadores chilenos; en vez de luchar por el derrocamiento de la burguesía se limitan a plantear reformas al régimen capitalista, en el terreno de la colaboración de clases; engañan a los trabajadores con una danza electoral permanente, olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del proletariado chileno».

Consecuente con estas definiciones, la política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria consistió en organizar desde ese momento la lucha armada conducente a la toma del poder por obreros y campesinos. A tales efectos se propuso desarrollar su organización, la que debía convertirse en la vanguardia de las clases explotadas. Esto último, a su juicio, sería logrado en el curso de la lucha política y militar que pretendía iniciar. Esta estrategia suponía desplazar la influencia que el Partido Comunista tenía en las organizaciones populares y desacreditar su política, a la cual el MIR conceptuó como oportunista y reformista.

La conformación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria pronto tensionó a toda la izquierda, y dio lugar a un agudo debate sobre las vías de la revolución. En ese marco, a diferencia del Partido Socialista, que en su Congreso de Chillán proclamara la vía armada sin, no obstante, nunca llevarla a la práctica manteniéndola solo de un modo retórico, el MIR se embarcó en ella mediante la organización de acciones armadas en algunas ciudades. Esto lo convirtió en un actor importante del escenario nacional, lo que le permitió ejercer cierto atractivo entre sectores juveniles y poblacionales.

El Partido Comunista, por su parte, vio en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria una amenaza a su política de Unidad Popular dirigida a la conquista del gobierno por vía institucional. El antagonismo entre ambas entidades se convirtió entonces en un tópico dentro de la izquierda, en la cual cada una ocupó las posiciones polares. Lo que en el fondo se jugaba era cuál de las estrategias adoptaría la izquierda. Como hemos visto, el Partido Socialista, al menos en el papel, según su Congreso de Chillán, había optado por la vía armada.

A fines de los años sesenta, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, levantando la figura de Ernesto Che Guevara, había alcanzado ya cierta presencia en la izquierda chilena. Ante la proximidad de los comicios presidenciales de 1970, se dedicó a desacreditar la vía electoral con los argumentos ya señalados, los que sostenían que la izquierda no podría ganar en este terreno. Paralelamente redobló sus esfuerzos por impulsar la vía armada, la que materializó en forma de asaltos a entidades bancarias y en otras acciones análogas, las cuales provisionalmente suspendió solo cuando la candidatura presidencial de Salvador Allende pareció tener chance de imponerse.

La vía chilena de Salvador Allende

Pese al escepticismo que reinaba en gran parte de la izquierda, el 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales de ese año, y el 4 de noviembre –no sin grandes tensiones a las que nos referiremos más adelante– pudo asumir la presidencia. Se podría decir que lo que hizo del gobierno de Salvador Allende algo especial, tanto nacional como internacionalmente, fue su intento por representar un segundo camino al socialismo, al que el mandatario denominó como la «vía chilena». Esta, en la visión de Salvador Allende y en relación con las experiencias históricas precedentes, no contenía solo una estrategia diferente para arribar al socialismo, sino también un concepto distinto de este. Esa diferencia, entre otras cosas, consistía en que la vía chilena tendría como un atributo intrínseco la democracia política. En tal sentido, en las concepciones de Salvador Allende las llamadas «libertades burguesas» y las reivindicaciones del liberalismo relativas a las garantías individuales no constituían necesariamente meras superestructuras del capitalismo y de la dominación de la burguesía, sino que representaban conquistas de los pueblos y, en fin, de la humanidad. Como tales era que podían y debían integrarse al socialismo, que las realizaría a plenitud al librarlas de las trabas que factualmente les imponía el capital.²³

²³ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., p. 157.

El presidente Allende se refirió a estas concepciones en variadas oportunidades. De ellas la más importante fue la del 21 de mayo de 1971, cuando las expusiera ante el congreso pleno. En esa ocasión el mandatario afirmó que lo distintivo de la vía chilena radicaba en la articulación entre democracia y socialismo. A este respecto, sostuvo que Chile era «la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista». De acuerdo con este criterio, agregó que en el país la nueva sociedad se construiría acorde a un esquema «democrático, pluralista y libertario».²⁴ Lo dicho suponía que no se requeriría instaurar la dictadura del proletariado en los términos de los países del socialismo entonces existente. Por eso sostuvo: «no existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica».²⁵

Una segunda característica propia de la vía chilena propuesta por Salvador Allende consistía en que el tránsito al socialismo en el país se haría sin ruptura institucional. A su juicio, esto sería posible dada la flexibilidad de las instituciones nacionales, lo cual evitaría que ellas se convirtieran en una «una rígida barrera de contención» a las transformaciones, lo que haría viable que se adaptaran «a las nuevas exigencias para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad que exige la sustitución del capitalismo».²⁶ Claro está que, a juicio de Allende, dicha perspectiva se hallaría también vinculada a la actitud del Congreso Nacional. De su realismo, sostuvo: «depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la realidad socialista [...] sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que responsablemente queremos evitar».²⁷

Según el presidente Allende, un tercer rasgo de la vía chilena consistiría en la vigencia y ampliación de las libertades públicas, a las que, como se dijo arriba, conceptuó como «una conquista del pueblo en el penoso camino de su emancipación». De allí que ellas

²⁴ Salvador Allende: «Primer Mensaje ante el Congreso Pleno», en *Se abrirán las grandes alamedas*, Bogotá, septiembre de 1983, p. 182.

²⁵ *Ibíd.*, p. 189.

²⁶ *Ibíd.*, p. 194.

²⁷ *Ibíd.*, p. 193.

formaban «parte de lo que hay de positivo en el periodo histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer».²⁸

En cuarto lugar, la vía chilena se caracterizaría por su naturaleza pacífica:

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sectores medios nos dan la superioridad indispensable para que la minoría privilegiada no recurra fácilmente a la violencia. Si la violencia no se desata en contra del pueblo, podremos transformar las estructuras básicas donde se asienta el sistema capitalista en democracia, pluralismo y libertad. Sin compulsiones físicas innecesarias, sin desorden institucional, sin desorganizar la producción.²⁹

Tales serían los rasgos más importantes del segundo modelo de transición al socialismo, cuya primera materialización histórica, según Salvador Allende, se verificaría en Chile. En síntesis, se trataría de una vía institucional, pluralista y pluripartidista, con vigencia de las garantías individuales; vía que, no obstante, todavía requería desarrollar sus bases teóricas.

El 21 de mayo de 1972, en respuesta a los planteamientos del Comité Central del Partido Socialista, según los cuales «el Estado burgués no [servía] para construir el socialismo» en virtud de lo cual se haría «necesaria su destrucción»,³⁰ Allende ahondó en sus concepciones. Fue así como en su discurso ante el Congreso Pleno de ese año, dijo: «las entidades de la administración del Estado actúan hoy, no al servicio de la clase dominante, sino de los trabajadores y de la continuidad del proceso revolucionario, por consiguiente, no se puede pretender destruir lo que ahora es un instrumento para actuar y cambiar». Con base en estas premisas, Allende insistió en que «el camino para el proceso revolucionario no [era] el de la violenta destrucción del actual régimen institucional y constitucional». Más aún, añadió que el poder de la gran burguesía no se basa[ba] en [dicho] régimen, «sino en sus recursos

²⁸ *Ibíd.*, p. 195.

²⁹ Salvador Allende: «Primer Mensaje ante el Congreso Pleno», art. cit., p. 199.

³⁰ *El Mercurio*, Santiago, 12 de marzo de 1972, p. 33.

económicos y en la compleja trama de relaciones sociales ligadas al sistema de propiedad capitalista».³¹

De lo dicho se concluía que, en lugar de destruir el orden institucional, el cual –debido a que la izquierda se hallaba en el gobierno– cada vez más era un instrumento de cambio, de lo que se trataba era de modificar paulatinamente las relaciones sociales de producción, valiéndose para ello de la institucionalidad vigente con el respaldo de la movilización popular. Como resultado de esos cambios y de la participación del pueblo en la lucha, había que seguir transformando desde dentro el carácter de clase del Estado. Ello suponía el fortalecimiento del gobierno de la Unidad Popular y la unidad de sus partidarios en torno a una estrategia común. Tales eran las concepciones que Salvador Allende profesó –y llevó a la práctica– a lo largo de todo su mandato.

Por cierto, la derecha reaccionó fuertemente frente a ello. Siempre tuvo claro que lo que estaba en curso durante el gobierno de la Unidad Popular era una modificación radical del carácter del Estado, con su correlativa redefinición de las relaciones de propiedad y de poder, todo en contra de las clases hasta entonces dominantes. De allí que, a poco tiempo de asumir la presidencia Salvador Allende, la derecha adoptara un rupturismo abierto –en lo ideológico y discursivo con su correspondiente dicotomía entre un bien absoluto (la nación) y un mal absoluto («el marxismo»)–, el cual debía culminar en un golpe refundacional controlado por el gran empresariado, los militares y el capital extranjero, golpe que, en fin, tendría como una de sus premisas principales la eliminación física del «mal absoluto», encarnado, según el nacionalismo, en el movimiento popular y la izquierda. En esa perspectiva la derecha, con una habilidad extraordinaria, sabiendo que sola no podría conseguir sus objetivos, se empeñó en cooptar al Partido Demócrata Cristiano, cuyo sector conservador, según el Informe Church, se hallaba clandestinamente financiado por los Estados Unidos desde 1962.

En todo caso, la señalada perspectiva difícilmente habría podido culminar de manera exitosa sin la presencia del referido factor extranjero, es decir, sin el papel que le cupiera al gobierno de Washington. La magnitud del involucramiento estadounidense en el proceso político chileno requiere que nos detengamos en él, lo que haremos en el siguiente capítulo, para después volver al tema de la derecha.

208 ³¹ *La Nación*, Santiago, 22 de mayo de 1972, p. 1.

CAPÍTULO 12

La intervención de los Estados Unidos como factor del quiebre de la democracia en Chile según los documentos estadounidenses¹

Como se señaló en el capítulo precedente, un actor en extremo relevante de la historia del Chile reciente, sin el cual la derecha no hubiera podido conseguir sus objetivos, fueron los Estados Unidos. Partiendo de tal premisa, a lo largo de estas líneas pretendemos argumentar la tesis según la cual, desde comienzos de los años sesenta, la intervención que el gobierno de Washington llevara a cabo en Chile fue masiva y planificada; que esa planificación se hizo en los niveles más altos del gobierno estadounidense cuya expresa finalidad fue, primero, impedir el ascenso de la izquierda chilena al gobierno, cosa que luego del 4 de septiembre de 1970 se pretendió llevar a cabo a través de un golpe de Estado; y después, cuando el 22 de octubre de ese año dicho golpe fracasara, la intervención se orientó a crear las condiciones requeridas para un nuevo golpe, esta vez dirigido a derribar al ya instalado gobierno de Salvador Allende para dar así lugar al quiebre institucional.

Para argumentar lo dicho analizaremos ciertos documentos estadounidenses, pero sobre todo el Informe Church. A los efectos dividiremos nuestro análisis en tres fases. La primera es la que se extiende entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de noviembre del mismo año. La segunda abarca los pocos días que, luego de que asumiera la presidencia Salvador Allende, los Estados Unidos se

¹ Versión corregida del texto publicado en Cristina Moyano (comp.): *A 40 años del golpe de Estado en Chile*, Ed. Usach, Santiago, 2013.

demoraron en redefinir su estrategia frente a Chile. Mientras que la tercera fase irá desde que Washington hiciera esa redefinición y el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Una constatación previa

Es necesario precisar como cuestión introductoria que a pesar de que intervinieron muy activamente en los asuntos chilenos, los Estados Unidos antes del 4 de septiembre de 1970 –a diferencia de ciertos actores internos– todavía no estuvieron interesados en provocar un golpe de Estado en Chile. Un episodio ocurrido en 1964, relatado por el Informe Church, es ilustrativo de ello. Este dice así:

[...] el 19 de julio de 1964, el Consejo de Defensa de Chile –el equivalente del Alto Mando de las FF. AA. de Estados Unidos– se reunió con el presidente Jorge Alessandri para proponerle un golpe de Estado si Allende resultaba vencedor. Esta oferta fue transmitida al jefe de la oficina de la CIA, quien, a través de un intermediario, mandó a decir al Consejo de Defensa chileno que los Estados Unidos estaban absolutamente en contra de un golpe de Estado. El 20 de julio, el subjefe de la Misión de la Embajada (DCM), fue visitado por un general de la Fuerza Aérea de Chile, quien amenazó con un golpe de Estado si ganaba Allende. El DCM lo recriminó, y no se habló más del asunto.²

Como lo hemos señalado en capítulos anteriores, por entonces la política de Washington era otra. Su propósito consistía en convertir a Chile en un atractivo contramodelo progresista a la Revolución Cubana, de allí que no apoyara al golpismo local, sin lo cual este tenía escasa viabilidad o, más bien, ninguna.

La política estadounidense hacia Chile varió sustancialmente cuando Salvador Allende se impuso en las elecciones presiden-

² Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», en Cristian Opaso (comp. y trad.): *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, s. f., p. 53. Todas las referencias a este informe corresponden a la misma edición.

ciales de 1970, marcando el fracaso de lo que el Informe Church denomina como «campaña de sabotaje» que la CIA local había montado para impedir su triunfo. Desde entonces en adelante la política estadounidense se orientó al golpe, siempre, por cierto, valiéndose de lo que denominara como «fuerzas internas».

Primera fase: desde el 4 de septiembre al 4 de noviembre de 1970

Durante esta etapa, los Estados Unidos, reaccionando ante el triunfo de Salvador Allende, se vieron obligados a redefinir su política hacia Chile. El objetivo inmediato que esta se propuso en su nueva formulación fue abrir paso a un golpe de Estado destinado a impedir que Salvador Allende asumiera la primera magistratura. A tales fines, como se verá, el gobierno estadounidense tomó ingentes iniciativas prácticas, materializadas a través de la estación local de la CIA, la que actuó bajo la supervisión de las más altas autoridades de Washington.

En lo que sigue procederemos a revisar lo que el Informe Church nos dice al respecto. Lo primero que hay que subrayar es que el objetivo del golpe fue decidido en los Estados Unidos con mucha prontitud y por las autoridades más altas del Estado. Según este informe, ya el 8 de septiembre, a solo cuatro días de las elecciones chilenas, se reunió el Comité 40, presidido por el secretario para Asuntos de Seguridad, Henry Kissinger. En la reunión se resolvió pedir a la CIA que ponderara las posibilidades de impulsar un golpe militar en Chile.³ Al mismo tiempo se le encomendó evaluar los problemas «involucrados en organizar en el futuro una oposición [interna] eficaz contra Allende».⁴ También al embajador estadounidense en Santiago, Edwards Korry, se le solicitó una evaluación «a sangre fría» sobre la factibilidad del golpe.

El 12 de septiembre, o sea, solo cuatro días después, Korry le respondió al Comité 40 señalándole que los uniformados chilenos no se alzarían en contra de Allende «a menos que se produzca la poco probable situación de un caos nacional y violencia

³ *Ibidem*, p. 159.

⁴ *Ídem*.

generalizada».⁵ Pronto la CIA local hará esfuerzos orientados a cumplir con este prerequisite.

El 14 de septiembre, el Comité 40 se reunió de nuevo. Teniendo en cuenta los problemas que había para utilizar a las Fuerzas Armadas chilenas a los efectos del golpe, decidió impulsar otra medida, denominada en el informe como «maniobra Rube Goldberg».⁶ Esta consistía en lograr que el 24 de octubre el Congreso Pleno eligiera a Jorge Alessandri como presidente, quien a continuación renunciaría para dar paso así a nuevas elecciones en las cuales Frei levantaría su candidatura. Otra variante evaluada consistía en conseguir que el mandatario invitara a los militares a que tomaran el poder, luego de lo cual se clausuraría el Congreso y se llamaría a nuevas elecciones, a las cuales Frei se postularía. Más adelante esta operación sería más conocida con el nombre de «maniobra Frei».⁷

Según el Informe Church, otras resoluciones de la mencionada reunión fueron: a) aprobar un fondo de 250 000 dólares para el «apoyo secreto de proyectos que Frei o su equipo de confianza estimaran importantes»;⁸ b) encomendar a la CIA la realización de una campaña de temores, dentro de Chile, dirigida a demostrar que el país sufriría múltiples perjuicios con el ascenso de Allende; c) autorizar al embajador estadounidense en Santiago, Edward Korry, y a otros miembros apropiados de la misión diplomática para intensificar sus contactos con oficiales chilenos con el fin de evaluar su disposición a apoyar la maniobra Frei;⁹ instruir a Korry para que informara a sus contactos militares chilenos que si Allende asumía la primera magistratura, los Estados Unidos darían por terminada su asistencia militar a Chile.¹⁰

Al día siguiente, el 15 de septiembre, en la Casa Blanca se verificó otra reunión importante en la que tomaron parte el presidente Nixon, el asesor para asuntos de seguridad, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, y el procurador general John

⁵ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 159.

⁶ *Ibidem*, p. 160.

⁷ Luis Corvalán Marquez: *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo*, Ceibo Ediciones, Santiago, 2012, p. 57.

⁸ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 160.

⁹ *Ibidem*, p. 71.

¹⁰ *Ibidem*, p. 72.

Mitchel. Allí Nixon postuló que «un gobierno de Allende en Chile no era aceptable para los EE. UU».¹¹ Con este supuesto ordenó a la CIA que tomara las medidas necesarias para «impedir que [Allende] accediera al poder».¹² «No importan los riesgos involu-
crados; 10.000.000 de dólares disponibles; más si es necesario; trabajo a tiempo completo; los mejores hombres que tengamos; plan de acción, hacer que la economía aúlle; 48 horas para el plan de acción».¹³

De inmediato, según el Informe Church, la CIA se avocó a la tarea encomendada por el presidente Nixon. A estos efectos diseñó dos líneas paralelas, independientes una de otra, conocidas como Track I (la que en realidad venía implementándose desde antes del 15 de septiembre y que contemplaba las medidas vinculadas a la «maniobra Frei», ya referida) y Track II, que se derivaba directamente de las instrucciones dadas por Nixon el día 15.

El Informe Church dice: «La diferencia principal entre Track I y Track II, no era que Track II no estaba orientado al golpe, y sí Track I. Ambos tenían ese objetivo. Pero había dos diferencias: Track I dependía de por lo menos del consentimiento de Frei», y Track II «sólo debía ser conocido por un reducido número de individuos en la Casa Blanca y la CIA, excluyendo de su conocimiento al Departamento de Estado y, por tanto, al embajador Korry».

El 20 de septiembre el Comité 40 volvió a reunirse a fin de evaluar la situación en Chile. En el evento «se estuvo de acuerdo en que la maniobra Frei había sido sobrepasada por los acontecimientos y ya estaba liquidada. La segunda opción –la renuncia del gabinete y su reemplazo por un gabinete militar– también se dio por terminada».¹⁴ Igualmente se concluyó que no habría golpe militar «a menos que presiones económicas se descargaran sobre Chile».¹⁵ Con este supuesto «se acordó que se haría un esfuerzo para que las compañías norteamericanas llevaran a cabo medidas acordes con el deseo del gobierno de EE. UU. de tomar acciones de forma

¹¹ *Ibidem*, p. 66.

¹² *Ídem*.

¹³ *Ibidem*, p. 152.

¹⁴ *Ibidem*, p. 70.

¹⁵ *Ídem*.

inmediata».¹⁶ Otra resolución tomada por el Comité 40 fue «el corte de todos los créditos, [junto con] presionar a las compañías para que restrinjan sus inversiones en Chile y tomar contacto con otras naciones para que cooperaran en esta operación».¹⁷ Como consecuencia de tales medidas, en el país «se desencadenó un pánico financiero de proporciones».¹⁸

Paralelamente, la CIA impulsaba Track II. El 21 de septiembre su sede central despachó a su oficina de Santiago dos cables. En uno se decía: «el propósito del ejercicio es impedir que Allende asuma el poder. La opción de malabarismo parlamentario ha sido descartada. El objetivo es una solución militar».¹⁹ En esa perspectiva, y con el supuesto de que ni Frei ni el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, actuarían, planteó la necesidad de «hacer insinuaciones a oficiales de más bajo rango (por ejemplo al general Camilo Valenzuela)».²⁰ La oficina local reconoció que tal proceder «involucraría promover el quiebre del ejército».²¹ Pero dado que «la dirigencia máxima de los servicios armados, en particular el general René Schneider, constituía un tropiezo», incentivar ese quiebre sería la premisa «para una solución de tipo militar».²²

El 24 de septiembre, en otra reunión del Comité 40, se acordó que la CIA desarrollara una nueva campaña de propaganda que se concentrara en el daño que recaería sobre Chile bajo un eventual gobierno de Allende. La propaganda debía «influir en Frei, la elite y los militares chilenos».²³ El Informe Church, al respecto, señalaba que:

La CIA se valió de sus propios recursos para generar una adicional propaganda anti-Allendista en Chile. Estas maniobras incluyeron: apoyo para una imprenta clandestina; colocación de noticias a través de agentes, financiamiento de un pequeño diario; subsidio indirecto de Patria y Libertad y a sus progra-

¹⁶ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 70.

¹⁷ Ídem.

¹⁸ Ídem.

¹⁹ Íbidem, p. 155.

²⁰ Íbidem, p. 169.

²¹ Ídem.

²² Íbidem, p. 170.

²³ Íbidem, p. 68.

mas de radio, avisos políticos y concentraciones; y el envío de artículos noticiosos del extranjero a Frei, a líderes selectos y a la prensa nacional.²⁴

Habiéndose perdido la esperanza de utilizar a Frei, a comienzos de octubre los Estados Unidos se encaminaron, pues, hacia el golpe abierto, que venía trabajándose paralelamente a las soluciones «políticas». A tales propósitos la CIA confeccionó un programa de acción de tres puntos, que establecía lo siguiente:

- a) Recolectar inteligencia sobre oficiales de mentalidad golpista; b) crear un clima de golpe a través de la propaganda, desinformación y *actividades* terroristas con la intención de provocar a la izquierda para ofrecer un pretexto para un golpe (cable 611, Central CIA a Santiago, 7/10/70); y c) informar a los oficiales de mentalidad golpista que el gobierno de los Estados Unidos les brindarían todo su apoyo durante el golpe, salvo una intervención militar directa de los Estados Unidos (cable 762, Central CIA a Santiago, 14/10/70).²⁵

Este programa fue puesto en práctica de inmediato. Entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 «la CIA tuvo 21 contactos con oficiales clave de los militares y policía (Carabineros) de Chile. A los chilenos que se sentían inclinados a ejecutar un golpe de Estado se les aseguró que habría un apoyo decidido, al nivel más alto del gobierno de los EE. UU., tanto con anterioridad, como después del golpe».²⁶

«Este esfuerzo comenzó con vehemencia el 5 de octubre cuando el agregado militar informó tanto a un general del Ejército (“contacto prioritario de la estación”) como a un general de la Fuerza Aérea, de la política progolpe de los Estados Unidos».²⁷ «Tres días después, el jefe de la CIA en Santiago le dijo a un alto oficial de Carabineros que “el gobierno de los Estados Unidos favorece una

²⁴ *Ibíd.*, p. 69.

²⁵ *Ibíd.*, pp. 170-171.

²⁶ *Ibíd.*, p. 71.

²⁷ *Ibíd.*, p. 185.

solución militar y está dispuesto a brindar cualquier tipo de apoyo que no sea una intervención militar directa”».

El 7 de octubre, el agregado militar de la embajada de los Estados Unidos estableció contacto con miembros de la Academia de Guerra de Santiago. Algunos de ellos le dijeron estar dispuestos a jugarse por el golpe, cuyo principal obstáculo era el general Schneider. Dichos oficiales «le pidieron [al agregado militar estadounidense] que les consiguieran armas livianas».²⁸ En ese contacto los oficiales informaron al agregado que si no lograban que Frei enviase al exterior a Schneider, «habían incluso estudiado planes para secuestrarlo».²⁹

La estación de la CIA de Santiago informó ese mismo día 7 de octubre a su Central en los Estados Unidos sobre los contactos realizados en la Academia de Guerra, los que confirmaban lo ya sabido, es decir, que el gran obstáculo para el golpe era el general Schneider.³⁰ El 8 de octubre, la CIA Central respondió a su estación santiaguina señalándole que la información que le entregara el día anterior sobre Schneider hacía «más importante que nunca removerlo y provocar un nuevo estado de cosas [...]. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros o la oficina local para que se remueva a Schneider?»³¹ preguntaba.

En forma paralela, y como parte de Track I, el mismo día 7 de octubre el embajador Korry recibió un cable desde Washington que decía así:

[...] ahora usted está autorizado para informar directamente a los militares chilenos, a través de los canales a su disposición, que si se lleva a cabo un intento exitoso para bloquear el ascenso de Allende, nosotros reconsideraríamos los cortes que hemos estado obligados a efectuar hasta ahora en el programa MAP, y ver otras maneras de aumentar la ayuda que tenemos programada para las fuerzas armadas chilenas. Si cualquier

²⁸ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 185.

²⁹ *Ibidem*, p. 186.

³⁰ Luis Corvalán Marquez: *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo*, ed. cit., p. 64.

³¹ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 186.

paso que den los militares resulta en desórdenes civiles, también estaríamos preparados para brindar prontamente apoyo y materiales que pudieran ser requeridos en forma inmediata.³²

En resumen, Washington ofrecía a los militares chilenos más asistencia militar a cambio de que frustraran el ascenso de Salvador Allende. Igualmente brindaban los medios necesarios para reprimir la protesta ciudadana que podría generarse como producto de ese bloqueo.

A la fecha, las evaluaciones de la CIA sobre las posibilidades de impulsar un golpe eran pesimistas. En una nota del equipo operativo para Chile, fechada el 8 de octubre, se diagnosticaba la situación en los siguientes términos: «los más altos niveles de las fuerzas armadas son incapaces de unirse para bloquear a Allende, la tradición de no intervención de los militares chilenos, la reticencia de Frei a enlodar su imagen ante la historia, la firme postura constitucional del general Schneider y, lo más importante, la falta de liderazgo dentro del gobierno y los militares, están actuando en contra del golpe de Estado».³³

Como se ve, el principal problema que tenía la CIA para abrir paso al golpe era la inexistencia de un líder militar que lo encabezara. Por eso se dio a la tarea de encontrarlo. Y lo encontró entre los oficiales en retiro. En relación con este punto, el 10 de octubre la estación santiaguina de la Agencia informaba a la Central que «por un proceso de eliminación» había «llegado a la solución Viaux»,³⁴ quien el año anterior había encabezado un fallido intento de golpe en contra del presidente Frei, por lo cual había sido dado de baja.

En notas fechadas el 13 de octubre, el equipo operativo de la CIA en Santiago informaba a la oficina de los Estados Unidos: «continuamos concentrando la atención en el general Viaux, que parece en este momento el único líder militar dispuesto a bloquear a Allende».³⁵ El Informe Church, por su parte, sostiene que «durante las primeras dos semanas de octubre [Viaux] vino a ser considerado

³² *Ibíd*em, p. 164.

³³ *Ibíd*em, p. 187.

³⁴ *Í*dem.

³⁵ *Í*dem.

como la mejor esperanza para llevar a cabo el mandato Track II de la CIA».³⁶

En todo caso, los contactos de Viaux con la CIA venían de antes. Según el Informe Church, se habían verificado «a través del agregado militar de otro país».³⁷ «Este agregado militar informó el 5 de octubre que Viaux quería varios cientos de granadas de gas paralizante para lanzar un golpe el 9 de octubre».³⁸ La CIA rechazó esa solicitud debido a que consideró que la intentona no tenía ninguna probabilidad de éxito. No obstante, siguió estimulándolo «de manera adecuada para mantener su posición, con el fin de que pueda unirse en el futuro a un movimiento más amplio, si este llegara a materializarse».³⁹

Dentro de esa lógica, y como «muestra del apoyo de los Estados Unidos» a sus planes golpistas, la oficina central de la CIA aceptó que se le entregara a Viaux «20 000 dólares en efectivo y una promesa de 250 000 en seguros de vida» para él y sus asociados.⁴⁰

Resuelto el problema del cabecilla del golpe, había que resolver ahora aquel otro representado por el general Schneider. Al respecto, el 13 de octubre, la CIA Central preguntaba a su estación de Santiago: «¿qué [podría evitar] que Schneider hiciera declaraciones durante las primeras horas [del golpe] que paralizarían a los líderes militares que de otra manera se unirían a Viaux?».⁴¹ El mismo día la estación local respondió señalando que «Viaux pretendía secuestrar a los generales Schneider y Prats dentro de las próximas 48 horas con el fin de precipitar un golpe».⁴² La solución al problema era, pues, radical.

La CIA estimaba que el general Camilo Valenzuela se hallaba involucrado en los planes de Viaux. Había sido este mismo quien comunicara a su contacto de la CIA que se había reunido al menos una vez con él.⁴³ Los planes golpistas parecieron entonces tomar cuerpo. A la fecha, la Oficina Local de la CIA comenzó a

³⁶ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 187.

³⁷ *Ibidem*, p. 188.

³⁸ *Ídem*.

³⁹ *Ídem*.

⁴⁰ *Ídem*.

⁴¹ *Ídem*.

⁴² *Ídem*.

⁴³ *Ibidem*, p. 189.

recibir noticias alentadoras por parte de otros contactos. El 14 de octubre, a poco más de una semana de que el Congreso Pleno se reuniera para ratificar a Allende, los registros del Equipo Operativo estadounidenses decían: «ahora estamos empezando a ver señales de un aumento en la actividad golpista desde otros cuarteles militares, específicamente en un general de ejército [nombre tachado], un almirante [nombre tachado] y en las fuerzas de Concepción y Valdivia».⁴⁴

El 15 de octubre se produjo una reunión muy importante en la Casa Blanca. Su finalidad era ponderar la marcha de la situación chilena. Participaron en ella Henry Kissinger, el general Alexander Haig y Thomas Karamessines. Este último informó sobre Viaux y otros dos altos oficiales que organizaban el golpe en Chile, evaluando detalladamente sus probabilidades de éxito. Las conclusiones señalaron que tales posibilidades eran muy inciertas, por lo cual se resolvió postergar la intentona. Las actas de la reunión dicen lo siguiente sobre el punto: «se decidió, por parte de los presentes, que la Agencia debía hacer llegar un mensaje a Viaux advirtiéndole respecto de cualquier acción precipitada. En esencia el mensaje debe afirmar: "hemos revisado sus planes y, basándonos en su información y en la nuestra, hemos llegado a la conclusión de que sus planes para un golpe no pueden tener éxito en estos momentos. De fallar, pueden reducir sus capacidades para el futuro. Mantenga sus recursos humanos. Nos mantendremos en contacto. Llegará el momento en que usted, junto con todos sus otros amigos, pueda hacer algo. Continuarán recibiendo nuestro apoyo"».⁴⁵

El 16 de octubre estas resoluciones fueron comunicadas a la oficina de Santiago de la CIA con el siguiente tenor:

2. La política de que Allende sea derrocado por un golpe sigue firme y se mantiene. Nosotros hemos de continuar ejerciendo la máxima presión para lograr este objetivo, utilizando todos los métodos que sean apropiados. [Pero...]
3. Luego de una deliberación muy cuidadosa se determinó que un intento de golpe por parte de Viaux, llevado a cabo por él

⁴⁴ *Ibíd.*, p. 43.

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 190.

solo, con las fuerzas que ahora tiene a su disposición, sería un fracaso. Por lo tanto, sería contraproducente para nuestros objetivos de Track II. Se decidió que la CIA hiciera llegar un mensaje a Viaux, advirtiéndole en contra de una acción precipitada.⁴⁶

El 17 de octubre, a través de un asociado, le fue comunicada a Viaux la decisión adoptada en los Estados Unidos. El asociado hizo ver a la CIA que ello no alteraría la decisión ya tomada y que el golpe se llevaría a cabo tal como estaba planificado.⁴⁷

Pese a esta decisión de Washington en orden a postergar el golpe y la negativa de sus ejecutores internos a acatarla, la estación local de la CIA continuó sus contactos con militares complotadores. «La noche del 17 el agregado militar de los Estados Unidos se reunió con un oficial del Ejército chileno que venía acompañado de un oficial naval. Estos le solicitaron al agregado ocho a diez granadas lacrimógenas, tres ametralladoras calibre 45 y quinientas fajas de municiones. El oficial naval dijo que tenía tres ametralladoras pero que podían ser rastreadas por los números de serie. Por lo tanto, no las podían usar». Los oficiales solicitaron esas armas a efectos de su «protección personal». Agrega que «las ametralladoras y municiones [pedidas] fueron enviadas desde Washington por valija diplomática en la mañana del 19 de octubre» no teniéndose claridad sobre el uso que se les daría.⁴⁸ Pese a ello, el 18 de octubre en la noche, algunas de las armas solicitadas fueron entregadas [¿de las que disponía la embajada en Santiago?] al mismo oficial de Ejército y al oficial naval que las habían pedido.

Por otra parte, el mismo 18 de octubre en la noche, la estación local de la CIA fue informada en detalle sobre el golpe en marcha por boca de uno de sus cabecillas, el general Camilo Valenzuela. Al día siguiente, el 19, la CIA local trasmitió la información a los Estados Unidos. Algunos puntos de esta que constan en un texto desclasificado en el año 2000 señalan:

⁴⁶ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 191.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 192.

⁴⁸ *Ídem*.

3. El plan [del golpe] contemplaba lo siguiente:

- A) El general Schneider será invitado a una fiesta en una casa VIP del ejército al atardecer del 19 de octubre a las 21:30 horas.
- B) Cuando arribe a la casa VIP, Schneider será raptado.
- C) Schneider será llevado en aeroplano y volará a [tachado]. Valenzuela anunciará en una junta de generales que Schneider había desaparecido y que el general Prats sucederá a Schneider como comandante en jefe interino.
- E) [Casi una línea tachada] mantener [tachado] a carabineros lejos del área de la casa VIP para asegurar que el rapto no será interferido.
- F) El 20 de octubre el gabinete renunciará. Sólo Zaldívar (ministro de Hacienda) y Figueroa (de Economía) permanecerán en sus cargos.
- G) Todos los otros puestos del gabinete serán dados a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía.
- J) El 21 de octubre Frei renunciará a la Presidencia y dejará Chile.
- K) El 22 de octubre, una Junta Militar encabezada por [nombre tachado] será instalada.
[una línea y media tachada].
- O) La Junta disolverá al Congreso.

4. El general Viaux estará en conocimiento de la operación arriba mencionada pero no directamente involucrado. Ha sido enviado a Viña a permanecer con un físico prominente. Será visto en lugares públicos durante el 19 y 20 de octubre para demostrar el hecho de que no estaba involucrado en la operación. Se le dejará volver a Santiago el fin de semana.

5. Los militares no admitirán estar involucrados en el rapto de Schneider del cual serán culpados los izquierdistas. Casi inmediatamente los carabineros iniciarán investigaciones por Schneider por todo Chile, usando esta investigación como pretexto para irrumpir en las poblaciones controladas por los comunistas. Líderes extremistas de izquierda y de derecha serán cogidos y despachados a través de las fronteras. Según Valenzuela, sólo los siguientes han sido informados del plan

[dos nombres tachados] y Valenzuela. [Media línea tachada] suponen que [nombre tachado] y [nombre tachado] también tienen pistas y que ellos a su turno serán informados.

6. Valenzuela se explaya finalmente sobre el programa de la Junta el cual contiene lugares comunes y por lo tanto no es informado en este mensaje [sic].
7. Si el rapto de Schneider tiene éxito, Valenzuela tomará contacto con [tachado] la mañana del 20 de octubre [media línea tachada] para pagar 355.00, precio acordado entre los complotados y un equipo de raptos no identificados. [Dos líneas y media tachadas].⁴⁹

El 19 en la tarde, tal como figuraba en la planificación que la noche anterior el general Valenzuela comunicara a la CIA, se intentó el rapto del general Schneider, pero la intentona fracasó. Uno de los oficiales complotados informó de ello a la estación local de la CIA, la cual, el día 20, la comunicó a su Central en los Estados Unidos. El cable decía:

El secuestro de la noche del 19 de octubre falló porque el general Schneider se retiró en un vehículo particular, y no en su automóvil oficial, y su guardia policial no fue retirada. El oficial del ejército [chileno] aseguró al agregado militar [de la embajada estadounidense] que se haría otro intento el 20 de octubre [...]. El agregado fue autorizado para pagar a Valenzuela 50 000 dólares que era el precio convenido entre los conspiradores y el equipo de secuestradores no identificados.⁵⁰

El 20 de octubre se volvió a intentar el rapto del general Schneider, pero nuevamente fracasó. Se intentaría de nuevo el 22, dos días antes de que Salvador Allende fuera ratificado por el Congreso

⁴⁹ Telegrama de la estación de la CIA en Santiago: *Informe sobre un proyecto para secuestrar al general Schneider e iniciar un golpe militar*, 19 de octubre de 1970. (Desclasificado en julio de 2000). Véase fotografía del original en Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, Ed. Crítica, Barcelona, 2004.

⁵⁰ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 195.

Pleno. Ese día, en las primeras horas de la mañana, «la CIA entregó ametralladoras y municiones al grupo que había fracasado en el intento del 19 de octubre».⁵¹ Ese mismo día, cuando se dirigía a sus labores cotidianas, el general Schneider resistió el proyecto de rapto de que fuera objeto resultando mortalmente herido al intentar repelerlo. ¿Operaron los secuestradores con las armas que esa misma mañana entregara la CIA?

El mismo día 22, la estación local de la CIA informó a su central sobre los hechos. En el cable decía:

[...] la oficina local no sabe si el asesinato fue premeditado o si constituyó un intento fracasado de secuestro. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la operación en contra de Schneider fue concebida y ejecutada por encargo de altos oficiales de las fuerzas armadas. Sabemos que el general Valenzuela estuvo involucrado. Estamos también casi seguros [de] que el almirante [nombre tachado], el oficial del ejército y el oficial naval estaban al tanto y también involucrados. Tenemos razones para creer que el general Viaux y muchos de sus asociados estaban totalmente al tanto de la situación, pero no podemos afirmar, o negar con certeza, que la ejecución o el atentado en contra de Schneider fuera confiado a elementos asociados a Viaux. Un factor importante para tener en cuenta es que *las fuerzas armadas, y no oficiales retirados o extremistas de derecha, le tendieron la trampa a Schneider para que fuera ejecutado o secuestrado.*⁵²

El asesinato del general Schneider, sin embargo, no dio paso al golpe planificado por cuanto permitió el agrupamiento de los sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en torno al general Prats (que luego del golpe del 11 de septiembre también sería asesinado, esta vez, por los servicios de seguridad de la dictadura cívico militar). Como resultado de este desenlace, los planes de Washington dirigidos a producir el quiebre de la democracia en Chile –planes materializados en Track I y Track II–, terminaron fracasando.

⁵¹ *Ibíd.*, p. 148.

⁵² *Ibíd.*, pp. 197-198. Las cursivas son mías.

Los implicados en esos planes, civiles y militares, fueron muy numerosos. Sus nombres nunca saldrán a la luz pública. El secretario privado de Salvador Allende, Osvaldo Puccio, hace el siguiente relato en sus memorias, el cual permite vislumbrar la amplitud que tuviera la conjura. En la noche del 24 de octubre [de 1970], dice:

[...] me llamó Carlos Jorquera para comunicarme que en su casa había una comida y que iba asistir un hombre influyente de Investigaciones, que venía a entregarnos algunos antecedentes importantes: que fuera yo también [...]. El huésped anunciado era el comisario León. Había traído copias de las declaraciones de todas las personas que habían sido detenidas cuando se investigó el asesinato del general Schneider. En esos documentos se estableció con claridad la participación directa en el atentado del jefe de la guarnición de Santiago, general Camilo Valenzuela, y del comandante en jefe de la Armada. En más de 48 páginas estaban anotados los nombres y las vinculaciones [...]. Había políticos de derecha, militares, marinos, gente de la Fuerza Aérea, la CIA y otros servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Era una cantidad tan grande de gente que sólo es comparable con el número de comprometidos con el golpe del 11 de septiembre.⁵³

Todos coludidos con una potencia extranjera.

Segunda fase: reformulación de la política estadounidense hacia Chile

Durante esta fase, el gobierno de los Estados Unidos, ante el fracaso experimentado por Track I y Track II, debió rediseñar su política hacia Chile. Los documentos estadounidenses nos proporcionan una información clara sobre esto. En ellos se señala que a solo dos días de que Salvador Allende asumiera el mando —esto es, el 6 de noviembre de 1970—, se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con la presencia del presidente Richard Nixon.

⁵³ Osvaldo Puccio: *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado*, Ed. Emisión, Santiago, 1985, p. 136.

Con antelación el secretario para Asuntos de Seguridad Nacional Henry Kissinger había elaborado un memorando dirigido a Nixon en el cual le expuso las opciones que se le abrían al gobierno de Washington frente a la situación chilena. En él sostuvo: «la elección de Allende como presidente de Chile plantea para nosotros uno de los más serios desafíos nunca encarnados en este hemisferio». «Su decisión sobre qué hacer acerca de ello puede ser la más difícil sobre asuntos exteriores que usted tendrá que tomar este año, porque lo que pase en Chile en los siguientes seis o doce meses tendrá ramificaciones que irán lejos más allá de las solas relaciones entre EE. UU. y Chile». Esas decisiones «tendrán un efecto sobre lo que pase en el resto de Latinoamérica y en el mundo desarrollado; sobre cuál será nuestra futura posición en el hemisferio; y sobre el cuadro mundial en su conjunto, incluyendo nuestras relaciones con la URSS. Ellas incluso afectarán nuestra propia concepción sobre cuál es nuestro rol en el mundo».⁵⁴

Junto a una serie de otras consideraciones, Kissinger le hizo ver a Nixon el impacto modélico que tendría el caso chileno. Señaló al respecto: «el ejemplo de un gobierno marxista exitoso elegido en Chile tendría un impacto y aún un valor permanente para otras partes del mundo, especialmente en Italia; la difusión imitativa de un fenómeno similar en todas partes tendría a su vez un significativo efecto en el balance mundial y en nuestra propia situación en él».⁵⁵

Como se ve, lo que preocupaba a Kissinger era el considerable atractivo que tendría en todo el mundo un socialismo capaz de conjugarse con la democracia, como el propiciado por Salvador Allende. Este socialismo, según Kissinger, resultaba aún más peligroso debido a que constituía una experiencia independiente que no formaba parte del bloque soviético.

Con estos supuestos Kissinger planteó a Nixon que entre las agencias estadounidenses habían tres posiciones respecto de la

⁵⁴ «Reunión del CSN, 6 de noviembre, memorando enviado por Kissinger a Nixon el día cinco en preparación de la reunión del día seis de noviembre de 1970», en Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, ed. cit. Apéndice documental con las fotografías de los documentos originales. La traducción es mía.

⁵⁵ Ídem.

política a seguir frente a Chile. Una era la que denominó de «modus vivendi», y la otra, la de «aproximación hostil», la cual, a su vez, tenía dos variantes: la de «hostilidad abierta» y la de «presiones no abiertas con aproximación fría pero correcta».

La estrategia del «modus vivendi» apuntaba a convivir con Allende, a defender los intereses estadounidenses en Chile, ablandándolo y negociando con él, supuesto que ello era posible. Mientras que la estrategia de la «aproximación hostil», en cualquiera de sus dos variantes, perseguía su derrocamiento a corto plazo, antes de que se consolidara.

Kissinger se abanderó con la estrategia de «aproximación hostil» en su segunda variante, es decir, de «presiones no abiertas con aproximación fría pero correcta». Desechó la primera variante de esta estrategia, la de «hostilidad abierta», con el argumento de que las acciones punitivas que implicaba, al ser públicas, le permitirían a Allende presentarse como la parte agredida y, por lo mismo, concitar el apoyo de la mayoría del país y de la opinión pública internacional. En cambio, la variante de «presiones no abiertas con aproximación fría pero correcta» suponía las mismas presiones punitivas postuladas por la otra variante, pero sin sus desventajas. En otras palabras, Kissinger se manifestó partidario de implementar frente al gobierno de Allende acciones punitivas orientadas a su derrocamiento, pero, a diferencia de la otra variante, «con la decisión de implementarlas de modo calmado y encubierto» para lo cual «en la superficie nuestra postura sería fría pero correcta. Y cualquier manifestación de hostilidad debería estar conectada a las acciones [de Allende] para evitar darle la ventaja de argüir que él es la parte agraviada». Le decía Kissinger a Nixon: «Recomiendo por tanto, que Usted tome una decisión en la que nos opongamos a Allende tan fuertemente como podamos y hacer todo lo posible para impedir que se consolide en el poder, teniendo el cuidado de llevar a cabo esos esfuerzos de un modo que den la apariencia de que estamos reaccionando a sus movimientos».

Kissinger fue muy enfático con Nixon al subrayar la gran relevancia que tenía el que precisara categóricamente su posición en favor de la aproximación hostil en su segunda variante. Si en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional –le señaló– no todos comprenden «que usted quiere una oposición a Allende tan fuerte

como podamos, el resultado será una firme desviación hacia la aproximación *modus vivendi*. Esta es prioritariamente una cuestión de prioridades y matices. El énfasis resultante de la reunión de hoy debe ser de oposición a Allende y de prevención a que se consolide en el poder y no de minimización de riesgo», agregó. Finalmente le indicó: «En su pauta de intervención, la cual está abierta, están escritas estas líneas».⁵⁶

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional

La mencionada reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que se celebrara el viernes 6 de noviembre de 1970, se realizó en la sala de gabinete de la Casa Blanca. Comenzó a las 9:40 a.m. En ella participaron el presidente Nixon, el vicepresidente, el secretario de Estado, Williams Rogers; el secretario de Defensa, Melvin Laird; el director de Emergencia, George A. Lincoln; el comisionado General, John N. Mitchel; el general William Westmoreland, presidente suplente de la Junta de Jefes de Estado Mayor; el director de la Agencia Central de Inteligencia, Richard Helms; el subsecretario de Estado, John N. Irwin II; el comisionado asistente del secretario de Estado, Robert A. Hurwitch; el asistente del presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry A. Kissinger; el general Alexander N. Haig; el señor Arnold Nachmanoff, y el coronel Richard T. Kennedy, estos tres últimos del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional. En síntesis, en la reunión participó casi toda la cúpula política y de seguridad del Estado norteamericano.

La reunión –de cuyo tenor sabemos por sus actas desclasificadas en el año 2000– fue iniciada por Richard Nixon, quien pidió a Richard Helms, director de la CIA, que resumiera la situación. Luego solicitó a Henry Kissinger que, ante el cuadro trazado por Helms, definiera las opciones planteadas a los Estados Unidos. Kissinger describió entonces la estrategia del *modus vivendi* y la de «aproximación hostil», con sus dos variantes.

⁵⁶ Esta y todas las citas anteriores están contenidas en «Reunión del CSN, 6 de noviembre, memorando enviado por Kissinger a Nixon el día cinco en preparación de la reunión del día seis de noviembre de 1970», en Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, ed. cit.

Luego intervinieron los otros partícipes, cuyas intervenciones se refirieron exclusivamente a la estrategia de «aproximación hostil», desechando la del *modus vivendi*. Así, William Rogers, refiriéndose al presidente Allende, sostuvo: «podemos hacer un apretón económico sobre él. Ha solicitado un préstamo considerándolo para pronto, podemos dificultarlo. Podemos producir su caída sin que sea contraproduktiva». Luego agregó: «el [ex]ministro del Exterior Demócrata Cristiano piensa que estamos haciendo bien las cosas». «Él ve dos posibilidades: que las dificultades económicas generarán una significativa insatisfacción pública, o, segundo, que estas dificultades llegarán a ser tan grandes que harán a los militares moverse en contra de Allende. Pienso que los militares de los EE. UU. deberían mantenerse en contacto con sus colegas chilenos y tratar de fortalecer nuestra posición en Chile».⁵⁷

Por su parte, el secretario de Defensa, Melvin Laird, quien dijo estar de acuerdo con William Rogers, siempre en referencia a Allende, afirmó: «tenemos que hacer todo lo que podamos para dañarlo y derribarlo, pero debemos mantener una postura de correcta prescindencia. Debemos tomar acciones duras, pero no publicitarlas. Debemos incrementar nuestros contactos militares. Debemos poner presión económica sobre él. Ahora está en su posición más débil de lo que estará, debemos impedir su consolidación».⁵⁸

Seguidamente se produjo un corto intercambio de opiniones sobre la actitud del Congreso estadounidense. El secretario de Estado, Rogers, aclaró que el Congreso no se opondría a la política que el Gobierno siguiera frente a Chile. Por su parte, el vicepresidente hizo consideraciones respecto del entorno latinoamericano subrayando los peligros involucrados en pedir a Argentina y Brasil que presionaran a Chile. Dijo que ello «gatillarían un masivo apoyo de la URSS y China a Chile». Con base en esta consideración sacó una conclusión de la mayor importancia: «debemos actuar principalmente dentro de Chile».⁵⁹

⁵⁷ Memorando de una conversación del CSN, con la participación, entre otros del presidente Nixon, de Henry Kissinger y del director de la CIA, acerca de los métodos a emplear en contra del gobierno de Allende, 6 de noviembre de 1970. Recopilado por Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, en apéndice documental.

⁵⁸ Ídem.

⁵⁹ Ídem.

El debate continuó mediante un análisis sobre la posibilidad de lanzar al mercado mundial el *stock* de cobre estadounidense con el propósito de generar una sobreoferta que haría bajar significativamente el precio del metal, para impactar así fuertemente en la economía chilena e incentivar el descontento interno que haría posible derribar a Salvador Allende. Finalmente se concluyó en que esta medida no era factible. Ante ello el debate se centró en la variable planteada un poco antes por el vicepresidente, esto es, la necesidad de actuar al interior del país.

El subsecretario de Estado John N. Irwin explicitó el punto con todas sus letras. En relación con el presidente Allende dijo: «el problema es cómo producir su caída». «Yo cuestionaría nuestra capacidad para hacerlo». Y agregó: «las fuerzas internas son la única manera. *La cuestión es cómo influenciar a las fuerzas internas para crear las condiciones del cambio*». ⁶⁰ A su juicio, las presiones externas, sobre todo económicas, solo tendrían efecto si ayudaban a las «fuerzas internas» a crear las condiciones para el derrocamiento de Allende. Con estos supuestos sostuvo: «seremos hostiles sólo si podemos estar seguros de que tendremos un efecto significativo sobre las fuerzas internas *haciendo que dañen a Allende e impidan su consolidación*. Esto puede significar que tengamos que hacer cosas que no querríamos hacer». ⁶¹

La reunión concluyó con la intervención de Nixon quien –tal como se lo pidiera Henry Kissinger– ratificó la estrategia de «aproximación hostil», en su variable de «presiones no abiertas con actitud fría pero correcta». Nixon dijo: «Nuestra principal preocupación en Chile es que [Allende] pueda consolidarse y que lo que proyecte hacia el mundo sea su éxito». «Seremos muy fríos y muy correctos, pero haciendo las cosas [de modo] que sean un real mensaje para Allende y otros», sostuvo más adelante. Luego vinculó el tema chileno con el de América Latina en general. «Si dejamos que los potenciales líderes en Sud América piensen en que se pueden mover en la dirección de Chile y seguir su camino, estaremos en problemas. Quiero insistir sobre esto y sobre las relaciones militares, pongan más dinero en ello», afirmó. «América Latina no se nos ha ido y queremos mantenerla», indicó en otra parte. «No debe permitirse que en

⁶⁰ Ídem. Las cursivas son mías.

⁶¹ Ídem. Las cursivas son mías.

América Latina haya la impresión de que pueden escaparse, de que es seguro seguir esa vía», dijo en referencia al gobierno chileno. En otro pasaje de su discurso apuntó: «nunca estaré de acuerdo con la política de poner cuesta abajo a los militares en América Latina. Ellos son un centro de poder sujetos a nuestra influencia».

Respecto a las medidas inmediatas que en el plano económico había que implementar en contra de Chile, Nixon dijo: «asegúrense de que el EXIM [Bank] y otras organizaciones internacionales se endurezcan». Y terminó afirmando: «debemos ser correctos con Allende, pero por otra parte, seremos muy duros».⁶² En estos términos la reunión llegó a su fin.

El Informe Church, por su parte, también describe la política que después del fracaso de Track I y Track II Washington elaboró respecto de Chile. Esa descripción coincide a plenitud con las formulaciones expuestas en los párrafos anteriores. El Informe señala que luego de que fallara el golpe del 22 de octubre de 1970, «el apoyo secreto [estadounidense] a la oposición [a Salvador Allende] formó parte de una triada de acciones oficiales [que contemplaban]: una acción encubierta para las fuerzas de oposición, una postura diplomática «fría pero correcta» y presiones económicas».⁶³ En otra parte el Informe Church detalla esas ideas: «La postura pública “fría pero correcta” y la extensa gama de operaciones encubiertas conformaban dos tercios de una triada de acciones oficiales. La tercera era la presión económica, abierta y clandestina, que intentaba exacerbar las dificultades que tenía la economía chilena».⁶⁴

Obviamente, las presiones económicas estadounidenses debían potenciar a las «fuerzas internas» para contribuir decisivamente a generar el descontento social que les permitiera a dichas fuerzas [los opositores internos a Allende] obtener el apoyo de la mayoría de la población en la perspectiva de crear las condiciones de ingobernabilidad necesarias para que intervinieran los militares. Con esas miras las «fuerzas internas» debían recibir un abundante apoyo financiero de Washington, que sería hecho llegar clandestinamente a través de los mecanismos que la CIA disponía a los efectos. En

⁶² Ídem.

⁶³ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 119.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 76.

resumen, según las actas arriba descritas y el Informe Church, los Estados Unidos decidieron esa estrategia para enfrentar el gobierno de Salvador Allende.

Tercera fase: desde la reformulación de la política estadounidense hacia Chile y el 11 de septiembre

Apenas aprobada la estrategia descrita, el gobierno de los Estados Unidos empezó a aplicarla. El Informe Church nos da una detallada información al respecto, como se verá a continuación. El Informe sostiene que:

[...] cuando falló el intento de golpe [del 22 de octubre de 1970] y Allende juró como presidente, el Comité 40 autorizó a la CIA a financiar a grupos chilenos opuestos a Allende. La campaña fue de enormes proporciones. Ocho millones de dólares se gastaron en los tres años que van desde la elección de 1970 hasta el golpe militar de septiembre de 1973. Se entregó dinero a los medios de comunicación, a partidos políticos de la oposición y, en cantidades más limitadas, a organizaciones del sector privado.⁶⁵

Ese financiamiento, obviamente, no se hizo con fines filantrópicos o idealistas, como algunos quisieran sostener. Su propósito, como lo reiteran los documentos estadounidenses, era abrir paso al golpe. Con esas miras, la CIA continuó actuando en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El Informe Church afirma sobre el punto que: «luego del fracaso de Track II, la CIA volvió a montar su red y se *mantuvo en estrecho contacto con oficiales militares chilenos*, con el fin de monitorear el desarrollo de los acontecimientos al interior de las fuerzas armadas». Y agrega: «En septiembre de 1971 una nueva red de agentes estaba en su lugar y la oficina recibía informes casi diarios de nuevas conspiraciones golpistas. La oficina y la Central comenzaron a explorar maneras de utilizar esta red».⁶⁶

⁶⁵ *Ibíd*em, p. 24.

⁶⁶ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 93. Las cursivas son mías.

Más adelante señala que:

[...] las operaciones de recolección de Inteligencia entre los militares chilenos incluyeron actividades que iban más allá de la simple recolección de información. En general esas actividades deben ser vistas en el contexto de la oposición, pública y clandestina de los Estados Unidos al gobierno de Allende. Pusieron a los Estados Unidos en contacto con los chilenos que buscaban una alternativa militar a la presidencia de Allende.⁶⁷

También, buscando aislar política y diplomáticamente a Chile, «los Estados Unidos aumentaron sus esfuerzos para mantener relaciones estrechas con líderes militares amigos en el hemisferio».⁶⁸ Al mismo tiempo el gobierno de Washington actuaba en los organismos financieros internacionales tratando de arruinar la economía chilena. Mientras que, por otra parte, el presidente Richard Nixon declaraba que los Estados Unidos estaban dispuestos a establecer con Chile la relación que este estuviera dispuesto a tener con Washington. Se materializaba así la estrategia que frente al gobierno de Salvador Allende diseñara la cúpula del Estado norteamericano, política que, como viéramos arriba, tenía tres partes: acciones encubiertas (en apoyo a las «fuerzas internas»), presiones económicas desde el exterior orientadas a arruinar la economía chilena y «una cara fría pero correcta».

En lo que sigue, nos referiremos con más detalle a estas variables. Comenzaremos por las presiones económicas desde el exterior.

Presiones económicas desde el exterior

El Informe Church sostiene que las presiones económicas eran muy importantes dentro de la estrategia estadounidense hacia Chile, no obstante lo cual debían ser visualizadas dentro del conjunto del que formaba parte. En efecto, en el Informe se afirma: «La respuesta política de los Estados Unidos al régimen del [presidente] Allende consistió en una interconexión de medidas

⁶⁷ *Ibidem*, p. 97.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 74.

diplomáticas, clandestinas, militares y económicas» donde «la presión económica [...] fue parte importante de [ese] paquete [...]». Por lo mismo es que se hace «imposible comprender el impacto de las acciones encubiertas [llevadas a cabo por la CIA hacia las “fuerzas internas”, y a las cuales nos referiremos más adelante] sin estar al tanto de las presiones económicas [externas] que las acompañaban». ⁶⁹

Chile era muy sensible a las presiones económicas que desde el exterior emprendió el gobierno estadounidense, en razón de que su economía era altamente dependiente. Por eso, «el gobierno de Allende se enfrentaba a una situación en la cual las decisiones de las corporaciones extranjeras [particularmente estadounidenses] tenían ramificaciones trascendentales en toda la economía chilena». ⁷⁰ El Informe agrega que «aún con una política consciente de diversificación de los patrones de comercio exterior, Chile continuaba dependiendo, en 1970, para la importación de repuestos vitales, de compañías de los Estados Unidos». ⁷¹

El gobierno estadounidense en su objetivo de arruinar la economía chilena y potenciar las acciones de «las fuerzas internas», contaba con esa debilidad, siempre en la perspectiva del golpe. Con tales premisas elaboró su estrategia económica frente al gobierno del presidente Allende. Dicha estrategia, sostiene el Informe Church, «fue diseñada al más alto nivel del gobierno de los EE. UU. y coordinada por equipos de trabajos interagencias». ⁷² Ella «había de ser implementada de diversas maneras». En primer lugar estipulaba que «toda nueva ayuda externa bilateral [a Chile] debería ser cancelada, aunque continuarían los desembolsos de préstamos hechos con anterioridad». Con esos propósitos, añade el Informe, «los Estados Unidos harían uso de su posición predominante en instituciones financieras internacionales para [impedir] el flujo de nuevos créditos multilaterales u otros tipos de ayuda financiera». «En la medida de lo posible la asistencia financiera y garantías a la inversión privada de EE. UU. en Chile serían suspendidas, y las compañías

⁶⁹ *Ibídem*, p. 84.

⁷⁰ *Ibídem*, p. 85.

⁷¹ *Ibídem*, pp. 85-86.

⁷² Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 86.

estadounidenses serían notificadas de las preocupaciones del gobierno y de su política de restricciones».⁷³

Durante los tres años del gobierno de Salvador Allende, Washington se ciñó rigurosamente a estos criterios. Como consecuencia de ello:

[...] la disponibilidad de créditos comerciales estadounidenses de corto plazo [destinados a Chile] bajó de unos trescientos millones de dólares (US\$300.000.000) durante los años de Frei a treinta millones (30 000 000) en 1972. Esta baja, [que fue] la consecuencia combinada de factores económicos y políticos, afectó seriamente la capacidad del gobierno de Allende para comprar repuestos y maquinaria para los sectores más vitales de la economía: el cobre.⁷⁴

El Informe Church añade que:

Las cifras dan cuenta de lo sucedido. La ayuda bilateral estadounidense [que era] de 35 millones de dólares en 1969, [cayó] a 1,5 millones en 1971.

[...] Los créditos del Banco de Exportación e Importación de los EE. UU., que habían alcanzado un total de 234 millones de dólares en 1967 y 29 millones de dólares en 1969, bajaron a cero en 1971. Los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [en el que los EE. UU. tenían el equivalente a un poder de veto] y que habían totalizado 46 millones en 1970 bajaron a 2 millones en 1972. Los únicos nuevos préstamos pactados con Chile durante el periodo de Allende fueron dos, menores, [hechos] a universidades en enero de 1971. De forma similar el Banco Mundial no hizo nuevos préstamos a Chile entre 1970 y 1973. Pero el Fondo Monetario Internacional [le facilitó] aproximadamente 90 millones de dólares durante 1971 y 1972 con el fin de enfrentar la escasez de divisas extranjeras.⁷⁵

[...]

⁷³ *Ibíd.*, p. 87.

⁷⁴ *Ibíd.*, pp. 85-86.

⁷⁵ *Ibíd.*, p. 87.

En el Banco Interamericano de Desarrollo, los EE. UU. controlaban el 40% de los votos, suficientes para vetar cualquier préstamo «blando» del Banco. [Gracias a ello] las propuestas de préstamo [para Chile] presentadas al BID fueron mantenidas en estudio, y nunca llegaron a votarse en el directorio.⁷⁶

Todavía más:

[...] en otoño de 1970 el Banco rebajó la «calificación» crediticia de Chile de «B», que equivalía a la segunda categoría, a «D», que era la categoría más baja. En la medida en que la calificación contribuyó a que se evaluara a Chile en forma similar en los bancos privados de EE. UU., corporaciones e inversionistas privados internacionales, agravó el problema que tenía Chile para atraer y retener el flujo necesario de capital a través de las inversiones privadas extranjeras.⁷⁷

En otro frente,

[...] los EE. UU. ligaron el asunto de la indemnización de las compañías de cobre norteamericanas [expropiadas por el gobierno de Allende] con el asunto de la deuda externa multilateral de Chile. Esa deuda externa, una herencia de las obligaciones adquiridas por los gobiernos de Alessandri y de Frei, era la segunda más alta per cápita del mundo. A pesar de esto, en 1972 y 1973, durante las negociaciones del Club de París sobre la deuda externa de Chile con las principales naciones acreedoras, los Estados Unidos fueron el único país que se negó a considerar la renegociación de los pagos de la deuda externa chilena, condicionándola al progreso de las indemnizaciones a las compañías cupríferas norteamericanas.

Y, en fin, dice el Informe Church, «los Estados Unidos también ejercieron presión sobre cada uno de los otros acreedores para que no renegociaran la deuda externa chilena en forma conjunta».⁷⁸

⁷⁶ *Ibídem*, p. 89.

⁷⁷ *Ibídem*, p. 90.

⁷⁸ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., pp. 90-91.

Las presiones descritas afectaron gravemente a la economía chilena, más aún cuando se daban de conjunto con los paros prolongados que por doquier impulsaban los gremios patronales y de la pequeña burguesía. El Informe Church reconoce a plenitud este hecho y sostiene que el acoso económico abierto y clandestino ejercido por Washington sobre el país «intensificó el impacto de las medidas económicas tomadas por grupos opositores dentro de Chile, particularmente las devastadoras huelgas en el sector minero y del transporte. Por ejemplo, el efecto combinado de la negación de créditos externos y de las huelgas del cobre fueron devastadores para las reservas internacionales de Chile». ⁷⁹ Lo más notable radica en que los partidos opositores al presidente Allende, que en ningún caso podrían haber ignorado los efectos de ese bloqueo económico –ni su origen y propósitos– no rechazaron la intervención extranjera llevada en contra de su propio país y, por el contrario, cargaban la responsabilidad de todo al «gobierno marxista», acusándolo de conducir a Chile al desastre.

Las acciones encubiertas

Los partidos

Aparte de las medidas externas descritas, la CIA respaldó, mediante acciones encubiertas, a todas las fuerzas políticas opuestas a Salvador Allende, incluyendo a algunas de izquierda a las que estimuló para que se desgajaran de la Unidad Popular. Ese apoyo se expresó principalmente en un considerable financiamiento, pero también en presiones para que actuaran unidas en contra del Gobierno.

Los aportes financieros estadounidenses a los partidos opositores, en todo caso, no se distribuyeron por igual. Se dirigieron principalmente al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional, en ese orden. El Informe Church da detallada cuenta de ello. En efecto, sostiene: «En una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para partidos políticos de la oposición chilena. La mayor parte de este dinero fue al Partido Demócrata Cristiano (PDC), pero una parte sustancial

fue destinada al Partido Nacional (PN)». ⁸⁰ En otra parte, el Informe señala que «más de la mitad de los fondos aprobados por el Comité 40 fueron destinados a apoyar a los partidos políticos de oposición: el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Nacional (PN) y varios grupos disidentes [...]». ⁸¹

La mayoría del apoyo clandestino norteamericano a partidos políticos chilenos fue entregado como parte de esfuerzos específicos que se llevaron a cabo para influir en el resultado de elecciones. Así, por ejemplo, el Informe afirma: «antes de las elecciones municipales de abril de 1971 y de la elección parlamentaria de julio se entregó dinero a todos los partidos de oposición. En noviembre de 1971 fueron aprobados fondos para fortalecer al PDC, el PN y grupos disidentes ⁸² [aunque no precisa quiénes eran estos últimos]». Y añade: «[...] fondos de la CIA financiaron los partidos de oposición en tres elecciones de 1972 y en las elecciones parlamentaria de 1973». ⁸³

En resumen, en todas las elecciones celebradas durante el gobierno de Salvador Allende, las colectividades de la oposición recibieron financiamiento de una potencia extranjera cuyo objetivo era derribar al Gobierno del país. Pero, según el Informe Church, el financiamiento de la CIA a los partidos opositores también se hizo con motivos no electorales. «La CIA entregó subsidios a partidos para objetivos más generales, en momentos en que no había elecciones inminentes». ⁸⁴ En otra parte dice que durante el gobierno de la Unidad Popular «el dinero entregado a los partidos no sólo sirvió para apoyar a candidatos durante las elecciones, sino que permitió también que los partidos mantuvieran una campaña antigubernamental durante los años del gobierno de Allende, alentando a los ciudadanos a manifestar su oposición de distintos modos». ⁸⁵ En otros términos, el dinero traspasado por la CIA a los partidos opositores de la época fue usado por ellos no solo para financiar sus campañas electorales, sino también a los fines de

⁸⁰ *Ibíd.*, p. 40.

⁸¹ *Ibíd.*, pp. 77-78.

⁸² *Ibíd.*, p. 77.

⁸³ *Ibíd.*, pp. 77-78.

⁸⁴ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 39.

⁸⁵ *Ibíd.*, pp. 77-78.

generar movilizaciones encaminadas a desgastar al Gobierno, más precisamente aún, para crear una sensación de anormalidad que permitiera abrir paso al golpe.

Otra parte del dinero que la CIA hiciera llegar al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional fue utilizada por estos para adquirir y financiar medios de comunicación. «A comienzos de 1971 fondos de la CIA permitieron que el PDC y PN compraran sus propias estaciones de radio y diarios».⁸⁶

Dentro de una estrategia que se dirigía a derrocar al Gobierno, la relevancia de la inversión en recursos mediáticos era muy elevada por cuanto serían los mensajes comunicacionales los que debían contribuir a crear un estado de anormalidad psicológica entre la población mediante campañas de terror orientadas a generar miedos irracionales. Estos miedos –construidos en torno al tema del «totalitarismo marxista»– generarían la base social de las estrategias no negociadoras de la oposición conducentes a desembocar en el golpe.

Para el periodo 1970-1973, el Informe Church registra periódicas entregas de dinero al Partido Demócrata Cristiano por parte de la CIA. El detalle es el siguiente: «13 de noviembre [de 1970]: el Comité 40 aprueba 25 000 dólares para apoyar candidatos de la Democracia Cristiana»;⁸⁷ el 22 de marzo [de 1971]: «el Comité 40 aprueba 185 000 dólares adicionales para apoyar al Partido Demócrata Cristiano (PDC)»;⁸⁸ el 10 de mayo [de 1971]: «el Comité 40 aprueba 77 000 dólares para la compra de una imprenta para el diario del Partido Demócrata Cristiano. La imprenta no se compra y los fondos son utilizados para apoyar el diario»;⁸⁹ el 26 de mayo [de 1971]: «el Comité 40 aprueba \$100 000 dólares para ayuda de emergencia que permita al Partido Demócrata Cristiano pagar deudas de corto plazo»;⁹⁰ etcétera.

El Informe Church da cuenta también de aprobaciones de fondos hechas por el Comité 40 en beneficio del conjunto de la

⁸⁶ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., pp. 77-78

⁸⁷ *Ibidem*, p. 135.

⁸⁸ *Ídem*.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 135-136.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 136.

oposición. Así, el 28 de enero de 1971: «el Comité 40 aprueba 1 240 000 dólares para la compra de estaciones de radio y diarios, y para apoyar a candidatos en las elecciones municipales y otras actividades políticas de los partidos opuestos a Allende».⁹¹ El 16 de julio de 1971, añade: «el Comité 40 aprueba 150 000 dólares para apoyar la elección de candidatos de oposición».⁹² El 5 de noviembre de 1971, el Comité 40 «aprobó 815 000 dólares para apoyar a partidos de oposición y para inducir un quiebre en la coalición de la Unidad Popular».⁹³ El 16 de junio de 1972, «el Comité 40 aprueba 465 000 dólares para apoyar a un candidato en una elección chilena».⁹⁴ El 26 de octubre de 1972, «el Comité 40 aprueba 1 427 666 dólares para apoyar a partidos políticos de oposición y organizaciones del sector privado con miras a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973».⁹⁵ El 12 de febrero de 1973: «el Comité 40 aprueba 200 000 dólares para apoyar a los partidos de oposición en las elecciones parlamentarias».⁹⁶

Agreguemos que documentos estadounidenses que fueran desclasificados con posterioridad, sostienen que en agosto de 1973 el Comité 40 aprobó la entrega al conjunto de las fuerzas opositoras de otro millón de dólares a los efectos de financiar las medidas finales orientadas al golpe. Dentro de esa suma, al Partido Demócrata Cristiano le fueron adelantados solo US\$13 000, con el supuesto de que con posterioridad se le cancelaría un indeterminado suplemento, lo que, según Peter Kornbluh, solo se hizo a comienzos de 1974.

Pero hay algo que es tanto o más importante que lo señalado. El Informe Church expresamente reconoce que las acciones encubiertas que la CIA llevara a cabo respecto a la oposición chilena no se quedaron en lo meramente económico (o sea, en el tema de su financiamiento), sino que, a la vez, venían asociadas a un esfuerzo por conseguir objetivos políticos precisos. Uno de esos objetivos consistió en alinear al Partido Demócrata Cristiano con el Partido Nacional para articular una oposición unida. En efecto,

⁹¹ Ídem.

⁹² Ídem.

⁹³ Ídem.

⁹⁴ *Ibídem*, p. 137.

⁹⁵ *Ibídem*, pp. 137-138.

⁹⁶ *Ibídem*, p. 138.

el Informe dice: «Durante los años de Allende, *la CIA trabajó para lograr una oposición unificada*». ⁹⁷ Y agrega: «el significado de esta operación puede ser ponderado al ver que los dos principales elementos opuestos al gobierno de la Unidad Popular eran el Partido Nacional, conservador, y el reformista Partido Demócrata Cristiano, muchos de cuyos miembros habían apoyado las principales políticas del nuevo gobierno». ⁹⁸

Como puede verse, el Informe pone de relieve las dificultades asociadas al logro de dicho objetivo cuando señala que el Partido Demócrata Cristiano, o muchos de sus miembros, originariamente habían simpatizado con las políticas de Salvador Allende. Por lo mismo es que el desplazamiento de la colectividad hacia la alianza con el Partido Nacional en una radical perspectiva opositora tendría una significación mayor. Eso es lo que trasunta el texto. Y aún algo más: insinúa la convicción de la CIA en orden a que el desplazamiento del Partido Demócrata Cristiano hacia posiciones cada vez más intransigentes frente al gobierno del presidente Allende –al punto de llegar a unirse con su antiguo enemigo, el Partido Nacional, fue obra suya. De más está decir que ese hecho –la unidad opositora–, visto desde la óptica de Washington, era vital a los efectos de conseguir la meta última de su política hacia Chile, es decir, poner fin al gobierno del presidente Allende a través de las «fuerzas internas».

Pero la CIA, según el Informe Church, no solo financió al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional. Lo mismo hizo con otras fuerzas políticas. Algunas de ellas pertenecían a la propia Unidad Popular. Lo que la CIA perseguía era que algunas colectividades de la coalición de gobierno se pasaran a la oposición. En relación con el punto, el Informe sostiene que la CIA «también [...] llevó a cabo una operación para inducir el quiebre de la coalición de la Unidad Popular». ⁹⁹ Más adelante agrega que el 26 de abril [de 1972], «el Comité 40 aprobó 50 000 dólares para un esfuerzo orientado a

⁹⁷ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 78. Las cursivas son mías.

⁹⁸ Idem.

⁹⁹ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., pp. 77-78.

dividir la coalición de la Unidad Popular». ¹⁰⁰ Este último dato es relevante si se tiene en consideración que precisamente por esa fecha –abril de 1972– las diferencias entre el Partido de Izquierda Radical (PIR) y el resto de la Unidad Popular, que venían del año anterior, se ahondaron, cuestión que finalmente dio lugar a la salida de esa entidad del Gobierno y a su estrecha alianza con el Partido Demócrata Cristiano, lo que la llevó a convertirse en una activa fuerza opositora.

En otra parte, el Informe Church señala que «una suma cercana al medio millón de dólares (US\$500 000) fue canalizada a los grupos disidentes durante los años de Allende». ¹⁰¹ No detalla en sus páginas quiénes componían esos grupos, aunque es posible que fueran personas ubicadas al interior de la Unidad Popular. Asimismo señala que la CIA local también proporcionó dinero al Frente Nacionalista Patria y Libertad. Sobre el punto dice que «durante este periodo la CIA puso treinta y ocho mil quinientos dólares (US\$38 500) a disposición de Patria y Libertad, a través de una tercera persona, en una maniobra para crear tensión y un posible pretexto para la intervención de los militares chilenos». Agrega que: «luego [de] que Allende asumió el poder, ocasionalmente la CIA entregó al grupo pequeñas sumas de dinero a través de terceros, con ocasión de manifestaciones y actividades específicas de propaganda. Estos desembolsos, un total de siete mil dólares (US\$7 000), se suspendieron en 1971». El Informe Church, por otra parte, sostiene que posiblemente «fondos de la CIA entregados a partidos políticos llegaron a manos de Patria y Libertad y a un grupo similar, la Brigada Rolando Matus, dado los estrechos vínculos [que existían] entre los partidos y esas organizaciones». ¹⁰²

El financiamiento de los movimientos gremiales y del sector privado

Los gremios empresariales y de la pequeña burguesía constituyeron piezas de gran relevancia en el derrocamiento de Salvador Allen-

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 137.

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 77-78.

¹⁰² *Ibidem*, p. 82.

de. Sus paros –devastadores para la economía nacional– debían contribuir a la ingobernabilidad, tanto como a la crisis económica, ayudando así a crear las premisas requeridas por el golpe. Entre 1970 y 1973, los Estados Unidos proporcionaron un financiamiento comparativamente menor a dichos gremios, quizás bajo el supuesto de que tenían suficientes recursos propios. A ello hay que agregar que a la fecha dichos gremios recibieron aportes financieros de entidades empresariales de otros países, incluyendo transnacionales.

Respecto de los aportes que hiciera la CIA a los gremios empresariales, el Informe Church sostiene que:

[...] el asunto de financiar o no a grupos privados fue debatido en la embajada y en el Comité 40 a fines de 1972 y en 1973. En septiembre de 1972 el Comité 40 autorizó 24 mil dólares (US\$24 000) para «ayuda de emergencia» destinada a una poderosa organización de empresarios, pero rehusó financiar otras. En octubre de 1972 el Comité aprobó cien mil dólares (US\$100 000) para tres organizaciones del sector privado –la organización de empresarios, asociaciones de pequeños y grandes empresarios y una organización coordinadora de grupos de oposición–, como parte del paquete de un millón y medio de dólares de apoyo para grupos de oposición.¹⁰³

Más elevados fueron los montos de dinero aportados durante los meses anteriores al golpe. El Informe Church plantea que: «[...] el 20 de agosto [de 1973] el Comité 40 aprobó una propuesta de un millón de dólares (US\$1 000 000) para [los] partidos de oposición y grupos del sector privado, con el traspaso de los fondos condicionados al embajador Nathaniel Davis y el Departamento de Estado. Ninguna parte de estos fondos fue entregada a grupos del sector privado antes del golpe militar que ocurrió tres semanas después».¹⁰⁴ Esto significa que, dentro de ese millón de dólares, la parte destinada a las organizaciones empresariales solo les llegó a estas cuando el golpe ya se había materializado.

Adicionalmente, el Informe Church da a entender que los paros impulsados por los gremios empresariales en parte se financiaban

¹⁰³ *Ibíd.*, p. 80.

¹⁰⁴ *Ibíd.*, p. 81.

con el dinero que la CIA entregaba a los partidos de oposición, y que estos les desviaban.

En relación a la huelga de camioneros, dos hechos son indiscutibles, dice al respecto el Informe. Primero, que el Comité 40 no aprobó ningún fondo para ser entregado directamente a los huelguistas. En segundo lugar, todos los observadores están de acuerdo en que las dos huelgas prolongadas [la segunda duró desde el 13 de julio de 1973 hasta el golpe del 11 de septiembre] no podrían haber sido sostenidas exclusivamente con fondos sindicales. Aún está poco claro si de hecho, y en qué medida, fondos pasados por la CIA a partidos de oposición pudieron haber sido desviados para apoyar huelgas. Está claro que los huelguistas antigubernamentales estaban siendo apoyados activamente por varios de los grupos del sector privado que recibieron fondos de la CIA. Había numerosos contactos entre estas organizaciones del sector privado y los grupos que coordinaron e implementaron las huelgas.¹⁰⁵

El Informe Church agrega que «en noviembre de 1972, la CIA tomó conocimiento de que un grupo del sector privado había pasado dos mil ochocientos dólares (US\$2 800) directamente a los huelguistas, en contra de las reglas de la Agencia. La CIA reprochó al grupo, pero de todas maneras le entregó dinero adicional al mes siguiente».¹⁰⁶

Otras fuentes se refieren al financiamiento que recibieron los gremios del gran empresariado local por parte de empresas de otros países latinoamericanos a los efectos de llevar a cabo los paros conducentes al golpe. Un autor estadounidense que investigó el tema sostiene que:

[...] las extensas huelgas que proporcionaron el escenario para el golpe militar que derrocó al presidente Allende fueron financiadas parcialmente por empresas con sede en México, Venezuela y Perú, según importantes empresarios chilenos. Estos empresarios, altos dirigentes de la Sofopa, dijeron que ellos, personalmente, habían canalizado esos fondos, que llegaban

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 83.

¹⁰⁶ *Ídem*.

a los 200 mil dólares, para llevar a la huelga a propietarios de camiones, comerciantes y grupos de profesionales, en las semanas que precedieron a la caída del gobierno de Allende, el 11 de septiembre de 1973.

Y agrega:

[...] las fuentes empresariales chilenas no dijeron cuánto dinero recibieron de la CIA [...]. Las fuentes afirmaron que el dinero de las empresas mexicanas, peruanas, venezolanas empezó a llegar repentinamente durante la primera mitad de 1973. Los funcionarios de la Sofofa dijeron que el dinero se distribuyó semanalmente entre los huelguistas durante julio, agosto y septiembre de 1973. Los dólares se convertían en Escudos [moneda nacional de entonces] en el mercado negro, con unos beneficios de 500% sobre la tasa oficial de cambio.¹⁰⁷

Esta información es muy ilustrativa de un hecho adicional: que la pequeña burguesía y las clases medias opuestas al gobierno de la Unidad Popular se hallaban manejadas por el gran capital local e internacional, por un lado, mediante el proveimiento de recursos económicos a sus organizaciones gremiales a fin de lanzarlas en la primera línea, como carne de cañón, en contra del Gobierno, pero también, podríamos agregar, a través del control de sus subjetividades, cuestión que operaba mediante la «campaña del terror». Esta, al llenar a dicha pequeña burguesía de miedos irracionales ante un supuesto mal absoluto que la campaña del terror rotuló con el término de «marxismo totalitario», no le permitió a dicha pequeña burguesía actuar con independencia y discernir lo que estaba en juego y a quién realmente estaba sirviendo.

El financiamiento de los medios de comunicación

Los medios de comunicación fueron uno de los instrumentos más importantes en los propósitos de llevar a cabo el derrocamiento

¹⁰⁷ «Foreing companies aided anti-Allende strikes, Chilean say», *New York Times*, 16 de octubre de 1974, citado por Mónica González: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, ed. cit., p. 278.

del gobierno de Salvador Allende. Fue sobre todo a través de ellos que se procedió a controlar las subjetividades de gran parte del país mediante la construcción de imaginarios colectivos articulados en torno al miedo y la exasperación, indispensables premisas científicamente elaboradas a los fines de desatar una frenética y permanente movilización de una masa que –dispuesta a creer lo que los medios le dijeran– fue perdiendo la capacidad de hacer uso de sus recursos racionales y críticos. No es, pues, extraño que los medios –que en la gran mayoría de los casos estaban en manos de la oposición– recibieran un abundante financiamiento por parte de los Estados Unidos.

No es sorprendente tampoco que el Informe Church afirmara que «en Chile, la operación encubierta de mayor envergadura fuera la propaganda. Fue relativamente barata [...]; se mantuvo a un nivel bajo durante tiempos “normales” y se intensificó para enfrentar amenazas particulares o contrarrestar peligros específicos».¹⁰⁸ Esta propaganda, por cierto, operaba esencialmente a través de los medios. De allí que «además de financiar partidos políticos, el Comité 40 aprobó vastas sumas de dinero para sostener medios de comunicación opositores y así continuar con una agresiva campaña de propaganda».¹⁰⁹

Dicho financiamiento particularmente se canalizó hacia *El Mercurio*. Según el Informe Church: «La CIA gastó un millón y medio de dólares (US\$1 500 000) para apoyar a *El Mercurio*, el principal diario del país y el más importante canal para la propaganda en contra de Allende. De acuerdo a documentos de la CIA estos esfuerzos tuvieron un rol significativo en la creación de las condiciones para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973».¹¹⁰ Un mes después «el Comité 40 aprobó setecientos mil dólares [adicionales] para mantener *El Mercurio* a flote».¹¹¹

La CIA también financió a muchos otros medios. La operación de propaganda más importante de la CIA financió una gran variedad de actividades, sostiene. Se elaboraron varias revistas de

¹⁰⁸ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 34.

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 78.

¹¹⁰ *Ídem*.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 79.

circulación nacional y un gran número de libros y estudios especiales. Se elaboró material para colocación en la cadena de *El Mercurio* (lo que significaba una circulación diaria de más de trescientos mil ejemplares); en diarios de partidos de oposición; en dos periódicos semanales; en todas las radioemisoras controladas por los partidos de la oposición, y en varios programas de televisión de tres canales distintos. *El Mercurio* fue un canal de propaganda importantísimo durante 1970-1973, así como lo había sido durante las elecciones de 1970 y en el periodo preinaugural.¹¹²

El hecho de que la CIA ya no solo financiara a los medios opositores, sino que también elaborara gran parte del material que salía a través de ellos [si no todo] constituye, por cierto, un suceso de la máxima significación, un dato historiográfico ineludible para los efectos de construir cualquier hermenéutica seria sobre lo que el país realmente es. Pero hay otro aspecto no menos relevante. La CIA «también financió una parte cada vez más importante –más del 75 % en 1973– de un organismo de investigación de oposición». Como resultado de ello, «un flujo constante de material técnico y económico llegaba a los partidos políticos de oposición y grupos del sector privado. Muchos de los proyectos de ley preparados por parlamentarios de oposición fueron de hecho redactados por personal de [ese] organismo de investigación».¹¹³

De tal modo, el Informe Church afirma que en la práctica todo el aparato ideológico opositor estaba financiado, e intervenido desde el punto de vista de sus contenidos, por la CIA. En muy pocos países del mundo debe haberse producido un fenómeno análogo, si es que en alguno, como no fuera en territorios coloniales. Sin embargo, configurando un panorama verdaderamente orweliano, lo dicho no le impedía al liderazgo opositor hablar de patriotismo, libertad y democracia.

Las Fuerzas Armadas

Dentro de la estrategia estadounidense, las Fuerzas Armadas locales constituían un punto decisivo. Las acciones de las otras «fuerzas internas», así como las presiones económicas exteriores debían

¹¹² *Ibíd.*, pp. 79-80.

¹¹³ *Ibíd.*, p. 80.

desembocar en su intervención. Por eso fue que desde el mismo momento en que Salvador Allende asumiera la primera magistratura, la estación local de la CIA les prestó toda su atención.

El Informe Church sostiene que «durante todo el trascurso de la administración de Allende, los Estados Unidos mantuvieron *contacto estrecho* con las Fuerzas Armadas chilenas, a través de la CIA y los agregados militares». ¹¹⁴ En otra parte el Informe añade que a lo largo del gobierno de la Unidad Popular «los Estados Unidos mantuv[ieron] contactos de inteligencia con los militares chilenos, incluyendo oficiales que estaban participando en conspiraciones golpistas». ¹¹⁵ En este sentido «las operaciones de recolección de Inteligencia de la CIA entre los militares chilenos incluyeron actividades que iban más allá de la simple recolección de información». ¹¹⁶

Hay que tener presente que la CIA tenía informantes en todos los niveles de las instituciones castrenses del país:

En julio de 1969 la oficina de la CIA en Santiago [había pedido y recibido] el consentimiento de la sede central para un programa clandestino [dirigido a] conseguir colaboradores de Inteligencia dentro de las fuerzas armadas chilenas con el fin de monitorear conspiraciones golpistas. El programa tuvo una duración de cuatro años; involucró colaboradores reclutados en las tres ramas de las fuerzas armadas e incluyó a oficiales del nivel de comandancia, mandos medios, oficiales retirados del Estado Mayor y conscriptos. ¹¹⁷

Evidentemente, tal programa no podía sino contribuir al trabajo llevado a cabo por la CIA entre estas instituciones orientado al golpe. A lo señalado hay que agregar otro dato muy significativo. A partir de 1970 las ventas de equipamiento militar que los Estados Unidos hicieran a las Fuerzas Armadas chilenas se vieron aumentadas de manera considerable, en contraste con el verdadero bloqueo económico que Washington impusiera al país. ¹¹⁸

¹¹⁴ *Ibíd*em, p. 77. Las cursivas son mías.

¹¹⁵ *Ibíd*em, p. 24.

¹¹⁶ *Ibíd*em, p. 97.

¹¹⁷ *Ibíd*em, p. 191.

¹¹⁸ Al respecto, véanse los datos proporcionados por el Informe Church (ed. cit.) p. 94.

Del mismo modo, a partir de 1970 aumentó significativamente el número de oficiales chilenos entrenados en la zona del Canal de Panamá. En 1969, según el Informe Church, fueron 107, mientras que en 1973 alcanzaron a los 257.¹¹⁹ Ello, con su correspondiente adoctrinamiento, debía ayudar al golpe.

El Informe Church, por otra parte, menciona una serie de operaciones de engaño organizadas por la CIA dirigidas hacia los uniformados chilenos a fin de presionarlos a reaccionar en contra del gobierno de Salvador Allende. Durante la segunda mitad de 1971, «la oficina [local de la CIA] y la central discutieron una “operación de engaño” diseñada para alertar a oficiales chilenos sobre una supuesta o inventada infiltración cubana al ejército chileno».¹²⁰

En septiembre [del mismo año] la oficina propuso entregar información –alguna de ella fabricada por la CIA– que pudiera convencer a altos oficiales del ejército chileno de que la unidad de Investigaciones de Carabineros estaba, con la aprobación de Allende, actuando conjuntamente con la Inteligencia cubana (DGI) para recoger inteligencia perjudicial para el alto mando del ejército. Se esperaba que la operación incitaría a los militares a oponerse a las relaciones de Allende con los cubanos, los indujera a presionar al gobierno para cambiar su orientación y para que se movilizaran en contra de él si fuera necesario.¹²¹

Pero pronto la CIA cambió de táctica, lo que ocurrió aparentemente cuando tomó contacto directo con los uniformados que organizaban el golpe. La CIA se propuso cooperar con ellos. El Informe Church se refiere a esta situación en los siguientes términos: «un mes después [en octubre de 1971], la oficina central de la CIA sugirió que la operación de engaño se suspendiera, a cambio de pasar información “verificable” al líder del grupo golpista que la central y la oficina local percibían como quien tenía mayores posibilidades de éxito».¹²² Sin perjuicio de ello, «en diciembre de 1971, un paquete de materiales, que incluía una carta falsificada, fueron pasados a un oficial chileno fuera de Chile. La CIA

¹¹⁹ *Ibíd.*, p. 95.

¹²⁰ *Ibíd.*, p. 93.

¹²¹ *Ibíd.*, p. 95.

¹²² *Ídem.*

no recibió ningún informe posterior sobre el impacto, si es que lo hubo, que tuvo esta "información" en los militares chilenos. La concepción original incluía el traspaso de una serie de paquetes, pero no se entregaron otros». ¹²³

Aparentemente, también durante 1971, la estación local de la CIA solicitó a su sede central que se llevara a cabo una operación dirigida a formar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas con el propósito de sensibilizarlos políticamente. La CIA central aceptó la propuesta. El Informe se refiere al tema en los siguientes términos: «luego de una nueva petición de la oficina de Santiago, la Central estuvo de acuerdo con la operación para educar a altos oficiales chilenos y mantenerlos en estado de alerta». ¹²⁴

Paralelamente, la oficina local de la CIA recopilaba «inteligencia operacional necesaria para el caso de un golpe: listas de arrestos, instalaciones civiles claves y personal civil que necesitaba protección, instalaciones gubernamentales que necesitaban ser tomadas y planes de contingencia que el gobierno utilizaría en caso de una insurrección militar», ¹²⁵ etcétera.

El Informe Church afirma que:

[...] la red de Inteligencia [que la CIA había montado al interior de las Fuerzas Armadas] siguió informando durante todo el año 1972 y 1973 sobre actividades conspirativas. Durante 1972 la oficina continuó monitoreando el grupo que podría organizar un golpe exitoso, y dedicó una cantidad sustancialmente mayor, en tiempo y en esfuerzos, para infiltrar[lo] (en comparación a lo dedicado a grupos anteriores). Este grupo había llamado la atención de la oficina en octubre de 1971. En enero de 1972, la CIA [lo] había infiltrado exitosamente [...] y estaba en contacto con su líder a través de un intermediario. ¹²⁶

En el contexto de esa connivencia, «los informes de Inteligencia sobre conspiraciones golpistas tuvieron dos momentos culminantes: uno durante la última semana de junio de 1973 [cuando se produjo el llamado Tacnazo] y el otro a fines de agosto y en las

¹²³ *Ibidem*, pp. 95-96.

¹²⁴ *Ibidem*, p. 95.

¹²⁵ *Ibidem*, p. 96.

¹²⁶ *Ibidem*, pp. 96-97.

primeras dos semanas de septiembre»,¹²⁷ preludiando el golpe del 11 de este mes cuando el éxito finalmente coronara los esfuerzos estadounidenses y de las fuerzas locales opuestas a Salvador Allende.

Conclusiones

Como se ha podido ver, los textos estadounidenses expuestos describen detalladamente las políticas hacia Chile que entre 1970 y 1973 elaboró y llevó a cabo el gobierno de Washington. Asimismo, evidencian que esa política fue formulada en los niveles más altos del Estado norteamericano y que su finalidad explícita fue el golpe de Estado, tanto luego de que Salvador Allende triunfara en las elecciones presidenciales de 1970, como después de que asumiera el mando del país.

Por otra parte, los mencionados documentos dejan ver con toda claridad la importancia que para esas políticas tenían las «fuerzas internas», a las que Washington financió abundantemente, siempre en la perspectiva del golpe. También dejan ver cómo, en la estrategia estadounidense pos 4 de noviembre de 1970, las presiones económicas desde el exterior impulsadas por Washington –las que expresamente pretendían arruinar a la economía chilena– eran concebidas por la cúpula norteamericana como un medio para permitirle a las «fuerzas internas» –civiles y militares– desencadenar el golpe, el que desde un comienzo el gobierno de Washington monitoreó a través de la CIA.

A la luz de lo que revelan los documentos estadounidenses, se hace del todo comprensible el comportamiento de las fuerzas opositoras al presidente Allende (esto es, las «fuerzas internas»). Como se verá, estas se negaron sistemáticamente al acuerdo y a la negociación a la que el mandatario permanentemente las llamara. A la inversa, tales fuerzas, con financiamiento extranjero, se empeñaron en impulsar la ingobernabilidad y el caos, el que, por lo demás, pretendían cargar a cuenta del Gobierno.

Resulta sorprendente que los documentos estadounidenses examinados a lo largo de este texto –dada la extrema crudeza de la información que proporcionan– no hayan sido objeto de una

atención preferente por las instituciones públicas, ni –salvo casos minoritarios– por la academia y las ciencias sociales, tan sensibles, por lo demás, a todo lo que venga de Francia y de los intelectuales e instituciones del mundo anglosajón. ¿Cómo no pensar que ese «ninguneo» nos dice más de algo sobre lo que este país ha llegado a ser durante estos últimos cuarenta y siete años?

CAPÍTULO 13

La derecha durante el gobierno de la Unidad Popular

El Partido Nacional

Durante el gobierno de Salvador Allende, y aun antes de su investidura presidencial, la derecha, desde 1966 reconvertida en el Partido Nacional, se caracterizó por transitar rápidamente desde cierta actitud *proto-rupturista* que exhibiera durante la administración de Frei Montalva, hacia un rupturismo abierto. Así, durante los tres años del gobierno de Salvador Allende, dicha derecha terminó de embarcarse en una política de desestabilización del orden institucional apoyándose a los efectos en las organizaciones de la pequeña burguesía y de ciertas capas medias, a las que con un discurso orientado a generar intensos miedos, intentó movilizar y soliviantar. Ese discurso acentuó el carácter dicotómico que le fuera propio durante el gobierno de Frei, oponiendo la «libertad» y la nación, concebidas como un bien absoluto, al «marxismo totalitario al servicio de una potencia extranjera expansionista», conceptuado como un mal absoluto, al que, como medio de salvar a aquella, había que erradicar a través de la intervención de las Fuerzas Armadas. En resumen, se trataba del discurso decisionista requerido por los crímenes masivos desde el Estado, que con la dictadura cívico militar pronto advendrían.

En la señalada perspectiva, el Partido Nacional se caracterizó por implementar una estrategia multifacética durante el gobierno de Salvador Allende. La colectividad, logrando una considerable

presencia en la sociedad civil, a diferencia de otros grupos de extrema derecha, le asignó un papel muy relevante a la política en su acepción tradicional; es decir, a la acción de los partidos y a su desempeño dentro de la institucionalidad, aunque a fin de quebrarla. Al mismo tiempo le prestó mucha atención al despliegue de la sociedad civil, a la que exitosamente intentó movilizar mediante un frenético discurso polarizador. En este quehacer buscó cooptar al Partido Demócrata Cristiano y utilizar su base social a los fines de generar la ingobernabilidad que debía preceder al golpe.

Se podría decir, en esa perspectiva, que, como se señaló en un capítulo precedente, la estrategia del Partido Nacional, durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular, se orientó con notable persistencia a: 1) la conformación de dos bloques políticos que no negocian: Gobierno y oposición, este último articulado en torno al eje Partido Nacional-Democracia Cristiana, dirigido por el primero; 2) la conversión de todo conflicto local en un conflicto general, desarrollado en una perspectiva polarizadora y deslegitimadora del marco institucional de los conflictos; 3) la generación de un masivo e irracional miedo –y, desde ya, odio– al «mal absoluto», el «totalitarismo marxista», sentimiento científicamente inoculado en la población; 4) la instauración de la ingobernabilidad en el país mediante un fuerte movimiento asentado en los gremios de la pequeña burguesía, respaldados y dirigidos por los partidos opositores; 5) el flanqueo del gobierno del presidente Allende por parte del Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, bajo la acusación de que se habría salido de la constitución y la ley; 6) la declaración por parte del Congreso –en el contexto de una serie de paros generales– de la ilegitimidad del Gobierno, con el correspondiente llamado a las Fuerzas Armadas, institucionalmente consideradas, a que lo depusieran; y 7) la intervención de los militares estableciendo un régimen «de orden y autoridad» que permitiera instaurar el proyecto global del gran empresariado, cuestión que debía darse conjuntamente con la destrucción, incluso física, de la izquierda y de las organizaciones sociales en que se apoyaba.

En la implementación práctica de la señalada política por parte del Partido Nacional es posible distinguir las fases que siguen.¹

¹ La versión inicial de la periodización de la trayectoria del Partido Nacional durante el gobierno de la Unidad Popular, figura en Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit.

Desde el 4 de septiembre al 4 de noviembre de 1970. Durante este lapso el Partido Nacional se esforzó por evitar el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Al respecto, intentó una alianza con la Democracia Cristiana para que en el Congreso Pleno se investiera como presidente de la República a Jorge Alessandri quien, una vez elegido, renunciaría para dar paso a nuevos comicios en los cuales la derecha apoyaría la candidatura de Frei Montalva. Esta opción, cuya autoría el Informe Church atribuye a la CIA («el gambito Frei»), fracasó. Paralelamente, grupos de extrema derecha—siempre en colaboración con la CIA, según el Informe Church—intentaron un golpe de Estado, para lo cual trataron de raptar al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, quien, al resistir, fue asesinado.

Como se dijo en un capítulo anterior, en la intentona golpista, aparte de la CIA y determinados políticos criollos, estaban implicados altos oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, como el almirante Hugo Tirado, jefe de la Armada; el general director de Carabineros, Vicente Huerta; el general del ejército Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, y el general Roberto Viaux Marambio.² Según se ha expresado, como consecuencia del asesinato del general Schneider, la maniobra golpista se frustró y Salvador Allende pudo asumir la presidencia.

Desde el 4 de noviembre de 1970 al 6 de junio de 1971. Esta fase se caracterizó por los esfuerzos que llevó a cabo el Partido Nacional en orden a mantenerse como actor relevante del cuadro político, evitar su aislamiento y levantar una iniciativa permanente en contra del Gobierno. En relación con esto último inauguró una táctica orientada a impedir que el Ejecutivo funcionara normalmente, cuestión que debía lograrse mediante sistemáticas acusaciones constitucionales en contra de los ministros del gabinete.

El Partido Nacional se esforzó también por introducir fuertes temores entre las clases medias, intentando que desarrollaran respuestas reflejas frente al Gobierno. En relación con este propósito, desde el 11 de enero de 1971 en adelante, el Partido Nacional procedió a publicar una serie de inserciones en la prensa destinadas a

² Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, Ed. Cesoc, Santiago, 2000, p. 39.

generar una reacción masiva en contra del Ejecutivo. En la primera, con el título «El PN alerta al país», la colectividad dijo denunciar «el control creciente del partido comunista sobre el gobierno» y convocó a la ciudadanía a ponerle atajo. El 15 de enero en la inserción titulada «La bolsa y la vida», el Partido Nacional llamó a los accionistas de los bancos privados a no vender sus acciones al Estado, ello «como una forma de preservar la democracia». El 20 de enero, en la inserción «¿Se quedaría usted sin su casa?», la colectividad dijo alertar sobre las ocupaciones ilegales de vivienda. Y así sucesivamente. De este modo, el Partido Nacional intentó convencer a la ciudadanía de que el país avanzaba por una vía de anormalidad, cuestión en la cual en el futuro insistirá permanentemente.³

De tal modo, la colectividad fue pasando desde una fase inicial de repliegue derivada del fallido golpe del 22 de octubre de 1970 que, como viéramos, se tradujo en el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, a una sedicente ofensiva política centrada en la idea de la ilegalidad de la acción del Gobierno. Dentro de esa línea, el Partido Nacional se planteó el objetivo de sumar al Partido Demócrata Cristiano en un frente opositor común, que él aspiraba a liderar, todo en el contexto de una estrategia dura, orientada a cercar al Ejecutivo, utilizando con ese fin los otros aparatos del Estado,⁴ siempre junto a la agitación callejera.

Durante la campaña electoral para los comicios municipales a celebrarse en abril de 1971 —en la cual el Partido Nacional se esforzó por obtener buenos resultados a fin de no quedar marginalizado del cuadro político (como ocurriera en 1965)—, esa estrategia se manifestó en la consigna «Póngase firme junto a un partido firme». Y cuando perfilándose como una oposición «firme» en esos comicios el Partido Nacional obtuvo un 18,5% de los votos, logró su meta de consagrarse como un actor relevante el que, por tanto, podía proponerse diseñar acciones mayores. Precisamente a esos propósitos se abocó su Consejo General de Osorno, celebrado los días 6 y 7 de junio de 1971.

Desde el 6 de junio de 1971 a marzo de 1972. El Consejo General de Osorno, de hecho, representó una reafirmación del paso

³ *Ibídem*, pp. 61-62.

⁴ *Ibídem*, p. 62.

del Partido Nacional desde el protorrupturismo de fines de los años sesenta hacia un rupturismo abierto. En función de ello llevó a cabo una importante reafirmación ideológica. El Partido Nacional resolvió en dicho evento «afirmar una concepción nacionalista»,⁵ la que era apta para agrupar a los más amplios estratos medios y del pequeño empresariado en una lucha frontal en contra del Gobierno. Una definición nacionalista como la que procedía a ratificar era funcional al indicado propósito en virtud de que permitía polarizaciones mayores («la patria *versus* el comunismo internacional») y, por tanto, deslegitimaciones totales del adversario, además de un enardecimiento considerable de los estratos sociales a movilizar. Coherente con ello, el Consejo General de Osorno acordó que la colectividad llevaría a cabo una «oposición integral», es decir, en todos los planos, tanto dentro de las instituciones del Estado como en la sociedad civil. Este planteamiento suponía conseguir: a) la unidad de toda la oposición y estructurar el cuadro político en dos bloques que no negociaran entre sí; b) establecer una vinculación orgánica entre el bloque opositor y los gremios a movilizar en una perspectiva desestabilizadora; y, c) la hegemonía del Partido Nacional sobre el Partido Demócrata Cristiano.

Luego de estas definiciones, ya desde junio de 1971 en adelante, el Partido Nacional logró impulsar movilizaciones gremiales contra el Gobierno y desarrollar acciones tácticas en común con la Democracia Cristiana, impactada por el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic. Incluso apoyó a este partido en eventos electorales, como ocurriera en las elecciones complementarias de Valparaíso.

Entre fines de agosto y comienzos de septiembre de 1971, el Partido Nacional –y el conjunto de la derecha– hizo serios esfuerzos para llevar a cabo una fuerte ofensiva en contra del Gobierno. Para tales efectos intentó apoyar e incentivar todas las demandas gremiales susceptibles de ser opuestas al Ejecutivo para ir creando de ese modo una sensación de descontento general. Esa línea, por cierto, correspondía al concepto de «oposición integral» que la colectividad había acordado en su Consejo de Osorno.⁶

⁵ Véase, *El Mercurio*, 7 de junio de 1971, p. 26.

⁶ Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., pp. 112-113.

Paralelamente dio pasos más radicales orientados a la deslegitimación del Gobierno. Así, intentó convencer a la población en cuanto a que la «vía chilena» propiciada por el presidente Allende no era más que un camuflaje. Dentro de esa línea, el 7 de septiembre de 1971, el Partido Nacional, en declaración pública firmada por su presidente, Sergio Onofre Jarpa, exhibió con toda claridad el patrón conceptual de su discurso dicotómico, que oponía un bien absoluto a un mal absoluto. En dicha oportunidad, Jarpa acusó al Gobierno de tratar de «proyectar una buena imagen de Chile hacia el exterior, afirmando su devoción a la democracia y su respecto a las leyes y a las personas. Pero en la práctica utiliza todos los recursos, aún los más deleznable, para alcanzar sus propósitos totalitarios y antichilenos». Luego agregó: «es la táctica de la máscara democrática tras la cual se oculta el verdadero rostro del comunismo internacional». Lo que se pretende –dijo Jarpa más adelante– «es transformar lentamente a Chile en un Estado comunista totalitario [y] abrir camino a la penetración soviética en América Latina». En base a esta caracterización del conflicto político, el Partido Nacional, a través de su presidente, llamó a los chilenos a «asumir su responsabilidad, [y] a luchar contra la prepotencia y la penetración comunista extranjeroizante [...]».⁷

Durante el mismo mes de septiembre, el Partido Nacional interpuso una acusación constitucional en contra del ministro Pedro Vuskovic. Sin embargo, la Democracia Cristiana todavía no se dejó cooptar para una política tan confrontacional. Frente a ello el Partido Nacional respondió intentando hacerle pagar ante la base social opositora un creciente costo político, presentándola como un partido débil, ingenuo y sucesivamente engañado por «el marxismo».

Con esta política, en noviembre de 1971, el Partido Nacional apoyó la convocatoria a una marcha de mujeres a propósito del desabastecimiento que ya empezaba a insinuarse. La marcha, llamada luego de «las Cacerolas Vacías», dio lugar a acciones de grupos paramilitares, los que durante dos días atentaron contra locales de partidos de gobierno y coparon una serie de calles en los barrios acomodados. Luego de realizada la marcha, el Partido Nacional

⁷ Citado en Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 113.

explicitó su voluntad de apoyar otras.⁸ En diciembre, se empezaba a evidenciar con más claridad aún las metas desestabilizantes del partido. El paso político desde el protorrupturismo al rupturismo abierto tenía ahora su traducción en el terreno práctico.

En enero de 1972, mediante pactos de omisión, los opositores unidos derrotaron al Gobierno en dos elecciones complementarias. Mientras, en febrero, la oposición unida logró que el Congreso aprobara el proyecto Hamilton-Fuentealba, que impedía al Gobierno pasar empresas al área social sin el acuerdo previo del Parlamento. La Unidad Popular retrocedía claramente. Así se llegó a marzo de 1972.

Desde marzo a octubre de 1972. Habiendo logrado ya pasar a la ofensiva y arrastrar a la Democracia Cristiana a algunas acciones importantes, el Partido Nacional, en esta fase, empezó a reflexionar sobre el desenlace definitivo del conflicto. En virtud de ello su rupturismo se hizo cada vez más evidente. En marzo de 1972 planteó de un modo elíptico el problema del desenlace del conflicto político cuando postuló que «el comunismo internacional y sus aliados habían iniciado el asalto al poder».⁹ Frente a ello, a juicio del Partido Nacional, solo cabía encarar con más energía al Gobierno. En virtud de esto fue que –aparte de impulsar movilizaciones cada vez más fuertes– rechazó los diálogos que llevó a cabo el Partido Demócrata Cristiano con el Ejecutivo a fin de distender el cuadro político. El Partido Nacional, consecuente con su política rupturista y con su perspectiva de reflexionar sobre el desenlace definitivo del conflicto, se manifestó contrario a cualquier solución negociada: «no compartimos la teoría de que es necesario negociar ante la amenaza de un enfrentamiento», pues «por este camino se llega a las peores concesiones y transacciones»,¹⁰ señaló.

Esta tesis, de una u otra forma, fue ratificada el 24 de junio de 1972, cuando en su Consejo de La Serena, el Partido Nacional explicitó su voluntad de llegar a un desenlace definitivo en un tiempo breve: «el tiempo corre a favor del marxismo», dijo entonces,

⁸ Véase la declaración del Partido Nacional aparecida en *El Mercurio*, 3 de diciembre de 1971, p. 25.

⁹ Inserción pública del Partido Nacional, *El Mercurio*, 10 de marzo de 1972, p. 21.

¹⁰ *El Mercurio*, 17 de junio de 1972, p. 25.

por lo que «los demócratas debemos buscar un desenlace rápido antes de que el Congreso sea sólo un edificio decorativo».¹¹ El 16 de julio de ese año, el coronel (R) Alberto Labbe, a nombre del Partido Nacional, pronunció un discurso por cadena parcial de emisoras, el cual giró en torno a dos cuestiones: a) la ilegitimidad del Gobierno y el derecho a no prestarle obediencia; y b) los factores del desenlace de la lucha en curso. En relación con esta última cuestión, el discurso ponderó tres variables: 1) el apoyo de la sociedad civil a una política rupturista; 2) la posición de las Fuerzas Armadas; y 3) la situación geopolítica del país. La conclusión del análisis fue categórica: «están dados todos los factores para superar la crisis que vivimos e iniciar después de esta experiencia, una nueva etapa de unidad nacional, de progreso y de expansión de la nacionalidad».¹²

Luego de que el movimiento de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes creó nuevas orgánicas, como los comandos multigremiales, y después de que fracasara el diálogo entre el gobierno y la Democracia Cristiana, en agosto de 1972, el Partido Nacional logró ensamblar un bloque con este partido en la perspectiva de una ofensiva general. El 21 de dicho mes se produjo el primer paro nacional del comercio en contra del gobierno, que recibió el apoyo activo de todos los gremios empresariales y muchos profesionales. Sustentado en esta base social movilizadora y crecientemente enardecida, al mes siguiente, el 25 de septiembre de 1972, en su Consejo de Panimávida, el Partido Nacional insistió: «el tiempo está corriendo en contra nuestra», «no hay Ejército Rojo que nos pueda invadir y nuestras Fuerzas Armadas jamás se prestarán para ningún tipo de dictadura [sic]».¹³ Tres días después, en plena concordancia con la temática del desenlace del conflicto colocada en el tapete desde marzo en adelante, el Partido Nacional planteó el concepto de «resistencia civil».

De este modo, a la altura de septiembre de 1972, luego de que desde el año anterior lograra levantar un fuerte movimiento de un sector de la sociedad civil en contra del Gobierno; después de que se evidenció la posibilidad de arrastrar a la Democracia Cristiana

¹¹ *El Mercurio*, 25 de junio de 1972, p. 25.

¹² *El Mercurio*, 16 de julio de 1972, p. 33.

¹³ *El Mercurio*, 25 de septiembre de 1972, p. 19.

a determinadas acciones cada vez más radicales, y, en fin, tras reflexionar detenidamente sobre un desenlace no negociado del conflicto ponderando sus variables sociales, políticas, militares y geopolíticas, y concluido que el cuadro le era favorable, el próximo paso del Partido Nacional consistió en lanzar iniciativas conducentes a operar el desenlace definitivo arrastrando, de hecho, al Partido Demócrata Cristiano, lo cual, precisamente, fue lo que se jugó en el paro de octubre de 1972.

Desde octubre de 1972 a marzo de 1973. El paro de los gremios opositores que estalló a comienzos de octubre tenía ciertamente como meta poner fin al gobierno. Esta meta fue por primera vez explicitada por el Partido Nacional. En su diseño político, a la acción de la sociedad civil, en particular, de los gremios, debía seguir la deposición de Allende por el Congreso, la que debía hacerse valer por las Fuerzas Armadas. El 28 de ese mes, el Partido Nacional dio a conocer un documento titulado «La responsabilidad del Congreso en la encrucijada de Chile», el cual explicitó el señalado diseño político. El documento interpeló a los militares y los instó a que no siguieran sosteniendo al Gobierno. Al mismo tiempo afirmó que la definición del conflicto político tendría que venir «en plazo breve, mucho antes de la elección parlamentaria» de marzo de 1973. Polemizando de modo implícito con la Democracia Cristiana, el documento dijo postular una solución no «electoralista». Por último, pidió al Congreso que depusiera al presidente Allende.¹⁴

Al mismo tiempo, el Partido Nacional presionó a las Fuerzas Armadas para que derribaran al Gobierno. En efecto, a través del citado documento les indicó que tenían «facultades y deberes muy claros, establecidos por [la] Constitución». Les señaló que su respaldo a «las acciones ilegítimas de un Gobierno» implicaba «arrastrarlas a situaciones gravísimas que se [contraponían] a su propia función».¹⁵ Mientras que *El Mercurio* publicaba en forma destacada una reflexión del general estadounidense Douglas Mc Arthur, que decía: «observo que ahora rige un nuevo concepto, desconocido hasta hoy y peligroso, según el cual los miembros de nuestras Fuerzas Armadas deben acatamiento y lealtad a los que

¹⁴ Véase el texto de este documento, publicado en *El Mercurio*, 28 de octubre de 1972, p. 25.

¹⁵ *El Mercurio*, 28 de octubre de 1972, p. 25.

ejercen temporalmente la autoridad ejecutiva en el Gobierno, más bien que al país y a la Constitución que juraron defender: Nada podría ser más peligroso». ¹⁶ El mensaje que *El Mercurio* enviaba a los uniformados a través de esta cita no podía ser más claro.

El gabinete con participación de las Fuerzas Armadas formado por Salvador Allende, en el contexto de un amplio movimiento popular que logró mantener funcionando al país, permitió desarmar temporalmente la estrategia del Partido Nacional. Este, entonces, se vio obligado a replantear su meta de poner fin al gobierno postergándola para luego de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que esperaba que la oposición obtendría dos tercios de los votos, cuestión que debía hacer posible se aprobara en el Congreso una acusación constitucional en contra del mandatario para así deponerlo.

Desde marzo a septiembre de 1973. En los comicios parlamentarios de marzo de 1973, la izquierda obtuvo 44% de los votos, con lo cual la estrategia de deponer al presidente Allende mediante una acusación constitucional se desmoronó. Entonces el Partido Nacional explicitó su convicción en orden a que era necesaria una pronta salida «no electoral». «Mientras algunos dirigentes políticos opositores proyectan acciones electorales a largo plazo, los comunistas trabajan con el objetivo inmediato de acumular todo el poder en sus manos», ¹⁷ sostuvo su líder, Sergio Onofre Jarpa, al tiempo que volvía a pedir al Congreso que declarara la inhabilidad de Allende.

En medio de la huelga de El Teniente, de las movilizaciones en contra del proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) y del Área de Propiedad Social que la oposición unida lograra montar, el 12 de mayo, la Juventud Nacional (JN) insistió en la necesidad de impulsar una estrategia no electoral que se abocara a «escoger, y programar, de inmediato, una estrategia clara y coherente para enfrentar conjuntamente, de una vez por todas, el problema de fondo planteado: la lucha por el poder real», en virtud de que el conflicto político había entrado «en la etapa de la definición final». ¹⁸ Así el Partido Nacional explicitaba nuevamente su estrategia rupturista.

¹⁶ *El Mercurio*, 27 de octubre de 1972, p. 8.

¹⁷ *El Mercurio*, 15 de abril de 1973, p. 41.

¹⁸ *El Mercurio*, 12 de mayo de 1973, p. 11.

El 17 de junio, el Partido Nacional en otra declaración pública sostuvo: «el señor Allende ha dejado de ser el Presidente constitucional del Chile».¹⁹ Ello en virtud de que su mandato estaría viciado por ilegitimidad de ejercicio. A lo dicho, el Partido Nacional agregó otro argumento, típico de la lógica dicotómica que profesaba, la que, según hemos visto, se caracterizaba por oponer la nación a entidades foráneas que intentarían dominarla desde dentro. Coherente con este supuesto ideológico, la mencionada declaración defendió que la ilegitimidad del gobierno se derivaba también de «la dependencia de su “partido eje”, respecto de una potencia extranjera expansionista».²⁰

El 28 de junio, en inserción pública, la colectividad declaró que no podía negarse que «la acción de las Fuerzas Armadas ha sido eficaz al impulsar el desarrollo de las naciones en que se han hecho cargo del gobierno».²¹ Al día siguiente advino el fallido intento de golpe de Estado conocido como el Tanquetazo, impulsado por Patria y Libertad.

Luego del Tanquetazo el Partido Nacional llevó a cabo una ofensiva que resultó siendo la final, la cual evidenció los siguientes aspectos: a) permanentes, y más o menos velados llamamientos a las Fuerzas Armadas para que intervinieran derribando al gobierno; b) intentos por caotizar la situación para demostrar que el Ejecutivo no controlaba el país; y c) aumento de la presión de los otros poderes del Estado sobre el Ejecutivo.

En este contexto, ante la solicitud de la Iglesia, la Democracia Cristiana entró en el último diálogo con el Gobierno, fijado para el 30 de julio. Sin embargo, el día anterior estalló una fuerte ola de atentados terroristas llevados a cabo por Patria y Libertad, los que incluyeron el asesinato del edecán naval del presidente Allende, atentados que continuaron hasta septiembre.

Ante ese cuadro, la conclusión del Partido Nacional fue categórica. En declaración pública señaló: «el gobierno ha sido definitivamente sobrepasado y ya no es capaz de garantizar el orden interno ni los derechos, la seguridad o la vida de las personas». Y en referencia al diálogo que el Partido Demócrata Cristiano se

¹⁹ *El Mercurio*, 17 de junio de 1973, p. 35.

²⁰ *Ídem*.

²¹ *El Mercurio*, 28 de junio de 1973, p. 31.

aprestaba a iniciar, apuntó que las soluciones requeridas por el país se lograrían «sólo [mediante] la intervención de quienes representan los valores permanentes de la nacionalidad, por encima de las banderías políticas [...]». ²² Dicha intervención haría «posible crear una nueva institucionalidad». ²³

Cuando el presidente Allende, a comienzos de agosto, logró formar un gabinete con participación de los mandos constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, el Partido Nacional intentó hacer un distingo entre los ministros uniformados y las respectivas instituciones. Sostuvo que si aquellos no consultaron a estas, tal cosa «significaría un distanciamiento entre los altos mandos y las instituciones mismas». ²⁴

En los siguientes diez días, el Partido Nacional lanzó una ofensiva implementada simultáneamente en tres planos: a) a través de distintas acciones, procedió a aislar a los altos mandos constitucionalistas del Ejército, que, de hecho, estaban siendo uno de los obstáculos principales para un desenlace rupturista, lo que culminó con la renuncia de los generales Carlos Prats, Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda, y con la asunción del general Pinochet como comandante en jefe de la institución (22 de agosto); b) se lanzó un paro nacional de los gremios (21 de agosto), que luego se hizo indefinido; y c) se verificó el pronunciamiento del Congreso, tan solicitado por el Partido Nacional que, de hecho, constituía un llamado a las Fuerzas Armadas para que removieran al presidente Allende (22 de agosto). Todo simultáneamente. El marco institucional de los conflictos terminaba así de ser demolido.

El 6 de septiembre, el Partido Nacional llamó a impulsar los paros hasta que el presidente Allende renunciara. ²⁵ El 7 se presentó un proyecto de reforma constitucional para que no se pudiera remover a los mandos militares –ya renovados–, sin el acuerdo del Senado, para intentar así bloquear la última medida que Salvador Allende podría tomar para impedir el golpe. El 11 se produjo el golpe. Entonces, el 13, el Partido Nacional se autodisolvió luego de abdicar en las Fuerzas Armadas el rol de refundar el Estado sobre

²² *El Mercurio*, 9 de agosto de 1973, p. 8.

²³ *El Mercurio*, 29 de julio de 1973, p. 5.

²⁴ *El Mercurio*, 12 de agosto de 1973, p. 33.

²⁵ Véase *El Mercurio*, 6 de septiembre de 1973, p. 19.

las ruinas del estado de compromiso. El rupturismo del Partido Nacional había culminado con pleno éxito.

La extrema derecha nacionalista y corporativista

Entre los factores que coadyuvaron al golpe del 11 de septiembre ocupan un lugar importante los grupos de extrema derecha, nacionalistas y corporativistas, los que luego del triunfo de Salvador Allende redoblaron los esfuerzos que venían realizando desde finales del gobierno de Eduardo Frei Montalva para abrir paso a un derrumbe institucional. En lo que sigue nos referiremos a algunos de ellos y a sus estrategias golpistas.

Frente Nacionalista Patria y Libertad

El Frente Nacionalista Patria y Libertad fue el continuador del Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad, creado después del triunfo obtenido por Salvador Salvador Allende en los comicios presidenciales del 4 de septiembre de 1970. El Movimiento Cívico se constituyó con la participación de miembros del Comando Electoral Alessandrista. Su objetivo fundamental consistió en instaurar el clima de inestabilidad requerido para una intervención de las Fuerzas Armadas destinada a impedir el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. En abril de 1971, la entidad se reestructuró definiéndose como Frente Nacionalista, a cuya cabeza se mantuvo su fundador, el abogado Pablo Rodríguez Grez.

Ideológicamente, el Frente Nacionalista Patria y Libertad hizo suyo el ideologismo de José Antonio Primo de Rivera. Por tanto, postuló la necesidad de una «revolución nacional» encaminada a resolver la pugna entre la nación y el marxismo, es decir, entre el bien absoluto y el mal absoluto. Conceptuando al Estado chileno como liberal-burgués y acusándolo de dividir a la nación y permitir con ello el triunfo del marxismo, el Frente Nacionalista Patria y Libertad propugnó un Estado integrador basado en una representación corporativa y en un gobierno autoritario. En ese contexto, puso de manifiesto sin ambigüedades las relaciones existentes entre su ideologismo y las extremas violencias estatales. Su líder, Pablo

Rodríguez Grez, declaró que la primera tarea del gobierno autoritario a instaurar sería «la limpieza»; y añadió que «los productos de la descomposición deberán ser extirpados sin piedad, aunque ello cause dolor, hasta dejar libres y limpios de infección las bases sanas del cuerpo nacional».²⁶

Durante el gobierno de Salvador Allende, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, criticando el «electorerismo» del Partido Nacional, y lo que le parecía era la impotencia de los partidos para enfrentar al «marxismo», sostuvo que el conflicto político en curso debía resolverse mediante un alzamiento de las Fuerzas Armadas, el cual, no obstante, tendría un carácter cívico militar. El Frente Nacionalista Patria y Libertad sería su brazo armado civil. El alzamiento se iniciaría con una acción focalizada que sería seguida por el resto de las instituciones de la defensa. En función de esta estrategia, la entidad se empeñó activamente en penetrar a las Fuerzas Armadas, cuestión que en ocasiones hizo a ojos vista.

Eduardo Labarca se refiere a la mencionada penetración, basándose para ello en testimonios de uniformados constitucionalistas que más adelante, ya instalada la dictadura, fueron expulsados de las filas y luego debieron exilarse. Relata sobre un capitán, entre otros, de nombre Juan Carlos Sandoval, quien con posterioridad durante la dictadura cívico militar se desempeñará como torturador. Cuenta: «Todos los días después de pasar lista a las ocho de la mañana al personal de hangar blanco, Sandoval abandonaba ostensiblemente el servicio para irse a sus actividades conspirativas. En el casino de oficiales de la Escuela de Aviación se reunía con dirigentes y enlaces de Patria y Libertad que ingresaban en automóvil a la propia unidad». Mientras que «en muros y baños de casinos y otros lugares de las unidades de la FACH, aparecían inscripciones soeces contra el presidente Allende y la araña fatídica de Patria y Libertad».²⁷

El Frente Nacionalista Patria y Libertad logró importantes avances en la penetración del Regimiento Blindado No. 2, y llegó a tener en él significativas adhesiones entre oficiales de grado medio.

²⁶ Citado por Claudia Abarca y otros: *Frente Nacionalista Patria y Libertad (1970-1973)*, Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas, Santiago, 1993, p. 59.

²⁷ Eduardo Labarca Goddard: «El golpe por dentro. Apuntes para una investigación», *Araucaria de Chile*, núm. 1, 1978, pp. 70-71.

Ello le permitió, el 29 de junio de 1973, levantar la unidad contra el gobierno, intentona que terminara fracasando. Fue el llamado Tanquetazo. Como producto de su fracaso, la plana mayor del Frente Nacionalista Patria y Libertad se asiló en la embajada de Ecuador.

Luego, Roberto Thieme y Ernesto Muller, dirigentes de la organización, en una conferencia de prensa realizada en un restaurant de la localidad precordillerana de El Arrayán, declararon que Patria y Libertad pasaba a la clandestinidad, desde donde lucharía «hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno de Allende».²⁸ Lo dicho suponía una suerte de reivindicación de la lucha armada, en la cual, de hecho, desde hacía tiempo la entidad se hallaba involucrada. A lo largo de julio, por lo demás, llevó a cabo numerosas acciones terroristas, las que durante los meses siguientes se verán intensificadas.

Roberto Thieme relata que, en ese contexto, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, por encargo de un sector de las Fuerzas Armadas, se dedicó a implementar acciones terroristas que debían crear las condiciones requeridas para el golpe. A tales efectos, sostiene Thieme, los uniformados le proporcionaron a la organización la logística necesaria.²⁹ Años después, el mismo Thieme declaró: «¿alguien puede creer que nosotros sabíamos por dónde venían los tubos [del oleoducto] desde Concepción a Santiago? ¡No, pues! Los marinos nos decían: en Curicó, en el kilómetro tanto pasa el tubo. ¿Tienen explosivos? ¿No? O. K., aquí está. En definitiva Patria y Libertad puso la mano de obra y ellos [la Marina] la ingeniería y la logística».³⁰

El grupo Tacna

El grupo Tacna, cuya figura más conocida fuera Sergio Miranda Carrington, se dedicó esencialmente a elaborar un discurso legitimante del golpe militar y a difundirlo hacia el interior de los

²⁸ *El Siglo*, 17 de julio de 1973, citado por Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 338.

²⁹ Roberto Thieme: *Ercilla*, núm. 1.134, 3 de abril de 2000, pp. 33-34.

³⁰ *El Mercurio*, edición electrónica, 2 de septiembre de 2003, citado por Eduardo González: «Las derechas chilenas», tesis de grado, Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, 2007, p. 157.

cuarteles. La base de ese discurso, al igual que como ocurriera con el Frente Nacionalista Patria y Libertad, correspondía a las concepciones de José Antonio Primo de Rivera, a las cuales se agregaban las ideas de Oswald Spengler. Apoyado en el primero, Tacna sostuvo que a través del incentivo de la lucha de clases, el gobierno de la Unidad Popular había culminado la labor disociadora de la nación y del Estado iniciada por el liberalismo; que como producto de ese proceso solo habían quedado en pie los elementos constitutivos de la nación: los municipios, las universidades, los gremios y las Fuerzas Armadas; que estas no tenían compromiso alguno con la institucionalidad, sino con la nación, razón por la cual debían intervenir asumiendo el poder para evitar así la disolución nacional.

A lo dicho, Tacna, basándose en Spengler, agregó que la intervención de las Fuerzas Armadas no debía ser temporal, pues si lo fuera, el proceso de disolución nacional recomenzaría. Para evitar esto debía establecerse el «estado militar», es decir, el gobierno permanente de los uniformados.

Así, pues, a las Fuerzas Armadas les correspondería un papel eminentemente político, que no era otro que el de gobernar. A través del discurso que introducía en los cuarteles, Tacna insistía en que las Fuerzas Armadas no podían estar sujetas ni al esquema liberal ni a la Unidad Popular, en razón de que uno y otra habrían conducido al país a su desintegración. La tarea de las Fuerzas Armadas, por el contrario, era garantizar la sobrevivencia de la nación, a cuyos fines debían derribar al presidente Allende y asumir indefinidamente todo el poder.

El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS)

Análogos fueron los planteamientos del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), el otro grupo de la extrema derecha entonces existente, cuyos líderes más conocidos eran Misael Galliguillos y Juan Antonio Widow. Este último, como es sabido, se vio involucrado en los sucesos que se tradujeron en el asesinato del general Schneider.

El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista interpretó el triunfo de la Unidad Popular como una demostración práctica de la tesis que había profesado siempre, según la cual el régimen

demoliberal conducía fatalmente a la imposición del marxismo. Con tales supuestos, para este movimiento la Unidad Popular representaba tanto la culminación como el término del liberalismo. Ante ello, a su juicio, al país le quedarían solo dos opciones: o la revolución nacional o la revolución marxista. Siendo así las cosas, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista concluyó en que había llegado la hora de la lucha final en contra del comunismo, de cuyo exitoso desenlace debía emerger el «Estado de comunidad Nacional», corporativista e hispanista, restaurador de una autoridad fuerte que, al menos por un indefinido tiempo, necesariamente debía ser una dictadura.

Desde estas definiciones teóricas y políticas —que, por lo demás, conceptuaban a las Fuerzas Armadas como el «pueblo en armas», y depositarias del «espíritu heroico»—, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, al igual que el grupo Tacna, durante el gobierno de la Unidad Popular se dedicó a convencer a los uniformados sobre la necesidad de que dieran un golpe y establecieran su dictadura. El argumento central —el que fuera compartido por las otras organizaciones de la extrema derecha— sostenía que el compromiso de los militares no era con el Estado y su institucionalidad, sino con la nación, la que estaba siendo destruida tanto por el liberalismo como por el marxismo, y a la cual, en fin, era indispensable salvar.

En su labor de difusión de estas ideas, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista se valió en importante medida de su revista *Tizona*, la cual circuló abundantemente al interior de las unidades militares. Como evidencia del carácter subversivo de su prédica, y su decidido ánimo de interpelar a los uniformados, en un artículo fechado en octubre de 1972, la publicación sostuvo: «los héroes no son los que cumplen el reglamento, sino los que subordinan su propia vida a la promesa de fidelidad a la patria».³¹ Tal era el tono de su literatura.

³¹ *Tizona*, núm. 36, octubre de 1972, p. 3, citada por Aníbal Pérez: «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», ed. cit., p. 76.

El gremialismo

El gremialismo, por su parte, cuyo líder natural era Jaime Guzmán, desde posiciones antipartidistas, pero siempre en función del golpe, se esforzó en potenciar la sociedad civil. Trascendiendo los estrechos límites de la Universidad Católica de Santiago –donde surgiera a fines de los años sesenta oponiéndose a la reforma universitaria–, estimuló la movilización de los gremios en contra del gobierno. A tales efectos desarrolló el concepto de «poder gremial» e impulsó la formación de los comandos multigremiales, los que, vinculados al conjunto de la oposición, organizaron sucesivos paros, cuya punta de lanza estuvo constituida por los gremios de la pequeña burguesía y de la burguesía media, tras los cuales se hallaban las organizaciones corporativas del gran empresariado, Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Al igual que el Frente Nacionalista Patria y Libertad, el gremialismo consideraba que los partidos eran impotentes para enfrentar a la Unidad Popular, por lo cual la resistencia a esta debía ser encabezada por las organizaciones gremiales. Desde tal óptica, el gremialismo se presentó como apartidista, independiente e, incluso, como apolítico. La acusación fundamental que hiciera al gobierno de la Unidad Popular sostenía que él se hallaba empeñado en instaurar un proyecto totalitario que negaría la autonomía de los cuerpos intermedios, por lo cual estos debían reaccionar encabezando una lucha que, como finalmente se reconocerá, debía culminar con la intervención salvadora de los uniformados.

El empresariado

La estrategia golpista de los distintos sectores de la derecha no se comprende si no se tiene en cuenta la orientación que siguiera su base social, principalmente el gran empresariado. Este, a través de sus organizaciones corporativas, de manera temprana se embarcó en una perspectiva explícitamente golpista, a cuya materialización se dedicó con toda acuciosidad, invirtiendo en ella ingentes recursos.

Orlando Sáenz, quien durante el gobierno de Salvador Allende se desempeñara como presidente de la Sofofa, en su calidad de tal, en septiembre de 1971, organizó un encuentro, que se realizó en Viña del Mar, en el cual participaron representantes de las más diversas organizaciones del gran empresariado. Allí este formalmente resolvió organizarse en función de derrocar al presidente Allende.

Sáenz se refiere a ese evento en los siguientes términos:

Para invitar no recurrí sólo a los listados de la jerarquía establecida. Estaban Javier Vial, Hernán Cubillos, Eugenio Hairemans, entre otros. Les dije que había llegado a la conclusión de que el gobierno de Allende era incompatible con la libertad de Chile y la existencia de la empresa privada. La única forma de evitar el fin era derrocarlo. Se discutió, analizó y salieron conclusiones. La primera fue organizar una estructura de guerra; allegar sistemáticamente recursos económicos, una búsqueda nacional e internacional de dineros que se pudieran materializar en acción política propagandística y de activistas. *También decidimos la conformación de programas de gobierno alternativos precisos, y una permeación sistemática de todo esto hacia las Fuerzas Armadas* [las que, a su vez, según el Informe Church, se hallaban en «estrecho» contacto con la CIA]. Hubo que organizar un Servicio de Inteligencia [y] departamentos técnicos. Decidimos estructurarnos de tal manera que significara obtener una información y una armazón técnica de primera y esas dos cosas representaban dinero. Además, necesitábamos los mejores medios de difusión y eso también significó esfuerzo y dinero. Lo concreto es que al día siguiente entramos en una disciplina militar, nos pusimos el casco y comenzó la guerra!³²

En función de estos objetivos, la Sofofa sumó luego a todos los gremios empresariales, incluyendo a los de la pequeña burguesía, juntos a los cuales dio origen a un Comando Gremial Conspirativo

³² Citado por Mónica González: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, ed. cit., p. 19. Las cursivas son mías.

—los términos son de Sáenz—, dentro del cual destaca la participación de gremios tan importantes como los del transporte, encabezado por León Vilarín, y del comercio detallista, cuyo presidente era Rafael Cumsille.

No deja de ser interesante la confesión de Sáenz en orden a que los organismos corporativos de la patronal debieron llevar a cabo, en función del golpe, «una búsqueda nacional e internacional de dineros», recursos que se usarían para financiar su acción política, su propaganda anti-Unidad Popular y los respectivos activistas de la ingobernabilidad, lo que finalmente se traduciría en sucesivos paros, de consecuencias devastadoras para la economía nacional, todo financiado principalmente con platas extranjeras.

Sobre este punto, el relato de Sáenz señala lo siguiente:

[...] los dineros [que financiaron la actividad golpista de los gremios empresariales] salieron de la empresa nacional y extranjera, *pero más que nada externa*. Yo mismo hice contacto con sectores empresariales de otros países *a los cuales debo lealtad y gratitud*. No me arrepiento. Se me avisaba del extranjero cuánta plata teníamos y la transformábamos en acciones. En Europa, por ejemplo, trabajó un comité nuestro de tres personas. Eran empresarios y sus nombres no los rebelaré.

Luego de hacer una breve referencia a los aportes financieros de los gremios locales, Sáenz continúa:

[...] *fueron cantidades enormes de dinero*. Y sobre la base de allegar recursos, lo primero era tener medios de difusión. Teníamos una nómina de subsidios de treinta y tantas radios y más de veinte diarios a lo largo del país. Inventábamos publicidad [para justificar las transferencias de dinero a los medios]. Por ejemplo, para la defensa de las áreas verdes. Era un ejército y toda esa actividad era necesaria. Nada más que nuestra «Sección de Inteligencia» llegó a tener casi 70 personas. Y todos esos grupos funcionaron en un lugar que no tuviera relación con las organizaciones empresariales.³³

³³ Citado por Mónica González: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, ed. cit., pp. 138-139. Las cursivas son mías.

Así, mientras que la CIA financiaba a los partidos políticos opositores –sobre todo al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional–, a *El Mercurio* y a otros medios, organizaciones patronales extranjeras hacían lo propio con sus homólogos locales. De este modo, se pone de manifiesto con claridad la factura, en importante medida foránea, de la destrucción del orden institucional en el país, lo cual no impedía a los golpistas, civiles y militares, presentar su quehacer en nombre de «la patria».

La complementariedad de las estrategias de los nacionalismos y corporativismos

Durante el gobierno del presidente Allende, los distintos nacionalismos –el Partido Nacional, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, el grupo Tacna y el MRNS–, así como también el gremialismo y las organizaciones patronales llevaron a cabo, cada uno a su modo, una radicalizada política orientada a desestabilizar el orden institucional en la perspectiva de generar las condiciones requeridas para un golpe militar. Mediante la ingobernabilidad y la creación del miedo colectivo a lo que describían como un verdadero mal absoluto infiltrado en la nación –«el marxismo totalitario»–, estas organizaciones fueron capaces de desarrollar un fuerte y masivo movimiento mesocrático y pequeño burgués que blindó al gran empresariado, al tiempo que soliviantaban no solo a los civiles, sino también a los miembros de las Fuerzas Armadas llenándolos de un asombroso e ilimitado rencor hacia las organizaciones populares y anticapitalistas. Esto contribuye a explicar los crímenes masivos de la dictadura cívico militar que advendrá.

En ese contexto hay que anotar que una de las cosas que más diferenciaba al grupo Tacna y al Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) respecto del Frente Nacionalista Patria y Libertad, del gremialismo y del Partido Nacional, consistía en su nula inserción en el movimiento social, cuya otra cara era su dedicación casi exclusiva a infiltrar a las Fuerzas Armadas difundiendo en ellas su ideologismo, en lo cual no dejaron de tener cierto éxito. Esto en parte se explica en razón de que, en algunos puntos fundamentales, ese ideologismo coincidía con la Doctrina de la Seguridad

Nacional y con la tradición ideológicamente nacionalista de los uniformados. La ideología de tales movimientos tenía en común con la mentalidad de los militares el supuesto de la existencia de un enemigo interno que había que destruir, el que estaría compuesto por los sectores populares que cuestionaban al capitalismo y al imperialismo. Obviamente, estas tesis eran del todo funcionales a la dominación del gran capital nacional y extranjero –como de manera empírica lo demostrará la dictadura cívico militar que estaba por venir, evidenciando así su impronta de clase.

Hay que subrayar, por último, que pese a las diferencias existentes entre los grupos nacionalistas y corporativistas, entre 1970 y 1973 se dio una complementariedad entre las estrategias seguidas por unos y otros. Su relativa diversidad apuntaba a un mismo fin, que no era otro que el derrocamiento del régimen institucional existente y la reversión de los procesos democratizadores en curso, lo que debía materializarse a través de la instauración de una dictadura salvífica de las Fuerzas Armadas; meta que finalmente fuera lograda mediante el golpe del 11 de septiembre. Dicho golpe, con la subsecuente cancelación del régimen demoliberal –propósito acariciado durante decenios por todas las organizaciones nacionalistas–, aunque solo a última hora explícitamente proclamado, representó la consecución de una de los objetivos más importantes de dichas organizaciones.

Según el nacionalismo y el corporativismo, solo una vez destruido el orden demoliberal la nación podría ser refundada, no sin antes erradicar a los representantes del mal absoluto que la habrían conducido a la decadencia y la disolución. Fue precisamente a estos menesteres, y a la implantación del proyecto global profesado por los grupos más poderosos del gran empresariado, que se abocó la dictadura cívico militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte.

Dentro de esa lógica, la derecha, apenas derribado el orden institucional, abdicó en los uniformados el ejercicio del poder político. Reflejo de ello fue la autodisolución que acordara el Partido Nacional el 13 de septiembre. Ese mismo día el Frente Nacionalista Patria y Libertad procedió a tomar igual medida. El caso del gremialismo fue distinto. Este no se disolvió, por cuanto nunca tuvo una organización formal. Ello le permitió a su líder, Jaime Guz-

mán, seguir ejerciendo su influencia sobre determinados círculos conservadores, en particular jóvenes, los que irán copando cargos burocráticos y técnicos al interior de la dictadura, hasta estructurarse políticamente a comienzos de los años ochenta, a través de la conformación de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la que se convirtió en uno de los principales apoyos ideológicos y políticos del régimen pinocheteano.

Por último, hay que insistir en que, en el desarrollo de su accionar político y de sus correlativos intentos por ganar la adhesión de la mayoría del país en la perspectiva del golpe, el conjunto de la derecha desplegó un discurso cuyo contenido decisionista y orientado a combatir a un supuesto mal absoluto opuesto a la nación configuró las indispensables premisas ideológicas y culturales requeridas por los crímenes masivos que advendrán con su triunfo.

CAPÍTULO 14

La decisiva responsabilidad del Partido Demócrata Cristiano en el quiebre institucional de 1973

Debe también cuidar el príncipe que no salga frase de su boca que no esté impregnada de las referidas cinco cualidades y que en cuanto se le vea y se le oiga parezca piadoso, leal, íntegro, compasivo y religioso. Esta última es la cualidad que conviene más aparentar, pues generalmente los hombres juzgan más por los ojos que por los demás sentidos, y pudiendo ver todos, pocos comprenden bien lo que ven. Todos verán lo que aparentas, pocos sabrán lo que eres, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la inmensa mayoría, que tiene de su parte la fuerza oficial del Estado.

Nicolás MaquíaVelo, *El príncipe*, Ed. Ercilla, Santiago, 1988, p. 118.

El exitoso cumplimiento de los objetivos propuestos por la política de la derecha, consistente en poner fin al gobierno de Salvador Allende, no se hubiera podido alcanzar si aquella hubiera contado únicamente con sus propias fuerzas. El señalado éxito –materializado en la instauración de la dictadura cívico militar– solo fue posible por la alianza fáctica que durante el gobierno de Salvador Allende terminó produciéndose entre la derecha y el Partido Demócrata Cristiano. De allí que sobre este último recaiga parte fundamental de las responsabilidades históricas por el quiebre de la democracia en Chile. Dicha responsabilidad, en todo caso, hay que visualizarla y comprenderla –quizás en primer lugar– teniendo en cuenta la estrecha relación de este partido con los objetivos que a la fecha Washington se planteó para el caso chileno, respecto de los cuales, en particular el sector conservador de la colectividad se mostró como el principal instrumento, según lo muestran los documentos estadounidenses desclasificados. En el fondo la confluencia del Partido Demócrata Cristiano con la derecha golpista halla aquí su principal clave explicativa.

La tesis de Arturo Valenzuela sobre el papel del Partido Demócrata Cristiano en el golpe del 11 de septiembre

Escapándose a las tendencias predominantes, el cientista político estadounidense, Arturo Valenzuela, en su libro *El quiebre de la democracia en Chile*, responsabilizó al Partido Demócrata Cristiano del derrumbe institucional. Argumentó abundantemente su tesis. A los efectos partió de ciertas premisas teóricas según las cuales en todo sistema de partidos de pluralismo polarizado –como era el caso chileno–, la estabilidad política descansa en la existencia de un centro fuerte capaz de constituir alianzas, sea con la derecha, sea con la izquierda. Tales alianzas otorgarían respaldos mayoritarios a los gobiernos, lo que le daría estabilidad al sistema institucional en su conjunto. Por tanto, sería el centro la clave de la estabilidad, con su capacidad aliancista y con su pragmatismo.

En Chile ese habría sido el papel histórico del Partido Radical, un centro pragmático y desideologizado que, al aliarse, sea con la izquierda o con la derecha, le habría dado estabilidad a la política chilena por decenios. Dicha situación, según Valenzuela, llegó a su fin cuando ese partido, a comienzos de los años sesenta, fue reemplazado por el Partido Demócrata Cristiano, un nuevo centro, el cual, lejos del pragmatismo de los radicales, se caracterizó por ser ideologizado y antialiancista. Coherente con ello, en 1964 instauró un gobierno de partido único, que pretendió quitarle su base social tanto a la izquierda como a la derecha, para de este modo resolver en su favor la pugna entre los «tres tercios» y gobernar por treinta años. Esta situación –dice Valenzuela– polarizó el sistema político en la medida en que obligó tanto a la izquierda como a la derecha a defenderse de las pretensiones hegemónicas del Partido Demócrata Cristiano, reforzando para ello sus propias identidades, atacando frenéticamente al entonces partido de gobierno a fin de diferenciarse de él y mantener su base social y electoral. Esa situación habría tensionado al conjunto del sistema político, el que así se vio privado de la premisa de su estabilidad, o sea, de una alianza gobernante estructurada en torno al centro.

Entonces comenzó la crisis del sistema institucional chileno,¹ la cual se vio agravada durante el gobierno de la Unidad Popular cuando el Partido Demócrata Cristiano contribuyó a la polarización en curso al ser incapaz de llegar a un acuerdo moderado con el presidente Allende. De la polarización subsecuente se derivó la deslegitimación del marco institucional de los conflictos, la crisis económica, la ingobernabilidad y la intervención en política de las «instituciones neutrales» (los militares), todo lo cual desembocó en el golpe. De este modo, en la interpretación de Valenzuela, al Partido Demócrata Cristiano, por su incapacidad para desempeñarse como un centroaliancista y pragmático, le cabría una responsabilidad fundamental en el quiebre de la democracia en Chile.²

Nuestro punto de vista coincide con el de Arturo Valenzuela en lo referente a la grave responsabilidad que le cupo al Partido Demócrata Cristiano en el «quiebre de la democracia en Chile», aunque difiere con él al momento de explicar el comportamiento de dicho partido. A nuestro juicio, más allá del eventual carácter antialiancista e ideologizado que lo caracterizara, su papel en el derrumbe institucional se vinculó más bien a factores externos, como la dependencia de su sector conservador respecto de los Estados Unidos.

La importancia del Partido Demócrata Cristiano para los Estados Unidos

Como viéramos en un capítulo anterior, los Estados Unidos ante el triunfo de la Unidad Popular en los comicios presidenciales de 1970 diseñaron rápidamente una estrategia de derrocamiento

¹ A nuestro juicio, la crisis institucional tuvo además otros factores, entre los que cabe destacar el que tanto el gobierno de Frei como el de Allende cuestionaron la estructura de la propiedad entonces vigente: Frei la de la propiedad agraria; Allende, la industrial y financiera. Con ello generaron la reacción de la oligarquía local, la que, en aras de la defensa de su propiedad, se manifestó dispuesta al golpe. Este hecho en sí mismo era ya constitutivo de una crisis, la que, antes o después, tendría que manifestarse en el plano institucional, como efectivamente ocurrió.

² Véase Arturo Valenzuela: *El quiebre de la democracia en Chile*, Flacso, Santiago, 1989.

de Salvador Allende, en la cual las «fuerzas internas» desempeñarían el papel principal. Entre tales fuerzas –a todas las cuales Washington financió– figuraba el Partido Demócrata Cristiano. De él Washington esperaba que confluyera con la derecha, primero a los efectos de impedir la consolidación del gobierno del presidente Allende, después para desestabilizarlo mediante la ingobernabilidad, para finalmente hacerlo caer. Esta es, a nuestro juicio, la clave al momento de explicar el porqué el Partido Demócrata Cristiano no se comportó como un verdadero centro: se lo impedía su estrecho vínculo con unos Estados Unidos que estaban empeñados en derrocar a Salvador Allende utilizando a las «fuerzas internas», de las que el Partido Demócrata Cristiano formaba parte.

Incluso más, los estrategas estadounidenses siempre supieron que entre las fuerzas internas dos eran las decisivas para derribar al gobierno de la Unidad Popular: la Democracia Cristiana y los militares. Sobre ambas Washington ejercía una fuerte influencia, según lo hemos argumentado anteriormente. De las dos, sin embargo, la Democracia Cristiana era la más importante, debido a que era el partido más grande de Chile, de más peso electoral, político, social y cultural, en cuya condición era irremplazable a la hora de crear las premisas políticas que harían posible la intervención de los uniformados. La derecha, como dijimos, por sí misma no era capaz de crear esas premisas, aunque mirara hacia los militares, como lo demostró el fracasado *putsch* de octubre de 1969 llevado a cabo por el general Roberto Viaux.

Por tanto, el punto decisivo estaba conformado por el Partido Demócrata Cristiano. De allí que la política estadounidense encaminada a derrocar a Salvador Allende se empeñara en que la colectividad confluyera con la derecha –y no con la izquierda– y que junto a aquella generara la ingobernabilidad requerida para la posterior intervención de los militares. A nuestro juicio, como señalamos arriba, fue este factor –más el gran peso del sector conservador del Partido Demócrata Cristiano–, el que hizo que, entre 1970 y 1973, la colectividad no desempeñara el papel de centro y, por el contrario, al confluir con la derecha golpista y el gran empresariado, se convirtiera en un componente fundamental e irremplazable del quiebre de la democracia en Chile.

Todo lo dicho, por cierto, no implica desconocer que el Partido Demócrata Cristiano, aun en su condición de socio subordinado de

los Estados Unidos, perseguía objetivos propios. Se puede sostener que, en la coyuntura histórica de 1970-1973, esos objetivos consistían en reaccionar al gobierno en los plazos más breves posibles. Para conseguirlo, el Partido Demócrata Cristiano –o, mejor dicho, su sector conservador– veía en los Estados Unidos un aliado externo del cual no podía prescindir.

Los tres diseños golpistas de la oposición a Salvador Allende

Las «fuerzas internas» –de las cuales el Partido Demócrata Cristiano era parte–, las que según el diseño estadounidense debían derrocar al gobierno del presidente Allende, eran heterogéneas. Incluso más, en otras coyunturas de la política nacional se habían enfrentado entre sí, y durante los años 1970 y 1973 en algunos aspectos seguían enfrentándose. Al tener cada una sus propios intereses, sus propias identidades políticas e ideológicas y una particular historia y tradición, esto también tenía necesariamente que manifestarse en cómo y en qué tiempos cada una visualizaría el modo de poner fin al gobierno del presidente Allende. Al respecto, entre ellas se elaboraron al menos tres modelos golpistas distintos: a) el de los «levantamientos focalizados», propiciados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad; b) el golpe militar institucional de la derecha; y c) el golpe blando, del Partido Demócrata Cristiano.

Los «levantamientos focalizados» del Frente Nacionalista Patria y Libertad consistían en insurreccionar, por parte de sus miembros, a una o más unidades militares en contra del Gobierno, para iniciar con ello una lucha armada a la cual dicho frente, con sus militantes, se plegaría para apoyar a los regimientos insurrectos, siempre en la perspectiva de ir sumando otros a la rebelión. Este modelo estaba tomado de la guerra civil española, particularmente del alzamiento de Francisco Franco, de julio de 1936. Las ideas de la Falange española y de su líder, José Antonio Primo de Rivera, alcanzaron gran ascendiente en el Frente Nacionalista Patria y Libertad, en cuyo contexto cabe ubicar la asunción del mencionado modelo de derrocamiento del presidente Allende. En todo caso, esta organización, el 29 de junio de 1973, solo pudo implementarlo

cuando logró levantar al Blindado núm. 2, en cuyas filas tenía seguidores. Fue el llamado Tanquetazo, intentona que el general Prats aplastó.

El modelo de la derecha –el golpe institucional– tenía como supuesto crear una situación de ingobernabilidad en el país a través de distintos procedimientos que, entre otros, incluía sistemáticas acusaciones constitucionales a los ministros, haciéndolos caer, lo que impedía la formación de equipos permanentes de gobierno, a lo que debían sumarse los reiterados paros de los gremios empresariales, utilizando como carne de cañón a la pequeña burguesía y a las clases medias, exasperadas como producto de la intensa campaña del terror llevada a cabo por los medios de comunicación. Sobre esta base debía verificarse un pronunciamiento del Congreso que declarara inconstitucional al gobierno del presidente Allende, lo cual debía venir seguido de un llamado a las Fuerzas Armadas para que lo depusieran. Esto debía dar lugar a la intervención institucional de los uniformados, sin fisuras internas. Esta variante se intentó poner en práctica en octubre de 1972, en medio del paro patronal entonces en curso y fracasó por cuanto el Partido Demócrata Cristiano no aceptó plegarse a esa eventual declaración del Congreso, por lo cual no pudo ser presentada. La estrategia tuvo éxito finalmente solo en agosto y septiembre de 1973. En agosto de este año, parlamentarios de la Democracia Cristiana y algunos del Partido Nacional propusieron que el Congreso declarara a Allende fuera de la Constitución y pidiera a las Fuerzas Armadas que reimpusieran la legalidad. El Congreso, controlado por la oposición, tomó ese acuerdo por mayoría. En septiembre, luego de creadas todas las condiciones, en las que no cabe aquí detenerse, el golpe se llevó a cabo.

El tercer modelo –el golpe blando– fue el que terminó impulsando el sector de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin a la cabeza del Partido Demócrata Cristiano. De los tres modelos golpistas, este fue el último en tomar forma. Ello ocurrió luego de que el sector conservador de la colectividad bloqueara todo acuerdo entre su partido y el Gobierno, acuerdo en el que el presidente Allende se empeñó de manera reiterada, estando dispuesto a hacer concesiones importantes. La estrategia hacia el golpe del sector conservador del Partido Demócrata Cristiano adquirió forma sobre todo

después del Tanquetazo, aunque probablemente estaba ya pensada desde que Patricio Aylwin asumiera la presidencia del partido, el 9 de mayo de 1973. Ese modelo, siempre luego de hacer caer sucesivos ministerios mediante acusaciones constitucionales y de establecer la ingobernabilidad a través de paros gremiales en conjunto con la derecha, buscaba que el presidente Allende, incapaz de gobernar, se viera obligado a nombrar ministros militares con poderes plenos, lo que permitiría desplazar del gabinete y de los cargos del Ejecutivo a los partidos de la Unidad Popular y generar de este modo un gobierno militar de administración, con Allende como figura meramente decorativa, sin ningún poder real. Luego de un tiempo no definido, que podría llegar a 1976 o antes, se llamaría a elecciones, en las cuales, con el apoyo de la derecha, Frei se presentaría como candidato de consenso. Esta estrategia intentó materializarse a plenitud en julio y agosto de 1973. Otra variante del golpe blando de la Democracia Cristiana consistió en forzar la renuncia del presidente Allende, acosado por los paros y por su aislamiento dentro del sistema institucional (esto es, cuestionado por el Congreso, los Tribunales y la Contraloría General de la República).

Una de las características del golpe blando del Partido Demócrata Cristiano consistió en que en todo momento se autopresentó como una defensa del orden constitucional y legal, que en los hechos socavaba, particularmente al buscar, junto a la derecha, la ingobernabilidad.

Los tres modelos descritos eran complementarios hasta cierto punto, por cuanto, pese a sus diferencias, formaban parte de la insurrección general de la burguesía, con apoyo de la mayoría de las clases medias, y con activo respaldo y financiamiento norteamericano. Sin duda, los tres no eran rígidos. Adquirían sus formas particulares, y dentro de ciertos límites se modificaban, según el desenvolvimiento de la situación política. Los tres, entendidos en su flexibilidad y adaptabilidad a las coyunturas de la lucha, tenían, no obstante, supuestos en común: la generación de la ingobernabilidad –paros gremiales, terrorismo, sistemáticas acusaciones constitucionales en contra de ministros, campaña del terror–, con la correspondiente deslegitimación del Gobierno y del marco institucional. Desde este sustrato compartido, que era la

base objetiva que llevaba a la oposición a colaborar entre sí, cada actor intentaba abrir paso a su propia salida sobre los hombros de los demás.

Los inicios de la relación entre el Partido Demócrata Cristiano y los Estados Unidos

Como se dijo en el capítulo 10, si bien ideológicamente el Partido Demócrata Cristiano se formó bajo influencias ideológicas europeas (Jacques Maritain y la Doctrina Social de la Iglesia Católica), terminó siendo, entre los partidos políticos chilenos, el más vinculado a la política exterior de los Estados Unidos, cuestión que se encuentra abundantemente probada por los documentos estadounidenses desclasificados.

Según el mencionado Informe Church, el Partido Demócrata Cristiano:

- 1) Fue seleccionado por los Estados Unidos en 1962 a los propósitos de implementar en Chile un contramodelo a la Revolución Cubana apoyándose para ello en la Alianza para el Progreso.
- 2) Fue considerado por la política estadounidense como la fuerza más idónea para detener el alza de la izquierda en Chile, cuyo posible ascenso al gobierno en 1964 debía impedir.
- 3) En función de lo anterior, desde 1962 en adelante, recibió un constante apoyo financiero clandestino por parte de la CIA.
- 4) Durante esos mismos años, agencias estadounidenses financiaron la extensión del partido, lo que le permitió crear amplias redes en barrios y pueblos, también entre sectores campesinos, para generar entre estos un «sólido espíritu anticomunista», que debía servir a los fines de frenar el alza de la izquierda chilena.
- 5) Fue provisto por agencias estadounidenses de técnicas modernas adecuadas a los efectos de ganar elecciones (encuestas, etcétera).
- 6) En 1964 los Estados Unidos financiaron la mitad de la campaña presidencial de Eduardo Frei, a la par que montaron e hicieron lo propio con la llamada «campaña del terror».

- 7) La mencionada intervención estadounidense no cesó con el triunfo de Eduardo Frei en las presidenciales de 1964: se prolongó durante todo su mandato, cuando la CIA local llegó incluso a levantar y financiar candidatos al parlamento opuestos a la izquierda.

Tales son algunas de las cuestiones reveladas por el Informe Church, explicadas con más detalle en el capítulo 10.

A la luz de estos datos se pone en evidencia que la Democracia Cristiana se fue convirtiendo desde temprano en un aliado extremadamente importante para la ejecución de los objetivos estadounidenses en Chile, lo que no significa que la colectividad no tuviera sus propios intereses y que no luchara por ellos, aunque lo hiciera en el marco de una soterrada alianza con Washington, al menos por parte de su sector conservador. Dadas tales circunstancias, ¿es extraño que luego de que el 4 de septiembre de 1970, cuando Salvador Allende triunfara en las presidenciales de ese año, Washington esperara que el Partido Demócrata Cristiano desempeñara un papel relevante dentro de sus esfuerzos dirigidos a impedir que el candidato de la Unidad Popular asumiera el Gobierno?

El Partido Demócrata Cristiano entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970

Después de que Richard Nixon ordenara a la CIA organizar un golpe de Estado que impidiera a Salvador Allende asumir la presidencia de la República, en Washington se esperaba que Frei colaborara con ese propósito. Por su parte, el mandatario decidió tomar ciertas iniciativas al respecto, pero no todas las que hubieran querido los estadounidenses. Frei intentó tempranamente alarmar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El general Carlos Prats en sus *Memorias* relata el punto en los siguientes términos:

El martes 8 de septiembre el presidente Frei reúne a los comandantes en jefe, al general de carabineros y a mí, y nos informa de la entrevista que sostuvo el día anterior con el Senador Allende, en la que le habría expresado francamente que su

acceso al poder era caer irreversiblemente en el marxismo. Explica además su preocupación por los síntomas de crisis económica que ya empiezan a advertirse en las áreas financiera, cambiaria y productiva. Sólo el lunes se había producido una corrida bancaria de 200 millones de escudos y otras de las asociaciones de ahorro y préstamo, donde hay un fondo de 500 millones de escudos de inversionistas. Los valores de la bolsa habían caído en un 60%. Existía temor por la caída del registro de importaciones, por la paralización de las inversiones, por la suspensión de la venta de bienes de consumo, por la paralización de las siembras y por el receso industrial, cuadro muy grave durante 50 días de indefinición política.³

Más adelante, el relato del general Prats agrega: «el miércoles 9, a las 10:00, se efectúa una reunión con los ministros, Figueroa, Zaldívar, Ossa, los Comandantes en Jefe y yo en la que los ministros de Economía y Hacienda explican más detalladamente la gravedad de la situación económica, que bosquejara el día anterior el Presidente Frei y cuyas proyecciones ellos aprecian se desencadenarán entre septiembre y octubre».⁴

¿Representaba esta acción del gobierno demócrata cristiano un intento indirecto de pedirle a las Fuerzas Armadas que dieran un golpe destinado a poner término a la situación catastrófica que se les describía?

Recordemos que, por su parte, la CIA, advirtió que un golpe destinado a impedir la asunción de Salvador Allende a la presidencia requería que previamente en el país se produjera una situación caótica en todos los sentidos, lo que forzaría a los militares a intervenir. No por casualidad se empezaron a producir entonces numerosos atentados terroristas, corridas bancarias, rumores alarmistas y toda clase de presiones. En ese marco, el gobierno de Frei, aparte de la ya mencionada, dio otra contribución a ese proceso, la cual consistió en el discurso que el 22 de septiembre el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, pronunciara por cadena nacional de radio y televisión, en el cual expuso datos económicos catastrofistas, en la lógica ya descrita, para contribuir así a generar la situación de anormalidad requerida por el golpe.

³ Carlos Prats: *Memorias. Testimonio de un soldado*, ed. cit., p. 147.

⁴ Ídem.

Con antelación, la CIA había ideado el llamado «Gambito (o Maniobra) Frei», que, según viéramos en un capítulo precedente, consistía en una operación por la cual el Congreso Pleno elegiría a la segunda mayoría, es decir, a Jorge Alessandri, como presidente de la República, luego de lo cual este renunciaría, lo que conllevaba la convocatoria a una nueva elección presidencial, en la cual Frei presentaría su candidatura con el apoyo de la derecha. Como se ve, el punto central de esta maniobra se situaba en la decisión que debía tomar el Congreso Pleno.

Como viéramos en el capítulo 12, según el Informe Church, en su reunión del 14 de septiembre, el Comité 40 discutió la Maniobra Frei y «autorizó un fondo de contingencia de doscientos cincuenta mil dólares (US\$250 000) para el apoyo secreto de proyectos que Frei y sus asociados consideraran importantes. Los fondos debían ser administrados por el embajador Korry y utilizados, si lo consideraba necesario, por la facción moderada del Partido Demócrata Cristiano, con el fin de ganar votos parlamentarios para Alessandri».⁵ O sea, el Comité 40 autorizó fondos cuyo objeto era comprar a los diputados y senadores, cuestión considerada necesaria a los efectos de llevar exitosamente a cabo el Gambito Frei.

La maniobra se implementó parcialmente. Jorge Alessandri, en efecto, por medio de una declaración pública –y con apoyo de la derecha–, ofreció renunciar de inmediato si el Congreso lo investía con el cargo de presidente de la República, lo que daría lugar a un nuevo comicio presidencial. Sin embargo, en las semanas siguientes la maniobra fracasó. Frei no quiso involucrarse y la Democracia Cristiana no la respaldó, y optó, en cambio, por llegar a un acuerdo con Salvador Allende para apoyar su elección por el Congreso Pleno a cambio de la firma de un pacto de garantías constitucionales. Incluso más, Frei no se atrevió a presionar a su partido para que no llegara a un acuerdo con Allende, con lo cual dejó de ser el factor decisivo de la situación. El Informe Church reconoce el punto en los siguientes términos: «el fracaso de Frei, que ni siquiera intentó disuadir a la convención de su partido, el 3 y 4 de octubre, para que no adoptara un compromiso con Allende terminó con toda esperanza de utilizarlo para impedir la presidencia de Allende».⁶ La

⁵ Senado de los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», art. cit., p. 67.

⁶ *Ibidem*, p. 17.

CIA, viendo fracasada esta maniobra, resolvió impulsar finalmente el golpe apoyándose en los generales Viaux (R), Camilo Valenzuela y otros mandos uniformados que permanecieron en la sombra, más grupos de derecha. Como se sabe, todo culminó con el fallido *putsch* del 22 de octubre, que se tradujo, según viéramos en un capítulo anterior, en el asesinato del general Schneider, con lo que se creó una situación en la cual se tornó imposible impedir el ascenso de Salvador Allende a la presidencia.

Durante el gobierno de Salvador Allende

Como sabemos, dos días después de que Allende fuera investido en el cargo, el 6 de noviembre de 1970, se celebró en la Casa Blanca una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos presidida por Richard Nixon. Su objeto fue analizar la situación chilena para, ante los fracasos anteriores, decidir un nuevo curso de acción. Allí se resolvió que la caída de Allende debía ser lograda mediante la acción de las «fuerzas internas», a las que los Estados Unidos apoyarían y financiarían. En el capítulo 12 nos hemos referido al tema. Lo que aquí solo interesa subrayar es que en la definición de las políticas sobre cómo derribar a Allende, las agencias estadounidenses cotejaban pareceres con personeros del Partido Demócrata Cristiano. Así lo reconoció el secretario de Defensa Melvin Laird cuando dijera en la mencionada reunión: «el [ex] Ministro del Exterior Demócrata Cristiano piensa que estamos haciendo las cosas bien. Él ve dos posibilidades [para derribar a Allende]: que las dificultades económicas generarán una significativa insatisfacción pública, o, segundo, que esas dificultades llegarán a ser tan grandes que harán a los militares moverse en contra de él [de Allende]».

También cabe recordar que la política diseñada a la fecha por el gobierno de Washington con el propósito de poner fin al gobierno de Salvador Allende tuvo uno de sus aspectos más importantes en los esfuerzos por conseguir la unidad de toda la oposición, lo que implicaba, antes que nada, la confluencia entre el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, cuestión en la que la CIA desplegó ingentes esfuerzos, como lo dice expresamente el

Informe Church. El análisis del curso político chileno entre 1970 y 1973 muestra que Frei y su sector se empeñaron permanentemente en ese mismo objetivo.

También vimos que en ese decurso la CIA procedió a financiar sobre todo al Partido Demócrata Cristiano, y solo en segundo lugar al Partido Nacional. Este financiamiento debía servir a los efectos de que las mencionadas colectividades ganaran las numerosas elecciones celebradas durante el gobierno de Salvador Allende, pero también a los propósitos de que organizaran movilizaciones sociales desestabilizantes. En el capítulo 12, al cual remitimos, estas afirmaciones han sido respaldadas documentalmente de manera amplia.

El Partido Demócrata Cristiano entre noviembre de 1970 y junio de 1971

A pesar de que sus hombres no llegaron a controlar la dirección partidaria sino hasta el 8 de mayo de 1973, Frei, gracias a su carisma y capacidad política, logró con antelación un verdadero control fáctico sobre el Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, este control no se verificó de inmediato. Se ejerció solo luego del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, verificado el 7 de junio de 1971. Antes de esa fecha la conducción del partido, en agudo debate, le fue disputada al expresidente y al sector conservador de la colectividad por los progresistas, quienes, en un principio, al frente de la dirección formal del partido, se impusieron, aunque de forma siempre precaria.

El primer tema debatido al interior del partido luego del ascenso del presidente Allende fue el referente a la actitud que se debía adoptar respecto de su gobierno. Este debate tuvo uno de sus escenarios en la Junta Nacional de diciembre de 1970. Allí el sector conservador del partido postuló la necesidad de que la colectividad asumiera una oposición decidida frente al Gobierno, al cual intentó deslegitimar acusándolo de estar empeñado en llevar a la práctica un proyecto totalitario estatista. Con tales supuestos, el sector conservador postuló que era necesario oponerse a Allende sin ambigüedades de ningún tipo para así «defender la democracia». Por su parte, el sector progresista insinuó un apoyo crítico a

Salvador Allende. «Nos guiaremos, para juzgar sus proposiciones y la acción de su gobierno, por el programa que ofrecimos al país en la reciente campaña presidencial»,⁷ postuló. Dicho de otra forma, este sector propuso respaldar al Gobierno en todo lo que su quehacer fuera coherente con el programa presidencial de Radomiro Tomic, y criticarle lo que fuera en su contra. Apoyaría así, desde la oposición, el proceso de cambios requerido por el país. Tal fue la postura oficial adoptada por la directiva partidaria, la que resultó aprobada por la referida Junta Nacional.

Meses después, luego de las elecciones municipales de abril de 1971, cuando la Unidad Popular obtuviera el 50 % de los votos, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana sostuvo:

[...] nos pronunciamos enfáticamente por la búsqueda del consenso mínimo entre las fuerzas populares [...]. Para ello propondremos al Consejo Plenario del Partido la aprobación para una operación política que, a nivel legislativo, acuerde propiciar en conjunto con la Unidad Popular todos los proyectos de ley necesarios sobre materias en las cuales el Programa de Tomic y Allende tengan coincidencias objetivas.⁸

De este modo el sector conservador del partido volvió a ser derrotado. Sin embargo, logrará revertir la situación en las próximas semanas cuando el 7 de junio sea asesinado Edmundo Pérez Zujovic –exministro del Interior de Frei–, según nuestra hipótesis, por la CIA. El móvil de esta para llevar a cabo el crimen consistió en provocar un fuerte impacto al interior del Partido Demócrata Cristiano a los efectos de que este reorientara su política y se situara definitivamente en la oposición, dispuesta a confluir con el Partido Nacional. La CIA no calculó mal los efectos del crimen. En efecto, el asesinato de Pérez Zujovic le permitió al sector conservador del Partido Demócrata Cristiano imponer al interior de las filas –considerablemente impactadas– un ánimo anti-Unidad Popular, indispensable a los fines de crear las bases para avanzar hacia la

⁷ «Conclusiones de la Junta Nacional del PDC, diciembre de 1970», *Política y Espíritu*, núm. 318, diciembre de 1970, pp. 46-47.

⁸ «Resoluciones de la Junta Nacional de Cartagena», *Política y Espíritu*, núm. 321, mayo de 1971, p. 74.

unidad con la derecha, objetivo que la CIA había definido como una de sus prioridades.

El gran viraje

Luego del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, el expresidente Frei —quien se hallaba en el extranjero— retornó al país y se dispuso a catalizar el sentimiento de las bases partidarias psicológicamente impactadas en contra del Gobierno para preparar así el camino de la unidad con el Partido Nacional. Por su parte, la directiva del Partido Demócrata Cristiano culpó al Gobierno y a sus medios de comunicación de haber creado el clima que hacía posible los crímenes políticos, como el verificado en contra de Pérez Zujovic, a la par que solicitó que fuera la Inteligencia Militar la que investigara el caso. Junto a ello planteó el tema de los grupos armados que existirían en el país. A su vez, Frei, ya de vuelta de los Estados Unidos, no solo culpó a la prensa adicta al gobierno del crimen de su exministro, sino también a «todos los que de alguna manera [la] alientan y sostienen».⁹ O sea, indirectamente responsabilizó al Gobierno y a la Unidad Popular. En un acto de masas en el Teatro Caupolicán de Santiago, con notable habilidad, Frei sostuvo que la disyuntiva del país era el «cambio en libertad» o el «cambio totalitario». Para oponerse a este último, dijo, la Democracia Cristiana debía ubicarse decididamente en la oposición».¹⁰ De aquí en adelante, la pugna interna respecto a la actitud de asumir frente al Gobierno fue resolviéndose en favor de los sectores conservadores del partido. En ese contexto Frei se convirtió en un verdadero poder fáctico dentro de la colectividad, concitando el apoyo de sus bases populares.

Por su parte, Salvador Allende entendió rápidamente la disyuntiva planteada por Frei, y se dispuso a refutarla. Desde ya negó la caracterización hecha por la Democracia Cristiana de su proyecto hacia el socialismo. Unas semanas antes del crimen de Edmundo Pérez Zujovic, había expuesto detalladamente el conjunto de sus concepciones sobre el tema en el discurso sobre la «vía chilena» que pronunció el 21 de mayo de 1971 ante el Congreso Pleno, en

⁹ Citada por Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 86.

¹⁰ Ídem.

el cual el mandatario argumentó la articulación entre democracia y socialismo postulada por su programa. Pero Patricio Aylwin, del sector conservador del Partido Demócrata Cristiano, de inmediato había procedido a descalificarlo sosteniendo que el discurso de Allende no se conciliaba con la práctica de la Unidad Popular.

Seguidamente, el Partido Demócrata Cristiano, cada vez más en manos de su sector conservador, dio un paso de gran trascendencia: acordó un pacto por omisión con la derecha a propósito de la elección extraordinaria de diputados por la circunscripción de Valparaíso, la que debía celebrarse el 18 de julio de 1971. De acuerdo con ello, la derecha, al renunciar a presentar un candidato propio, a fin de contribuir a generar un cuadro político a dos bandas, decidió respaldar al candidato del sector conservador de la Democracia Cristiana, el doctor Oscar Marín. A comienzos del mismo mes, el Partido Demócrata Cristiano, en la Universidad de Chile, había logrado análogo acuerdo con la derecha, por el cual esta aceptó apoyar un candidato común en las elecciones a rector de esa casa de altos estudios, papel asumido por Edgardo Boeninguer.

Salvador Allende intentó infructuosamente impedir la confluencia opositora. A los efectos propuso que en las elecciones complementarias por Valparaíso la Unidad Popular apoyara a un candidato del sector progresista del Partido Demócrata Cristiano. El bloque gobiernista no aceptó la propuesta y la oposición unida triunfó en esos comicios, aunque por un muy estrecho margen.

Las oscilaciones del Partido Demócrata Cristiano durante la segunda parte de 1971

Luego de las elecciones complementarias de Valparaíso, los sectores progresistas de la Democracia Cristiana, encabezados por Bosco Parra, exigieron una resolución partidaria en orden a prohibir cualquier confluencia futura con la derecha. Como alternativa propiciaron privilegiar la búsqueda de acuerdos con la Unidad Popular que hicieran posible apoyar al proceso de cambios entonces en curso. Cuando su propuesta fue rechazada por los organismos partidarios, esos sectores se escindieron y en agosto formaron la Izquierda Cristiana, la que en septiembre ingresó formalmente a

la Unidad Popular, como antes lo había hecho el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). La escisión de la Izquierda Cristiana trajo consecuencias importantes: dejó al sector conservador de la Democracia Cristiana con las manos libres para imponerle al partido su política de alianza con la derecha. Quizás aquí estaba ya resuelta la suerte del proceso revolucionario en curso, puesto que la cuestión de fondo dirimida entonces era quién aísla a quién. Tal cosa fue lo que a la fecha, todavía débilmente, empezó a resolverse en contra de la Unidad Popular y su gobierno.

No obstante, en septiembre y octubre de 1971 la mencionada tendencia pareció revertirse. Por entonces el Gobierno, a través del ministro del Interior, Jaime Tohá, procedió a entregar a la directiva de la Democracia Cristiana una serie de antecedentes sobre ciertos planes golpistas de la derecha haciéndole ver la necesidad de defender de consuno el orden institucional. La cuestión permitió abrir cierto diálogo informal entre el Gobierno y la colectividad. En este decurso, recepcionando las inquietudes de la directiva Demócrata Cristiana, el Gobierno, a través del ministro Tohá, intentó resolver un punto altamente sensible para ese partido: la base jurídica del Área de Propiedad Social (APS). Muchas de las numerosas empresas ya intervenidas por el Gobierno tenían a la fecha un respaldo legal precario, que provenía de un Decreto Ley emitido durante la República Socialista de Marmaduke Grove. Ese decreto permitía a los gobiernos intervenir empresas, pero de modo provisorio y ante una necesidad pública. Salvador Allende entendía que había que darle un sustento legal más sólido al Área de Propiedad Social que se estaba formando, lo que implicaba una ley que, solo en acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, podía obtenerse y resolver de paso la recurrente crítica que este solía hacer al Ejecutivo, en orden a que procedía mediante decretos y sin suficiente base jurídica en materia tan importante. En este contexto, el gobierno acordó con ciertos representantes del Partido Demócrata Cristiano elaborar y presentar al Congreso una ley sobre la materia para así legalizar la constitución del Área de Propiedad Social. De tal modo, no solo la conformación de dicha área dispondría de una sólida base legal y política, sino también el proceso revolucionario en su conjunto. Eso era lo que se jugaba: la viabilidad de un proceso de cambios hacia el socialismo al

interior de una institucionalidad burguesa que, con el apoyo de las masas populares movilizadas, había que modificar desde dentro y con sus reglas. Precisamente en eso consistía la «vía chilena al socialismo» que Salvador Allende había expuesto en su discurso del 21 de mayo reciente.

Sin embargo, el mencionado acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Gobierno fue rápidamente boicoteado tanto por el Partido Socialista como por el sector freista del Partido Demócrata Cristiano. La Comisión Política del primero, descontenta con el acercamiento entre el Gobierno y aquella, el 16 de septiembre de 1971 emitió una declaración en la que dijo denunciar un «plan sedicioso encabezado por los señores Jarpa, Frei, la CIA y [una] comparsa de banqueros, millonarios textiles y latifundistas»,¹¹ e hizo un llamado al Gobierno a que tuviera mano dura con ellos. Por su parte, Frei no desperdició la oportunidad, que le venía como anillo al dedo, y se dispuso a desplegar una iniciativa dirigida a revertir el arriba referido acercamiento entre su partido y el Gobierno. En respuesta a la declaración del Partido Socialista, emitió otra en la que dijo: «[...] en esta etapa de la historia del país, en que el Partido Comunista impone su ley [y] una táctica que ha seguido en todos los países que ha sometido a su esclavitud, le interesa desprestigiar el nombre de cualquier persona que sea un obstáculo a la implantación de su dictadura funesta».¹²

A partir de este incidente, Frei, presentándose como víctima, alineó hábilmente al Partido Demócrata Cristiano en contra de toda tratativa con el Ejecutivo, con lo cual quedó desechado el acuerdo realizado por la colectividad con aquel, en el que se estipulaba la presentación, por parte del Gobierno, de un proyecto de ley sobre la constitución del Área de Propiedad Social. Más aún, luego de desechado el acuerdo, el Partido Demócrata Cristiano elaboró su propio proyecto sobre la materia —rotulado como Hamilton-Fuentealba—, el cual, presentado como Reforma Constitucional, estableció que para traspasar una empresa desde el área privada a la de propiedad social, se requería el acuerdo, caso a caso, de la

¹¹ «Declaración de la Comisión Política del PS», *La Nación*, 17 de septiembre de 1971, p. 5.

¹² *El Mercurio*, 23 de septiembre de 1971, p. 1.

mayoría del Parlamento, mayoría que la Unidad Popular no tenía. Además, el proyecto estipulaba que las empresas ya intervenidas que no pasaran este trámite, debían ser devueltas a sus antiguos propietarios. Así quedaba legalmente bloqueado el cumplimiento del programa de gobierno, en particular en lo relativo a la conformación del Área de Propiedad Social. Luego, la Unidad Popular presentó su propio proyecto de ley sobre el punto, que permitía nacionalizar una cantidad importante de grandes empresas, a la par que daba seguridades a las pequeñas y medianas, al declararlas inexpropiables. No obstante, el proyecto no tenía chance alguna de ser aprobado en el Parlamento, donde la oposición unida –Democracia Cristiana y Partido Nacional– tenía mayoría.

Paralelamente, el Partido Demócrata Cristiano fortaleció su alianza fáctica con la derecha a impulsar manifestaciones callejeras conjuntas. Al respecto, son relevantes las del 1ro. y 2 de diciembre de 1971, cuando ya se insinuaba el problema del desabastecimiento. En la marcha –llamada de las Cacerolas Vacías en la que participaron sobre todo mujeres– tomaron parte no solo el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, y otros sectores opositores, sino también el Frente Nacionalista Patria y Libertad. El evento culminó con asaltos a locales de partidos de la Unidad Popular y disturbios callejeros durante dos días; en suma, una verdadera asonada, que marcaba la continuación de la ofensiva conservadora iniciada con el asesinato de Pérez Zujovic, pero a un nivel más alto.

Otro plano en el cual confluyeron la derecha y el Partido Demócrata Cristiano fueron las sistemáticas acusaciones constitucionales que, con pretextos diversos, se realizaban a ministros y a otros altos cargos. La Democracia Cristiana apoyó la mayoría de las acusaciones presentadas por el Partido Nacional y, en diciembre de 1971, empezó a proponer las suyas propias, en primer lugar en contra del ministro del Interior José Tohá, a quien acusó de reprimir la Marcha de las Cacerolas Vacías. A través de las acusaciones constitucionales, las fuerzas opositoras perseguían impedir que Salvador Allende consolidara sus equipos de gobierno.

El Partido Demócrata Cristiano a comienzos de 1972: la consolidación de la alianza con la derecha y el proyecto Hamilton-Fuentealba

A comienzos de 1972, la confluencia de la oposición continuó. El 18 de enero, en las circunscripciones de O'Higgins y Colchagua, y de Linares se celebraron elecciones complementarias de diputados. En ambas el Partido Demócrata Cristiano hizo pacto por omisión con la derecha; y en las dos, la oposición se impuso. Pero todavía más, el 19 de febrero, con los votos de la derecha y de la Democracia Cristiana, en el Congreso Pleno quedó aprobado el proyecto Hamilton-Fuentealba.

Salvador Allende declaró que vetaría el proyecto. Entonces se planteó un grave problema de interpretación de la carta fundamental. La cuestión consistía en cuál era el quórum parlamentario requerido para rechazar los vetos del Ejecutivo e imponer el criterio del Congreso para obligar al presidente a promulgar el proyecto. La tesis del Gobierno sostuvo que para imponer su criterio el Congreso requería los dos tercios de los votos, por cuanto así taxativamente lo señalaba la Constitución. La tesis opositora, en cambio, postuló que para ello bastaba la mayoría simple, puesto que la disposición constitucional que hacía referencia a los dos tercios era aplicable solo a las leyes comunes, y no a una reforma constitucional, como era el caso del proyecto Hamilton-Fuentealba.

Ante este desacuerdo, el presidente Allende declaró que sometería el tema al Tribunal Constitucional, como lo estipulaba la carta fundamental. Sin embargo, la oposición negó a dicho tribunal toda competencia sobre la materia, postulando que el presidente Allende debía promulgar el proyecto Hamilton-Fuentealba o bien llamar a plebiscito. Suponiendo que lo perdería, la oposición creía así abrir una puerta para pedirle la renuncia; y si no promulgaba ni convocaba a un plebiscito, la oposición sostuvo que el gobierno caería en la ilegalidad. De este modo, con fría lógica, procedía a deslegitimarlo, cuestión indispensable a los fines de abrir paso a su derrocamiento.

En resumen, a fines de 1971 y comienzos de 1972, cuando el sector más progresista del Partido Demócrata Cristiano ya se había retirado de la colectividad dejándole el campo libre a su sector conservador, el partido, actuando como «fuerza interna», dio pasos

decisivos en dirección a impedir que el gobierno de Salvador Allende se consolidara. Tales pasos consistieron en: a) establecer una tácita alianza electoral con el Partido Nacional, la cual operaba mediante pactos por omisión (como ocurriera en las elecciones complementarias de Valparaíso; en las de rector de la Universidad de Chile, y en las de de Linares y de O'Higgins y Colchagua); b) utilizar de modo sistemático, siempre en acuerdo con el Partido Nacional, las acusaciones constitucionales contra ministros del gabinete, intentando con ello que el Gobierno no estabilizara sus equipos; c) impulsar movilizaciones callejeras conjuntas, de carácter desestabilizante, con toda la derecha, incluyendo el Frente Nacionalista Patria y Libertad (como ocurriera en diciembre de 1971 con la Marcha de las Cacerolas Vacías); d) llegar a acuerdo con el Partido Nacional a los efectos de aprobar el proyecto Hamilton-Fuentealba en el Congreso, mediante lo cual se pretendía impedir la constitución del Área de Propiedad Social, de hecho, para proteger a los grupos del capital monopólico; e) adoptar una posición común con la derecha sobre el tema de interpretación de la Constitución a propósito de la cuestión de los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba; y f) todo en medio de una campaña del terror en ascenso orientada a deslegitimar al Gobierno y a exasperar a la población haciéndola proclive a soluciones radicales.

Como producto de estos desarrollos, el escenario político, antes estructurado en tres tercios, pasó a estarlo en dos mitades enfrentadas. De esta manera, la unidad de toda la oposición, por la cual, según el Informe Church, la CIA tanto se esforzara, estaba lograda.

El Partido Demócrata Cristiano entre marzo y junio de 1972: nueva (aparente) pendulación: el fracaso de los diálogos

Al iniciarse el año político 1972, el Gobierno intentó reestablecer puentes con el Partido Demócrata Cristiano con el propósito de llegar a algún acuerdo respecto del Área de Propiedad Social. Los mencionados intentos dieron lugar a unas segundas conversaciones –las primeras fueron las ya mencionadas verificadas en el Congreso en septiembre anterior a través del ministro Tohá–. Las nuevas tratativas se realizaron en marzo y abril. Antes de ellas,

intentando diferenciarse de la derecha con la cual se hallaba estrechamente unida, la directiva del Partido Demócrata Cristiano declaró que enfrentaría al Gobierno en el plano constitucional. Con tales supuestos se dispuso a conversar sobre la cuestión del Área de Propiedad Social, pero siguiendo una pauta que se hará recurrente, luego de iniciadas las negociaciones la Democracia Cristiana optó por retirarse de estas con el argumento de que la Unidad Popular cambió sus representantes en las conversaciones, desconociendo acuerdos ya consensuados con los negociadores anteriores.

Luego de fracasadas estas negociaciones, en la Democracia Cristiana, como en el resto de la oposición, se planteó el tema del fin anticipado del gobierno, que ya había sido insinuado con anterioridad. Paralelamente, la colectividad inició conversaciones con la derecha con vistas a conformar un frente electoral, la Confederación Democrática (CODE), que debía permitirles presentarse unidos en los comicios parlamentarios de marzo de 1973. Mientras que, por su parte, el 21 de mayo Salvador Allende, ante el Congreso Pleno, reiteraba la validez de su «vía chilena al socialismo». Esta vez el discurso no iba dirigido tan solo al Partido Demócrata Cristiano, sino también a importantes sectores de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, los cuales se percataban cada vez con más claridad de que lo que animaba a la oposición era el golpe, y que este difícilmente podría ser detenido por los medios institucionales.

Seguidamente, el presidente Allende convocó a la Unidad Popular a un cónclave en el cual pretendía cohesionar a sus partidos en torno a la vía institucional. El evento se celebró en Lo Curro entre fines de mayo y comienzos de junio de 1972. Luego de concluido, Salvador Allende invitó al Partido Demócrata Cristiano a un nuevo diálogo con el fin de resolver el *impasse* constitucional derivado de la cuestión de los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba y de fijar los términos de una ley sobre las tres áreas de la propiedad. El Partido Demócrata Cristiano acudió al diálogo, pero señalando que daría solo quince días para que se arribara a un acuerdo.

En el desarrollo de las conversaciones se fue llegando a un consenso en casi todas las materias, menos en dos fundamentales: que la Papelera (esto es, la Empresa Nacional de Papeles y Cartones) pasara al Área de Propiedad Social, como quería el Gobierno; y

en que a lo menos un banco se mantuviera en el sector privado, como deseaba la Democracia Cristiana, entre otras cuestiones muy menores. Bajo la presión de su sector conservador, pese a las solicitudes de los negociadores de la Unidad Popular que pedían prolongar el diálogo, una vez más el Partido Demócrata Cristiano resolvió retirarse de las conversaciones con el argumento de que ya se habían cumplido los quince días que se había dado para que se llegara a un acuerdo.

El Partido Demócrata Cristiano: hacia la ingobernabilidad en conjunto con la derecha: el paro de octubre

Fracasado este tercer diálogo al que acudiera con el solo fin de aparentar una actitud abierta con el Gobierno, el Partido Demócrata Cristiano se embarcó con todo en los paros desestabilizadores de los gremios patronales y de la pequeña burguesía impulsados por la derecha. Así, la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional se afirmaba en el plano social buscando de manera cada vez más abierta la ingobernabilidad. En este decurso, la derecha, con el apoyo de Frei y su sector, consiguió algo muy importante: lanzar al pueblo demócrata cristiano a las calles en contra del Gobierno.

Este logro llevó al Partido Nacional a creer que las condiciones para el golpe institucional estaban ya maduras. Con tales premisas, luego de llamar a la «desobediencia civil», se esforzó por extender y masificar los paros de los gremios patronales y de la pequeña burguesía, en lo cual, una vez más, contó con el apoyo expreso del Partido Demócrata Cristiano. La ofensiva gremial, que durante septiembre fue *in crescendo*, desembocó en el paro general de octubre. En medio de este último, el Partido Nacional le planteó a la Democracia Cristiana impulsar un acuerdo del Congreso por el cual se declarararía ilegal al Gobierno y se llamaría a las Fuerzas Armadas a intervenir. El Partido Demócrata Cristiano se negó frustrando con ello el golpe. Su táctica, por el momento, consistía en debilitar al Gobierno con miras a derrotarlo en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, y dejarlo convertido en un mero gobierno de administración que eventualmente podría ser depuesto por los dos tercios del Congreso.

Por otro lado, en medio del paro se constituyó el Poder Popular. Este se materializó en el control por parte de los trabajadores, de las empresas paralizadas y abandonadas por la clase patronal, la que con ello buscaba abrir paso al golpe. El Poder Popular hizo funcionar esas fábricas al tiempo que daba lugar a un poder local fáctico que operaba por medio de Cordones Industriales y Comandos Comunales, los cuales agrupaban a las organizaciones populares de un territorio determinado. El Poder Popular, la Central Única de Trabajadores y las organizaciones populares y estudiantiles en general impidieron que la oposición paralizara el país, por lo cual se constituyeron en un factor decisivo que hizo fracasar el paro. El otro factor fue la incorporación de las Fuerzas Armadas al gabinete, a solicitud de Salvador Allende.

El Partido Demócrata Cristiano entre el fin del paro de octubre y las parlamentarias de marzo de 1973

Fracasado el paro, entre noviembre de 1972 y marzo de 1973, se abrió una nueva coyuntura política, signada por la competencia electoral con vistas a los comicios parlamentarios de marzo de 1973. También se caracterizó por un cierto quiebre al interior de la izquierda derivado de la radicalización –por obra del mismo proceso político–, de parte de su base social. Por un lado figuraba el Gobierno, que a la fecha, a través del llamado Plan Millas, se propuso normalizar la situación en la industria por la vía de devolver a sus propietarios muchas de las empresas tomadas, sobre todo de las medianas y pequeñas, o de las menos rentables, aspirando a mantenerse dentro de lo establecido en su programa, que contemplaba socializar solo las más grandes. Pero el Poder Popular había tomado y hecho funcionar por su cuenta a muchas más, las que se negará a devolver, menos aún cuando los trabajadores del Área de Propiedad Social, con el control de las empresas en sus manos, habían visto cambiar sustancialmente sus vidas y concluido en que los patronos no eran necesarios. En sus manos las empresas habían dejado de ser solo centros productivos. En ellas se crearon guarderías infantiles, centros culturales y recreativos que enriquecían la vida cotidiana de sus miembros, quienes ocupaban los recintos de las empresas incluso fuera

de sus horarios de trabajo y los fines de semana, para desarrollar en ellos actividades varias, representaciones teatrales, musicales, etc., con frecuencia dedicadas a los niños. ¿Qué de raro tiene que esos trabajadores no quisieran volver a la esclavitud anterior si habían visto las enormes posibilidades brindadas por la revolución en curso? No entregarán, pues, las empresas por más que el Gobierno se los solicite.

Una parte importante de esos trabajadores se convertirán en la base social de la estrategia del Partido Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era distinta a la vía chilena. Esa estrategia consistirá en la creación de un poder paralelo, o poder popular, que buscará prepararse para el enfrentamiento decisivo de clases que resolvería definitivamente el problema del poder. Con esa perspectiva, a diferencia del Gobierno y de un sector de la Unidad Popular, consideraron que era necesario expropiar todas las empresas posibles propendiendo con ello debilitar la base económica de la burguesía y a mejorar la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores, siempre en vistas del «enfrentamiento decisivo de clases».

No obstante, esta estrategia impulsada por el sector más radical de la izquierda —el llamado «polo revolucionario»— asustará a las clases medias y a la pequeña burguesía, o sea, a gran parte de la base social del Partido Demócrata Cristiano, el que así verá radicalizada su posición antigubernista. El tema de cuántas de las empresas ocupadas por sus trabajadores durante el paro de octubre serían devueltas, quedó pendiente en la izquierda y en el Gobierno. Este adoptará una resolución al respecto solo luego de las elecciones de marzo de 1973. Mientras tanto, las empresas siguieron tomadas, al tiempo que en la izquierda se veían pronunciadas las dos estrategias que coexistían en su seno.

El Partido Demócrata Cristiano entre marzo de 1973 y el ascenso de Patricio Aylwin a su presidencia

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, las fuerzas de izquierda obtuvieron casi el 44 % de los votos, aumentando con ello su representación en el Congreso. Ante ese panorama, en la derecha, al constatar la carencia de mayorías parlamentarias

opositoras que permitieran poner fin al Gobierno por vía institucional, se reactivaron los proyectos para derrocarlo por vía fáctica, mientras que la directiva de la Democracia Cristiana le pedía rectificaciones.

A ese cuadro se agregó otro hecho relevante. A comienzos de abril, alentado por los resultados electorales, el Gobierno, mediante decreto de insistencia ante la Contraloría General de la República, traspasó al Área de Propiedad Social cuarenta y cinco empresas de las que habían paralizado en octubre y que se mantenían tomadas por sus trabajadores. Entonces se desató una fuerte contraofensiva por parte del Partido Demócrata Cristiano. Su punto central se situó en la exigencia que hizo al Ejecutivo en orden a que promulgara de inmediato el proyecto Hamilton-Fuentealba, exigencia que venía unida al rechazo de la opción que proponía Salvador Allende consistente en la promulgación parcial de dicho proyecto, esto es, aquella parte de este en que había acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, como era el caso de las disposiciones que versaban sobre la garantía a las pequeñas y medianas empresas.

El presidente Allende insistió entonces en acudir al Tribunal Constitucional, el cual debía dirimir el contencioso. Por su parte, la Democracia Cristiana sostuvo que el Gobierno debía promulgar el proyecto íntegramente o bien llamar a plebiscito, debiendo renunciar si lo perdía. Igualmente insistió en la tesis según la cual si el Ejecutivo se negaba a promulgar el proyecto o a llamar a plebiscito, caía en la ilegalidad, la que a juicio de este partido se veía agravada por la toma de empresas por los trabajadores. Así, el Partido Demócrata Cristiano radicalizó su postura.

En este marco de creciente polarización, a comienzos de mayo asumió la directiva del partido Patricio Aylwin, hombre del grupo de Frei. Durante su presidencia, la Democracia Cristiana se encaminará derechamente hacia el golpe blando, para el cual parecían madurar las condiciones. Mientras, el Partido Nacional, desde el año anterior, había proclamado la desobediencia civil, que practicaba en las calles, todo en el marco de una intensa campaña del terror, que compartía con la Democracia Cristiana, y de acusaciones al Gobierno en orden a que atropellaría la Constitución y las leyes para así instaurar un supuesto régimen totalitario.

Mayo-septiembre. Eduardo Frei y Patricio Aylwin: hacia el «golpe blando»

Al asumir Patricio Aylwin la presidencia del partido, este ya había recorrido una serie de etapas las que, en una u otra variante, se encaminaban hacia el fin anticipado del Gobierno. Según hemos visto, a mediados de 1971, como consecuencia del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, en el seno partidario se había impuesto fácticamente su sector conservador. Esto, durante la segunda mitad de 1971, vino seguido por la confluencia del partido con la derecha, confluencia que buscaba impedir la consolidación del Gobierno, expresión de lo cual, entre otras, fueron las sistemáticas acusaciones constitucionales a ministros y el inicio de una ofensiva de masas, que a la fecha tuvo un punto relevante en la Marcha de las Cacerolas Vacías (diciembre de 1971).

Luego de esta fase advino otra, en la que el Partido Demócrata Cristiano intentará deslegitimar al Gobierno, en gran medida en torno a la cuestión de los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba y la temática de los grupos armados. Posteriormente, durante la segunda parte de 1972 en adelante, el Partido Demócrata Cristiano, luego de que fracasara el diálogo convocado por el presidente Allende, empezó a tomar parte activa, junto con la derecha, en la ingobernabilidad del país (paros gremiales y paro general de octubre). Una vez finalizado este paro, y aspirando a cosechar sus frutos, el Partido Demócrata Cristiano pretendió derrotar categóricamente al Gobierno en los comicios parlamentarios de 1973 y dejarlo convertido en un mero régimen de administración.

Fracasada esta expectativa, en abril de 1973, cuando la derecha retomara el plan orientado al golpe militar institucional, el Partido Demócrata Cristiano finalmente iniciará el camino hacia el golpe blando, bajo una u otra modalidad. Una de ellas consistía en dejarle a Salvador Allende solo el camino de la renuncia forzado por la ingobernabilidad generada a través de las huelgas de los gremios patronales sumado a su aislamiento dentro del aparato estatal, con la correspondiente eliminación de las instancias institucionales de resolución del conflicto. La otra opción operaría a través del control del gabinete por las Fuerzas Armadas, las cuales tendrían

facultades de cambiarlo todo. Esta última fue la fase por la que el Partido Demócrata Cristiano, presidido por Patricio Aylwin, empezó a transitar abiertamente.

Hacia el aislamiento del gobierno dentro del aparato institucional del Estado

En la perspectiva del golpe blando y de bloquear soluciones institucionales al conflicto político en curso, durante el mismo mes de mayo la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, más otros sectores opositores, con sus votos lograron que el Congreso sacara un acuerdo que sostenía que el Tribunal Constitucional era incompetente para pronunciarse sobre la cuestión de los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba, y que cualquier decisión tomada por él sobre la materia sería nula, carecería de valor y no obligaría a nadie. A fin de mes, el Tribunal Constitucional, fuertemente presionado y acusando el golpe, se declaró incompetente para dirimir el tema. Así, la Democracia Cristiana y la derecha anulaban los recursos que la institucionalidad disponía para dirimir los conflictos en curso.

Formando parte de la misma lógica, el 31 de mayo el plan de la Democracia Cristiana seguía tomando forma. A esa fecha, Frei, como presidente del Senado, y Luis Pareto, como presidente de la Cámara de Diputados, ambos demócratas cristianos, enviaron a la Contraloría General de la República un documento en el que argumentaban que el presidente Allende debía promulgar completo el proyecto Hamilton-Fuentealba o, en su defecto, debía llamar a plebiscito. Toda otra solución, señalaron, implicaría salirse de la Constitución.

Lo que estaba en curso era la estrategia orientada a aislar al Ejecutivo dentro de la institucionalidad estatal buscando su paralización. Esto, combinado con los movimientos y paros gremiales, debía coronarse con la renuncia del Presidente. Se trataba de una de las variantes del golpe blando, la que ocultaba su esencia mediante una retórica fuertemente deslegitimante que decía reivindicar la libertad, la democracia, la Constitución y la ley, que el Gobierno estaría violando. Era la lógica de Maquiavelo, quien le aconsejaba al príncipe revestir siempre su acción con los valores más elevados,

pero con la firme decisión de contradecirlos si fuera necesario, con el supuesto de que «todos verán lo que aparentas, pocos sabrán lo que eres, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la inmensa mayoría».¹³

A comienzos de junio, consciente de los verdaderos propósitos de la oposición, el presidente Allende propuso a la Unidad Popular llamar a un plebiscito que sirviera para que el pueblo dirimiera el conflicto en curso. Pero los partidos de gobierno no aceptaron la propuesta. Mientras, el 29 del mismo mes, se llevaba a la práctica la variante golpista del Frente Nacionalista Patria y Libertad: la de los alzamientos focalizados. Esta se materializó mediante el alzamiento del Blindado núm. 2, donde dicho Frente tenía seguidores. Fracasada la intentona, la plana mayor de Patria y Libertad, cerebro de la operación, procedió a asilarse en la embajada de Ecuador.

Sofocado el levantamiento, Salvador Allende solicitó al Congreso la declaración de estado de sitio a fin de investigar las conexiones del frustrado golpe. La Democracia Cristiana, luego de una posición ambigua, se negó a la solicitud presidencial, al igual que la derecha, la que desde el principio se manifestó en contra.

En ese cuadro, el Partido Demócrata Cristiano, lejos de contribuir a estabilizar la autoridad presidencial, más bien se esforzó, con nuevos bríos, en provocar el fin del Gobierno, aunque implementando la otra variante del golpe blando, es decir, aquella consistente en imponerle a Salvador Allende —quien no se avenía a renunciar— un gabinete militar que desplazara a la Unidad Popular del Ejecutivo y dejara al Presidente prisionero de los uniformados, como una figura meramente decorativa.

En la perspectiva señalada, el 1ro. de julio Eduardo Frei se reunió con el general Bonilla, que había sido su edecán. Allí le comunicó que la Democracia Cristiana estaría dispuesta a un acuerdo con el Gobierno solo si este aceptaba formar un gabinete cívico militar. Esta solución, de hecho, significaba la instauración de otro Gobierno en el que las Fuerzas Armadas tendrían el poder real. A los pocos días —el 5 de julio—, Patricio Aylwin, a nombre de su partido, planteó la misma idea, aunque de manera todavía más clara: haciendo mención a las tomas de industrias y a los grupos armados —cuya existencia, por lo demás, nunca se comprobó—,

¹³ Nicolás Maquiavelo: *El príncipe*, Ed. Ercilla, Santiago, 1988, p. 118.

planteó abiertamente la necesidad de incorporar de forma masiva a los militares al gabinete. La declaración que entonces Aylwin emitiera decía que «la mejor garantía para el restablecimiento de la normalidad democrática [era] la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al gobierno, con poderes efectivos para realizar las rectificaciones [...] indispensables para asegurar el imperio de la Constitución y las leyes».¹⁴

Esta solución golpista –al igual como la de la derecha, que estaba en pleno desarrollo– debía resolver para implementarse el desafío que representaba el fuerte apoyo de masas que tenía el Gobierno. Ese apoyo se expresaba continuamente en las calles, donde las multitudes, junto a los partidos de izquierda, exigían mano dura en contra de la sedición en curso. De igual importancia eran los cordones industriales, donde los obreros seguían controlando gran parte de las empresas.

A los efectos de enfrentar este desafío, indispensable para el éxito del golpe, fuera en la variante de la Democracia Cristiana o de la derecha, el 6 de julio la oposición conjunta pidió que las Fuerzas Armadas aplicaran ley de control de armas. Como resultado de ello los militares empezaron a allanar con extrema violencia muchas de las fábricas tomadas por los obreros. De este modo, el golpe, que de hecho estaba en pleno desarrollo, completaba otra de sus facetas. Sin embargo, lo que todavía no estaba claro era si se realizaría en la versión del Partido Demócrata Cristiano o en la del Partido Nacional. Mientras que la opción del Frente Nacionalista Patria y Libertad había quedado descartada ante el fracaso decisivo que sufriera el 29 de junio.

El mismo día 6 de julio, pasadas las 18:30 horas, la directiva de la Sofofa, órgano corporativo del gran empresariado industrial, se reunió con Eduardo Frei, presidente del Senado. Allí –según el acta tomada por el abogado Rafael Sanhueza, secretario de la directiva de dicha entidad– los líderes de esta «le manifestaron [a Frei] su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del “tanquetazo” del viernes 29 de junio último, que había originado una toma masiva de industrias». Según lo consigna la misma acta, Frei respondió: «nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente esto sólo se arregla con fusiles,

de manera que en vez de ir al Congreso [los directivos de la Sofofa] debíamos ir a los regimientos. Les aconsejo plantear crudamente sus aprehensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo».¹⁵

Dos días después, el 8 de julio, Frei se entrevistó con el general constitucionalista, Carlos Prats, quien, para salvar el orden institucional, quiso gestionar una tregua entre el Gobierno y la oposición. Con tales miras se propuso conversar con Frei, lo cual se verificó el 8 de julio. Durante la reunión el expresidente de la República se negó rotundamente a la tregua propuesta por Prats, con el pretexto de la existencia de los supuestos grupos armados que existirían en el país. Su erradicación, dijo, requería un gabinete capaz de emprender con éxito esa tarea, lo que implícitamente implicaba el control ministerial por las Fuerzas Armadas; es decir, Frei se jugaba por el golpe blando consistente en copar el Gobierno con militares. Tal fue el mensaje que le comunicó al general Prats. Este, según relata en su diario, le señaló que las Fuerzas Armadas se encargarían de los grupos paramilitares, pero que sería «fatal esperar [de ellas] una intromisión política en el gobierno». El relato de Prats sobre la entrevista concluye con el siguiente comentario: «me retiro con la sensación de no haber logrado una apertura decidida de quien tiene tanto ascendiente en el partido político clave del momento».¹⁶

Por su parte, Salvador Allende, quizás de manera ingenua, siguió intentando abrir un diálogo con la Democracia Cristiana, cuyas finalidades consistirían ahora en salvar el orden constitucional. A los efectos de llegar a un acuerdo sobre el punto, el Presidente se manifestó incluso dispuesto a integrar al gabinete un miembro del sector progresista del Partido Demócrata Cristiano, que sería Jaime Castillo Velasco. En tanto que, en un espíritu totalmente opuesto, el 11 de julio Patricio Aylwin declaraba en el Senado que su partido no dialogaría con el Gobierno debido a que en el país persistían

¹⁵ En acta de la reunión que tuvo la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril con el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, levantada ese mismo día por el abogado Rafael Rivera Sánchez, entonces secretario de la directiva de esa sociedad, citado en <<http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/23176>>, 15 de agosto de 2017. «Fuente: José Piñera».

¹⁶ Carlos Prats: *Memorias. Testimonio de un soldado*, ed. cit., p. 424 y ss.

los grupos armados. La directiva de Aylwin tampoco aceptó que un hombre de sus filas se integrara al gabinete, con el pretexto de que la propuesta planteada al respecto por el presidente Allende solo perseguía dividir a la colectividad.

Ante la negativa de la Democracia Cristiana a negociar, Salvador Allende, el 16 de julio, pidió al cardenal Raúl Silva Henríquez que intercediera ante ese partido a fin de que aceptara entablar un diálogo destinado a salvar el orden legal. El 19 Patricio Aylwin, ante la solicitud del cardenal, sostuvo que accedería a reunirse con el Gobierno siempre que se pusiera fin a los grupos armados y se devolvieran las industrias tomadas por los trabajadores.

El 26 de julio, Salvador Allende invitó a la Democracia Cristiana a La Moneda. Al día siguiente el Frente Nacionalista Patria y Libertad asesinó al edecán naval del Presidente al tiempo que simultáneamente estallaba un terrorismo generalizado a lo largo y ancho del país. Roberto Thieme, entonces jefe operativo del Frente Nacionalista Patria y Libertad, relata en los siguientes términos el papel que a su organización le cupo en esos hechos:

[...] cuando se generó el plan para derrocar a la UP, las Fuerzas Armadas nos contactaron para que diéramos apoyo operacional para paralizar el país y crear las condiciones para el golpe. Fuimos contactados por un sector de una de las ramas de las Fuerzas Armadas para contribuir al golpe, en términos de cortar vías de transporte, energía y comunicaciones, y recibimos de las instituciones castrenses el apoyo logístico para esa misión. Estamos hablando de operaciones que se realizaron entre el 16 de julio y el 11 de septiembre de 1973.

Y agrega: «[...] en el contexto de crear las condiciones del pronunciamiento, efectuamos sabotajes, cortamos puentes y líneas de ferrocarril, bajamos torres de alta tensión. Hubo varias acciones armadas, pero preferiría no entrar en detalles».¹⁷ Al terrorismo generalizado se sumaron crecientes paros gremiales, cuyo elemento central estuvo constituido por el de los camioneros.

¹⁷ Roberto Thieme, entrevista en *Revista Ercilla*, núm. 1.134, 3 de abril de 2000, pp. 33-34.

Pese a todo, y conmovido por el terrorismo golpista, el diálogo entre el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano comenzó el 30 de julio. En él este partido insistió en el golpe blando; es decir, planteó al Gobierno que las Fuerzas Armadas debían institucionalmente incorporarse al gabinete, con facultades para cambiar el personal del Estado. Este nuevo gabinete –de hecho, un nuevo gobierno– avalaría el cumplimiento de los eventuales acuerdos a que llegara el diálogo en curso.

Salvador Allende propuso un acuerdo que no implicara la imposición de ninguna de las dos partes. Postuló la elaboración en conjunto de una base jurídica compartida tanto por el Partido Demócrata Cristiano como por el Gobierno, en cuyo marco se abordarían, entre otros: garantía a la existencia del estado de derecho y del camino institucional, proyectos sobre empresas de autogestión, garantías a la pequeña y mediana empresa, empresas del Estado, participación de los trabajadores y delimitación del Área de Propiedad Social. Salvador Allende aceptó incluso que en la cuestión de los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba se asumiera la posición del Partido Demócrata Cristiano, o sea, que los vetos pudieran ser rechazados en el Congreso por mayoría simple, y no por dos tercios, pero solo por esta vez, pues de lo contrario se estaría instaurando un régimen parlamentario no contemplado en la Constitución.

El Partido Demócrata Cristiano no aceptó nada e insistió en el gabinete con militares en el cual, de hecho, el presidente sería una mera figura decorativa. De allí que el diálogo finalizara sin acuerdo. De este modo, Salvador Allende una vez más constató que la solución buscada por sus opositores era la golpista, fuera en la variante del Partido Nacional o de la Democracia Cristiana. Ante tales realidades, consideró que, para defender el orden constitucional y evitar el golpe, había que incorporar al gabinete a los comandantes en jefe de las ramas de la defensa, y así procedió. Los ministros uniformados juraron el 8 de agosto. Ese mismo día Patricio Aylwin, a través de una declaración pública, rechazó la fórmula por cuanto «no llenaba los requerimientos de real participación de las Fuerzas Armadas en todos los niveles del Ejecutivo».¹⁸ O sea, por cuanto

¹⁸ *El Mercurio*, 9 de agosto de 1973, p. 8.

no daba lugar a un gobierno propiamente militar, encarnación del golpe blando.

El presidente Allende, por su parte, en vista de que no había con quién negociar una salida institucional, insistió en la realización de un plebiscito a fin de que el pueblo decidiera el curso que debía seguir el país, para evitar así el golpe en marcha, iniciativa que nuevamente tendrá que discutir con el Comité Político de la Unidad Popular.

La ofensiva final

En agosto, tanto el Partido Demócrata Cristiano como el Partido Nacional, se aprestaron a implementar la ofensiva final en contra del Gobierno. Cada uno intentará abrir paso a su propia salida. Como se dijo en el capítulo 12, el 20 de agosto, a los efectos de financiar dicha ofensiva, en Washington el Comité 40 resolvió entregar al conjunto de la oposición un millón de dólares. De esos fondos el Partido Demócrata Cristiano, según Peter Kornbluh, recibió solo 13 000, bajo el supuesto de que más adelante se le haría entrega de un saldo.¹⁹ En todo caso –según hemos visto en capítulos anteriores–, la colectividad había venido desde mucho antes obteniendo financiamiento clandestino por parte de la CIA. Además del que le fuera entregado entre 1962 y el ascenso de Salvador Allende, hay que tener en cuenta el que recibiera entre esta fecha y agosto de 1973, a lo cual nos hemos referido en otra parte.

Ahora bien, las dos posibles salidas golpistas –la del Partido Nacional o la del Partido Demócrata Cristiano– en las que debía desembocar la ofensiva final de la oposición requerían para culminar exitosamente conseguir los siguientes últimos tres objetivos: 1) remover a los mandos constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, sobre todo a los del Ejército; 2) darle una cobertura legal al golpe; y 3) intensificar la ingobernabilidad a través del terrorismo desatado (a cargo de la extrema derecha con el apoyo de segmentos de las Fuerzas Armadas) y de los movimientos gremiales, donde los

¹⁹ Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, citado por Luis Corvalán Marquez: *La secreta obscenidad de la historia contemporánea de Chile*, ed. cit., p. 206.

camioneros desempeñaban un papel principal. Las tres cuestiones fueron exitosamente resueltas a fines de agosto.

Respecto de la primera, a fines de ese mes se verificó un fuerte asedio en contra del general Carlos Prats, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. El asedio incluyó manifestaciones de la derecha frente a su domicilio y la utilización de las esposas de los altos mandos del Ejército, quienes fueron movilizadas a los efectos. El Partido Demócrata Cristiano no se quedó atrás en este acoso. A mediados de agosto, a través de una declaración pública, sostuvo que el general Prats había «asumido el papel de colocar a las FF. AA. en una acción ilegal al servicio de la represión de los trabajadores del transporte, que sólo [estaban] exigiendo el cumplimiento de una palabra de honor empeñada». La declaración agregaba que frente a las acciones que implementaba el Gobierno en contra del paro de los transportistas, la Democracia Cristiana «responsabilizaba al señor ministro de defensa de lo que [pudiera] ocurrir».²⁰

Prats, aislado dentro de las filas, ya plenamente golpistas, e intensamente presionadas por la civilidad de la derecha para que derrocaran a Salvador Allende, terminó renunciando durante la última semana de agosto. (En 1976 será asesinado por la DINA en Buenos Aires). Como sabemos, junto a Prats renunciaron otros mandos constitucionalistas. Entonces, el general Pinochet asumió la comandancia en jefe de la institución.

La cobertura legal del golpe fue proporcionada por el Partido Demócrata Cristiano. Los parlamentarios de esta colectividad, José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez y Eduardo Sepúlveda, con el copatrocinio de los diputados del Partido Nacional, Mario Arnello, Mario Ríos y Silvio Rodríguez, presentaron en la Cámara baja un proyecto de acuerdo que llamaba a los militares a restituir la Constitución y las leyes, a su juicio quebrantadas. El texto del acuerdo señalaba que si los militares no procedieran así se «comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las FF. AA. y el cuerpo de Carabineros».²¹ El proyecto de acuerdo fue aprobado con los votos conjuntos de la oposición. De tal

²⁰ Citada por Carlos Prats: *Memorias. Testimonio de un soldado*, ed. cit., p. 467.

²¹ *El Mercurio*, 23 de agosto de 1973, pp. 1 y 10.

modo, la luz verde para que los uniformados actuaran quedaba encendida.

La ingobernabilidad fue acentuada por la generalización del terrorismo, los paros gremiales –articulados en torno al de los camioneros– y, a comienzos de septiembre, por manifestaciones más o menos aisladas que pedían la renuncia de Allende. El golpe estaba, pues, *ad portas*. El historiador Cristian Gazmuri, cercano a la Democracia Cristiana, en su biografía de Frei Montalva, sostiene que este, ante la proximidad de la salida golpista, en referencia a las Fuerzas Armadas le había dicho a Gabriel Valdés: «nos van a llamar»,²² Tal expectativa ilustra adicionalmente el porqué Frei se esforzó tanto por impedir todo acuerdo de su partido con el Gobierno, así como el servilismo que luego la Democracia Cristiana mostrará ante la dictadura, según anotaremos más adelante.

La Unidad Popular, por su parte, respondió con sus propias manifestaciones. El 4 de septiembre más de un millón de personas pasaron frente a La Moneda (Santiago entonces tenía tres millones de habitantes), mientras que sus partidos exigían al Gobierno que aplicara la ley «en contra de la sedición», exigencia que todos ellos habían estado haciendo durante los últimos meses.

En tanto, Salvador Allende, cerrada todas las opciones, insistió en el tema del plebiscito. Durante la primera semana de septiembre la propuesta se debatió al interior del Comité Político de la Unidad Popular, donde no hubo acuerdo. El Partido Socialista se opuso a la iniciativa, mientras que el Partido Comunista la apoyó. Frente a este desacuerdo, el presidente Allende decidió llevarla a cabo de todas maneras, mientras que la Unidad Popular se quebraba.

Seguidamente, Salvador Allende comunicó a los mandos de las Fuerzas Armadas que el martes 11, mediante cadena nacional, comunicaría al país su decisión de llamar a plebiscito. Los uniformados decidieron entonces adelantar el golpe para ese día, ya que inicialmente lo tenían planificado para el 14.

El Partido Demócrata Cristiano, por su parte, viendo que los sucesos se precipitaban y que la variable del copamiento del Gobierno mediante el control del gabinete por los militares no resultaba, volvió a la variante de exigir la renuncia de Allende. Para estos efectos, el lunes 10 de septiembre ordenó a todos sus parlamentarios que

312 ²² Cristian Gazmuri: *Eduardo Frei y su época*, Ed. Aguilar, Santiago, p. 856.

hicieran dejación de sus cargos con el fin de que los de los otros partidos hicieran lo propio, obligando a Salvador Allende a seguir el mismo camino, presionado por el desplome institucional que significaba la medida. Al otro día advino el golpe institucional, culminando así un verdadero levantamiento general de la burguesía, con apoyo y financiamiento de una potencia extranjera y el respaldo de la mayoría de la mesocracia y de la pequeña burguesía.

Así, las «fuerzas internas», como las denominaba la jerga de Washington, abundantemente financiadas por el país del Norte, pudieron al final imponerse. Mientras, el jueves 13 de septiembre el Partido Demócrata Cristiano emitía una declaración apoyando el golpe, a cuya materialización tanto había contribuido, cuyo texto parcialmente transcribimos en un capítulo posterior. Pocos años después, los servicios de seguridad de la dictadura que se instaló ese martes 11 –al igual como antes lo hicieran con el general Prats, entre otros–, asesinarían al propio Eduardo Frei, envenenándolo cuando se recuperaba de una operación quirúrgica. Pocas fuerzas armadas del mundo –si es que alguna– tienen a su haber la muerte de dos presidentes de la República en un lapso tan corto.

Conclusiones

Teniendo a la mano los antecedentes expuestos, se hace evidente que las dificultades de la Democracia Cristiana para llegar a acuerdos con el gobierno de Salvador Allende, se constituyeron efectivamente en un factor decisivo en el «quiebre de la democracia en Chile», sobre todo en la medida en que esta colectividad confluyó con la derecha. Pero esa dificultad no se debió a un abstracto antialiancismo y al ideologismo que sería propio de la colectividad, como lo sostiene Arturo Valenzuela. Se debió, más bien, a la vinculación del partido –mejor dicho, de su sector conservador– con la política estadounidense que buscaba derribar a Salvador Allende valiéndose de lo que llamara las «fuerzas internas».

Como hemos visto, los datos disponibles muestran que desde 1962 en adelante Washington había venido financiando al Partido Demócrata Cristiano, el cual era una pieza importante de la política de Washington, no solo en relación con Chile, sino también con

América Latina. En primer lugar –como lo muestra el Informe Church–, la colectividad fue seleccionada por los Estados Unidos a los efectos de crear –en el marco de la Alianza para el Progreso– un contramodelo atractivo a la Revolución Cubana, debiendo, de paso, evitar el ascenso de la izquierda en Chile. Tales fueron los roles que, de hecho, cumplió el gobierno de Frei. Y cuando, luego del triunfo de la Unidad Popular, Washington resolvió que la existencia de un gobierno de Allende no era aceptable para los Estados Unidos y que su derrocamiento debía hacerse mediante las «fuerzas internas» –a las que había que apoyar mediante acciones encubiertas combinadas con el bloqueo económico exterior–, no era concebible que entre esas «fuerzas internas» no le correspondiera un lugar muy importante al Partido Demócrata Cristiano, menos aún cuando era el mayor partido del país, con más influencia política, electoral, social, cultural, y disponía de los líderes más carismáticos e influyentes. ¿Cómo los Estados Unidos iban a prescindir de él? No en vano continuó con el financiamiento que desde 1962, a través de la CIA, venían proporcionándole.

Teniendo en cuenta estos elementos se puede ponderar la influencia decisiva de los factores externos en el quiebre de la democracia en Chile y del papel del Partido Demócrata Cristiano en ese proceso. Los intentos de la colectividad por crear, junto con la derecha, la ingobernabilidad conducente a impedir que el gobierno de Salvador Allende se consolidara, para luego forzar su renuncia o ponerle fin mediante el control del gabinete por las Fuerzas Armadas (golpe blando), se hallan dentro de esa lógica.

Todo esto, por cierto, no niega que al seguir tal conducta el Partido Demócrata Cristiano tuviera sus objetivos propios. Los tenía, sin dudas. Consistían en reaccionar al gobierno. Desde su óptica, los Estados Unidos eran los aliados externos requeridos para ello. Pero para recibir su apoyo, incluso financiero, la colectividad debía tener una actitud de reciprocidad respecto de los intereses estadounidenses, actitud que el sector conservador del partido, siguiendo, por lo demás, sus propias convicciones ideológicas y políticas, estuvo dispuesto a adoptar. Desde esta óptica cabe juzgar el papel del Partido Demócrata Cristiano en el quiebre de la democracia en Chile. Las responsabilidades que le cupieron al respecto, según

los datos empíricos que se disponen –muchos de los cuales han sido expuestos a lo largo de estas páginas–, son indesmentibles. Con base en ellos es posible concluir que a la colectividad le caben responsabilidades tanto políticas como morales por el ascenso de una dictadura, la que no se habría instalado sin su decisivo aporte, y a la cual incluso apoyara temporalmente, como argumentaremos más adelante.

CAPÍTULO 15

Notas sobre la izquierda durante el gobierno de Salvador Allende

Es preciso, para tratar la cuestión a fondo, examinar si los innovadores lo son por propia iniciativa o tienen quien les apoye; es decir, si para ejecutar su empresa necesitan apelar a la persuasión o pueden emplear la fuerza, porque en el primer caso fracasarán siempre sin conseguir cosa alguna; pero si son independientes y pueden apelar a la fuerza, raramente peligrarán. De esto nace que todos los profetas armados hayan triunfado, y hayan fracasado todos los profetas desarmados.

Nicolás Maquiavelo: *El príncipe*,
Ed. Ercilla, Santiago, 1988, p. 46.

¿Cómo reaccionó la izquierda, particularmente la agrupada en la Unidad Popular, frente a la poderosa conjunción de fuerzas, nacionales e internacionales, que se orientaba decididamente al derrocamiento del presidente Allende? No precisamente de manera unitaria. El análisis de los hechos evidencia que, en la coyuntura histórica de 1970-1973, los partidos de la Unidad Popular se mostraron incapaces de asumir una postura común frente a las fuerzas empeñadas en el quiebre institucional.

La mencionada incapacidad fue uno de los factores que facilitó el triunfo de la oposición a Salvador Allende, traducido en el golpe del 11 de septiembre. La falta de coherencia política que se dio entre los partidos que apoyaban al mandatario no puede ser soslayada. Ella tuvo su expresión más importante en las profundas diferencias existentes entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran las colectividades más grandes e influyentes dentro de la Unidad Popular.

Ambos partidos por décadas constituyeron los ejes de la izquierda chilena. No obstante, como se viera en un capítulo anterior, en la historia de sus relaciones normalmente predominaron los desencuentros. Estos, que tenían profundas raíces, continuaron durante los tres años del gobierno del presidente Allende.

En el presente texto intentaremos, aunque de manera esquemática y sumaria, perfilar algunas de las diferencias fundamentales que separaron a ambos partidos durante dicho gobierno.

Las diferencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista durante el gobierno de Salvador Allende

Durante los tres años que duró el gobierno de la Unidad Popular se dio una recurrente y soterrada confrontación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sus diferencias giraban en torno a las cuestiones señaladas en un capítulo anterior (carácter de la revolución, política de alianzas, formas de lucha, etc.), las que distaron mucho de desaparecer cuando Salvador Allende accediera a la primera magistratura. En lo que sigue intentaremos poner de manifiesto las formas específicas en que esas diferencias se evidenciaron durante el gobierno de dicho mandatario.

El «enemigo principal» y los objetivos inmediatos

A poco de iniciado el gobierno de la Unidad Popular, el Partido Socialista –para el cual la revolución chilena tenía un carácter socialista– postuló, por un lado, que el enemigo principal del proceso de cambios en curso era la Democracia Cristiana y no la derecha, y, por el otro, que la cuestión fundamental entonces planteada consistía en resolver desde ya el problema del poder a plenitud, mediante un «enfrentamiento decisivo de clases», que previsiblemente sería armado. A juicio de este partido, solo la resolución plena y pronta del problema del poder permitiría iniciar la construcción del socialismo. Así lo postuló en su Congreso de La Serena, celebrado en enero de 1971.

La posición del Partido Comunista –para el cual la revolución chilena tenía un carácter antioligárquico, antimperialista y de perspectiva socialista– fue totalmente distinta. El objetivo planteado por esta colectividad luego de que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República consistió en mejorar la correlación de fuerzas, ampliar los partidarios del régimen, en lo posible agru-

pando hasta el 90 % de la población, a cuyos efectos había que llevar rápidamente a la práctica el programa de gobierno. Para ampliar la base social de este, el Partido Comunista puso énfasis en la economía, en lo que llamó la «batalla de la producción». Bajo su lógica, las transformaciones en curso harían que crecientes sectores antes ajenos a la izquierda, al ver elevadas sus condiciones de vida, reconocieran sus «intereses objetivos» y se plegaran a la Unidad Popular. Esto debía contribuir decisivamente a aislar a la derecha golpista y permitir establecer, por vía plebiscitaria, cuando la correlación de fuerzas lo hiciera posible, una nueva Constitución política que convirtiera al pueblo en el detentador del poder.

Para el Partido Comunista el enemigo principal era la derecha. En cuanto a la Democracia Cristiana, o sectores suyos, y su base popular, la colectividad consideraba que debían ser ganados para el proceso de cambios o neutralizados. En tal perspectiva había que lograr acuerdos al menos con un segmento de ese partido. El Partido Socialista, por su parte, denunció todo intento por dialogar con algún sector opositor. Sostuvo que ello representaría una forma de transar la revolución en curso. En cambio propuso «avanzar sin transar».

Avanzar o consolidar

Cuando el Partido Comunista comprobó que la correlación de fuerzas dejó de evolucionar en favor de la Unidad Popular –cuestión que se hizo clara después de un periodo de ascenso que tuvo su punto más alto en marzo de 1971–,¹ la colectividad comenzó a plantear la necesidad de llevar a cabo rectificaciones. Ello, a su juicio, implicaba hacer funcionar bien el Área de Propiedad Social que se había venido formando, y superar el sectarismo que impedía crecer. Pronto, ante el fortalecimiento de la oposición, planteará que lo fundamental era consolidar los cambios logrados, lo que permitiría en el futuro nuevos avances.

¹ En las elecciones municipales de ese mes, la izquierda obtuvo el 50 % de la votación, con lo que superó ampliamente el 36 % con que había triunfado en septiembre de 1970.

Esto último para el Partido Socialista constituía una expresión acabada de reformismo, tal como lo sería el poner el énfasis en el buen funcionamiento de la economía. A la tesis de «consolidar para avanzar» del Partido Comunista, el Partido Socialista opuso la de «avanzar para consolidar», todo en la perspectiva de resolver definitivamente el problema del poder, y no precisamente por la vía institucional. Así, en marzo de 1972, el pleno del Comité Central de la colectividad sostuvo: «[...] el Estado burgués no sirve para construir el socialismo y es necesario su destrucción». Y luego agregó: «[...] para nosotros socialistas, cada pequeño triunfo eleva el nivel del próximo choque, hasta que llegemos al momento inevitable de definir quién se queda con el poder en Chile, el momento de *dilucidar violentamente* entre el poder de las masas y el de las fuerzas reaccionarias internas apoyadas por el imperialismo yanqui».²

Segunda mitad de 1972: nuevas divergencias

Salvador Allende, angustiado por la dualidad de líneas existente al interior de la Unidad Popular, le pidió a estas definiciones, las cuales no llegarían. Pese a ello, a mediados de 1972 –reafirmando el curso institucional del proceso de cambios–, el mandatario impulsó fuertes iniciativas de diálogo con la Democracia Cristiana, aspirando a llegar a acuerdo con ella, particularmente sobre una legislación que permitiera consolidar el Área de Propiedad Social. Todo con la reticencia del Partido Socialista y el apoyo del Partido Comunista.

Como sabemos, los mencionados diálogos se realizaron a fines de julio de 1972, pero fracasaron ante el retiro de la Democracia Cristiana. En el intertanto, como se viera en un capítulo anterior, la CIA, según el Informe Church, se esforzaba, y con éxito, por unir a las dos alas de la oposición: la derecha y la Democracia Cristiana. Ambas, según dicho Informe, abundantemente financiadas por Washington.

Durante la segunda mitad de 1972, dicha confluencia opositora se aceleró, radicalizando el proceso político. Aún así los partidos de la Unidad Popular no pudieron resolver sus diferencias. Incluso más, estas se vieron ahondadas. En efecto, cuando la mencionada

confluencia opositora desembocó en el paro general de octubre –ante el cual los trabajadores tomaron las empresas y constituyeron el Poder Popular formado por cordones industriales y comandos comunales–, los partidos de la Unidad Popular difirieron en cuanto al papel que dichos organismos debían desempeñar en el proceso político en curso.

En efecto, el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria creyeron entonces visualizar con más claridad cómo debía materializarse la resolución plena del problema del poder que con antelación venían propugnando. Sobre el punto concluyeron en que el Poder Popular debía convertirse en el germen de un nuevo Estado, y constituir un poder paralelo opuesto al Estado burgués, aunque no al Gobierno; y que el enfrentamiento decisivo de clases que preveían debía traducirse en la destrucción del Estado burgués y en la asunción de todo el poder por los cordones industriales y los comandos comunales, convertidos en un nuevo Estado. Se trataba, en fin, de la estrategia del doble poder, que tenía en la Revolución Rusa de 1917 su antecedente más notable, y que difería de la vía institucional impulsada por Salvador Allende, el Partido Comunista y otros sectores de la izquierda.

En ese contexto, a juicio del Partido Socialista, el Gobierno debía usar todas las palancas a su disposición para quitarle a la burguesía sus bases económicas; o sea, debía proceder a expropiar todo lo que pudiera, sin importar si estaba o no considerado en el programa de la Unidad Popular, consiguiendo con ello que la burguesía llegara lo más debilitada posible al enfrentamiento definitivo de clases que resolvería el problema del poder.

El Partido Comunista –junto con Salvador Allende– se opuso a la referida orientación del Partido Socialista (y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Sostuvo que había que respetar rigurosamente el programa que la Unidad Popular ofreciera al país, lo que equivalía a defender la vía institucional. Postuló además que las tomas indiscriminadas y el caos que conllevaban las acciones de la izquierda más radical, lanzaban a amplios sectores sociales en brazos de la oposición, lo que creaba condiciones para el golpe.

Adicionalmente, el Partido Comunista, junto con rechazar la tesis socialista sobre el poder popular como poder paralelo en oposición al Estado burgués, conceptuó a aquel como un conjunto de

organizaciones populares de base que debían apoyar al Gobierno y su vía institucional cerrando el paso al golpe. Con estos supuestos, la política del Partido Comunista se centró en defender al Gobierno, en exigir rectificaciones y respeto al programa, sin dejar de impulsar la movilización popular.

La cuestión estalló con fuerza luego de que el paro de octubre fuera derrotado. Entonces el Partido Socialista, con apoyo del llamado polo revolucionario, se opuso a que el Gobierno devolviera ninguna de las empresas que los trabajadores habían tomado durante el paro, ni aun las que no estaban contempladas en el programa de gobierno para ser pasadas al Área de Propiedad Social, cuestión respecto de la cual, siempre apegados a dicho programa, el presidente Allende y el Partido Comunista discreparon.

Las divergencias posmarzo de 1973

En marzo de 1973 se celebraron comicios parlamentarios en los cuales la izquierda obtuvo casi el 44 % de los votos. Con ello se vieron canceladas las esperanzas de la derecha, la cual había confiado en conquistar los dos tercios en el Congreso que le permitirían deponer legalmente a Salvador Allende. Frustrado este propósito, aquella se replanteó la salida golpista que fallidamente intentara en octubre de 1972.

En tales circunstancias, en marzo de 1973, el Partido Comunista, en el Pleno que entonces celebrara su Comité Central, planteó que el objetivo principal del momento consistía en: «1) aislar y derrotar a los sediciosos, atar las manos a los que buscan la guerra civil»; y «2) asegurar lo que hemos llamado más de alguna vez el desarrollo normal de los acontecimientos, con vistas a generar en las elecciones presidenciales de 1976 un nuevo Gobierno Popular».³ En función de estos objetivos el Partido Comunista levantó la consigna «No a la guerra civil».

Por su parte, al mes siguiente, en abril de 1973, en un Pleno de su Comité Central, el Partido Socialista fijó su propia posición frente a la coyuntura, la que fue del todo distinta a la definida por

³ «Informe al Pleno del Comité Central del PC», *El Siglo*, 29 de marzo de 1973, p. 6.

el Partido Comunista. En efecto, las resoluciones que entonces dicho Pleno adoptó postularon la necesidad de «avanzar sin vacilaciones a la conquista del poder y la construcción del socialismo». En esa perspectiva, el Pleno señaló que era indispensable combatir por igual tanto a la derecha como a la Democracia Cristiana demostrándole al pueblo «que el reformismo burgués abre camino y le sirve de alero al fascismo». Del mismo modo, en el evento se resolvió continuar apoyando la formación de un poder popular alternativo a la «institucionalidad burguesa» y quitar a la burguesía el control de la economía, la que debía ir quedando en manos de dicho poder. El Pleno afirmó: «Se trata [de] que la próxima batalla política por la conquista del poder se dé imponiendo el control de la dirección efectiva de la clase obrera sobre la economía nacional».⁴

En resumen, mientras el Partido Comunista buscaba generar una correlación de fuerzas que impidiera el golpe y la guerra civil, consolidara el orden institucional y los cambios ya hechos por el Gobierno, todo con vistas a las elecciones presidenciales de 1976 donde aspiraba a conquistar un nuevo gobierno popular que continuara las transformaciones iniciadas por Salvador Allende, el Partido Socialista seguía pensando en la resolución plena del problema del poder a través de un Poder Popular alternativo a la institucionalidad burguesa, en función de lo cual propugnaba que el Gobierno quitara a la burguesía su base económica. Las posiciones de ambos partidos se hallaban, pues, en la antípoda.

Durante las semanas siguientes, en el contexto de una deteriorada situación económica expresada sobre todo en el desabastecimiento, la oposición unida inició una decidida ofensiva que apuntaba al golpe. Como sabemos, en esa ofensiva los gremios patronales y profesionales desempeñaron un papel fundamental. Frente a ello, la Unidad Popular, lejos de dar una respuesta cohesionada, nuevamente profundizó sus diferencias. En ese escenario el Partido Comunista apoyó las iniciativas de Salvador Allende encaminadas a abrir un nuevo diálogo con el Partido Demócrata Cristiano, sobre todo luego del Tanquetazo del 29 de junio, en tanto que el Partido Socialista continuó oponiéndose a ello.

Durante las semanas siguientes al Tanquetazo, esto es, a lo largo del mes de junio, en la medida en que la situación se hacía aún más

⁴ *La Nación*, 5 de abril de 1973, p. 5.

crítica, en la Unidad Popular siguieron agravándose las diferencias que la cruzaban, lo que pronto se traduciría en su total parálisis ante su incapacidad de llegar a un acuerdo sobre la salida a adoptar frente a la grave crisis que se configuraba, la cual amenazaba con una solución golpista a corto plazo. En función de esta, pronto estallarían los paros gremiales, cuyo centro fue el de los camioneros.

A lo largo de julio, al tiempo que el Partido Comunista seguía apoyando la iniciativa de Salvador Allende en orden a llevar a cabo un nuevo diálogo con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista continuaba oponiéndose a la medida. El 13 de ese mes, la colectividad proclamó públicamente su negativa a tratar con dicho partido afirmando que el único diálogo posible había que realizarlo en la base social. Incluso más, luego el Partido Socialista amenazó con retirarse del Gobierno en caso de que ese diálogo se llevara a cabo.

Las mencionadas diferencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista dificultaban en alto grado la capacidad de maniobra de Salvador Allende. Como sabemos, sin perjuicio de ello, a lo largo de julio, el mandatario continuó intentando una iniciativa destinada a salvaguardar el orden constitucional, mediante la apertura del consabido diálogo con la Democracia Cristiana.

Según se viera en el capítulo anterior, ante la negativa de la cúpula de este partido —desde mayo encabezada por Patricio Aylwin— a todo diálogo, el presidente Allende decidió acudir al cardenal Raúl Silva Henríquez a quien solicitó que intercediera ante la colectividad a fin de que aceptara dialogar para encontrar una salida política a la crisis en curso.

El 19 de julio, ante la solicitud del cardenal Raúl Silva Henríquez, el Partido Demócrata Cristiano, siempre dirigido por su sector conservador, se avino al diálogo que le proponía Salvador Allende. Entre tanto, el 26 de ese mes, cuando el diálogo estaba por comenzar, el Partido Socialista sostuvo que no estaba dispuesto a apoyar conversación alguna con ese partido, por cuanto se encontraría involucrado en los planes reaccionarios para derrocar al Gobierno.

No obstante, el diálogo entre la Democracia Cristiana y el Gobierno se llevó a cabo, aunque, como se señaló en un capítulo anterior, en medio de un generalizado terrorismo impulsado por la extrema derecha, al tiempo que el día previo a su inicio se declaró

la huelga indefinida de los transportistas, a la que se irían sumando otros gremios, todo en la perspectiva del golpe.

Durante el curso del diálogo rápidamente se puso de manifiesto que la Democracia Cristiana había aceptado participar en él con el exclusivo propósito de imponer el «golpe blando». Esto es, la exigencia en orden a que el presidente Allende nombrara un gabinete militar con poderes plenos para remover a todos los funcionarios del Ejecutivo, con lo cual se excluiría a la Unidad Popular del gobierno. Salvador Allende no aceptó la medida, que lo hubiera dejado en la condición de presidente nominal en un gobierno manejado por los militares. El diálogo, por tanto, una vez más, fracasó.

Agosto de 1973

En agosto, ya fracasado el diálogo con el Partido Demócrata Cristiano, el presidente Allende estableció los siguientes objetivos políticos ante la difícil situación que seguía configurándose: 1) quebrar el paro de los transportistas aplicándole la Ley de Seguridad Interior del Estado y designando interventores militares; 2) seguir al mismo tiempo intentando una salida política mediante algún tipo de acuerdo con la oposición Demócrata Cristiana; 3) conjurar el desborde militar y consolidar un mando constitucionalista en las Fuerzas Armadas; 4) en caso de que se produjera un levantamiento militar, llevar a cabo planes antinsurreccionales de manera conjunta con el mando constitucionalista de las Fuerzas Armadas; y 5) respetar irrestrictamente la legalidad y no dar pie a que la oposición usara tal pretexto para embarcar a los militares en un golpe.

A fines de ese mes, sin embargo, sucederían dos acontecimientos decisivos, claramente coordinados provenientes de sectores opositores: primero, el 22 de agosto la oposición unida logró aprobar en el Congreso una declaración que sostenía que el Gobierno se hallaba fuera de la legalidad, bajo cuyo supuesto solicitó a las Fuerzas Armadas que intervinieran para reponerla. Los días anteriores se habían reforzado enormemente las presiones sobre los mandos constitucionalistas, en particular del Ejército, lo que se tradujo en la renuncia a su cargo por parte del general Carlos Prats y de otros generales de su línea, cuestión que el 23 de agosto vino seguida del nombramiento, por el presidente Allende, del general Augusto

Pinochet al mando de la institución. Así, en medio de los paros de los gremios empresariales y profesionales, la insurrección general de la burguesía apoyada por gran parte de las clases medias y la pequeña burguesía –apadrinada y financiada por el imperialismo estadounidense– entraba en su fase final: el golpe se hallaba en tierra derecha.

Pero en la Unidad Popular, y en la izquierda en general, no hubo consenso en cuanto a cómo enfrentarlo. El punto clave de las discrepancias seguía situándose en torno a la cuestión de la búsqueda de un eventual acuerdo con la Democracia Cristiana para abrir así paso a una salida política a la crisis. Los dos partidos ejes del conglomerado de gobierno continuaron frontalmente divididos en lo relacionado con este problema.

A fines de agosto, el Partido Comunista insistió en la necesidad de implementar el mencionado acuerdo. La colectividad realizó entonces un Pleno de su Comité Central. El Informe, leído por Jorge Insunza, se titulaba «Ganar la mayoría para derrotar al golpe e impedir la guerra civil». En él se postuló la necesidad de un viraje político de la Unidad Popular, el cual debía consistir en pasar hacia «una política que se oriente a la conquista sólida de la mayoría y al cambio de la correlación de fuerza a favor del proceso revolucionario». Según el Informe, en Chile había mayoría en contra del golpe de Estado y la guerra civil, así como también en favor de los cambios revolucionarios y por un desarrollo democrático del país». ⁵ El problema radicaba en que esa mayoría no se expresaba y estaba dispersa. De allí que concluyera en que se requería lograr que ella se manifestara y uniera «en torno a la clase obrera». Según el Informe, la dificultad principal que obstaculizaba dicho propósito seguía siendo las «deformaciones en la línea de la Unidad Popular», las que se deberían a «la presencia de tendencias extremistas del revolucionarismo pequeño burgués, [y] el ultra izquierdismo, factor que objetivamente había ayudado a los reaccionarios». ⁶ En base a este diagnóstico, el Informe insistió en la necesidad de un urgente diálogo con la Democracia Cristiana, tanto en la base social como en el nivel de las direcciones partidarias.

⁵ *El Siglo*, 30 de agosto de 1973, p. 5.

⁶ *Ídem*.

El Partido Radical coincidía con tales planteamientos. En un documento publicado a comienzos de septiembre, este partido, luego de valorar la gestión del presidente Allende, sostuvo que, no obstante, existían errores que habían «colocado innecesariamente a sectores importantes de la población en contra del gobierno de la Unidad Popular». Entre ellos, dijo, destacaban «el sectarismo político, la indisciplina laboral, [y] la ineficiencia funcionaria [...]».⁷ Lo central para el documento del Partido Radical era «consolidar para avanzar», cuestión plenamente coherente con la búsqueda de un acuerdo político con la oposición.

Por su parte, el Partido Socialista, durante agosto, insistió irreductiblemente en sus tesis, más aún cuando Salvador Allende, con el apoyo del Partido Comunista y otros sectores de la Unidad Popular, trataba de replantear el diálogo con la Democracia Cristiana.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fuera de la Unidad Popular, y el MAPU (de Garretón), dentro de esta, se encontraban en una posición similar; es decir, se oponían a una salida política que implicara un diálogo con la oposición de centro. Reflejo de ello era la consigna, entonces adoptada por el MAPU (de Garretón), que llamaba «A ganar la guerra civil», consigna que procedió a pintar en las paredes de todo Chile.

Tomic y Fuentealba: la posición del sector democrático del Partido Demócrata Cristiano

La búsqueda de un consenso político mínimo con el Partido Demócrata Cristiano postulado por Salvador Allende no dejó de interpelar a ciertos sectores democráticos de este partido, los que igualmente se hallaban empeñados en impedir una ruptura institucional. En este contexto, el 30 de agosto el diario *El Siglo* publicó un artículo de Radomiro Tomic titulado «A qué obligan las rectificaciones». En él, Tomic postuló que quedaba muy poco tiempo para que se pudiera concretar un acuerdo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana, y que para hacerlo posible había que concordar entre ambas partes ciertas rectificaciones. La primera consistía en que el presidente de la República debía reconocer «que en una democracia

⁷ *El Mercurio*, 5 de septiembre de 1973, p. 18.

como la chilena, no puede la minoría imponer sus puntos de vista a la mayoría, mediante resquicios legales, hechos consumados, ilegalidades más o menos encubiertas o medidas meramente administrativas. Que para gobernar en asuntos de importancia, el Gobierno necesitaba transformarse en mayoría institucional [...]», lo cual implicaba llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana. Pero, de otra parte, agregó Tomic, «para que dicha exigencia tenga fundamento ético y sentido político es indispensable que el Congreso, a su vez, reconozca la obligación de no negar al gobierno los medios para gobernar. Y de no exigirle que contradiga lo esencial del programa con que fue elegido por el pueblo chileno».⁸

Por su parte, Renán Fuentealba, preocupado por el curso que estaban tomando los acontecimientos, además de ser partidario de un acuerdo político que evitara el derrumbe institucional, había declarado con alarma que en Chile estaban actuando distintos organismos extranjeros que querían precipitar el golpe.

En la Democracia Cristiana, por tanto, existía un sector sensible a los planteamientos de Salvador Allende, sector que desde sus propias especificidades propiciaba una salida política que no implicara el quiebre del orden institucional. En todo caso, no era el punto de vista del sector conservador que dominaba el partido, nucleado en torno a Eduardo Frei y Patricio Aylwin.

La salida plebiscitaria de Salvador Allende

En capítulos precedentes hemos visto que dentro del cuadro de diferencias descrito, Salvador Allende llegó a la conclusión de que la única salida que quedaba para evitar el golpe consistía en la convocatoria a un plebiscito. El mandatario consideró que a través de este proceder el conflicto nacional se reconfiguraría, excluyéndose las soluciones militares que deseaban los sectores extremos. Entre fines de agosto y comienzos de septiembre, el presidente, con carácter urgente, hizo esta propuesta al Comité Político de la Unidad Popular. Allí postuló que la iniciativa política propuesta

⁸ Radomiro Tomic: «A qué obligan las rectificaciones», *El Siglo*, 30 de agosto de 1973, p. 3.

debía adelantarse al golpe y que, por lo tanto, tenía que ser adoptada con rapidez.

Durante la primera semana de septiembre, el Comité Político de la Unidad Popular estuvo discutiendo a diario sobre el punto. Entonces, en torno a la propuesta plebiscitaria del mandatario se verificó su último debate antes de ser derrocada.

Orlando Millas en sus memorias relata que el Presidente pensaba que el plebiscito debería plantearse en términos «que podrían ser hecho suyos por una serie de personalidades del mundo universitario muy cercanas a Frei y que seguramente lo consultarían antes de asumir cualquier compromiso. Las negociaciones para implementar esta salida serían hechas precisamente a través de tales personalidades».⁹

La propuesta formal de Allende al Comité Político de la Unidad Popular sobre la convocatoria a un plebiscito no dio lugar a consenso en el conglomerado de gobierno. El Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU Obrero Campesino y la Acción Popular Independiente (API) estuvieron de acuerdo en ella. El Partido Socialista, el MAPU de Garretón y la Izquierda Cristiana se manifestaron en contra.

La última crisis

El 8 de septiembre se reunieron nuevamente los representantes de los partidos de la Unidad Popular, pero el *impasse* se produjo una vez más. El Partido Socialista estaba en la posición más dura, representado por Adonis Sepúlveda y Erich Schnake. Este, siempre opuesto a la idea de convocar a un plebiscito, argumentó que, según sus datos, la situación no era tan desfavorable en el Ejército, pero que aun «en caso de golpe vendría sin duda un contragolpe para afirmar al gobierno y avanzar más resueltamente en la aplicación de su programa».¹⁰

La reunión se levantó sin que se llegara a acuerdo alguno. Ninguna resolución pudo ser tomada, por cuanto el reglamento

⁹ Orlando Millas: «Memorias», en suplemento de *La Época*, 11 de septiembre de 1994, p. 10.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 11.

que regía al conglomerado de gobierno estipulaba que para ello se requería la unanimidad. Por tal razón, la propuesta plebiscitaria de Salvador Allende debió ser considerada formalmente como no aceptada. Así, la crisis de la Unidad Popular se hizo total, lo que acentuó su parálisis, que ya venía desde tiempo atrás.

El Mercurio del 9 de septiembre, al referirse a esa reunión, sostuvo que ella terminó «sin pronunciamiento alguno y los asistentes en su mayoría se retiraron alterados».¹¹ Y el diario *La Prensa*, con el título «Desesperada búsqueda de una salida», señaló: «una desorientación total, próxima al caos, evidenció ayer la llamada Unidad Popular al no llegar a ningún acuerdo respecto de los temas básicos: el plebiscito y la reapertura del diálogo con la Democracia Cristiana o, simplemente, la renuncia».¹²

El domingo 9, a la mañana siguiente del fracaso de la referida reunión del Comité Político de la Unidad Popular, ante la parálisis del conglomerado de gobierno, varios miembros de la Comisión Política del Partido Comunista se reunieron con Salvador Allende con el fin de impulsar un curso político determinado. Allí, según las memorias de Orlando Millas, participante en el encuentro, esta colectividad «argumentó apasionadamente [para que] el Presidente no demorase el llamado a plebiscito, aunque el Partido Socialista discrepase».¹³ La propuesta, por cierto, pone en evidencia que de hecho la Unidad Popular ya estaba totalmente quebrada.

Durante la misma mañana, a la misma hora en que Salvador Allende y la Comisión Política del Partido Comunista estaban reunidos en La Moneda, en el Teatro Caupolicán se efectuaba un acto masivo organizado por el Partido Socialista, donde el secretario general del Partido, Carlos Altamirano, daba cuenta de las conclusiones a las que había llegado el Pleno del Comité Central de la colectividad, el cual había terminado el día anterior, sábado 8.

La principal cuestión abordada por el Pleno se refirió a cómo enfrentar el golpe que se avecinaba y qué actitud adoptar en esa

¹¹ *El Mercurio*, 9 de septiembre de 1973, citado por Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 381.

¹² «Desesperada búsqueda de una salida», *La Prensa*, 9 de septiembre de 1973, citado por Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 381.

¹³ Orlando Millas: «Memorias», suplemento de *La Época*, 11 de septiembre 330 de 1994, p. 12.

coyuntura. Sobre el punto el evento reiteró la persistente negativa de la colectividad a una solución dialogada con la Democracia Cristiana, enfatizando sus tesis sobre la necesidad de sostener el gobierno en «el apoyo de las masas».

Dando cuenta de esto último, Carlos Altamirano, en su discurso del Estadio Caupolicán, señaló: «[...] el golpe reaccionario se aplasta con la fuerza de los trabajadores, con las organizaciones de nuestros obreros, con los comandos comunales, con los cordones industriales». Y agregó: «el Partido Socialista ha dicho que no puede haber diálogo con quienes están llevando el caos económico a la patria [...]». «Reconocemos que existen sectores democráticos en la DC, pero no son mayoría. El Partido Socialista piensa que la derecha puede ser aplastada sólo con la fuerza incontenible del pueblo unido, oficiales y suboficiales leales». Chile, añadió, se transformará «en un Vietnam heroico, si la reacción pretende enseñorearse en el país». ¹⁴ En ese contexto, el secretario general del Partido Socialista reconoció que había tenido reuniones con marineros antigolpistas que perseguían denunciar las conspiraciones que la oficialidad de la institución estaba llevando a cabo.

En resumen, la posición del Partido Socialista, expresada por Carlos Altamirano en el Estadio Chile, consistía finalmente en que, renunciando a todo diálogo con la Democracia Cristiana —y a toda salida plebiscitaria en acuerdo con esta—, no había salida política al golpe en marcha, frente a lo cual solo cabía prepararse para un triunfo en el terreno de las armas apoyándose «en las masas» y en un sector de las Fuerzas Armadas. Es decir, se trataba de una salida totalmente opuesta a la que intentaba implementar Salvador Allende, el Partido Comunista y otros sectores de la Unidad Popular. La señalada era, en fin, la opción que el Partido Socialista había venido defendiendo durante las semanas previas al interior del conglomerado de gobierno.

Salvador Allende, en medio de la reunión que estaba sosteniendo con la Comisión Política del Partido Comunista, fue interrumpido telefónicamente e informado sobre las afirmaciones que en ese mismo momento Carlos Altamirano estaba haciendo en su discurso del Estadio Chile, en particular en lo referente a los

¹⁴ *La Nación*, 10 de septiembre de 1973, citado por Luis Corvalán Marquez: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, ed. cit., p. 367.

contactos que había tenido con miembros de la marinería. Abru-
mado, el mandatario, según Orlando Millas, concluyó en que «eran
demasiadas las fuerzas que desde distintos ángulos optaban por la
solución violenta». No obstante, según el mismo relato de Orlando
Millas, el Partido Comunista le habría planteado al mandatario que
«la solución plebiscitaria, civil, política, también tenía detrás
grandes fuerzas, la mayoría de los partidos de la Unidad Popular,
los sectores democráticos de los otros partidos políticos, el sector
constitucionalista de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, una
parte de la masonería [...]», por lo que «se requería anunciar de
inmediato [la] solución [plebiscitaria] hablando por televisión y ra-
dio, lo cual podría inclinar en este sentido a la directiva demócrata
cristiana»,¹⁵ de hecho, embarcada en el golpe en su modalidad
blanda. Para Salvador Allende era complejo tomar una resolución
que contrariaba a su propio partido. Sin embargo, ante la gravedad
de las circunstancias finalmente se decidió a hacerlo. De tal modo,
el discurso en que el presidente anunciaría una salida política a
través de una fórmula plebiscitaria quedó fijado para el martes 11.
En todo caso, la resolución de Salvador Allende supuso un re-
conocimiento implícito del quiebre de la Unidad Popular, precisa-
mente por cuanto la salida que él había ideado debía operar ante
la ausencia de un acuerdo formal del Comité Político de aquella
y por sobre la abierta oposición de su sector más radicalizado. Y
esta falta de acuerdo sobre una cuestión tan urgente y decisiva
evidenciaba que el bloque de partidos de gobierno, al menos como
frente con capacidad de dirección política, prácticamente había
dejado de existir.

El martes 11, cuarenta y ocho horas después, vino el golpe. Pero
«la fuerza incontenible del pueblo unido, oficiales y suboficiales
leales», a la que se refiriera Carlos Altamirano en su discurso del
Estadio Caupolicán, no apareció por ninguna parte. Tampoco se
pudo realizar el llamamiento a plebiscito del presidente Allende,
pues los militares, enterados de la medida, se le adelantaron con
el fin de impedirla.

Las tropas que asaltan La Moneda dan muerte al presidente Allende

A primera hora del martes 11 de septiembre, enterado de los aprestos del golpe, Salvador Allende, dispuesto a resistir, se instaló en La Moneda a las 7:30 de la mañana. A las 9:20 hizo su último discurso a través de Radio Magallanes, única emisora todavía no silenciada por los militares. En la parte final de su alocución, dijo:

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.¹⁶

En tanto, a través del general Badiola, el mando golpista se comunicaba telefónicamente con el mandatario. «Rendición incondicional [exigió Badiola] y que el presidente fuera a hablar con Pinochet al Ministerio de Defensa». Allende, luego de enterarse del mensaje, instruyó a su secretario, Osvaldo Puccio, quien lo había recibido, sobre los términos de la respuesta. Puccio al teléfono le dijo al general: «el presidente me encargó transmitir lo siguiente: “Un presidente de Chile no se rinde. Y recibe en La Moneda. Si Pinochet quiere que vaya al Ministerio de Defensa, que no sea maricón y que venga a buscarme personalmente”».¹⁷

Ante la negativa de rendición, el comando golpista ordenó el bombardeo de La Moneda, el que fue seguido por un asalto en regla de la infantería apoyada por tanques. Allende, armado con una metralleta, en todo momento dirigió la defensa de la sede de

¹⁶ «El último discurso de Salvador Allende (1973)», *Salvador Allende*, <www.salvador-allende.cl/discursos/ultimo>.

¹⁷ Osvaldo Puccio: *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado*, ed. cit., p. 288.

Gobierno. Pese a la enorme disparidad de fuerzas, los uniformados —encabezados por el general Javier Palacios— no fueron capaces de quebrar la resistencia de ese puñado de hombres, sino hasta las dos de la tarde. Solo un poco antes de esta hora lograron ingresar al recinto. Ya dentro de él, ametrallaron al presidente Allende, que se defendía, dándole muerte. Recién entonces se pudo constituir la Junta de Gobierno presidida por el general Pinochet.

El general Javier Palacios, que comandó el asalto a La Moneda, en 1974 relató a Jorge Araya Gómez, de profesión editor de libros —de quien fuera amigo desde la infancia—, las incidencias de la muerte de Allende. El hijo de Araya, a quien este último dio detallada cuenta del mencionado relato, lo reprodujo en los siguientes términos, transcritos por Luis Ravanal y Francisco Marín en su libro *Allende, yo no me rendiré. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio*:

Palacios ingresó por la puerta de Morandé 80 con soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban las escalas personas que estaban con Allende y a las cuales [este] les había pedido que abandonaran el palacio de gobierno. Los militares comenzaron a tirar a la gente hacia abajo por las escaleras mientras que ellos subían. El ambiente era un infierno ya que La Moneda ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacios fue recibido por ráfagas de metralleta de Allende y algunos de sus hombres que estaban en el salón Rojo. En ese momento, Palacios grita a los miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) que se rindieran y fue Allende que responde gritando: «isoy el presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme conchatumadre!». Inmediatamente, los GAP y Allende comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano derecha a Palacios.

Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan disparando contra los miembros del GAP y estos van cayendo por las balas de los militares, mientras Palacios es asistido por Fernández Larios, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. Entretanto, seguía la balacera más adentro, ya que los GAP iban replegándose. Dos militares que

iban disparando hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases: el civil se plegó y cayó al suelo. Palacios comienza con sus hombres a ver quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos y le llamó la atención el civil que portaba un reloj fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al presidente Allende y fue en ese momento que Palacios saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a su cabeza. A todo esto, eran las 14:00 horas.¹⁸

En otro relato, el general Palacios, en referencia a Salvador Allende, dice que «hasta el último momento él disparaba contra nosotros».¹⁹ Luego de que el Presidente muriera «todos los oficiales, en un rito de casta, dispararon sobre [su] cuerpo. Por último, un oficial le destrozó la cara con la culata del fusil».²⁰ Seguidamente, los militares trasladaron el cuerpo destrozado del Presidente desde el lugar de su muerte al salón de intendencia y comenzaron, por instrucciones superiores, a implementar el montaje sobre su supuesto suicidio, versión que se ha impuesto siendo incluso avalada por los tribunales de Justicia.²¹

Según la investigación que llevaron a cabo Luis Ravanal y Francisco Marín, existe solo una foto del cadáver de Salvador Allende destrozado por los militares. Fue la que, con autorización de los uniformados, sacó Juan Enrique Lira, de *El Mercurio*. El cadáver del Presidente «estaba tan desfigurado, que a la señora Hortensia

¹⁸ Luis Ravanal y Francisco Marín: *Allende, yo no me rendiré. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio*, Ed. Ceibo, Santiago, 2013, pp. 140-141.

¹⁹ Citado por Luis Ravanal y Francisco Marín en *ibídem*, p. 93.

²⁰ *Ibídem*, p. 142.

²¹ Ravanal y Marín, en su libro *Allende, yo no me rendiré...*, ofrecen numerosos antecedentes que muestran las irregularidades del proceso judicial que concluyó declarando que Allende se había suicidado. Entre esas irregularidades se cuenta su negativa a llamar a declarar a Jorge Araya, con su testimonio sobre el reconocimiento que hiciera el general Palacios de haber sido el autor de la muerte de Salvador Allende. Véase la obra citada.

Allende, su esposa, le mostraron el cuerpo en el ataúd, pero no permitieron que le descubriera la cara».²²

De este modo, a la vez trágico y épico, la izquierda en su conjunto, en medio de su profunda división, una vez más fue derrotada. Pero esta vez los costos serían inmensos pues había llegado la hora de los crímenes masivos que estaban implícitos en la ideología de la derecha, civil y militar, toda o casi toda, convertida al nacionalismo.

²² Luis Ravanal y Francisco Marín: *Allende, yo no me rendiré. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio*, ed. cit., p. 14.

CAPÍTULO 16

Liderazgo genocida, maquinaria de destrucción y *continuum* de destrucción¹

La civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor dondequiera que los esclavos y los parias de este orden osen rebelarse contra sus señores. En tales momentos, esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley.

Carlos Marx: «La guerra civil en Francia», en C. Marx y F. Engel: *Obras escogidas*, Ed. Progreso, Moscú, s. f., p. 313.

El golpe del 11 de septiembre hizo caer todos los mitos conservadores que pretendían hacer creer que Chile era una excepción en América Latina, mitos que conceptuaban al país como civilista, tolerante, institucional, respetuoso de la ley y democrático, donde las dictaduras no tenían lugar, constituyendo por lo mismo un ejemplo reconocido y supuestamente admirado en el mundo entero.

En contraposición a esa mitología —que recientemente Felipe Portales, entre otros, ha refutado con lujo de detalles—,² una de las cosas más importantes que se puso de manifiesto con el golpe del 11 de septiembre, y con su subsiguiente dictadura, fue que la clase dominante acepta el régimen demoliberal solo en la medida en que sirve a su dominación, y que en el caso de que esta, a través de ese mismo régimen, sea puesta en peligro, no duda en destruirlo para instalar en su lugar dictaduras más o menos abiertas.

Con razón, en este sentido, el historiador Juan Carlos Gómez sostiene que los límites de la democracia liberal están constituidos

¹ Algunos puntos de este capítulo tienen su primera versión en mi libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Ed. América en Movimiento, Santiago, 2018.

² Véase Felipe Portales: *Los mitos de la democracia chilena*, ed. cit.

por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales. Cuando esos límites son traspasados, si no antes, las clases propietarias no dudan en acudir a la violencia.

Por otra parte, el golpe del 11 de septiembre reveló el ideologismo antidemocrático de las Fuerzas Armadas, coincidente con el de la extrema derecha. A este respecto hay que subrayar que, desde el punto de vista ideológico, la dictadura cívico militar instaurada en septiembre de 1973 hizo suyas todas las definiciones antiliberales y antisocialistas propias del nacionalismo y del corporativismo local. De allí que, en esa coyuntura histórica, la dictadura se convirtiera en la heredera de la larga y extensa tradición antidemocrática chilena –descrita en capítulos anteriores– de la cual, en todo caso, los uniformados tempranamente habían sido parte activa, según se viera.

Ese ideologismo de los militares, resultante de su profesionalización en manos de instructores prusianos, el que después se viera reforzado por la influencia estadounidense –primero con su doctrina sobre la defensa hemisférica y luego con la Doctrina de la Seguridad Nacional–, se caracterizaba por oponer a la nación, concebida como sumo bien, la existencia de un mal absoluto de origen extranjero (el marxismo, los subversivos, etc.), el cual se infiltraría en aquella a los efectos de destruirla; mal que se incubaría dentro del régimen demoliberal, al que habría que erradicar y destruir definitivamente si no se deseaba que la nación fuera aniquilada. Estos supuestos ideológicos –que por lo demás provenían de paradigmas desarrollados en Europa³– legitimaron, a partir del 11 de septiembre, una práctica de asesinatos masivos desde el Estado, cuya expresión principal, pero no única, fueron los detenidos desaparecidos.

Liderazgo genocida, maquinaria de destrucción y continuum de destrucción

Como viéramos en el capítulo 2, Ervin Staub, en su libro *The Roots of Evil*, demuestra empíricamente que los crímenes masivos desde

³ Sobre este punto, véase, Luis Corvalán Marquez: *Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo xx en Chile*, Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago, 2009.

el Estado, aparte de sus prerequisites ideológicos y culturales, suponen la conformación de un «liderazgo genocida» que accede al poder, desde donde genera una «maquinaria de destrucción», la que, a su vez, da lugar a un *continuum* de destrucción, es decir, a los crímenes masivos propiamente dichos. Estos crímenes, afirma Staub, solo pueden ser detenidos en sus comienzos, mediante una fuerte reacción de lo que denomina como los *bystanders*, los que estarían compuestos por aquel segmento de la sociedad que no participa de los crímenes, ni los apoya, ni son tampoco parte de las víctimas. Si la reacción de los *bystanders* no se produce –y con la suficiente energía–, los crímenes masivos, dice Staub, presentes sus otros factores, se despliegan a plenitud, y se vuelven indetenibles. Todo indica que fue precisamente eso lo que ocurrió en Chile a partir de septiembre de 1973.

El liderazgo genocida

En el caso chileno, el liderazgo genocida accedió al poder el 11 de septiembre de 1973, y fue encarnado esencialmente por la Junta de Gobierno y otras cúpulas. Ese liderazgo profesaba la ideología dicotómica a la que repetidamente nos hemos referido.

Existen planteamientos paradigmáticos provenientes del mencionado liderazgo que de entrada permiten percibir la fuerte relación existente entre sus concepciones y los crímenes masivos verificados entre 1973 y 1989. Entre muchos otros planteamientos emanados de él, podríamos seleccionar tres, que de un modo emblemático trasuntan toda una concepción global fundadora y legitimadora de prácticas de violencia estatal extrema.

Primero: La afirmación de los miembros de la Junta de Gobierno, en particular del general Gustavo Leigh, referente a que las prácticas de violencia de la dictadura militar se orientaban a los propósitos de extirpar definitivamente al «cáncer» que corroía a la nación, el cual, a su juicio, no era otro que el «cáncer marxista».

Segundo: La tesis, propalada por el almirante José Toribio Merino, según la cual quienes profesaran ideas marxistas o militaran en organizaciones guiadas por esta concepción teórica y política no serían verdaderos seres humanos, sino más bien «humanoides».

Tercero: El tipo de réplica que recurrentemente dieron los militares –desde ya el general Pinochet– a las críticas levantadas en los organismos internacionales y entre los gobiernos de los países occidentales ante los crímenes masivos llevados a cabo por la dictadura cívico militar en Chile. Pinochet sostuvo al respecto: «sólo una amarga experiencia reciente, que estuvo a punto de conducirnos a una guerra civil, nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir a un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo».⁴ Esto sería lo que no comprenderían las democracias occidentales, débiles e inermes ante el comunismo internacional –es decir, frente a sus propios «cánceres marxistas»–. Dichas democracias marcharían a su disolución, precisamente debido a que no adoptaban el rumbo represivo de la dictadura chilena. Desde tal óptica, mesiánicamente, esta pasó a considerarse como una reserva de Occidente, pretendiendo legitimar así los crímenes que impulsaba.

Los referidos planteamientos de la dictadura militar muestran una coherencia notable. En efecto, la metáfora sobre la extirpación del «cáncer marxista» nos dice mucho. Como es sabido, a la larga un organismo no puede coexistir con células cancerígenas. Por lo mismo, estas requieren ser destruidas pues, de lo contrario, matan al organismo en el que se han generado. En este sentido, una analogía en relación con el plano político y social suponía no solo la exclusión, sino también la destrucción de quienes fueran definidos como «cáncer». El mismo general Gustavo Leigh fue explícito al respecto cuando, en conferencia de prensa, el 11 de septiembre en la tarde, dijera: «tenemos la certeza, la seguridad de que la mayoría del pueblo chileno está contra el marxismo, está dispuesto a *extirparlo hasta las últimas consecuencias*».⁵

La destrucción –«hasta las últimas consecuencias»– de la parte de la sociedad que cayera dentro de esta categoría no debería, en segundo término, generar cuestionamientos éticos, como los derivados de eventuales reproches sobre la violación de los derechos humanos, precisamente en razón de que tal sector ca-

⁴ Augusto Pinochet: «Discurso de Chacarillas», 9 de julio de 1977, en <<http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0056797.pdf>>.

⁵ En «Gustavo Leigh, general disidente», citado por Verónica Valdivia: *El golpe después del golpe*, Ed. LOM, Santiago, 2003, p. 170. Las cursivas son mías.

recería de estatus de humanidad por cuanto estaría conformado por «humanoides». Por lo tanto, para ellos los derechos humanos implícitamente no tendrían vigencia.

En cuarto lugar, proceder en consecuencia sería la condición para salvar a la nación, e, incluso, a la «civilización cristiana occidental». Esto es lo que, según la racionalidad subyacente de la ideología del liderazgo genocida, no comprenderían las carcomidas democracias europeas.

Como se ve, con esta lógica, los asesinatos masivos llevados a cabo bajo el liderazgo genocida no son conceptuados por este como crímenes éticamente cuestionables, por cuanto las víctimas, aparte de ser excluidas del campo de lo humano –por lo cual no tendrían derechos de tales–, representarían un peligro para la persistencia de un bien más alto, que sería «la patria», para cuya salvación los crímenes serían realizados.

En fin, parece evidente que si no se toman debidamente en cuenta las mencionadas aseveraciones del liderazgo genocida, entendiéndolas como indicadores de concepciones ideológicas específicas que cabe analizar, se hace difícil dar una explicación de las extremas violencias estatales verificadas entre septiembre de 1973 y el año 1989.

Es necesario subrayar, por otra parte, que los mencionados supuestos ideológicos no solo eran propios de la cúpula superior de la dictadura cívico militar, sino, en medida fundamental, también de sus eslabones subalternos, sobre todo de las Fuerzas Armadas institucionalmente consideradas, cuyas excepciones individuales no hacían sino confirmar la regla; más aún cuando gran parte de esas excepciones pronto fueron excluidas de las filas, cuando no asesinadas.

Un informe emitido por la estación local de la CIA, fechado en octubre de 1973, es muy ilustrativo sobre las tendencias respecto al uso de la violencia que se daban al interior de las Fuerzas Armadas. El informe sostiene que, por entonces, en las instituciones de la defensa era predominante el propósito de eliminar físicamente a una categoría de personas. Sobre el punto, el informe señalaba: «hay dos tendencias en el ejército respecto a cómo debe tratarse a los extremistas [léase, los partidarios de la UP]. Los duros creen que los extremistas o activistas marxistas deben ser ejecutados

sumariamente, en tanto que los blandos piensan que deberían ser juzgados, sentenciados y luego hacer un intento por reeducarlos».⁶ Luego agregaba: «la mayoría de los oficiales jóvenes del ejército apoya la posición dura. La línea dura es apoyada en general entre los oficiales y hombres de la Armada y de la Fuerza Aérea»,⁷ o sea, por las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Una muestra clara de lo anterior es la orden de Seguridad núm. 3, emitida a fines de septiembre de 1973 por el comandante del Regimiento de Montaña No. 9 de Chillán, Juan Guillermo Toro Dávila, a la fecha jefe de la Zona de Estado de Sitio de esa provincia. En esa orden se señalaba: «la actuación de la fuerza pública debe tener como norma general el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: neutralizar definitivamente o *eliminar a elementos extremistas* y desbaratar sus planes. Erradicar para siempre el marxismo». En tal perspectiva la misma orden estatuyó la Oficina de Seguridad Interior de la zona, cuya misión sería «realizar el ciclo informativo a fin de lograr [...] *al más corto plazo un aniquilamiento de los extremistas*».

A esta lógica respondió el Decreto Ley No. 5, emitido por la dictadura el 22 de septiembre de 1973, el cual estipulaba que el estado de sitio declarado junto con la implementación del golpe debía ser entendido como «estado o tiempo de guerra». Como se sabe, toda guerra supone una serie de acciones orientadas a eliminar físicamente a un enemigo, en este caso, a un segmento de la sociedad chilena, demonizado con antelación. Esto fue lo que, con exactitud, la dictadura procedió a hacer. Una de las tantas formas que adoptó el propósito de «aniquilar» a ese segmento del país fue la práctica de desaparecer a los detenidos. Para tales efectos, y para otras modalidades de violencias sobre una categoría de personas, se creó una «maquinaria de destrucción», cuya expresión fundamental fueran los servicios de seguridad.

La maquinaria de destrucción

El liderazgo genocida procedió con rapidez a crear una «máquina de destrucción», la que conformada por los servicios de seguridad

⁶ Archivos Secretos: *Documentos desclasificados de la CIA*, Ed. LOM, Santiago, 1999, p. 52.

⁷ Ídem. Las cursivas son mías.

distaba mucho de mandarse sola. Como lo reconociera el propio general Manuel Contreras, ella era la ejecutora de la voluntad política del liderazgo genocida, o sea, del vértice del Estado, reestructurado como producto del golpe militar.

El tipo de poder –centralizado al extremo– constituido a partir del 11 de septiembre de 1973 no permitía, en realidad, violencia significativa alguna que no tuviera otro origen. Es de sobra conocida la declaración hecha por el general Pinochet en orden a que en el país no se movía ni una sola hoja sin que él lo supiera, conocimiento que no podía excluir los crímenes masivos entonces en curso cometidos por sus subordinados.

Téngase en cuenta sobre el punto que las Fuerzas Armadas asumieron el poder total, mediante la Junta de Gobierno, es decir, tanto el poder ejecutivo, el constituyente, como el legislativo, a la par que procedieron a disolver el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. Luego derogaron la Constitución de 1925. El Poder Judicial y la Contraloría General de la República si bien subsistieron, lo hicieron sin ningún peso real. Sobre todo en razón de que no podían controlar a la Junta en virtud del poder constituyente y legislativo que esta se arrogó, lo que, como lo señala el Informe Rettig, le permitía «alterar a su arbitrio la norma cuyo incumplimiento se le representara».⁸

De tal modo, lo que se conformó a partir del 11 de septiembre fue un poder ilimitado, total y altamente centralizado, sin contrapeso alguno.

Adicionalmente, tal poder, en virtud de que fuera ejercido monopólicamente por las cúpulas de las Fuerzas Armadas, las que le comunicaron su lógica, funcionó a través de una verdadera verticalidad del mando. Esta fusión entre el poder político y las jefaturas de las instituciones armadas tuvo su expresión principal en que el comandante en jefe del Ejército se convirtió primero en presidente de la Junta y luego en jefe del Estado y del Gobierno, y fue revestido luego con el cargo de presidente de la República. La Junta, por su parte, mantuvo siempre el poder legislativo y el constituyente.

⁸ *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, vol. 1, Santiago, febrero de 1991, p. 42.

Precisamente, ese poder centralizado y sin límites creó o reestructuró determinados servicios de seguridad, es decir, la «maquinaria de destrucción». Tales servicios fueron desde su misma gestación órganos suyos, instrumentos privilegiados de su voluntad política, al margen de la cual son inconcebibles. Entre tales servicios figura antes que nada la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada a mediados de 1974 por el Decreto Ley No. 521. Según el Informe Rettig, «formalmente la DINA dependía de la Junta de Gobierno, [aunque] en la práctica respondió solamente ante el presidente de la Junta de Gobierno, más tarde presidencia de la República».⁹ Su financiamiento provenía del presupuesto nacional, aunque sus partidas eran reservadas.

Como órgano de la máxima autoridad del país, la DINA procedió a infiltrar en forma omnímoda a la mayor parte del aparato estatal, y lo convirtió en un instrumento de sus propósitos toda vez que lo consideró necesario. El Informe Rettig así lo constata cuando señala que ella:

[...] contó con mucha colaboración en distintas calidades, de personal que trabajaba en reparticiones y empresas del Estado. Interesaron especialmente a la DINA reparticiones como el Registro Civil y empresas aéreas, de transportes y telecomunicaciones (Lan-Chile; Ferrocarriles; Empresa Naviera del Estado; Compañía de Teléfonos; Entel). Asimismo le interesó contar con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y con funcionarios diplomáticos acreditados en legaciones de Chile en el exterior.¹⁰

La violencia ejercida por la DINA no puede ser atribuida en modo alguno a deslices de sus mandos institucionales librados a su arbitrio personal, tanto por la directa dependencia jerárquica de esta institución respecto de la primera autoridad del país, como por la verticalidad del mando con base en la que el conjunto del aparato estatal funcionó. Por el contrario, tal violencia fue la expresión de la voluntad del vértice del Estado –del liderazgo genocida– y un

⁹ *Ibidem*, p. 452.

¹⁰ *Ibidem*, p. 454.

medio de su política. El general Manuel Contreras, el indiscutido jefe de la DINA, lo reconoció explícitamente así cuando declaró:

[...] siempre cumplí [...] conforme a las órdenes que el Sr. Presidente de la República me daba. Solamente él, como autoridad superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente tenía la orden de que se informara diariamente sobre lo importante que sucedía y al mismo tiempo, como doctrina normal, se le informaba permanentemente sobre el cumplimiento a las órdenes impartidas.

Y añade: «siempre trabajaba subordinado directamente al Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, sin ningún mando intermedio»; «el presidente sabía exactamente lo que hacía o no hacía la DINA y su delegado y director ejecutivo». El general Contreras concluye diciendo: «yo no me mandaba solo y cualquiera misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del Presidente de la República».¹¹

Por otra parte, como a veces se ha dicho, la DINA no era un organismo que actuaba con un espíritu distinto al del conjunto de las diferentes instituciones de la defensa, las que no habrían tenido conocimiento de las violencias extremas que aquella practicaba. Esta tesis no es sostenible a la luz de dos hechos principales. Primero, en la DINA tomaron parte miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, aunque al respecto hubo un claro predominio del Ejército. Segundo, y más importante aún, cada rama de las Fuerzas Armadas generó o adaptó sus propios servicios de Inteligencia a la lógica de la «guerra interna», practicando en virtud de ello la violencia extrema desde el Estado encaminada a destruir a cierta categoría de chilenos. Tales organismos, que dependían directamente de los mandos de cada una de las instituciones de la defensa, se coordinaban entre sí y con la propia DINA, en lo que, según el Informe Rettig, se denominó como «la comunidad de inteligencia».

¹¹ *Transición y democracia. Operativo Cóndor. Terrorismo y genocidio*. Juzgado núm. 5. Audiencia Nacional, Madrid, 1998. Colección de Documentos, Fascic, 1999, p. 230.

Entre los organismos de seguridad de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se pueden mencionar al menos los siguientes. En primer término, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), que después, en 1975, se transformó en Dirección de Inteligencia (DIFA). El Informe Rettig señala que este organismo «dependía del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, aunque con frecuencia informaba y recababa instrucciones directamente de la comandancia en jefe de esta rama». Su constitución obedeció al imperativo de «participar más eficazmente en la neutralización del enemigo interno, particularmente del Partido Comunista». Aún más, «para colaborar con este servicio de inteligencia la FACH contrató civiles, muchos de los cuales habían militado en grupos nacionalistas o de extrema derecha, quienes empezaron a trabajar como agentes, asignándoseles grados».¹²

Figura también el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar), transformado luego en Dirección de Carabineros (Dicar). Ambos organismos dependieron, en su momento, del general director de la institución. Existía también el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Según el Informe Rettig, este solía llevar «a efecto detenciones, usando como centro de detención y torturas el cuartel Almirante Silva Palma de Valparaíso».¹³ Debe mencionarse adicionalmente la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

También existió un llamado Servicio de Inteligencia Regional de Concepción (SIRE), «con oficiales de la Armada y del ejército entre sus mandos». En él participaban adicionalmente miembros de Carabineros e Investigaciones. En el Informe Rettig se sostiene que este organismo «detuvo a personas, las mantuvo en distintos lugares y las torturó, siendo responsable de algunas muertes [...]».¹⁴

Como se planteó arriba, entre estos servicios de seguridad existió una permanente coordinación. Sus directores «se reunían semanalmente, reuniones a las cuales también asistía el director de la DINA».¹⁵ «Una de las formas de colaboración entre estos servicios fue la creación del Comando Conjunto, en el que tuvo participación mayoritaria personal de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza

¹² *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, ed. cit., p. 459.

¹³ *Ibidem*, p. 460.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ *Ibidem*, p. 461.

Aérea. A este comando se le atribuye la desaparición de a los menos 30 personas».¹⁶

En consecuencia, todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, a través de sus servicios de seguridad, estuvieron orgánicamente involucradas en los crímenes masivos de la dictadura, es decir, en el terrorismo de Estado, a cuyos efectos se coordinaban entre sí. Tales servicios estaban conectados en forma directa con los jefes máximos de cada institución de la defensa, quienes integraban la Junta de Gobierno, es decir, de la cúpula del Estado.

Una parte muy significativa de los individuos partícipes de esos organismos fueron entrenados en la Escuela de las Américas por personal estadounidense, lo que equivale a decir que fueron formados técnica y doctrinariamente por el ejército de una potencia extranjera. En un documento titulado *Chilenos notorios graduados en la Escuela de las Américas*, elaborado por Vicky Imerman y Heather Dean, se plantea que «uno de cada siete graduados [en dicha institución] formó parte del cuerpo de torturadores de la DINA».¹⁷ Entre los militares más destacados entrenados en la mencionada escuela figura el general Eduardo Iturriaga Neumann, el teniente Armando Fernández Larios, el mayor Carlos Herrera Jiménez, el general Odlanier Mena, el coronel José Zara, el general Carlos Parera, el teniente coronel Fernando Laureani, etc. Por su parte, el general Manuel Contreras siguió cursos en Fort Belvoir, Virginia.¹⁸

A lo señalado cabe agregar otro hecho. La autoridad civil, particularmente sus estructuras administrativas, desde el Ministerio del Interior hacia abajo –ministros, subsecretarios, etc.–, tenían una vinculación orgánica con los servicios de seguridad, con los cuales cooperaban permanentemente. Al respecto es muy ilustrativa la investigación llevada a cabo por Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona, publicada por Ceibo Ediciones con el nombre de *Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura*.¹⁹

¹⁶ *Ibíd.*, p. 468.

¹⁷ Citado por Patricio Manns: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, Edición Sudamericana, Santiago, 1999, p. 37.

¹⁸ *Ibíd.*, p. 40.

¹⁹ Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona: *Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura*, Ceibo Ediciones, Santiago, 2012.

En el libro se ponen en evidencia empíricamente las relaciones entre las instituciones públicas y la maquinaria de destrucción de la dictadura.

Dado el conjunto de hechos mencionados, es imposible pensar que los crímenes masivos verificados durante la dictadura cívico militar fueran manifestación de excesos individuales. Por el contrario, los datos muestran que las instituciones pertinentes –además del liderazgo genocida– y no individuos aislados fueron las responsables de dichos crímenes. Tampoco calza con los hechos la tesis sobre la supuesta guerra civil larvada proveniente del régimen anterior, puesto que, como se ha señalado reiteradamente, los crímenes masivos se desplegaron a plenitud y por muchos años, mucho tiempo después de que la dictadura había eliminado toda resistencia. Téngase en cuenta que el 18 de septiembre de 1973, el general Pinochet declaraba: «[...] estamos satisfechos. Los cálculos que teníamos eran unos cinco días de lucha [para consumir el golpe]. Se redujeron en cambio a 24 horas. Hago presente que desde Arica a Magallanes todas las ciudades registran absoluta normalidad. Han existido pequeños focos de extremismo, pero estos han sido sofocados de inmediato».²⁰ A esa fecha, sin embargo, los crímenes de la dictadura recién comenzaban. Alcanzarán su clímax en los años siguientes.

En virtud de lo dicho, se puede afirmar que no existió, en realidad, un enemigo en pie contra el cual llevar a cabo una guerra. En su lugar había perseguidos políticos inermes. Con tales hechos calza bien la consideración de dicha violencia como una política deliberada del liderazgo genocida encaminada a ciertos fines, que no eran otros que el exterminio físico de una categoría de chilenos.

La casi ausencia de *bystanders*

La decisión del liderazgo genocida de eliminar físicamente a un segmento del país se vio favorecida por la casi ausencia de *bystanders* con influencia suficiente como para evitar que ese propósito se cumpliera. Esto es, para impedir el despliegue de los crímenes

²⁰ *El Mercurio de Santiago*, 18 de setiembre de 1973, p. 13, citado por Verónica Valdivia: *El golpe después del golpe*, ed. cit., p. 229.

masivos iniciados con el golpe. Solo la Iglesia Católica —a cuya cabeza se hallaba la egregia figura del cardenal Raúl Silva Henríquez—, y la opinión pública internacional, denunciaron y se opusieron a esos crímenes, pero sin una real capacidad para detenerlos.

La Iglesia Católica fue fuertemente constreñida por la dictadura, no obstante lo cual pudo crear la Vicaría de la Solidaridad, que realizó una vasta obra de información, denuncia, apoyo jurídico a las víctimas y recolección de datos. En cuanto al clima adverso formado en contra de la dictadura en el plano externo y en los organismos internacionales, este solo pudo conseguir logros limitados, en parte ante el hecho de que Chile se ubicaba dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, cuyo gobierno había organizado y apoyado el golpe y que pronto, por lo demás, respaldaría la Operación Cóndor en todo el continente.

Quizás el único *bystander* suficientemente poderoso que, sumándose a los dos ya mencionados (la Iglesia Católica y la opinión pública internacional), podría haber detenido con cierto éxito el *continuum* de destrucción antes de que se desplegara a plenitud era el Partido Demócrata Cristiano. Este partido tenía una importantísima presencia en todos los planos de la vida del país, que ninguna otra fuerza política, social o cultural podía emular. Según Radomiro Tomic, la Democracia Cristiana al momento del golpe controlaba «el cuarenta por ciento del Congreso Nacional; el treinta por ciento del electorado nacional; el treinta y dos por ciento de los trabajadores organizados en la CUT; el cuarenta por ciento del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas; diarios, radios, TV, [y] cinco de las ocho universidades del país. La gravitación de una fuerza de tal envergadura tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones».²¹ Es a la luz de estos hechos que se podría pensar que después del golpe el Partido Demócrata Cristiano pudo haber desempeñado el papel de *bystander*. Si la colectividad, desde el mismo 11 de septiembre, hubiera desplegado su vasta influencia cultural, social y política oponiéndose decididamente a los crímenes masivos de la dictadura, es probable que estos se hubieran podido frenar, al menos

²¹ Radomiro Tomic, en dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 50

en medida importante. Pero, como se dijo, la colectividad optó por otra vía, que consistió en apoyar al régimen pinocheteano, al menos hasta 1976.

Los encargos estadounidenses al Partido Demócrata Cristiano pos 11 de septiembre

La referida opción que tomó el Partido Demócrata Cristiano se explica en cierto contexto que es indispensable tener en cuenta. Al respecto cabe señalar que, como viéramos en el capítulo 14, este partido había desempeñado un papel importante en el derrocamiento de Salvador Allende y en el derrumbe institucional del país, cumpliendo así lo que Washington esperaba de él y para lo cual la CIA lo había financiado. Pero lo que para nuestros efectos es más importante, cumplida la señalada función: luego del golpe la vinculación del Partido Demócrata Cristiano con el gobierno de Washington no cesó. Este, mediante las acostumbradas vías subterráneas, no dejó de hacer nuevos encargos a la colectividad. Según Peter Kornbluh, quien analizara detalladamente los documentos desclasificados por los Estados Unidos, esos nuevos encargos fueron: 1) que el partido no se ubicara en la oposición a la dictadura y que se mantuviera en buenos términos con ella; 2) que contribuyera a fortalecer su gestión facilitándole los técnicos calificados de que disponía; 3) que contribuyera a limpiar la imagen de la dictadura en el exterior, y 4) que le ayudara a combatir a los partidos de la Unidad Popular que se hallaban en la clandestinidad.

Como a continuación se verá, la directiva de Patricio Aylwin cumplió rigurosamente con esas demandas. Con ello esperaba que el Partido Demócrata Cristiano no solo se haría imprescindible para la dictadura, sino también que pronto retornaría al poder mediante elecciones que, dentro de un plazo prudente, aquella organizaría.

Detengámonos de modo breve en cada uno de los señalados encargos, cuyo cumplimiento, por cierto, era incompatible con el eventual papel de *bystander* que el Partido Demócrata Cristiano podría haber ejercido luego del golpe, al menos teóricamente.

Encargo número uno: mantenerse en buenos términos con la dictadura

La Democracia Cristiana en ningún momento dudó en apoyar el golpe, el que no hubiera sido posible sin el aporte decisivo que ella diera a la creación de sus premisas políticas y sociales. El jueves 13 de septiembre, la directiva partidaria emitió una declaración en la cual pidió a los más diversos sectores del país su «cooperación patriótica» con el nuevo régimen. Añadió que los militares no buscaron el poder y que la Unidad Popular habría sido la causante de todo. El golpe, agregó, fue la respuesta al «desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis institucional». La declaración afirmó que la Democracia Cristiana había agotado «sus esfuerzos por alcanzar una solución política institucional»,²² léase: el «golpe blando».

Difiriendo con esos planteamientos, durante los días siguientes trece personeros del ala progresista del partido fijaron su punto de vista que rechazaba el golpe y reconocía que el presidente Allende —a cuya figura rindieron tributo— se había esforzado sinceramente por buscar acuerdos que evitaran el derrumbe institucional.

A la semana siguiente del golpe —olvidándose de sus discursos pre 11 de septiembre sobre el respeto al orden constitucional, a la ley y su rechazo a la violencia—, la directiva de Patricio Aylwin reiteró su apoyo a la dictadura, que ya estaba embarcada en crímenes masivos. En declaraciones a la prensa, Aylwin dijo: «creemos que si las FF. AA. han intervenido en el panorama político nacional es por las razones que ellos han manifestado, por la seguridad nacional, por la integridad del país, por la unidad y porvenir de Chile». Respecto de los crímenes masivos llevados a cabo por la dictadura, Aylwin sostuvo que «no era juez para juzgar lo que han hecho». Lamentaba, eso sí, tales violencias, pero las justificó sosteniendo que eran el resultado de un enfrentamiento con «un verdadero ejército paralelo».²³

El 24 de septiembre, la dictadura emitió un decreto clausurando el Congreso Nacional, cuyas dos cámaras estaban presididas por personeros de la Democracia Cristiana. Esta, sin embargo, no

²² *El Mercurio*, 13 de septiembre de 1973, p. 4.

²³ En dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 45.

protestó por ello, ni hizo valer los argumentos que esgrimiera en contra de Salvador Allende sobre el orden legal, constitucional y la democracia. Incluso más, Eduardo Frei, que era presidente del Senado, y Luis Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, ambos demócrata cristianos, avalaron implícitamente la medida, a través de una declaración conjunta en la que subrayaron el gran papel que le había tocado al Congreso en el combate al gobierno de la Unidad Popular;²⁴ o sea, el papel que le había tocado dentro del proceso de desestabilización del orden institucional que desembocó en la dictadura.

Tres días después, el 27 de septiembre, el Partido Demócrata Cristiano emitió otro documento en el que una vez más ratificó su respaldo a la dictadura. En él sostuvo que las Fuerzas Armadas actuaron para «salvar a Chile de una guerra civil o de una tiranía comunista», y que devolverían el poder al pueblo «tan pronto como las circunstancias lo permitan»²⁵ para que este manifieste su voluntad en elección secreta y libre, lo que estaba muy lejos del pensamiento de la dictadura.

El 10 de octubre de 1973, después de realizar muchas gestiones, dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, encabezados por Patricio Aylwin, lograron que la Junta de Gobierno en pleno los recibiera. Durante la reunión, una vez más los dirigentes de la colectividad le manifestaron su total apoyo a la dictadura. El diario *La Segunda*, de Santiago, en su edición del 9 de abril de 1997, publicó el acta íntegra de esa reunión, que transcribimos completa a continuación:

Se recibe a la Directiva del Partido Demócrata Cristiano, cuyo presidente, el señor Aylwin, expone los siguientes aspectos:

- Participación que tienen los partidos políticos democráticos [léase: los que apoyaron el golpe y a la dictadura] en la lucha antimarxista, especialmente el Demócrata Cristiano.
- Reconocimiento a la actitud de la Junta, pero desacuerdo con algunas medidas que se han tomado, tales como la supresión de la autonomía universitaria, disolución de las municipalidades, gran cantidad de presos políticos, etc.

²⁴ La declaración es citada por Cristian Gazmuri: *Eduardo Frei y su época*, ed. cit., p. 856.

²⁵ En dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 47.

- Disposición de los demócratacristianos a cooperar individualmente en la tarea de la Junta.
- Interés por que los partidos políticos democráticos [o sea, los que apoyaban a la dictadura] puedan volver, cuando se normalice la situación, a la faz de la nación sin perder terreno ante los partidos marxistas, que, lamentablemente, pueden incrementar sus fuerzas en la clandestinidad.
- Interpretación del «pronunciamiento militar» del 11 de septiembre como de legítima defensa, ante la actitud de las fuerzas de gobierno armadas ilegalmente.
- Reorganización a que ha sido sometido el partido y cierre de inscripciones.
- Interés en que la Junta de Gobierno tenga éxito, ya que es la única forma de que el país reciba los beneficios que se merece.
- Imposibilidad de que la Democracia Cristiana viva en la clandestinidad como puede hacerlo el Partido Comunista, ya que no está entrenada para ello.

El acta continúa en los siguientes términos:

El Presidente y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno hacen los alcances del caso a las materias expuestas, señalan la responsabilidad que también tiene ese partido en la caótica situación que vive el país, y dejan claramente establecido los verdaderos postulados que los guían, indicando además que la situación en estos momentos está controlada, pero no absolutamente dominada.

El presidente de la Democracia Cristiana finaliza *rogando* que cualquier cargo fundado que exista en contra de algún personaje de ese partido sea puesto en conocimiento de la directiva con el fin de aclararlo convenientemente, ya que están conscientes de que existen intereses creados para hacerlos aparecer en actitudes contrarias a la Junta de Gobierno.

Siendo las 13:30 horas, se levanta la Sesión.²⁶

²⁶ «Acta núm. 19 de la sesión secreta de la Junta de Gobierno celebrada el 10 de octubre de 1973», transcrita en *La Segunda*, Santiago, 9 de abril de 1997, p. 10. Las cursivas son mías.

El 18 de diciembre de 1973, continuando con sus esfuerzos por congraciarse con la dictadura, la directiva del Partido Demócrata Cristiano le envió una carta al general Pinochet. En ella le señaló que el partido estaba dispuesto a «cooperar constructivamente al mejor éxito de la difícil tarea de reconstrucción nacional en que con patriotismo y honestidad está empeñada la Honorable Junta de Gobierno». La carta agregaba: «tenemos derecho a ser creídos cuando hemos dicho que queremos para el actual gobierno el mayor éxito en su dura y difícil tarea [...]. Escribimos esta carta luego de meditar, impulsados únicamente por lo que creemos un deber patriótico de leal cooperación».²⁷

En su esfuerzo por ligarse a la dictadura consiguiendo que esta lo tuviera en cuenta, el Partido Demócrata Cristiano se reunió repetidamente con el general Oscar Bonilla, quien había sido el edecán militar de Frei. Tales reuniones se verificaron el 17 de diciembre de 1973, y el 27 y 28 de enero de 1974. En la reunión del 28 de enero, Aylwin le planteó al general Bonilla lo siguiente: «[...] a ustedes les vienen a soplar todos los días que nosotros queremos que se vayan lo antes posible, que queremos elecciones, porque nosotros estamos seguros [de] que los vamos a sustituir en el poder, porque vamos a ganar y porque lo único que queremos es el ansia de poder [...]. Con todo eso los azuzan en contra de nosotros». E inmediatamente agregó: «[...] nosotros no estamos en eso y queremos que sepan que admitimos que un tiempo de dictadura es necesario, lamentablemente. No nos gusta, pero admitimos que un tiempo de dictadura es necesario, aunque creemos que para que ello sea eficaz no se debe incurrir en excesos».²⁸ Y más adelante añadió: «[...] queremos, por supuesto, que esto sea lo más breve posible, pero comprendemos que demasiado breve no puede ser; que puede durar dos, tres o cinco años, no sé pues creemos que depende de muchos factores, pero que no pase de cinco años».²⁹

²⁷ En dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 54.

²⁸ En dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 5, 1975, p. 50.

²⁹ Ídem.

Encargo número dos: proporcionarle técnicos calificados a la dictadura

El tema de si había que facilitarle o no a la dictadura personal calificado de filiación demócrata cristiana emergió durante el breve debate interno que realizó la colectividad en noviembre de 1973, y que no pudo continuar debido a que los uniformados lo prohibieron en virtud del receso político. Allí Aylwin declaró que aunque la dictadura estaba «atropellando los derechos humanos y siguiendo una política bastante represiva», el Partido Demócrata Cristiano no debía «ser y sentirse enemigo de los militares». Por el contrario, postuló que debía cooperar con ellos, en particular prestándoles una colaboración administrativa, lo cual debía hacerse «en función del papel que, por el bien de Chile, le correspondía al PDC en el futuro».³⁰

Así, pues, en dicha función había que colaborar con la dictadura, aunque esta estuviera «atropellando los derechos humanos». En las condiciones del momento, una de las formas que debía adoptar la mencionada colaboración consistía —siguiendo la solicitud estadounidense— en facilitarle al régimen los técnicos calificados del partido a fin de que se desempeñaran en cargos importantes al interior de él. El único requisito puesto por Aylwin para que esa integración se llevara a cabo radicó en que tales técnicos se integraran a la dictadura a título personal. Y así se hizo.

Entre los miembros del Partido Demócrata Cristiano que asumieron altas responsabilidades funcionarias dentro del régimen figuran los economistas «Álvaro Bardón, José Luis Zavala y Andrés Sanfuentes, quienes se desempeñaron en el Banco Central; mientras que Juan Villarzú lo hizo en la Dirección de Presupuesto, y Carlos Massad y Jorge Cahuas en los ministerios de Economía y Hacienda». A los mencionados hay que agregar a Gonzalo Prieto, «que asumiera como el primer ministro civil de la Junta, en [la cartera de] Justicia»,³¹ y luego William Thayer, en la cartera de Trabajo. Asimismo a Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans, quienes se integraron a la Comisión, presidida por Enrique Ortúzar,

³⁰ En dossier documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 49.

³¹ Cristian Gazmuri: *Eduardo Frei y su época*, ed. cit., p. 862.

encargada de elaborar un anteproyecto constitucional con miras al reemplazo de la Constitución de 1925, que los militares dejaron sin efecto.

Encargo número tres: ayudar a limpiar la imagen de la dictadura en el exterior

El Partido Demócrata Cristiano cumplió el encargo de Washington de ayudar a limpiar la imagen de la dictadura en el exterior con tanta diligencia como los dos anteriores. Al respecto cabe mencionar algunos hechos relevantes. Antes que nada la gira internacional emprendida en octubre de 1973 por varios dirigentes importantes de dicho partido, todos del sector conservador. Entre ellos figuraba Enrique Krauss, Pedro Jesús Rodríguez, Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y otros. Esa gira se autodefinió como parte de una Operación Verdad mediante la cual se explicaría a la opinión pública extranjera –básicamente de América Latina y Europa– las razones justificadas que tuvieron las Fuerzas Armadas para dar el golpe.

El integrante del Comité 40, Jack Kubich, señaló que dicha gira fue financiada por la CIA. (Lo más seguro es que la iniciativa también proviniera de esta). Sobre el punto Kubich afirma que en octubre de 1973 la CIA aprobó «el financiamiento de un viaje a América Latina y Europa de altos dirigentes del PDC para [apoyar] su decisión de respaldar al régimen militar».³² Luego fue el mismo Patricio Aylwin quien se dirigió al exterior con el propósito de justificar el golpe y defender a la dictadura. En primer lugar fue a la República Federal Alemana, donde se reunió con dirigentes de la Unión Cristiano Demócrata de ese país. Por su parte, el diputado Pedro Jesús Rodríguez y Alejandro Silva Bascuñán, este último presidente del Colegio de Abogados –los dos militantes del Partido Demócrata Cristiano–, integraron una delegación de juristas que emprendió una gira, la cual duró treinta y dos días, y abarcó distintos países europeos en un esfuerzo destinado a mejorar «la imagen internacional de la Junta».³³ A su vez, Eduardo Frei Montalva, en octubre

³² Transcrito por *La Tercera*, Santiago, 15 de noviembre de 1973.

³³ Archivo documental de la *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975, p. 49.

de 1973, en una entrevista concedida al diario español *ABC*, llevó a cabo una firme defensa del golpe y de la dictadura. Allí declaró: «los militares han salvado a Chile»; «usted no desea operarse de cáncer, pero llega un momento en que tiene que operarse de cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas».³⁴

Siguiendo la misma línea, el 8 de noviembre de 1973, Frei Montalva envió a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, una larga carta justificando el golpe y apoyando al régimen dictatorial. En ella, postuló las mismas tesis difundidas por la extrema derecha y la dictadura. En efecto, afirmó que «la responsabilidad íntegra» del golpe recaía en la Unidad Popular; que la conducta democrática del gobierno de Allende constituía una mera «máscara» que aquel utilizaba «para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos» que consistían en «instaurar en el país una dictadura totalitaria»; que durante la Unidad Popular «convergió hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda revolucionaria de América Latina», los cuales habrían organizado «un verdadero ejército paralelo» que ocupaba «parte del territorio nacional en que no podían entrar representantes del cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas»; que el Partido Demócrata Cristiano, ante tales circunstancias, «agotó los procedimientos para llegar a un acuerdo»; que la instauración de la dictadura había representado «un golpe grave para el comunismo en el mundo», y, en fin, que el fracaso del régimen pinocheteano «sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida», cuestión que hacía que la gran mayoría de los chilenos quisiera colaborar con él.³⁵

Encargo número cuatro: ayudar a combatir a la izquierda clandestinizada

Ya el 10 de octubre de 1973, en la reunión que la directiva del Partido Demócrata Cristiano sostuvo con la Junta de Gobierno —a la que nos refiriéramos arriba—, aquella le hizo ver a los uniformados su interés por colaborar en la lucha en contra de la

³⁴ Ídem.

³⁵ Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, ed. cit., p. 426.

izquierda, la que con grandes costos humanos había pasado a la clandestinidad. Como vimos, el acta de esa reunión refleja el deseo de la Democracia Cristiana de volver a actuar públicamente para no perder terreno ante los ilegalizados y perseguidos partidos de la Unidad Popular, cuyos dirigentes y militantes la dictadura estaba asesinando.

Pero donde el Partido Demócrata Cristiano argumentó más a fondo su voluntad de participar en la lucha en contra de la persecución izquierda, fue el 29 de enero de 1974, cuando su directiva se reuniera con el general Bonilla. En ella Patricio Aylwin le planteó al exedecán de Frei que el aporte que el Partido Demócrata Cristiano podía hacer a la dictadura era de índole política, el cual consistiría en combatir a la izquierda en la base social, cuestión indispensable, por cuanto la represión pura y simple sería incapaz de derrotar a fuerzas como el Partido Comunista, habituadas a la clandestinidad. Aylwin dijo:

La inactividad absoluta de los partidos democráticos simplemente facilitará la acción clandestina del Partido Comunista y demás grupos marxistas, organizados y preparados para ello. Sin orientación emanada de los dirigentes los militantes y simpatizantes de base de los sectores democráticos especialmente en los ambientes más populares, quedarán a merced de los rumores, concientización sistemática y aún intentos de infiltración de origen marxista.³⁶

Apoyándose en las mencionadas argumentaciones, la directiva de Aylwin pidió al general Bonilla que la Junta reconsiderara la normativa referente al receso político. De este modo el Partido Demócrata Cristiano se jugaba por cumplir con el encargo estadounidense de combatir a la izquierda, al tiempo que velaba por sus propios intereses, consistentes en mantener un protagonismo en las condiciones en curso. Sin embargo, nada logró de parte de la dictadura.

En resumen, el Partido Demócrata Cristiano, dadas las mencionadas orientaciones políticas que siguiera pos 11 de septiembre, e

incluso por su trayectoria anterior, no podía, ni estuvo dispuesto, a desempeñar el papel de *bystander*. Su responsabilidad histórica ante los crímenes de la dictadura es, por tanto, ineludible.

Otro factor a considerar: la dependencia económica del Partido Demócrata Cristiano respecto de los Estados Unidos

Hubo otro factor que alineaba al Partido Demócrata Cristiano –en manos de su sector conservador– con la dictadura y con la política estadounidense, factor que no era compatible con un hipotético papel de *bystander*: su dependencia económica respecto de los Estados Unidos. Al respecto, cabe señalar que luego del 11 de septiembre se produjo un abrupto término del apoyo financiero clandestino que Washington, a través de la CIA, había venido proporcionando por largos años a la colectividad. En relación con este asunto, Peter Kornbluh sostiene que, luego del golpe, el Comité 40 resolvió poner fin a ese apoyo con el argumento de que el gobierno de la Unidad Popular ya había dejado de existir y que Washington deseaba tener las mejores relaciones con la dictadura chilena, para lo cual la permanencia de su respaldo financiero a la Democracia Cristiana podría constituirse en un obstáculo.

Por una parte, este hecho, evidentemente, demuestra cuáles eran los propósitos del financiamiento estadounidense al Partido Demócrata Cristiano; a saber, que la colectividad contribuyera a poner fin al gobierno de Salvador Allende, objetivo ya cumplido. Y, por la otra, de manera indirecta, también demuestra cuáles fueron las razones de fondo que llevaron al fracaso de todos los intentos de Salvador Allende dirigidos a llegar a algún acuerdo con la colectividad, a la cual la CIA financiaba no para que estabilizara un orden constitucional llegando a acuerdos con el gobierno de la Unidad Popular, sino con el fin de desestabilizarlo, rol que, como hemos visto, el Partido Demócrata Cristiano cumplió a plenitud.

La decisión del Comité 40 de poner fin al financiamiento a este partido –decisión que otras agencias estadounidenses no compartieron– tuvo, según Peter Kornbluh, consecuencias un tanto bochornosas, particularmente en virtud de que esa decisión suponía desconocer la deuda que los Estados Unidos tenían con la

colectividad. Tal es precisamente lo que ella hará valer ante el embajador estadounidense en Santiago.

Como se recordará, el 20 de agosto de 1973 la CIA entregó a la oposición un millón de dólares a los efectos de financiar la ofensiva final en contra del gobierno de Salvador Allende. Pero al Partido Demócrata Cristiano entonces se le adelantaron solo trece mil dólares, quedando un saldo pendiente. Esto es lo que, luego del 11 de septiembre, no tuvo en cuenta la resolución del Comité 40 al suprimirle el financiamiento.

Según Peter Kornbluh, el embajador estadounidense en Santiago creía tener autoridad para cancelar ese saldo, aun habiendo caído el gobierno de la Unidad Popular. La estación local de la CIA —dice el mismo Kornbluh— compartía tal criterio, más aún cuando Washington requería seguir contando con el apoyo de la Democracia Cristiana para los cuatro puntos explicados más arriba. De allí la insistencia de la estación local de la CIA ante el Comité 40 al pedir que al Partido Demócrata Cristiano no se le cortara el financiamiento. A los efectos la estación elevó un documento secreto que llevaba como título «Solicitud de (ciento sesenta mil dólares) para el Partido Demócrata Cristiano chileno». El documento pedía ese monto por considerar que con él la colectividad podría pagar su nómina a principios de 1974 e independizarse tras doce largos años de ayuda clandestina por parte de los Estados Unidos.³⁷

No obstante, a comienzos de 1974, el problema todavía no encontraba solución. Kornbluh sostiene que frente a ello, el 18 de abril de ese año, se verificó una reunión entre Eduardo Frei Montalva y el embajador estadounidense en Santiago, donde la cuestión fue abordada.³⁸ En esa reunión Frei presionó al embajador para que los acuerdos de agosto anterior fueran cumplidos y el saldo que se adeudaba al Partido Demócrata Cristiano fuera cancelado. Finalmente, esas presiones surtieron efecto, puesto que luego el embajador insistió sobre el tema ante Washington. En una comunicación que enviara a los Estados Unidos, sostuvo: «entiendo que la propuesta de financiar al PDC por la cantidad de [tachado] para el periodo 1 de julio de 1973 al 31 de marzo de 1974 haya sido rechazada». «Acepto esa decisión pero pido que se reconsidere la

³⁷ Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, ed. cit., p. 146.

³⁸ *Ibíd.*, p. 149.

apreciación para el periodo 1 de julio al 10 de septiembre de 1974. Los registros indican que tenemos una obligación con el PDC por esa cantidad y ellos piensan que nosotros les debemos ese dinero», concluyó el embajador.³⁹ Kornbluh afirma que la mencionada gestión de la embajada de los Estados Unidos en Santiago finalmente permitió destrabar el problema. Así, se resolvió que, puesto que la CIA antes del golpe había prometido ciertos fondos al Partido Demócrata Cristiano y el partido había adquirido compromisos basados en esa promesa, la Agencia efectuaría secretamente un último desembolso, reajustado según la inflación. De este modo la Democracia Cristiana podría cumplir con los compromisos que había contraído entre el 1 de julio y el 10 de septiembre.⁴⁰

Así, producido el golpe, el financiamiento clandestino de la CIA al Partido Demócrata Cristiano se eliminó, para luego ser repuesto, pero solo a los efectos de que se le cancelaran los montos que le habían sido prometidos con anterioridad. La situación expuesta contribuye adicionalmente a explicar el porqué dicho partido, luego del golpe, difícilmente desempeñaría el papel de *bystander*.

Los objetivos particulares del Partido Demócrata Cristiano

¿Qué era lo que perseguía la descrita política que pos 11 de septiembre de 1973 siguiera el Partido Demócrata Cristiano la cual, frente a los Estados Unidos y a la propia dictadura, lindaba con la incondicionalidad? Perseguía una sola cosa: que la colectividad reaccionara al poder, apoyándose precisamente en esas dos fuerzas –Washington y las Fuerzas Armadas–, las que en el país en ese momento eran las decisivas y sin cuyo concurso el mencionado objetivo no era posible. El biógrafo de Eduardo Frei Montalva, Cristian Gazmuri, de algún modo avala esta interpretación cuando se pregunta si, por ejemplo, Eduardo Frei, con su carta a Mariano Rumor, «creía obtener algo de los militares a cambio». Gazmuri se responde: «ciertamente nada inmediato. Pero [Frei] quizás todavía

³⁹ Documentos norteamericanos desclasificados, citados por *La Tercera*, 15 de noviembre de 2000, p. 3.

⁴⁰ Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*, ed. cit., p. 149.

veía la posibilidad de un gobierno militar de transición y relativamente corto. En ese contexto una actitud de defensa de la acción del 11 de septiembre le dejaba abierta las puertas para transformarse en «la figura de un retorno consensuado a la democracia [con apoyo de los Estados Unidos, agregamos de nuestra parte], lo que era su deseo». ⁴¹ Esa era la lógica de la acción del Partido Demócrata Cristiano, al cual Frei, dada sus grandes dotes políticas y carismáticas, manejaba casi a voluntad, apoyado en un grupo de incondicionales. Por tanto, la colectividad, en las condiciones pos 11 de septiembre, no desempeñaría el papel de *bystander*.

El *continuum* de destrucción

No existiendo al interior del país *bystanders* lo suficientemente fuertes, y habiéndose previamente instalado en el poder el liderazgo genocida, el cual, a su vez, creara una máquina de destrucción –los servicios de seguridad–, lo que advino rápidamente fue el *continuum* de destrucción, el cual tuvo diversas facetas, entre las que destacamos las siguientes.

Desaparecimiento forzado de personas⁴²

Se han documentado fehacientemente mil doscientos casos de desaparecimiento forzado de personas por agentes estatales, principalmente por la DINA entre 1974 y 1977, y luego por la Central Nacional de Informaciones (CNI). La escalada de desaparecimientos ocurrió en Chile a partir de mediados de 1974, con la formación de dicho organismo de seguridad; es decir, nueve meses después de que la dictadura militar se había asentado firmemente en el poder y eliminado toda resistencia interna. Más aún, como práctica sistemática el desaparecimiento forzado de personas llegó a su apogeo al mismo tiempo que la dictadura militar comenzaba a implementar su proyecto refundacional de la sociedad chilena, durante la segunda mitad de los años setenta. En consecuencia,

⁴¹ Cristian Gazmuri: *Eduardo Frei y su época*, ed. cit., p. 868.

⁴² Una primera versión de este punto, mucho más reducida, figura en mi libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit.

los desaparecimientos estuvieron vinculados a tal labor refundacional, y no a los conflictos políticos verificados entre 1970 y 1973, los que habían tenido ya su desenlace. Sin dudas, lo señalado reviste una relevancia capital porque evidencia que la práctica de desaparición de personas estuvo ligada al convencimiento de la autoridad en cuanto a que un sector del país no tenía cabida en el nuevo orden, con el que sería incompatible, por lo cual, considerado como enemigo, debía ser erradicado.

Esto último es lo que precisamente reconoce el Informe Rettig, el cual sostiene, por una parte, que «los casos de detenidos desaparecidos del periodo 1974-1977 responden a un patrón de planificación previa y coordinación central»,⁴³ patrón que «revela, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categoría de personas». Esta constatación es la que permite hablar a dicho informe, no de casos aislados, sino de una «política de desaparecimientos».

De otra parte, el Informe Rettig visualiza la racionalización teórica de tales prácticas. Sostiene sobre el punto que bajo la dictadura militar «se llegó a justificar la destrucción de un enemigo interno al que se le atribuye atentar contra los valores superiores y permanentes». «Para la DINA, los partidos definidos como enemigo interno fueron, fundamentalmente, el MIR, el PC y el PS», o sea, la izquierda chilena, a la que se consideró necesario destruir en tanto que, según el ideologismo conservador antiliberal de la dictadura, constituiría un enemigo de la nación. El Informe Rettig concluye: «Del examen del conjunto de casos de detenidos desaparecidos, se desprende que en el empleo de esta práctica hay un doble objetivo: matar y ocultar para destruir un enemigo que hay que exterminar».⁴⁴

La principal forma de hacer desaparecer los cadáveres operó a través de su lanzamiento al mar, donde eran llevados en helicópteros del Ejército. Como se explicó en un capítulo anterior, cada cuerpo era amarrado a un riel metálico con el fin de que, una vez lanzados a las aguas, no flotara. Con esa misma finalidad se les abría el estómago con un corvo. Esta práctica fue descubierta

⁴³ Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, febrero de 1991, p. 449.

⁴⁴ Ibídem, p. 476.

cuando en una playa se encontrara un cadáver de sexo femenino, sin extremidades, y cuyo estómago había sido abierto. Resultó ser la dirigente del Comité Central del Partido Comunista, Marta Ugarte, quien había sido amarrada defectuosamente al riel correspondiente, según lo relatáramos en el capítulo 1.

Una cantidad de cadáveres de detenidos desaparecidos fueron en principio enterrados en minas o en los terrenos de los cuarteles. Sin embargo, como parte de una operación que el general Pinochet denominó como Retiro de Televisores, se los exhumó con el objeto de ser luego lanzados al mar.

Centros de detención, tortura y muerte: el caso de Villa Grimaldi

Junto a la detención y desaparición de personas, los crímenes de la dictadura militar también se materializaron a través de la generalización de la tortura, cuestión que operaba en determinados centros de detención, de los cuales el más conocido es Villa Grimaldi. Este centro constituye un pequeño universo que ilustra el carácter sistemático e institucional que adoptó la práctica del secuestro y la tortura por parte de la DINA. Dado su carácter altamente ilustrativo, nos limitaremos al respecto a transcribir *in extenso* parte de la descripción que de él hace el Informe Rettig.

«Villa Grimaldi fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA». A ella «se llevaba a los prisioneros para sus primeros interrogatorios después de la detención» y «se mantenían lugares y artefactos especialmente dispuestos para las distintas formas de tortura; allí, también, se mantenía a los prisioneros a quienes ya no se torturaba, a veces por largos periodos, a la espera de posibles nuevos interrogatorios o de la decisión sobre su suerte futura [...]».

Los lugares más característicos donde permanecían los detenidos dentro de Villa Grimaldi eran:

—«La Torre». Efectivamente, se trataba de una construcción en forma de torre, que sustentaba un depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70x70 centímetros y unos

dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por lo que era necesario entrar de rodillas. En esta torre también había una sala de torturas. En cada una de estas celdas se mantenían a una o dos personas en un régimen de encierro permanente. En el caso de haber dos detenidos en una celda debían acomodarse de modo muy forzado para permanecer en el lugar y especialmente para dormir. Aparentemente las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado su etapa de interrogatorios intensos. A muchos de los detenidos que permanecieron en La Torre no se los volvió a ver. Por ejemplo, Ariel Mancilla, uno de los principales dirigentes socialistas desapareció, así como muchos otros, luego de ser llevados y torturados allí».

—«Las casas Chile». Estas eran unas construcciones de madera destinadas al aislamiento individual de detenidos, que consistían en secciones verticales similares a clósets donde el detenido debía permanecer de pie, a oscuras, durante varios días.

—Las «Casas Corvi». Eran pequeñas piezas de madera construidas al interior de una pieza mayor. Dentro de cada una de ellas se ubicaba un camarote de dos pisos. Aparentemente era el lugar donde permanecían los detenidos que estaban siendo sometidos al régimen más intenso de interrogatorios y torturas [...].

Durante su permanencia en Villa Grimaldi los detenidos en general no tenían la posibilidad de asearse ni cambiarse de ropa, debían acudir al baño a horas fijas, sin excepciones, la comida era muy mala y absolutamente insuficiente, todo lo cual, además de las torturas, producía deterioros notables en la salud de los detenidos.

Dentro de Villa Grimaldi había habitaciones dispuestas especialmente para la tortura. Unos agentes aplicaban los distintos métodos de tortura; y otros, por lo general oficiales, conducían los interrogatorios, aunque estos últimos también a veces manipulaban los instrumentos de tortura. En algunas ocasiones, durante los interrogatorios, con o sin tortura, un funcionario tomaba nota en una máquina de escribir.

La forma más habitual de tortura era «la parrilla», consistente en un catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido/a para proceder a aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre distintas partes del cuerpo, en especial aquellas más sensibles, como los labios o los genitales, incluso sobre heridas o prótesis metálicas. Una modalidad particularmente cruel de este método consistía en la utilización de un camarote metálico de dos pisos; se colocaba al interrogado en el de abajo y en el de arriba se torturaba a un pariente o amigo suyo, como modo de presionarlo aún más.

Otro método de tortura muy empleado era el de los colgamientos. La víctima era colgada de una barra, ya sea por las muñecas o las rodillas. En ambos casos, al dolor producido por el cuerpo colgado por largo tiempo, se sumaba la aplicación de corriente eléctrica, de golpes, heridas cortantes y vejámenes.

También se aplicó con frecuencia en Villa Grimaldi el método de hundimiento de la cabeza en un recipiente con agua, generalmente sucia, o con otro líquido, manteniéndola sumergida hasta un punto cercano a la asfixia. Similar efecto se conseguía mediante el llamado «submarino seco», que consistía en la colocación de una bolsa plástica en la cabeza de la persona para no permitirle la entrada del aire, también hasta un punto cercano a la asfixia.

Además de los métodos descritos era habitual la tortura y los malos tratos por medio de golpes de todo tipo, desde los muy violentos, con consecuencia de graves lesiones, hasta los múltiples golpes imprevistos dados a una persona con la vista vendada.⁴⁵

Villa Grimaldi mantenía una actividad permanente, prácticamente sin interrupciones. Los equipos operativos entraban y salían del lugar las veinticuatro horas del día, se traía a detenidos en cualquier momento y se torturaba a toda hora [...].⁴⁶

Otros recintos que la DINA utilizaba para los efectos de detención, tortura y muerte eran los de Tejas Verdes, Cuatro Álamos,

⁴⁵ *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, ed. cit., pp. 465 y ss.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 467.

Londres número 38, José Domingo Cañas, La Discoteque –también denominada como La Venda Sexy, dada la abundancia de vejámenes sexuales practicados sobre los prisioneros– y Colonia Dignidad, a los cuales, en fin, hay que agregar, entre otros, el Cuartel de Simón Bolívar.

En este último, uno de los torturadores más importantes era el doctor Osvaldo Pincetti. Su tortura era altamente psicológica. Solía tender a la víctima en una camilla, sobre la que situaba un amplio espejo. A través de este la víctima se veía a sí misma y al piso circundante a la camilla en la que yacía amarrado de espaldas. Luego se le conectaba una sonda al brazo, de donde se le extraía sangre, que luego fluía al piso inundándolo. La víctima, hipnotizada y espantada, podía entonces comprobar que estaba desangrándose, «muriendo de a poco frente a sus propios ojos y escuchando las palabras del doctor, persuadiéndolo de que confesara». Gran parte de la sangre vertida, no obstante, no era la del torturado: se hallaba en una bolsa ubicada bajo la camilla, desde donde fluía, confundiendo con la de la víctima. Se evitaba así que esta muriera desangrada en un corto lapso y no pudiera «confesar», manteniéndosele, en función de esto último, la sensación de que todo el piso de la habitación se hallaba cubierto exclusivamente de su propia sangre.⁴⁷

Otro método de tortura fue el ideado por la mayor Ingrid Olerock. Consistió en amaestrar perros que eran capaces de violar sexualmente tanto mujeres como hombres detenidos. La mencionada oficial puso repetidamente en práctica este procedimiento. En general, los métodos de tortura empleados por los organismos de seguridad de la dictadura cívico militar fueron muy variados y no es este el lugar para describirlos en su integridad.

Gran parte de los encarcelados en Villa Grimaldi desaparecieron. De los reclusos en el Cuartel Simón Bolívar no sobrevivió ninguno. A los fallecidos allí se les quemaba la cara y los dedos con un soplete y luego se los hacía desaparecer. Según testimonios, antes

⁴⁷El relato de esta práctica proviene de un testigo directo, Jorgelino Vergara, quien se desempeñara como mozo de servicio en el Cuartel Simón Bolívar de la DINA. Su testimonio consta en el libro de Javier Rebolledo: *La danza de los cuervos: el mocito y el destino final de los detenidos desaparecidos*, Ceibo Ediciones, Santiago, 2012, p. 123.

se les extraía las tapaduras de oro de la dentadura, en el caso de que las tuvieran.

La proliferación de estos centros de detención, tortura y muerte, y la analogía de sus procedimientos ponen de manifiesto, sin dudas, que se está en presencia no de situaciones excepcionales, sino de políticas de Estado, por cierto, fundamentadas ideológicamente.

Los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar en el exterior: la Operación Cóndor, los asesinatos del general Carlos Prats y Orlando Letelier, y el intento de asesinato de Bernardo Leighton

Los crímenes de la dictadura se verificaron también en el extranjero. Estuvieron a cargo esencialmente del Departamento Exterior de la DINA. El objetivo de este departamento era enfrentar al segmento del «enemigo interno» residente en otros países. Para tales efectos, la DINA desplegó importantes fuerzas operativas en diversas partes del mundo occidental. Según el Informe Rettig, llegó también a controlar a la «red exterior oficial» de Estado: el «Ministerio de Relaciones Exteriores, representaciones diplomáticas, consulados y agregadurías militares».⁴⁸

Con los recursos que disponía, la DINA desarrolló una capacidad operativa extraterritorial importante. Esta fue reforzada mediante cierta cooperación con servicios de seguridad del cono sur de América y organizaciones terroristas de diversos países, especialmente de exiliados cubanos y neofascistas italianos. «La DINA proporcionó, a al menos a algunos de estos grupos, recursos económicos, armas y otras facilidades, así como la posibilidad de refugiarse en Chile. A cambio obtuvo cooperación en algunos atentados criminales cometidos en el exterior y en los planes para cometer otros que no se llegaron a consumir».⁴⁹

Con determinados servicios de seguridad de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la DINA organizó la Operación Cóndor, de la cual la entidad chilena era centro y motor. Según las investigaciones

⁴⁸ *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, ed. cit., p. 456.

⁴⁹ *Ibíd.*, pp. 457-458.

en que se apoya la causa por terrorismo y genocidio llevada en Madrid en contra del general Pinochet por el juez Baltazar Garzón, tal operación consistía en coordinar a los servicios de seguridad de los países mencionados, cuyo objeto era la búsqueda y eliminación de opositores en el exterior. Un equipo ubicaba y vigilaba a la potencial víctima; y un segundo era luego enviado para su eliminación física. En la querrela presentada en Madrid en contra del general Pinochet, se sostiene que las víctimas de la Operación Cóndor, chilenos y extranjeros, alcanzaron un número próximo a las tres mil personas.

Casos paradigmáticos de las operaciones de la DINA en el exterior fueron los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires; de Orlando Letelier y Ronni Moffit en Washington; y el intento fallido de asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, Ana Fresno, en Roma.

En los dos primeros se involucraron de una u otra forma no solo servicios de seguridad, sino también diversas instancias del aparato estatal chileno. Así, al general Prats la cancillería le dilató indefinidamente el otorgamiento de pasaporte. De tal modo evitó que pudiera emigrar desde Buenos Aires a Brasil, cuestión deseada por Prats ante la intensa vigilancia a que era sometido por la DINA en la capital trasandina y a las explícitas amenazas de muerte de que era objeto. De estas amenazas solo el gobierno de Chile tenía conocimiento, precisamente en virtud de que el propio Prats se las había hecho saber con exclusividad y reserva.

En el caso Letelier, los agentes de la DINA enviados a las labores de seguimiento viajaron primero a Paraguay para intentar ingresar desde allí a los Estados Unidos con pasaportes falsos. Al fracasar el intento de obtener esta documentación, la cancillería chilena se la otorgó. El asesinato se consumó finalmente con la colaboración de grupos de terroristas cubanos exiliados.

En el caso Leighton, la DINA actuó con la colaboración de grupos neofascistas italianos. Otros intentos ya planificados de asesinatos en el exterior no pudieron llevarse a cabo solo en su fase final. Tales fueron al menos los de Carlos Altamirano y Volodia Teitelboim.

Ejecuciones sumarias, asesinatos selectivos, disparos indiscriminados a manifestantes y falsos enfrentamientos

Aparte de los desaparecimientos forzados, de los secuestros y la tortura de personas, los crímenes de la dictadura cívico militar verificados entre 1973 y 1989 se manifestaron también en ejecuciones sumarias, asesinatos selectivos y disparos indiscriminados en contra de manifestantes.

El Informe Rettig sostiene que en los meses siguientes al golpe de Estado de 1973 fueron fusiladas 59 personas luego de ser juzgadas por consejos de guerra. En los meses siguientes otras 101, previamente detenidas, encontraron la muerte en manos de militares, quienes alegaron haber aplicado la ley de fuga. En los años posteriores de la dictadura cívico militar, aparte de los desaparecidos, se completaron otros 815 casos de muerte por ejecuciones o por tortura.⁵⁰ Dentro de tales casos destacan ciertos asesinatos selectivos, como el del diplomático español Carmelo Soria, llevado a cabo por la brigada Mulchén de la DINA.

También cabe mencionar la llamada Caravana de la Muerte, encabezada por el general Arellano Star, quien recibiera órdenes del general Pinochet para «agilizar» los juicios a detenidos políticos en provincias y asesinar a cierta cantidad de ellos. En cumplimiento de tal orden, los hombres de Arellano, en distintas ciudades del norte y del sur del país, sacaron de prisión a 72 personas, algunas ya sentenciadas con penas menores, y procedieron a darles muerte, a veces «a pausas».⁵¹ Este último aspecto es detallado por Patricia Verdugo en su libro *Los zarpazos del Puma*. En relación con este punto, Verdugo procedió a entrevistar a un coronel que a la fecha se hallaba en el lugar, cuyo nombre cita en su libro. El militar hace el siguiente relato:

[...] a varios no los mataron con un balazo, sino que los iban matando a pausas. Esto incluso dejó enfermos a algunos de los que presenciaron las ejecuciones. Fue algo tremendo. Un ejemplo tipo: le pegaban un tiro en las piernas a la víctima,

⁵⁰ *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, ed. cit., p. 883.

⁵¹ Véase al respecto, Patricia Verdugo: *Los zarpazos del puma*, Ed. CESOC, Santiago, 1989.

luego otro en el que no le apuntaban al corazón y así iban haciendo pausas antes de terminar de matarlo. Hubo incluso cuchillazos. Armando Fernández Larios –quien estaba en el grupo junto a Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito y Juan Chiminelli– fue particularmente duro en este sentido [...]. «Ahora te toca a ti», decían, y se iban pasando las armas.

Ante la pregunta de la periodista sobre el estado en que «quedaron la víctimas después de la matanza», el coronel respondió:

[...] se nos informó que estaban irreconocibles. Se les disparó a cualquier parte del cuerpo. Muy particularmente se ensañaron con Haroldo Cabrera, a quien al parecer le tenían sangre en el ojo porque era conflictivo. Lo hicieron morir de a poco, sufriendo mucho. La muerte de David Miranda Luna fue heroica. Se negó a que le vendaran la vista. Era un viejo dirigente sindical, un hombre que había sido comunista desde que nació. Cuando le fueron a tapar la vista, él se negó: dijo que lo fusilaran así no más, que tenía la conciencia muy tranquila y que les pesara en sus conciencias de que estaban matando a un hombre inocente.⁵²

También Carlos Huneeus se refiere a estos crímenes. Afirma que sus víctimas fueron brutalmente torturadas y sujetas a atroces agresiones que dejaron sus cuerpos irreconocibles, lo que explica que la mayoría de los cadáveres no pudieran ser entregados a los familiares, y debieran ser enterrados en fosas comunes o en otros lugares.⁵³

Es importante también el caso del dirigente sindical Tucapel Jiménez, degollado y abandonado en la vía pública por los servicios de seguridad a fin de que su muerte sirviera de escarmiento a los opositores. Caso análogo fue el del degollamiento de tres profesionales comunistas: Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, por personal del servicio de Inteligencia de

⁵² *Ibíd.*, pp. 207-209.

⁵³ Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2002, p. 102.

Carabineros. Adicionalmente cabe mencionar el llamado «caso quemados», ocurrido cuando una patrulla militar, durante una protesta nacional, detuviera a dos jóvenes que circulaban por la vía pública –Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri– y procediera luego a rociarlos con bencina y prenderles fuego. Como resultado de ello, Denegri murió, y Carmen Gloria Quintana resultó con graves quemaduras y secuelas de por vida. No menos relevancia tuvo el asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, el periodista Jécar Nehgme y, en fin, la Operación Albania, en la que agentes de la Central Nacional de Informaciones ejecutaran a trece miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) luego de haberlos reducido. Esta última constituyó otra modalidad de violencia extrema de acuerdo a la cual se ultimaba a los prisioneros y luego se aducía que habían muerto en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad.

A partir de 1983 apareció una nueva forma de violencia estatal: la de los baleos indiscriminados a manifestantes por parte de civiles pertenecientes a los servicios de seguridad. El Informe Rettig señala que por esta causa, durante las protestas nacionales, se dio muerte a 141 personas, la mayoría concentradas entre 1983 y 1985.

Agreguemos que Manuel Salazar, en su obra *Las letras del horror*, en dos tomos,⁵⁴ analiza exhaustivamente los crímenes de la dictadura cívico militar. Subraya al respecto la existencia de «brigadas de exterminio» con especialización en los distintos partidos de la ex-Unidad Popular en la clandestinidad. La tarea de dichas brigadas consistía en capturar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a los cuadros de esos partidos para destruirlos.

Salazar en su obra hace un balance de las extremas violencias de la dictadura cívico militar. En él sostiene que tanto la DINA como la CNI –expresiones principales de lo que hemos denominado como «maquinaria de destrucción»– recurrieron «con un poder casi absoluto [...] a los más diversos métodos para mantener vigilada a la población y evitar cualquier intento de disenso o rebelión». En esa labor, dice Salazar, cometieron «acciones ilícitas sistemáticas, en la mayoría de los casos facilitadas por la autoridad política y las fiscalías de la justicia militar». Agrega que:

⁵⁴ Manuel Salazar: *Las letras del horror*, t. I: *La DINA*, Ed. LOM, Santiago, 2011, y t. II: *La CNI*, Ed. LOM, Santiago, 2012.

[...] los agentes de la CNI vigilaron, interfirieron teléfonos y correspondencia, siguieron, infiltraron, amedrentaron, detuvieron, torturaron y asesinaron bajo las órdenes de Pinochet y de los altos mandos de la entidad represora. En muchos casos se prefiguraron pruebas, introduciendo armas o explosivos en los domicilios de los acusados para detenerlos y torturarlos en cuarteles secretos, logrando que firmaran declaraciones impuestas, las cuales eran aceptadas en los procesos seguidos luego en las fiscalías militares.

Salazar agrega que:

[...] la CNI montó escenarios de enfrentamiento que nunca ocurrieron y para ello contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Dinacos, del gobierno militar, y en muchas ocasiones con la complicidad de algunos medios de prensa y televisión. En los denominados «falsos enfrentamientos» fueron asesinados fríamente una cantidad considerable de miembros del MIR.

Y, en fin, Salazar señala:

[...] en la segunda mitad de los años 80, cuando empezó a vislumbrarse el posible término de la dictadura y el retorno a la democracia, algunos de los principales mandos de la CNI acometieron la tarea de lucrar rápidamente antes de que concluyera el régimen militar. En esas faenas no trepidaron en asesinar, en crear financieras informales o incursionar incluso en actividades ilícitas como el tráfico de armas y de drogas.⁵⁵

Hay que señalar, por último, que los crímenes masivos cometidos por la dictadura cívico militar involucraron no solo al liderazgo genocida y a la maquinaria de destrucción, sino también al conjunto de las instituciones del Estado. Eso es lo que demostró la investigación llevada a cabo por Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona, titulada *Asociación ilícita. Los archivos de la dictadura*. El trabajo de ambos investigadores se basa en numerosos archivos

⁵⁵ Manuel Salazar: *Las letras de horror*, t. II: *la CNI*, ed. cit., pp. 280-281.

secretos que el régimen pinocheteano no incineró. Como lo dicen los autores, tales archivos:

[...] confirman que los cuerpos represivos chilenos, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) primero y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), siempre actuaron desde el corazón de la institucionalidad durante la dictadura militar. Sus responsables mantuvieron correspondencia diaria con ministerios y otras reparticiones públicas, como lo prueban los miles de memorandos revisados [y transcritos en la obra]. Los sucesivos jefes de la policía secreta, Manuel Contreras, Odalier Mena, Humberto Gordon y Hugo Salas, actuaron en muchas operaciones de común acuerdo con ministros y otras autoridades superiores, tanto militares como civiles.⁵⁶

En esa interacción y división de papeles, le correspondió desempeñar un papel relevante a Alberto Cardemil, militante de Renovación Nacional y viceministro del Interior de la dictadura hasta sus últimos días.

En la causa por genocidio y terrorismo llevada en Madrid por el juez Baltazar Garzón en contra del general Pinochet, se hace un balance global de distintas manifestaciones de violencia estatal verificadas en Chile entre 1973 y 1989. En ella se dice lo siguiente: «según las estimaciones que se estudian en la causa, más de 300 mil personas son privadas de libertad; más de 100 mil personas son expulsadas o se ven obligadas a exiliarse; las personas muertas y o desaparecidas ascienden a casi cinco mil; más de 50 mil personas son sometidas a tortura. Junto a ello las demás vulneraciones de otros derechos fundamentales, como los de información, educación, salud, etcétera».⁵⁷

De un análisis no exhaustivo de casos emerge, en consecuencia, una conclusión ineludible: entre 1973 y 1989 se produjo la situación más extrema y prolongada de violencia estatal de toda

⁵⁶ Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona: *Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura*, ed. cit., p. 9.

⁵⁷ *Transición y democracia. Operativo Cóndor. Terrorismo y genocidio*. Juzgado núm. 5. Audiencia Nacional, Madrid, España, 1998. Colección de Documentos, Fasic, 1999, p. 3.

la historia de Chile. Esta constatación nos lleva a otra pregunta: ¿Qué hubiera ocurrido con dichas cotas de violencia extrema y crímenes masivos si entre 1973 y 1989 no hubiese existido una persistente y enérgica condena de la comunidad internacional a esas prácticas de la dictadura cívico militar? No cabe duda de que en tal caso las violencias que esta implementó hubiesen alcanzado niveles aún mayores.

Los intelectuales orgánicos del gran capital y el sentido común favorable a los crímenes masivos

Hay que insistir en que los referidos crímenes de la dictadura –que como hemos visto se hallaban intrínsecamente vinculados a la ideología–, no deben ser considerados de exclusiva factura militar, por razones adicionales a las ya señaladas. Entre ellas cabe mencionar el que en los organismos de seguridad participaban civiles provenientes de los partidos de la derecha y de la extrema derecha de la época. En otro plano, empresarios como Ricardo Claro contribuían al financiamiento de los organismos represivos.⁵⁸ A eso súmese que las organizaciones corporativas del empresariado apoyaban incondicionalmente al régimen y que muchas de las grandes empresas de entonces acudían a la DINA para obtener información sobre sus trabajadores. Asimismo, la clase política de derecha y centro derecha «en receso» –cosa que no le impedía aportar sus cuadros técnicos y políticos a la dictadura– no decía nada sobre los crímenes y los avalaba moralmente.

Los crímenes masivos llevados a cabo durante diecisiete años por la dictadura también tienen una factura cívico militar en razón de que luego del golpe contaron con sus intelectuales orgánicos, quienes reforzaban la ideología y la cultura requeridas por dichos crímenes y los justificaban. Muy ilustrativa de esa cultura –entre muchas otras– es una entrevista que después del 11 de septiembre diera Mario Góngora a la revista *Qué Pasa*, en la que señaló: «el marxismo es por excelencia la herejía de nuestra época, en su

⁵⁸ Véase al respecto, Javier Rebolledo: *La danza de los cuervos: el mocito y el destino final de los detenidos desaparecidos*, ed. cit.

médula hay algo terrible, casi sobrehumano, *diabólico* [...]».⁵⁹ Y coherente con esta visión –en realidad maniquea–, en una fecha tan temprana como el 22 de septiembre de 1973, dicha revista, vinculada a los grupos corporativistas y gremialistas, en su editorial afirmaba: «el régimen de la UP ha caído en un final wagneriano [...]. Para abrir una nueva puerta, *era necesario que el país pagara su cuota de sangre*. Ha correspondido abrirla a las Fuerzas Armadas. *Reserva moral de la nación* [...]» [sic].⁶⁰ Por su parte, Gonzalo Vial consideraba que los crímenes de la dictadura eran un recurso ineludible a los fines de recuperar la «unidad nacional».

Pero aún más, esta ideología no solo tenía sus intelectuales orgánicos: también terminó estando presente entre amplios sectores de la gente común que profesaba una cultura antidemocrática expandida durante los años sesenta en adelante, sobre todo entre las clases altas y ciertas clases medias de extrema derecha. ¿Quién no escuchó la frase, «hay que matarlos a todos», que a veces se repite hasta hoy día? Muy decidoras son al respecto las declaraciones que, con fecha 12 de septiembre de 1999, Evelyn Matthei hiciera a *El Mercurio*. Allí, respecto de su medio social, sostuvo lo siguiente: «Al volver de Londres el '74 quedé choqueada. El ambiente generalizado, un año después del 11, era de que ojalá no hubiera un solo marxista en Chile. "Los debieran matar a todos", decían mis amigos».⁶¹ Por su parte, el exparlamentario de Renovación Nacional, Luis Valentín Ferrada, reconoció abiertamente la adhesión que los crímenes masivos de la dictadura cívico militar verificados luego de 1973 habían concitado entre los civiles conservadores. En declaraciones a la prensa señaló al respecto: «también son corresponsables [de dichos crímenes] los que inconscientemente aplaudimos, *cuando sabíamos de las acciones militares en las calles*; y esos amigos que a veces uno encuentra en ciertas comidas y dicen sin más, al pasar: "todo el problema radica en que no se mataron suficientes"». Y concluye Ferrada: «cuando sea la

⁵⁹ Mario Góngora, citado por Renato Cristi y Carlos Ruiz: *El pensamiento conservador en Chile*, Ed. Universitaria, Santiago, 1992, p. 119. Las cursivas son mías.

⁶⁰ Citado en *ibidem*, p. 115. Las cursivas son mías.

⁶¹ Evelyn Matthei, entrevista en el cuerpo de reportajes de *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1999 (<<https://mikelito74.wordpress.com/213/08/02/Matthei>>).

hora de la verdad, quisiera que todos nosotros –me incluyo yo en primer lugar–, *los que desde afuera aplaudíamos y alentábamos para que otros hicieran lo que hicieron*, también reconozcamos nuestra propia cuota, y no miremos para el lado con la hipocresía clásica chilena». ⁶²

En este sentido, las Fuerzas Armadas, profundamente ideologizadas, al compartir las concepciones nacionalistas y corporativistas de la extrema derecha, no fueron más que instrumentos de intereses que yacían en el campo civil tanto nacional como internacional, lo que ciertamente no las exime de las correspondientes responsabilidades históricas.

⁶² *Ercilla*, Santiago, núm. 3.110, p. 13. Las cursivas son mías.

CAPÍTULO 17

Ideología antiliberal y conflicto entre neoliberalismo, corporativismo y nacionalismo al interior de los apoyos a la dictadura

Uno de los aspectos de la dictadura cívico militar que es necesario estudiar –y al cual no se le ha prestado suficiente atención– es el referente a su ideologismo y a la conexión de este con el terrorismo de Estado que el régimen pinocheteano llevó a la práctica durante diecisiete años. No menos relevante es la conexión de ese ideologismo con la creación, por la dictadura, de una «nueva institucionalidad», la que en lo esencial fue ajena a la lógica demoliberal. En el terreno económico cabe destacar el pronto desplazamiento al interior del régimen de las concepciones económicas nacionalistas y corporativistas en beneficio de las neoliberales, cuyos esquemas de una manera radical pasaron a implementarse desde 1975 en adelante. En esas circunstancias, los discursos nacionalistas se mantuvieron por la dictadura solo en el terreno político, a los efectos de generar un orden institucional ajeno al liberalismo, útil a los propósitos de legitimar la exclusión, la represión y la erradicación, incluso física, de las fuerzas políticas y sociales que se le opusieron.

El ideologismo conservador antiliberal del régimen

Como señalamos en el capítulo anterior, la dictadura cívico militar instaurada en septiembre de 1973, desde el punto de vista ideológico –excepto en el plano económico–, hizo suyas todas las

definiciones antiliberales propias del nacionalismo y del corporativismo local. De allí que el régimen se convirtiera en el heredero de la tradición antidemocrática chilena, de la cual los uniformados tempranamente habían sido parte activa. Esa continuidad ideológica quedó del todo de manifiesto a través de la *Declaración de principios del gobierno de Chile*, a cuyo análisis nos abocamos a continuación.

La Declaración de principios del gobierno de Chile, síntesis del ideologismo nacionalista y neotradicionalista

La *Declaración de principios del gobierno de Chile* fue hecha pública el 11 de marzo de 1974.¹ La suscribieron todos los miembros de la Junta Militar, es decir, las autoridades máximas de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, constituidas en el Gobierno del país. En la elaboración del documento le cupo un papel muy relevante a Jaime Guzmán, quien rápidamente se convirtió en el principal ideólogo de la dictadura.

La *Declaración* constituye una síntesis de elementos corporativos y nacionalistas, a la par que con claridad evidencia la impronta del hispanismo y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. La matriz de Juan Vásquez de Mella articula gran parte de sus planteamientos, sobre todo con sus conceptos sobre las soberanías sociales y políticas. De entrada, el texto se refiere a la identidad nacional, a la que define en términos de una «tradición cristiana e hispánica».² A la par procede a rechazar a las sociedades [liberales] europeas, a las cuales acusa de estar sometidas a «un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre», cuestión que se vería agravada «por la exitosa penetración que el marxismo ha[bría] alcanzado» en ellas.³ Al mismo tiempo la *Declaración* se define como profundamente antimarxista.

Luego de estos planteamientos, el documento pasa a exponer su concepción del hombre y de la sociedad. Al respecto, asume a plenitud la visión aristotélica tomista propia del tradicionalismo

¹ Para una versión completa de esta *Declaración*, véase: <http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf>.

² *Declaración de principios del gobierno de Chile*, marzo de 1974, p. 9.

³ *Ibidem*, p. 10.

español. Basándose en la teoría escolástica sobre los entes sustanciales y relacionales, argumenta la superioridad del hombre (ser sustancial) sobre el Estado (ser relacional), de lo cual concluye que este debe estar al servicio de aquel y no a la inversa. El objeto del Estado sería el bien común, pero no concebido a la manera liberal, esto es, no como la sumatoria de los bienes individuales, sino de un modo orgánico.

La *Declaración* sostiene que el bien común, a su vez, exigiría el respeto al principio de subsidiaridad. Este, como es sabido, establece que «ninguna sociedad superior» puede intervenir en actividades que son propias de «las sociedades menores». ⁴ Esto es muy relevante ya que constituye la premisa doctrinal de la no participación del Estado en la economía, como no sea en aquellos ámbitos en los que la empresa privada no está en condiciones de intervenir. En tal sentido este principio, antes que nada, como lo afirma la propia *Declaración*, «supone la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico». ⁵ Estos supuestos serán precisamente los que servirán como cimientos doctrinales a las privatizaciones masivas que luego advendrán.

En dicho contexto se insertan las definiciones nacionalistas del documento. Este hace suyo aquel objetivo que Francisco Encina atribuyera a Diego Portales, consistente en hacer de Chile «una gran nación». El logro de esta meta debía permitirle al país recuperar «el lugar preponderante que los forjadores de la República le dieran en su tiempo dentro del continente». ⁶ La conquista de ese objetivo tendría como prerrequisito «la integración espiritual» ⁷ de la nación; es decir, su unidad ideológica. «Conspiran en contra de esa unidad [sostiene la *Declaración*] las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante». ⁸ Lo dicho, en otras palabras, significa que determinadas ideas, las de izquierda, serían contrarias a los objetivos nacionales, supuesto que justificaría el que se las excluyera, lo que la *Declaración* proclama de manera

⁴ *Ibidem*, p. 17.

⁵ *Ibidem*, p. 18.

⁶ *Ibidem*, p. 22.

⁷ *Ídem*.

⁸ *Ídem*.

explícita. Como puede verse, el documento, respecto a este punto, representa el desiderátum de la ortodoxia nacionalista.

Por otra parte, la meta de convertir a Chile en «una gran nación», viene en el texto asociada a la instauración de un régimen autoritario, en este caso, de «inspiración portaliana», el que se encarnaría en la Junta de Gobierno. A él le sería inherente un proyecto nacional, así como también la capacidad para sancionar «drásticamente todo brote de indisciplina y anarquía»,⁹ concebido como incompatibles con los objetivos nacionales.

La implantación de ese régimen obviamente implicaba que no se restauraría el orden demoliberal existente con anterioridad al 11 de septiembre, es decir, que no se repondría la «institucionalidad quebrantada» en cuyo nombre los uniformados habían derrocado al presidente Allende. Al respecto, la *Declaración* es muy categórica cuando señala: «No se trata de una “tregua” de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron, por acción u omisión, en la virtual destrucción del país».¹⁰

Detrás de estos planteamientos estaba el consabido supuesto nacionalista según el cual el régimen demoliberal traería consigo la decadencia nacional y el advenimiento del marxismo. Sentadas estas premisas, la *Declaración* se refiere «a la larga erosión provocada en nuestro país por muchos años de demagogia», la que culminaría con «la destrucción sistemática que desde 1970 el marxismo acentuara [isolo acentuara!] sobre todos los aspectos de la vida nacional».¹¹

Como es evidente, a través de estas formulaciones, la *Declaración* asume casi de modo explícito la típica tesis conservadora antiliberal que considera que existiría una continuidad entre el liberalismo (identificado por el texto con la «demagogia») y el comunismo, donde el primero abriría paso a la decadencia y prepararía el camino al segundo, el que la acentuaría y materializaría la disolución final.

Desde esos supuestos, ortodoxamente ideológicos, el golpe del 11 de septiembre emerge para la *Declaración* como una res-

⁹ *Declaración de principios del gobierno de Chile*, p. 23.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 29.

¹¹ *Ibíd.*, p. 28.

puesta salvífica de las Fuerzas Armadas orientado a garantizar «la subsistencia de la nacionalidad»,¹² amenazada, tanto por el liberalismo como por el marxismo. En aras de esa misión salvífica, los uniformados habrían asumido «la plenitud del poder político», es decir, un poder sin límite alguno. La tarea histórica a emprender por las Fuerzas Armadas en base a dicho poder ilimitado consistiría en transformar el Estado y en instaurar un régimen político ajeno a la democracia liberal, lo que con posterioridad se denominó como la «nueva institucionalidad».

Dicha institucionalidad sería por definición excluyente. En efecto, la Declaración señala:

No puede permitirse nunca más que, en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspicien la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustenten una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxistas no serán nuevamente admitidos en la vida cívica.

Tales exclusiones eran precisamente las que por decenios había venido propugnando la tradición antidemocrática chilena, cuestión que ahora era formalmente asumida por la dictadura de las Fuerzas Armadas.

La nueva institucionalidad, que reemplazaría a la liberal, es perfilada por la *Declaración de principios* en base a los conceptos de Juan Vásquez de Mella sobre las soberanías sociales y políticas, entendidas como esferas separadas. Dentro de esa lógica, el poder político es definido por la *Declaración* como la «facultad para decidir los asuntos de interés general para la nación».¹³ Dicho poder a la fecha se encarnaría en «el gobierno de las Fuerzas Armadas, las que, una vez instaurada la nueva institucionalidad, debían seguir teniendo un papel relevante en lo político, pero ahora como «encargadas de velar por la Seguridad Nacional, en el

¹² Ídem.

¹³ Ídem.

amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual»;¹⁴ o sea, interviniendo eventualmente en todas las esferas de la vida política y social, sin excepción, tal como lo postulaba la doctrina que, por vía de los Estados Unidos, los uniformados asumieran posrevolución cubana.

En tanto, las soberanías sociales –o el poder social, como lo denomina el documento– serían ejercidas por los gremios o cuerpos intermedios, cuya existencia tendría una larga tradición en el país, remontable «a su origen hispánico».¹⁵ Siguiendo a Vásquez de Mella, la *Declaración* postula que en el ejercicio del poder social los gremios deberían tener un carácter completamente ajeno a la política, e incluso, requerirían adquirir una fuerte connotación técnica. Sería en tal calidad que canalizarían la participación de la comunidad, pero solo «desde [un] ángulo propio y estrictamente funcional»,¹⁶ es decir, solo en lo que a las cuestiones gremiales concierne, al margen de toda intervención en la política la que, como se dijo, sería monopolio de quienes detentan el control del Estado. Dentro de esta lógica, la *Declaración* plantea que a futuro «en la generación y actividad de las directivas gremiales» quedaría «expresamente prohibida toda acción partidista, directa o indirecta».¹⁷

Así, el esquema democrático, donde la cosa pública es materia de debate amplio, quedaba descartado. En su lugar se establecía un poder estatal que, según la teoría (proveniente del tradicionalismo español), solo quedaría limitado por las soberanías sociales, o sea, por la autonomía de los cuerpos intermedios y por los derechos naturales de las personas; límites que, sin embargo, resultan socavados mediante el concepto que profesa la *Declaración* sobre el papel de los militares como encargados de la seguridad nacional «en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual», o sea, con facultad para intervenir en todo, sin excepción.

Por último, la *Declaración de principios* hizo suyos una serie de otros conceptos propios del ideologismo nacionalista y corporativista profesados por la extrema derecha internacional. Desde ya, cabe

¹⁴ *Declaración de principios del gobierno de Chile*, p. 29.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 30.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 32.

¹⁷ *Ibíd.*, p. 30.

mencionar el de «alma nacional». A este respecto, la *Declaración* sostiene que sería desde las «entrañas mismas» de dicha alma que la Junta Militar buscaría la «reoriginación» del país.¹⁸

También es ilustrativa la manera como el documento conceptúa a la nación, a la que, no menos ortodoxamente, define como «un todo homogéneo, histórica, étnica [sic] y culturalmente».¹⁹ Sobre este trasfondo cabe entender la tesis que la *Declaración* enuncia referente a «las ideologías foráneas y a la invasión cultural extranjerizante».²⁰ Tal invasión y tales ideas, según la lógica del documento, no harían sino socavar el alma nacional. Como se ve, todo se presenta muy de acuerdo con la ortodoxia conservadora antiliberal que se desarrollara en Europa desde fines del siglo XVIII en adelante.

Considerando lo dicho se puede afirmar que la *Declaración de principios del gobierno de Chile* —evidenciando la inconfundible impronta ideológica del nacionalismo europeo y del tradicionalismo español, junto a ciertos elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional introducidos en Latinoamérica por los Estados Unidos— representa el desiderátum de la ideología, y constituye una notable síntesis del pensamiento que entonces caracterizaba a la extrema derecha nacionalista y corporativista chilena.

Quizás lo más paradójico de todo resida en que, estando conformada por esa gran variedad de filiaciones ideológicas —que remiten a una larga tradición de pensamiento desarrollada en el Viejo Continente—, la *Declaración* condene a «las ideologías foráneas [...] y la invasión cultural extranjerizante»,²¹ al tiempo que conceptúa a su propio ideologismo como «la expresión genuina del ser de la patria y del alma de su pueblo».²² En este sentido, sus redactores distan mucho de reconocer que a través de la *Declaración* lo que hacían no era sino llevar a cabo una recepción acrítica del pensamiento reaccionario desarrollado en distintos países europeos. De allí que si nos valiéramos de su propio sistema conceptual, tendríamos que decir que la *Declaración* —al igual que el nacionalismo y el corporativismo— representa en sí misma una clara expresión de

¹⁸ *Ibidem*, p. 36.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 22.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

conocidas «ideas foráneas», a la época, por lo demás, en buena parte caídas en desuso.

En plena coherencia con esas concepciones nacionalistas, que, de hecho, profesaba, la Junta Militar –verdadero liderazgo genocida– se empeñó en erradicar, incluso físicamente, a aquel sector del país que su ideología había definido como un factor ajeno a la nación, infiltrado en ella y causante de su decadencia y disolución. Este sector –por decenios demonizado por la tradición antidemocrática chilena– era el que se rotulaba con el término de «marxismo totalitario», mal absoluto al que había que eliminar si se quería hacer posible la sobrevivencia del bien absoluto, es decir, de la nación.

La imposición del neoliberalismo y la desaparición del nacionalismo y del corporativismo

A los pocos años de instaurada la dictadura cívico militar, tanto el nacionalismo como el corporativismo avanzarán hacia su lenta disolución, antes que nada en el plano económico. El nacionalismo se mantuvo solo en el plano político, como dijimos, a los efectos de justificar la exclusión, el autoritarismo y la destrucción física de un sector del país. La otra cara del mencionado desplazamiento del nacionalismo y del corporativismo fue el triunfo del neoliberalismo al interior del régimen, lo que incluyó la conversión neoliberal del gremialismo y de su líder, Jaime Guzmán, lo que vino unido a la desintegración de los grupos nacionalistas, carentes de estructura orgánica y marginados de las esferas de decisión de la dictadura.

La imposición del neoliberalismo al interior de la dictadura se vincula a la temprana incorporación de los economistas de Chicago al régimen, los cuales fueron recomendados por el exoficial de la Armada Roberto Kelly con el apoyo del almirante José Toribio Merino. Kelly tenía amplios contactos con las elites empresariales, en particular con el conglomerado de empresas de Agustín Edwards. Había fundado la Cofradía Náutica del Sur, organización semisecreta en la cual, en torno a los deportes de mar, se reunían algunos de los intereses empresariales más poderosos del país y personeros vinculados a la Armada. Como viéramos en el capítulo 8, a la Cofradía le había correspondido un rol no menor en la preparación del golpe.

Agustín Edwards, por su parte, destacado participante de la entidad, se había caracterizado por otorgar un temprano apoyo a los economistas egresados de la Universidad Católica que, siguiendo las doctrinas neoliberales de Milton Friedman, luego se habían posgraduado en la Universidad de Chicago. A juicio de Edwards y de otros representantes del poder económico, había que implantar el modelo neoliberal en reemplazo del esquema de industrialización sustitutiva. La inserción de los economistas de la Universidad de Chicago en el régimen sería vital en esa perspectiva. En dicho contexto, no fue una mera casualidad que con muchos meses de antelación al golpe dichos economistas tuvieran preparado un completo programa económico alternativo, conocido como «el ladrillo». Su objetivo era ser implementado a la caída de la Unidad Popular. Después de que Kelly los contactara con el almirante José Toribio Merino, esos economistas rápidamente fueron copando los cargos de conducción económica de la dictadura. El propio Pinochet les brindaría su confianza. A fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, su modelo parecía haberse implantado sólidamente en el país, con su correspondiente ola de privatizaciones y la reconstitución de los grupos económicos que los avalaban y de cuyos intereses, en el fondo, eran expresión intelectual y técnica.

Jaime Guzmán se plegaría a esta corriente. Una vez instalada la dictadura militar, más allá de ciertos planteamientos que dejara estampados en la *Declaración de principios del gobierno de Chile*, en ningún momento pretendió que se instaurara en la práctica un régimen propiamente corporativo. Su preocupación fundamental consistió en apoyar a la dictadura y en generar una institucionalidad que posibilitara de una manera estable un régimen autoritario. En el fondo, la fórmula consistía en una combinación de un poder fuerte y excluyente, por un lado, y la soberanía del mercado, por el otro. Aquel sería el garante de la propiedad privada, de la libertad de empresa y de la libertad individual, con la correspondiente exclusión de los sujetos que las pudieran perturbar y levantar proyectos alternativos de tipo «constructivista». En lo doctrinario, tales planteamientos conservadores podían fundamentarse a partir del principio de subsidiaridad, pero, claro está, dejando en un lugar decorativo el tema de los cuerpos intermedios y del poder social, tan propio del gremialismo. Precisamente esa fue la evolución de Jaime

Guzmán a través de la cual transitó hasta llegar al neoliberalismo. También fue el camino que, en dirección a su desaparecimiento o a su conversión en una corriente neoliberal, siguieran los grupos corporativistas.

Desde el punto de vista teórico, tal evolución no deja de ser notable. Como es sabido, el corporativismo se ubica doctrinariamente en las antípodas del neoliberalismo. Los puntos de partida de uno y otro son opuestos. El corporativismo se define por el potenciamiento de los cuerpos intermedios apolíticos en el marco del principio de subsidiaridad. En consecuencia, se basa en premisas de tipo más bien comunitaristas. Por lo mismo, supone una crítica al individualismo liberal al que acusa de disolver dichos cuerpos dentro de un esquema atomista, carente de ética social. El neoliberalismo, en cambio, busca potenciar a los individuos y concibe al Estado como una esfera que debe proteger la libertad de estos, a la que en medida sustancial concibe como libertad (económica) de emprender y de elegir. Desde tal óptica el Estado no debe interferir en la economía, ni tampoco pretender implantar la justicia social, ni construir un orden determinado, pues ello atentaría en contra del llamado «orden espontáneo» o natural, que se encarnaría en el mercado. A diferencia de las concepciones aristotélico-tomistas profesadas por el corporativismo, dentro de este esquema el neoliberalismo considera que los cuerpos intermedios no formarían parte del orden espontáneo, razón por la cual serían contrarios a la libertad individual.

Sin perjuicio de lo dicho, existen puntos de contacto entre el corporativismo y el neoliberalismo. El principal radica en el rechazo que tanto el uno como el otro hacen del llamado «constructivismo»; es decir, del principio proyectual encarnado en la acción del Estado, sea en su versión keynesiana, socialdemócrata o socialista. La Unidad Popular habría sido por antonomasia la encarnación de ese principio, el cual en el país respondía a una tradición que venía al menos de fines de los años veinte, y que el nacionalismo, con su énfasis estatista, también compartía. Los procesos democratizadores desarrollados desde los años treinta en adelante que reflejaban el ascenso de las clases subalternas se basaban en él, tanto como el modelo de industrialización sustitutiva. A la inversa, el pensamiento corporativista y el neoliberal lo rechazan, sea desde

el principio de subsidiaridad o desde el de «orden espontáneo» encarnado en el mercado.

Doctrinariamente, el acercamiento entre el corporativismo y el neoliberalismo se produjo en torno a la crítica al «constructivismo», conceptualizado como antilibertario. Frente a él es que cabía unirse. A juicio de Renato Cristi, en la situación chilena de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, «la necesidad de oponerse al constructivismo democrático explica por qué los gremialistas y los neoliberales desplazaron sus divergencias a un segundo plano hasta que casi desaparecieron. Lo que se logró [fue] un compromiso ideológico en torno a la cuestión del anticonstructivismo».²³ En esa convergencia los gremialistas gradualmente dejaron de lado su visión corporativista deviniendo en neoliberales.

El señalado proceso tenía sus antecedentes. Se manifestó ya en la revista *Portada*, fundada en enero de 1969, la que agrupó a intelectuales nacionalistas provenientes de la línea de Jorge Prat, por un lado; y de la línea corporativista, por el otro, cuyo principal representante fuera Jaime Eyzaguirre. La publicación estuvo dirigida por Gonzalo Vial, proveniente del nacionalismo pratista. Otros de sus miembros originales fueron Ricardo Claro, Cristian Zegers, Joaquín Villarino, Fernando Silva y Hugo Tagle. Su objetivo fue conformar un núcleo intelectual de derecha que debía elaborar y socializar entre las elites dirigentes un ideario antiliberal y antiestructuralista que sirviera de base para implantar en el país otro modelo societal, distinto del modelo sustitutivo y del régimen demoliberal, a los cuales consideraron en crisis, sobre todo ante el ascenso de la izquierda.

En 1970 *Portada* se fusionó con *Polémica Económico Social* la que, con el apoyo de *El Mercurio*, era publicada por una serie de economistas que se habían graduado en la Universidad de Chicago. Entre ellos figuraban Sergio de Castro, Pablo Baraona, Emilio Sanfuentes y Paul Aldunate. El objetivo del grupo era socializar el ideario neoliberal al interior de la derecha a través de la publicación. Tuvieron éxito entre los intelectuales del sector, aunque a plenitud solo una vez que se implantara la dictadura. Tanto fue así que finalmente corporativistas, como Jaime Guzmán y sus gremialistas,

²³ Renato Cristi y Carlos Ruiz: *El pensamiento conservador en Chile*, ed. cit., p. 129.

y nacionalistas, como Gonzalo Vial –director de *Portada*– y muchos otros colaboradores de la revista, terminaron aceptando –como el grueso de los intelectuales de la derecha–, y finalmente haciendo suyos los predicamentos neoliberales.

Una de las coyunturas más decidoras de este proceso se produjo cuando la dictadura le quitó a los Colegios Profesionales la superintendencia sobre sus miembros y la facultad para fijar los aranceles del gremio, y dejó todo ello sujeto a la regulación del mercado. El gremialismo se plegó a esta medida anticorporativista, incluso el mismo Jaime Guzmán aportó las ideas claves para su implementación, lo que evidenció su adhesión práctica a los esquemas de los neoliberales.²⁴

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no fue extraño que en las soterradas luchas producidas en ciertas instancias de la dictadura entre neoliberales y nacionalistas, Jaime Guzmán siempre fuera parte de los primeros.²⁵ Muchos de los economistas neoliberales provenientes de la Universidad Católica y que ocupaban cargos en el régimen, consideraban a Guzmán como su líder natural, lo que los llevaba a definirse como gremialistas. Pero este concepto, lejos de todo integrismo católico y corporativista, adquiría una clara connotación neoliberal.

Crisis y disolución del nacionalismo como corriente políticamente organizada

Por su parte, el nacionalismo o, mejor dicho, quienes no renegaron de él, siempre se mantuvo crítico a la visión neoliberal. En efecto, en una medida considerable, quienes se le mantuvieron fieles no renunciaron a la idea de un Estado intervencionista, proteccionista, fomentador de la producción y de la integración entre las clases, con su correlativo sistema corporativo, todo unido a la exaltación del sentimiento nacional y de su adhesión al líder carismático, cuestiones consideradas por el nacionalismo incompatibles con

²⁴ Sobre la evolución de Jaime Guzmán desde el corporativismo al neoliberalismo, véase a Renato Cristi: *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, Ed. LOM, Santiago, 2000.

²⁵ Sobre la lucha entre nacionalistas y neoliberales bajo Pinochet, véase, entre otros, Verónica Valdivia: *El golpe después del golpe*, Ed. LOM, Santiago, 2003.

la visión materialista e individualista propia de las concepciones neoliberales. Desde esta óptica, el nacionalismo llevó a cabo una fuerte crítica a los Chicago Boys, pero, claro está, se trataba de una crítica proveniente de un nacionalismo que a esas alturas carecía de referentes organizados significativos.

Como se indicó arriba, el receso político que casi al momento mismo de constituirse decretara la dictadura militar había sido incondicionalmente acatado por el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que era la expresión nacionalista más ortodoxa. Por lo mismo, la crítica nacionalista al neoliberalismo resultó siendo inorgánica y proveniente de personeros aislados, o de organizaciones minúsculas sin vinculaciones sociales importantes, como fuera el exgrupo Tacna, parte de cuyos miembros terminarán reagrupándose en Avanzada Nacional bajo la dirección de Sergio Miranda Carrington. También cabe mencionar entre estos al Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, que con Misael Galleguillos logró posesionarse por un tiempo de la Secretaría Nacional de los Gremios.

Quizás se podría decir que la expresión principal de las concepciones nacionalistas vino, a la fecha, de Mario Góngora, quien abordó el tema desde una óptica más bien académica, enraizada en una concepción de la historia de Chile. A esos efectos, en 1981 Góngora escribió su *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. La crítica que hizo en este libro al triunfante neoliberalismo se basó en la tesis según la cual el Estado habría creado a la nación chilena y que esta no podría subsistir sin él, mientras que el neoliberalismo implantado por la dictadura cívico militar representaría una concepción contraria a la idea de Estado. Constituiría una «revolución desde arriba», que habría derivado francamente «en una tendencia anti-estatal».²⁶ Expresión de ello sería la privatización de las universidades, la Ley de Colegios Profesionales, la exclusión que hiciera la Carta de 1980 del principio que establecía que la educación es función preferente del Estado, etcétera. Con ello, concluyó Góngora, «se ha eliminado toda huella de "dirigismo estatal", para hacer así posible que funcione el mercado

²⁶ Mario Góngora: *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, ed. cit., p. 262.

sin distorsiones».²⁷ El resultado de ello habría sido claro: «los ideales nacionalistas y tradicionalistas de la primera hora, de la *Declaración de principios*, han quedado relegados al olvido ante el materialismo económico ambiente»,²⁸ sostuvo.

Incluso más, Góngora afirmó que el neoliberalismo, lejos del espíritu nacional, sería extranjero. «No es un fruto propio de nuestra sociedad, como en Inglaterra, Holanda o los Estados Unidos».²⁹ Agregó que el neoliberalismo en Chile querría «partir de cero», al igual como lo hicieran otras «planificaciones globales», «sin hacerse cargo ni de la idiosincrasia de los pueblos ni de sus tradiciones nacionales o universales»; «la noción misma de tradición parece abolida por la utopía (neoliberal)».³⁰

A través de estos conceptos, Góngora insinuó la típica tesis nacionalista referente al rol disolvente del liberalismo —en este caso del neoliberalismo— respecto de la nación. Las Fuerzas Armadas, «columna vertebral del Estado chileno», y, por tanto, de la nación, habían hecho posible con el golpe del 11 de septiembre «la reanudación de la idea de Estado Nacional»,³¹ negada por el «internacionalismo marxista» representado por el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, añade Góngora, la imposición del neoliberalismo en el seno del régimen militar habría vuelto a poner en peligro la existencia nacional por la vía de la negación de la idea de Estado. Con posterioridad, en medio de una actitud escéptica y desencantada, Góngora se alejaría de la dictadura.

Aparte de este autor, otras voces nacionalistas llevaron adelante la crítica al triunfante neoliberalismo. Así, Gastón Acuña, junto con Pablo Rodríguez, acusó al neoliberalismo de constituir «una corriente frívola [...] absolutamente extraña al carácter de la raza», que habría penetrado «en los estratos conductores de la civilidad oficialista»,³² convirtiéndose en un «pervertidor del auténtico sentido de la Liberación Nacional».³³ Federico Willoughby, por su

²⁷ *Ibidem*, p. 264.

²⁸ *Ibidem*, p. 267.

²⁹ *Ídem*.

³⁰ *Ibidem*, p. 270.

³¹ *Ibidem*, p. 260.

³² Gastón Acuña, Federico Willoughby y Pablo Rodríguez: *¿Qué es el nacionalismo hoy?*, Artimpres, Santiago, 1983, p. 23.

³³ *Ibidem*, p. 24.

parte, planteó que al oponer el capital al trabajo, el neoliberalismo promovía el enfrentamiento de clases, para constituirse, en virtud de ello, en un factor contrario a la unidad nacional.³⁴

Paralelamente, el nacionalismo reivindicó el papel del Estado en la economía. El mismo Willoughby afirmó al respecto que el modelo económico chileno debía «dotar al Estado de poder suficiente para controlar la actividad privada, planificar ordenadamente la inversión de los recursos productivos y entregar a las empresas públicas tareas que, ya sea por incapacidad del sector privado o por su trascendencia estratégica, deben estar en manos del Estado».³⁵ En esta misma línea postuló la empresa integrada, lo cual suponía arbitrar los medios para que los trabajadores tuvieran efectiva participación en las utilidades empresariales «y, finalmente, participación en la propiedad del capital».³⁶

Por último, los sectores nacionalistas, frente a la desintegración atomista incentivada por el neoliberalismo, enfatizaron la necesidad de promover la participación popular a través de los cuerpos intermedios, de «reagrupar a las fuerzas vivas»³⁷ y producir un «retorno de la civilidad al espíritu inspirador del 11 de septiembre»,³⁸ distorsionado por el neoliberalismo.

El proyecto nacionalista, carente de base social y de sustento político orgánico, nunca se llevó a la práctica. Si bien algunos personeros nacionalistas –como Gastón Acuña–, exmiembros del Movimiento Nacional Socialista de González von Marées, Álvaro Puga, Federico Willoughby y Misael Galleguillos –este último miembro del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista– ocuparon ciertos cargos dentro de la dictadura o de sus organismos dependientes, nunca tuvieron en sus manos las palancas decisivas del régimen: Pinochet se las entregó a los neoliberales; es decir, a los representantes teóricos de los intereses de los grandes grupos económicos locales y transnacionales –y no a la pequeña burguesía nacionalista–, con lo que marcó el carácter de clase de su régimen.

³⁴ *Ibíd*em, p. 55.

³⁵ *Ídem*.

³⁶ *Ibíd*em, p. 53.

³⁷ *Ibíd*em, p. 32.

³⁸ *Ibíd*em, p. 30.

El nacionalismo, al interior de la dictadura, no solo fue derrotado en torno a la cuestión del modelo económico a implantar. También lo fue en lo relativo al proyecto político. Esto sucedió a finales de los años setenta a propósito de la institucionalización del régimen, la que, según Jaime Guzmán, debía materializarse a través de la promulgación de una nueva carta fundamental.

Los nacionalistas se manifestaron contrario a dicha perspectiva institucionalizadora, frente a la cual dijeron ser partidarios de mantener el poder de Pinochet sin plazos ni limitaciones jurídicas, sustentando el régimen en el apoyo popular que concitaría un movimiento pinochetista, en un esquema muy cercano al del fascismo, pero fueron derrotados. En el próximo capítulo volveremos sobre el tema. En tanto, el triunfo obtenido en el terreno político por las tesis institucionalizadoras de Jaime Guzmán –las que concitaron el apoyo de Pinochet– se materializó finalmente en la promulgación de la Constitución de 1980.

En resumen, el neoliberalismo, apoyado por los gremialistas, no encontró un contrapeso significativo al interior de la dictadura, a pesar de que su hegemonía pareció tambalearse transitoriamente como resultado de la crisis de 1982. Su triunfo representó la derrota de un nacionalismo que, carente de líderes y de organización, terminaría disolviéndose como fuerza significativa. El gremialismo, en cambio, articulado en torno a la figura emblemática de Jaime Guzmán, emergerá poderoso, aunque desembarazado de su corporativismo, el que a la larga se evidenció como meramente retórico.

CAPÍTULO 18

Lugar de la dictadura cívico militar en la historia de Chile contemporáneo

Las Fuerzas Armadas no decidieron sobre el proyecto: su papel fue instrumental

Distintos autores han hecho ver que al dar el golpe del 11 de septiembre las Fuerzas Armadas no tenían un proyecto propio con el cual reemplazar el de la Unidad Popular.¹ Lo más cercano a ello, sin serlo del todo, era cierta tradición nacionalista y anticomunista que, sobre la base de un desarrollismo que otorgaba un importante papel al Estado, perseguía la instauración de un ejecutivo fuerte y una minimización del papel de los partidos.²

Teniendo a la vista lo señalado, surge la pregunta sobre cómo fue posible, entonces, que luego del golpe la dictadura militar instaurara el proyecto neoliberal que las cúpulas de la oligarquía con antelación hicieran suyo,³ proyecto que era tan lejano a las tradiciones políticas e ideológicas «desarrollistas» y «estatistas» propias de los uniformados, sobre todo del Ejército.

¹ Entre ellos, Alan Ángel: *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1993; Verónica Valdivia: *El golpe después del golpe*, ed. cit., Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2014; y Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, Ed. Grijalbo Mondadori, Santiago, 2001.

² Véase, Verónica Valdivia: *El golpe después del golpe*, ed. cit.

³ Al respecto, véase Gonzalo Cáceres: «El neoliberalismo en Chile: implantación y proyecto, 1956-1980», art. cit.

La respuesta a tal interrogante es simple. Esto fue posible debido a que los uniformados, en virtud de su conformación ideológica anticomunista y a su estrecha vinculación con los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, en último término, ante el ascenso de los sujetos populares con proyecto propio, terminaron siendo instrumentos de la oligarquía plutocrática que hasta 1973 políticamente se expresaba mediante las distintas orgánicas de la derecha. En realidad, fue esa oligarquía la que tomó el poder el 11 de septiembre, con el activo apoyo de otros sectores empresariales, de la mayoría de la pequeña burguesía y de la mesocracia, luego de que, bajo la Unidad Popular, generaran la ingobernabilidad en el país con activa intervención estadounidense. Los militares fueron los órganos de esa oligarquía y de los Estados Unidos, lo que su conformación ideológica normalmente no les permitía, y no les permite, ver. En tal calidad terminaron materializando las aspiraciones fundamentales que llegara a plantearse la cúpula oligárquica, sobre todo desde 1970 en adelante, las cuales podrían resumirse en:

- a) destruir el orden institucional entonces vigente, el que había alcanzado importantes grados de democratización, en virtud de lo cual ella –la oligarquía empresarial– veía limitada la acumulación del capital, al tiempo que no podía seguir controlando el país, menos aún cuando tales instituciones hacían incluso posible el acceso de las clases subalternas al Gobierno;
- b) reemplazar ese orden institucional de carácter demoliberal por otro –una dictadura militar seguida de una «democracia protegida»–, que a la oligarquía le debía permitir imponer su proyecto sin oposición;
- c) destruir política, orgánica, ideológica y físicamente a los sujetos populares portadores de proyectos nacionales anti-capitalistas y antimperialistas; y
- d) todo lo cual, limpiado ya el terreno, debía hacer posible la instauración a plenitud del modelo neoliberal.

Si las cosas fueron así, se concluye que la dictadura no fue tan solo militar, sino esencialmente cívico militar, en la que, incluso más –y en contra de todas las apariencias–, el elemento civil fue el determinante, al cual los uniformados no fueron sino meramente funcionales.

A este respecto, Carlos Huneeus, en su libro *El régimen de Pinochet*, sostiene acertadamente que todo análisis de la dictadura que ponga en el centro a los militares oscurece el protagonismo relevante tenido por los civiles, el cual fue decisivo no solo en el campo económico, sino también en el diseño e instauración de la arquitectura institucional. En efecto, como lo señala Huneeus, los militares fueron acompañados en el poder por decenas de profesionales de alto nivel y por centenares de colaboradores y asesores civiles en múltiples posiciones de autoridad, desde los Chicago Boys hasta los «gremialistas», políticos del Partido Nacional e independientes. Las ideas económicas y políticas provinieron de los civiles; los militares solo aportaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sirvió de pretexto para el empleo de la coerción y para justificar algunos elementos del modelo de *democracia protegida y autoritaria*, como la tutela militar.⁴

Las Fuerzas Armadas nunca han sido un sujeto autónomo, ni menos neutro, menos aún cuando son parte del corazón del Estado, el que, por lo demás, nunca está por sobre las clases. En ese sentido, ellas no pueden tener un proyecto propio e instaurarlo en la sociedad. Si impulsaran algún proyecto, siempre lo harán en vinculación, normalmente subordinada, con algunas de las clases fundamentales. Y tal fue lo que sucedió en Chile. Precisamente por eso es que los uniformados, luego de 1973, no pudieron implementar las concepciones «estatistas» y «desarrollistas» que por razones históricas (en las que aquí no cabe detenerse) profesaran muchos de sus mandos. Dicho de otro modo, la articulación de los uniformados con la oligarquía, esto es, con los principales grupos económicos que habían asumido el neoliberalismo —y con los Estados Unidos—, determinó a qué proyecto societal terminarían siendo funcionales luego del golpe. Por eso fue que, profesando ciertas concepciones «desarrollistas» y «estatistas», no pudieron llevarlas a la práctica, por cuanto estas últimas no formaban parte del proyecto de la clase con la cual los militares subordinadamente se hallaban articulados.

Ahora bien, ¿dónde residía históricamente la mencionada articulación entre los uniformados y la derecha oligárquica? Más allá de que las instituciones armadas son parte fundamental del Estado

⁴ Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, Editorial Sudamericana, segunda edición, Santiago, 2002, p. 59. Las cursivas son mías.

(el que, como dijimos, nunca está por sobre las clases), se podría decir que dicha articulación históricamente se fue reforzando incentivada al menos por tres elementos fundamentales. En primer lugar, en virtud de la temprana definición contraria al movimiento obrero clasista tomada por los militares, lo que, ya desde los comienzos del siglo xx, sino antes, tuvo su expresión práctica en las masacres que llevaran a cabo de trabajadores en huelga, cuya expresión más conocida, entre muchas otras, fuera la de la Escuela de Santa María de Iquique, verificada en 1907. En segundo lugar, esa articulación yacía en las definiciones ideológicas antimarxistas y anticomunistas que los uniformados tomaran de sus instructores extranjeros (prusianos y estadounidenses). Y en tercer lugar, encontraron también su base en la vinculación orgánica que los uniformados llegaron a tener con los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Junta Interamericana de Defensa y los Pactos de Ayuda Militar, todos los cuales convertían a los uniformados en entidades contrarias a los proyectos populares y nacionales autónomos e independientes de los Estados Unidos.

La dictadura cívico militar como expresión de los intereses de los grupos económicos

A partir de las premisas arriba señaladas cabe preguntarse cuáles fueron los conductos a través de los que, luego del 11 de septiembre, la oligarquía plutocrática disciplinó a las Fuerzas Armadas subordinándoles al cumplimiento de sus objetivos y de su proyecto.

Antes de responder a esta interrogante, conviene tener a la vista algunos hechos. En primer lugar recordar el planteamiento que, a través de su Acta de Constitución, el mismo 11 de septiembre hiciera la Junta de Gobierno, en la cual afirmó solemnemente que asumía el mando supremo de la nación «con el patriótico compromiso de restaurar la institucionalidad quebrantada».⁵ Ese mismo día la Junta emitió su Bando núm. 5, el cual, en su número 13, decía

⁵ «Acta de constitución de la Junta de Gobierno», 11 de septiembre de 1973, <http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0020.pdf>.

que las Fuerzas Armadas asumían el poder «por el solo lapso que las circunstancias lo exijan».⁶ De estas formulaciones se deducía que cumplida la supuesta misión de «restaurar la institucionalidad quebrantada», ellas volverían a sus cuarteles.

Como sabemos, nada de eso ocurrió y, por el contrario, con posterioridad Pinochet sostuvo que los militares se mantendrían en el poder sujetos a metas y no a plazos; o sea, indefinidamente. Y, todavía más, en su discurso de Chacarillas, el mismo Pinochet —como antes a su modo lo había hecho la Junta en su *Declaración de principios*—, afirmó que el objetivo de la dictadura, lejos del «patriótico compromiso de restaurar la legalidad quebrantada», consistía en «reemplazar [por una democracia protegida] al Estado liberal clásico», en nombre del cual se había dado el golpe, y al que la derecha, ya a fines de los años sesenta, había renunciado. ¿Cómo explicar semejante cambio, que representaba un giro de ciento ochenta grados?

Al respecto cabe tener en cuenta que el concepto según el cual el golpe habría tenido por objeto «restaurar la institucionalidad quebrantada» obedecía a la lógica contenida en la declaración emitida por el Congreso Nacional el 22 de agosto de 1973, aprobada por la oposición unida. Como sabemos, tal declaración representó a los «miembros de las Fuerzas Armadas y carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república»⁷ que supuestamente se habría verificado durante el gobierno de Salvador Allende, bajo cuyos supuestos se les solicitó a los uniformados, sobre todo a los ministros militares del gobierno de Salvador Allende, que tomaran medidas dirigidas a restaurar ese orden. Fue a tal racionalidad que respondió el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, del 11 de septiembre. Por lo mismo, esta, de manera implícita, dio por hecho que «restaurada la institucionalidad quebrantada» —supuesta finalidad del golpe— los militares retornarían a sus cuarteles.

⁶ «Bando No. 5», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, ed. cit., p. 381.

⁷ Véase el texto completo del acuerdo aprobado por el Congreso el 22 de agosto de 1973 en <https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/13377/1/mj_00061.pdf>.

Pero el punto radica en que esta solemne promesa no respondía a los intereses de largo plazo de los grupos del gran capital, en aras de los cuales en los hechos se había dado el golpe. Tal promesa más bien se adecuaba a la coyuntural retórica de la oposición a Allende, que requería legitimar la destrucción del orden institucional, con el argumento de la legalidad quebrantada, a cuya restauración supuestamente intervendrían los uniformados. Por eso, derrocado el gobierno de la Unidad Popular, cuando esa retórica ya no era necesaria, dado que la realidad había cambiado del todo, la dictadura, a instancia de los ideólogos del gran capital, entre ellos Jaime Guzmán, reconoció que el golpe no tendría como finalidad restaurar dicha institucionalidad, sino, por el contrario, desecharla, para instaurar en su lugar un régimen autoritario y excluyente basado en la represión sistemática de la disidencia. Lo que no se dijo, ni podía ser dicho, claro está, es que ello constituía la única forma de garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y el único medio a través del cual el proyecto de estos podría ser instaurado para llevar a cabo una verdadera refundación del país.

Por tanto, el punto se relacionaba con los intereses de la oligarquía, es decir, de los grandes grupos económicos, los que, en definitiva, usufructuarán del golpe. Tales grupos no podían aceptar el retorno, ni aún a mediano plazo, al orden institucional anterior, ni tampoco la instauración de lo que Jaime Guzmán denominó como una «dicta blanda», por cuanto esto habría dejado intacto el problema: la fuerte presencia de los sujetos populares y sus organizaciones políticas y corporativas, cuya conciencia de clase había madurado significativamente durante el gobierno de la Unidad Popular. En tales circunstancias, una vuelta a la institucionalidad anterior habría implicado para la oligarquía retornar al problema que por años la aquejara y a la imposibilidad de materializar a plenitud su proyecto neoliberal, el cual, dadas las condiciones nacionales, era inviable mediante la vía pacífica. Desde la óptica del gran capital, se requería algo mucho más drástico: destruir física y orgánicamente al movimiento popular para erradicarlo de la faz del país, lo cual no hubiera podido ser cumplido si los militares, en un plazo menor, hubieran restaurado el orden institucional anterior, como solemnementemente prometieran cuando se constituyó la Junta

de Gobierno. Incluso más, el objetivo de destruir al movimiento popular tampoco habría podido ser cumplido mediante una «dicta blanda»: solo podría llevarse a la práctica mediante una dictadura que aplicara el terror y que se extendiera indefinidamente, hasta que, disueltos los sujetos populares, se pusieran las bases de una institucionalidad no demoliberal, entendida como superestructura del modelo económico neoliberal.

Jaime Guzmán se lo advirtió tempranamente y con claridad a la dictadura cuando le señaló en un memorando: el «éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito sería nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta. Transformar la dictadura en «dicta blanda» sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo espera desde las sombras».⁸ Y los intelectuales corporativistas y nacionalistas –luego convertidos al neoliberalismo, antes agrupados en la revista *Portada*– hicieron ver la misma idea cuando, a través de un editorial de la revista *Qué Pasa* –fundada por ellos mismos– plantearon, con fecha 22 de septiembre de 1973, que, luego de la caída la Unidad Popular «para abrir una nueva puerta, era necesario que el país pagara su cuota de sangre». Y agregaba: «ha correspondido abrirla a las Fuerzas Armadas. Reserva moral de la nación» [sic].⁹

Se podrían citar muchas otras evidencias al respecto, todas nos mostrarían lo mismo: los representantes políticos e intelectuales del gran capital –y no solo los militares– pedían sangre, y simultáneamente entendían que la premisa para el cumplimiento de esa demanda consistía en no retornar al derrocado orden demoliberal. Mientras las grandes empresas, a cuyos intereses esos políticos e intelectuales en el fondo representaban, procedían a solicitar a los servicios de seguridad del régimen que vigilaran a sus trabajadores, y, en otros casos, contribuían al financiamiento de la DINA, como sucediera con Ricardo Claro.¹⁰ A ello se pueden agregar

⁸ Citado por Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 87. El documento fue obtenido por Huneeus de la Fundación Jaime Guzmán. Se trata de un memorándum dirigido a la Junta de Gobierno, sin fecha, pero aparentemente escrito a fines de 1973. Las cursivas son mías.

⁹ Citado por Renato Cristi y Carlos Ruiz: *El pensamiento conservador en Chile*, ed. cit., p. 115. Las cursivas son mías.

¹⁰ Para detalles sobre esta cuestión, véase a Javier Rebolledo: *La danza de los cuervos: el mocito y el destino final de los detenidos desaparecidos*, ed. cit.

las venganzas privadas, esto es, aquellas provenientes directamente de las clases patronales. Al respecto, Genaro Arriagada señala que en «el sector rural se produjeron venganzas llevadas a cabo por dueños de fundos con la colaboración de la policía uniformada. En Salamanca, Isla de Maipo, Paine, Mulchén, Laja y otros lugares, decenas de personas acusadas de ser agitadores campesinos o dirigentes sindicales agrarios fueron detenidas por grupos de civiles y policías, y posteriormente ejecutadas».¹¹ ¿Qué era esto si no la unilateral lucha de clases desatada por la parte patronal en contra de los trabajadores, lucha llevada hasta sus últimas consecuencias por los militares, aunque disimulada por la ideología, siempre mediante las consabidas e instrumentales referencias a la patria y a la unidad nacional? Solo un ciego podría dejar de verlo, o un funcionario ideológico de la oligarquía plutocrática.

La importancia de los civiles al interior de la dictadura

Según lo ya señalado, luego del 11 de septiembre no estaba claro aún cuál sería el sentido proyectual del nuevo régimen y sus correspondientes violencias. Frente al punto, las Fuerzas Armadas no tenían, ni podían tener, una respuesta clara. Y fue en relación con esta problemática que la intervención de los intelectuales, los técnicos y los políticos del gran capital, o sea, los gremialistas y los Chicago Boys, resultó relevante. No es menos cierto que dicha intervención no hubiera encontrado el terreno abonado si aún mucho antes del golpe el gran capital, en forma independiente de análogo esfuerzo llevado a cabo por sus partidos —o sea, los de la derecha— no hubiera anudado relaciones informales con las Fuerzas Armadas orientadas en contra de las clases subalternas en ascenso.

Entre esas relaciones informales quizás las más conocidas hayan sido las establecidas mediante la llamada Cofradía Náutica del Sur, creada a mediados de 1968, cuando entre la oligarquía cundía la inquietud ante la implementación de la Reforma Agraria de Frei y

¹¹ Genaro Arriagada: *Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet*, Santiago, 1991, vol. I, t. 2, p. 889, citado por C. Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 43.

el alza de los sectores populares. Como se señalara en el capítulo 8, la Cofradía vinculó a sectores del alto empresariado con la cúpula de la Armada. Uno de los fundadores de dicha entidad fue Hernán Cubillos, quien después sería ministro de Pinochet.

Otra instancia importante de la confluencia informal entre la elite oligárquica y las Fuerzas Armadas se dio a través de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Según también se señalara en el capítulo 8, su presidente, Orlando Sáenz, reconoció que, a diez meses de asumido Salvador Allende, la entidad empresarial decidió impulsar un golpe de Estado, para lo cual sus líderes tomaron contacto con los militares. Sáenz plantea que el gran empresariado formalizó esa decisión golpista en un seminario celebrado en Viña del Mar en septiembre de 1971.

En el contexto señalado, Sáenz, uno de los principales líderes del gran empresariado –que después también fuera ministro de Pinochet–, relata igualmente sobre sus contactos con los militares, siempre en función del golpe:

Las primeras relaciones oficiales del sector en que yo trabajé (Sofofa) fueron con la Marina a fines de 1972. Allí comenzaron los contactos elaborados y reuniones periódicas. La Fuerza Aérea apareció en los inicios de 1973 y el ejército no se hizo presente sino al final. Yo mismo me reuní con dos o tres generales, entre los cuales no estaba el general Pinochet.¹²

No menos interesantes resultan las revelaciones de Roberto Thieme, jefe operativo de Patria y Libertad, quien sostiene que las acciones terroristas llevadas a cabo por su organización a partir de julio de 1973 fueron hechas por expreso encargo del sector de las Fuerzas Armadas involucrado en los planes del golpe, el que proporcionó la logística.¹³

La articulación pregolpe entre los militares y la patronal e incluso con el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que en diversos estudios se halla ampliamente documentada, y en la cual por razones de espacio no cabe aquí ahondar, encontró su complemento en la elaboración de un programa económico que debía implementarse

¹² Mónica González: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, ed. cit., p. 168.

¹³ Véase la entrevista a Roberto Thieme en revista *Ercilla*, núm. 1.134, 3 de abril de 2000, pp. 33-34.

una vez consumado el derrocamiento del presidente Allende, programa en el que la Sofofa había puesto mucho énfasis. Como sabemos, a los efectos de su elaboración se formó una comisión de diez economistas, ocho de derecha y dos demócrata cristianos. Este equipo confeccionó el llamado «Ladrillo», documento que contenía las medidas económicas que debía tomar el gobierno militar que advendría. A tales fines, el texto debía ser entregado a los militares luego del golpe, como efectivamente se hizo.

En resumen, la vinculación, previa al 11 de septiembre, entre dirigentes del gran empresariado e incluso de ciertos sectores extremistas de la pequeña burguesía nacionalista y los militares fue amplia y significativa. En base a ese camino ya recorrido, durante la dictadura continuó la conexión entre esta y los representantes de los intereses de los grupos económico.

El papel de Pinochet, al respecto, resultó siendo clave. Sobre todo fue él quien apoyó decididamente el copamiento de los altos cargos de gobierno por los gremialistas de Jaime Guzmán y por los Chicago Boys; es decir, por los representantes ideológicos, políticos y técnicos de los grupos económicos, que terminarán siendo quienes dirimirán las grandes líneas estratégicas del régimen, no solo en lo económico, sino también en lo referente a su proyecto político e ideológico.

De este encadenamiento de circunstancias fluyó el programa oligárquico propio de la dictadura, el que, en lo político, lejos de «restaurar la institucionalidad quebrantada» de carácter demoliberal, tuvo como objetivo estratégico sustituirla por un régimen autoritario y excluyente, concebido como superestructura de un modelo neoliberal, proyecto cuya implementación práctica la dictadura no quiso subordinar a plazos.

Entretanto, había que destruir físicamente a las organizaciones de los sujetos populares a través de crímenes masivos, de lo que debían encargarse los servicios de seguridad del régimen bajo el supuesto de que se vivía «una guerra con el marxismo»; mientras que se implantaba plenamente el modelo neoliberal mediante una política de *shock* y una apertura indiscriminada al exterior, desmantelando el Estado y privatizando todo, incluyendo la salud, la educación y la previsión social, convirtiéndolos en nichos de negocios, lo que, como veremos, se hará en dos tandas. Es

interesante constatar que al menos desde la segunda mitad de los años sesenta, tal era el programa de la oligarquía.

En consecuencia, la instauración de ese modelo y los crímenes masivos desde el Estado fueron dos caras del mismo proyecto, el neoliberal, el que así vino al mundo «chorreando sangre y lodo por todos sus poros».

En este proceso se tornó imposible la implementación práctica de las concepciones «estadistas y desarrollistas» –en la versión propiciada por el nacionalismo–, profesadas sobre todo por sectores del Ejército. Esa imposibilidad se dio pese a que los uniformados tenían una mala imagen de los grupos económicos. Era particularmente el caso del Ejército. Aún así el proyecto implementado por la dictadura fue precisamente el de esos grupos. ¿Podrá haber algo más gráfico?

A su vez, gremialistas y Chicago Boys tenían una visión crítica de los militares. Los consideraban «estadistas». José Piñera, refiriéndose al tema, sostiene que «el Comité Asesor del presidente, en efecto, estaba integrado por un grupo de generales muy leal a sus convicciones, pero de mentalidad definitivamente estatista. Oponían una tenaz resistencia al modelo de economía social de mercado y tenían apreciaciones muy duras para juzgar la gestión liberalizadora del ministro de Hacienda Sergio de Castro».¹⁴ Según Huneus, «para el equipo económico formado por Chicago Boys, los militares no eran interlocutores de respeto, no solo porque carecían de los antecedentes académicos que ellos poseían, sino también porque estaban dominados por la mentalidad militar, que los hacía ser “estadistas”».¹⁵

Como hemos dicho en otro lugar, en esta puja dada al interior de la dictadura triunfaron ampliamente los gremialistas y los neoliberales, es decir, los Chicago Boys, que contaban con el apoyo de Pinochet; más aún cuando los militares «estadistas» fueron incapaces de vincularse a los grupos nacionalistas, que eran el otro sector –igualmente «estatista»– que apoyaba al régimen, y no lo hicieron ya sea por lealtad a Pinochet, por la verticalidad del mando

¹⁴ José Piñera: *El cascabel al gato. La batalla por la reforma previsional*, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993, p. 93, citado por Carlos Huneus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 461.

¹⁵ Carlos Huneus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 411.

u otra razón. En tales condiciones lo que más lograron fue evitar que los neoliberales privatizaran Codelco. Con el tiempo, gran parte de esos uniformados pasaron a retiro, mientras que otros terminaron convirtiéndose al neoliberalismo.

Lo señalado ilustra sobre el carácter instrumental que, para los grupos económicos, tuvo la dictadura, bajo la cual fue implementado su proyecto. No hubo, pues, proyecto de las Fuerzas Armadas. Hubo proyecto de la oligarquía plutocrática implementado a través de una dictadura cívico militar, en la que a los uniformados les correspondió un papel muy importante, pero instrumental, centrado sobre todo en la represión y, en general, en el elemento fuerza, siempre, no obstante, al servicio de intereses de clase precisos.

Dentro de este proceso cabe hacer una referencia al general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Aunque de manera ambigua, Leigh intentó impulsar ciertas medidas que no respondían a los intereses de la oligarquía. Con la destacada participación del general Nicanor Díaz Estrada, que se desempeñaba como ministro del Trabajo, impulsó la creación del Estatuto Social de la Empresa, que les daba a los trabajadores participación en estas, contradiciendo así la lógica neoliberal. No fue extraño que los Chicago Boys, que controlaban la economía, ignoraran del todo la propuesta, la que incluso en 1975 había sido promulgada a través de un decreto ley.

Leigh entonces intentó concitar el respaldo de las organizaciones de trabajadores no proscritas, dando lugar a una soterrada pugna al interior del régimen, la cual continuó durante los años siguientes, hasta que tuvo su desenlace a mediados de 1978, cuando Leigh fuera defenestrado de la Junta de Gobierno, del modo que explicaremos más adelante, lo que reforzó el papel de Pinochet al frente del proyecto oligárquico asumido, ahora sin fisuras, por el conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la otra cara de la moneda, la oligarquía, consciente de que implementaba su proyecto, nunca abandonó a Pinochet. Ninguna personalidad de derecha rompió con él, anota Huneus, incluso lo siguieron apoyando después de haber entregado la presidencia, lo defendieron durante su larga detención en Londres y cuestionaron el proceso de desafuero en su contra, iniciado a su regreso al país. No fue casualidad que en 1987, dos grandes organizacio-

nes empresariales, la Cámara Nacional de Comercio y la Sociedad Nacional de Minería, condecoraran a Pinochet por «los servicios prestados al país». Pero, como sabemos, para la ideología del megaempresariado, el país y sus intereses de clase son sinónimos.

Augusto Pinochet concentra el poder en sus manos

Si bien el golpe del 11 de septiembre había sido llevado a cabo sin fisuras por el Estado Mayor de la Defensa Nacional luego de que la derecha y el Partido Demócrata Cristiano, financiados por los Estados Unidos, crearan las condiciones pertinentes, la dictadura resultante de ello rápidamente se fue personalizando en la figura del general Pinochet, no sin tensiones, sobre todo con la FACH.

La señalada personalización del poder tuvo uno de sus principales antecedentes en la verdadera purga llevada a cabo por Pinochet al interior del Ejército. Así, el 18 de septiembre de 1973, le pidió la renuncia a todo el alto mando. Luego eliminó la junta calificadora, cuyas funciones quedaron en sus manos. El resultado fue claro: Pinochet sacó del alto mando a quienes no eran de su total confianza personal. Ese fue el criterio fundamental que empleó, el que normalmente no coincidía con las mejores hojas de servicio. Pinochet cooptó así al generalato y, con este incondicional apoyo, inclinará la correlación de fuerzas al interior de la Junta.

En octubre de 1973, Pinochet procedió a crear el Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ) con miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, mientras que cada comandante de las distintas instituciones de la defensa procedía a fichar a juristas y personeros de la derecha como asesores.

Luego de purgar el Ejército, Pinochet, en la perspectiva de concentrar todo el poder en sus manos, se propuso asumir la presidencia de la república. Esto significaba pasar desde la presidencia de la Junta, que originalmente asumiera –cargo que al inicio estaba sujeto a rotación entre los miembros de aquella–, a jefe del Estado. En este empeño Pinochet no solo encontró la resistencia del general Leigh. También en el Ejército algunos consideraron que era inconveniente fusionar el cargo de comandante en jefe de esta institución de la defensa con la jefatura del Estado. Tales opiniones corrieron sobre todo por cuenta de los generales Augusto Lutz y

Oscar Bonilla, quienes adicionalmente eran críticos de los crímenes de la DINA, frente a los cuales presentaron sus reclamos ante Pinochet; tema que, no obstante, distaba mucho de tener acogida entre la gran mayoría de los uniformados. Ascanio Cavallo dice al respecto: «la cuestión de los Derechos Humanos parecía irrelevante para la sensibilidad del mando».¹⁶ Curiosamente, tanto Lutz como Bonilla morirían pronto y en extrañas circunstancias. El primero el 28 de noviembre de 1974, y el segundo el 3 de marzo de 1975. Ascanio Cavallo, en su libro *La historia oculta del régimen militar*, hace un pormenorizado relato de ambas muertes.¹⁷

Venciendo las resistencias, sobre todo la del general Leigh, Pinochet asumió como presidente de la República en diciembre de 1974, mientras que la Junta quedaba como depositaria de los poderes constituyente y legislativo.

Después de que asumiera la presidencia de la República, Pinochet creó el Estado Mayor Presidencial, formado por militares de alta graduación. Dicho Estado Mayor fue encabezado por el general Sergio Covarrubias. Con ello se pretendía que todas las cuestiones relevantes de gobierno se analizaran por este organismo, evitándose así que el generalato entrara en el debate político, el que quedaba radicado en dicho Estado Mayor y en las fuerzas civiles que formaban parte de la dictadura.

En ese contexto, los miembros del Ejército, siempre incondicionales a la persona de Pinochet, coparon los principales cargos del régimen: ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores provinciales, servicios de seguridad, etc., dejándole a las otras ramas de la defensa roles menores. Huneeus plantea que el predominio del Ejército dentro de la dictadura fue abrumador. Sumó, durante la existencia del régimen, 70 oficiales en servicio activo y 18 en retiro, mientras que la Armada solo tuvo 12, Carabineros 11 y la FACH, solo dos, lo que hace un total de 113 uniformados (52 %) contra 104 civiles (48 %).¹⁸

¹⁶ Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, ed. cit., p. 88.

¹⁷ Véase, *ibídem*, capítulo 7.

¹⁸ Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 200.

El control del Ejército y la presidencia de la República le dio unidad y cohesión al régimen de Pinochet, y a este una base significativa de poder. Pero el proyecto, como lo hemos indicado arriba, no lo decidieron los uniformados, quienes aportaron esencialmente la fuerza y la cohesión del régimen. La definición del proyecto les correspondió a los políticos, intelectuales y técnicos de la oligarquía. Esto es, a los gremialistas y a los Chicago Boys, dentro de los cuales sobresale la figura de Jaime Guzmán, a los que hay que agregar otros representantes de la derecha civil.

Lugar de los gremialistas y de los Chicago Boys dentro de la dictadura y el proyecto de cooptación de las clases subalternas

En el contexto del proceso de personalización de la dictadura, referido arriba, los gremialistas, encabezados por Jaime Guzmán, llevaron a cabo sistemáticos esfuerzos por posicionarse dentro del régimen, tanto en sus altos cargos como en los organismos vinculados a las bases sociales. El receso político impuesto a los partidos que apoyaron el golpe no se les aplicó a ellos. No por casualidad llegarían a convertirse en la principal expresión civil de la dictadura.

La inserción de los gremialistas dentro del régimen fue paralela a la de los Chicago Boys, unos y otros a menudo indistinguibles,¹⁹ por cuanto muchos de estos últimos a su vez se consideraban gremialistas, más aún cuando Jaime Guzmán, como vimos en el capítulo anterior, pronto abandonó sus concepciones corporativistas y, desde el concepto de «orden espontáneo» que cuestionaba todo «constructivismo», asumió las concepciones neoliberales.

Tanto los gremialistas como los Chicago Boys, en una medida importante, fueron promovidos al interior del régimen por el general Sergio Covarrubias, que era el jefe del Estado Mayor

¹⁹Sobre esta problemática es ilustrativo el libro de Víctor Muñoz: *Historia de la UDI. Generaciones y cultura política (1973-2013)*, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2016. Véase sobre todo el capítulo 2. También Verónica Valdivia y otros: *Su revolución contra la nuestra, vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta*, Ed. LOM, Santiago, 2008. Véase sobre todo el capítulo 3.

Presidencial. Según Ascanio Cavallo, Covarrubias fue «el más temprano defensor de los Chicago Boys»²⁰ al interior de la dictadura. En otro plano, análogo papel cumplió Miguel Kast, neoliberal que desde muy temprano ocupaba el cargo de subdirector de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan). La importancia de esta entidad puede ponderarse si se considera que tenía entre sus funciones elaborar estudios para el plan nacional de desarrollo, fijar los criterios para evaluar las inversiones estatales y elaborar políticas sociales como las referentes a la focalización del gasto social, entre otras. Desde el lugar que ocupaba en el organismo, la influencia de Kast alcanzó niveles muy significativos. En el desempeño de su labor reunió antecedentes de centenares de profesionales, lo que le permitía proponer muchos nombres para los más variados cargos, por lo que fue conocido como *el Gran Reclutador*,²¹ influencia que utilizó para promover a gremialistas y liberales.

Jaime Guzmán, a su vez, aprovechó sus estrechas relaciones con el general Sergio Covarrubias, para insertar a sus seguidores en altos cargos del Estado. En este proceso, al ganarse la confianza de Pinochet, los gremialistas consiguieron que una elevada cantidad de sus miembros asumieran responsabilidades ministeriales. Huneus subraya que fueron ministros «gremialistas» numerosos profesionales provenientes de la Universidad Católica, tales como Jaime del Valle (Relaciones Exteriores), Juan Antonio Guzmán (Educación), Guillermo Arthur (Trabajo) y Miguel Ángel Poduje (Vivienda). Los «gremialistas», durante los diecisiete años del régimen, tuvieron veintiséis ministerios, y fueron solo superados por los Chicago Boys, que tuvieron treinta y uno, quienes, a su vez, solo fueron sobrepasados por los ministros pertenecientes al Ejército, que sumaron cuarenta y seis.²²

A lo dicho agréguese el papel que le correspondió a Jaime Guzmán en la Comisión Constitucional creada con el fin de elaborar la nueva carta fundamental destinada a reemplazar la de 1925, a la que la dictadura, de hecho, dejó sin efecto. Guzmán desempeñará un papel muy relevante en esta tarea, cuyo resultado final fue la Constitución de 1980.

²⁰ Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar de Chile*, ed. cit., p. 87.

²¹ Carlos Huneus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 305.

²² *Ibidem*, pp. 305-306.

En este proceso, los Chicago Boys, desde abril de 1975, cuando Sergio de Castro asumiera el ministerio de Economía –y Jorge Cauas el de Hacienda–, pasaron a controlar las grandes definiciones que se tomarían en este ámbito, cuya expresión fundamental consistió en la drástica implantación del modelo neoliberal a través del tratamiento de *shock*.

Este ascenso meteórico de Chicagos y gremialistas –a la fecha principales portadores de los intereses del gran capital– contrastaba con la suerte de los nacionalistas, que tuvieron cargos muy secundarios en el régimen, especialmente relacionados con el área de las comunicaciones (Willoughby y otros), marcando también presencia a través del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, en la Secretaría Nacional de los Gremios.

Este posicionamiento de los cargos al interior de la dictadura resolvió del todo la lucha que se diera dentro de ella entre el neoliberalismo y el nacionalismo corporativista; lucha que en el fondo tenía como verdaderos contrincantes a la pequeña burguesía nacionalista (más afín a muchos militares), por un lado; y los representantes del gran capital local y transnacional, por el otro.

Pero los gremialistas no solo se preocuparon por obtener altos cargos al interior de la dictadura para contribuir así decisivamente a darle a esta su sello ideológico y político. Igualmente intentaron copar las organizaciones que el régimen creó a los fines de forjarse entre las clases subalternas un apoyo civil de masas.

Téngase en cuenta que, al modo de los regímenes fascistas, la dictadura, con sus pretensiones refundacionales, generó un detallado proyecto de cooptación de las mayorías populares, a las que aspiraba incluso a movilizar en su apoyo. Tal empeño representó la otra cara del intento de destruir físicamente, a través de los servicios de seguridad, a los partidos de izquierda.

La extensa red de instituciones creadas por la dictadura cívico militar a los efectos cooptativos señalados tuvo un carácter burocrático. Su cúspide se situó en la Secretaría General de Gobierno, a la que se le dio el rango de ministerio. Siempre con el fin de generar y movilizar apoyos sociales a la dictadura, la Secretaría creó la Dirección de Organizaciones Civiles. Esta, a su vez, dio origen a la Secretaría de la Mujer, a la de los Gremios y a la de la Juventud. Tales organismos contaban con abundantes recursos económicos

y de personal, este último remunerado por el Estado, pero también conformado por voluntarios. Su tarea consistía no solo en movilizar a los respectivos sectores sociales y trabajar en la base de estos, sino también en adoctrinarlos. A tales propósitos, una de sus principales labores consistió en la organización de permanentes cursos de «capacitación» y «perfeccionamiento». Con ello se pretendía generar adicionalmente una enorme red de dirigentes de base e intermedios, que deberían movilizar a los sectores sociales correspondientes (mujeres, juventud, trabajadores, etc.) en apoyo de la dictadura, todo en el marco de la «nueva mentalidad» que se aspiraba a crear, antigua aspiración de la derecha oligárquica, presente ya en *La Nueva República*, documento aparecido en 1970 elaborado por el Partido Nacional.

El gremialismo llegó a controlar del todo la Secretaría Nacional de la Juventud, en gran medida debido al papel que desempeñó Jaime Guzmán, quien contó con el activo apoyo y participación de los exdirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), los que coparon las cúpulas del organismo. Carlos Huneeus sostiene que «esta secretaría se convirtió en la puerta de entrada natural de los jóvenes para participar en el Gobierno después de terminar los estudios universitarios y ocupar luego otros cargos en los ministerios, en los gobiernos regionales o en las municipalidades».²³ El objetivo propuesto por la Secretaría Nacional de la Juventud, aparte de movilizar apoyos juveniles a favor de la dictadura, fue crear otra generación de chilenos dotados de la mencionada «nueva mentalidad».

La Secretaría Nacional de la Juventud se constituyó en el organismo de masas de mayor cohesión y mística –con un ideologismo más perfilado– con que la dictadura pudo contar, aunque en sus filas abundó el clientelismo, no solo mediante la oferta de puestos de trabajo en el Gobierno y en otras entidades públicas, sino igualmente en el ámbito privado, a cuyos efectos creó bolsas de trabajo. Del mismo modo otorgó becas para estudiantes pobres y otros mecanismos análogos. La Secretaría Nacional de la Juventud asumió también las directivas de los centros de alumnos y de las federaciones estudiantiles universitarias, y fue la única fuerza que podía dirigir a unos y a otros, al estar prohibidas todas las demás

412 ²³ Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 357.

organizaciones políticas juveniles. Las labores de adoctrinamiento que la Secretaría impulsara fueron permanentes, al capacitar líderes e instruirlos en las bases políticas e ideológicas de la dictadura.

Paralelamente, el gremialismo creó otro organismo de masas destinado a apoyar al régimen: el Frente Juvenil de Unidad Nacional. A diferencia de la Secretaría Nacional de la Juventud, el Frente no era una entidad estatal. Se autodefinió como un organismo «cívico patriótico» que colaboraba con la dictadura, y como un movimiento destinado a unir a toda la juventud en función de un propósito político fundamental: apoyar la constitución de un régimen nacionalista de Unidad Nacional. Su máximo organismo de dirección fue el Consejo Nacional, cuyos componentes pertenecían al gremialismo. El Frente admitía miembros tanto de la juventud civil como militar. Con su ideología patriótica propuso la instauración del Día de la Juventud, el que quedó fijado para el 9 de julio, fecha de la Batalla de la Concepción.

El Frente fue inaugurado el 9 de julio de 1975. Dos años después, el 9 de julio de 1977, en Chacarillas, a los costados del cerro de San Cristóbal, mediante un acto de masas nocturno, de clara estética nazi, con desfile de antorchas y mar de banderas, el Frente conmemoró su segundo aniversario. En la celebración intervino el general Pinochet, quien pronunció el famoso discurso a través del cual trazara el itinerario político del régimen.

El gremialismo también se posesionó de otras instancias, como las municipalidades. La dictadura, a través de una reforma, les había entregado a aquellas nuevas facultades y fuentes de recursos. Entre las primeras destaca la gestión de los centros básicos de salud y de la educación pública de su circunscripción. Dentro de tal reforma, las municipalidades quedaron definidas como una de las instancias destinadas a enfrentar, a través de distintos programas asistenciales, los problemas de los sectores más pobres. En este contexto los gremialistas se dieron a la tarea de posesionarse de los gobiernos edilicios, y desplegar en ellos a gran parte de los líderes que venían formando. El control municipal debía permitirles establecer relaciones con amplios sectores de las clases subalternas, desde ya con los más empobrecidos, con los cuales anudarían relaciones clientelares que debían permitirles generar una base social popular para su proyecto político. El éxito que fueron

obteniendo en esta tarea generó una significativa modificación en los municipios más pobres. Estos, de lugares donde hasta el golpe se verificaba una indiscutida influencia de la izquierda, y en parte del Partido Demócrata Cristiano, pasaron a ser ahora coto de los líderes del gremialismo, más tarde devenido en Unión Demócrata Independiente (UDI).

En cuanto a la Secretaría Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de los Gremios, sus logros fueron muy limitados. La Secretaría Nacional de la Mujer fue apoyada fuertemente por Lucía Iriart de Pinochet, y contó con una gran participación de esposas de uniformados. Capturó la red de Centros de Madres y Juntas de Vecinos creada durante el gobierno de Frei Montalva y la usó para sus propósitos proselitistas. Además, el Estado le transfirió numerosos bienes inmuebles. Dentro de un concepto paternalista, junto con sus numerosas actividades de adoctrinamiento, organizó labores asistenciales con programas hacia las familias de extrema pobreza generando redes clientelares de modesta significación.

La Secretaría de los Gremios, por su parte, no consiguió sus objetivos. Su dirección quedó principalmente en manos de dirigentes del antiguo Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS). Misael Galleguillos, el antiguo líder de este movimiento, asumió la jefatura de la entidad. Otros personeros que trabajaban en ella fueron Pedro Zurita, Germán Cuevas, Patricia Arancibia Clavel, Soledad Acuña, Arturo Marshall, Fernando Muñoz, Federico Morales y Nancy Sepúlveda.²⁴

Como lo señala Aníbal Pérez, el objetivo que se propusiera el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista a través de la Secretaría Nacional de los Gremios consistió en crear –en fuerte confrontación con los neoliberales– un sujeto dentro del mundo laboral que apoyara una reorganización social de tipo corporativa, la misma que persiguiera desde sus comienzos el Movimiento. Ello implicaba generar un sindicalismo nacionalista, corporativo, anti-partidista, anticomunista y afín al imaginario nacional sindicalista.²⁵

A fin de adoctrinar al sindicalismo permitido y alinearlos tras la dictadura, pero con las concepciones corporativistas del Movi-

²⁴ Aníbal Pérez: «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», cit., p. 76.

²⁵ *Ibidem*, p. 74.

miento Revolucionario Nacional Sindicalista, la Secretaría Nacional de los Gremios creó una escuela sindical, la que realizó numerosos cursos entre el sindicalismo permitido. Uno de sus profesores fue Ramón Callis Arrigorriaga, exjefe del MRNS. Con la secretaría de la entidad colaboraron algunos dirigentes sindicales que ayudaron a impulsar el golpe, tales como el exdemócrata cristiano Guillermo Medina y otros.

A comienzos de los años ochenta, ante la recuperación del sindicalismo independiente y opositor, la Secretaría Nacional de los Gremios buscó neutralizarlo cooperando a los efectos con los servicios de seguridad de la dictadura. A este respecto se ha vinculado a Misael Galleguillos con el asesinato de Tucapel Jiménez, quien exitosamente articulaba a un sector del movimiento sindical en torno a su liderazgo contrario a la dictadura. El asesinato de Jiménez se verificó en febrero de 1982. Misael Galleguillos llegó a estar formalizado por el caso, razón por la cual debió abandonar la dirección de la Secretaría Nacional de los Gremios.

Volviendo al gremialismo y a los Chicago Boys -que trabajaban estrechamente unidos-, hay que insistir en que se constituyeron en los principales grupos de poder dentro de la dictadura y desplazaron en influencia a los militares, sobre todo a los que trabajaban en la Corporación de Fomento y en el Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ), dándole así el carácter esencial al régimen. En este contexto, se ha sostenido que las importantes funciones políticas que cumpliera el gremialismo hicieron que se constituyera en el equivalente funcional del partido único en los regímenes autoritarios.²⁶

Sentado ya que los gremialistas –sobre todo Jaime Guzmán– y los Chicago Boys fueron quienes decidieron el proyecto de la dictadura, cabe referirse a algunos de los aspectos fundamentales adoptados por este, tanto en sus aspectos económicos como políticos.

El proyecto económico y su ejecución práctica

En este plano, el objetivo perseguido por el proyecto de la dictadura consistió, por una parte, en poner fin al modelo ISI, el que

²⁶ Carlos Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 376.

provenía al menos de los años treinta del siglo pasado, al cual se lo acusó de ser la causa de todos los males económicos. Según señala Manuel Gárate, los economistas de Chicago deseaban liquidar tal proyecto, y no solo el experimento socialista de la Unidad Popular, pues, desde su punto de vista, esta última había sido solo la fase extrema y final de un largo camino de errores económicos y mala teoría aplicada desde los años treinta.²⁷ Tal planteamiento era análogo al sostenido, en el plano político, por los ideólogos nacionalistas y corporativistas quienes, en este terreno, concebían a la Unidad Popular como la etapa final y lógica de una decadencia inducida por el régimen demoliberal, madre de todos los males, al que había que definitivamente sustituir.

Aparte de lo anterior, el proyecto económico de la dictadura tenía como objetivo fortalecer al megaempresariado, con el fin de que se hiciera cargo del manejo de la economía del país, liberando, en este ámbito al Estado de la mayor parte de sus responsabilidades. Esto operaría dejando al mercado como instrumento de las decisiones económicas fundamentales.

¿Cómo se avanzaría en la dirección señalada? Por lo menos mediante tres vías. Por un lado, privatizando; por el otro, mediante una política económica de total apertura al exterior, que suponía bajar sustancialmente las tasas arancelarias y darle garantías al capital extranjero al cual se deseaba atraer, a cuyos efectos se promulgó el Decreto 600 que le dio a este el mismo trato que al capital nacional, con lo cual se crearon así condiciones para la desnacionalización de la economía, al tiempo que se disminuía drásticamente el gasto fiscal, incluso traspasando a los privados gran parte de los servicios hasta entonces prestados por el sector público, y llevando a cabo una desregulación financiera que permitiera el libre flujo y circulación de capitales; a lo que se agregaría, en tercer lugar, el otorgamiento al Estado de un papel meramente subsidiario.

Cabe señalar que la referida total apertura de la economía al exterior tenía necesariamente que traer consigo un efecto de la mayor importancia: el desplazamiento de la industria como motor dinámico del proceso de acumulación en beneficio de aquellos sectores en los cuales el país podía competir en los mercados mundiales, es decir, la

²⁷ Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., pp. 198-199.

minería, la agricultura, la silvicultura y la pesca.²⁸ En otras palabras, la economía nacional tendría que basarse en la producción primaria, en la cual poseería «ventajas comparativas».

En cuanto a las privatizaciones, estas se materializaron en dos fases. La primera se verificó durante los años setenta. Su objetivo consistió en reprivatizar las empresas que el gobierno de la Unidad Popular había pasado al Área de Propiedad Social, o que mantuviera intervenidas, las que en conjunto eran cerca de cuatrocientas. Estas privatizaciones se vieron aceleradas a partir de abril de 1975, cuando Sergio de Castro asumió el Ministerio de Economía e inició el tratamiento de *shock* y las respectivas aperturas a la economía mundial, con las correspondientes bajas arancelarias, la disminución del gasto público y las desregulaciones financieras, etcétera.

No fue coincidencia que precisamente unas semanas antes, a fines de marzo, Milton Friedman, acompañado por Arnold Harberger, llegara al país invitado por el Banco Hipotecario de Chile y la dictadura. En una carta dirigida a Pinochet con fecha 21 de abril de 1975, Friedman entregó sus orientaciones al régimen, justo en los momentos en que la represión de la DINA se hacía más brutal.²⁹

No está de más constatar cómo en esta coyuntura, como en tantas otras, se evidenció la flagrante contradicción entre la retórica supuestamente «patriótica» de la dictadura –sobre todo en lo referente a su «rechazo a las ideas foráneas», y su práctica real, consistente, entre otros, en comprarse completamente las ideologías ultraconservadoras elaboradas en el extranjero, y en este caso, el discurso de Chicago, trayendo al país incluso a su máximo gurú a dictar cátedra y a definir las líneas que debía seguir la economía nacional. Las directrices de dicho gurú, así como las teorías que proclamara no recibieron por parte de la dictadura el epíteto de «ideas foráneas», todo lo cual pone de manifiesto el carácter meramente instrumental de los discursos y las adhesiones ideológicas del régimen y de la derecha que lo apoyaba.

La segunda fase de las privatizaciones advino durante los comienzos de los años ochenta. Como efecto de esta ola privatizadora, se traspasaron al capital privado casi todas aquellas grandes empresas estratégicas que el Estado había venido formando por

²⁸ *Ibíd.*, p. 203.

²⁹ *Ibíd.*, p. 201.

decenios a través de la CORFO. De tal modo, el modelo ISI resultó completamente dejado atrás. Durante esta fase se privatizaron las empresas de telecomunicaciones (Entel), de electricidad (Endesa), la siderurgia (Compañía de Aceros del Pacífico, CAP), la petroquímica (Soquimich) y otras. De las principales empresas de la CORFO solo la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) no fue privatizada y ello se debió a la oposición de la Marina.³⁰ Tampoco fue privatizado Codelco, por oposición del Ejército.

Una de las características más notables que evidenció esta segunda fase privatizadora consistió en que importantes personeros de la dictadura, sobre todo altos ejecutivos de las empresas a privatizar, se quedaron con la mayor parte de las acciones de estas, adquiridas muchas veces con créditos del propio Estado. Se formaron así nuevas grandes fortunas. Los casos de Julio Ponce Lerou, en relación con Soquimich; y José Yuraszcek, respecto de Endesa –la que después este vendió, a precios muy superiores, a una transnacional española– son los más conocidos.

La otra característica relevante de este proceso privatizador consistió en que las empresas estatales se transaron a precios muy por debajo de su valor real, con notable pérdida para el fisco. Una parte de ellas fue privatizada gracias a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que recién se estaban conformando. Estas entidades, que recibían los fondos que les entregaban sus afiliados para sus futuras jubilaciones, emplearon parte de dichos fondos en la compra de acciones de las empresas del Estado en proceso de privatización. Las administradoras de fondos de pensiones quedaban así, por otra parte, con una fuerte presencia en los directorios de tales empresas ahora en el sector privado.

En general, las empresas así privatizadas terminaron pasando a manos de los grupos económicos más poderosos, sobre todo los entonces ligados al Banco de Chile (grupo Vial) y al de Santiago (grupo Cruzat). Por tanto, supusieron una gigantesca e inédita concentración de la propiedad y de la riqueza en manos del gran capital, contribuyendo así a la conformación de una economía oligopolizada, que inevitablemente favorecería la concertación de precios, todo lo cual no tenía nada que ver con la libre competencia que estipulaba la teoría.

Como resultado de los procesos expuestos –que continuarán bajo los gobiernos de la Concertación–, los grupos económicos quedaron dueños de todo, menos de lo que se apropiaron las empresas transnacionales, o lo que tenía baja rentabilidad y que, por lo mismo, era conveniente dejárselo a la pequeña y mediana empresa, a las que subordinarían por múltiples hilos; es decir, los grupos económicos quedaron dueños de los bancos (pronto desnacionalizados), del *retail*, de las cadenas de supermercados, de las farmacias, de la tierra –en parte importante dedicadas a la explotación forestal en el centro sur del país–, de las administradoras de fondos de pensiones, de las compañías de seguros, las instituciones de salud previsual (ISAPRES), de las clínicas, de los medios de comunicación escrita, radiales y televisivos, gran parte de las universidades, del agua y, más adelante, del mar, que quedará en manos de siete familias, etcétera.

Serán estos grupos, verdaderos «dueños de Chile», los que al retorno de la «democracia», es decir, durante los gobiernos civiles, terminarán financiando al conjunto de la clase política, con escasas excepciones, a cambio de lo cual esta debía darle estabilidad al modelo neoliberal, e incluso profundizarlo, todo con la correspondiente promulgación del marco jurídico requerido por la acumulación del capital y su subsecuente concentración y centralización.

El otro aspecto relevante del proceso privatizador llevado a cabo por la dictadura consistió en que se realizó eliminando derechos sociales, como la salud, la previsión social y la educación, cuyos servicios pasaron a la empresa privada y se convirtieron en bienes de mercado. No menos importante fue la privatización del agua, igualmente convertida en un bien de mercado.

En cuanto a la previsión social, la dictadura puso fin al sistema de reparto e instaló en su lugar un sistema de ahorro forzoso en beneficio de las administradoras de fondos de pensiones, en manos de los grupos económicos (las cuales, a la larga, serán apropiadas por capitales extranjeros). Ya hemos señalado que con los fondos de los ahorristas forzados estas administradoras contribuyeron a la privatización de empresas estatales comprando parte de sus acciones lo que, a la vez, les permitió tener importante participación en los directorios de las empresas así privatizadas, mientras que las cotizaciones que mes a mes pagaban sus afiliados proporcionaban

dinero fresco a las empresas oligopólicas donde dichas administradoras lo invertían. El sistema consistía, pues, en un gigantesco mecanismo expropiatorio de los asalariados en favor del financiamiento de los grupos económicos. Las Fuerzas Armadas, por razones obvias, quedaron exentas de participar en él, y disponían de su propio sistema previsional.

La dictadura también privatizó en gran parte el sistema de salud. Creó las ISAPRES, en manos de los grupos económicos, las que terminaron integrándose verticalmente con sus clínicas y otros servicios, convirtiendo al sector en un nicho de mercado de alta rentabilidad para el gran capital. Mientras tanto, el sistema público languidecía, incapaz de atender las necesidades de la población, por lo cual gran parte de esta, sobre todo de clase media, debía acudir al sistema privado, o sea, a las ISAPRES.

En cuanto a la educación, la dictadura procedió a liquidar el sistema público, al que reemplazó por colegios privados subvencionados por el Estado. En este sentido hubo empresarios –o sostenedores, como se les llamó– que llegaron a controlar extensas cadenas de establecimientos educacionales, cuya calidad rápidamente se vino al suelo. En tanto, la anterior educación pública se municipalizó y se precarizó extraordinariamente, sobre todo en las comunas más pobres, al tiempo que la educación pagada a altos precios se mantuvo para una elite. Se conformó de este modo un sistema educacional estructurado por clases sociales: la educación municipalizada se reservó para los sectores más pobres; la particular subvencionada, para los sectores medios; y la particular pagada, para las elites pudientes. El sistema educacional reforzaba así la división clasista de la sociedad, mientras que el país, en contradicción con el discurso patriótico sobre la «unidad nacional», acentuaba su desigualdad pasando a estar conformado por una serie de guetos separados no solo cultural y económicamente, sino también espacialmente.

En cuanto a las universidades, se crearon las privadas –muchas veces de propiedad de prohombres de la dictadura–, las que con el tiempo superarían largamente en número y en matrícula a las públicas, cobrando considerables aranceles. Por su parte, las universidades estatales, al poner fin a la antigua gratuidad, debieron insertarse en la lógica del mercado, al dejar de ser financiadas por

el Estado, como no fuera muy marginalmente, lo que las obligaba a competir en el mercado del rubro para captar clientes, al igual que las privadas.

Hay otros dos aspectos que forman parte de esta transformación global del país en favor del gran capital local y transnacional. Son los referidos, por un lado, a la desnacionalización del cobre y de la minería en general, y, por el otro, a la legislación laboral.

La desnacionalización del cobre operó mediante las concesiones plenas, ideadas por José Piñera, contempladas en la ley minera promulgada el 21 de enero de 1982. Esta ley, sin modificar el precepto constitucional que reconocía al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo, estipuló la llamada «concesión plena» consistente en la entrega, por un juez, de una explotación minera a un inversionista privado. Esta concesión sería un

[...] derecho amplio [...] de duración indefinida, que estaría protegido por el derecho de propiedad, cuyo titular podría libremente usar, gozar y disponer de la concesión a su entera voluntad sin poder ser privado de ella sino por expropiación, la cual, en todo caso, generaría indemnización completa, lo que supondría el pago al concesionario del «valor presente de los flujos futuros de caja».³¹

Utilizando esta legislación, los gobiernos concertacionistas entregarán el cobre a las empresas transnacionales, lo que la dictadura empezó a hacer, aunque en medida todavía muy incipiente.

En cuanto a la legislación laboral, esta fue igualmente ideada por José Piñera cuando se desempeñara como ministro del Trabajo (1979-1981). Se tradujo en el llamado Plan Laboral, que dijo perseguir la integración entre el trabajo y el capital. Esta legislación estableció disposiciones totalmente funcionales al gran empresario. Al respecto cabe destacar en primer lugar la «libertad de afiliación» que instauró, la que consagrara la libertad del trabajador

³¹ Natalie Núñez y Javier Lillo: «Hacia un nuevo modelo político. El pensamiento político económico de la derecha: un estudio de la *Revista Economía y Sociedad* (1978-1989)», tesis para optar al grado académico de Licenciado en Historia y de Educación en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 2016, p. 85. Las cursivas son mías.

individualmente considerado para afiliarse o no a los sindicatos. La medida apuntaba obviamente a debilitar a estos últimos por la vía de impedir que representaran al conjunto de los trabajadores, a partir de lo cual difícilmente estos podrían negociar con suficiente fuerza con la parte patronal. En la misma línea se agregó la prohibición de la negociación colectiva por rama, con el argumento de que los salarios –que deberían responder al valor que les asigna el mercado– tendrían que guardar relación con la productividad del trabajo, lo que dependía de la realidad de cada empresa. De allí que la negociación colectiva solo debería realizarse a nivel de estas, individualmente consideradas.

Por otra parte, el plan laboral estableció el libre despido de trabajadores. Bastaba con alegar «necesidades de la empresa» para dejar a un trabajador sin su fuente de empleo. En el fondo, el objetivo de dicho plan era impedir que los trabajadores reivindicaran niveles salariales que limitaran la rentabilidad de las empresas y, por tanto, la reproducción ampliada del capital y la concentración de la riqueza. Ello representaba al ciento por ciento una reivindicación del megaempresariado que, a través de los procesos descritos, se había venido apropiando de todos los recursos del país. No es casualidad que durante la dictadura se verificara una drástica disminución de los niveles salariales, los que se mantuvieron por debajo del nivel alcanzado en 1970, ello incluso en 1989. También, durante la dictadura, bajaron otros ingresos monetarios de los trabajadores, como las asignaciones familiares, hasta situarse en 1989 en un 72 % por debajo del nivel de 1970.³²

En suma, el proyecto económico instaurado por la dictadura cívico militar consistió en entregar el país a los grupos del gran capital local y transnacional, lo cual estuvo indisolublemente ligado al terrorismo de Estado instaurado por el liderazgo genocida (la Junta de Gobierno), sin el cual en las condiciones del Chile de la época dicha entrega era imposible.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados económicos del referido proyecto instaurado por la dictadura? Desde el punto de vista del crecimiento fueron bastante modestos. En efecto, el promedio de crecimiento anual verificado durante los diecisiete años que duró el

régimen fue de 2,9 % anual. Durante ese lapso, por otra parte, hubo dos grandes crisis recesivas: la de 1975, y la de 1982. En la de 1975, motivada por la política de *shock* implantada por los Chicago Boys, se produjo una caída en la producción industrial de hasta un 28 % y una disminución del PIB cercana al 13 %. El desempleo en 1976 se elevó a casi un 20 %, mientras que los salarios reales habían caído cerca de un 40 % respecto del nivel que tenían en 1970, en tanto que la inflación bordeaba el 350 %.³³ La crisis de 1982 fue aún más grave, y tuvo serias consecuencias políticas. El PIB registró una baja del 14,5 %, mientras que la industria y la construcción cayeron un 21,9 y un 23,4 %, respectivamente, en tanto que el desempleo llegó a 19,6 %. En la práctica este era aún mayor, lo cual era disimulado a través del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), que eran gestionados por las municipalidades, las que contrataban desempleados que, por sueldos menores, realizaban tareas casi simbólicas en el territorio de las respectivas comunas. Huneus señala que el crecimiento de ambos programas continuó durante 1983 y en mayo de ese año había medio millón de personas en el PEM y el POJH. Se estima que en julio, el 15 % de la población económicamente activa de la región metropolitana se encontraba integrado a alguno de estos dos programas.³⁴ De tal modo que si a los cesantes abiertos sumamos los contratados en el PEM y en el POJH, resulta que el total del desempleo llegó a ser durante la crisis superior al 30 %. Por tanto, la situación era catastrófica. No fue casualidad que fuera precisamente por entonces cuando se inició la crisis política de la dictadura, la que se hizo evidente del todo con los comienzos de las protestas nacionales, en mayo de 1983.

Pero más allá de estas dos coyunturas críticas, los resultados de la implementación del modelo neoliberal fueron desastrosos para la mayoría de la población, particularmente asalariada. Todos los indicadores, como remuneraciones, ingreso mínimo, asignaciones familiares, gasto del Estado en educación y salud, se contrajeron significativamente respecto a 1970, como lo demuestra el tabla 18.1.

³³ Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 204.

³⁴ Carlos Huneus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 511.

Tabla 18.1. Salarios, asignación familiar y gasto social público, 1970-1989 (Índices reales, 1970=100)

	<i>Gasto social per cápita</i>					
	<i>Remuneraciones</i>	<i>Ingreso mínimo</i>	<i>Asignación familiar</i>	<i>Educación</i>	<i>Salud</i>	<i>Total</i>
1970	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1983	89.0	130.0	81.6	88.6	82.3	90.1
1984	96.8	135.7	80.9	92.1	74.7	97.5
1985	83.2	86.1	54.6	76.0	64.0	90.5
1986	84.6	82.1	45.7	71.5	62.5	86.9
1987	84.3	77.1	38.1	65.7	61.5	84.7
1988	89.8	82.3	33.2	64.1	70.4	86.0
1989	91.6	91.8	28.4	62.5	69.6	83.7

Fuente: French-Davis: *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad*, cit., por C. Huneeus: *El régimen de Pinochet*, ed. cit., p. 393.

Como se ve, los datos muestran que en 1989, casi al término de la dictadura, los niveles salariales eran menores que diecinueve años atrás, así como también ocurría lo mismo con los otros indicadores expuestos.

En la otra cara de la moneda, los grupos económicos en que se articulaba el gran capital, y cuyos intereses se veían representados por la dictadura, se enriquecían enormemente. Como resultado de ello, la desigualdad social se ahondaba sin cesar.

Fernando Dahse, en su libro *Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*,³⁵ cuya primera edición es de diciembre de 1979, muestra, con datos muy detallados, la magnitud que por entonces estaba alcanzando la concentración de la riqueza en los grupos económicos. La tabla 18.2 muestra cómo las cuarenta y una empresas controladas por los cinco mayores grupos económicos –que entonces eran Angelini, Cruzat-Larraín, Matte, Vial y Luksic– casi duplicaron su patrimonio entre 1969 y 1978, a pesar de que entre 1970 y 1973 lo vieran disminuido.

³⁵ Fernando Dahse: *Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*, Ed. Aconcagua, Santiago, 1979.

Tabla 18.2. Variación porcentual del patrimonio global de algunas empresas de los cinco grupos económicos más grandes, periodo 1969-1978

<i>Grupo</i>	<i>Empresa No.</i>	<i>Patr. 69 US\$ Mill.</i>	<i>Patr. 78 US\$ Mill.</i>	<i>Variación 69/78%</i>
Angelini	6	43.22	122.73	183.9
Cruzat-Larraín	13	191.16	507.34	165.4
Matte	7	167.61	276.87	
Vial	8	116.35	186.38	
Luksic	7	89.57	103.48	
Total	41	607.91	1 196.8	96.87

Fuente: Fernando Dahse: *Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*, ed. cit., p. 200.

Al término de su estudio, Dahse sostiene que:

[...] en los últimos años [téngase en cuenta que está escribiendo en 1979] se ha generado en la economía chilena un proceso de acumulación y concentración de capitales de una magnitud realmente espectacular. Parece innegable que el control al menos del sector privado de la economía se encuentra en manos de un número muy reducido de grandes grupos económicos; a través de este control esos conglomerados pasan a tener una cuota predominante de poder dentro de la sociedad chilena.

Dahse también menciona el control casi total que dichos grupos ejercen sobre los medios de comunicación del país,³⁶ al tiempo que anota que el crecimiento de la economía nacional «corresponde exclusivamente a la expansión de [esos] grandes grupos».³⁷

El mencionado proceso de concentración de la riqueza se vio acentuado en la década de los ochenta, y aún luego bajo los gobiernos de la Concertación, como lo muestran, entre otros, los estudios de Hugo Fazio. El fenómeno no es extraño pues corresponde a la

³⁶ *Ibidem*, p. 205.

³⁷ *Ibidem*, p. 200.

lógica intrínseca del modelo neoliberal instaurado por la dictadura. Aunque hay que señalar que, al interior de dicho proceso, con la gran crisis financiera de 1982, se verificó un recambio en la importancia de los grupos económicos. Así, dos de los más grandes que emergieran del proceso arriba descrito –los de Cruzat-Larraín y el de Vial– terminarían derrumbándose. El primero había llegado a ser dueño de más de cien empresas, entre las que destacaban el Banco de Santiago, la administradora de fondos de pensiones Provida, las empresas Watt's, Loncoleche, Ladeco, Tricot, Radio Minería, Copec, Editorial Ercilla, entre muchas otras. El grupo Vial, por su parte, controlaba el Banco Hipotecario de Chile (BHC), el Banco de Chile, Somela, Financiera Atlas, entre otras.³⁸ Sin embargo, estos grupos no lograron consolidarse: sucumbieron con la gran crisis de 1982 –ya referida– cuando, altamente endeudados, debieron liquidar sus activos. Sobrevivieron a la crisis otros grupos (entre ellos Fluxa-Yaconi, Cueto, etc.), en tanto emergían al liderazgo del sector los de Angelini, Luksic, Matte y, más tarde, el de Paulman y Sahie. A estos se agregan los de Ponce Lerou y José Yuraszcek, exfuncionarios públicos beneficiados por las privatizaciones pos-crisis de los años ochenta.

Desde el punto de vista ideológico, el régimen pinocheteano, con el control de todos los medios relevantes de difusión de ideas, elaboró un discurso a través de sus intelectuales que racionalizó el referido proceso de concentración de la riqueza en manos de los grupos económicos, con los mismos afanes racionalizadores que empleara para justificar los crímenes y el terrorismo de Estado que paralelamente llevaba a cabo. En ninguno de los dos casos fue original. En efecto, se limitó a repetir los tópicos de la extrema derecha europea, o sea, un pensamiento «foráneo». En el plano propiamente económico, sus intelectuales, Chicagos y gremialistas, sostuvieron, repitiendo rigurosamente los asertos de sus gurúes estadounidenses, que la implementación del modelo neoliberal, con sus consecuencias de extrema desigualdad social, respondía a decisiones técnicas avaladas científicamente, que no tenían nada que ver con ideologías ni intereses particulares y que, en fin, representaban la única opción posible, por lo cual no podían ser

³⁸ Rolando Álvarez: *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, Ed. LOM, Santiago, 2015, pp. 26-27.

objeto de debate público y eran, por el contrario, competencia exclusiva de los expertos.

Para esta visión, como lo señala Tomás Moulian, fuera del capitalismo, en su versión neoliberal, no podía existir racionalidad de cálculo económico. Los intelectuales que argumentaron estos puntos de vista hicieron de los medios de comunicación (*El Mercurio*, *La Tercera* y los canales televisivos) sus lugares de magisterio. Y, más aún, su diagnóstico social se deslizó, poco tiempo después del golpe, desde la crítica a la Unidad Popular a una crítica global al periodo de democracia (1938-1973). Esos años, casi cuarenta, fueron considerados por ellos casi vacíos y desperdiciados.³⁹ Tales planteamientos se hacían en el marco de la proscripción de todo pensamiento disidente.

Los puntos de vista descritos, por obra de los medios de comunicación y del conjunto del sistema cultural fuertemente vigilado, permearon gran parte de la población, la que poco a poco terminará por ver en el neoliberalismo el orden natural de las cosas, con su correspondiente individualismo, rechazo de la política y frenética búsqueda del dinero y del consumo de objetos materiales como fines últimos de la vida. Por otra parte, esas fueron las premisas culturales del futuro sobre endeudamiento de las familias, lo que, en el contexto de la precarización del trabajo (plan laboral de José Piñera), abriría paso, a su vez, al estrés generalizado y a las fuertes tendencias psicológicamente depresivas que, en el marco del orden darwiniano en curso, caracterizarán a la sociedad chilena.

El proyecto político

El proyecto político de la dictadura cívico militar en sus aspectos esenciales respondió ideológicamente a las concepciones nacionalistas y a las Doctrinas de la Seguridad Nacional. La institucionalidad que propugnó fue, en todo caso, concebida como un elemento estrechamente articulado al modelo neoliberal que entonces se instalaba en el país, del cual debía ser el marco político institucional y garantizar su indefinida continuidad en el tiempo.

³⁹ Tomás Moulian: *Chile actual, anatomía de un mito*, Ed. LOM, Santiago, 1997, p. 196.

En esa función objetiva, el proyecto político de la dictadura se tradujo en una propuesta caracterizada por distanciarse del régimen liberal, pese a que formalmente –solo formalmente– optó por mantener algunos de sus elementos. El rechazo a dicho régimen se explica en virtud de que este, a través del sistema de partidos, constituía el orden institucional que mejor permitía la organización autónoma de las clases subalternas haciendo posible que estas, al democratizar con sus luchas el sistema político, pudieran llegar a capturar, con proyecto propio, posiciones dentro del Estado, y eventualmente el propio Gobierno, lo que podría afectar la estructura de la propiedad en perjuicio de las clases dominantes; en tanto que en el terreno internacional, podía ubicar al país fuera del control estadounidense y de las transnacionales. Eso era justamente lo que se había materializado con el gobierno de la Unidad Popular, y que fuera la culminación de un largo proceso, el cual se inició a comienzos del siglo xx con el surgimiento del movimiento obrero, y era la repetición de ese ciclo lo que el gran capital requería impedir. El mecanismo que en el plano institucional debía cumplir esa función era precisamente un régimen antiliberal traducido en una «nueva institucionalidad», que la dictadura denominó como «democracia protegida».

El carácter no liberal del nuevo orden institucional propuesto por el proyecto político de la dictadura quedó en principio perfilado cuando esta sostuvo que no restituiría la «institucionalidad quebrantada», como con toda solemnidad lo había prometido al dar el golpe. Esa decisión se verá confirmada en los trabajos de la Comisión Constitucional creada tempranamente por el régimen, encabezada por Enrique Ortúzar, cuya finalidad era llevar a cabo estudios destinados a elaborar una nueva carta fundamental. En esa comisión participó de manera muy activa Jaime Guzmán, a quien le corresponderá un papel decisivo en el diseño del nuevo orden institucional, que desembocó en la Constitución de 1980.

Guzmán, en el marco del aislamiento internacional de la dictadura derivado de los crímenes que ella estaba cometiendo, encabezó prontamente una corriente al interior del régimen, la cual postuló que el proyecto global del cual este era portador solo podría consolidarse y proyectarse si se institucionalizaba. Guzmán argumentó que no proceder así suponía el riesgo de que el régi-

men entrara en crisis cuando se produjera la desaparición de su líder, esto es, de Pinochet. Las dictaduras personalizadas, señaló Guzmán, al desaparecer quien las encabezaba, siempre presentan problemas sucesorios que ponen en peligro al proyecto, como estaba ocurriendo en España con la muerte de Franco. Eso era lo que, a su juicio, había que evitar en Chile, y ello solo se conseguiría institucionalizando el régimen en plazos previsibles a través de un sólido y legitimado orden constitucional, el cual, sin embargo, por las razones ya indicadas, no podría tener un carácter liberal.

Jaime Guzmán convenció a Pinochet de tales planteamientos, lo que se tradujo en el gradual diseño de un itinerario constitucional que debía institucionalizar (y legitimar) el nuevo orden que la dictadura estaba implantando. En esa perspectiva institucionalizadora, el 11 de septiembre de 1975 se instituyó el Consejo de Estado, órgano consultivo de Pinochet, el cual debía contribuir a avanzar hacia la nueva institucionalidad. En el organismo, junto a diversas personalidades designadas por el régimen, debían participar todos los expresidentes de la República que estuvieran vivos. El expresidente Eduardo Frei Montalva, sin embargo, se negó a ello. Por tanto, se integraron al organismo solo los expresidentes Jorge Alessandri Rodríguez, que lo presidió, y Gabriel González Videla.

Luego, siempre con miras a su institucionalización, la dictadura procedió a promulgar las llamadas Actas Constitucionales, que eran decretos leyes de jerarquía especial, de rango constitucional, que delinearían ciertas bases de la nueva institucionalidad. Las actas fueron cuatro, y se promulgaron a lo largo de 1976. En ellas, entre otros aspectos, se estableció que la nueva institucionalidad no tendría un carácter liberal, sino «autoritario» y «protegido», «dotado de mecanismos que la defiendan de los enemigos de la libertad», desde cuyos supuestos se rechazó lo que la segunda acta denominó como «un mal entendido pluralismo»,⁴⁰ producto del cual, si se lo aceptaba, el nuevo orden institucional a la larga podría ser destruido por sus enemigos. La tercera acta, por su parte, estableció proscripciones ideológicas. En efecto, declaró como «ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República» las doctrinas basadas en la lucha de clases, que atentaran contra

⁴⁰ «Acta Constitucional No. 2», recopilada en Luis Valencia Avaria: *Anales de la República*, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1986, p. 302.

la familia y propugnaran la violencia, formulación que pasará íntegramente al articulado de la Constitución de 1980.

En marzo de 1977, a pocos meses de que las actas constitucionales fueran promulgadas, la dictadura militar, como parte de su proceso de avance hacia la nueva institucionalidad, a través del decreto 1697, declaró disueltos a los partidos no marxistas que hasta entonces se hallaban «en receso»; es decir, a aquellos que habían apoyado el golpe (los otros habían sido proscritos o se habían autodisuelto). La medida se tomaba debido a que esos partidos –sobre todo el Demócrata Cristiano–, en los hechos y pese a las prohibiciones, seguían actuando y fomentando «la confrontación ideológica partidista», cuestión que –señalaba el decreto– el régimen intentaba evitar. Esto significa que para la dictadura tales partidos continuaban orientando su quehacer según los criterios propios del orden demoliberal que definitivamente se aspiraba dejar atrás.

De modo adicional, el decreto fundamentó la medida sosteniendo que ella era necesaria «con el fin de garantizar efectivamente la vigencia de los valores permanentes de la chilenidad».⁴¹ Estas formulaciones, una vez más, evidenciaban el ideologismo de la dictadura, que era el de la extrema derecha; ideologismo que daba por supuesto que el régimen, las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores representarían a la «patria» y a la «chilenidad», respecto de las cuales tendrían el exclusivo monopolio, mientras que todos los demás sectores encarnarían la disolución nacional, cuando no «intereses foráneos».

Meses después, el 9 de julio de 1977, el camino institucional y la conceptualización en que se asentaba quedaron adicionalmente precisados. Ello ocurrió en el discurso que en esa fecha pronunciara Pinochet en Chacarillas, durante un acto nocturno de masas realizado en una de las laderas del cerro San Cristóbal de Santiago. Allí, luego de los correspondientes ceremoniales patrióticos animados por sus epígonos, sobre todo jóvenes (pues la fecha correspondía al recientemente designado Día de la Juventud), Pinochet explicitó que el itinerario institucional que impulsaba la dictadura excluía el retorno a un régimen demoliberal. Al respecto planteó: «es conveniente reiterar una vez más que el 11 de septiembre no significó

sólo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado, *sino que representó el término de un régimen político institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo*. No se trata, pues, de una tarea de "mera restauración". En lugar del viejo orden institucional, agregó que debía edificarse «una nueva democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnicada y de auténtica participación social», la cual reemplazaría a lo que definió como «Estado liberal clásico, ingenuo e inerme». ⁴² Para avanzar en esa dirección, Pinochet definió tres etapas. La primera, que duraría hasta 1980, sería la de «recuperación», en la cual la dictadura mantendría los rasgos que tenía hasta la fecha. La segunda etapa, que denominó de «transición», duraría hasta 1985. En ella los civiles aumentarían su presencia, aunque Pinochet se mantendría como el jefe del Gobierno y del Estado, al tiempo que se procedería a nombrar una Cámara Legislativa, en la cual solo Pinochet tendría el derecho de iniciativa de ley, mientras que la Junta mantendría el poder constituyente y el derecho a veto ante cualquier proyecto de ley que considerara como atentatorio a la seguridad nacional. La tercera etapa, que recibió el nombre de «normalidad» o «consolidación», se verificaría a partir de 1985. En ella el poder sería «ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose a las Fuerzas Armadas y de orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas». Esto significa que las Fuerzas Armadas no abandonarían sus funciones políticas y que solo se retirarían a una segunda línea, «cautelando» desde allí todo el orden institucional. Durante esta tercera etapa debería entrar en funcionamiento la nueva Constitución. ⁴³

Entre los partidarios de la dictadura hubo opositores a este curso institucionalizador. Los Chicago Boys hubieran querido postergarlo hasta cuando el modelo neoliberal se hubiera materializado plenamente y se hubieran obtenido los resultados que de él se esperaban con su correspondiente sustancial disminución de

⁴² Augusto Pinochet: «Discurso de Chacarillas», recopilado por Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, ed. cit., pp. 445 y ss. Las cursivas son mías.

⁴³ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., p. 336.

tamaño del Estado. Pero no terciaron de modo significativo en el debate, como fuera el caso de los sectores nacionalistas. Estos, calificados por la prensa de «duros», y que al interior de la dictadura ya habían sido derrotados en lo referente a la cuestión del modelo económico a implantar, fueron contrarios a la referida idea institucionalizadora. Frente a ella, como se dijo en el capítulo 17, se manifestaron partidarios de mantener el poder de Pinochet sin plazos ni limitaciones jurídicas, sustentando el régimen en el apoyo popular que debía concitar un movimiento pinochetista. Pero una vez más serían derrotados.

El obstáculo principal con que se encontró el proceso en curso vendría de la FACH y, en particular, de su comandante, Gustavo Leigh. Como es sabido, desde el comienzo este pretendió disputar a Pinochet el liderazgo de la dictadura, considerando, al parecer, que aquel se había plegado al golpe a última hora, mientras que él –Leigh– había sido uno de sus primeros impulsores dentro de las filas. En esta pugna Leigh se apoyó en los generales de la FACH, con quienes, institucionalmente, debatía sobre los temas de gobierno. Siempre en soterrada pugna con Pinochet, luego de comprobar que ante la imposición plena del neoliberalismo fracasaba su estatuto social de la empresa, Leigh acentuó su posición crítica, la que se fue ahondando con el tiempo, hasta llegar a expresarse abiertamente en el plano político, cuestión que ocurrió a propósito del proyecto de institucionalización de régimen, cuyas etapas fueran señaladas por Pinochet en su discurso de Chacarillas. Discrepando con los términos de este, Leigh postuló un retorno al orden civil en plazos más breves, al tiempo que consideró que no era necesario promulgar una nueva Constitución y que bastaba con reformar la de 1925. Con ello la crisis al interior del régimen se vio fuertemente agudizada. En esas circunstancias, según Ascanio Cavallo, en la FACH se llegó incluso a planificar un golpe fulminante, que debía ser incruento, el que depondría a Pinochet. El plan golpista, que debía materializarse en mayo de 1978, finalmente no se ejecutó debido a que sus estrategias concluyeron en que no tenía su éxito asegurado y, además, que encontraría resistencias destinadas a traducirse en bajas elevadas.⁴⁴

⁴⁴ Sobre este tema, véase, Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, ed. cit., p. 305.

Esta grave crisis en las cúpulas tendrá su desenlace en julio del mismo año, luego de que Leigh hiciera declaraciones a un diario italiano en las que postuló la necesidad de retornar a plazos menores al orden institucional. Pinochet respondió con un incruento golpe palaciego y lo destituyó de su cargo en la Junta de Gobierno, lo que vino seguido de un verdadero descabezamiento de la FACH derivado de la renuncia de gran parte de su generalato. El resultado de todo fue la definitiva personificación de la dictadura. Ningún sector de la derecha ni del gran empresariado apoyó a Leigh. Era Pinochet quien los representaba.

Sin competencia al interior del régimen, Pinochet modificó el itinerario de Chacarillas. El 11 de septiembre de 1978 anunció que desde agosto la Comisión Ortúzar tenía listo un anteproyecto de Constitución, el que pasaría al Consejo de Estado a los fines de que este hiciera sus observaciones, luego de lo cual lo devolvería a la Junta de Gobierno. En octubre de ese año, el anteproyecto se entregó efectivamente al Consejo de Estado, el que procedió a estudiarlo durante más de un año y medio.

Bajo el decisivo influjo de Jorge Alessandri, el Consejo de Estado introdujo algunas modificaciones al proyecto, las que acentuaron ciertos elementos del constitucionalismo clásico, sin por ello afectar los rasgos autoritarios y excluyentes que al proyecto le eran propio. Dentro de tales modificaciones destacan las que garantizaban la supremacía del poder civil frente a los militares.

A fines de junio de 1980, Pinochet, una vez que tuvo en sus manos el anteproyecto constitucional ya revisado por el Consejo de Estado, procedió a formar un grupo *ad hoc* con personas de su exclusiva confianza. Estas, siguiendo sus lineamientos, debían analizar lo obrado por el Consejo y dar forma al proyecto definitivo, el que sería sometido a plebiscito. Como resultado de ello, y mediante un trabajo de solo ocho días, el mencionado grupo *ad hoc* purgó las principales modificaciones que el Consejo de Estado, a lo largo de un año y medio de trabajo, le introdujera al proyecto, y más aún, reforzó aquellos rasgos que calzaban con las concepciones autoritarias y de la Seguridad Nacional.

El 12 de agosto de 1980 se promulgó el decreto que convocaba a la ciudadanía a pronunciarse sobre el proyecto de Constitución, el cual se dio a conocer profusamente. El plebiscito se celebró

el 11 de septiembre de ese año. Se verificó sin registros electorales, sin libertades para la oposición, con las vocalías copadas por los adherentes al régimen, bajo estado de excepción, con proscripción de los partidos políticos, control total de los medios de comunicación y, en fin, con cédulas que traslucían la opción marcada. El resultado arrojó oficialmente una aprobación que alcanzó al 67.04 % de los votos emitidos. Tal fue el origen de la Constitución de 1980. Su fecha de entrada en vigencia se fijó para el 11 de marzo de 1981, aunque no para el conjunto de su articulado, según se verá.⁴⁵

Una de las particularidades de dicho plebiscito radicó en que, junto con someter a consulta el texto constitucional mismo, estipuló que su aprobación conllevaba la aceptación ciudadana para que Pinochet siguiera al frente del Estado por los siguientes ocho años. Inicialmente, los estrategas del régimen pensaron que ese lapso fuera de dieciséis años, lo que, claro está, era difícilmente presentable. De allí que luego optaran por fraccionarlo en dos periodos de ocho años cada uno. El primero se extendería entre 1981 y 1988. El segundo, que iría entre 1988-1996, quedaría sujeto a los resultados de un plebiscito que debía celebrarse en 1988, en el que Pinochet sería candidato único. Esta fue la opción que los estrategas del régimen adoptaron finalmente y la que se llevaría a la práctica.

Dichos estrategas, en todo caso, esperaban que el plebiscito de 1988 sería un mero trámite que se ganaría con facilidad debido a que en esa fecha los frutos del modelo neoliberal serían apreciados si no por todos, al menos por la gran mayoría de los chilenos. Entonces, triunfante el «Sí», que otorgaría a Pinochet otros ocho años de gobierno, haría que se cumplieran los dieciséis inicialmente considerados. Pero la crisis política del régimen, que se abriera con el estallido de la gran recesión de 1982, lo cambiará todo y hará que el plebiscito de 1988, cumpla otros fines, muy diferentes a los planificados en un inicio por los estrategas de la dictadura.

La Constitución de 1980

La Constitución de 1980 representó aquella idea de Jaime Guzmán que postulaba un poder fuerte que garantizara la esfera privada y

⁴⁵ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., p. 341.

que hiciera imposible la emergencia de sujetos que propiciaran proyectos alternativos al existente. Con esas miras, la carta estableció un régimen político de «democracia protegida», con exclusiones políticas e ideológicas, a la par que consagró el carácter subsidiario del Estado como lo requerían los grupos económicos; todo tutelado por las Fuerzas Armadas a las cuales se les asignó el papel de garantes de la institucionalidad. Lo particular de este esquema radicaba en que, no obstante, se revestía de constitucionalismo clásico –por tanto, liberal–, con su respectiva división de poderes, garantías individuales e incluso sistema de partidos, aunque neutralizado por los componentes autoritarios que le daban su sello al texto constitucional.

En lo referente a las exclusiones ideológicas y políticas, ellas quedaron sintetizadas en lo fundamental en el artículo octavo de la carta, que, repitiendo literalmente lo dispuesto en el Acta Constitucional número 3, estableció que «todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República». Y añadía: «las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales».

El carácter subsidiario del Estado quedó definido en el artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución, el que señalaba que «el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza». O sea que normalmente, sin dicha ley de quórum calificado, el Estado no podría incursionar en «actividades empresariales», las que, por tanto, quedarían en exclusiva en manos del sector privado. Con ello la Constitución de 1980 liquidaba al modelo ISI.

Por otra parte, la Constitución, si bien admitió el voto popular, dispuso de mecanismos que permitían neutralizarlo del todo. Tales mecanismos eran, al menos, los siguientes. Primero, la composición del Senado, un tercio de cuyos miembros serían designados o accederían al cargo por derecho propio. Con base en este tercio y al sistema binominal, al Ejecutivo le sería fácil disponer la mayoría

de la Cámara Alta. Se estableció que para aprobar leyes se requeriría adicionalmente solo de un tercio de la Cámara de Diputados. Dicho de otra manera, las mayorías parlamentarias quedarían configuradas con la mayoría del Senado y un tercio de la Cámara de Diputados, fácilmente obtenibles por los sectores conservadores. En segundo lugar, cabe mencionar al Tribunal Constitucional, formado por siete miembros, dos de los cuales serían nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional. Con sus facultades para ejercer el control de la constitucionalidad de los proyectos de ley, este organismo, de hecho, se convertía en una tercera Cámara. En tercer lugar cabe mencionar el papel tutelar de las Fuerzas Armadas y las amplias atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, a lo que se agregaba el sistema binominal. Estos mecanismos hacían que el sufragio universal reconocido por la Constitución fuera irrelevante al momento de la toma de decisiones.

En cuanto al papel tutelar de las Fuerzas Armadas sobre el conjunto del orden institucional, el punto quedó estipulado en el artículo 90, inciso dos de la Constitución, que establecía que «las Fuerzas Armadas [...] son esenciales para la seguridad nacional y *garantizan el orden institucional de la República*», lo que en los hechos significaba que debían garantizar la vigencia de la Constitución de 1980. A ello se agregaba el que los comandantes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros serían inamovibles en sus cargos, debiendo, en todo caso, ser nombrados por el presidente de la República entre las cinco mayores antigüedades.

No eran solo esas las funciones políticas que la Constitución atribuyó a las Fuerzas Armadas. En efecto, les entregó otras, no menos importantes. Una de ellas consistía en que asumirían como senadores «un excomandante en jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea y un exdirector general de Carabineros que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años, elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional» (art. 45, letra D»). Ello dio lugar a lo que más tarde se conocería como la «bancada militar». A lo dicho hay que agregar el papel que se les asignó a las instituciones de la defensa dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo estaba conformado por siete miembros, cuatro de los cuales eran uniformados: los comandantes en jefe de cada rama de la defensa más el director general de Carabineros. El

Consejo, que podía autoconvocarse, tenía amplísimas facultades, entre las cuales –aparte de las que ya mencionamos referente a la nominación de cuatro senadores entre excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros– figuraba el derecho de «representar a cualquiera autoridad establecida por la Constitución, su opinión frente a algún hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional» (art. 96). Además, como ya se dijo, el Consejo de Seguridad Nacional designaba dos miembros de los siete que conformarían el Tribunal Constitucional. En suma, un poder de primer orden.

Los señalados rasgos de la Constitución se combinaron con otros orientados a impedir la influencia de los partidos (del futuro) en las organizaciones sociales, para prohibir a los miembros de estas tener militancia partidaria y acceder a cargos políticos, pálida reminiscencia del concepto de Vásquez de Mella sobre las soberanías sociales, al igual como lo fuera el establecimiento de los Consejos de Desarrollo Comunal (Codecos) y regional (Coredes).

En cuanto a su eventual reforma, la Constitución de 1980 tenía un carácter rígido. En efecto, su modificación necesitaba de la aprobación de las tres quintas partes, o sea, del 60 % de los miembros de cada cámara, quórum que con los senadores designados y el sistema binominal sería imposible conseguir. Aparte de ello, la eventual reforma de su texto requería de su ratificación por el Congreso pleno en sesión verificada sesenta días después de que cada cámara (con el 60 % de sus votos) la aprobara por separado.

Otro aspecto notable de la Constitución de 1980 reside en que gran parte de su articulado, como el referente a la conformación del Congreso Nacional, regiría solo a partir de ocho años después de la formal entrada en vigencia de su texto.

El articulado transitorio de la Constitución

El articulado transitorio de la Constitución de 1980 reviste una particular importancia debido a que normaba el paso hacia su vigencia plena, es decir, del conjunto de su articulado permanente, lo que debía ocurrir solo ocho años después de que la carta comenzara a regir.

En relación con esa materia, los artículos transitorios establecieron que antes de cumplirse los primeros ocho años de la entrada en vigencia de la Constitución —es decir, en 1988—, la Junta de Gobierno, por la unanimidad de sus miembros, debía proponer al país un candidato único para el siguiente periodo presidencial (1988-1996). Ese nombre sería plebiscitado con las alternativas de «Sí» y «No». En el caso de que triunfara el «Sí», el candidato único propuesto por la Junta, nueve meses después de asumir la presidencia de la República, debería convocar a elecciones mediante las cuales se conformaría el Congreso Nacional. Y si triunfaba el «No», el presidente en funciones, esto es, Pinochet, seguiría en el cargo un año más, luego de lo cual se convocaría a elecciones competitivas para presidente y para el Congreso Nacional.

En síntesis, la Constitución de 1980 vino a representar en el plano jurídico los rasgos autoritarios y excluyentes del proyecto político de la dictadura (la «democracia protegida»), el que mediante esta carta pretendía institucionalizarse y proyectarse a largo plazo sobre una base económica precisa: el modelo neoliberal de los grupos económicos locales y transnacionales.

Lugar de la dictadura cívico militar en la historia de Chile reciente

Para responder a la pregunta sobre el lugar que ocupa la dictadura cívico militar en la historia de Chile reciente, es necesario hacer una recapitulación, la que debe tener en cuenta a lo menos dos cuestiones principales. La primera se refiere a la contradicción que ya desde los años cincuenta se planteó entre los intereses del megaempresariado, por un lado; y el estado de compromiso y el modelo ISI, por el otro.

En relación con este punto hay que recordar que ya desde los tempranos años cincuenta las organizaciones del gran empresariado —como viéramos en el capítulo 8— venían postulando que los problemas económicos y sociales del país tenían un carácter estructural. Estos, a su juicio, consistían en el excesivo poder de los sindicatos, lo que se traducía en niveles salariales difícilmente compatibles con la rentabilidad empresarial, a lo que se agregaba el sistema previsional, que tenía análogos efectos. A esto se añadía

el papel de los partidos y los gobiernos. Estos últimos, a través de su política de precios, reajustes salariales y excesivo gasto fiscal, generarían una elevada inflación, que no solo limitaba la rentabilidad del capital, sino también la inversión y, por tanto, el crecimiento, condicionando así la pobreza del país.

Como se viera en el capítulo 8, tales planteamientos fueron expresados con toda claridad en 1955 por Jorge Alessandri Rodríguez, entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. En el fondo, lo que se evidenciaba a través de sus palabras no era sino la necesidad que había de resolver la arriba mencionada contradicción. Esto es, aquella existente entre el «estado de compromiso» y el modelo ISI, por un lado; y los intereses de los grupos económicos, por el otro.

La solución que frente a este cuadro empezó a postular el gran empresariado –y luego los partidos de la derecha– consistió en la restricción del poder de los sindicatos a través de una nueva ley laboral; el cambio del sistema previsional que implicaba un considerable costo para las empresas; la liberalización del sistema de precios; la disminución del poder de los partidos que «demagógicamente» trasladaban hacia los poderes del Estado las demandas de los sindicatos; el estímulo a la inversión extranjera; la apertura de la economía al exterior; la disminución del gasto fiscal y, en fin, la instauración de gobiernos fuertes, capaces de garantizar a través de «soluciones técnicas» y no políticas o «demagógicas», la rentabilidad empresarial; es decir, la acumulación del capital. En resumen, todo un proyecto global, que, de hecho, debía competir con los que entonces levantaban el centro demócrata cristiano y la izquierda, a los que se requería derrotar.

Finalmente, las mencionadas demandas empresariales no podrán resolverse al interior del régimen institucional, por lo demás, crecientemente democratizado desde 1958 en adelante. Tal imposibilidad se vinculaba a un problema de correlación de fuerzas: en ese régimen los empoderados sujetos mesocráticos y populares no aceptarían las reformas requeridas por la acumulación del capital. La solución para el gran empresariado, por tanto, tendría que operar por fuera del orden institucional, esto es, a través de la intervención militar, lo que suponía interpelar a los uniformados (de allí la profesión de fe ultrapatriótica que entonces empezó a

exhibir la derecha). Y, más aún, suponía el establecimiento de una alianza de la derecha y del megaempresariado con las Fuerzas Armadas, lo que terminó llevándose a cabo exitosamente, hasta culminar en el golpe del 11 de septiembre.

Desde esta óptica, el lugar de la dictadura cívico militar en la historia del Chile reciente consistió en resolver la contradicción entre el estado de compromiso y el modelo ISI, por un lado; y la acumulación del capital, por la otra, en favor de esta última, derrocando al orden institucional vigente y destruyendo mediante crímenes masivos a las organizaciones sindicales y políticas de izquierda e instaurando el modelo neoliberal que en los años anteriores los principales grupos económicos habían venido haciendo suyo. Con ello, de paso, la dictadura revertía los procesos democratizadores en curso en el país desde fines de los años treinta, y contribuía decisivamente, a su vez, a la derrota de los otros dos proyectos globales en competencia –los del centro y de la izquierda–, que unidos representaban a más del 80 % del país.

La segunda cuestión que debe considerarse para responder a la pregunta sobre el lugar de la dictadura cívico militar en la historia reciente de Chile guarda relación con los factores externos. Se trata de las fuertes posibilidades que desde fines de los años cincuenta empezó a tener en Chile –en el marco del triunfo de la Revolución Cubana– el proyecto impulsado por los sujetos populares, cuya expresión política eran los partidos de izquierda. Estos, bajo el liderazgo de Salvador Allende, vieron aumentar significativamente sus posibilidades de acceder al gobierno. La materialización práctica de esta alternativa no solo atentaría en contra de los intereses del megaempresariado local y transnacional, sino también en contra del control estadounidense sobre América Latina. Este riesgo se acentuó en 1970 con el triunfo de la Unidad Popular y el ascenso de Salvador Allende a la primera magistratura.

En este sentido, el lugar de la dictadura cívico militar en la historia reciente de Chile consistió en restituir el país dentro de la esfera estadounidense y de las ETN, impidiendo la implementación de un proyecto nacional independiente de Washington.

Dentro de esa lógica fue que la dictadura alineó su política externa con el gobierno estadounidense, comenzó a entregar a las empresas transnacionales el cobre que Salvador Allende había

recuperado para el país, así como también otros recursos económicos, entre ellos los naturales, al tiempo que favorecía el control del sistema financiero por entidades extranjeras. Igualmente promulgó el Decreto Ley 600 que otorgaba al capital foráneo el mismo trato que el nacional. Todo, por cierto, en contradicción con su discurso nacionalista y de su proclamado rechazo a la influencia «foránea»; discurso que, en consecuencia, se evidenció como una mera retórica destinada a justificar los crímenes masivos cometidos sobre aquellos sujetos que propugnaban un proyecto nacional e independiente del capital extranjero.

Capítulo 19

El viraje del Partido Demócrata Cristiano: orígenes de la idea de Concertación¹

Y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y figuraciones de los partidos y su organismo efectivo y sus intereses efectivos, entre lo que se imaginan ser y lo que realmente son.

Carlos Marx: «El 18 de Brumario de Luis Bonaparte»,
en C. Marx y F. Engels: *Obras escogidas*,
E. Progreso, Moscú, s. f., p. 117.

Durante la dictadura cívico militar se produjeron profundas transformaciones ideológicas y políticas en el Partido Demócrata Cristiano, así como también entre amplios sectores de la izquierda. Más aún, tanto en unos como en otros, en diversa medida, ello implicó un abandono explícito de las utopías que profesaran con anterioridad.

Uno de los resultados de esos procesos fue la aparición de la idea de Concertación, proyecto político que se materializaría del todo a fines de los años ochenta, pero que encuentra sus bases conceptuales ya durante los setenta, particularmente luego de que la Democracia Cristiana fuera disuelta por la dictadura.

La idea de Concertación es de origen demócrata-cristiano. Sin embargo, su materialización práctica probablemente no hubiera sido posible sin la metamorfosis de las identidades producidas en el grueso de la ex-Unidad Popular, en particular en el Partido Socialista, metamorfosis que fue conceptualizada por estos como una «renovación».

¹Una primera versión de este capítulo figura en mi libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Editorial América en Movimiento, Santiago, 2018, pp. 411-426.

La idea de Concertación en el Partido Demócrata Cristiano

¿De dónde arranca la reflexión de la Democracia Cristiana conducente a la idea de Concertación? Arranca de haber constatado una inesperada derrota política total. En efecto, la dictadura emergida el 11 de septiembre de 1973 implementó a plenitud el proyecto de la derecha más vinculada al megaempresariado y a los intereses del capital extranjero, lo que excluía del todo al Partido Demócrata Cristiano, al cual incluso proscribiera. Ello ocurrió cuando la colectividad daba pasos para renovar su directiva, reemplazando a Patricio Aylwin en la presidencia de la colectividad por Andrés Zaldívar. Entonces, en marzo de 1977, a través de un Decreto Ley, la dictadura procedió a disolver el partido, arguyendo que había violado el receso político. Más tarde expulsaría del territorio nacional al propio Zaldívar.²

Bajo la dirección de Patricio Aylwin, el Partido Demócrata Cristiano había apoyado decididamente al régimen pinocheteano, suponiendo que este sería funcional a sus propósitos, esto es, que en un plazo prudente llamaría a nuevas elecciones, luego de lo cual las instituciones demoliberales serían restauradas, en cuyo contexto, mediante esos comicios, la Democracia Cristiana reasumiría el gobierno. Como es sabido, esto estuvo lejos de ocurrir, lo cual fue traumático para la colectividad, cuyos esfuerzos por cooptar a los militares, apoyando a su régimen, fracasaron absolutamente.

Estos desenlaces contrastaban con las expectativas optimistas forjadas hasta hacía poco por el partido. Como se recordará, según relata Cristian Gazmuri, poco antes del golpe, Eduardo Frei, en referencia a los militares, le había dicho a uno de sus colaboradores: «nos van a llamar», lo que refleja la convicción que tenía la cúpula partidaria de la Democracia Cristiana en orden a que el golpe se traduciría en su re acceso al poder. No sucedió así, y, por el contrario, resultó que el partido más poderoso de Chile hasta antes del golpe quedó marginado del poder y, aun más, perseguido por la dictadura militar que él mismo tan decisivamente había contribuido a instaurar. Dicha dictadura incluso lo acusó de haber sido

²Luis Corvalán Marquez: *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo*, ed. cit., pp. 220-221.

uno de los principales causantes de la crisis nacional que, según los uniformados, desembocara en el golpe. Todo, pues, no dejaba de ser desconcertante.

A ello agréguese las masivas violaciones de los derechos humanos, traducidas en los crímenes masivos referidos en capítulos anteriores, y el hecho de que quizás en el fondo la colectividad, o sectores suyos, comenzó a darse cuenta de que su esfuerzo opositor a Salvador Allende había sido funcional a la implantación de un régimen que no respondía a sus proyectos e intereses. No menos lacerante debió ser para este partido comprobar que sus hasta hacía poco aliados de la derecha, con quienes se había asociado para supuestamente «defender la democracia» frente a la amenaza de la izquierda, habían usufructuado de sus esfuerzos y de sus luchas en aras de fines del todo distintos a los proclamados por la retórica de la oposición al gobierno de la Unidad Popular.

En ese cuadro, y ya durante su infructuoso apoyo a la dictadura, el Partido Demócrata Cristiano requirió discernir más detenidamente las causas de fondo de los procesos en curso, en particular de los factores conducentes al derrumbe del régimen institucional, para, a la vez, definir una línea de acción políticamente operante que restituyera al partido como una opción de poder. A la larga, de aquí resultará la idea de Concertación. Es posible destacar tres momentos decisivos en el proceso conducente a dicha idea. Al respecto, en primer lugar cabe referirse a las reflexiones de Eduardo Frei Montalva.

El expresidente, en su opúsculo *El mandato de la historia y las exigencias del porvenir*, analizó los sucesos nacionales remontándose hasta las postrimerías de su gobierno. Concluyó en que el Partido Demócrata Cristiano no pudo triunfar en 1970 en virtud de sus tendencias aislacionistas y su incapacidad para establecer alianzas con otras fuerzas políticas. En dicho opúsculo, evaluando la posición del Partido Demócrata Cristiano a fines de los años sesenta, señaló: «no supimos ser unidos y realistas para continuar la tarea que comenzó el año 64, buscando el amplio concurso en otros sectores sociales y políticos». ³ Ese era el error que ahora se requería subsanar: había que conseguir aliados.

³ Eduardo Frei: *El mandato de la historia y las exigencias del porvenir*, Ed. ICLA, Colombia, s. f., pp. 69-70.

Teniendo en cuenta que sus exsocios de la derecha prácticamente en su totalidad se habían alineado con la dictadura, de la que formaban parte, Eduardo Frei concluyó en que la superación del aislacionismo de la Democracia Cristiana y su reemplazo por alianzas amplias debían operar ganando el apoyo de un sector de la izquierda. En función de esto se requería hacer un esfuerzo por estimular un realineamiento político e ideológico de ciertos partidos de la Unidad Popular, cuidando a la vez de aislar dentro de ella al Partido Comunista. Con dichos sectores y otros debería crearse una «nueva izquierda», con la cual sería entonces posible llevar a cabo las alianzas políticas y estratégicas conducentes a superar el aislacionismo.

En esa perspectiva Eduardo Frei hizo fervientes llamados a ciertos sectores de la Unidad Popular: «esperamos que hombres que han apoyado tradicionalmente a la izquierda chilena, y sobre todo las juventudes que han visto el derrumbe de estas concepciones, reflexionen sobre estos hechos y sean capaces de abrirse ante nuevas posiciones que les permitan hacer eficaz su deseo y su voluntad de que en Chile exista una real democracia y que realmente el pueblo encuentre una respuesta». Y agregó: «insistir en los viejos planteamientos dogmáticos no hace, pues, sino favorecer a los enemigos de la democracia». Y concluía: «en este momento debemos superar muchas diferencias, grandes o pequeñas, para que esa mayoría pueda expresarse. En ella caben los más diversos sectores del país que pertenecen o no a partidos tradicionales y también quienes sostienen la posibilidad de un socialismo democrático, como ocurre en los movimientos social-demócratas de toda Europa occidental».⁴

Con posterioridad, en 1977, habiendo sido ya disuelta la Democracia Cristiana por la dictadura, Eduardo Frei, en su libro *América Latina: opción y esperanza*, retomó esta problemática, aunque en un contexto más amplio y la conceptualizó en torno a la necesidad de materializar la unidad entre los humanismos laico y cristiano. Significativamente, Frei advirtió que la confluencia de ambos suponía, por parte del humanismo laico (de la izquierda), «la renovación de sus fuentes inspiradoras».⁵

⁴ *Ibídem*, p. 99.

⁵ Eduardo Frei: *América Latina: opción y esperanza*, Ed. Pomaire, Barcelona, 1977, p. 226.

Ese mismo año, en el mes de octubre, el Partido Demócrata Cristiano dio a conocer en el exterior un documento que llevaba como título *Una patria para todos*. Su contexto estaba conformado no solo por la disolución legal de la que había sido víctima por parte de la dictadura, sino también por los avances que, inspirados por Jaime Guzmán, esta llevaba a cabo en sus propósitos de institucionalizarse. Téngase en cuenta que en julio, en su discurso de Chacarillas, Pinochet había trazado todo un itinerario que debía culminar en la normalidad institucional.

En ese contexto, en *Una patria para todos*, el Partido Demócrata Cristiano postuló la necesidad de llevar a cabo una «restauración democrática», la que, no obstante, no debía operar de inmediato, sino gradualmente. «Estimamos acertado [sostuvo] que la restauración de la democracia deberá ser gradual».⁶ Y lo que es más importante aún, con la participación del régimen. «La necesidad inevitable de cambios profundos implicará la colaboración incluso de quienes pertenecen al sistema»,⁷ añadió. El documento adicionalmente propuso «un reagrupamiento del pueblo chileno», dejando atrás la oferta que en 1974 Aylwin le hiciera a la dictadura según la cual la Democracia Cristiana le ayudaría a combatir a la clandestinizada izquierda a cambio de que aquella le levantara el receso político. Dejando dicha oferta en el pasado, ahora se trataría de la conformación de «un gran movimiento nacional de restauración democrática».⁸ No obstante, el Partido Demócrata Cristiano descartaba que con esos propósitos se formara una alianza política amplia que incluyera al conjunto de la oposición a la dictadura, como el Frente Anti Fascista que había propuesto el Partido Comunista. En *Una patria para todos* se señalaba al respecto: «La formación de frentes tradicionales inevitablemente dirigidos desde el exterior no ayuda a la causa de la restauración democrática»,⁹ tesis que se explica por dos órdenes de factores. Por un lado, por el hecho de que la «restauración democrática» postulada por el Partido Demócrata Cristiano debía hacerse de

⁶ Partido Demócrata Cristiano: *Una patria para todos*, Casa de Chile, México, 1977, p. 11.

⁷ *Ibíd.*, p. 9.

⁸ *Ibíd.*, p. 11.

⁹ *Ibíd.*, p. 10.

acuerdo con la dictadura; y, por el otro, con el apoyo y patrocinio del gobierno de Washington. La presencia del Partido Comunista en una alianza amplia era incompatible con tales premisas.

Según *Una patria para todos*, el carácter gradual de la restauración democrática debía materializarse en tres fases. Durante la primera debía producirse un reestablecimiento inmediato de los derechos fundamentales. Durante la segunda tendría que verificarse análogo restablecimiento de los derechos de asociación, reunión, autonomía universitaria, derechos laborales y conformarse una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal cuyo objeto sería elaborar una nueva Constitución; mientras que la tercera etapa marcaría la vigencia del nuevo texto constitucional y, por tanto, el traspaso del poder desde los militares a los civiles.

Cabe observar un par de características que presenta este documento. La primera radica en que no cuestionó en modo alguno el proyecto económico de la dictadura, es decir, el modelo neoliberal que respondía a los intereses de los grupos económicos y de las transnacionales, al cual el texto no se refirió. En segundo lugar, tampoco abordó los temas de verdad y justicia emanados de los crímenes del régimen. Estos elementos fueron prefigurando los rasgos que con posterioridad caracterizarán cierta lógica concertacionista y a la misma transición hacia regímenes civiles.

Durante los años siguientes, la Democracia Cristiana no obtuvo de la dictadura nada de lo que planteara *Una patria para todos*. Por el contrario, el régimen siguió avanzando decididamente hacia su institucionalización y hacia la implantación del modelo neoliberal. Frente a ello, la cúpula de la Democracia Cristiana, en reunión celebrada el 27 de junio de 1979, resolvió tomar medidas adicionales. Estas consistieron en buscar concertarse con otros partidos e impulsar en conjunto la movilización social con el fin de presionar a la Junta de Gobierno a que se abriera al cambio. Dicha Concertación excluía a los partidos «marxistas leninistas» por las razones indicadas arriba.

Pero quizás lo más importante que entonces resolvió impulsar el Partido Demócrata Cristiano fue comenzar a elaborar un proyecto alternativo que debía dotar de un contenido político mayor a la movilización social que postulaba, como así también a la Concertación de partidos que debía respaldarla. La elaboración de ese

proyecto, sin embargo, recién comenzará en 1982, en medio de la gran crisis recesiva, la cual preludiva la crisis de la dictadura misma.

Fue en diciembre de ese año cuando Alejandro Foxley publicó en la revista *Estudios Cieplan* (Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica) un artículo que llevaba como título «Algunas condiciones para una democracia estable: el caso de Chile». En él analizó las causas del derrumbe de la democracia en el país, en el cual ya no culpó a la izquierda, como lo hiciera el Partido Demócrata Cristiano durante la década anterior, sino que identificó a un complejo de factores determinantes en los que todos los actores políticos habrían tenido alguna responsabilidad. Según ese análisis, el derrumbe de la democracia en el país se habría debido a la ruptura de los consensos entre los suscriptores del estado de compromiso generado en los años treinta. El consenso roto sería aquel establecido entre las clases medias, los sectores populares y los empresariales, verificado en torno al proceso de industrialización sustitutiva. Como consecuencia de ello, según Alejandro Foxley, el crecimiento del peso del Estado, supuestamente dirigido por la clase media, más la radicalización de la izquierda hicieron que se agudizara la «percepción de amenaza por parte de los sectores empresariales y de derecha, los que terminaron buscando soluciones políticas de reemplazo del régimen democrático».¹⁰ Esto era lo que habría estado en la raíz de la crisis de la democracia en Chile.

Por tanto, una recuperación democrática suponía, a juicio de Foxley, una reconstrucción de los consensos rotos, lo cual solo sería posible si cada actor renunciaba a hacer política desde proyectos cerrados y excluyentes.¹¹ Esto, de hecho, significaba implícitamente que cada uno de ellos dejaría de cuestionar las relaciones de propiedad existentes, por cuanto tales cuestionamientos eran los que, al perjudicar los intereses del gran empresariado y de la derecha, llevaban a que estos respondieran impulsando soluciones autoritarias y fuera del orden institucional.

Foxley expuso tales planteamientos justo cuando la dictadura se hallaba en la segunda etapa de sus privatizaciones, o sea, cuando

¹⁰ Alejandro Foxley: «Algunas condiciones para una democracia estable: el caso de Chile», *Estudios Cieplan*, diciembre de 1982, p. 146.

¹¹ Ídem.

traspasaba a manos del gran empresariado no ya las empresas nacionalizadas o intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular, sino también aquellas otras creadas durante décadas bajo el alero de la Corfo. Al no cuestionar este traspaso de la propiedad estatal a los grupos económicos —ello con el fin de instaurar una «democracia estable» en los términos explicados—, las propuestas de Foxley suponían, por tanto, asumir el proyecto económico de la dictadura, aunque quizás con variaciones menores. Ciertamente una transición hacia un régimen civil en estos términos no constituiría en los hechos sino un mero recambio neoliberal, como sucederá en efecto.

Las mencionadas ideas de Foxley serán claves para el concepto de Concertación. En efecto, ellas fueron asumidas formalmente por el Partido Demócrata Cristiano, que las desarrolló en su llamado Proyecto Alternativo, dado a la publicidad en 1984, en plenas protestas nacionales. Esta coyuntura representa el momento definitivo en el cual la idea de Concertación fue explicitada del todo y asumida como política por parte de la colectividad.

El Proyecto Alternativo, al igual como lo hiciera Foxley en el artículo señalado, diagnosticó las causas del derrumbe de la democracia en Chile. Al respecto destacó la existencia de «una elite política profundamente dividida e incapaz de llegar a acuerdos debido a sus proyectos ideológico-políticos totalizantes y en cierto sentido irreconciliables»; y la existencia de «sectores empresariales cada vez más amplios que veían crecientemente cuestionado su papel en la sociedad».¹²

Estos factores, según el Proyecto Alternativo, habrían dado lugar a que el sistema político chileno entrara en «una situación crítica de confrontación con polarización extrema, en que la concertación se hizo imposible».¹³ De allí el colapso democrático verificado en septiembre de 1973. En consecuencia, el derrumbe de la democracia habría sido el resultado de la falta de capacidad para concertarse por parte de los actores políticos y sociales sin herir los intereses del gran empresariado.

¹² Partido Demócrata Cristiano: «Proyecto alternativo», *La Tercera* (suplemento), Santiago, enero de 1984.

¹³ Ídem.

A partir de tal diagnóstico, el Partido Demócrata Cristiano hizo su propuesta de recuperación democrática. En ella postuló la necesidad de restaurar un tipo de práctica que hiciera posible la concertación social y política entre los distintos actores, los que debían renunciar a toda medida que perjudicara a los grupos económicos. La propuesta supuso, por tanto, la necesidad de una mutación sustancial en el comportamiento y la mentalidad de todos los actores, antaño de una u otra forma críticos al orden capitalista. Dichos actores, en consecuencia, debían poner fin a los utopismos e ideologismos del pasado, terminando con los proyectos cerrados y excluyentes. Solo en tales condiciones podrían consensuar sus voluntades en aras de la recuperación, consolidación y perfeccionamiento de la democracia.

Sin dudas, esta propuesta marcó una inflexión en la historia del Partido Demócrata Cristiano por cuanto implicó una renuncia al ideologismo que antes le había sido tan propio; esto es, el «comunitarismo» o «socialismo comunitario», con base en cual muchos de sus sectores se habían opuesto al proyecto «socialista estatista» de la Unidad Popular. El comunitarismo, que durante la Unidad Popular fuera travestido en un «socialismo comunitario» que postulaba la existencia de empresas de trabajadores, había sido un elemento definitorio de la identidad del partido, en base a la cual este se había considerado como representativo de una posición distinta tanto de la derecha capitalista como de la «izquierda estatista»,¹⁴ según lo señalara su «Declaración de principios» de 1957. A través de la idea de Concertación —que como hemos visto suponía no cuestionar los intereses del gran empresariado y de la derecha y más bien concertarse con ellos— todo lo dicho quedaba atrás. Se avanzaba así hacia la homogeneización ideológica y política de la gran mayoría de los actores, base de los futuros «consensos nacionales», siempre en torno a los intereses del gran capital local y extranjero.

A través de las reformulaciones que ahora asumía el ideario de la Democracia Cristiana quedaron abiertas las puertas para avanzar hacia una «transición democrática» con aval estadounidense, en acuerdo con la dictadura, la derecha y un creciente segmento de

¹⁴ A este respecto, véase Jorge Grayson: *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, ed. cit.

la izquierda, la que, en buena medida, en razón de los intereses corporativos de sus cuadros antaño «revolucionarios» o «ultrarrevolucionarios» –como fuera el caso del Partido Socialista–, se hallaba en un fuerte proceso de conversión. De tal modo, a mediano plazo, se daría lugar a una amplia alianza de «centro izquierda», o sea, que incluía a la mayoría de la ex-Unidad Popular, bajo el supuesto de que en esta también se producirían reformulaciones políticas e ideológicas de fondo; cuestión que, según viéramos, ya Frei les había demandado; reformulaciones consistentes en renunciar a cuestionar los intereses y el poder del megaempresariado y del gran capital extranjero.

En los años siguientes, el resultado de tal proceso será la Concertación de Partidos por la Democracia, que tuvo como precedente a la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional, según se verá en un capítulo próximo.

CAPÍTULO 20

Los inicios de la izquierda conversa¹

No vaya nadie a formarse la idea limitada de que la pequeña burguesía quiere imponer, por principio, un interés egoísta de clase. Ella cree, por el contrario, que las condiciones especiales de su emancipación son las condiciones generales fuera de las cuales no puede ser salvada la sociedad moderna y evitarse la lucha de clases. Tampoco debe creerse que los representantes democráticos son todos shopkeepers o gentes que se entusiasman con ellos. Pueden estar de distancia de ellos, por su cultura y su situación individual. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida; que, por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan a aquellos, prácticamente, el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada.

Carlos Marx: «El 18 Brumario de Luis Bonaparte», en C. Marx y F. ENGELS: *Obras escogidas*, Ed. Progreso, Moscú, s. f., p. 119.

Durante la dictadura cívico militar, particularmente cuando se evidenció que ella no sería pasajera y que el triunfo del capitalismo era claro –no solo en el país sino también en todo el mundo–, se empezaron a producir en ciertos sectores de la izquierda considerables reformulaciones ideológicas y políticas. Estas se hicieron visibles ya durante la segunda mitad de la década de los setenta. A la fecha, en efecto, comenzaron a derrumbarse una serie de paradigmas ideológicos y políticos en torno a los cuales por largo tiempo se conformaran segmentos muy importantes de la izquierda chilena. Si bien el fenómeno se dio entre distintos sectores de

¹ Este texto es una versión ampliada de la que expuse en el libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*.

esta, su epicentro estuvo en el Partido Socialista, y fue rotulado con el término de «renovación», lo que en realidad no era. A través de ella se constituyó lo que entonces pasó a denominarse como «izquierda renovada», la que se transformó en un nuevo referente político en el país. No está de más señalar que la mayoría de sus miembros durante la Unidad Popular habían pertenecido al «polo revolucionario», el que por entonces acusara a Salvador Allende de «socialdemócrata» y reformista.

En la conformación de esta izquierda desempeñó un papel considerable la socialdemocracia europea. Con el respaldo de esta –desde ya económico– la «izquierda renovada» se fue transformando gradualmente en un actor de relevancia. A la larga, sobre todo será importante a los efectos de contribuir a proporcionarle una base de apoyo suficiente a la transición pactada diseñada por los Estados Unidos; y luego será funcional a la consolidación y legitimación del modelo neoliberal, con la correlativa dominación de la oligarquía plutocrática que se reconfigurara y fortaleciera durante el régimen pinocheteano. Esta función fue cumplida por los renovados bajo los gobiernos de la Concertación, de los cuales fueron parte relevante en estrecha alianza con la Democracia Cristiana, a la que durante el gobierno de Salvador Allende habían conceptualizado como el «enemigo principal» y la «otra cara de la derecha».

Bajo los gobiernos concertacionistas los miembros de esta nueva izquierda se fueron transformando en una especie de burguesía «estatal», endogámica y crecientemente enriquecida, o clase funcionaria, con fuertes intereses corporativos y prácticas clientelísticas respecto de sus bases partidarias y electorales. En tal condición fueron incursionando no solo en los ministerios, subsecretarías y alta administración del Estado, sino también en los directorios de las grandes empresas, que los acogieron y les financiaron sus campañas electorales a cambio de los contactos y las influencias políticas que podían proporcionar. Ello, junto al Partido Demócrata Cristiano y a los partidos de la derecha, los convirtió en uno de los engranajes importantes de la fusión que por entonces se verificó entre política y negocios.

¿Cuáles fueron los orígenes de este proceso? Contribuir a responder esta pregunta es uno de los objetivos del presente capítulo.

Los antecedentes históricos

El Partido Socialista

El Partido Socialista nació en 1933 en el contexto de una profunda crisis nacional e internacional del capitalismo, y dentro de un ambiente, interno y externo, caracterizado por la creencia de que este sistema estaba definitivamente agotado y que, por tanto, era necesario su reemplazo. En la formación de la colectividad convergieron diversos sectores intelectuales, de capas medias y populares, los que en medio de la crisis buscaban una salida radical a la situación existente. En lo ideológico, concurrieron en él corrientes diversas, que incluían a sectores marxistas, laico-racionalistas, masones, populistas —especialmente en la versión latinoamericanista propugnada por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)—, así como también elementos portadores de cierta tradición anarquista y trotskista. La heterogeneidad sociológica e ideológica del partido, más la influencia de los liderazgos carismáticos y personales en su seno, tendieron a estimular desde sus comienzos un recurrente fraccionalismo y una notoria debilidad orgánica, influida en buena medida por el gran peso de su estructura informal, de los agrupamientos espontáneos basados en afinidades y preeminencias personales o en la amistad, lo que desde temprano dio lugar a un conjunto de grupos que se activaban sobre todo durante las elecciones, los congresos y las actividades semejantes, pugnano por sus respectivas posiciones. Por otro lado, esta diversidad hizo muy receptivo al partido a las diversas corrientes del pensamiento existentes en la izquierda mundial.

En lo internacional el Partido Socialista surgió cuestionando al estalinismo, a los métodos y al tipo de sociedad que se instauraba en la URSS, a la par que rechazaba la adscripción a internacionales. Bajo este concepto, muy influenciado por cierto nacionalismo y por las concepciones de Víctor Raúl Haya de la Torre, el Partido Socialista criticó tanto a la Internacional Socialista como a la Comunista, y las acusó de propiciar soluciones ajenas a las realidades de nuestros países.

Entre 1933 y 1938 podríamos situar un primer periodo en la historia del Partido Socialista, caracterizado por su rápido crecimiento

y por la definición de su inicial credo ideológico. Fue entonces cuando elaboró su «Declaración de principios» en la que dijo adherirse a un marxismo entendido como «un método de interpretación de la realidad enriquecido y corregido por los aportes científicos y por el devenir social». A la par, la declaración caracterizó a la sociedad capitalista señalando que su esencia consistía en que una clase se ha apropiado de los medios de producción» explotándolos en «su beneficio», mientras que, por otra parte, existiría «otra clase que trabaja, que produce y que no tiene otro medio de vida que su salario». Ante ello, la «Declaración de principios» propugnaba la instauración en el país de «un régimen socialista en el que [...] la propiedad privada [de los medios de producción] se transforme en colectiva».²

Junto con ello la «Declaración de principios» sostuvo que en «el proceso de transformación total del sistema [capitalista era] necesaria una dictadura de trabajadores organizados», con lo cual explícitamente negaba las posibilidades de una transformación evolutiva.

En resumen, en este texto el Partido Socialista asumió una identidad que partía de la comprensión del socialismo como una sociedad definida a partir de relaciones de propiedad específicas sobre los medios de producción, a la que se llegaría a través de una revolución (entendida como conquista del poder del Estado), por parte de sujetos clasistas (los trabajadores).

Entre 1938 y 1954 es posible distinguir un segundo gran periodo en la historia del Partido Socialista, caracterizado por el estancamiento electoral de la colectividad, la apertura de sucesivas crisis internas con no pocas escisiones, en buena parte derivadas de las polémicas entre «colaboracionistas» y «anticolaboracionistas», las que sobre todo se verificaron durante los gobiernos radicales. En tales debates tendieron a predominar los primeros –los «colaboracionistas»–, quienes reflejaron ciertas tendencias mesocráticas que siempre acompañaron a la historia del partido. Durante este lapso ello se manifestó en la inserción pragmática del Partido Socialista en algunos gobiernos, dando lugar a un desperfilamiento de su

² «Declaración de principios del Partido Socialista, octubre de 1933», en Julio César Jobet: *El Partido Socialista de Chile*, Ed. Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971, tomo I, pp. 79 y ss.

inicial mística e identidad contestataria y alternativista. Este periodo también se caracterizó por el desarrollo de agudas polémicas con el Partido Comunista, en gran medida en torno a problemas internacionales.

El programa de 1947 constituyó un intento por resolver el señalado desperfilamiento y crisis del partido. Su fundamentación fue redactada por Eugenio González. Este documento definió al Partido Socialista como revolucionario y reiteró que su objetivo era anticapitalista, lo que suponía «cambiar radicalmente las relaciones de propiedad y de trabajo», cuestión que debía dar lugar a «una reconstrucción completa del orden social».³ Asimismo, Eugenio González vinculó el marxismo con el proletariado moderno, manteniendo de tal modo el concepto de sujetos clasistas del cambio.

Pese a este esfuerzo, la crisis del Partido Socialista, lejos de resolverse, continuó ahondándose. Fue así como, por factores en los cuales aquí no cabe detenerse, pronto se llegaría a una nueva escisión, que dio lugar al Partido Socialista de Chile y al Partido Socialista Popular. Este último, para las elecciones presidenciales de 1952, resolvió apoyar al caudillo populista Carlos Ibáñez del Campo, mientras que el Partido Socialista de Chile, se alineó junto al Partido Comunista, constituyendo el Frente del Pueblo, que levantó la primera candidatura de Salvador Allende.

El fracaso de la política de apoyo a Ibáñez, seguida por el Partido Socialista Popular, cerró este periodo y dio paso a nuevas definiciones que en cierto modo implicaron salir de la crisis. Ello se verificó mediante un fuerte proceso de radicalización producido entre 1954 y 1973 –conformando un tercer periodo en la historia de la colectividad–, el que comenzó con una drástica crítica al «colaboracionismo», definido como el culpable de la crisis partidaria. En su lugar se postuló la tesis del Frente de Trabajadores y se asumió la perspectiva de una revolución caracterizada desde ya como socialista, cuyas fuerzas motrices estarían conformadas por «obreros, campesinos y sectores modestos de la población», lo que suponía el rechazo de toda alianza con grupos o partidos «burgueses».

Bajo esta lógica se llevó a cabo un acercamiento al Partido Comunista, lo que dio lugar a la creación en 1956 del Frente de

³ «Preámbulo del Programa de 1947», en J. C. Jobet: *El Partido Socialista de Chile*, ed. cit., t. II, pp. 207 y ss.

Acción Popular (FRAP). Al año siguiente se verificó la unificación del Partido Socialista, que se hallaba dividido desde fines de la década de los cuarenta. Tal unificación se hizo sobre la base de una concepción clasista y en la perspectiva del «derrocamiento del régimen capitalista». En los años siguientes se empezaría a sentir en el seno de la colectividad una intensa influencia de la Revolución Cubana.

Dentro de este contexto, el Partido Socialista empezó crecientemente a ver en la institucionalidad vigente un obstáculo para los cambios, acusándola de favorecer a las fuerzas sociales regresivas. Esta tendencia se vio fortalecida luego de las elecciones presidenciales de 1964 cuando en el Congreso de Linares, celebrado en julio de 1965, la colectividad consideró que el revés electoral sufrido por la izquierda en las presidenciales de 1964 se había debido a «la no conducción de la lucha social hacia un enfrentamiento decisivo de clases y [a] su orientación exclusiva por la vía electoral». Luego el partido se proclamó explícitamente como una organización marxista leninista.

Esta evolución encontró su punto culminante en el Congreso de Chillán (1967), el cual aprobó un voto político que establecía que el objetivo estratégico del Partido Socialista era la toma del poder y la instauración de un Estado revolucionario; que en esa perspectiva la violencia revolucionaria era inevitable, legítima y respondía al carácter represivo y armado del Estado de clase; que las formas legales y pacíficas de lucha no conducían por sí mismas a la toma del poder y que constituían formas limitadas de acción que debían desembocar en la lucha armada.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el Partido Socialista se mantuvo en posiciones radicales, las que fueron lideradas por Carlos Altamirano. Entonces, el partido pasó a formar parte del llamado «polo revolucionario», partidario de resolver la pugna política mediante la conformación de un poder popular paralelo e independiente del Estado burgués, en base al cual, luego de un «enfrentamiento decisivo de clases», que sería violento, se debía resolver el problema del poder para solo entonces iniciar la construcción del socialismo. En este sentido, dentro de la Unidad Popular la colectividad chocará constantemente con las posiciones gradualistas e institucionales postuladas por Salvador Allende y el Partido Comunista.

La crisis (1973-1979)

Con el golpe militar de septiembre de 1973 se abrió un periodo de profunda crisis en la izquierda chilena, la que se manifestó con mayor fuerza entre los sectores que posteriormente darán origen a la «renovación socialista», esto es, el Partido Socialista, los MAPU y la Izquierda Cristiana, así como también entre los sectores intelectuales vinculados a ellos.

El Partido Socialista fue el lugar clave de las transformaciones producidas en la izquierda. Entre 1973 y 1979 en su seno se verificó un agudo tensionamiento que culminó en una gran escisión y se manifestó a través de una serie de problemas, pugnas y debates, los cuales podrían resumirse en cinco problemáticas principales: a) la referente a la crisis orgánica de la colectividad, con su correspondiente fraccionamiento político y organizativo y su correlativa pugna por la reconstitución de los liderazgos partidarios; b) la discusión sobre las causas de la derrota de 1973; c) el debate sobre la socialdemocracia; d) la discusión sobre el socialismo real; y e) la disputa sobre la concepción del partido.

Las discusiones producidas en torno a estos tópicos se fueron traduciendo gradualmente en una crisis de identidad partidaria, que traerá consigo una serie de búsquedas, las cuales darán lugar a lo que será denominado como una renovación teórica y política. Respecto a la primera cuestión, esto es, la referente a la reconstrucción política y orgánica del partido, hay que decir que luego del golpe militar se produjo una temprana escisión factual de la colectividad. Por una parte, el Comité Central se reconstituyó trabajosamente bajo la dirección de Carlos Lorca y Exequiel Ponce, logrando funcionar en el interior del país. Al mismo tiempo, se creó un secretariado exterior bajo la responsabilidad de Carlos Altamirano. Sin embargo, ni este secretariado ni el Comité Central fueron reconocidos por todos los militantes y dirigentes. Como consecuencia de ello se fueron constituyendo otras orgánicas que intentaron disputar la dirección partidaria, como la Coordinadora Nacional de Regionales. Más tarde se formarán como orgánicas separadas el grupo La Chispa (MR-2) y los Militantes Rojos, más conocidos como Grupo Consenso. También debe señalarse la posterior constitución de la fracción denominada MAS-USOPO. De tal

modo, ya antes de la gran escisión de 1979, el Partido Socialista se hallaba profundamente escindido expresando con ello una situación de evidente crisis.

Entrelazada con las pugnas por la reconstitución de los liderazgos partidarios, y como parte integrante de ellas, se llevó a cabo la discusión sobre las causas de la derrota y sobre la estrategia a seguir. Al respecto, bajo la inspiración de Lorca y Ponce, el Comité Central emitió el llamado «Documento de marzo de 1974», el que sostuvo que las causas de la derrota habían residido en «la ausencia de una real unidad socialista-comunista y [en] que ninguno de los partidos obreros fue capaz de darle una conducción única a la izquierda y resolver el problema de unir a todo el pueblo»⁴ para hacer así posible la hegemonía de la clase obrera dentro del movimiento popular. Además, afirmó que el predominio de militantes de origen «pequeño-burgués» en la dirigencia del Partido Socialista determinó que este, durante la Unidad Popular, se convirtiera «en gran medida, [en] el portador [...] de la dispersión política que impidió consolidar la hegemonía de la clase obrera en la conducción del proceso».⁵

De acuerdo con tal diagnóstico, el «Documento de marzo» propuso como objetivo general construir un partido homogéneo, capaz de ser «la fuerza dirigente de la revolución», con «ideología proletaria», basado en el marxismo-leninismo y depurado de los elementos fraccionalistas. Al mismo tiempo diseñó una estrategia cuya finalidad era el «derrocamiento de la dictadura militar y la destrucción del Estado fascista»,⁶ para lo cual propugnó la creación de un Frente Antifascista en el que las fuerzas populares pudieran desarrollar su hegemonía a fin de enlazar la lucha por la democracia con una perspectiva socialista.

Por su parte, Carlos Altamirano, desde el exterior, hizo su propio diagnóstico en un libro titulado *Dialéctica de una derrota*, publicado en 1977. En él Altamirano planteó que la causa principal del fracaso de la Unidad Popular había residido en la incapacidad de

⁴ Comité Central del Partido Socialista: «Documento de marzo de 1974», <<https://unidadmpt.wordpress.com/2015/09/08/documento-de-marzo-del-comite-central-en-la-clandestinidad-en-chile-1974/>>.

⁵ Ídem.

⁶ Ídem.

sus partidos miembros para prever que el desenlace del conflicto verificado entre 1970 y 1973 tenía que producirse inevitablemente por vía armada, incompreensión que les habría impedido defender militarmente el proceso. A partir de estas afirmaciones, Altamirano propuso una «estrategia de poder» orientada hacia una revolución de carácter socialista por vía armada, la que estaría precedida por una fase previa consistente en la lucha por destruir al fascismo. En función de esto último propuso una «alianza táctica» entre la izquierda y la Democracia Cristiana, la que distinguió de la «alianza estratégica», conformada por las fuerzas de izquierda, cuyo núcleo sería la unidad entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, definida como expresión política de la unidad de la clase obrera. Sin embargo, a diferencia del «Documento de marzo», el análisis de Altamirano no llevó a cabo una autocrítica partidaria.

Los grupos socialistas más radicalizados, especialmente La Chispa y Consenso, hicieron su propio análisis en el que responsabilizaron del desenlace de septiembre de 1973 a lo que calificaron como la dirección reformista de la Unidad Popular y del propio Partido Socialista. Simultáneamente, definieron como oportunista la posición del Comité Central dirigido por Carlos Lorca y Exequiel Ponce, en razón de la propuesta de alianza táctica con la Democracia Cristiana, lo que, a juicio de esos grupos radicalizados, solo serviría para avanzar hacia la modificación de la forma de dominación de la burguesía y, en consecuencia, no conduciría a la liquidación del capitalismo. Esto, en su opinión, permitiría calificar a la posición del Comité Central como «reformista».

Entre grupos socialistas menos estructurados hubo otros diagnósticos, los que se caracterizaron por ver en la radicalidad del proceso impulsado por la Unidad Popular la causa de la derrota, especialmente en tanto que no habría permitido concitar alianzas más amplias, básicamente con el centro, para así hacer efectivo un proceso que debió ser más gradual. Consecuente con este punto de vista, tales grupos, en lo referente a la estrategia a adoptar, colocaron su énfasis en la recuperación de la democracia, a cuyos efectos propusieron una alianza con el centro, particularmente con la Democracia Cristiana.

En cuanto a las polémicas sobre la socialdemocracia y el socialismo real, hay que decir que ellas en buena medida estuvieron impactadas por las experiencias del exilio partidario. Este recibió

una activa solidaridad tanto de la socialdemocracia europea como de los países del socialismo real, lo cual no dejó de traer ciertas consecuencias de orden político e ideológico.

En este contexto, en el Partido Socialista se dio una temprana polémica en torno a la socialdemocracia, motivada por la comprobación de la influencia que ella estaba ejerciendo sobre ciertos militantes y dirigentes exiliados. Al respecto se empezó a hablar de lo que se llamó como el «surgimiento de una tendencia de derecha en el partido». Paradójicamente, en principio el propio secretariado exterior colocó esta temática sobre la mesa. La dirección interior también la asumió, en especial entre 1977 y 1978. Fue así como el *Boletín del Comité Central* de octubre de 1978 estuvo casi todo dedicado al tema. La iniciativa representó un intento por impedir la influencia de la socialdemocracia al interior del Partido Socialista y por mantener la identidad radicalizada del partido.

Sobre esto el *Boletín* sostuvo:

[...] las fuerzas populares en Chile se ven enfrentadas en el presente a una ofensiva subterránea y activa por parte de los sectores de la Social democracia internacional y sectores centristas de la mediana y pequeña burguesía modernizante y democrática nacional. Tales fuerzas trabajan por concretar y viabilizar un proyecto político alternativo al planteado por los partidos populares coaligados en la Unidad Popular.⁷

Luego el *Boletín* afirmaba que el mencionado proyecto centrista o socialdemócrata tenía: «[...] como precondiciones de éxito la división de la clase trabajadora chilena, el aislamiento de los partidos marxistas y, finalmente, el quiebre interno de estos, o el aislamiento en su seno mismo, de sus "sectores más extremos"». Y concluía diciendo que «en la fase actual del proceso político chileno hay evidencias concretas de que se está trabajando activamente por tal alternativa y que es posible incluso el surgimiento, quizás no muy lejano, de un partido o movimiento socialdemócrata».⁸

Frente a esta situación –que consideraba estimulada por las «duras condiciones represivas» y por «la falta de claridad ideológica» de ciertos cuadros y militantes–, el Comité Central propuso

⁷ *Boletín del Comité Central*, núm. 55, Santiago, 1978, p. 9.

⁸ Ídem.

impulsar una ofensiva ideológica que impidiera un curso como el descrito. Con esos propósitos consideró indispensable llevar a cabo una subsecuente elaboración de la línea partidaria.

En cuanto al socialismo real, el impacto principal al interior del Partido Socialista fue motivado por el conocimiento de sus realidades empíricas. Muchos dirigentes socialistas habían establecido su residencia en esos países. Sin ir más lejos, el secretariado exterior del partido funcionó durante varios años en Berlín Oriental.

La crisis de la URSS –sumida ya en el estancamiento brézhneviano– y de los otros países del socialismo real, con todas las limitaciones que eran inherentes a su concepción centralista y autoritaria, representó un papel importante en la evolución ideológica de determinados dirigentes socialistas, muchos de los cuales concluyeron en que los paradigmas de socialismo profesados por la izquierda chilena eran insostenibles.

Una de las cuestiones más significativas derivadas del conocimiento de los países del socialismo real fue la referente a la relación entre democracia y socialismo. El debate concluyó en la necesidad de llevar a cabo reformulaciones ideológicas de fondo. Esto ocurría al mismo tiempo que en Europa y los Estados Unidos se desarrollaba una verdadera ofensiva neoconservadora y cuando el sistema capitalista enfrentaba sus propias crisis por la vía de un nuevo impulso a la intensificación de sus economías a través de la revolución científico-técnica y la transnacionalización. De tal modo, para un observador del Tercer Mundo, el capitalismo parecía representar un paradigma de avasalladora modernidad, que se oponía a las realidades de las sociedades del Este.

Paralelamente, en Europa se producía el alza de los socialismos mediterráneos, los que parecían representar una alternativa progresista, viable y atractiva, tanto en lo referente a la superación de ciertas dictaduras (casos de Portugal, Grecia y España), como en lo relacionado con la democratización de la sociedad, como parecía ser el caso de la Francia de Francois Mitterrand. Al mismo tiempo, se verificaba una verdadera eclosión de diversos movimientos –pacifistas, ecologistas, juveniles, etc.–, los que, junto con manifestarse como fuerzas críticas al orden existente, aparecían muy distanciados e igualmente críticos de las realidades de los países del socialismo real. Entonces entre sectores importantes de la intelectualidad chilena se empezó a plantear con fuerza la temática de la crisis

del marxismo y la búsqueda de soluciones alternativas, expresadas en las más diversas elaboraciones teóricas y corrientes de pensamiento (posmodernismo, basismo, ecologismo, verdes, etc.). Todo ello, por cierto, no podía dejar indiferente a la dirigencia del Partido Socialista, el que, como dijimos, se había caracterizado desde sus orígenes por su facilidad para recepcionar las diferentes corrientes de pensamiento de la izquierda mundial. Ello se manifestó ahora mediante una gradual revalorización de la socialdemocracia y la recepción de algunos de sus elementos ideológicos; ocurrió algo similar respecto del eurocomunismo y otras tendencias entonces en boga. A lo señalado hay que sumar los cambios que se fueron produciendo en Chile como resultado de la refundación capitalista operada por la dictadura.

El conjunto de lo dicho condujo a muchos dirigentes socialistas en el exilio a «la revisión del concepto de unidad de la izquierda fundada en el eje de fuerzas constituido por los partidos Socialista y Comunista».⁹ Esos dirigentes dijeron que el Partido Comunista parecía vinculado a un proyecto tipo socialismo real y a todo aquello que parecía estar en crisis. Aquí se ubica un momento de inflexión en la visión de ciertos dirigentes socialistas, la cual ciertamente no estaba desligada de las nuevas relaciones políticas internacionales que su partido había venido estableciendo.

En estrecha relación con la problemática anterior, gradualmente se fue manifestando otra: la relacionada con la concepción del partido. Al respecto, por un lado, estaba la tesis sostenida por el «Documento de marzo de 1974», la que, según viéramos, postulaba una concepción leninista, es decir, un partido de clase, homogéneo y con capacidad para la unidad de acción, cuyo aliado natural debía ser el Partido Comunista. Esta era la concepción que formalmente sostenía el Comité Central. Sin embargo, cada vez más resultó no ser compartida por toda la colectividad. En efecto, diversos sectores la rechazaron por considerarla «aparataista», burocrática, e incluso estalinista. Se la veía como funcional a un tipo de socialismo (autoritario) y como la expresión de la influencia del Partido Comunista en el Partido Socialista. En contraposición, pasó a postularse un concepto de partido un tanto laxo, conformado por distintas corrientes capaces de llegar constantemente a

⁹ Jorge Arrate: *Exilio, textos de denuncia y esperanza*, Ediciones Documentas, Santiago, 1987, p. 103.

consenso, partido que debía integrar a su seno a los más diversos sectores progresistas y avanzados, a la vez que debía relacionarse de manera nueva con los movimientos sociales, haciendo suyas muchas de sus demandas, reivindicando su autonomía respecto de los partidos, particularmente de los de izquierda. De algún modo, Carlos Altamirano empezó a perfilar y liderar este punto de vista, el que en el fondo iba vinculado a un todavía difuso nuevo proyecto político que, enfatizando la relación entre democracia y socialismo, tendería a buscar alianzas con el centro y a romper el eje con el Partido Comunista. Todo esto en el contexto de una fragmentación orgánica no solo entre las facciones arriba indicadas, sino también entre cada una de ellas y la base militante.

A lo dicho agréguese la dualidad entre el exilio y el interior y, dentro del primero, la diversidad de medios, influencias y relaciones establecidas por los distintos dirigentes socialistas. La fragmentación partidaria resultante de esto, tanto en lo ideológico, como en lo político y lo orgánico era, en consecuencia, notable y se veía incentivada por las nuevas realidades que emergían en el mundo y en el país.

Por otra parte, la crisis de 1973 también tenía que repercutir sensiblemente en la intelectualidad de izquierda, muchos de cuyos representantes terminaron abandonando sus partidos de origen para pasar a analizar a título de independientes las causas de la derrota. El núcleo más importante de ellos se radicó en determinados institutos, los que, ante la intervención de las universidades por la dictadura, hicieron posible, con apoyo financiero externo, una actividad académica alternativa.

Entre las tesis más importantes a las que dichos intelectuales avanzaron, podemos destacar las siguientes: 1) la Unidad Popular fue derrotada por su incapacidad para generar una mayoría social y política en su favor; 2) ello, a su vez, habría sido el resultado de una visión teórica que ponía el acento en la conquista del poder total, desvalorizando en los hechos a la democracia, la que era concebida como un mero campo de acumulación de fuerza; 3) lo anterior, por otra parte, sería el producto de un tipo de marxismo predominante en la izquierda chilena, basado en paradigmas que no daban cuenta de la realidad nacional, a partir de lo cual necesariamente tenía que producirse un desencuentro entre la teoría de la izquierda y las realidades del país; y, 4) es necesario prescindir de

los marxismos en uso en la izquierda puesto que ellos no permitirían articular socialismo y democracia ni, por tanto, hacer posible la constitución de una base social suficientemente amplia para luchar por la reconstrucción democrática.

Tales puntos de vista, sin embargo, en el fondo representaban una inconsciente crítica a planteamientos que no eran propios del conjunto de la izquierda, sino solo de un sector suyo, cuyo núcleo era la pequeña burguesía radicalizada, la que durante la Unidad Popular se agrupara en el «polo revolucionario», del que los renovados en gran medida provenían. Esto significa que estos últimos no atribuían las ideas que criticaban a quienes realmente las habían profesado –que eran ellos mismos– y que, con efectos desastrosos, intentarían llevarlas a la práctica. Lejos de ello, las atribuían a la generalidad de la izquierda la que, en su conjunto, nunca las compartió. Tal fue, en primer término, el caso de Salvador Allende con su inédita vía chilena al socialismo, la cual fuera respaldada por los partidos de polo gradualista e institucional de la Unidad Popular, a los que los renovados, cuando todavía formaban parte de la izquierda más radical, habían calificado como «reformistas», calificativo que también reservaban para el presidente (cuyo proyecto, por lo demás, sí articulaba democracia y socialismo).

En relación con el tema del marxismo, no deja de ser interesante el que ni a la fecha ni durante los años siguientes, ningún representante de la renovación –fuera político o intelectual– produjera un texto de valor teórico, ni siquiera modesto, dirigido a fundamentar un cuestionamiento de las concepciones marxistas a las que hasta entonces se habían adherido y a las que ahora parecían desechar. Prefirieron un camino menos espinoso, consistente en abandonar esas concepciones mediante frases tomadas de las tendencias posmodernas que emergían en Europa, cuyo contenido, sin trabajo teórico de por medio, dieron por cierto.

En todo caso, las críticas y redefiniciones arriba referidas venían a reflejar una cuestión notable. Primero, que se estaba produciendo entre los renovados una crisis de identidad en la medida en que no se sentían ya representados con lo que hasta entonces habían sido. Y segundo, como resultado de lo anterior, se evidenciaba que se estaba verificando un gradual cambio de problemática en su reflexión, el que consistió en un reemplazo de los temas de la revolución y el socialismo –de los cuales antaño se mostraran

partidarios intransigentes y dueños absolutos—, por los de la recuperación de la democracia sobre bases capitalistas, cambios que a la larga vendrán a ser el reflejo de sus intereses corporativos.

La evolución de la izquierda surgida en los años sesenta

Después del golpe, algunos sectores de la izquierda —especialmente el MAPU Garretón— mantuvieron la radicalización que los había caracterizado durante el pasado reciente. Sin embargo, en los años posteriores empezó a manifestarse entre ellos cierto cambio, cada vez más acentuado. Este se derivó de la constatación que hicieron sobre el carácter refundacional de la dictadura militar, en cuya ejecutoria comenzaron a ver un proyecto integral de largo plazo, cuestión sobre la cual también habían reflexionado algunos de los intelectuales arriba señalados.

En la medida en que el proyecto neoliberal se implantaba, tales sectores pasaron a poner en el tapete de la discusión el problema de repensar el proyecto de la izquierda, bajo el supuesto de que las tesis que la caracterizaran ya no se avenían con la surgente nueva realidad. De tal manera se planteó la problemática sobre la necesidad de renovar programática, conceptual y orgánicamente a la izquierda. Ello, a su vez, fue concebido como una necesaria respuesta a lo que calificaron era su crisis. Dicha temática de crisis y renovación no dejará de tomar fuerza entre los intelectuales del sector.

En este marco, ya de por sí tensionado, lleno de cuestionamientos y de crisis de las certezas anteriores, se insertó, con abundante financiamiento, la intervención de la socialdemocracia europea, la cual se esforzará por cooptar a la izquierda chilena, con la excepción del Partido Comunista, al que buscaba aislar. Fue así como, ya a comienzos de 1979, bajo la convocatoria del senador socialista italiano Lelio Basso y organizado principalmente por Raúl Ampuero, se realizó el Seminario de Ariccia I, el cual se propuso reagrupar a lo que se denominó «vertiente socialista» de la izquierda chilena, con el fin de modificarla y renovarla desde adentro.

La tesis central de todo el proyecto consistía en sostener la existencia de dos áreas o vertientes en la izquierda, la socialista y la comunista. La primera —en la argumentación de Raúl Ampuero— fue

caracterizada como «democrática, nacional y autónoma», cuyas expresiones políticas serían el Partido Socialista y las organizaciones de izquierda surgidas durante los años sesenta (MAPU, Izquierda Cristiana e incluso el Movimiento de Izquierda Revolucionaria). La otra área, expresada en el Partido Comunista, fue definida por Ampuero como originada a partir de la revolución rusa y vinculada a la política del Estado soviético. El objetivo del seminario, se dijo, consistía en superar la dispersión del área socialista y producir su convergencia en la perspectiva de crear un nuevo sujeto político capaz de conducir a la izquierda.

Se sostuvo que la condición para ello residía en el rescate de la coherencia ideológica de esta área, entendiéndose por tal prescindir de una serie de concepciones que se suponía eran el producto de la influencia de la vertiente « comunista», como el leninismo, la adhesión a ciertos paradigmas del socialismo real y la propia radicalización política tan característica de los años sesenta. Todo esto, en la lógica de Raúl Ampuero, era a la vez un componente de la subordinación del área socialista a la comunista, con la respectiva pérdida de identidad que ello significaba para la primera. Aquí residía, en su opinión, la causa de su crisis y fraccionamiento. Ahora se trataba de revertir el fenómeno y de perfilar una convergencia socialista capaz de fundir sus diversas expresiones políticas en una fuerza común cuya identidad solo podría reperfilarse deslindándose del Partido Comunista y redefiniendo las relaciones con él, lo cual, a su vez, era entendido como un retorno a las fuentes tradicionales y propias.

No obstante, para Ampuero no se trataba tan solo de recuperar la herencia histórica socialista sino, junto a ello, avanzar hacia su renovación incorporando los aportes de los nuevos sectores de la izquierda, cristianos y otros, provocando una síntesis entre tradición y renovación.

De tal manera, a Raúl Ampuero le correspondió un relevante aporte en la elaboración de la tesis sobre las «dos izquierdas», mientras que el Seminario de Ariccia fue una instancia para su socialización. Tales esfuerzos, ciertamente, se ligan con las tendencias preexistentes orientadas a generar una izquierda diversa, cuestión también vinculada a la crisis de proyecto que en el conjunto de ella se había venido gestando como resultado de los rápidos cambios en curso en el mundo y en Chile.

La división del Partido Socialista: el proceso de convergencia y renovación (1979-1983)

En abril de 1979, el conjunto de crisis que por años había venido incubándose al interior del Partido Socialista estalló violentamente e irradió a gran parte de la izquierda. El cuestionamiento de la identidad marxista-leninista de la colectividad y de su definición revolucionaria en el sentido tradicional del término fue decididamente rechazado por un sector encabezado por Clodomiro Almeyda, apoyado por la dirección interior. Este sector, en sus orígenes claramente mayoritario, al menos dentro del país, reivindicó la definición marxista-leninista del partido, la unidad comunista-socialista y los planteamientos elaborados por los plenos del Comité Central remontables al «Documento de marzo de 1974».

En una posición distinta figuraban los sectores que asumían la «renovación». El secretario general del partido, Carlos Altamirano, intentando apoyarse en la socialdemocracia internacional, apareció como el líder de esta posición, al adherirse a la idea sobre la convergencia de la «vertiente socialista». El resultado fue la gran escisión orgánica y política de 1979.

En la lógica de las posiciones sostenidas por el secretario general del partido, Carlos Altamirano, así como también entre quienes lo apoyaban (Jorge Arrate, Ricardo Núñez, etc.), existía ya un proyecto político distinto, pero que todavía no se perfilaba con toda claridad. Entonces, convergiendo con aquellos sectores de la izquierda que habían asumido la problemática de la renovación, este sector entrará en un intenso proceso de búsquedas y redefiniciones.

En tal proceso es posible distinguir dos movimientos paralelos íntimamente vinculados: uno orgánico y otro ideológico-político. El primero se traducirá en la conformación, cuatro años después, del Partido Socialista de Chile —primero llamado de Briones, luego de Núñez y finalmente de Arrate—, el que enfrentará al llamado Partido Socialista de Almeyda. Ello, por cierto, sin perjuicio de la eclosión de innumerables agrupaciones socialistas menores que a la larga se irán plegando al sector «renovado» del partido. El segundo movimiento culminará en la conformación de un proyecto que prescindirá de la originaria identidad anticapitalista y clasista del socialismo chileno.

La consideración de ambos movimientos –el orgánico y el ideológico– se hace más inteligible a la luz de la consideración de otra variable: la referida al apoyo financiero que el sector renovado recibió por parte de la socialdemocracia europea, el que no puede ser ignorado.

El financiamiento europeo de la renovación

El proceso ideológico y político arriba descrito se incubó con especial fuerza en Europa, prendiendo primeramente entre muchos dirigentes exiliados, sobre todo del Partido Socialista y del MAPU. Desde muy temprano tales procesos recibieron un considerable respaldo financiero por parte de la socialdemocracia del Viejo Continente, entonces empeñada en una operación cooptativa mayor, de la cual el financiamiento era un factor relevante.

Para abordar el punto nos apoyamos en el texto de Esteban Valenzuela, *La conversión de los socialistas chilenos*. En él este autor sostiene que si bien el financiamiento recibido por la renovación socialista provino de distintos partidos socialdemócratas europeos, solo en pocos casos operó mediante donaciones oficiales directas. Según Valenzuela, la forma predominante que adoptó consistió, en apoyos financieros paraestatales avalados por los partidos socialdemócratas, sobre todo cuando estaban en el gobierno.

En ese contexto, este autor se refiere a los vínculos que los dirigentes exiliados establecieron con distintos partidos socialdemócratas, sobre todo, como dijimos, gobernantes, con cuyo apoyo no solo pudieron sobrevivir, sino también llevar a cabo su actividad política e ideológica. Sobre el punto, a modo de ejemplo, Valenzuela hace alusión a varios casos. Así, sostiene que «con la llegada de los socialistas españoles al poder en 1981 [...], se articuló en España una serie de grupos socialistas [chilenos] de origen histórico [...]. Trabajaron en el gobierno español, universidades y centros de estudio». Prontamente, ellos «se convirtieron en paladines de la renovación y de las posturas socialdemócratas. De allí provino Erich Schnake, junto a Alejandro Jiliberto, entre otros».¹⁰ Valenzuela agrega que:

¹⁰ Esteban Valenzuela: *La conversión de los socialistas chilenos*, Ed. El Desconcierto, Santiago, 2014, p. 86.

[...] en menor medida hubo influencia estructurada de personas vinculadas a la socialdemocracia sueca, [mientras que] en Alemania los intelectuales y dirigentes [socialistas chilenos] contaron con el apoyo de diversas redes del SPD. En el caso de América Latina, hubo grupos socialistas significativos que recibieron la ayuda de gobiernos vinculados a la Internacional Socialista, como fuera el de Venezuela (donde se radicaron Aniceto Rodríguez y Sergio Bitar), Costa Rica (cuyas universidades acogieron a muchos chilenos) y México (donde en la universidad pública se concentraron debates entre grupos ortodoxos y renovadores), al tiempo que en Caracas se editaba la revista *Nueva Sociedad*, con el apoyo (financiero) de la Fundación Ebert, de corte socialista democrático.¹¹

El respaldo económico de la socialdemocracia europea no se limitaba a los exiliados, también llegaba a Chile a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros académicos, los que con esos recursos ejecutaban proyectos de investigación pequeños o medianos. Hubo centros, «financiados por partidos socialistas de distinta filiación»,¹² y no menos importante: los intelectuales que se desempeñaban en ellos contribuyeron activamente a elaborar las concepciones renovadas. Entre tales centros destaca Flacso, el cual, según Valenzuela, durante la dictadura adicionalmente recibió un apoyo financiero clave a través de la Fundación Ford.¹³ Otro centro importante fue la Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, que agrupó a sociólogos influenciados por Alain Touraine, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, cuya temática fundamental era la «integración social». Dentro de esta línea destacaron Eugenio Tironi, Eduardo Valenzuela, Javier Martínez y Vicente Espinoza, entre otros.¹⁴

Si bien el señalado financiamiento era recibido en el país por instituciones, estas, según Valenzuela, se hallaban vinculadas a los liderazgos de determinadas personalidades y dirigentes, por cuya vía operaba.¹⁵ La tabla 20.1 grafica el punto.

¹¹ *Ibíd.*, p. 76.

¹² *Ídem.*

¹³ *Ibíd.*, p. 77.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 78.

¹⁵ Esteban Valenzuela: *La conversión de los socialistas chilenos*, ed. cit., p. 148.

Tabla 20.1. Redes de influencia político-institucional en el PS y PPD

<i>Líderes</i>	<i>Tendencia</i>	<i>Instituciones</i>	<i>Financiamiento</i>
J. A. Viera Gallo	Sector Renovado	CESOC FLACSO	Italia F. Ford (USA)
E. Correa	Mapucista		Gobierno
R. Lagos	Lagismo en PS	Chile 21	Italia
C. Ominami	y PPD	Consultoras	Francia-Suecia
J. Arrate	Arratismo en el PS	Nuevo Chile ILET	Suecia Holanda Francia
S. Bitar	Oficialismo del PPD	PRED	España
E. Schnake			Italia
G. del Valle			Suecia
			Asesorías
R. Núñez	Renovados PS	CENPROS	España
M. Schilling			Suecia
O. Puccio	Tercerismo	Avance	Berlín
R. Solari	Almeydista		Gobierno
G. Correa			

Fuente: E. Valenzuela: *La conversión de los socialistas chilenos*, ed. cit., p. 149.

Como se ve, todos los personeros señalados años después llegarían a ser importantes prohombres de la Concertación. Se puede decir que el financiamiento, por las vías indicadas, proporcionado por la socialdemocracia europea a la renovación de un sector de la izquierda chilena fue fundamental en la medida en que permitió, además, a gran parte de las cúpulas del Partido Socialista y del propio MAPU sobrevivir y proyectar su vida luego de la catástrofe no solo política, sino también personal que significara el golpe. La recuperación de las perspectivas vitales que muchos de sus personeros entonces intentaban, terminó, en efecto, en gran parte asociada a esas prácticas y vinculaciones internacionales, cuyas consecuencias ideológicas y políticas se evidenciaron casi de inmediato. Tal fue una de las bases objetivas de la renovación, aunque ciertamente no la única puesto que ella igualmente respondió a una serie de otras variables concomitantes, tanto locales como internacionales.

En resumen, se puede decir que sin el indicado apoyo de la socialdemocracia europea –que en todo caso fue multifacético– tanto el movimiento orgánico como el ideológico de la renovación se hace difícilmente comprensible.

El movimiento orgánico

Luego de la división de abril de 1979, el sector de Altamirano –claramente minoritario al interior del país– intentó enlazar con todos los grupos que se proclamaban partidarios de la renovación de la izquierda y construir, a través de una convergencia entre ellos, una nueva fuerza socialista. En medio de un profundo proceso de discusión, entre estos sectores se fueron conformando orgánicas *ad hoc* muy fluidas y cambiantes. Ello se dio tanto en el exterior como en el interior del país, lo que prolongó aquí debates iniciados en el Viejo Continente.

Así, al tiempo que en Europa se celebraba el segundo Seminario de Ariccia y se impulsaba el Movimiento de Convergencia Socialista, este se reproducía en Chile donde, en Santiago, se conformó el grupo de la Convergencia Unitaria (1980). Después apareció la Convergencia Universitaria y luego el Secretariado por la Convergencia Socialista, con participación de representantes de las direcciones de ambos MAPU, la Izquierda Cristiana y algunos socialistas altamiranistas. En 1981 se creó un grupo de intelectuales, con y sin partido, que se autodenominaron Convergencia Socialista, mientras que proliferaban orgánicas menores del dividido Partido Socialista (los Suizos, XXIV Congreso, Humanistas, MAS-USOPO, entre otros).

En septiembre de 1981, una gran cantidad de estos grupos, todos ellos «renovados», constituyeron el Comité de Enlace Permanente, cuya perspectiva era la reunificación socialista. En septiembre de 1982 se celebró en Francia el Seminario de Chantilly, que implicó un verdadero salto en el perfilamiento político-ideológico de la renovación, en el cual participaron distintos sectores de la izquierda.

En cuanto a los aspectos orgánicos, se planteó la necesidad de avanzar hacia la constitución de una nueva fuerza socialista que involucrara al «tronco histórico» del Partido Socialista y a los

sectores de izquierda surgidos en los años sesenta y setenta (ambos MAPU y la Izquierda Cristiana). Por diversas razones este proyecto todavía no pudo cristalizar. Uno de los problemas más importantes que debió enfrentar era el referente a si los distintos sectores renovados del Partido Socialista debían reunificarse al interior de la nueva fuerza socialista a formar o bien esta debía ser precedida por la unificación del Partido Socialista, el cual tendría que recepcionar en su seno a todos los otros sectores renovados de la izquierda.

Sobre esta cuestión no hubo acuerdo entre los socialistas renovados y las otras fuerzas de izquierda interesadas en una convergencia. Ante ello, el Comité de Enlace Permanente que habían formado distintas orgánicas socialistas, decidió transformarse en Comité Político de Unidad, el que en los meses posteriores al inicio del ciclo de las protestas nacionales, se transformó en Partido Socialista de Chile (septiembre de 1983), confluyendo en él el MAS-USOPO, el Partido Socialista XXIV Congreso, el Grupo Convergencia 19 de Abril, el Partido Socialista Humanista, el grupo de los Suizos, un pequeño sector proveniente del Partido Socialista de Almeyda y una serie de intelectuales independientes.

Aquellos sectores –como ambos MAPU y la Izquierda Cristiana–, con los cuales se pretendía avanzar hacia la constitución de una nueva fuerza socialista, quedaron por el momento fuera del Partido Socialista, que entonces emergió dirigido por Carlos Briones. Sin perjuicio de ello, mantuvieron la vinculación con este a través de una alianza denominada Bloque Socialista. Mientras tanto, los sectores del Partido Socialista que no habían entrado en el proceso de renovación, dirigidos por Clodomiro Almeyda, conformaron con el Partido Comunista el Movimiento Democrático Popular (MDP), que propugnaba una salida rupturista a la situación política nacional, en tanto que el Bloque Socialista se inclinaba por una salida pactada en alianza con el centro.

De tal modo, ya en 1983 emergía un nuevo actor político en la izquierda, el Partido Socialista de Chile, que se autoproclamó como la expresión política principal de la renovación socialista. El problema de si la nueva fuerza socialista que se quería formar debía constituirse al interior de un Partido Socialista o bien conformando una organización distinta, empezaba a resolverse. En 1985 gran parte de la dirección del MAPU-OC se integró al Partido Socialista renovado.

El movimiento ideológico

A estas alturas del proceso comenzó a perfilarse con claridad el proyecto político del cual terminó siendo portadora la renovación socialista. En efecto, dicho proyecto quedó de manifiesto en las nuevas formulaciones teóricas que la renovación asumió, las que, de hecho, contenían una ruptura con el viejo *ethos* revolucionario, marxista y clasista del partido (que todavía hacía suyo el Partido Socialista de Almeyda), al cual reemplazaban por una nueva identidad. Las nuevas formulaciones que el Partido Socialista de Chile asumió declaraban que perseguían articular democracia y socialismo. Ellas podrían resumirse del siguiente modo:

- a) Reformulación del concepto de socialismo. Lo definitorio sobre el punto radica en que el socialismo dejó de ser concebido como un tipo específico de sociedad y, más bien, pasó a ser considerado «como un proceso social complejo de profundización y superación sucesiva de las múltiples contradicciones propias de la sociedad capitalista en una dirección crecientemente democratizadora». ¹⁶ De acuerdo con esta conceptualización, como lo sostuvo Manuel Antonio Garretón, «no hay transición de una sociedad a otra; hay transformación permanente. No hay sociedad socialista instalada, hay transformación socialista y gobierno socialista posible en un régimen de democracia política». ¹⁷
- b) Reemplazo de la revolución por la democratización. Si el socialismo dejaba de ser entendido como un tipo distinto y específico de sociedad que emergía negando al capitalismo y, por el contrario, pasaba a ser definido como una superación gradual y permanente de las contradicciones propias de este último, entonces ya no era necesaria la revolución. Ciertamente, en un comienzo la renovación socialista no podía deshacerse bruscamente de la idea de revolución puesto que, desde sus orígenes, esta había sido uno de los

¹⁶ Jorge Arrate: *Razón y pasión del socialismo chileno*, Ed. Ornitorrinco, Santiago, 1989, p. 104.

¹⁷ Manuel Antonio Garretón: *Reconstruir la política*, Ed. Andante, Santiago, 1987, pp. 275-276.

elementos esenciales de la identidad partidaria. Por tanto, toda modificación en tal sentido debía hacerse cambiando los contenidos del concepto. Así, Jorge Arrate postuló «la redefinición de la idea revolucionaria como un continuum»,¹⁸ es decir, como una evolución; mientras que Manuel Antonio Garretón diferenció la revolución «como método» de la revolución «en cuanto idea transformadora». ¹⁹ La primera, según este autor, no sería propia de la renovación, sí lo sería la segunda. Hernán Vodanovic, en cambio, con mayor radicalidad, asumió formalmente la modificación cualitativa de contenido que todo esto implicaba cuando afirmó que para el socialismo renovado las transformaciones sociales «deben adoptar la forma de procesos reformistas». ²⁰

- c) La superación de la identidad clasista del partido y de los sujetos clasistas como agentes del cambio. Para Jorge Arrate, «el desafío central del socialismo [consistía en] conquistar las grandes mayorías compuestas por todos aquellos sectores y grupos postergados por la dinámica de la sociedad capitalista». ²¹ Manuel Antonio Garretón sostuvo que, en todo caso, lo anterior no suponía establecer una identidad entre tales sectores y el Partido Socialista. Señaló: «no hay identidad entre el Partido Socialista como organización y el mundo social y cultural a los que ese partido convoca». ²² Y agregó que si bien «la referencia al mundo de los trabajadores, más aún, al mundo popular, es constitutiva de un partido socialista, ello no significa que haya que definir su identidad en la homogeneidad de una base social clasista, sino, nuevamente en la capacidad de convocatoria que tenga en el plano programático». ²³ Llegaba así a su fin la concepción originaria según la cual el Partido Socialista era un

¹⁸ Jorge Arrate: *La fuerza democrática del ideal socialista*, Ediciones Documentas, Santiago, 1985, p. 87.

¹⁹ Manuel Antonio Garretón: *Reconstruir la política*, ed. cit., p. 274.

²⁰ Hernán Vodanovic: *Un socialismo renovado para Chile*, Ed. Andante, Santiago, 1988, p. 64.

²¹ Jorge Arrate: *Razón y pasión del socialismo chileno*, ed. cit., p. 108.

²² Manuel Antonio Garretón: *Reconstruir la política*, ed. cit., p. 280.

²³ *Ibíd.*, p. 281.

partido que expresaba políticamente «a los trabajadores» como clase, según una visión marxista clásica.

- d) Superación del eje comunista socialista y su reemplazo por el eje con el Partido Demócrata Cristiano. El socialismo ahora concebido no como un tipo distinto de sociedad, sino como un proceso de democratización de todas las esferas de la sociedad capitalista, requería para su realización de la formación de mayorías sociales y políticas. En el caso de Chile antes y después de conquistar la democracia, ello suponía al menos dos cosas. Por un lado, superar el viejo esquema de los tres tercios que había caracterizado a la política nacional, y en función de ello, llevar a cabo una confluencia estratégica entre el centro y la izquierda. Este eje de centro izquierda suponía dar por superado aquel otro formado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, pues solo así sería posible llevar a cabo una alianza –con el centro demócrata cristiano– capaz de formar las mayorías requeridas por los cambios.

Dicho reordenamiento de las alianzas debía hacerse –como lo dijera Jorge Arrate– reconociendo que la Democracia Cristiana constituía «un centro político decididamente antiderechista y con una voluntad transformadora apreciable»,²⁴ mientras que correlativamente, respecto del Partido Comunista, se pasaba a enfatizar «las diferencias doctrinarias apagadas o disfrazadas muchas veces en el pasado».²⁵ En este contexto, por lo demás, se insertaba la tesis, que tanto intentara fundamentar el Seminario de Ariccia, sobre la existencia de dos izquierdas.

En la postulada alianza con el centro, la renovación estimó que la nueva fuerza socialista no podía resultar accesoria, sino que tenía que «aspirar a una participación igualitaria y a un rol conductor en la constitución [del] movimiento nacional por los cambios».²⁶ Esto, a su vez, demandaba urgentemente la recuperación de la unidad del Partido Socialista y, aún más, la integración a él de vastos y di-

²⁴ *Ibíd.*, p. 215.

²⁵ *Ibíd.*, p. 210.

²⁶ Manuel Antonio Garretón: *Reconstruir la política*, ed. cit., p. 231.

versos sectores progresistas (cristianos, laico-racionalistas, etcétera) para dar lugar así a la conformación de una gran fuerza capaz de hegemonizar a lo que se denominó «bloque por los cambios», el que debería impulsar un proceso de democratización del conjunto de la sociedad chilena.

El triunfo de la renovación en el Partido Socialista: el Congreso de unidad y el derrumbe de los no renovados

A fines de los años ochenta, el sector renovado del Partido Socialista no solo había llegado a equilibrar a los almeydistas, sino que políticamente los había superado. Tal situación no hizo sino consolidarse, marcando un inapelable triunfo. Esto, frente a un Partido Socialista almeydista ya en disolución, se vio reforzado por una serie de fenómenos tanto internos como externos. Respecto de los primeros cabe señalar la propuesta demócrata cristiana encaminada a conformar una concertación de partidos por la democracia que permitiera una salida pactada con la dictadura militar, lo que implicaba una oferta al Partido Socialista para formar parte de una futura alianza de gobierno. Paralelamente se producía el fracaso de la salida rupturista propiciada por el Partido Comunista y los socialistas almeydistas. En lo externo, figuraba el apoyo norteamericano, europeo y de las internacionales más poderosas al tipo de salida pactada con la dictadura, a lo que hay que agregar la crisis del socialismo real y su ulterior derrumbe, que implicó, hasta cierto punto, un cuestionamiento global de las concepciones políticas y teóricas de los almeydistas, y aceleró su proceso de disolución.

En este contexto, a fines de 1989 se celebró el XXV Congreso del Partido Socialista (sector renovado). Allí, junto con ratificar la necesidad de una alianza de gobierno con la democracia cristiana, se tomó una decisión de la mayor importancia práctica y simbólica: la incorporación del Partido Socialista a la Internacional Socialista –que había sido la gran financista de la renovación– con lo que se dejó atrás la definición originaria del partido de no alinearse con internacional alguna.

En cuanto a la decisión de entrar a formar parte de una alianza de gobierno con la democracia cristiana, el congreso planteó que ello suponía para los socialistas renovados superar la dicotomía con los almeydistas, pues, de lo contrario, al persistir la división del partido, con su consiguiente debilitamiento, la colectividad, en su alianza con el centro demócrata cristiano, se condenaría a un papel muy secundario.

Por su parte, los almeydistas, en pleno proceso de crisis política e ideológica, pronto se avendrán a la unificación, lo que se vio estimulado, entre otros, por dos factores principales. Primero, por los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989 que evidenciaron que –debido a la ley electoral vigente, o sea, el sistema binominal–, solo en alianza con la democracia cristiana era posible obtener representación parlamentaria y participación efectiva dentro del sistema político. Y, segundo, por la crisis del Partido Comunista, que mantuvo su política de rebelión popular con todas las formas de lucha cuando, en un nuevo cuadro nacional, ella ya no tenía chance de éxito.

El Congreso de unidad entre ambos sectores socialistas se verificó en 1990. La temática que allí se privilegió fue precisamente la de la unidad. En función de ella se sortearon todos los temas que pudieran obstaculizarla, postergando su resolución para un futuro indefinido. De igual modo, se distribuyeron los cargos con la aspiración de que los distintos sectores quedaran representados en alguna medida. Clodomiro Almeyda asumió una de las vicepresidencias del partido. Otra fue asumida por Luis Maira quien, al igual que muchos personeros provenientes de otros partidos renovados, ante la crisis del Movimiento Democrático Popular (MDP) y del Partido Comunista, y las limitaciones del propio sistema electoral, vio en el Partido Socialista el lugar natural en cuyo interior debía rearticularse la izquierda, expectativa que, por lo demás, era estimulada por los más diversos sectores socialistas.

Ante los resultados electorales del Congreso de Unificación, se produjo un reordenamiento de las tendencias internas del Partido Socialista. Por una parte, se empezó a estructurar una corriente en torno a la figura de Camilo Escalona, la que pasó a denominarse como «nueva izquierda». Esta, reivindicando una identidad

izquierdista del partido, suscitó un importante eco en la base partidaria, a pesar de que sus posturas no se delinearon con precisión, mientras que el almeydismo terminaba de disolverse, y la mayoría de sus miembros confluyeron en una tendencia denominada como «tercerista» (Germán Correa, Ricardo Solari, Jaime Pérez de Arce y otros), en tanto los sectores más «renovados» se nucleaban, por un lado, en torno a Jorge Arrate y, por el otro, a Ricardo Núñez. Todo muy de acuerdo con la vieja tradición partidaria que hacía de la colectividad un conjunto de grupos, subgrupos y caudillos que compiten entre sí para repartirse el poder y los recursos de acuerdo con las correlaciones de fuerza existente entre ellos.

En 1991, poniendo en práctica las resoluciones del Congreso de Unificación, fue conformada una Comisión de Programa. Ella debía plasmar las concepciones renovadas y, por tanto, la nueva identidad del partido. En junio de ese año, dicha comisión publicó la *Hipótesis para el diseño de un programa socialista*, en la cual se señalaba que el programa del partido, junto con aportar a la recuperación democrática del país, debía «expresar los ideales y orientaciones del proyecto de renovación socialista».²⁷

En febrero de 1992, la vicepresidencia de Estudios y Programa del Partido Socialista, a través de una de sus subcomisiones, elaboró un documento de discusión denominado «Proyecto socialista», cuyo propósito era definir la utopía partidaria y su concepción del socialismo. En él quedaron plasmadas todas las principales tesis de la renovación. El documento, en un clima partidario que le asignaba escasa relevancia política, fue debatido durante 1993. Su texto debía ser aprobado definitivamente en un Congreso Extraordinario, el que se celebró en La Serena en diciembre de ese año. Allí, no obstante, no fue aprobado, en consideración a que la mayoría estimó que no había estado precedido de la necesaria discusión partidaria y que las tesis de los sectores minoritarios del partido no habían sido suficientemente difundidas. Con el fin de resolver tales falencias, el Congreso resolvió celebrar una Conferencia de Programa, la que finalmente se fijó para marzo de 1995. Asimismo se resolvió tomar medidas para que todo el partido debatiera los documentos pertinentes. De este modo, en fin, la hegemonía

²⁷ Vicepresidencia de Programa y Estudios del Partido Socialista de Chile: *Hipótesis para el diseño de un programa socialista*, junio de 1991.

del pensamiento renovado y su nueva concepción del socialismo todavía no fue formalmente sancionada por una instancia del Partido Socialista unificado.

¿Renovación o cambio de identidad?

Es posible sostener que las tesis de la Comisión Programa y en general las ideas claves de la renovación terminaron imponiéndose claramente dentro del Partido Socialista unificado. No se puede dejar de anotar que tales ideas, lejos de toda originalidad, en lo grueso representaron la recepción de un pensamiento que con antelación se desarrolló entre los partidos socialdemócratas europeos.

Ya en el Programa de Godesberg, aprobado en 1959 por la socialdemocracia alemana, se sostuvo que el socialismo consistía en un conjunto de valores a realizar –básicamente la democracia, la libertad y la solidaridad– y no en un tipo de sociedad específica. Más aún, Willy Brandt afirmó que «en el programa de Godesberg, el socialismo se concibe como democracia desarrollada».²⁸ Estas tesis vinieron acompañadas de la renuncia de la socialdemocracia alemana a considerarse como partido obrero y a identificarse con una ideología determinada.²⁹

Como hemos visto, tales fueron precisamente las ideas fuerza en torno a las cuales se llevó a cabo la renovación socialista en Chile, pese a que no se explicitara su filiación. En virtud de ello es que se puede sostener que el proceso que empezó a experimentar el Partido Socialista desde fines de los años setenta en adelante –que lo condujo a asumir una identidad distinta– no es sinónimo de renovación, por cuanto la nueva identidad que la colectividad terminó asumiendo representó una ruptura radical con sus definiciones originarias e históricas, las que, más que renovadas, fueron negadas. Correlativamente, tal negación se hizo asumiendo una identidad preexistente, prefigurada en la reflexión de la Internacional Socialista contemporánea, a la que el Partido Socialista se integró.

²⁸ Willy Brandt: *Godesberg nichtverpielen*, Bonn, 1974, p. 4, citado por Thomas Meyer: *El socialismo democrático, 36 tesis*, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, p. 84.

²⁹ Véase Thomas Meyer: *El socialismo democrático*, ed. cit., También Jacques Droz (dir.): *Historia general del socialismo*, vol. 4, *De 1945 a nuestros días*, Barcelona, Ed. Destino, 1986.

En virtud de estas razones es que podría estimarse que, más que una renovación, el proceso que desde los años setenta del siglo pasado en adelante experimentó el Partido Socialista y otros sectores de la izquierda chilena consistió en la asunción de una identidad completamente nueva.

Razones hipotéticas de la nueva identidad socialista

A partir de lo señalado cabría plantearse la pregunta sobre las determinantes de fondo que hicieron posible la asunción de una identidad nueva por parte del Partido Socialista y una negación tan drástica de su identidad originaria. Al respecto, quizás podría sostenerse que la causa última de ello radica en la fortaleza que ha demostrado el capitalismo y la profunda crisis, y la posterior inviabilidad histórica, que evidenció un cierto tipo de socialismo, aquel conformado en Europa oriental, cuestión que hizo que las perspectivas del anticapitalismo, al menos a mediano plazo, se tornaran muy escasas. Téngase en cuenta que la identidad original del Partido Socialista se enmarcaba en el supuesto del agotamiento definitivo del capitalismo. En la práctica, sin embargo, este no solo pudo sobrevivir, sino también fortalecerse mostrando reservas inesperadas, pese a las profundas contradicciones e iniquidades que le son propias, las cuales, en todo caso, ha distado mucho de superar.

Los factores internos parecen haber tenido igual o superior importancia en el proceso de renovación socialista. Estos factores consistieron en la profundidad de la derrota sufrida en 1973, las escasas posibilidades de revertirla y, en este marco, las perspectivas que se le abrieron a las dirigencias partidarias (antes ultrarrevolucionarias) de mejorar sustancialmente sus vidas personales si redefinían sus identidades políticas e ideológicas de manera acorde a las necesidades del capitalismo local y transnacional. En este sentido, una alianza con el centro Demócrata Cristiano, les permitiría a esas dirigencias (como resultado de la salida pactada con patrocinio estadounidense) acceder a los cargos superiores del Estado y a sus prebendas y beneficios anexos, lo que incluso no solo las beneficiaría a ellas, sino también a cierta base militante cuya fidelidad se mantendría

mediante prácticas clientelares expresadas en gran medida en su ingreso al empleo público.

La nueva identidad socialista en la historia política reciente

Para la política nacional, el cambio de identidad del Partido Socialista ha sido extraordinariamente relevante. Desde ya hizo posible la existencia de una fórmula política –la Concertación– que permitió darle estabilidad a la dominación de la oligarquía plutocrática y a su modelo neoliberal implantado por la dictadura, el que fuera tan cuestionado durante el régimen pinocheteano. Este modelo resultó legitimado por las fuerzas concertacionistas y por sus gobiernos, en los cuales la izquierda renovada fue adquiriendo una presencia creciente.

La consolidación del neoliberalismo bajo las administraciones concertacionistas –tres de ellas presididas por «socialistas renovados»– anunciará el próximo cierre de un largo periodo de la historia de Chile, periodo que se iniciara al menos durante los años cincuenta. Como lo hemos argumentado en otra parte, ese periodo estuvo caracterizado por una fuerte polarización en todos los planos, resultante de la competencia entre tres proyectos globales; polarización que tenía su principal expresión política en la conformación de los tres tercios. Todo eso era lo que ahora comenzaba a terminarse en beneficio del proyecto global de la derecha, el que, desde los años noventa, en el contexto de consensos sustantivos entre los más diversos actores, pasó a ser administrado por sus antiguos adversarios –centro e «izquierda renovada»– ya sin verdadero proyecto.

En ese contexto, por otra parte, pese a que en el plano de sus discursos la identidad política e ideológica de la izquierda renovada había dicho tener su centro en la idea de democratización de «todos los planos de la sociedad», en la práctica nada de ello se materializó bajo los gobiernos de los que ella fue partícipe. Y, por el contrario, durante dichos gobiernos se produjo una total oligarquización de la política y un total control de la «clase política» y sus partidos, por los grupos económicos. Estos pasaron en gran medida a financiar a aquellos –salvo excepciones–, fuera por vías legales o ilegales, lo que así reforzó los rasgos oligárquicos

del Estado, a lo cual la «renovación socialista» resultó del todo funcional, e incluso indispensable.

Teniendo a la vista tales hechos es que, sin dudas, la llamada «renovación socialista», rebasando los límites de un partido, ciertamente representa una de las claves para comprender la historia reciente del país.

CAPÍTULO 21

La evolución del Partido Comunista: hacia la política de rebelión popular de masas¹

El Partido Comunista, al igual que otras colectividades políticas, experimentó cambios significativos luego del golpe del 11 de septiembre, los que finalmente se tradujeron en su política de rebelión popular de masas. Esta, sin embargo, no emergió abruptamente, sino, al menos en lo formal, solo siete años después de instaurada la dictadura cívico militar. Durante ese lapso, en el Partido Comunista –no sin tensiones internas– se desarrolló una profunda reflexión que tuvo su primera temática en el análisis de las causas de la derrota de la Unidad Popular y del proceso revolucionario impulsado por esta, derrota que para la colectividad fue ciertamente traumática.

Frente antifascista y «vacío histórico»

Una primera cristalización del análisis referido arriba quedó expresada en agosto de 1977, en el informe al pleno del Comité Central del partido celebrado en el exterior. Dicho informe, rendido por su secretario general, Luis Corvalán Lepe, llevaba como título, «La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota». Entre sus tesis más importantes es posible destacar las siguientes. En primer lugar, la referente a la viabilidad de la vía pacífica, o «no armada», que el texto ratificó. El informe señaló: «En nuestro país, en

¹Una primera versión de este capítulo figura en el libro *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Ed. América en Movimiento, Santiago, 2018.

la práctica, quedó demostrada la posibilidad de que la clase obrera y el pueblo llegaran al poder –mejor dicho, a una parte del poder– por una vía no armada y de hacer realidad una serie de transformaciones revolucionarias por dicha vía»,² la que, por lo demás era entonces la única «alternativa revolucionaria posible».³

En segundo lugar, el informe postuló que uno de los factores importantes para el fracaso de esa vía –lo que, dijo, «no era fatal»– fue «la insuficiencia y discontinuidad de la hegemonía de la clase obrera»⁴ en la Unidad Popular, la que por definición era un bloque político y de clases muy amplio en el cual la pequeña burguesía revolucionaria de la época tenía una presencia muy importante. A juicio del informe, dicha pequeña burguesía, con su política dirigida a sobrepasar el programa de gobierno echando en brazos de la oligarquía a amplios segmentos de las clases medias y de la pequeña burguesía, obstaculizó el objetivo de aislar a los golpistas, viéndose dificultado así el propósito de impedirles que desataran el golpe.

Vinculado a lo anterior, una de las deficiencias más importante mostrada por la Unidad Popular, sostuvo el informe, fue su incapacidad para generar una dirección única, cuestión que afectó de manera significativa el quehacer del gobierno. Otra de las tesis relevantes del mencionado informe postuló la existencia de leyes generales que rigen a toda revolución, las que valen «en toda circunstancia, cualquiera sea la vía de que se trate».⁵ Con base en esta premisa, el informe plantea que durante la Unidad Popular se cometieron, en relación con esas leyes, «desviaciones de derecha y de izquierda». Las primeras habrían consistido en no aplicar todo el peso de la ley a la sedición golpista, la que, aprovechándose de ello, usó las libertades existentes en el país para conseguir sus propósitos antidemocráticos; mientras que las desviaciones de izquierda habrían consistido en sobrepasar el programa de la Unidad Popular llevando a cabo expropiaciones indiscriminadas, con los efectos indicados arriba.

² Luis Corvalán Lepe: «La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota», informe al Pleno del Comité Central, agosto de 1977, en Luis Corvalán Lepe: *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, Verlag Zeit im Bild, RDA, Dresden, 1982, p. 149.

³ *Ibidem*, p. 159.

⁴ *Ibidem*, p. 155.

⁵ *Ibidem*, p. 166.

Siempre en torno a la tesis sobre la existencia de leyes generales que rigen toda revolución, el informe sostuvo que el Partido Comunista había disentido de Salvador Allende en cuanto a que «nuestra vía revolucionaria conformaría un segundo modelo de realización del socialismo», y, más aún, que esa vía «excluiría o haría innecesaria la dictadura del proletariado». ⁶ En este contexto, el informe se refirió al tema de las mayorías; postuló al respecto que en un proceso revolucionario «lo que pesa verdaderamente, hablando de mayoría, es la mayoría activa». ⁷

Una de las interrogantes principales planteadas en el informe central al pleno de agosto de 1977 fue la relativa a la incapacidad mostrada por la Unidad Popular y por el propio Partido Comunista para defender al gobierno de Salvador Allende y enfrentar, con tales fines, a la contrarrevolución en todos los terrenos, incluyendo el armado. Al respecto, el informe reconoció que la colectividad tenía, en cuanto a las cuestiones militares, un «vacío histórico»; es decir, que había carecido de una verdadera política en este plano. A través de tal planteamiento el Partido Comunista reflexionó sobre cómo llenar ese «vacío», reflexión que se verá incentivada durante los años siguientes.

No es menos cierto que con mucha antelación al Pleno, ya en 1975, la colectividad había enviado a Cuba a muchos de sus jóvenes con el fin de que siguieran allí la carrera militar, insertándolos a los efectos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. En 1979, esos jóvenes, ya devenidos en oficiales, adquirieron una considerable experiencia de combate cuando se introdujeron en la lucha armada que en Nicaragua llevaba a cabo el Frente Sandinista de Liberación Nacional en contra de la dictadura de Somoza, donde, en el frente sur, les correspondió un importante papel.

El Frente Anti-fascista y «Nuestro proyecto democrático»

Sin perjuicio de las formulaciones referidas, en los años siguientes la política –y la práctica– que siguió el Partido Comunista mostró

⁶ *Ibidem*, p. 182.

⁷ *Ibidem*, p. 177.

muchas continuidades respecto de la que llevara a cabo con anterioridad al 11 de septiembre, sin desmedro de las adecuaciones y los desarrollos correspondientes. Inmediatamente después del golpe, lo propio de esta política consistió en el propósito de conformar un frente antifascista, en el cual debían confluir la izquierda y el Partido Demócrata Cristiano con miras a derrocar a la dictadura y construir una democracia más sólida que la anterior, y en la cual no debía haber lugar para el fascismo.

Perfilada con anterioridad al pleno de agosto de 1977, esa política luego encontró su expresión más desarrollada en el texto «Nuestro proyecto democrático» que el secretario general del partido, Luis Corvalán Lepe, publicara en el número 37 del *Boletín Exterior del Partido Comunista de Chile*, correspondiente a septiembre-octubre de 1979. Entre las tesis principales de este documento –aparte de la relativa a la proscripción del fascismo– figura la referente a la unidad antifascista. Al respecto, Corvalán dijo: «Nosotros propiciamos abiertamente el entendimiento entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, el reencuentro entre todas las fuerzas democráticas, civiles y militares, sin excepción».⁸ Ello debía llevarse a cabo en vistas a formar un «gobierno amplio, intérprete real de la mayoría ciudadana».⁹

Otra tesis relevante del documento postuló que no era posible retornar al pasado y que, por tanto, se requería crear algo nuevo. «Sin mengua de la grandeza del periodo de la Unidad Popular, no se trata de volver a ese tiempo, como tampoco al que lo antecedió. El futuro régimen político deberá, necesariamente, retomar las mejores tradiciones democráticas de Chile, pero también incorporar nuevos valores y edificarse con materiales más sólidos».¹⁰ A Corvalán le parecía que ello suponía hacer transformaciones en la estructura económica, lo que daría firmeza a la democracia. Al respecto, planteó: «los comunistas abogamos por un régimen democrático que contemple cinco áreas de la propiedad, a saber: social, mixta, privada, cooperativa y de auto gestión o de trabajadores».¹¹ De este

⁸ Luis Corvalán Lepe: «Nuestro proyecto democrático», en Luis Corvalán Lepe: *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, ed. cit., p. 225.

⁹ *Ibidem*, p. 226.

¹⁰ *Ibidem*, p. 214.

¹¹ *Ibidem*, pp. 214-215.

modo, más allá de las tres áreas de la propiedad que propusiera el Programa de la Unidad Popular, Corvalán agregó la creación de otras dos adicionales, que eran la cooperativa y la de trabajadores, las que en algún momento el Partido Demócrata Cristiano había dicho postular.¹² De tal manera, el secretario general del Partido Comunista buscaba consensos de fondo con ese partido. El proyecto propuesto por Corvalán, incluía el pluralismo y pluripartidismo, cuestiones que ya planteara durante el gobierno de la Unidad Popular.¹³

Basado en los planteamientos que hiciera en «Nuestro proyecto democrático», Corvalán, en declaración de noviembre de 1979, sostuvo: «buscamos aliados permanentes y no compañeros de ruta». «Nosotros queremos marchar con todos nuestros aliados hasta el final [hasta el socialismo]. Nos empeñaremos siempre en ello y estamos dispuestos a llegar a acuerdos [...] y a concertar compromisos».¹⁴ Por cierto, tales acuerdos solo tendrían factibilidad en torno a un modelo socialista distinto al «socialismo real»; es decir, en torno, por ejemplo, a un modelo como el que, en distintos textos, fue perfilando el mismo Corvalán.

Sin perjuicio de lo dicho, en «Nuestro proyecto democrático» el secretario general del Partido Comunista hizo una fuerte defensa del socialismo real y, particularmente, de la URSS, que ya estaba entrando en la crisis que culminaría con su derrumbe.¹⁵

¹² En las conversaciones que a mediados de 1972 llevaron a cabo Allende y los partidos de la Unidad Popular, por un lado, y el Partido Demócrata Cristiano, por el otro, se ofreció, por parte de Allende, incorporar las empresas de trabajadores a los cambios que realizaba el gobierno. Con ello se pretendía llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano sobre el tema de las áreas de la propiedad, acuerdo que no fructificó por falta de voluntad de este partido.

¹³ Eduardo Labarca: *Corvalán 27 horas. El PC chileno por fuera y por dentro*, ed. cit.

¹⁴ Luis Corvalán Lepe: «Buscamos aliados permanentes y no compañeros de ruta», *Boletín del Exterior del Partido Comunista de Chile*, noviembre de 1979, en *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, ed. cit., p. 235.

¹⁵ En «Nuestro proyecto democrático», Corvalán sostuvo sobre el punto: «toda crítica que tienda a socavar el prestigio del socialismo, confunde a los trabajadores y es fuente de dispersión ideológica que atenta contra la unidad en las filas revolucionarias» (p. 232).

La política de rebelión popular de masas

Otro momento importante en la elaboración política del Partido Comunista durante la dictadura estuvo representado por la *política de rebelión popular de masas* (PRPM). Esta quedó oficialmente formulada en el discurso pronunciado por el secretario general del partido, Luis Corvalán Lepe, el 3 de septiembre de 1980, titulado, «El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible». En él Corvalán formuló y sintetizó los resultados de una reflexión multiforme que, de una u otra forma, por años recorriera a la colectividad, en la que le correspondió un papel importante a ciertos militantes exiliados en la República Democrática Alemana: el llamado Grupo de Leipzig.

Entre los factores que llevaron a la adopción de la política de rebelión popular de masas figura la negativa del Partido Demócrata Cristiano a concurrir en la unidad de toda la oposición en un frente único antidictatorial, que el Partido Comunista denominaba «frente antifascista». La directiva de la Democracia Cristiana, como se viera en el capítulo 19, lejos de una política tal, aspiraba a un «tránsito a la democracia» operante a través de un diálogo con la dictadura, avalado por los Estados Unidos y bajo la presión de este, lo cual suponía aislar al Partido Comunista y cooptar a gran parte de los partidos de la ex Unidad Popular, sobre todo al Partido Socialista, ya en pleno proceso de «renovación».

El otro factor importante que se tuvo en cuenta en la formulación de la política de rebelión popular estuvo constituido por la institucionalización del régimen, lo que finalmente se expresó en la Constitución de 1980. Esto confirmaba que, aún presionada internacionalmente, la dictadura no evolucionaría en un proceso gradual de retorno a un régimen civil.

El contenido esencial de la política de rebelión popular de masas consistió en postular la asunción de todas las formas de lucha, incluyendo la «violencia aguda», con el fin de derrocar a la dictadura pinochetana (lo que finalmente debía operar, según se precisó después, mediante una «sublevación nacional»). El fundamento de esta política se vinculó a un hecho muy claro: la instauración de la dictadura –con su carácter terrorista– y las medidas de todo orden que implementara, se tradujo en una sustancial transformación de las realidades del país.

La política del Partido Comunista siempre se había elaborado desde un supuesto explícito, que postulaba que las políticas partidarias, las vías y formas de su estrategia, no podían ser la resultante de dogmas o doctrinarismos abstractos, sino que debían estrictamente responder a las realidades, sobre todo (aunque no exclusivamente) nacionales. Había sido precisamente de la consideración de estas realidades que en las décadas anteriores emergió la «vía pacífica», o «no armada», la cual el Partido Comunista defendió frente a la pequeña burguesía revolucionaria de los años sesenta. En efecto, la exclusión de las formas «agudas de lucha» propias de la «vía pacífica» o «no armada», según el Partido Comunista, respondía precisamente al relativo desarrollo de la «democracia burguesa» en el país —obra de las luchas populares—, a la cultura política existente en él y en el pueblo.

Todo ello fue lo que la dictadura había hecho desaparecer, dando lugar a otras realidades, brutalmente diferentes, entre las que destaca el carácter terrorista del Estado y del régimen. Ello, tarde o temprano, no podía dejar de impactar en la política partidaria, la que, por tanto, debía desarrollarse a propósito de la nueva realidad. Se podría decir que la política de rebelión popular de masas fue el resultado de esas nuevas realidades.

Por otra parte, no fue casualidad el momento en que el secretario general del partido formulara la política de rebelión popular. Como se dijo arriba, esto ocurrió cuando la dictadura pretendió institucionalizarse, y sellar las nuevas realidades estatales mediante la aprobación y posterior promulgación de la Constitución de 1980, la cual ratificó lo ya sabido; esto es, que era prácticamente imposible la inserción de las luchas populares en la institucionalidad estatal. Estos hechos, por otra parte, mostraban que no habría gradual retorno a la democracia burguesa, como creía el sector conservador del Partido Demócrata Cristiano, que siempre, por lo demás, se negó a la unidad antifascista que luego del golpe le propusiera el Partido Comunista.

El discurso de Corvalán «El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible» hizo explícita mención a las referidas pretensiones institucionalizadoras y refundacionales del Estado que eran propias de la dictadura. En referencia al plebiscito que consagraría a la Constitución de 1980, señaló: «se hacen humo las ilusiones

respecto de una presunta liberalización del régimen. Se cierran los caminos para la evolución gradual con que algunos han soñado». ¹⁶ De esta constatación, Corvalán concluyó diciendo: «es el fascismo el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso la violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida». ¹⁷

Por tanto, a juicio del Partido Comunista fueron las mencionadas nuevas realidades nacionales las que recogiera la política de rebelión popular de masas; realidades que, según su análisis, se tradujeron en la necesidad de poner el centro del quehacer de las luchas populares y democráticas fuera y en contra del orden institucional fascista. Esto requirió la utilización de todas las formas de lucha.

Hay que agregar que en su análisis de los cambios experimentados por la realidad chilena resultantes de la dictadura, el discurso de Corvalán no solo constató la radical transformación del Estado chileno, que sería institucionalizada mediante la Constitución del 80, sino también tomó en cuenta la profunda modificación que la dictadura indujera en la estructura económica del país. En relación con ello, en su discurso Corvalán señaló: «la dictadura ha modificado la estructura económica de Chile para ponerla al servicio de los Pirañas y otros clanes y de los grandes trust internacionales». ¹⁸

Pese a las mencionadas transformaciones, la política de rebelión popular de masas mantuvo un número apreciable de tesis propias de la política tradicional de la colectividad. En tal sentido –según la formulación de Corvalán–, la política de rebelión popular, más allá del tema de las formas de lucha y de la colocación de su centro fuera y en contra del sistema institucional, representaría al mismo tiempo un proyecto «centrado en las tareas antifascistas, anti imperialistas y anti monopólicas de hoy», las que adicionalmente –al igual que antes– suponían una «perspectiva del avance democrático hacia el socialismo». ¹⁹ Estos planteamientos representan una clara

¹⁶ Luis Corvalán Lepe: «El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible», en Luis Corvalán Lepe: *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, ed. cit., p. 238.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 239-240.

¹⁸ *Ibidem*, p. 240.

¹⁹ *Ibidem*, p. 239.

continuidad con la política anterior del Partido Comunista, es decir, con su caracterización de la revolución chilena como democrática, antioligárquica, antiimperialista y con vistas al socialismo».

Los elementos nuevos de la política de rebelión popular de masas, claro está, fueron el antifascismo y el uso de todas las formas de lucha; ambos elementos derivados de las ya mencionadas grandes transformaciones ocurridas en el país, y de las cuales, según la colectividad, no era posible hacer abstracción.

Hay otro elemento de continuidad en la política de rebelión popular de masas que hay que subrayar. Es el que guarda relación con la amplitud de las alianzas y, particularmente, con la pretensión de sustentar las transformaciones planteadas en sólidas mayorías nacionales. Esto, en las condiciones existentes, a juicio del Partido Comunista, debía materializarse en la conformación de amplias mayorías contra la dictadura. Según el secretario general del Partido, era la misma naturaleza del régimen pinocheteano la que exigía proceder así. La dictadura, en efecto, conllevaba «las posibilidades de unir en [su] contra [...] a la abrumadora mayoría de la nación».²⁰

Al respecto, se puede decir que nuevamente reemerge aquí la histórica política del Partido Comunista orientada a la consecución de mayorías sociales y políticas como sustento de las transformaciones planteadas. Sin perjuicio de lo expuesto, no es menos cierto que adicionalmente había, en el discurso analizado, otra cuestión a la que cabe referirse. Se trata de otras tantas conclusiones extraídas de la experiencia de la derrota de la Unidad Popular, de claro carácter teórico. Estas, en el discurso de Corvalán «El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible», quedaron resumidas en cuatro puntos:

1. «en nuestra época, la revolución no sólo es seguida por los propósitos de la contra revolución de las clases reaccionarias internas, sino también por la intervención del imperialismo»;²¹
2. «para sostenerse, desarrollarse y vencer, la revolución debe contar con la mayoría activa, con una correlación de fuerzas que sea favorable y ha de basarse, por lo tanto, en una amplia política de alianzas, que pueda incluir el acuerdo y

²⁰ *Ibíd.*, p. 241.

²¹ *Ibíd.*, p. 236.

- el compromiso entre los más vastos sectores partidarios del progreso social»;
3. «las fuerzas revolucionarias deben marchar estrechamente unidas, operando bajo una dirección única que emane de la máxima coincidencia en el carácter de las transformaciones sociales»; y
 4. «la revolución debe resolver el problema del poder en su plenitud [pues] la subsistencia de un aparato estatal cuya misión es la de sostener y defender los intereses reaccionarios termina por transformarse en instrumentos de la contra revolución».²²

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez

La política de rebelión popular de masas, en coherencia con la reflexión sobre el «vacío histórico» que iniciara la colectividad durante los años anteriores, supuso avanzar en el desarrollo de una política militar, la cual finalmente quedó estructurada en torno a tres grandes pilares: a) crear una «fuerza militar propia», que terminará siendo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez; b) llevar a cabo un trabajo militar entre las masas populares (que más tarde se traduciría en la formación de las Milicias Rodriguistas); y c) el trabajo hacia las Fuerzas Armadas, para lo cual se había creado un frente interno especial, denominado Clarín.

Estos objetivos del Partido Comunista se desplegaron del todo en 1983, cuando estallaran las multitudinarias protestas nacionales, cuyo explícito fin era derribar a la dictadura. Ese año fueron regresando al país muchos de los jóvenes oficiales comunistas que se formaron en Cuba y que luego participaron en la revolución sandinista. Principalmente con ellos fue que la colectividad conformó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). En sus comienzos este, junto a militantes de base, empezó gradualmente a llevar a cabo las llamadas «acciones audaces», que buscaban elevar el estado de ánimo del pueblo y su moral combativa; mostrar que la dictadura no era omnipotente y que no controlaba al país. Todo en el marco de las protestas nacionales y como parte integrante de estas. Gra-

²² Luis Corvalán Lepe: «El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible», p. 237.

dualmente, las acciones del Frente fueron adquiriendo dimensiones mayores. Se tradujeron en acciones armadas abiertas, voladuras de torres y líneas férreas, castigo a torturadores de la dictadura y a autores de sus crímenes, propaganda armada, copamientos territoriales, etc. Todo culminó con el fallido intento de ajusticiar a Pinochet, en 1986, lo que debía detonar la sublevación nacional que pondría fin al régimen.

La política de rebelión popular de masas, si bien no consiguió sus objetivos últimos, debilitó significativamente a la dictadura, y creó un nuevo escenario nacional donde aquella dejó de tener el monopolio de la violencia armada. A la vez contribuyó a generar otros efectos, todavía más profundos, como la preocupación del gobierno de Washington por la estabilidad del régimen pinocheteano, afectado por una sedicente ingobernabilidad, la que podía traducirse en su derrocamiento. Este, a su vez, eventualmente podía dar paso a una salida nacional popular, autónoma de los Estados Unidos, como la que en 1979 se había producido en Irán y en Nicaragua. Ante este cuadro, el gobierno estadounidense, junto a otras potencias europeas y el Vaticano, tomará enérgicas medidas orientadas a evitar «lo peor», llevando a cabo en Chile una transición neoliberal, pactada entre los militares y la oposición democrática encabezada por la Democracia Cristiana, sectores convertidos de nuevo, como entre 1970 y 1973, en las «fuerzas internas» operantes a los fines de conseguir los objetivos de la política del país del norte. Siempre, obviamente, teniendo en consideración los intereses corporativos de dichas fuerzas, las que, en fin, debían reemplazar a los militares en el gobierno del país, manteniendo a este bajo la égida de Washington. En uno de los capítulos siguientes procederemos a analizar el tema.

CAPÍTULO 22

La derecha: el retorno a la forma «partido»

Como veremos en el próximo capítulo, a comienzos de los años ochenta, la dictadura cívico militar entró en una profunda crisis, de la cual no se recuperará. Un punto relevante de esta fue la profunda recesión de 1982, cuando el PIB se contrajo en un 14.5 %, con devastadores efectos sociales. El desempleo llegó entonces al 19.6 %, y al 30 % si se suma a las personas contratadas por el Plan de Empleo Mínimo (PEM) y por el Programa de Empleo para Jefes de Hogar (POJH). Al año siguiente, en mayo de 1983, se iniciarían las protestas nacionales, las que, poco a poco, irán generando una creciente ingobernabilidad.

El segundo factor de la crisis de la dictadura fueron los Estados Unidos. El gobierno norteamericano, temeroso de que la situación chilena desembocara en la caída del régimen pinocheteano y en la instauración de un gobierno independiente, decidió impulsar en el país un recambio conducente a un régimen civil que mantuviera el modelo neoliberal y la subordinación a Washington, proceso que debía realizarse en los términos del articulado transitorio de la Constitución de 1980, y operar a través de los partidos de centro.

La derecha se verá seriamente afectada por la crisis de la dictadura que así se abría. A partir de tales circunstancias, se puso de manifiesto para muchos sectores de ella que era difícil seguir definiéndose como nacionalista o corporativista y delegar en la dictadura su representación. En medio de grandes confusiones, debió entonces tomar la decisión de reorganizarse partitocráticamente,

tanto a los fines de defender el modelo neoliberal como a los de participar de la transición que, con activo apoyo del gobierno de Washington, consagraba la Constitución de 1980.

El retorno a las armas de la política que esto implicaba –con la consiguiente relativa renuncia al terrorismo de Estado, que a diferencia de antaño se revelaba ineficaz y, más aún, contraproducente– llevó incluso a un sector de la derecha a negociar con los opositores de centro, los que al igual que los de izquierda, reemergieran al calor de las protestas. A tales efectos, al menos en parte, la derecha deberá poco a poco reasumir las legitimidades demoliberales que antes había denigrado al identificarlas con la demagogia y la politiquería conducentes a la decadencia y la disolución nacional.

En resumen, la nueva situación por la que atravesaba el país terminó haciendo inviables tanto al nacionalismo como al corporativismo que por tantos años habían sido asumidos instrumentalmente por la derecha. Como se ha visto en capítulos anteriores, en el pasado tales ideologismos habían sido imprescindibles para ella a los efectos de revertir, a través de la destrucción del orden institucional, el alza de los sujetos populares, los cuales incluso, bajo el liderazgo de Salvador Allende, habían llegado a conquistar el gobierno en 1970. Y, aún más, tales definiciones nacionalistas y corporativistas habían sido imprescindibles a los propósitos de revertir el conjunto de los procesos democratizadores verificados desde los años treinta en adelante, siempre a los fines de restaurar a las clases dominantes en su lugar. A esos propósitos respondió la asunción del nacionalismo por la derecha a mediados de los años sesenta. A los mismos fines obedeció la dictadura cívico militar cuando llevara a cabo los crímenes descritos en capítulos anteriores, generando así las premisas estatales requeridas por la implantación del neoliberalismo que subordinaba todo a la acumulación del capital. Pero ahora, cumplida ya esa tarea, y en condiciones de globalización, de la crisis y del cercano desaparecimiento del sistema socialista, del desprestigio del anticapitalismo, de la aparición de una creciente izquierda conversa, de la fragmentación de los procesos productivos con su correlativa disgregación de los sectores asalariados y, en fin, en el contexto de las protestas nacionales que conllevaban una profunda crisis de la dictadura, la derecha requirió de otros

mecanismos y de otros discursos legitimantes, más ajustados a los tiempos, para defender los mismos intereses de siempre. De allí su reasunción de la forma partido. En el mismo año de 1983 en que se iniciaran las protestas nacionales, la derecha avanzó en tal dirección. Así, a poco andar, en su seno se conformaron dos organizaciones partidarias. Una fue la Unión Demócrata Independiente (UDI), y la otra, la Unión Nacional (UN).

La Unión Demócrata Independiente, bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, agrupó a los gremialistas, cuyos miembros ocupaban cargos importantes en los diversos niveles de la dictadura, habiendo sido los principales soportes ideológicos y políticos de esta. La Unión Nacional, por su parte, menos influyente en el régimen y un poco más independiente respecto de él, agrupó principalmente a personeros de la antigua derecha tradicional, en particular de la que confluyera en el Partido Nacional, autodisuelto en septiembre de 1973. Pronto la Unión Nacional, o algunos personeros de sus filas, acicateados por la profundidad de la crisis de la dictadura, empezaron a declarar su adhesión a ciertos principios del régimen demoliberal. No lo hicieron de manera plena, ya que siguieron postulando la exclusión de la izquierda del sistema político y la mantención del tutelaje militar sobre este, aunque ubicando a los uniformados en una segunda línea de defensa y no en la administración directa del Estado. Desde allí debían constituirse en la garantía última frente a la eventual emergencia de sujetos populares con proyectos anticapitalistas capaces de acceder al poder.¹

Como se señaló arriba, ambos partidos de la derecha tenían ciertos objetivos en común: encarar y neutralizar el ascenso de la verdadera rebelión popular en curso desde 1983 en adelante y neutralizar la acción de los reemergentes partidos de centro-izquierda, dando una salida política a la crisis de la dictadura. No obstante, en los años que siguieron a 1983, ambas colectividades difirieron en el modo de conseguir ese objetivo.

La Unión Nacional, en la medida en que se profundizaba la crisis del régimen derivada de la amplitud y profundidad de las protestas nacionales, acentuó la tendencia a buscar ciertos acuerdos con la Democracia Cristiana, en todo caso, siempre ambiguos. Incluso

¹ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., pp. 383-384.

más, algunos de sus miembros llegaron a manifestarse partidarios de modificar el itinerario institucional de la dictadura adelantando el plebiscito que el articulado transitorio de la Constitución fijaba para 1988, postulando, además, que el candidato a presentar en aquel no debía ser Pinochet, sino una figura que concitara mayor consenso y apoyo del centro. Igualmente, miembros de la Unión Nacional consideraban la posibilidad de adelantar la entrada en funciones del Congreso Nacional, donde el centro debía tener representación.

La Unión Demócrata Independiente difirió totalmente de esas propuestas y se aferró al itinerario de la dictadura, que era el del articulado transitorio de la Constitución de 1980. Más adelante apoyará el nombre de Pinochet como propuesta para el plebiscito que debía celebrarse en 1988.

Entretanto, y en medio de la crisis, el tiempo pasaba y ambos partidos vieron como se les venía encima la fecha tanto del plebiscito como la de las elecciones parlamentarias de 1989, cuadro en el que forzosamente tendrían que competir con el centro (que la ley de partidos que debía promulgar el régimen tendría que reconocer); centro que, por lo demás, contaba con la protección estadounidense que pronto lo verá como la fuerza interna que debía operar un recambio hacia gobiernos civiles. Así, la Unión Demócrata Independiente y la Unión Nacional, pese a sus diferencias, se vieron en el imperativo de unir fuerzas y de fusionarse orgánicamente a fin de competir exitosamente con otras organizaciones políticas en los eventos electorales que se aproximaban.

Con esas perspectivas, en vistas a su unificación en un solo partido, a inicios de 1987 comenzaron las negociaciones entre los distintos grupos de la derecha. Tres grupos debían confluír: la Unión Nacional, la Unión Demócrata Independiente y el Frente Nacional del Trabajo (FNT), este último un organismo de fachada creado por Sergio Onofre Jarpa. Entre los dos primeros existía coincidencia en cuanto al modelo neoliberal. Sus diferencias, como hemos visto, residían en la estrategia de la transición, en la que la Unión Nacional se mostraba un tanto más aperturista que la Unión Demócrata Independiente, que era mucho más apegada a la figura de Pinochet. El Frente Nacional del Trabajo, en cambio, desde el punto de vista económico, era proclive a un rol más ac-

tivo del Estado en favor de la burguesía agraria. Ideológicamente enfatizaba el papel de los gremios empresariales y poseía ciertos rasgos corporativo-fascistas.²

En febrero de 1987 ya había acuerdo para confluir en una sola orgánica. Las tres entidades arriba mencionadas –Unión Demócrata Independiente, Unión Nacional y Frente Nacional del Trabajo– se fusionaron conformando el partido Renovación Nacional (RN). La unificación, no obstante, no puso fin a las diferencias que existían entre sus confluientes, las cuales estallaron muy pronto.

El problema una vez más guardaba relación con el plebiscito. En efecto, el sector de Renovación Nacional proveniente de la Unión Nacional insistió en que Pinochet no era el candidato más adecuado para ser presentado en la consulta plebiscitaria pues, si se insistía en su nombre, se arriesgaba a una derrota casi segura, lo que no permitiría proyectar la obra del régimen. En lugar del ya viejo dictador, había que levantar una figura que concitara más consenso si se quería evitar la derrota y despolarizar el cuadro político nacional. Los miembros de Renovación Nacional que provenían de la Unión Demócrata Independiente, en cambio, insistieron en apoyar a Pinochet y en trabajar por el «Sí», lo que le permitiera a aquel ganar el plebiscito ad portas y proyectarse ocho años más en el gobierno. Estas diferencias políticas se tradujeron al interior del Renovación Nacional en una intensa pugna por ganar la dirección de la colectividad, bajo el supuesto de que el sector que lo consiguiera la alinearía con su respectiva posición.

Sin embargo, la lucha interna terminó en escisión. Jaime Guzmán y sus gremialistas procedieron a retirarse del partido y se organizaron en lo que llamaron «UDI por el Sí», siempre en apoyo a Pinochet. Mientras que en Renovación Nacional permaneció aquella militancia proveniente de la Unión Nacional. De tal modo, la derecha quedó conformada por dos partidos: la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. Algunos personeros de esta última insistieron en tener ciertas afinidades con el liberalismo, a diferencia de la Unión Demócrata Independiente que seguía mostrándose crítica respecto de este.

²Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., pp. 424-425.

En lo que se refiere al tema del plebiscito, Renovación Nacional finalmente terminó plegándose a la posición de la Unión Demócrata Independiente. Esto es, terminó apoyando a Pinochet, debido tanto a la avalancha pinochetista proveniente del aparato del Estado, como por el sentir de la base derechista, que era devota del general. «En política [había comentado Sergio Diez a propósito de esta coyuntura] se gana o se pierde con los de uno». Y estos, como lo dijera Andrés Allamand, «estaban a rabiar con la candidatura de Pinochet».³ De tal modo, Renovación Nacional se plegó al «Sí», al igual que la Unión Demócrata Independiente, pero con desgano.

Luego del plebiscito, con el respectivo triunfo del «No», y todavía más cuando se inició la transición hacia los gobiernos civiles, los dos partidos de la derecha, adecuándose a las nuevas realidades –y contra toda evidencia–, terminaron negando que la dictadura, a la que apoyaran con tanto fervor, hubiera tenido un proyecto político contrario al régimen demoliberal. Y, más aún, dirán que la razón de ser de aquella había consistido no en desechar la democracia tradicional sino, por el contrario, en restaurarla sobre bases más sólidas y una economía más moderna. Esta fue la manera como la derecha, con su tradicional flexibilidad, intentó, ante el desarrollo de los acontecimientos, resintonizar con los discursos legitimantes de tipo democrático, únicos operantes luego de la prolongada crisis y agonía del régimen dictatorial. Pero al proceder así ella no hacía más que reflejar un hecho de la mayor importancia, consistente en que, al menos para la etapa que se abría, llegaba a su término el papel del nacionalismo y del corporativismo que la derecha profesara con anterioridad, hecho que tenía su razón de ser en que a las clases dominantes –restauradas y fortalecidas por la dictadura– dichas ideologías ya no le eran útiles.

CAPÍTULO 23

La crisis de la dictadura de las Fuerzas Armadas y la mano de los Estados Unidos en la imposición de un recambio neoliberal¹

¡Chilenos hermanos! No nos dejemos burlar con bellas promesas i confesiones arrancadas en el apuro de las circunstancias: nosotros habemos sido colonos, i nuestras provincias han sido colonias y factorías miserables: se ha dicho que no; pero esta infame cualidad no se borra con bellas palabras.

José aMor dE la Patria
«Proclama del Catecismo político cristiano»,
panfleto que circuló en Santiago en 1810,
durante los meses que precedieron a la formación
de la Primera Junta de Gobierno.²

Como sabemos, en 1983, a partir de las protestas nacionales, la dictadura cívico militar entró en una profunda crisis, la que finalmente la obligó, en marzo de 1990, a entregar el poder a un gobierno civil presidido por Patricio Aylwin. El proceso conducente a este resultado fue largo y complejo. En él, a nuestro juicio, le correspondió un papel decisivo a los factores externos, en particular a los Estados Unidos, el que apoyó a determinadas fuerzas internas para que llevaran a cabo una transición diseñada fuera del país.

Pero en nuestro medio, los procesos históricos escasamente suelen ser analizados considerando sus variables internacionales. Por eso la visión que tenemos de nosotros mismos tiende a ser localista. Esto, sin embargo, no se condice con los datos empíricos disponibles. Por eso es que través del presente texto, que versa sobre el fin de la dictadura militar en Chile, intentamos desafiar

¹ Este texto es una versión ampliada de otro incluido en *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Ed. América en Movimiento, Santiago, 2018.

² Versión completa en: <http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=13:catecismo-politico-cristiano&catid=10:independencia-de-chile&Itemid=9>.

esa limitación. En tal sentido sostenemos que las variables externas fueron fundamentales en el proceso político que culminó con el término de la dictadura.

Lo dicho no implica afirmar que en ese proceso los actores internos desempeñaran un papel meramente pasivo. Solo ratificamos que algunos de ellos –cierta clase política centrista de carácter cupular– asociaron sus particulares propósitos políticos a los de los actores extranjeros y al hacerlo generaron tensiones con sus propias bases sociales, las que espontáneamente tendían a soluciones autónomas. Como es obvio, en nuestro caso, el actor externo por antonomasia fueron los Estados Unidos, sin perjuicio de que también existieran otros.

Los datos disponibles muestran que así como la intervención estadounidense desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que desembocaron en la instauración de una dictadura militar en 1973, esa intervención no fue menos importante en lo relativo a la remoción del régimen dictatorial. En efecto, el fin del régimen pinocheteano operó mediante la materialización de un diseño político confeccionado básicamente por los Estados Unidos, que Washington se empeñó en imponer, y al cual, con mayor o menor exactitud, terminó ciñéndose el ala más conservadora de la clase política de centro, opositora a la dictadura, así como finalmente también terminó haciéndolo la mayoría de las otras cúpulas. La relevancia de este proceso radica en que en él se hallan algunas de las principales claves para la comprensión de las características que durante veinte años evidenciaron los gobiernos concertacionistas.

La crisis de la dictadura militar y la actitud de los Estados Unidos frente a ella

Como es sabido, la crisis de la dictadura militar se hizo del todo evidente a lo menos en mayo de 1983 cuando, sobre el trasfondo de una profunda recesión económica, estallaron las protestas nacionales. En el decurso de tales protestas se reconstituyeron las fuerzas políticas opositoras, lo que dio origen a la centrista Alianza Democrática (AD) y al izquierdista Movimiento Democrático

Popular (MDP). En ese cuadro, la viabilidad del régimen se vio amenazada.

En tales circunstancias, apoyándose en el prodigioso movimiento social que eran las protestas nacionales, la Alianza Democrática, en septiembre de 1983, inició negociaciones con la dictadura planteando demandas claramente democráticas. Tales eran la renuncia inmediata de Pinochet, la formación de un gobierno provisional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que debía definir un nuevo ordenamiento constitucional. Después –dadas las presiones de los Estados Unidos– la oposición de centro renunciaría a los mencionados planteamientos, mientras que, por su parte, en octubre Pinochet desechaba las negociaciones al declarar que para el régimen habían constituido un mero juego de piernas. Frente a ello, las protestas nacionales se harían recurrentes.

En ese contexto se empezó a hacer visible –y con particular energía– la intervención estadounidense con un claro proyecto político, cuyo contenido era hacer un recambio neoliberal suave, utilizando el itinerario constitucional de la Carta de 1980, recambio que sería pactado entre, por un lado, un sujeto político a constituir –que tendría como eje al sector conservador del Partido Demócrata Cristiano–, y por el otro, la dictadura.

Los Estados Unidos le prestaron una gran atención a la crisis de la dictadura chilena, en gran medida a la luz del peso que por entonces tenía la izquierda en el país, la que, a juicio estadounidense, si en un plazo prudente no se abría una perspectiva de remoción del régimen pinocheteano, podría convertirse en una opción de poder. Washington consideró que ante ello había que responder mediante una intervención enérgica, sobre todo a la luz de dos experiencias recientes, ambas ocurridas en 1979: el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y la caída del sha de Irán, con el correspondiente triunfo de la revolución islámica en este país. En ambos casos habían caído regímenes incondicionales a Washington y se habían instalado gobiernos furibundamente antinorteamericanos. Los Estados Unidos consideraron que en esas dos situaciones su diplomacia había cometido errores gravísimos, consistentes en no anticiparse a la crisis de sus aliados y en no haber preparado oportunamente un recambio que le fuera funcional. Esos errores debían ser evitados a toda costa en Chile. Un

recambio favorable a Washington en este país debía, por tanto, ser elaborado con urgencia antes de que fuera tarde. Las fuerzas internas que debían ejecutar este diseño estaban constituidas por ciertas cúpulas transversales –muchas veces enfrentadas con sus bases– centradas en el sector conservador del Partido Demócrata Cristiano.

El contexto de la intervención estadounidense en Chile: la revolución conservadora de Ronald Reagan

Hay que tener en cuenta que los esfuerzos estadounidenses dirigidos a abrir paso a una salida que le fuera funcional en Chile se verificaron cuando se hallaba en la Casa Blanca Ronald Reagan, quien aparecía en los Estados Unidos como la cara visible de una verdadera revolución conservadora. Esta, como es sabido, se basaba en una absolutización del libre mercado y en el retorno de los valores religiosos y de la moral tradicional, a lo que se agregaba un frenético anticomunismo. Reagan gobernó con una extrema derecha que, aparte de lo dicho, difundía un discurso que condenaba el aborto, la pornografía, la homosexualidad, la igualdad de derechos para la mujer y la protección a las minorías sexuales, al tiempo que paralelamente postulaba aumentar la educación religiosa en los colegios, así como también las penas a los delincuentes.

En lo internacional el régimen reaganiano desde sus mismos comienzos se había propuesto llevar a cabo una fuerte intervención en diversos países, intentando restaurar una hegemonía mundial norteamericana que consideraba amenazada por una supuesta expansión del bloque soviético fuera de Europa. Ya durante sus discursos electorales, Reagan había planteado con suficiente claridad ese lineamiento: «Durante mi gobierno el comunismo no conquistará un solo centímetro más de tierra y me propongo recuperar territorios y pueblos caídos bajo su férula».³

³ Citado por Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot: *Recolonización o independencia. América Latina en el siglo XXI*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2004, p. 91.

En una medida muy considerable, esta política contenía una crítica a las orientaciones que había seguido el presidente James Carter, calificada por la extrema derecha republicana como débil y contemporizadora frente al comunismo, y de ser la culpable de un retroceso estadounidense a escala mundial, el cual había que revertir desde ya para acabar con la distensión.

Bajo tales supuestos fue que, una vez que Reagan estuvo en el gobierno, Washington invadió militarmente Granada, impulsó la «guerra de baja intensidad» contra el régimen nicaragüense y la guerrilla salvadoreña, apoyó y financió la oposición sindical en Polonia, intervino en el Líbano y Libia, a la par que intentó restaurar su superioridad estratégica sobre Moscú a través del programa de la Guerra de las Galaxias, lo que dio así un fuerte reimpulso a la Guerra Fría.

En ese contexto la administración reaganiana –al igual que en los momentos más álgidos de la Guerra Fría– conceptuó a América Latina como un campo de enfrentamiento con la URSS, la cual estaría penetrando a los países de la región, sobre todo en la zona caribeña. La revolución sandinista y la guerrilla centroamericana serían la expresión más visible de tal fenómeno. Como respuesta no solo había que revertir dichos procesos, sino también impedir que se instalaran nuevos gobiernos prosoviéticos en el continente.

Con el título de «Una nueva política interamericana para la década de 1980», estas concepciones habían sido expuestas en el llamado «Documento de Santa Fe I», elaborado por uno de los grupos de la extrema derecha conservadora que apoyaba a Reagan, quien lo hizo suyo. En sus páginas se sostenía que para los Estados Unidos la distensión equivalía a la muerte. A partir de ello planteaba la urgencia de que Washington retomara la iniciativa estratégica, bajo el supuesto de que estaba en curso una verdadera Tercera Guerra Mundial, que había empezado apenas terminara la Segunda. Dicha guerra se libraría de preferencia en el tercer mundo. Sobre esta base el documento sostenía que «América Latina [era] vital para los Estados Unidos. La proyección del poder global de los Estados Unidos siempre ha descansado en un Caribe cooperativo y en una América Latina que le brindó apoyo».⁴ Y criticando la

⁴ «Documento de Santa Fe I», en Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot: *Recolonización o independencia. América Latina en el siglo ^{xxi}*, ed. cit., p. 94.

política de Carter, agregaba: «jamás nuestro país se ha encontrado en una situación tan riesgosa como ahora respecto de su flanco sur. Jamás la política exterior de los Estados Unidos ha abusado, abandonado y traicionado, como ahora, a sus aliados del sur en América Latina [...]». Frente a este cuadro, la verdadera alternativa sería «o la paz soviética o una contrapuesta proyección de la potencia americana a escala mundial. La hora de las decisiones no puede ser postergada».⁵

Uno de los elementos que más caracteriza a este documento era la tesis según la cual la propiciada contraofensiva de los Estados Unidos en el mundo debía tener un fuerte componente ideológico. Según su texto, había que dotar a la política estadounidense de un elemento dirigido a ganar las mentes de la humanidad. El documento partía de la premisa según la cual las ideas que están detrás de cualquier política son esenciales para la victoria. Tal aserto, en relación con América Latina, tendrá una de sus facetas fundamentales en un esfuerzo para cooptar a los intelectuales, quienes históricamente, en una proporción muy alta, al menos hasta los años setenta, se proclamaron «antimperialistas» y críticos de los Estados Unidos, muchas veces profesando ideas de corte marxista. Este componente del «Documento de Santa Fe I» reviste la mayor importancia y no debe ser perdido de vista.

La conexión vaticana

La referida contraofensiva estratégica mundial estadounidense suponía la colaboración de ciertos aliados. Estos eran en primer término los países de la OTAN, a los cuales cabe agregar el Vaticano. En relación con esto último hay que tener en cuenta que luego del término de la Segunda Guerra Mundial se había producido un considerable acercamiento entre Washington y la Santa Sede. Ello fue posible debido a la conformación del bloque soviético en el contexto de la surgente Guerra Fría. Dicho bloque pasó a ser visto como la amenaza principal no solo por los Estados Unidos, sino también por las altas esferas vaticanas. No es extraño, en consecuencia, que soterradamente Washington y Roma confluye-

ran en lo que se denominó como un esfuerzo dirigido a contener la expansión mundial del comunismo. Durante los años ochenta, la colaboración entre los Estados Unidos y el Vaticano se vio sustancialmente incrementada, lo que se verificó en el contexto de una serie de factores que la potenciaron de manera decisiva. Tales factores se conjugarían de manera notable y conducirían a un éxito de gran relevancia histórica. Ellos fueron: a) la crisis, que resultaría siendo terminal, de los países socialistas europeos, empezando por la propia URSS, crisis que Mijaíl Gorbachov decía querer conjurar mediante la Perestroika; b) la ofensiva reaganiana ya descrita, y en particular su programa de la Guerra de las Galaxias, que la URSS, debido a los problemas de eficiencia y productividad que presentaba su economía centralizada, no podría equilibrar, ni aun intentando su reforma interna; y c) la existencia de un papa polaco, Juan Pablo II, de fuerte vocación política, carisma y capacidad de liderazgo, el que desde dentro conocía bien las debilidades y falencias del socialismo real, y que provenía de una Iglesia —la polaca— de fuerte tradición de lucha en contra de él.

La crisis del socialismo real se arrastraba al menos desde los años setenta, y bajo el liderazgo brézhneviano había seguido un curso soterrado. No obstante, cuando se desplegó la ofensiva global reaganiana, ya no pudo seguir ocultándose, en particular frente al programa de la Guerra de las Galaxias que claramente inclinaba la balanza estratégica a favor de los Estados Unidos. Muerto Leonid Brézhnev, Yuri Andrópov, jefe de los servicios de Inteligencia y que, por lo mismo, se hallaba plenamente consciente de la crisis del sistema, aspirará encararla planteando el tema de la reforma. Sin embargo, no tendrá tiempo pues la muerte le sorprenderá antes de iniciar la tarea. Mientras que su sucesor, Konstantín Chernenko, proveniente de los núcleos más conservadores de la burocracia soviética, encarpetó toda perspectiva al respecto. Su deceso, en todo caso, igualmente se producirá pronto. Al sucederle Mijaíl Gorbachov, se dijo que las reformas no podrían ya ser postergadas, a menos que se deseara que la URSS se convirtiera en una potencia de segundo o tercer orden. Tal fue el origen de la Perestroika, la cual, sin embargo, haría eclosionar todas las contradicciones internas del sistema y catalizar su crisis, la cual se transmitió a los países de Europa del Este, contribuyendo así a su futura caída. Por su parte, la intervención del Vaticano en Europa del Este pudo alcanzar toda

su eficacia solo debido a la referida crisis de la URSS, conjugada con la potencia que alcanzó la ofensiva mundial estadounidense. El papa Juan Pablo II, en tal contexto, evidenciando sus grandes dotes políticas, no desaprovechó la oportunidad y se convirtió en un catalizador de la sempiterna y acrecida oposición polaca, la que, como se dijo, siempre tuvo en la Iglesia Católica local un importante pilar. La intervención política del pontífice, que obviamente se hizo valer como un mensaje espiritual, fue muy relevante, e irradió hacia los países vecinos contribuyendo a catalizar la movilización de grandes masas populares descontentas hasta entonces pasivas, cuya represión no podría llevarse a cabo sin el apoyo soviético, que Gorbachov no consentiría.

Como es sabido, en los años siguientes, en especial a partir de 1989, todo terminó con el derrumbe del bloque soviético y con la imposición plena del capitalismo a nivel planetario, lo que puso de manifiesto el rotundo éxito de la estrategia de Reagan y de sus aliados.

Los acontecimientos chilenos que culminaron con la remoción del general Pinochet forman parte de esa misma trama mundial, de esa transformación internacional y del mismo triunfo del capitalismo a escala planetaria; procesos de los cuales los acontecimientos chilenos fueron rigurosamente contemporáneos. Y lo que es más importante, en estos participaron como fuerzas motrices los mismos actores internacionales, es decir, Washington y el Vaticano, secundados por los aliados de la OTAN, o sea, los países de la Comunidad Económica Europea, con los cuales se articulaban las fuerzas internas del recambio unidas en torno a las cúpulas del Partido Demócrata Cristiano.

Si nos adelantamos a los acontecimientos, deberíamos decir que dentro de esa trama única, los Estados Unidos terminarían imponiendo su voluntad en Chile a través de la acción del Departamento de Estado, de sus embajadores, enviados especiales y militares, quienes, entre otras acciones, procedieron a reunir, proteger y potenciar a las fuerzas internas del recambio; mientras que el Vaticano complementaba esa labor mediante una sigilosa iniciativa a través del nuncio Angelo Sodano y, sobre todo –como en Polonia–, de la Iglesia local –estrechamente vinculada a la oposición de centro–, sin que faltara la correspondiente visita del Papa, producida en 1987. El

resultado fue finalmente un rotundo éxito, llevado a cabo en 1989, el mismo año de la caída del muro de Berlín. Como consecuencia de ello, en marzo de 1990, Patricio Aylwin asumiría la presidencia de la República, todo lo cual –aunque planificado a miles de kilómetros de distancia por cerebros extranjeros– la clase política concertacionista reputará como la expresión de la libre y soberana voluntad del pueblo chileno manifestada a través de las urnas.

El diseño político estadounidense

Una de las características más importantes del diseño de recambio elaborado por el Departamento de Estado para Chile consistió en el esfuerzo por no dejar a las Fuerzas Armadas y a la dictadura en una situación humillante y con un amargo sentimiento de derrota. Después de todo, al menos desde la Segunda Guerra, los uniformados –como sucedía en el resto de América Latina– eran uno de los aliados más confiables de Washington, con quienes siempre se podía contar. De allí que había que buscar fórmulas aceptables tanto por las fuerzas internas del recambio –que debían ser encabezadas por el Partido Demócrata Cristiano–, como para la dictadura, para hacer la transición lo más indolora posible. Ante la cerrazón mostrada por Pinochet en septiembre de 1983 cuando, pese a ciertas fintas, se negara a todo acuerdo con la oposición de centro a los efectos de iniciar una transición, la idea que en esa perspectiva finalmente enfatizará Washington consistirá en insertar al Partido Demócrata Cristiano y a sus aliados dentro del orden institucional del régimen, es decir, dentro de la Constitución de 1980, para así conseguir que el recambio se verificara a través de sus mecanismos. Esto es, a través del plebiscito que la carta fundamental contemplaba para 1988, y luego, mediante los comicios presidenciales y parlamentarios que, si triunfaba el «No», debían celebrarse en 1989.

Hay que subrayar que la demanda para que el recambio del régimen se verificara al interior de la Constitución de 1980 era mucho más compleja de lo que hoy podría sospecharse, por cuanto las fuerzas opositoras y, en primer lugar, el propio Partido Demócrata Cristiano habían proclamado solemnemente que esa Constitución era ilegítima, por lo cual no la reconocerían ni ahora ni en el futuro

y que tampoco validarían ninguno de los actos que se derivaran de ella. Esto, ciertamente, dejaba fuera la posibilidad de insertarse en el plebiscito de 1988. Este hecho constituía un formidable obstáculo que el diseño estadounidense tendría que resolver, valiéndose para ello de los políticos chilenos que le otorgaban más confianza. Otro problema significativo al respecto lo constituía el que en ese entonces –1984– el plebiscito de 1988 habría sido visto por el país –conmovido por fuertes jornadas de protesta– y por el conjunto de la oposición, aparte de inconducente, como muy lejano. Todos aspiraban a un cambio a corto plazo. En tales circunstancias, a partir de cierto momento, el núcleo más íntimo de las fuerzas internas del recambio tendrá que disimular ante sus propias bases el que miraba a 1988 y que no estaba pensando en una salida inmediata.

El Acuerdo Nacional

En 1984 el diseño estadounidense tomó cuerpo a través de lo que se denominó Acuerdo Nacional. Su plan de acción contemplaba: 1) que, en la perspectiva de negociar una transición con la dictadura, se constituyera un interlocutor válido a través de la acción de la máxima autoridad de la Iglesia; 2) que la propuesta que ese interlocutor le presentaría al régimen garantizara la mantención del orden económico social implantado por este, asegurándole a él y a los poderes fácticos la tranquilidad pública y el carácter pacífico y ordenado que tendría la transición; 3) que se negociara esa propuesta al interior de la Constitución del 80, reconociéndola y enmarcándose dentro de ella; 4) que se aislara a las fuerzas políticas no funcionales a este esquema, en particular al Partido Comunista; y 5) que se desactivara la movilización social, o que se la hiciera de manera testimonial, limitándola a los efectos de presionar a la dictadura para que aceptara el pacto que se le propondría.

La implementación práctica del diseño estadounidense

Podría decirse que la implementación práctica del diseño estadounidense comenzó a hacerse visible al menos a mediados de 1984. Entonces, el 6 de mayo, con el argumento de que había cumplido

los setenta y cinco años, el papa procedió a sacar de la cabeza de la Iglesia chilena al cardenal Raúl Silva Henríquez –acérrimo opositor a la dictadura–, poniendo en su lugar al conservador monseñor Francisco Fresno, cuya misión principal consistiría precisamente en impulsar el Acuerdo Nacional.

Otro paso importante se dio dos meses después, cuando en un seminario organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos, de propiedad del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin –uno de los hombres más confiables con que contara Washington– postuló que para hacer posible una transición a la democracia era indispensable dejar de rechazar la Constitución de 1980, la cual debía ser reconocida como «un hecho». Obviamente, el diseño estadounidense de transición, no tendría viabilidad alguna si este planteamiento de Aylwin no era aceptado por la mayoría de las fuerzas del centro.

Meses después, el 15 de noviembre, se dio otro paso en la ejecución del diseño. Estuvo a cargo de la Iglesia. Ocurrió cuando la dictadura una vez más declarara el estado de sitio a efectos de contener las protestas nacionales. Entonces la Conferencia Episcopal declaró que estaba dispuesta a interponer sus buenos oficios en la búsqueda del consenso entre el régimen y la oposición, a cuyos efectos propuso ciertas medidas prácticas.⁶ A través de este acto, así como también mediante los referidos planteamientos de Aylwin, el diseño del Departamento de Estado, con apoyo del Vaticano, ya estaba funcionando a plenitud. Daría nuevos pasos a comienzos de 1985, no sin antes que el ultraconservador senador republicano Richard Helms dijera lo que en los altos círculos de Washington todos sabían. Esto es, que el Acuerdo Nacional era una creación del Departamento de Estado, lo que, a través de una declaración pública, monseñor Fresno rechazó indignado. En ella sostuvo: «suponer que un arzobispo de Santiago pueda ser un instrumento para desarrollar iniciativas del Departamento de Estado de los EE. UU. es una afirmación superficial, irresponsable y falta de respeto –por decir lo menos– que más perjudica la credibilidad de quien la hace, que la imagen del prelado aludido».⁷

⁶ Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, ed. cit., p. 389.

⁷ José Zavala: «Diez años después. Entretelones del Acuerdo Nacional. Apuntes para cuando se escriba la historia» (separata de *La Segunda*), 26 de julio de 1995, p. 32.

En marzo de 1985 debían darse pasos adicionales en la implementación del recambio. Entonces, monseñor Fresno debía comenzar una ronda de entrevistas por separado, en locales eclesiásticos –y en forma clandestina– con los dirigentes de las fuerzas políticas que debían firmar el Acuerdo Nacional. Luego debía verificar todos los consensos que se registraran entre ellos. Cumplida esta etapa, se procedería a reunir a dichos dirigentes con el propósito de dar forma a un documento que sintetizara esos consensos, el que posteriormente sería presentado a la dictadura con el fin de acordar con ella una transición.

Según relata José Zavala –asesor personal de monseñor Fresno para los efectos del Acuerdo Nacional–, el supuesto principal que guio al prelado en estas conversaciones fue sacado de un artículo que publicara *The Economist*, de noviembre de 1984. De acuerdo con la publicación norteamericana, las protestas nacionales en curso en Chile no conducían a nada y Pinochet sería sensible solo ante un interlocutor que ofreciera orden y gobernabilidad. Solamente en esos términos sería posible una transición.

Pero hubo algo más, según narra Zabala:

[...] en aquellos mismos días, monseñor Fresno recibió dos visitantes del extranjero, quienes le pidieron audiencia. El 19 de febrero de 1985 el prelado tuvo una entrevista en su casa, con el señor Langhorne Motley, secretario de Estado adjunto de los EE. UU. para Asuntos Latinoamericanos, quien venía acompañado por el embajador James Theberge y el encargado del «Chilean Desk» del Departamento de Estado. En lo político el visitante dijo que era necesario reabrir el diálogo gobierno-oposición. Opinó que quizás la Constitución del 80 no fuera perfecta, pero que no se podía iniciar tal diálogo dudando de la legitimidad de la persona que estaba en La Moneda. Agregó que [igualmente] era necesario que se fijara una clara línea frente al comunismo, lo cual no solo tranquilizaría a Pinochet, sino también a muchos en Chile. Motley [...] le manifestó al arzobispo que se le consideraba una personalidad respetada tanto por el gobierno como por la oposición y que, por tanto, tenía un papel fundamental que desempeñar en la redemocratización del país.⁸

⁸ José Zavala: «Diez años después. Entretelones del Acuerdo Nacional. Apuntes para cuando se escriba la historia», art. cit., p. 31. Las cursivas son mías.

El relato de Zavala agrega que a los pocos días, «el 28 de febrero de 1985 [a monseñor Fresno] lo visitó Sir William Harding, del Reino Unido, acompañado del embajador John Hickman. Harding le hizo ver [a Fresno] sus temores de que los civiles –hoy fragmentados– llegaran a 1989 sin haber conseguido constituir una clase política capaz de conducir al país». Argumentó, además, que la Iglesia tenía un papel insustituible en esta materia.⁹ Monseñor Fresno acogió a plenitud estos planteamientos.

Como puede verse, tanto los altos funcionarios estadounidenses como los ingleses le presentaron a monseñor Fresno las mismas ideas expuestas en el mencionado artículo de la revista *The Economist* referente a la necesidad de constituir un interlocutor válido frente a la dictadura capaz de negociar con ella un recambio que garantizara la gobernabilidad del país. Adicionalmente, tanto los diplomáticos norteamericanos como los ingleses coincidieron en que la negociación con el régimen tenía que hacerse reconociendo a Pinochet y a la Constitución de 1980, todo en la perspectiva de las elecciones que la carta consagraba para 1989 si en el plebiscito de 1988 triunfaba la opción «No».

Igualmente es relevante el hecho de que tanto los representantes de Washington como los de Londres subrayaran que la Iglesia Católica chilena era la que tenía la responsabilidad de agrupar a la fragmentada clase política local (de centro derecha) y convertirla en el interlocutor válido que luego de 1989 debía hacerse cargo del país. Teniendo a la vista estos hechos, sería pueril no reconocer que los arriba transcritos planteamientos de *The Economist*, sobre la estrategia que debía seguir la oposición chilena, constituían un mero reflejo de la política oficial de Washington para Chile. Tampoco es menos evidente que, sabiéndolo o no, era esta la política que se materializaba en el Acuerdo Nacional.

En marzo de 1985, acorde con los planteamientos que los personeros ingleses y estadounidenses hacía poco le habían hecho ver, monseñor Fresno, con todo el respaldo del Vaticano, empezó una ronda de conversaciones con los dirigentes de los partidos de centro y derecha. Como se dijo arriba, todo clandestino. En relación con esa ronda de conversaciones, José Zavala en su relato sobre la conformación del Acuerdo Nacional hace un acápite que es muy

⁹ Ídem.

ilustrativo. Se refiere a una «ayuda memoria» que monseñor Fresno redactara, y que contenía las ideas centrales que plantearía a los líderes de los partidos de centro derecha, con quienes se aprontaba a entrevistarse. Estas ideas –insistamos– eran las mismas que le expusieran los embajadores de los Estados Unidos e Inglaterra en las entrevistas arriba referidas. En su núcleo principal esa «ayuda memoria», según Zavala, decía lo siguiente:

Necesidad de:

«CONCERTACIÓN DE LA CIVILIDAD PARA CREAR INTERLOCUTOR QUE OBLIGUE A PINOCHET A DIALOGAR»;

–«Programa de transición a la Democracia. *De todas maneras se llega a 1989 y con acuerdo se gana*» («llamo la atención sobre esta última frase»), dice Zavala en su relato;

–«Todo aceptable para las Fuerzas Armadas»;

–«Simultáneamente penetrar el sector gobierno».¹⁰

Estas notas confirman con claridad que el propósito central perseguido por monseñor Fresno apuntaba a generar un interlocutor válido que debía negociar con la dictadura una transición destinada a operar dentro de los carriles de la Constitución de 1980, ciñéndose a su itinerario, el cual contemplaba un plebiscito en 1988, y, al año siguiente, una elección presidencial competitiva en caso de que en el referéndum se impusiera la opción «No». El Acuerdo Nacional, por tanto, suponía darle legitimidad a dicha carta constitucional, la cual, en su momento, el Partido Demócrata Cristiano y otras fuerzas declararían irremediabilmente ilegítima, en virtud de lo cual sostuvieran que en ningún caso la reconocerían, así como tampoco lo harían respecto de sus consecuencias jurídico-políticas.

En abril, cuando la ronda de conversaciones de monseñor Fresno con los líderes de los partidos de centro derecha ya estaba prácticamente concluida, el papa Juan Pablo II, con el obvio propósito de fortalecer el papel del prelado en la operación en curso, resolvió investirlo con el capelo cardenalicio. Por esta razón, monseñor Fresno debió concurrir a Roma, donde seguramente recibiría instrucciones adicionales.

¹⁰ José Zavala: «Diez años después. Entretelones del Acuerdo Nacional. Apuntes para cuando se escriba la historia», art. cit., p. 31. Las cursivas son mías.

En mayo varios de los partícipes en la referida ronda de conversaciones —sin monseñor Fresno— se trasladaron a Washington, donde a iniciativa del Departamento de Estado, tanto el Partido Demócrata como el Republicano organizaron un seminario cuya temática era las transiciones hacia la democracia en América Latina, donde se tomó como caso más representativo el de Chile. A tales eventos fueron invitados nueve políticos chilenos ubicados dentro del espectro contemplado en el Acuerdo Nacional. Según Ascanio Cavallo, la reunión en Washington sirvió al Departamento de Estado y en particular al encargado del Chilean Desk, David Dlouhy, para ver en acción a los políticos chilenos fuera de su hábitat.¹¹

Ya de regreso, el 23 de julio monseñor Fresno procedió a dar un paso adicional: reunió a todos los líderes políticos de centro derecha con quienes previamente había conversado separadamente y procedió a constatar sus coincidencias. El próximo paso fue traducirlas en un documento que sería presentado a la dictadura a los efectos de consensuar la transición. En agosto el documento estaba listo. Uno de sus párrafos decisivos decía: «es indispensable eliminar cualquier incertidumbre respecto del régimen socioeconómico que imperará una vez restablecida la normalidad». Ese régimen, obviamente, era el existente, es decir, el neoliberal.

Redactado el documento, el paso siguiente consistía en reunirse con Pinochet y sellar el acuerdo. En todo caso, el punto no era fácil pues el régimen, con diversos pretextos, dilataría el encuentro por varios meses. Mientras tanto, los embajadores de la Unión Europea, desde el mismo momento en que se hiciera público, se convirtieron en verdaderos propagandistas del documento, lo que realizaron a través de cócteles, *lobbies* y otras actividades sociales. Destaca al respecto el quehacer del embajador de la República Federal Alemana, quien incluso tomó contacto con los miembros de la Junta Militar de origen germano, los generales Fernando Matthei, de la Fuerza Aérea, y Rodolfo Stange, de Carabineros, con el propósito de que adhirieran al Acuerdo. El mensaje que les transmitió era simple y directo: «el acuerdo podía ofrecer más ventajas a las Fuerzas Armadas que a la propia oposición».¹² Ambos miembros de

¹¹ Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, ed. cit., p. 458.

¹² *Ibíd.*, p. 482.

la Junta se mostraron sensibles ante la propuesta. No deja de ser interesante que Matthei y Stange llegaran a declararse interesados en el Acuerdo. Ello no dejó de provocar fuertes tensiones al interior del régimen.

El 14 de noviembre el embajador alemán organizó un cóctel al que asistieron todos los embajadores de la comunidad europea, así como también los firmantes del Acuerdo Nacional. Además se hizo presente el nuevo embajador norteamericano, Harry Barnes, a quien el Departamento de Estado enviaba a aquellos lugares donde se requería resolver problemas difíciles para los Estados Unidos. Barnes, según *El Mercurio*, era «considerado como el hombre estrella del Departamento de Estado. Y se comenta que lugar donde va es «misión cumplida».¹³ Su instalación en Santiago, sin dudas, respondía a la necesidad de sacar adelante la transición chilena en los términos diseñados por Washington. A esos efectos, como lo señala Rafael Otano, «aprendió un castellano de apache, pero suficiente para expresar los cuatro escuetos conceptos ejes de su gestión: sí, mercado libre; cuidado comunistas; democracia adelante, salida tranquila Pinochet. Estas ideas fueron rociando las reuniones bilaterales, los cócteles, las rondas de lobbies y camarillas».¹⁴

El fracaso del Acuerdo Nacional: del «año decisivo» a la visita decisiva

El 24 de diciembre de 1985 por fin monseñor Fresno logró ser recibido por Pinochet. Pero apenas comenzó a abordar la cuestión del Acuerdo, el dictador no lo dejó continuar señalándole que «los políticos» lo estaban utilizando. «Demos vuelta a la página»,¹⁵ le indicó. Con ello el Acuerdo Nacional, al menos temporalmente, parecía fracasar. Incluso más, los desarrollos políticos de la primera mitad de 1986 parecerán confirmarlo así.

El rechazo que Pinochet hiciera del Acuerdo Nacional –al cual, incluso, se negara a analizar– provocó que no pocos opositores

¹³ *El Mercurio*, Santiago, 20 de julio de 1986, cuerpo D, p. 4.

¹⁴ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, Ed. LOM, Santiago, 2006, p. 34.

¹⁵ José Zavala: «Diez años después. Entretelones del Acuerdo Nacional. Apuntes para cuando se escriba la historia», art. cit., p. 43.

consideraran el año 1986 como «el año decisivo», es decir, cuando, lejos de todo acuerdo cupular, debía producirse el derrocamiento de la dictadura a través de la movilización ciudadana.

Como resultado de lo dicho, durante la primera parte de ese año se potenció lo que podríamos denominar como la «salida chilena», con la participación de amplias capas y organizaciones políticas, incluyendo el centro y la izquierda. Se llegó incluso a crear el Comité Político Privado a los efectos de coordinar la acción opositora durante las protestas por venir. En él participaban el Partido Demócrata Cristiano y sus aliados con el Partido Comunista y los suyos. La Asamblea de la Civilidad y la Intransigencia Democrática fueron otras tantas expresiones de la sociedad civil que pronto se formarán animando a la alternativa chilena, lo que contrastaba con el carácter cupular, preparado en las embajadas extranjeras, que caracterizaba a la salida estadounidense.

En tal contexto, el 2 y 3 de julio de 1986 se verificó una de las más grandes protestas nacionales. Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez le cupo una participación importante en ella. En estas circunstancias, la salida estadounidense parecía desvanecerse. Frente a ello en el Departamento de Estado se encendieron todas las luces rojas. Terminada la protesta se envió al país a Robert Gelbard, subsecretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos.

Gelbard llegó al país durante el mismo mes de julio. Su agenda fue intensa. Conversó con los más diversos sectores, escuchó sus puntos de vista y trató de adquirir nuevos elementos de juicio. Así, se reunió con la Junta de Gobierno, con los partidos de la oposición de centro, con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, con monseñor Fresno y la Iglesia Católica, etc. Junto con escuchar, Gelbard expuso las consideraciones de Washington, explayándose sobre las orientaciones que debía seguir el país. A este respecto, junto a Harry Barnes, en conferencia de prensa, abiertamente declaró: «tengo la impresión, al menos subjetivamente, que toda la gente está escuchando».¹⁶

Antes de retornar a Washington, el funcionario estadounidense emitió una declaración en la cual indicaba detalladamente las expectativas del Departamento de Estado respecto de la situación chilena. El texto fue publicado en su integridad por la prensa. En

¹⁶ *El Mercurio*, Santiago, 20 de julio de 1986, cuerpo D, p. 4.

él se señalaba que, a juicio de los Estados Unidos: «la demora en realizar cambios [aperturistas] beneficiaba a los enemigos de la democracia, provenientes de la extrema izquierda y la extrema derecha». Agregó que tales cambios debían consistir en «la creación de un ambiente de mayores libertades», lo que tenía que permitir «la toma de decisiones democráticas». Dentro de esos cambios figuraban «la libertad de información, libertad de reunión, partidos políticos legales y respeto por los Derechos Humanos [...]». Esperamos con interés el establecimiento de los registros electorales y la total legalización de los partidos políticos en un futuro cercano». ¹⁷ De este modo, la declaración de Gelbard enfatizaba todas aquellas medidas requeridas por la clase política centrista a los efectos de su constitución en el personal del recambio. Al respecto, Washington consideraba que esa clase política no podría organizarse y articularse suficientemente para sustituir a Pinochet si no se restauraban las mencionadas libertades.

La legalización de sus partidos y las otras libertades exigidas al régimen constituirían, en tal sentido, una ayuda fundamental, mientras que la apertura de los registros electorales sería la condición para instalar el panorama electoral que debía culminar en el plebiscito de 1988.

En segundo término, la declaración de Gelbard respaldó encarecidamente el diálogo entre esa clase política —el interlocutor válido— y la dictadura. Dijo: «El gobierno de los Estados Unidos apoya los esfuerzos de los verdaderos demócratas para edificar un amplio consenso y entablar un diálogo significativo. En particular admiramos los esfuerzos del cardenal Juan Francisco Fresno y de la Conferencia Episcopal para estimular la reconciliación nacional y poner término a la violencia».

En tercer lugar, la declaración subrayó la necesidad de excluir al Partido Comunista, al plantear: «No puede esperarse que grupos como el Partido Comunista, que hoy favorecen los medios violentos para lograr sus fines políticos, vayan a someterse mañana a las reglas democráticas. Aquellos que otorgan legitimidad a los comunistas y a otros extremistas no están contribuyendo a un Chile estable y democrático». ¹⁸ En resumen, la declaración de Gelbard

¹⁷ *El Mercurio*, Santiago, 18 de julio de 1986, cuerpo A, p. 10.

¹⁸ *El Mercurio*, Santiago, 20 de julio de 1986, cuerpo D, p. 15.

vino expresar con rigurosa exactitud los lineamientos de Washington, a los que eran funcionales las políticas impulsadas por el sector conservador del Partido Demócrata Cristiano, encabezado por Aylwin. Incluso más, Gelbard le dio a este un claro, pero implícito, espaldarazo al criticar a Gabriel Valdés –a la sazón presidente de la colectividad– por las relaciones que había establecido con el Partido Comunista a través del Comité Político Privado. *El Mercurio* se refirió a ello cuando sostuvo que «algunos palos le habría lanzado [Gelbard] a Gabriel Valdés en la reunión que sostuvo con algunos presidentes de partidos firmantes del Acuerdo [Nacional], por su indefinición respecto al tema de los comunistas».¹⁹

Finalmente, el funcionario estadounidense hizo ver en su declaración que «en los meses venideros el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos observarían los acontecimientos de Chile con gran interés».²⁰ La visita de Robert Gelbard, en todo caso, no solo rayó la cancha a la oposición de centro, sino que también hizo lo propio con el régimen. En efecto, el funcionario norteamericano emitió una serie de declaraciones a la prensa que en el fondo eran otros tantos mensajes, cuando no amenazas puras y simples, dirigidas a la dictadura. Fue así como sostuvo que la «diplomacia silenciosa» de los Estados Unidos era solo una de las tácticas posibles que utilizaba el Departamento de Estado, la que, si no daba resultados, perfectamente podía ser reemplazada por otros medios. En tal sentido se refirió a la utilización de las condenas de organismos internacionales e incluso de sanciones económicas. Agregó que, sin embargo, estas últimas eran las que a los Estados Unidos menos le gustaría utilizar en contra de Chile «porque, después de todo con lo que [Washington] estaba más de acuerdo era, precisamente, con la política económica del Gobierno [chileno], el que además nos paga», concluyó, haciendo una clara alusión a la deuda externa.²¹

En resumen, el enviado norteamericano se comportó como un verdadero delegado imperial en visita de inspección a una de las dependencias de su imperio. Los actores locales de centro y derecha, por su parte, como si Chile fuera una república bananera,

¹⁹ *Ibíd.*, p. 5.

²⁰ *El Mercurio*, Santiago, 18 de julio de 1986, cuerpo A, p. 10.

²¹ *El Mercurio*, Santiago, 20 de julio de 1986, cuerpo D, p. 5.

tomarían cuidadosa nota de los mensajes recibidos y, quizás con excepción de Pinochet, no precisamente para rechazarlos.

La oposición se pliega a la salida plebiscitaria

El primer efecto de la visita de Gelbard fue el desahucio que hizo el Partido Demócrata Cristiano del Comité Político Privado con el pretexto de que el Partido Comunista adhería a la dictadura del proletariado. Un segundo efecto fue el intento de relanzar el Acuerdo Nacional, pero con el nombre de «Bases de sustentación del régimen democrático», el cual, en todo caso, no debía ser negociado con Pinochet –que reiteradamente había rechazado toda tratativa–, sino directamente con las instituciones armadas. Acorde con esa variante, llegó al país el jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, John Gavin. Según fuentes de Rafael Otano, la visita habría tenido como objeto avisar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas que «el general Pinochet estaba concluido desde el punto de vista estratégico».²²

Tal hecho pone en evidencia, una vez más, la articulación existente entre el curso seguido por la oposición de centro –que ya no apelaba a Pinochet– y la política del Departamento de Estado. Este, a través de medidas como la visita de Gavin –y antes la de Gelbard, entre otras–, se esforzaba por limpiarle el camino a dicha oposición, incluso presionando –ahora a través del jefe del Comando Sur– a los uniformados nativos para que abandonaran a Pinochet, considerado como el gran obstáculo para el recambio diseñado por Washington.

En esa situación, dos hechos le permitirían al viejo dictador recuperarse. Uno fue el descubrimiento de los arsenales que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba desembarcando en Carrizal Bajo. El otro fue el fallido atentado que el 7 de septiembre el mismo Frente efectuara en su contra. El estado de sitio declarado entonces generó un fuerte reflujo en la oposición, en cuyo contexto la salida rupturista perdió su viabilidad. Así se llegó a fines de 1986.

Los cuatro primeros meses del año siguiente –1987– estuvieron centrados en la visita del papa. Después el escenario adquirió claros

rasgos preelectorales. El régimen se preparó entonces para ganar el plebiscito de 1988, cuya fecha se fijó para el 5 de octubre, mientras que la oposición de centro decidió impulsar una campaña por las elecciones libres, que no fue sino una transición para plegarse a la salida plebiscitaria. En julio del mismo año Patricio Aylwin fue elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano y en noviembre la colectividad declaró su voluntad de participar en el plebiscito del régimen, al tiempo que terminaba de cooptar a la fracción izquierdista del Partido Socialista, la que, ante las perspectivas que se le abrían de acceder al gobierno –con sus correspondientes cargos– renunció a su alianza con el Partido Comunista.

Como resultado de estos desarrollos, el 8 de febrero de 1988 se conformó la Concertación de partidos por el «No». Sus integrantes fueron el Partido Demócrata Cristiano, todas las fracciones socialistas, incluyendo la de Almeyda; el MAPU y el MAPU (OC); las dos fracciones del Partido Radical (la de Fernando Lueg y la de Enrique Silva Cimma), la Izquierda Cristiana, el Partido Humanista y la Unión Liberal Republicana; más otras agrupaciones menores. Al constituirse, la Concertación de partidos por el «No» emitió un documento en el que dejó establecido que si el proceso plebiscitario no contaba con garantías mínimas, lo descalificaría. En cuanto a su contenido político, el documento se mantuvo en los términos del Acuerdo Nacional y de las «Bases de sustentación del régimen democrático». Coherente con ello no figuró en su texto referencia alguna a un modelo de desarrollo económico alternativo. Asimismo, mantuvo la idea según la cual luego del plebiscito «correspondería a los partidos políticos democráticos concordar con las FF. AA. los términos de una transición rápida y ordenada a la democracia».²³ De tal modo, el interlocutor válido estaba constituido y se haría valer ante el régimen desde el interior de su legalidad, tal como Washington lo planificara.

El significado del proceso en curso era claro: representaba el desiderátum de la salida pactada que propiciaban los Estados Unidos, la cual, a esas alturas, parecía incontenible. En tal sentido, se habían reunido de una manera óptima todos los elementos considerados como esenciales por el Departamento de Estado. Esto es: 1) la configuración de una alternativa de relevo confiable, que,

²³ Citado por Eugenio Ortega Frei: *Historia de una alianza*, CED-CESOC, Santiago, 1992 p. 355.

es cierto, no era el Acuerdo Nacional, como estipulaba el diseño original, sino la Concertación, la que, en todo caso, como aquel, no cuestionaba el modelo económico vigente; 2) la inserción del bloque de recambio al interior de la legalidad del régimen, de hecho respetándole a Pinochet su periodo hasta 1990; 3) la negociación del tránsito ordenado a la democracia entre esa alternativa y las Fuerzas Armadas; 4) la marginación del Partido Comunista; y 5) el otorgamiento de garantías de gobernabilidad en la práctica a los militares, pero también al gran empresariado y a la derecha. Dicho de otra manera, se estaba llegando a la misma meta que los altos personeros estadounidenses y británicos plantearan a monseñor Fresno en febrero de 1985 durante los comienzos del Acuerdo Nacional, registrada por el prelado en la ya citada minuta que, según Zavala, guiaba sus conversaciones con los partidos de centro derecha con los fines de operar el recambio patrocinado por Washington y el Vaticano.

La otra cara de este desarrollo consistía en la consolidación del quiebre de la izquierda –en particular de la unidad entre el Partido Socialista y el Partido Comunista– traducido en la absorción por el centro de su sector pequeño burgués, años atrás ultrarrevolucionario. La relevancia de este hecho sería decisiva pues, en la medida en que persistiera, haría posible la disolución de los sujetos populares, así como también la gobernabilidad del esquema neoliberal, pronto a ser administrado por quienes hasta el momento constituían las fuerzas opositoras y que hasta hacía poco decían rechazarlo.

La mano de los Estados Unidos en el plebiscito

Instalada ya la agenda plebiscitaria, en la medida en que avanzaba 1988 la campaña electoral que le era inherente fue adquiriendo creciente intensidad. Los Estados Unidos desempeñaron en ella un papel de primera importancia frustrando los planes de Pinochet en relación con dicha agenda.

La dictadura llevó a cabo su campaña a favor del «Sí» apoyándose plenamente en el aparato estatal. Los intendentes, gobernadores, alcaldes, etc., parecían ser sus agentes principales. Sin perjuicio de lo dicho, parte significativa de su «caja electoral» se recaudaba

entre el gran empresariado, a cuyos intereses de clase la dictadura en los hechos respondía.

Desde el punto de vista de sus contenidos, la campaña del «Sí» no pudo dejar de caer en la vieja dicotomía entre un bien absoluto y un mal absoluto, que había caracterizado a las campañas del terror que la CIA introdujera en Chile durante los años sesenta. El almirante José Toribio Merino expresó esta lógica con toda claridad cuando sostuviera que a través del plebiscito «se trataba sencillamente de definir entre lo bueno y lo malo. El mundo se define entre Dios y Satanás. Ahora lo que Chile tiene que elegir es entre el comunismo y el no comunismo»,²⁴ sostuvo.

La Concertación respondió con una hábil campaña que terminó descolocando a este esquema terrorífico, lo que alcanzó su expresión principal en el eslogan «la alegría ya viene». Los estrategas concertacionistas, por otro lado, desarrollaron un poderoso sistema de cómputos paralelos, apoderados de mesa y observadores internacionales que apuntaba a impedir cualquier asomo de fraude.

Los indicios mostraban que ganaría el «No» de no haber fraude. El régimen lo percibió con cierta claridad, de allí que la inquietud cundiera entre sus más diversos niveles. En esas circunstancias, el general Pinochet tomó sus medidas, las que estuvieron orientadas a no reconocer resultados adversos, incluyendo dentro de ello la posibilidad de anular los comicios, todo, como de costumbre, con el pretexto de ciertas violencias extremistas.

Por su parte, los Estados Unidos —como se dijo arriba— desempeñaron un papel muy activo durante el plebiscito, el cual se tornó particularmente intenso —en realidad, decisivo— durante los días previos al evento. En efecto, por entonces los servicios de inteligencia norteamericanos se enteraron de los planes dispuestos por el general Pinochet para el caso de que los resultados no le favorecieran. Frente a ello Washington se dispuso a frustrarlos. El gobierno estadounidense, por cierto, no podía permitir que el recambio pactado, en el que había estado tan activa y laboriosamente trabajando durante los últimos años, fracasara a última hora. Un fracaso tal habría recolocado a la izquierda radical en el centro de los acontecimientos al demostrarse que la única salida que le quedaba al país era la rupturista. Por eso, no es extraño

²⁴ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 71.

que las presiones de Washington sobre la dictadura se hicieran particularmente intensas, sobre todo en la medida en que la fecha del plebiscito se acercaba.

En efecto, el Departamento de Estado empezó entonces a ejercer una fuerte presión sobre las cúpulas de las Fuerzas Armadas locales. Esto fue llevado a cabo a través de contactos que establecieron con ellas los altos mandos militares estadounidenses, quienes les hicieron ver a sus congéneres chilenos su preocupación por lo que pudiera suceder.

A su vez, el embajador Harry Barnes, minuto a minuto, mantenía informado a su gobierno de todo lo que sucedía en Chile. Según documentos desclasificados de la CIA, «en ese periodo [...] la comunicación [de la embajada] aumentó en volumen. Todas las antenas diplomáticas, informantes y agencias norteamericanas registraron hasta los más intrascendentes movimientos, intentando sondear la implementación de “un plan de contingencia militar destinado a anular el plebiscito”». ²⁵ Pronto tuvieron claro el panorama que Harry Barnes se apresuró a comunicar al secretario adjunto para asuntos latinoamericanos, Elliott Abrams. Decía su informe:

El plan de Pinochet es simple: a) en caso de que el Sí vaya ganando, todo bien; b) si la carrera es muy estrecha, basarse en el fraude y la coerción; c) en caso de que el No tuviese posibilidades de ganar, usar la violencia y el terror para detener el proceso.

[...]

Para ayudar a crear el ambiente la Central Nacional de Informaciones (CNI), tendrá la tarea de promover la violencia antes y después del 5 de octubre. Como sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet están conscientes de la posibilidad de la derrota creemos que la tercera opción es la más probable de ponerse en efecto, con un número sustancial de pérdida de vidas. ²⁶

²⁵ *La Tercera*, Santiago, 14 de noviembre de 2000, p. 5.

²⁶ Ídem.

Y algo no menos importante: los informes desclasificados de la CIA sostienen que la información de que disponía el embajador Harry Barnes respecto de las medidas que tomaría el régimen para bloquear el plebiscito en el caso de que los resultados le fueran adversos «provenían de altos generales del ejército». Estos le habrían hecho ver al embajador que tales planes «habían sido aprobados por altas autoridades de gobierno y que se llevarían a cabo en la tarde del 5 de octubre». Los informes agregaban que «en caso [de] que los comunistas no generaran suficiente violencia para justificar el cierre de las votaciones, la CNI estaría preparada para fomentar incidentes violentos».²⁷

Otro informe desclasificado de la CIA muestra una faceta adicional de los planes dispuestos por la dictadura para el caso de que fuera derrotada en las urnas. En esas circunstancias el régimen procedería a dilatar la entrega de los resultados dando a conocer «primero los votos favorables al Sí, y cuando la oposición reaccionara con fuerza y comenzaran los disturbios callejeros, se llamaría al ejército para restablecer el orden». De este modo, dice el informe, se dispondría de un pretexto para anular los comicios.²⁸

Ante este cúmulo de informaciones, los Estados Unidos procedieron a tomar medidas drásticas. Así, el 2 de octubre, el Departamento de Estado citó al embajador de la dictadura, Hernán Felipe Errázuriz, para una reunión de emergencia. Según otro documento desclasificado de la CIA, en esa reunión se le solicitó al personero que informara a Pinochet sobre la inquietud que cundía en el gobierno de Washington ante la existencia de los planes que el régimen tenía preparados para el plebiscito. Incluso más, se le advirtió que en el caso de que se llevaran a la práctica, ello acarrearía serias consecuencias para las relaciones chileno-norteamericanas. Esas consecuencias consistirían en un conjunto de fuertes sanciones económicas, entre las que figuraba la congelación de los bienes que tenía el gobierno chileno en los Estados Unidos; la prohibición a las empresas norteamericanas de realizar pagos al Gobierno de Chile; la cancelación de la cláusula de nación favorecida; la realización de embargos selectivos a productos chilenos, como el cobre, etc. En resumen, los Estados Unidos estaban dispuestos a tomar medidas

²⁷ Ídem.

²⁸ Ídem.

análogas a las que en su tiempo aplicaran a Salvador Allende con el fin de hacerlo caer.

La dictadura y las Fuerzas Armadas sabían perfectamente que los efectos de tales medidas serían letales, y que los Estados Unidos las llevaban a la práctica con decisión cuando requerían que se derribara a un gobierno que no respondía a sus requerimientos esenciales. Los militares chilenos tenían constancia de ello a propósito de la situación que se produjera en el país entre 1970 y 1973. Es muy probable que muchos uniformados –conscientes de que no podrían escapar de quienes los habían azuzado a partir de septiembre de 1970– hayan pensado que, una vez más, tendrían que alinearse. No era, sin embargo, el caso de Pinochet.

El 3 de octubre, al otro día de la reunión que sostuvieran representantes del Departamento de Estado con el embajador Hernán Felipe Errázuriz, el portavoz de la Secretaría de Estado, Phillips Oakley, convocó a una conferencia de prensa. Allí declaró: «estamos conscientes, por informes, de que el gobierno de Chile planea cancelar el plebiscito o anular sus resultados, y los tomamos en serio. Hemos dicho siempre que es crucial para Chile que el plebiscito sea libre y justo y que refleje la voluntad del pueblo chileno».²⁹

A estas fuertes presiones de Washington se sumaban las no menos enérgicas de la comunidad europea, sobre todo de la República Federal Alemana. La situación de la dictadura se tornó así muy grave: estaba al borde de su derrota total, a no ser que ganara el Sí, lo que se veía difícil. En el fondo, los actores externos estaban arrinconando a Pinochet haciendo posible que las «fuerzas internas» –esto es, las cúpulas de centro–, al igual que entre 1970-1973, desplegaran todas sus posibilidades. Estas fuerzas, en efecto, hubieran terminado en la impotencia sin su soporte exterior, y ellas lo sabían. No era casualidad que normalmente tuvieran el buen cuidado de sintonizar sus políticas con la de Washington. El potente paraguas que este, la comunidad europea y el Vaticano les brindaban era lo que les daba una clara superioridad sobre la oposición de izquierda, cuyas movilizaciones –con sus respectivos costos humanos en muertos, torturados y desaparecidos– ciertamente acortaron los días de la dictadura, pero a la larga terminaron siendo rentabilizadas por la oposición centrista.

528 ²⁹ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 75.

Entre el 1ro. y el 4 de octubre se produjo una serie de atentados dinamiteros en contra de torres de alta tensión. Informes de la estación santiaguina de la CIA enviados a su central en los Estados Unidos hacían ver que ellos «habían sido causados por el régimen militar».³⁰ De este modo, la dictadura parecía hacer caso omiso de las presiones externas a que estaba sometida. Pinochet, en efecto, parecía querer desafiar a Washington.

El 5 de octubre: misión cumplida

Así se llegó al 5 de octubre. Para ese día el anciano dictador había resuelto la distribución de sus tropas. Aparte de dislocar las fuerzas del Ejército en los lugares claves a lo largo y ancho del país, seleccionó los contingentes especiales que constituían su propia reserva. Según Ascanio Cavallo, esa reserva estaba formada por una fuerza de despliegue rápido integrada por unos seiscientos hombres instalada en la Escuela Militar, al mando del comandante de Institutos Militares, el brigadier general Jorge Ballerino.³¹ Adicionalmente, «Pinochet había ordenado al coronel José Zara, director de la escuela de paracaidistas, que trasladara un batallón de sus comandos desde Peldehue hasta el recinto de Apoquindo».³²

Se trataba del mismo coronel Zara que unos meses atrás –en marzo– amenazara a la oposición en drásticos términos. Entonces había dicho: «los boinas negras no permitirán jamás que nuestros hermanos caídos en combate un 11 de septiembre de 1973 observen desde el más allá una actitud conciliadora o de traición, ya que nuestros corvos brillantes y acerados estarán prontos al llamado de nuestro líder para defender al querido pueblo chileno».³³ Era este el oficial que el 5 de octubre, en caso de necesidad, debía acudir ante cualquier llamada de su jefe, el general Pinochet.

Durante el día del plebiscito, el régimen hizo circular diversos rumores sobre preparativos «extremistas» orientados a invadir las calles y generar el caos. Ciertamente, estos rumores no constituían otra cosa que la preparación de las condiciones psicológicas para

³⁰ *La Tercera*, Santiago, 14 de noviembre de 2000, p. 5.

³¹ Ascanio Cavallo y otros: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, ed. cit., p. 435.

³² Ídem.

³³ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 75.

anular el plebiscito si se requiriera, tal como se había planificado con antelación.

Cuando llegó la hora de los cómputos, el régimen, ciñéndose a su libreto, optó por retrasar su entrega. Después dio a conocer un resultado parcial basado en el 36 % del universo, que correspondía a las escasas mesas donde triunfaba el «Sí». Situación análoga se produjo en relación con la segunda entrega oficial de cómputos, aunque aquí el «Sí» aparecía ganando por una cifra más estrecha (51,3 contra 46,5). El plan, no obstante, no pudo seguir aplicándose debido a que al interior del régimen y de sus sectores afines la correlación de fuerzas se inclinó en contra de Pinochet.

Desde ya los sectores de la derecha que antes se vinculaban al Acuerdo Nacional –sobre todo los líderes de Renovación Nacional, Andrés Allamand y Sergio Onofre Jarpa–, se dispusieron a actuar con energía. Conscientes de que, en contraposición a los resultados oficiales, el plebiscito lo había ganado el «No», presionaron a sus más cercanos al interior del aparato gubernativo (Cardemil) con el fin de que no siguieran con su libreto. Incluso amenazaron con que si el Ministerio del Interior no entregaba todos los cómputos disponibles, que arrojaban una considerable ventaja para el «No», acudirían a los medios de comunicación para entregar sus propios datos y desmentir al régimen. Incluso más, así empezaron a hacerlo a través de algunos programas de televisión.

Por cierto, tal proceder hacía políticamente poco viable la posterior implementación de la violencia que la dictadura había planificado, cuyo corolario debía ser la anulación de los comicios. Esto se hacía todavía más evidente ante la presencia de numerosos observadores internacionales, entre los cuales se encontraba el propio expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez. En estas circunstancias, la culminación del plan del general Pinochet habría dado lugar a desastrosas consecuencias para el régimen, más aún cuando la Concertación poseía detallada información sobre el triunfo del «No» y se disponía a hacerla pública. Sin embargo, el viejo dictador parecía no estar consciente de todo ello.

Por eso la acción decisiva debió provenir de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros. Pasada la medianoche, estos habían sido citados a La Moneda por un Pinochet que, al típico modo de los dictadores de cuño nacionalista en trance

de derrota, frenéticamente acusaba de engaño y traición a todo su entorno. La reunión se celebró en el búnker del palacio. Allí el dictador presentó un documento a dichos jefes a través del cual estos le otorgarían enormes atribuciones sobre los mandos institucionales. Sin embargo, la solicitud de Pinochet fue unánimemente rechazada. Fue Matthei –quien ya al entrar a La Moneda había reconocido a la prensa que había ganado el «No»– quien inició la ronda de negativas. Sus argumentos: el apego a la Constitución del régimen. A su juicio, la carta fundamental debía cumplirse al pie de la letra. Los otros comandantes en jefe respaldaron este punto de vista sellando el aislamiento de Pinochet quien, así, quedó con las manos amarradas, sin poder aplicar el resto del plan que había preparado para la eventualidad de que las urnas no lo favorecieran.

En resumen, la derecha más aperturista y los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, de la Marina y de Carabineros –ya desde el Acuerdo Nacional ablandados por los Estados Unidos y la comunidad europea– se encontraron en una coyuntura en la que por fin podrían imponer su revancha sobre un Pinochet que demasiadas veces les había puesto el pie encima. Este era el momento de mayor debilidad del anciano dictador, y no lo dejarían pasar, menos aún contando con el unánime apoyo exterior, a lo que se sumaban los resultados plebiscitarios. En tales condiciones, Pinochet, a los efectos de imponer su plan, no podría cambiar el parecer de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, menos aún dadas las estrechas relaciones existentes entre muchos generales de su propia institución –el Ejército– y el embajador de los Estados Unidos, con quien algunos de aquellos intercambiaban informaciones, según lo señala el informe desclasificado de la CIA citado arriba. Después de todo, Pinochet no era omnipotente. Téngase en cuenta que casi simultáneamente los Estados Unidos llevaban a cabo en Paraguay una operación análoga a la que efectuaban en Chile: la salida del dictador Alfredo Stroessner, que parecía eterno y sin rival posible. Pese a esta apariencia, como es sabido, al año siguiente, 1989, fue sacado por un golpe dado por sus propios generales –propiciado por Washington– y con amplio apoyo de la oposición.

Se entiende, pues, que en el cuadro descrito, Pinochet debiera ceder y aceptar que la Constitución de 1980 se aplicara. Como consecuencia de ello quedaron suspendidos los planes que

elaborara con antelación. Igualmente se dejaron de hacer públicos cómputos parciales en los cuales el «Sí» aparecía triunfante y a las dos de la mañana el Ministerio del Interior entregó los resultados reales que había arrojado el plebiscito. El «No» había obtenido el 54,70 % de los votos, contra el 43 % del «Sí». Por tanto, el próximo año habría elecciones competitivas, aunque hasta entonces el dictador seguiría en el poder. La transición pactada, impulsada por los Estados Unidos, por fin se imponía del todo.

Epílogo

De los antecedentes referidos se deduce que Pinochet jamás pensó entregar el poder, como erróneamente lo sugieren sus apologistas. De hecho, no lo entregó: se lo quitaron. Lo que ocurrió, en efecto, fue que el 5 de octubre, culminando una larga operación estratégica, el general estaba rodeado por todos sus flancos por fuerzas muy superiores: el Departamento de Estado; la Comunidad Económica Europea; el Vaticano, y, por tanto, la Iglesia local; la derecha más aperturista; la oposición de centro, que ya había cooptado al grueso de una izquierda, de hecho, conversa; y, en fin, la mayoría de la población, la cual se había manifestado por el «No». A ellos terminaron sumándose tres de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas a través de sus jefes máximos, Matthei, Merino y Stange –desde mucho tiempo atrás sensibles al adverso entorno nacional e internacional–, quienes en el momento de más grave debilidad de Pinochet se desmarcaron de él y se sumaron a la salida pactada.

En la otra cara de la moneda, los incondicionales de Pinochet estaban conformados, en primer término, por el Ejército el que, a pesar de los subrepticios contactos que algunos de sus hombres mantuvieran con personeros estadounidenses, a esas alturas, más que una institución nacional, parecía ser un apéndice de la persona del dictador, respecto del cual nunca mostró verdadera independencia. Al Ejército se agregaban ciertos grupúsculos nacionalistas ya impotentes, a los que Pinochet reiteradamente había despreciado en favor de los gremialistas de Jaime Guzmán y de los tecnócratas de la oligarquía financiera local, es decir, los economistas neoliberales. Se sumaba el gran empresariado, temeroso de

cualquier régimen democrático y equivocadamente convencido de que las hiperganancias que por años había obtenido mediante la sobreexplotación de la fuerza de trabajo solo podrían mantenerse mediante un régimen dictatorial de claro sesgo clasista, como el que, a través del liderazgo pinocheteano, de hecho, las Fuerzas Armadas impusieron en 1973. A ellos, en fin, cabría sumar ciertos segmentos minoritarios de una pequeña burguesía, y de ciertas clases medias, fanatizadas, temerosas y psicológicamente enfeudadas a la figura del dictador, algunos de cuyos miembros colindaban con sectores del lumpen.

Mediante la desertión de tres de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas –hecho ocurrido en la madrugada del 6 de octubre en el búnker de La Moneda, según se ha visto–, los mencionados elementos que apoyaban al viejo dictador quedaron en una relación de fuerzas político-militares insostenible. Incluso, Jaime Guzmán y la UDI, en un escenario tan negativo, seguramente no habrían apoyado a Pinochet si este se hubiera empeñado en seguir su plan original, menos aún cuando la colectividad desde hacía tiempo apostaba por la despersonalización del régimen al que había contribuido decisivamente a crear. En tales condiciones, el general Pinochet, muy a su pesar, optó por una retirada que consideró táctica. De allí que nunca existió su pretendido sometimiento a la voluntad ciudadana. Las afirmaciones en contrario constituyen un mito interesado, elaborado a posteriori por la derecha, mito carente de sustento empírico, según incluso les consta a los dirigentes del sector aperturista de aquella.

El viejo dictador consideraba que, debido a que su derrota era meramente táctica, su régimen podría recomponerse, al menos en sus aspectos esenciales. Esto se lograría garantizando la integridad de la Constitución de 1980 la que, a través de distintos mecanismos, hacía recaer parte fundamental del poder en las Fuerzas Armadas. A ello se agregaba el papel que, según la Constitución, a él mismo le cabía como senador vitalicio. El tiempo le demostraría al general que sus ilusiones eran vanas y que su derrota política –que en el fondo consistía en su incapacidad para seguir bloqueando la salida norteamericana– no había sido táctica sino estratégica.

En este escenario, que marcaba el triunfo absoluto de los lineamientos trazados por Washington, el Departamento de Estado

—quizás exagerando la nota—, y sin guardar las formas que le facilitarían a las «fuerzas internas» la tarea de presentar con dignidad los acontecimientos como si hubieran sido de su propia hechura, procedió, como un águila imperial, a dar su todopoderosa palabra a través de una declaración pública en la que, so pretexto de hacer llegar al país sus felicitaciones por la realización exitosa del plebiscito, indicó a las fuerzas internas la pauta a seguir. Al respecto sostuvo: «Confiamos en que el gran número que apoyó a cada una de las opciones [el Sí y el No] ahora trabajarán unidas para construir un nuevo consenso nacional para el futuro de Chile».³⁴

Obviamente, las fuerzas que estaban tras cada una de las opciones mencionadas por la declaración del Departamento de Estado eran la Concertación, por un lado, y la derecha, por el otro. Según Washington, dichas fuerzas precisamente debían construir «el futuro consenso nacional para Chile». Lo que no dijo la declaración fue que ese consenso debía pasar por la mantención del modelo neoliberal, aunque no era necesario por cuanto todos lo subentendían, según lo demostrarán los acontecimientos futuros.

Por cierto que nada de esto trascendió al estrecho entendimiento del grueso de la cándida y desinformada población de este último rincón del mundo. Esta nunca dudó de que había sido ella la que —según expresión de un periódico—, con un «lápiz» había derribado al dictador, por lo cual vendría ahora un régimen democrático al que asociaba a cambios económicos y sociales. ¿Podría concebirse ingenuidad mayor?

Por su parte, los discursos de la clase política vencedora se encargaron de cubrir con velos adicionales el real significado de los acontecimientos mediante su ya conocida y ampulosa fraseología referente al «reencuentro de todos los chilenos», la «reconciliación nacional» y la «recuperación de la centenaria tradición democrática del país». A contrapelo de estos discursos vacuos, reiterados hasta la saciedad, lo que realmente estaba en desarrollo era un fenómeno mucho menos épico, aunque de ningún modo carente de relevancia: la recomposición y ampliación de las elites gobernantes a través de un pacto que, entre otras cosas, suponía la restauración de las libertades públicas, pacto largamente forjado bajo la égida

extranjera, cuya otra cara era la mantención del modelo neoliberal y, por tanto, del poder del gran capital.

Por su parte, con no menor sentido de la oportunidad, los discursos de la derecha presentaron a la dictadura como la verdadera constructora del nuevo cuadro político. Así, hablaron de una democracia más sólida y saneada respecto de los vicios de la del pasado (precisamente porque excluía a los representantes de las clases subalternas). Evidentemente, todo por obra de las Fuerzas Armadas y del general Pinochet. Estas afirmaciones, adicionalmente, permitían dejar contentos a los uniformados, los que así –lejos de reconocer el rol histórico que habían desempeñado en beneficio del gran capital y de las transnacionales– podrían seguir autoconsiderándose como los «salvadores de la patria».

Fueron pocos los que cuestionaron a alguna de dichas visiones. Parecía como si las mayorías nacionales, y en primer término las propias elites, hubieran querido avalar la afirmación del genial florentino, según la cual «los hombres son tan cándidos y tan sumisos a las necesidades del momento que quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar».³⁵

Como es sabido, al año siguiente, 1989, se verificaron las elecciones presidenciales que permitieron a la Concertación llegar al gobierno, encabezada por quien más se había vinculado a la salida estadounidense, esto es, Patricio Aylwin. Antes de ello –culminando ciertas negociaciones verificadas entre la cúpula concertacionista y la dictadura–, se plebiscitaron algunas reformas menores a la Constitución de 1980, las cuales no abolieron los llamados «enclaves autoritarios», mantuvieron a Pinochet como senador vitalicio, y a las Fuerzas Armadas como «garantes» del orden institucional; todo en el contexto de un régimen electoral binominal que permitía excluir a la izquierda de las instituciones representativas.

Lo que quizás fue aún más importante: los gobiernos concertacionistas, ya instalados en La Moneda, por veinte años harán exactamente lo que los Estados Unidos esperaban que hicieran: mantener al país subordinado a Washington; consolidar y legitimar el modelo neoliberal, dándole estabilidad; desnacionalizar aún más la economía en beneficio de las empresas transnacionales; y, en fin, terminar de disolver a los sujetos populares. Todo ello no fue más

³⁵ Nicolás Maquiavelo: *El príncipe*, ed. cit., p. 116.

que el resultado de las modalidades que adoptara la remoción de la dictadura militar, es decir, del peso decisivo que en ese proceso tuvieron las variables externas.

Dadas las señaladas circunstancias no es extraño que, desde los años noventa en adelante, el gobierno de Washington, así como también los de la comunidad económica europea, definieran a la transición chilena como «la más exitosa y ejemplar de América Latina». Desde la óptica de esas potencias, ciertamente lo fue. Sin embargo, desde una perspectiva propiamente chilena, tal aserto podría ser cuestionado. En efecto, desde esta perspectiva sería plausible afirmar que el rasgo más notable que tuvo esa transición fue su falta de carácter nacional.

CAPÍTULO 24

Gobiernos de la Concertación: consolidando lo instaurado con sangre

Pero es indispensable saber disfrazar bien las cosas y ser maestro en fingimiento, aunque los hombres son tan cándidos y tan sumisos a las necesidades del momento que quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar.

niColás MaquiaVELO: *El príncipe*, Ed. Ercilla, Santiago, 1988, p. 116.

En marzo de 1990 debía instalarse en el país un gobierno civil. Con ello culminaría la puesta en práctica del diseño de transición elaborado por Washington. El itinerario seguido por el proceso fue el establecido por la Constitución de 1980, que era el contemplado por ese diseño. Así, según vimos en el capítulo anterior, en octubre de 1988 se celebró el plebiscito que dio el triunfo a la opción «No». Este resultado, según los preceptos constitucionales, otorgaba a Pinochet un año adicional de gobierno, que el General aprovechó para dictar numerosas leyes de amarre. Durante ese año (1989) se verificó además un plebiscito que aprobó ciertas reformas menores a la Constitución de 1980 la cual, por tanto, seguiría vigente y enmarcaría jurídicamente a los gobiernos por venir.

El Carmengate y el triunfo de Patricio Aylwin

Ese mismo año de 1989, debían celebrarse las elecciones presidenciales y parlamentarias competitivas contempladas en el articulado transitorio de la Constitución. El triunfador de las presidenciales iniciaría su gestión en marzo de 1990.

Obviamente, frente a esos comicios la Concertación levantaría un candidato, el que debía salir de las filas del partido del conglomerado que parecía más poderoso y que contaba con mayor

respaldo externo. Ese era el Partido Demócrata Cristiano. Así lo entendió este mismo. La definición del candidato, no obstante, no dejó de tener complicaciones dentro de la colectividad. Desde ya, se levantaron tres postulantes: Gabriel Valdés, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Patricio Aylwin. Valdés aparecía como el favorito debido a que, desde su regreso a Chile en 1982, se había destacado al frente del partido en la lucha contra la dictadura, lo que no ocurría con Aylwin, quien no solo había apoyado el golpe, sino que, al menos hasta 1976, también al régimen salido de él.

En este marco, la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano fijó primarias internas a fin de definir quién de los tres mencionados sería su abanderado y, de hecho, el de la Concertación. Las primarias se celebraron en octubre de ese año. En ellas se impuso Patricio Aylwin, pero no sin graves acusaciones de por medio. En efecto, seguidores de Frei y Valdés denunciaron serias irregularidades en cerca de cinco mil inscripciones de militantes y responsabilizaron de ello a la División de Organización y Control dirigida por Gutenberg Martínez. Dos militantes aylwinistas –Juan Osses y Eugenio Yáñez– fueron sorprendidos en las oficinas donde se guardaba el padrón electoral, el cual fue alterado. Esto permitió el triunfo de Aylwin, lo que se conoció como el Carmengate, en referencia a la calle Carmen, donde el Partido Demócrata Cristiano tenía su sede.¹ Luego de arduas negociaciones, no exentas de solicitudes que pedían anular los referidos comicios, el sector aylwinista –que desde fuera de la colectividad recibiera un temprano apoyo del Partido Socialista– pudo imponer a su candidato, quien luego recibió el respaldo de toda la Concertación.

Los comicios presidenciales se celebraron el 14 de diciembre de 1989. A ellos se presentaron tres postulantes: Hernán Büchi con el respaldo del régimen y de la derecha; el empresario Felipe Errázuriz, quien se autopresentó como independiente, y Patricio Aylwin. Este último resultó ganador con el 50,94 % de los votos, seguido por Büchi, con el 27,15 y Errázuriz, con el 14,24.

Aylwin asumió el cargo en marzo de 1990, al tiempo que entraba en funciones el Congreso Nacional, que había sido elegido de modo simultáneo. Al mes siguiente de su asunción del cargo, el 10 de

¹ Véase Manuel Salazar: «La historia que la DC prefiere olvidar», *Punto Final*, edición 631, 29 de diciembre de 2006.

abril de 1990, las autoridades del Congreso, por iniciativa de Gabriel Valdés, presidente del Senado, apoyado por el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera Gallo, ofreció un almuerzo de «homenaje a las Fuerzas Armadas» en reconocimiento de su desempeño en la transición, al cual asistió Pinochet. Luego de la comida, algunos diputados de la coalición de gobierno (entre los cuales se encontraba Rodolfo Seguel –demócrata-cristiano–, líder de los trabajadores del cobre que convocó a las protestas de 1983, se precipitaron a pedirle autógrafos al exdictador y a fotografiarse con él,² todo lo cual anticipaba la profundidad de la descomposición política y moral en la que se precipitaba la Concertación, al tiempo que mostraba la verdadera naturaleza de la «transición a la democracia» en curso.

El verdadero contenido de la transición

El cambio de gobierno que entonces se operó fue conceptualizado por todos como un retorno a la democracia, lo que no fue, según se verá. De hecho, lo que estaba en curso era el tránsito –luego de arduas negociaciones impuestas por los Estados Unidos– desde una dictadura militar a gobiernos encabezados por civiles apadrinados por Washington y leales a este, en el contexto de la restitución formal de gran parte de los mecanismos propios de un régimen demoliberal, aunque no de todos. El supuesto básico de esta transición fue la mantención del modelo neoliberal, cuyo correlato implícito consistía en la permanencia de la dominación de los grupos económicos reconstituidos y refortalecidos durante la dictadura.

Dicho de otro modo, en marzo de 1990 no hubo ningún retorno a una democracia sustantiva. Si bien el terrorismo de Estado propio de la dictadura de las Fuerzas Armadas llegó a su término y se restauraron gran parte de las libertades ciudadanas, lo que advino fue un tránsito desde dicha dictadura a una democracia de fachada, también denominada de «baja intensidad», o incluso «protegida». Esto supuso la previa cooptación de amplios sectores políticos antes opositores, tanto de centro (el Partido Demócrata

² Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, Ed. Taurus, Santiago, 2014, pp. 247-248.

Cristiano), como de izquierda (el Partido Socialista y otros). Tal fue el régimen inaugurado en marzo de 1990, cuyo real significado la inmensa mayoría del país distó mucho de comprender.

Algunos antecedentes sobre la negociación pre 1988

La transición se había negociado laboriosamente y pactado mucho antes de 1988. El capítulo anterior nos ilustra sobre el decisivo papel que le cupiera sobre todo al gobierno estadounidense en su diseño y ejecución práctica,³ aunque fue el conjunto del capitalismo internacional el que empujó y avaló el proceso. Quizás lo más relevante sobre el punto radique en que durante negociaciones que precedieron a la transición, se fue produciendo una gradual reconversión política e ideológica de las cúpulas concertacionistas y de su tecnocracia de economistas y operadores. Estos, en efecto, transitaron paulatinamente desde una crítica al modelo neoliberal y a sus correlativas privatizaciones, hasta asumirlo en toda su extensión, aunque con variaciones menores. Con ello, por lo demás, tales cúpulas satisfacían sus propios intereses políticos y corporativos, los que encontraban su principal expresión en el acceso al gobierno y, por tanto, en las prebendas que esto suponía, sobre todo expresadas en el ejercicio de la alta función pública remunerada, junto con la asunción del poder (delegado).

La mencionada reconversión ideológica concertacionista, según viéramos en un capítulo anterior, se verificó con igual fuerza tanto en el Partido Demócrata Cristiano como en el Partido Socialista y en otros sectores de la izquierda,⁴ sobre lo cual no vale la pena insistir. Una de las figuras principales dentro de ese proceso fue Alejan-

³ Véase «La crisis de la dictadura de las Fuerzas Armadas y la mano de los Estados Unidos en la imposición de un recambio neoliberal», en p. 503 de la presente edición.

⁴ No por casualidad los equipos técnicos del primer gobierno concertacionista provenían de dichos partidos. Los técnicos del Partido Demócrata Cristiano se concentraron en el Ministerio de Hacienda, encabezados por Alejandro Foxley, quien ocupó el cargo de ministro de la cartera, mientras que los del Partido Socialista lo hicieron en el de Economía, cuyo titular fue Carlos Ominami. Patricio Aylwin –que durante Salvador Allende se había esforzado tanto por abrir paso al golpe blando y que luego apoyara al golpe y a la dictadura– sostuvo que esa alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista representaba «el reencuentro de los demócratas».

dro Foxley. Este se desempeñó por años como director del Centro de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan). El organismo se había conformado como unidad independiente en 1976, y agrupaba a una serie de economistas cercanos al Partido Demócrata Cristiano formados en los Estados Unidos, los que mantenían estrechas relaciones con entidades académicas de este país. Cieplan recibía considerable financiamiento externo proveniente tanto de la Fundación Ford como de otras fundaciones e instituciones de cooperación internacional, estadounidenses, canadienses y europeas.⁵

En sus orígenes el organismo realizó críticas estrictamente técnicas a la gestión económica de la dictadura e intentó proponer políticas alternativas en vista de una «transición democrática». Hacia 1987, sin embargo, cuando las negociaciones para una transición pactada se hallaban avanzadas, sus planteamientos empezaron a experimentar un cambio. Manuel Gárate plantea que por entonces sus informes «por primera vez comenzaron a expresar opiniones más conciliatorias [respecto] del régimen militar, no solo por una cuestión de conveniencia política, sino también [...] debido a un cambio intelectual».⁶ En este sentido, sostiene el mismo Gárate, «el discurso económico que se elaboró en CIEPLAN, a partir de 1987, fue mucho más de continuidad que de cambio, así como en el nivel político comenzó a imponerse la idea del consenso con las fuerzas que apoyaban al régimen militar».⁷ En esta evolución, los miembros de Cieplan concluyeron en que «las transformaciones mayores realizadas en la estructura productiva del país [verificadas por la dictadura] no serían revertidas en un futuro inmediato, sino que había que atemperarlas con políticas sociales compensatorias».⁸

Dicho de otro modo, Cieplan –al igual que sucediera con las cúpulas de la Democracia Cristiana y de los otros partidos concertacionistas–, cuando se negociaba la transición, concluyó que había que mantener el modelo neoliberal, aunque con la implantación de políticas sociales que atemperaran sus consecuencias más negativas. Sobre esta premisa se llevó a cabo la transición.

⁵ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, ed. cit., p. 520.

⁶ Manuel Gárate Chateau: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., pp. 355-356.

⁷ *Ibíd.*, p. 358.

⁸ *Ibíd.*, p. 357.

La izquierda renovada –en cuya constitución le cupiera un papel importante al financiamiento de la socialdemocracia internacional– compartía tales criterios. En ese contexto sus personeros sostuvieron que habían aprendido, a través de la experiencia histórica, sobre la importancia de los equilibrios macroeconómicos y lo perjudicial que eran las políticas populistas, puesto que atentaban contra la estabilidad de la democracia. Bajo estos supuestos, Carlos Ominami afirmó reiteradamente que en Chile se había llegado a un consenso entre todas las fuerzas políticas, el cual consistía en que el mercado, y no el plan, era el mejor mecanismo para asignar los recursos.

Lo dicho evidencia que las cúpulas concertacionistas, lejos de pretender cambiar el modelo neoliberal –que era el del imperalismo norteamericano, las transnacionales, el gran empresariado y la derecha–, ya antes de asumir el gobierno aspiraban más bien a continuarlo. Ciertamente es que con una variante: el agregado del gasto social, que debía implementarse a los efectos de contener las demandas populares, esto es, evitar la protesta de las clases subalternas e impedir así la eventual deslegitimación de los gobiernos que pronto asumirían.

Uno de los problemas que se hallaba implícito en lo referido consistía en que la asunción del modelo neoliberal por la Concertación no podía ser reconocida públicamente por sus líderes, debido a que ese modelo no era congruente con varios de los puntos del programa que ella había venido ofreciendo al país, ni con los intereses de sus bases sociales y electorales, ni con los deseos de estas, las que esperaban que en la posdictadura se produjera un cambio de modelo económico.

Edgardo Boeninger, más adelante, hasta cierto punto reconoció el problema. Fue así como, junto con confesar que la cúpula concertacionista aún antes de acceder al gobierno había llegado a una «convergencia con el pensamiento económico de la derecha», agregó que, en términos políticos, la Concertación «no estaba en condiciones de reconocer»⁹ ese hecho. Boeninger, por tanto, se percató de que las cúpulas concertacionistas debieron mentirle a sus bases y al país en relación con este punto.

⁹ Citado por Felipe Portales: «Gobiernos de la Concertación: colofón de un bicentenario excluyente», en Luis Corvalán Marquez (comp. y pról.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, ed. cit., p. 572.

Por otra parte, en el contexto de dicho proceso de conversión política e ideológica, la Concertación fue multiplicando sus vínculos internacionales con representantes políticos, ideológicos y económicos del capital transnacional, incluyendo variadas entidades privadas estadounidenses y europeas. Dentro de esa enorme variedad de vínculos internacionales –que la apoyaran en su camino hacia el gobierno–, quizás quepa subrayar el papel de George Soros.

Soros destaca como uno de los especuladores financieros más exitosos de los últimos cincuenta años. Con negocios en todo el planeta, es uno de los millonarios más relevantes de Europa y del mundo; un hombre de Wall Street que tempranamente ejerció su influencia en la política chilena, en particular al relacionarse con la naciente Concertación. Al respecto, Renato Garín sostiene que «hay suficiente evidencia para establecer que, desde 1987 en adelante, Soros se volvió un financista clave del incipiente bloque concertacionista». Agrega que, a partir de 1986, «una serie de dirigentes de la oposición a Pinochet iniciaron contactos con él a los fines de recibir financiamiento, el que luego se utilizaría durante la campaña del NO». ¹⁰ Todo, sin embargo, no terminaría aquí. En efecto, bajo los gobiernos concertacionistas Soros seguirá contribuyendo con su financiamiento, dirigido a entidades dedicadas a promover los principios «liberales» y de la *open society*, al punto de que, a decir de Garín, el magnate se habría transformado en «un hombre de Wall Street que está vinculado al corazón de la Concertación». ¹¹

Un aspecto oscuro de la negociación: la entrega de las mayorías parlamentarias

Junto con la continuación del esquema neoliberal en la variante arriba señalada, el pacto sobre la transición tuvo un importante

¹⁰ Muchos años después, en noviembre de 2015, Máximo Pacheco, según informa *El Mercurio*, en un acto público en Nueva York agradeció el aporte de Soros a la Concertación. «Nunca podremos agradecerle lo suficiente por tu dedicación a la libertad y a la democracia en nuestro país», dijo allí. Citado por Renato Garín: «Soros: la conexión de Lagos y Hillary con Wall Street», <<https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/28/george-soros-la-conexion-de-lagos-y-hillary-con-wall-street/>>.

¹¹ Ídem.

supuesto en el plano político. Aparte de la mantención de los llamados «enclaves autoritarios» de la Constitución de 1980, supuso la instauración de un soterrado cogobierno entre los partidos concertacionistas y los del gran empresariado, esto es, los de la derecha. Ese cogobierno distó mucho de quedar establecido mediante una declaración de intenciones entre los actores de una y otra coalición, sino que, más bien, llegó a tener una expresión institucional, la que en 1989 se plasmó a través de la reforma a la Constitución del 80. Mediante esa reforma la Concertación entregó las mayorías parlamentarias, situación que hará que ninguna ley presentada por sus futuros gobiernos pudiera ser aprobada sin el acuerdo de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.

La versión original de la Constitución de 1980 estaba diseñada pensando en que Pinochet vencería en el plebiscito de 1988 y que a partir de entonces gobernaría hasta 1998, lapso durante el cual el Congreso Nacional ya se hallaría en funciones. Bajo tales premisas esta Constitución estipulaba que las leyes requerirían para su aprobación contar con la mayoría absoluta en una de las Cámaras del Congreso y solo con un tercio de la otra. El cálculo contemplaba que el eventual gobierno de Pinochet pos 1988 tendría el control de la mayoría absoluta del Senado en virtud de los senadores designados, los que se complementarían con los elegidos por la derecha, quienes, debido al sistema binominal, siempre sobrepasarían el tercio. De esta manera, ese eventual gobierno de Pinochet dispondría de la mayoría absoluta de la Cámara Alta y, por otra parte, contaría al menos con el tercio de la Cámara de Diputados, por la misma razón aludida, esto es, porque la derecha, en virtud del sistema binominal, tampoco bajaría de elegir un tercio de los diputados. Así, el gobierno de Pinochet pos 1988 dispondría de las mayorías parlamentarias requeridas para aprobar leyes y, por tanto, para gobernar sin tener que negociar nada con la oposición.

Pero el triunfo del «No», que preludiaba la victoria del candidato de la Concertación en las presidenciales abiertas de 1989, cambió las cosas, por cuanto el gobierno concertacionista, que con seguridad sería entonces elegido, dispondría para sí de las mayorías parlamentarias antes diseñadas para un posible gobierno de Pinochet. Ese año, en efecto, la Concertación eventualmente podría obtener la mayoría de la Cámara de Diputados y un tercio

de la de senadores. Con ello contaría con las mayorías requeridas para desmontar la herencia que dejaba la dictadura sin tener que depender de apoyos de la derecha en el Congreso. Para evitar este riesgo se acordó cambiar entre la derecha y la Concertación lo que la Constitución de 1980 establecía sobre las mayorías parlamentarias. En lugar de lo manifestado en sus orígenes por la carta, se establecería que para aprobar una ley se requeriría contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, que la Concertación no podría obtener, precisamente debido a la existencia de los senadores designados y al sistema binominal. Por tanto, cualquier legislación que sus gobiernos intentaran promulgar debería contar con el acuerdo de la derecha, o de algún sector suyo. Era, por tanto, el cogobierno.

Entre otras materias, esto fue lo aprobado mediante el plebiscito de 1989. El punto jamás se discutió ante la opinión pública ni en las bases de los partidos de la Concertación. Pasó inadvertido dentro de otras reformas menores a la Constitución. Solo las cúpulas de ambos sectores –derecha y Concertación– sabían de qué se trataba.

De este modo, la transición vio sentados sus dos pilares principales: la mantención del modelo neoliberal por un lado, y, por el otro, el consentido cogobierno de la Concertación con la derecha, la que –de más está decirlo– no aceptaría ninguna reforma que afectara el dominio del megaempresariado, el cual, por tanto, continuaría en su condición de clase dominante, siempre en las mejores relaciones con las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la modificación de las mayorías parlamentarias en los términos descritos traería consigo otra consecuencia, no menor, que destaca Felipe Portales: permitiría a la Concertación argumentar ante sus bases y apoyos sociales que no podía cumplir con las promesas hechas al país, no porque no quisiera, sino debido a que no disponía de las mayorías necesarias en el Congreso. Quedarían así veladas dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que, en realidad, las reformas no se llevarían a cabo debido a que la Concertación coincidía con el pensamiento económico de la derecha y, por el otro, en razón de que había negociado con esta el tema de las mayorías parlamentarias, lo que la obligaría a cogobernar con ella.

El reconocimiento de la Concertación por el gran capital

A través de la asunción del modelo neoliberal (aunque con gasto social) –y del referido cogobierno con la derecha derivado de la entrega de las mayorías parlamentarias–, la Concertación, sus políticos, técnicos y operadores se convirtieron en administradores del proyecto del gran capital y de las transnacionales, legitimándolo de paso. A partir de este hecho, lo que al conglomerado le quedaba por lograr era la confianza del megaempresariado, al cual debía convencer sobre cuáles eran los verdaderos propósitos de sus gobiernos. En la medida en que la Concertación consiguiera ese objetivo, se validaría como otro de los representantes de los intereses del gran capital, lo cual, por cierto, no debía trascender a la ciudadanía. Esto era crucial, puesto que de ello dependía el éxito de la transición tal como fuera diseñada por Washington, diseño al que la Concertación rigurosamente se ceñía.

Eugenio Tironi, uno de los representantes más «renovados» de la izquierda concertacionista, en un texto posterior, explicó la importancia que desde un principio le diera la Concertación a los esfuerzos por ganarse la confianza del gran capital. Afirmó que al asumir Aylwin, «la “manija” para sostener el crecimiento y los equilibrios económicos estaba entonces en manos de la comunidad empresarial, la cual tenía un cordón umbilical con el régimen autoritario que en ese momento colapsaba. Por ende, era indispensable, para asegurar el éxito de la nueva democracia, crear confianza en la comunidad empresarial».¹²

La tarea no sería del todo fácil, puesto que los grupos del gran capital sentían que su expresión política era la dictadura. El que, en contra de lo que hubieran deseado, Pinochet hubiera sido desplazado ocupando su lugar los gobiernos de la Concertación, hay que entenderlo a la luz del carácter norteamericano de la transición. Por cierto, el gran capital local no deseaba ese desplazamiento. Como se dijo, se sentía representado por la dictadura. Pero los Estados Unidos, que veían más lejos, comprendían desde una perspectiva geopolítica que la continuación del régimen pinocheteano era

¹² Citado por Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 405.

problemática y que se hacía necesario un recambio para evitar repetición de situaciones como las de Nicaragua e Irán. Ese recambio, claro está, suponía que los gobiernos «democráticos» tenían que garantizarle a los grupos económicos sus intereses y, a su vez, estos confiar en los depositarios de la transición. Esta última cuestión fue avanzando lentamente y tuvo sus manifestaciones con mucha antelación a marzo de 1990.

¿Cómo se llevó a cabo? Rafael Otano, en su *Nueva crónica de la transición*, proporciona datos interesantes sobre el tema. En su relato este autor se remonta al periodo que siguió al triunfo del «No», verificado en octubre de 1988. Sobre el punto, señala lo siguiente:

[...] después del triunfo del *no*, comenzaron a circular por el centro de Foxley [Cieplan] aunque furtivamente, algunos empresarios más lúcidos que comprendieron que de allí podían surgir actores influyentes para la política económica, en la hipótesis cada vez más probable de un triunfo de la Concertación y de Aylwin. Llegaban además invitaciones para almuerzos y para diálogos, provenientes de hombres de negocios. A estos se les notaba curiosamente incómodos a la hora de hablar de asuntos de dinero con aquella gente que, desde su perspectiva, eran unos recién aparecidos.¹³

Otano agrega que:

[...] a los empresarios los irritaba que su destino dependiese, en parte, de ellos; les producía desconfianza su palidez académica, su catolicismo social. A pesar de sus palabras tranquilizadoras durante las sobremesas, los consideraban conversos a la fuerza, gente que en algún ventrículo de su corazón todavía adoraba los ídolos del proteccionismo y el Estado nodriza.¹⁴

[...]

El aire se podía cortar con cuchillo cuando Foxley y sus colaboradores eran sometidos, reunión tras reunión, al humillante

¹³ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 159.

¹⁴ Ídem.

ritual del examen sobre sus doctrinas e intenciones. Les preguntaban si iban a establecer control de precios, si pondrían trabas a las importaciones y a la inversión extranjera, cómo tratarían a las AFPs. Las preguntas claves eran si pensaban privatizar e incluso revisar las privatizaciones ya realizadas. De todas maneras les daban a entender que las privatizaciones eran la prueba de algodón de su auténtica conversión.¹⁵

Otano relata que en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) de 1989, esto es, en la reunión anual que realizan los grandes empresarios del país, y que esta vez llevaba como título, «Quo vadis, Chile»,

[...] los participantes hicieron infantiles ostentaciones de que Pinochet y Büchi eran sus héroes. El cuidadoso discurso de Aylwin, en que explicó sus ideas de continuidad y cambio como eje de su política económica, fue recibido con frialdad. Respecto de Foxley, se trató de estrecharle la pista. Le querían demostrar hasta la amenaza que el modelo económico era un tema intransable y que todos estarían observando sus movimientos más mínimos en este asunto, que constituía el corazón mismo del sistema.¹⁶

La respuesta de Aylwin y de sus técnicos a las interrogantes empresariales siempre fue la misma: habría continuidad con la política económica de la dictadura, pero había que saldar una deuda social con las mayorías, para lo cual se requerían recursos.

Luego de que Patricio Aylwin asumiera el gobierno, la desconfianza de los grupos del gran capital en la Concertación, aunque disminuida, distaba mucho de haberse disipado. Hubo negociaciones llevadas a cabo a través de Renovación Nacional. En ellas –que recibieron el nombre de «democracia de los acuerdos»– se llegó, con mucho espíritu pragmático, a una especie de transacción. Se acordó que el Gobierno mantendría el esquema neoliberal, mientras que, por su parte, los representantes políticos de los grupos del capital, particularmente Renovación Nacional, aceptarían que

¹⁵ *Ibíd.*, pp. 159-160.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 160.

se implementara una reforma tributaria en el Congreso a los fines de financiar el gasto social que requería el Gobierno para pagar lo que la Concertación denominaba como la «deuda social». El acuerdo se obtuvo a mediados de 1990, y estipuló que se alzaría el IVA desde el 14 al 16 %; que se subiría moderadamente el impuesto a las empresas, a la par de que se establecería un criterio de progresividad impositiva. Ello le permitiría recolectar al gobierno 600 millones de dólares anuales, que destinaría al gasto social. Sin embargo, estas reformas tendrían una duración limitada de solo cuatro años.

Rafael Otano relata que luego de cerrados los mencionados acuerdos «un poco cínicamente, en ciertos ambientes empresariales y de derecha política, se comentaba que este canje de todo un paradigma económico y social a cambio de una limitada –en el tiempo y en la cantidad– alza impositiva, era como comprar un lujoso Alfa Romeo a precio de Lada».¹⁷

En este marco, en 1990 Aylwin y Foxley asistieron nuevamente al encuentro del gran empresariado en la ENADE, en lo que casi se convertiría en una norma, consistente en que los personeros de los gobiernos concertacionistas acudían a rendir cuentas ante el gran capital. En la ENADE de 1990, Aylwin y Foxley, a diferencia del año anterior, fueron aplaudidos por los empresarios. Aylwin dio cuenta de lo que había hecho durante su casi primer año de gobierno. Por su parte, Foxley –según Otano– se había ganado el respeto del gran empresariado al resistir las

[...] presiones populistas. Incluso Carlos Ominami, el ministro de Economía [socialista y ex-MIR], se supo granjear las simpatías del perjudicado sector privado. Empresarios como Ernesto Ayala y Hernán Briones hicieron buenas migas con el secretario de Estado socialista. Por eso, cuando algún hombre de negocios tenía reclamos contra el gobierno, se sentía con mayor confianza contándosele a Ominami. Y [este] los recibía muy bien.¹⁸

De tal modo, sin renegar de su firme alianza con la derecha y las Fuerzas Armadas, el gran capital se fue abriendo a la Concertación

¹⁷ *Ibíd.*, p. 164.

¹⁸ *Ibíd.*, p. 170.

hasta llegar gradualmente a considerarla como un elemento más de las alianzas en que se basaba su dominación. En tales circunstancias, los organismos corporativos del megaempresariado se convirtieron en decisivos interlocutores de los gobiernos concertacionistas. En efecto, el megaempresariado

[...] en distinto tipo de reuniones (recepciones en La Moneda, reuniones de la comisión de Hacienda del Parlamento, foros públicos con representantes de gobierno y declaraciones de prensa) siempre tuvo la oportunidad de canalizar sus inquietudes por la conducción de la economía. El gobierno los consultaba sobre el monto del salario mínimo, sobre el alza o baja de la tasa de interés, se les incorporó activamente en el proceso de integración de Chile al tratado de libre comercio con el Nafta, se les comenzó a invitar a formar parte de las delegaciones presidenciales cuando el Presidente realizaba visitas oficiales a otros países, etcétera.¹⁹

Esa alianza se consolidó aún más ante el apoyo manifiesto brindado por Washington a los gobiernos concertacionistas, a los cuales apadrinaba. Esto último, entre otras cosas, se evidenció a través de dos viajes que Patricio Aylwin hiciera al país del norte. Particularmente durante el segundo, verificado en 1992, los grupos del gran capital se rindieron a la evidencia. En este viaje «cien empresarios fueron invitados a acompañar al presidente», lo que hizo que las relaciones del Gobierno con los grupos económicos mejoraran mucho. «Para entonces ya se sabía que el gabinete de la Concertación había asumido el paradigma de mercado, aunque con ligeros retoques». En tales circunstancias, «la convivencia de varios días de viaje generó vínculos personales que diluyeron algunos prejuicios. Los sucesivos viajes no hicieron más que afirmar este clima amistoso».²⁰

Durante los años siguientes, a los fines de diluir las desconfianzas mutuas, influyeron considerablemente los vínculos que en el plano intelectual se fueron estableciendo entre los organismos

¹⁹ Rolando Álvarez: *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, ed. cit., p. 82.

²⁰ Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 172.

corporativos de los grupos económicos y personeros concertacionistas. Al respecto desempeñó un papel muy importante el Centro de Estudios Públicos (CEP), ligado al grupo Matte. Como lo señala Carlos Huneeus, el CEP desarrollaba una activa labor de difusión de sus ideas económicas y políticas en los medios de prensa, puesto que varios miembros de su directorio eran columnistas o editoriales de *El Mercurio* y *La Segunda*, diarios que, además, difundían ampliamente sus actividades. La realización por parte del CEP de numerosos seminarios y encuentros con aquellas personalidades de la Concertación más proclives a las ideas neoliberales le permitió tener una enorme influencia en la conversión de dichas ideas hacia las posturas dominantes entre empresarios y políticos de derecha.²¹

De tal modo, la alianza entre los gobiernos de la Concertación y los grupos del gran capital resultó afianzada. En ese contexto, señala Otano, «el neoliberalismo se convirtió en la nueva Vulgata de la mayoría de los sectores económicos, sociales, académicos y políticos».²² Claro está que el modelo neoliberal, en el caso chileno, terminó teniendo las dos variantes señaladas. Una era la tecnocrática, representada por la derecha; y la otra era aquella que contemplaba un gasto social más ciertas regulaciones de los mercados, que se encarnaba en la Concertación, variante denominada por Manuel Antonio Garretón como «neoliberalismo corregido».²³ Pese a estas diferencias secundarias, en el país se habían establecido consensos sustantivos entre las superestructuras.

Lo señalado no significa que entre los grupos del megaempresariado y al interior de sus organizaciones corporativas siempre hubiera unanimidad en cuanto a cómo relacionarse con los gobiernos concertacionistas. En la tarea de salvaguardar la integridad del modelo neoliberal en curso, en el seno de dichas organizaciones, en efecto, tendieron a distinguirse dos alas principales: los «duros» y los pragmáticos. Rolando Álvarez ha estudiado el punto en su libro *Gremios empresariales, política y neoliberalismo*. Allí sostiene que los «duros» tendieron hacia un discurso en el que, ante ciertas

²¹ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, ed. cit., p. 238.

²² Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, ed. cit., p. 172.

²³ Véase Manuel Antonio Garretón: *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*, Editorial Arcis, Clacso, Santiago, 2012, p. 188.

medidas puntuales de la Concertación, que no compartían, hacían valer públicamente conceptos como los de «incertidumbre», «temores», «dudas» o «falta de confianza». Mientras que los «pragmáticos», sin renunciar a la crítica en caso necesario, más que a esta, apuntaban al diálogo, la colaboración y al acuerdo con gobiernos que ya de sobra habían demostrado que asumían a plenitud el modelo neoliberal.²⁴

Los enfoques pragmáticos definitivamente se consolidaron sobre todo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Fue entonces cuando el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Hernán Somerville, declaró que a Lagos, «mis empresarios todos lo aman porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior».²⁵ Mientras tanto, la inmensa mayoría de los ciudadanos lo ignoraba todo, y se mantenía al margen, sin opinión, controlada sus subjetividades por un férreo sistema comunicacional que incentivaba el apoliticismo y la desinformación.

Algunas medidas adicionales adoptadas por los gobiernos concertacionistas a fin de dar garantías a los poderes fácticos

Como consecuencia de lo descrito, la Concertación ya en el Gobierno requirió desmovilizar a sus bases sociales. La demandas de estas y de sus organizaciones eran inconciliables con la permanencia de la privatización de la salud, de la educación, de la previsión social —convertidas en bienes de mercado administradas por empresarios privados en aras de su correspondiente ganancia—, a lo que se agregaba la precariedad laboral, una legislación antisindical que impedía el derecho de huelga efectivo, permitía la tercerización del trabajo, el multi-RUT, etcétera.

En ese cuadro las administraciones concertacionistas, así como sus partidos, se jugaron por desactivar el movimiento social en cuyos hombros habían accedido al Gobierno. De tal modo, se

²⁴ Véase Rolando Álvarez: *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, ed. cit., sobre todo los capítulos II y III.

²⁵ *La Segunda* del 14 de octubre de 2005, citado por Rolando Álvarez: *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, ed. cit., p. 108.

dieron a la tarea de presionar a los sindicatos exigiéndoles que moderaran sus reivindicaciones. En esa tarea les explicaron que carecían de las mayorías parlamentarias requeridas para introducir cambios y los asustaron con el fantasma de una «regresión autoritaria». Los partidos tuvieron un papel importante a tales efectos y pronto neutralizaron a sus militantes abriéndoles las puertas para que ocuparan cargos públicos, clientelizándolos, mientras que los dirigentes de las colectividades asumían las responsabilidades superiores del Estado –como parlamentarios, ministros, subsecretarios, intendentes, embajadores, etc.–, funciones caracterizadas por sus elevadas remuneraciones. Otro medio utilizado con el propósito de desmovilizar a las bases consistió en repartir dinero –sobre todo para los «amigos»– por la vía de proyectos concursables en las más diversas áreas, la creación de instituciones de investigación financiadas con aportes extranjeros que apoyaban la transición o con recursos provenientes del gran empresariado, a lo que, en fin, se agregaba el gasto social.

Otra faceta de ese proceso fue el cierre de la prensa opuesta a la dictadura (revistas como *Apsi*, *Análisis* y *Hoy*; diarios como *Fortín Mapocho* y *La Época*, etc.), publicaciones que, debido a su independencia frente al nuevo gobierno, representaban un riesgo para este. Felipe Portales sostiene que con ese objetivo:

[...] se inició una política sistemática [...] destinada a destruirlos y cuyo resultado efectivo fue hábilmente achacado a una desaparición provocada por las leyes del mercado. Dicha política tuvo como elementos principales el bloqueo, efectuado por el gobierno de Aylwin, a millonarios apoyos económicos ofrecidos a esos medios por el gobierno holandés en 1990, a lo que se agregó la compra de algunos de ellos por personeros de la Concertación con el fin de cerrarlos en breve plazo, a lo que se suma la sistemática discriminación del avisaje estatal. Esta discriminación no solo fue muy eficaz para destruir los medios concertacionistas creados durante la década del 80, sino que también provocó el cierre de varias revistas y medios electrónicos progresistas fundados posteriormente. Fue el caso de *Rocinante*, *Plan B*, *El Portal del Pluralismo* y *Granvalparaíso*.

A eso se agrega «la tenaz negativa de los sucesivos gobiernos de la Concertación a devolver los bienes del diario *Clarín*, que le fueron confiscados por la dictadura a Víctor Pey (ingeniero chileno-español amigo de Salvador Allende), quien se los había comprado a su histórico dueño, Darío Saint-Marie».²⁶ Al mismo tiempo, los gobiernos concertacionistas otorgaban a la prensa de derecha –*El Mercurio* y *Copesa*– la gran mayoría del avisaje estatal, permitiéndoles que asumieran el control duopólico del mercado.

El gran objetivo perseguido por los gobiernos de la Concertación con estas medidas era demostrar que podían dar «gobernabilidad» al país y administrar el modelo neoliberal, evitando lo que consideraron eran las tentaciones «populistas» propiciadas por las organizaciones sociales a las que intentaban neutralizar. Esa demostración iba dirigida a tres importantes actores: 1) los grupos del gran capital; 2) los partidos de la derecha; y 3) las Fuerzas Armadas; es decir, a los poderes fácticos locales. En efecto, era a ellos a los que había que hacerles ver que la Concertación podía administrar el modelo neoliberal sin dar lugar a inestabilidad ni a desestabilizaciones resultantes de las presiones provenientes de las clases subalternas. En todo caso, los gobiernos concertacionistas no se hallaban indefensos frente a tales poderes: contaban con el aval estadounidense, sin el cual no hubieran llegado a administrar el país.

Muy ilustrativo de los mencionados esfuerzos encaminados a dar confianza a los poderes fácticos locales, en este caso a las Fuerzas Armadas, fueron las ingentes iniciativas llevadas a cabo por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle en 1998, dirigidas a que Inglaterra liberara al general Pinochet, detenido en Londres a pedido de la justicia española. El gobierno de Frei hizo todo lo posible para que el general no fuera juzgado en Madrid por crímenes de lesa humanidad. Finalmente consiguió que el gobierno británico, alegando «razones de compasión», aceptara dejar libre al viejo dictador. Tanto Frei como su ministro José Miguel Insulza habían argumentado que el tema incumbía exclusivamente a Chile, y que a su retorno el general debería responder ante tribunales nacionales. Nada de esto

²⁶ Felipe Portales: «Gobiernos de la Concertación: colofón de un bicentenario excluyente», art. cit., p. 577.

ocurrió puesto que cuando Pinochet pudo regresar, los tribunales chilenos lo declararon inimputable por «demencia senil». De tal modo, se optaba por no desafiar a uno de los principales poderes fácticos existentes en el país: los militares.

El punto, en todo caso, tenía antecedentes. En efecto, a fines de 1990, a poco de iniciado el gobierno de Aylwin, se habían verificado los «ejercicios de enlace», y después en 1993, el Boínazo, operaciones decididas por Pinochet, consistentes en sacar soldados en tenida de combate dislocándolos en torno al Ministerio de Defensa, a una cuadra de La Moneda. La medida fue dispuesta por el exdictador con el fin de evitar que fueran investigados los llamados «pinocheques», millonarios pagos, por casi tres millones de dólares, que su hijo recibiera del Ejército por la venta de Valmoval, una empresa quebrada que fabricaba fusiles. La investigación de la comisión de la Cámara determinaría más tarde que, entre otras cosas, en el proceso de quiebra de la empresa Valmoval pudieron haberse trasgredido normas de la ley de quiebras; que se habrían dado créditos y traspasado estos créditos a título gratuito al Comando de Institutos Militares del Ejército, donde también existían irregularidades, y que el hijo del general Pinochet habría actuado excediendo las atribuciones de un mero mandatario.²⁷

Finalmente, el Gobierno se sometió a la presión del Ejército y cedió a casi todas sus exigencias, referentes no solo a Valmoval, sino también a otro tema extraordinariamente sensible, como lo era el de la acción de la justicia respecto de la responsabilidad que le cabía a los militares en violaciones a los derechos humanos.²⁸

Bajo Frei se produjo un tercer incidente grave entre el Ejército y el Gobierno. Ocurrió en julio de 1995 cuando se cerrara el sumario del caso «pinocheques», ello con un resultado claro por parte del Consejo de Defensa del Estado, el que dictaminó que existían méritos suficientes para procesar a Augusto Pinochet Hiriart. En respuesta, los militares organizaron una manifestación masiva de oficiales, suboficiales y clases, con sus respectivas familias, en torno de la prisión de Punta Peuco, donde se encontraba recluido el coronel Pedro Espinoza, condenado por el asesinato de Orlando

²⁷ Claudio Fuentes: *La transición de los militares*, Ed. LOM, Santiago, 2006, p. 71.

²⁸ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, ed. cit., p. 258.

Letelier, y a donde muy pronto ingresaría el general Manuel Contreras, condenado por el mismo delito. Asistieron aproximadamente mil personas.²⁹

Frente a tal amenaza, Frei terminó pidiendo a los tribunales de justicia que, por razones de Estado, se inhibieran de toda iniciativa legal en contra del hijo de Pinochet, pese a que los antecedentes mostraban la gravedad de las irregularidades cometidas por este en sus negocios con el Ejército.

Los gobiernos y partidos de la Concertación fueron también ambiguos en relación con el tema de los derechos humanos. Aylwin declaró al respecto que sobre la materia se haría justicia solo en la medida de lo posible. Pese a todo, hubo algunos avances, en particular mediante la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación la que, a través de un extenso informe publicado en febrero de 1991, logró exponer muchos de los procedimientos represivos y de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar. En gran medida los limitados logros obtenidos en este tema se debieron a la presión de los familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones análogas.

La profundización del modelo neoliberal bajo la Concertación

Los gobiernos concertacionistas no se limitaron a mantener, con variaciones menores, el modelo neoliberal heredado de la dictadura. Fueron más allá: lo ahondaron. Esto fue lo que sucedió desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante. Manifestaciones de ello fueron, entre otras, la privatización de una serie de empresas importantes que la dictadura no había alcanzado a traspasar al capital privado. Tales privatizaciones se verificaron sobre todo durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

Bajo el primero —que había planteado como meta «crecer con equidad»— se privatizó el 40 % de Lan Chile en 1991, que todavía permanecía en manos del Estado. Al año siguiente se establecieron normas que liberalizaban la inversión extranjera. En 1992

²⁹ Luis Corvalán Marquez: *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, ed. cit., p. 458.

el gobierno de Aylwin aprobó ciertos cambios en la legislación laboral que, lejos de romper con la lógica del plan de José Piñera instaurado durante la dictadura, no restituyeron los derechos que los trabajadores tenían antes del golpe. En 1993 se anunció la privatización de treinta y nueve empresas que estaban en manos estatales, del rubro de la minería, la electricidad y otras, al tiempo que se establecía el «financiamiento compartido» de la educación básica y media –en manos de «sostenedores»– lo que conllevaba que las familias debían contribuir al financiamiento de los colegios, viéndose así acentuada la privatización que la dictadura estableciera en el plano educacional.

Uno de los aspectos más relevantes de la gestión de Aylwin fue su política minera, totalmente favorable a los intereses de las transnacionales. A este respecto, a poco de iniciado su periodo, el mandatario procedió a enviar al Congreso una ley de reforma tributaria que, aparte de aumentar el IVA de 16 a 18 %, y el impuesto de primera categoría del 10 al 15 %, contenía una serie de disposiciones referentes a la minería. Esa legislación, en primer término, le modificó al sector la modalidad bajo la cual debía tributar. Hasta entonces, dicha modalidad se basaba en la renta presunta, la que ahora fue sustituida por otra basada en la renta efectiva. La relevancia del punto residía en que con la primera –con la renta presunta– las empresas transnacionales mineras tributaban con base en las ventas, al margen de si tuvieran utilidades o no. Mientras que la tributación por renta efectiva hacía que pagaran impuestos solo si declaraban utilidades. Como señala Julián Alcayaga, la diferencia era fundamental puesto que con la renta presunta las mineras pagaban impuesto a la renta desde la primera tonelada del metal que vendieran, mientras que con la renta efectiva podían exportar millones de toneladas, sin pagar un peso de impuesto: bastaba con que no declararan utilidades. Por eso hasta el año 2004, salvo La Escondida, todas las demás mineras no pagaron un solo peso de impuesto a la renta, y se llevaron alrededor de treinta millones de toneladas de cobre fino, más el oro y el resto.³⁰

La misma ley eximió de impuesto a la renta a la venta de pertenencias mineras. Esta exención tenía como fin incentivar a chilenos

³⁰ Julián Alcayaga: «Aylwin y las transnacionales mineras», <<https://rebelion.org/aylwin-y-las-transnacionales-mineras/>>.

dueños de minas a venderlas a las transnacionales. En tercer lugar, la ley creó el «costo de pertenencia», que estableció que la disminución de las reservas resultantes de la explotación del yacimiento debía ser computada como una pérdida para el concesionario minero –o sea, la transnacional respectiva–, lo que sería imputado a costo, cuyo efecto sería rebajar utilidades, o declararlas nulas, con su efecto consiguiente: no pagar impuestos.

Las consecuencias de estas reformas tributarias fueron enormes: las transnacionales mineras vinieron en masa a Chile, pues les estaba garantizado llevarse grandes cantidades de mineral prácticamente sin pagar impuesto alguno. En este contexto, las mineras extranjeras, esencialmente Mantos Blancos y Disputada de las Candes que en 1989 producían apenas 190 000, tonelada de cobre, diez años después, en 1999, produjeron 2,9 millones de toneladas, quince veces más que al terminar Pinochet, generando, por otra parte, una sobreoferta en el mercado mundial que hizo bajar el precio del metal de US\$1,5 la libra en 1989, a solo US\$0,63 la libra en 1999.³¹

Con base en los datos indicados, Julián Alcayaga sostiene que la política minera implementada por el gobierno de Patricio Aylwin no solo permitió que las transnacionales del rubro no pagaran impuestos, sino que además destruyó los ingresos que el Estado percibía por el cobre, el que dejó de ser el sueldo de Chile.³²

En mayo de 1992, el Congreso aprobó otra ley, la 19.137, que permitía continuar con la desnacionalización del cobre. Mediante ella, y con el acuerdo tanto de la Concertación como de la derecha, se autorizó el traspaso a las transnacionales de los yacimientos de Codelco que no estuvieran en explotación. ¿Cómo explicar esta política tan contraria al interés nacional, más aún si, como señala Alcayaga, los mencionados cambios en la tributación minera no estaban contemplados en el programa presidencial de Aylwin, ni en el programa de ningún partido de la Concertación, pese a lo cual fueron aprobados en el Congreso Nacional sin que siquiera fueran debatidos?

El mismo Alcayaga nos insinúa una explicación: desde años atrás, ciertos personeros de la Democracia Cristiana –Radomiro Tomic, Renán Fuentalba y Gabriel Valdes– venían propiciando la

³¹ Ídem.

³² Ídem.

derogación de la ley minera de José Piñera, con su concesión plena, en cuyo reemplazo postulaban el desarrollo de una minería nacional. A través del Carmengate, insinúa Alcayaga, «fuerzas oscuras» –¿transnacionales?– consiguieron frustrar las pretensiones de Valdés de ser candidato presidencial y lograron así, a la vez, impedir la posibilidad de que desde un eventual gobierno suyo se aplicara la política minera nacional que, junto a Tomic y Fuentealba, venía propiciando, que era contraria a los intereses de las transnacionales. Dicho de otro modo, tales «fuerzas oscuras», a través del Carmengate habrían hecho triunfar al interior del Partido Demócrata Cristiano al candidato que les era proclive, sacando de carrera a quien no lo era. Ello explicaría el carácter tan favorable a las transnacionales mineras que tuvo el gobierno de Aylwin.³³

Por disposición constitucional, el gobierno de Aylwin duró solo cuatro años. Le siguió el de Eduardo Frei quien, por su parte, al asumir la presidencia de la República declaró que la transición estaba terminada y que, por tanto, el objetivo de su administración sería la modernización y el crecimiento a secas, lo que significaba que dejaba de lado la idea de «equidad» que profesara su predecesor.

Los afanes neoliberales de Frei no fueron menos decididos. En efecto, en 1995 el mandatario procedió a privatizar las empresas sanitarias, al tiempo que concesionaba los puertos y las nuevas autopistas, y declaraba que el servicio ferroviario seguiría igual suerte. Mientras, en 1997 anunciaba la privatización parcial de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y de la Empresa Nacional de Minería (Enami).³⁴

Adicionalmente, el gobierno de Frei, como el de Aylwin, continuó con la política de apertura de la economía chilena, bajando aranceles. En 1991 Aylwin había procedido a disminuirlos desde el 15 al 11 %; y Frei, en 1997, estableció que en un plazo de cinco años estos serían rebajados aún más, pasando desde un 11 % al 6 %.³⁵ Del mismo modo, Frei avanzó en la dirección de establecer pactos de libre comercio, cuyas negociaciones empezaron durante la gestión de su predecesor. Entre 1990 y 1994, en efecto, se había

³³ Ídem.

³⁴ Manuel Gárate: *La revolución capitalista en Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 388.

³⁵ Ídem.

discutido un tratado con México, y se anunció otro con los Estados Unidos. Entre 1996 y 1998, ya bajo Frei, se discutió un tratado de libre comercio con Canadá, al tiempo que se anunciaba un tratado similar con la Unión Europea.³⁶

Ricardo Lagos siguió por la senda trazada por sus predecesores. En esa línea procedió a establecer una relación directa con el megaempresariado, a través de la Sofofa y también del Centro de Estudios Públicos (CEP), *think tank* controlado por el grupo Matte. Con la Sofofa acordó una «agenda pro crecimiento», la mayoría de cuyos tópicos «eran de interés de los empresarios, como los relativos al incentivo a la inversión, especialmente eléctrica y de la pesca, a lo que se agregaba la simplificación de los trámites empresariales ante los órganos del Estado y otras materias».³⁷

Lagos, aún más, procedió a completar la privatización de las empresas sanitarias iniciada por Frei. Fue el caso de la Empresa de Obras Sanitarias (EMOS), la que finalmente pasó a manos de transnacionales españolas. También bajo Lagos se aceleraron las concesiones de carreteras, las que en medida importante igualmente quedaron en manos de empresas hispanas. Desde 2004 tales carreteras concesionadas empezaron a cobrar a los vehículos que circulaban por ellas. Asimismo se concesionaría la construcción de hospitales y cárceles.

Un aspecto relevante del gobierno de Ricardo Lagos residió en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que abriría aún más la economía chilena. Las negociaciones sobre el tratado habían comenzado en 1994, durante el gobierno de Frei, y su discusión terminó en diciembre de 2002. Finalmente se firmó en Miami el 6 de junio de 2003. Si bien el tratado hizo posible un aumento muy relevante del comercio entre Chile y los Estados Unidos, traería inconvenientes de otro tipo. En efecto, aparte de garantizar al capital extranjero consagrando su inexpropiabilidad y su no regulación por las autoridades locales, reforzaría la condición de Chile como país productor y exportador de productos primarios, imposibilitado de desarrollarse industrialmente ante el control de su mercado interno por las ETN, con cuyos productos las empresas locales no podrían competir. La economía chilena continuaría así

³⁶ Manuel Gárate: *La revolución capitalista en Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 388.

³⁷ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, ed. cit., p. 143.

dependiendo de los precios que en el mercado mundial alcanzara su producción primaria exportadora.

Digamos, entre paréntesis, que bajo los gobiernos de la Concertación se firmaron otros numerosos tratados de libre comercio, entre ellos, con México, con la Comunidad Económica Europea y con Canadá. De este modo, la economía chilena, de manera altamente dependiente, se integraba de modo aún más pleno a la economía mundial en manos de las ETN, dándole a estas total libertad para controlar el país, recibiendo el mismo trato que las empresas nacionales, cuestión consagrada por el Decreto Ley 600 promulgado durante la dictadura, y que los gobiernos concertacionistas en ningún momento pensaron derogar.

Volviendo al gobierno de Ricardo Lagos, hay que señalar que durante él se estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que involucró a los bancos en el negocio de la educación. Los bancos pasaron entonces a financiar a altas tasas de interés los estudios de los segmentos de ingresos medios y bajos. El negocio que por tal concepto hicieron les significó una alta rentabilidad y sin riesgo alguno, precisamente por cuanto el Estado avalaba los créditos que procedían a otorgar.

La desnacionalización del cobre y otras áreas de la economía

Otro aspecto que, en general, caracterizó de manera muy relevante a los diferentes gobiernos concertacionistas fue la desnacionalización del cobre rescatado para Chile por Salvador Allende. Dicha desnacionalización había comenzado durante la dictadura, operando a través de la llamada «concesión plena», ideada por José Piñera, aunque por entonces se avanzó muy poco en esa línea. Bajo los gobiernos concertacionistas la gran mayoría del cobre fue entregado a las ETN. Los datos ofrecidos en la tabla 24.1, expuestos por Orlando Caputo, de algún modo ilustran lo dicho.

Tabla 24.1. Inversión extranjera en la minería chilena

<i>Periodo de la Dictadura</i>	<i>Periodo de la Concertación</i>	<i>Total inversión extranjera en minería</i>
1974-1989	1990-2005	1974-2005
2.399	17.578	19.977

Fuente: Cochilco y Comité de Inversiones Extranjeras. Transcrito por Orlando Caputo y Graciela Galarce: «La entrega al extranjero del cobre que nacionalizó Salvador Allende», en Luis Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, Ed. Usach, p. 618.

A propósito del cuadro expuesto, Caputo plantea: «Como puede verse entre 1974 y 2005 se realizaron inversiones mineras por 19,976 millones de dólares, de los cuales 17,578 millones se verificaron en el período 1990-2005. Esto significa que cerca del 90 % de las inversiones extranjeras en minería se realizaron durante los gobiernos de la Concertación [...]».³⁸

Caputo agrega que, como resultado de los procesos desnacionalizadores verificados en esta área durante tales gobiernos, «Codelco en el 2007, disminuyó a tan solo un 28.5 % su participación dentro del total de la producción de cobre chileno, mientras que las empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, [llegaron] a controlar el 71,5 %».³⁹ En resumen, el principal recurso del país quedó desnacionalizado.

Este hecho, por otra parte, hizo que la salida de recursos por concepto de inversiones mineras fuera enorme, al tiempo que estas no dejaban casi nada en el país. Orlando Caputo afirma:

[...] así lo demostró ante el Senado, el Director del Servicio de Impuestos Internos quien, en octubre de 2003, señalara que entre 1994 y 2003, las diez mayores mineras extranjeras pagaron la exigua suma de 1,147 millones de dólares de impuesto a la renta, declarando a la vez pérdidas tributarias acumuladas superiores al impuesto pagado [...]. No obstante durante

³⁸ Orlando Caputo y Graciela Galarce: «La entrega al extranjero del cobre que nacionalizó Salvador Allende», en Luis Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, ed. cit., p. 618.

³⁹ *Ibíd.*, p. 620.

ese mismo lapso, tales empresas exportaron el equivalente a 20,7 millones de toneladas de cobre fino, que al precio actual [2011] del cobre de 3,5 dólares la libra, alcanza a la increíble suma de 160 mil millones de dólares, sin dejar prácticamente un solo dólar en nuestro país [...]. Estas cifras son tan catastróficas para nuestra economía que no parecen ciertas.⁴⁰

Frente a tales realidades, y considerando que el cobre es un producto no renovable, se pensó entonces en la necesidad de establecer un *royalty* minero. Este, con el apoyo de la Concertación y la derecha, fue aprobado en el Congreso durante la administración de Lagos, aunque solo llegó a la exigua suma de un 5 %, con invariabilidad por veinte años.

De tal modo, los gobiernos de la Concertación reforzaron la desnacionalización de la economía, así como también el esquema exportador de bienes de bajo valor agregado, operando dentro de una lógica extractivista destructora del medio ambiente, que es tan propia de los esquemas neoliberales.

No está de más señalar que la construcción de centrales termoelectricas, contaminantes y destructoras del medio ambiente, que luego se llevará a cabo o proyectará –con su secuelas de desertificación, cánceres y otras patologías entre la población circundante–, tuvieron como fin principal abastecer de energía a los centros mineros de propiedad de las transnacionales. Lo mismo cabe decir del agua que privatizó la dictadura: fueron tales centros los que acapararon gran parte de su consumo, lo que generó en muchos de sus entornos sequías artificiales, aunque al respecto también les cupo responsabilidad a empresas agrícolas que compraban derechos de agua para acaparar el recurso, que a veces vendían, transándolo como si se tratara de cualquier otro bien, generando las señaladas sequías artificiales en sus entornos, con la ruina de gran número de campesinos, muerte de su ganado, etcétera.

Pero bajo la Concertación no solo se entregó al extranjero el cobre. Análogo destino afectó a otras variadas áreas de la economía: electricidad, gas, agua, transporte, energía, sistema financiero, carreteras, universidades, servicios y comunicaciones, etc. Esto –sostienen los economistas Raúl González y Marilú Trautmann– quiere decir que la extranjerización de la economía chilena ha llegado a

⁴⁰ *Ibidem*, p. 611.

todos los sectores económicos, lo que nos aproxima cada vez más a una vulgar colonia extranjera. Dichos economistas señalan ⁴¹

Actualmente la presencia de empresas y capitales externos en Chile alcanza magnitudes inéditas en los últimos treinta y cinco años. Entre 1974 y 2007, la inversión extranjera totalizó 91,487 millones de dólares. A mitad de la década del 2000, la economía chilena era la cuarta más transnacionalizada del mundo, luego de Hong Kong, Singapur y Trinidad y Tobago. Alrededor de un tercio de los recursos invertidos en bienes exportables se debe a empresas transnacionales. En el 2007, el stock acumulado de inversión extranjera directa alcanzó el 64,4 % de todo el ingreso producido en Chile (PIB). Muy superior al 48,1 % de 1990, al promedio mundial de 27,9 % al de las economías «en desarrollo», de 29,8 %.

La situación descrita adquiere particular gravedad si se considera que el Estado chileno, debido a los tratados de libre comercio firmados por los gobiernos concertacionistas, ha perdido casi todas sus atribuciones para regular y negociar con la inversión foránea. No es, pues, casualidad, que las ganancias obtenidas por esta alcance montos muy elevados. Y lo que quizás sea todavía más importante: tales montos emigran como utilidades hacia los países centrales. «Solo en 2012, según cifras del Banco Central, ellos ascendieron US\$ 16.409 millones». ⁴² De allí que, como lo señalan González y Trautmann, Chile se haya convertido en un exportador neto de capital. ⁴³

De este modo, aunque administrado por nativos, Chile se ha reconfigurado como una verdadera neocolonia y como un apéndice de la economía capitalista transnacional. Todo esto ante la indiferencia de la clase política, la que en los hechos es funcionaria del gran capital local y transnacional, en beneficio de cuya renta-

⁴¹ Raúl González Meyer y Marilú Trautmann: «Chile en manos extranjeras», en Luis Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, ed. cit., p. 650.

⁴² Hugo Fazio: *El mundo del 1 %, 0,1 % y 0,01 %*, Ed. Usach, Santiago, 2014, p. 31.

⁴³ Raúl González Meyer y Marilú Trautmann: «Chile en manos extranjeras», art. cit., p. 653.

bilidad elabora el correspondiente marco jurídico, y a los efectos es abundantemente financiada por aquel, como desde el 2015 en adelante quedó de manifiesto.

En resumen, a través de la acción de la dictadura militar primero, después continuada por los gobiernos concertacionistas, el país, a través del modelo neoliberal, ha sido entregado al extranjero, y su soberanía nacional convertida en papel mojado, objeto de la retórica vacía de los ideólogos y de los políticos. Como lo señala Hugo Fazio: «los beneficiados con este sistema constituyen una minoría, pero muy poderosa».⁴⁴

Posteriores declaraciones proneoliberales de representantes concertacionistas

En los años posteriores, cuando el modelo neoliberal se viera reforzado y consolidado por los gobiernos de la Concertación, variadas personalidades vinculadas a estos, junto con reiterar la validez de dicho modelo, manifestaron su admiración por la obra que en el terreno económico llevara a cabo la dictadura. Así, en el año 2000, en entrevista con la revista *Cosas*, Alejandro Foxley dijo: «Pinochet [...] realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo». Y luego, siempre refiriéndose a Pinochet, Foxley agregó: «hay que reconocer su capacidad visionaria». También añadió:

[...] la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar [...] de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo

⁴⁴ Hugo Fazio: *El mundo del 1 %, 0,1 % y 0,01 %*, ed. cit., p. 29.

aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar.

Foxley concluyó sosteniendo que habían sido «las crueldades» que entonces se cometieron «en materia de derechos humanos» lo que había hecho que «esa contribución [de Pinochet] a la historia», haya «estado permanentemente ensombrecida».⁴⁵

Pocos años después, en 2006, en entrevista con Patricia Arancibia Clavel, Foxley reiteró ideas similares: «yo siempre estuve en desacuerdo con el gobierno del general Pinochet. Hice una oposición dura, pero yo tengo que reconocer que ellos hicieron una obra que en lo económico vamos a respetar».⁴⁶

Otros personeros de la Democracia Cristiana coincidían a plenitud con tales planteamientos. Entre los tecnócratas del partido, René Cortázar se mostró favorable a la apertura económica verificada bajo la dictadura, así como también a la formación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y otras políticas análogas. En entrevista con Patricia Arancibia dijo sobre el punto:

Por ejemplo, en la política de apertura, que fue una acción que empezó durante el régimen militar, de bajar drásticamente los aranceles de manera unilateral, hubiera sido un grave error revertir esa política. Y se dijo muy expresamente que no solo le íbamos a dar continuidad, sino que la íbamos a profundizar. Y dijimos expresamente que íbamos a mantener el sistema de AFP, de previsión privada, porque creemos que ese sistema es un activo para el país, y por lo tanto hay que perfeccionarlo y no revertirlo.⁴⁷

También las máximas figuras de la Democracia Cristiana fueron categóricas al respecto. Así, Edgardo Boeninger –como ya lo seña-

⁴⁵ Alejandro Foxley, en entrevista a *Revista Cosas*, 5 de mayo de 2000.

⁴⁶ Citado por Manuel Gárate: *La revolución capitalista en Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 403.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 406.

láramos— sostuvo que la cúpula concertacionista había llegado a una «convergencia» con el pensamiento económico de la derecha.⁴⁸ Del mismo modo planteó que el gobierno de Aylwin cumplió la misión de «legitimar el modelo económico impuesto en los años de la dictadura». Y agregó: «sin esta legitimación, el modelo de economía abierto hacia el exterior, basado en la propiedad privada y de mercado, no se habría desarrollado en Chile. Hemos legitimado el pasado sobre la base de que es parte de la realidad del Chile del presente y del futuro».⁴⁹ Mientras que Andrés Zaldívar, sin ningún tipo de tapujos, señaló que «la herencia positiva» de la dictadura militar había sido «la transformación económica».⁵⁰

Los socialistas y la «izquierda renovada» en general, en relación con el tema económico, no diferían de la Democracia Cristiana. Como lo señala Esteban Valenzuela, habían «terminando en un sorprendente proceso de identificación con su victimario [la dictadura pinocheteana] y [de] conversión absoluta al adoptar los criterios de eficiencia, la aceptación del mercado y el convencimiento de que los individuos son los agentes de su desarrollo, con un Estado que se restringe a darles facilidades».⁵¹ De allí que en términos prácticos, junto con «valorar el mercado como el mejor asignador de recursos», impulsaran una política orientada a «lograr una amplia zona de libre comercio, negociar la reforma tributaria, en el contexto de la democracia de los acuerdos para conseguir el crecimiento con equidad».⁵²

Lo que realmente había en curso no era sino un profundo realineamiento político y de clase consistente en la conversión del grueso del personal político de la exizquierda y del excentro, en funcionarios de la clase vencedora —el megaempresariado—, por cierto, no gratis, sino a cambio de que los intereses, tanto personales como corporativos de ese funcionariado, fueran por distintas vías satisfechos.

⁴⁸ Citado por Felipe Portales: «Gobiernos de la Concertación: colofón de un bicentenario excluyente», art. cit., p. 572.

⁴⁹ Citado por Hugo Fazio y Magaly Parada: *Veinte años de política económica de la Concertación*, Ed. LOM, Santiago, 2010, p. 7.

⁵⁰ *Ibídem*, p. 8.

⁵¹ Esteban Valenzuela: *La conversión de los socialistas chilenos*, ed. cit., p. 12.

⁵² *Ibídem*, p. 97.

La clase vencedora

Mientras tanto, ya cooptadas las dirigencias políticas de centro e izquierda, y frente a unas debilitadas organizaciones sindicales y populares, y a un pueblo cada vez más desinformado, despolitizado y desorganizado por los propios gobiernos concertacionistas –meros capataces del poder fáctico, aunque bien pagados– se alzaba el gran empresariado. Este disponía –y dispone– de fuertes organizaciones corporativas, muy influyentes, altamente politizadas y de elevada conciencia de clase, dispuestas a defender a todo trance la permanencia del modelo neoliberal que optimizaba la reproducción ampliada de sus capitales. Entre tales organizaciones se destacan la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), etc., las que se complementan con las organizaciones políticas de la clase, como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, con su correspondiente presencia en el Parlamento y su decisiva influencia en el poder judicial y otras instancias estatales, a las que por vías indirectas, como el *lobby* y el financiamiento, controlan. A esto hay que agregar la dimensión intelectual, expresada en el Centro de Estudios Políticos (CEP), el Instituto Libertad y Desarrollo y otros *think tanks*, la Universidad Católica y diversas nuevas casas de estudio, como la de los Andes, la San Sebastián y otras, a lo que se suma la decisiva influencia del megaempresariado en todas las demás universidades, muchas veces por vía económica. Agréguese su control de la prensa y la televisión, lo que le permite –con enorme cantidad de intelectuales orgánicos a su servicio, muchos provenientes de la izquierda– ejercer su hegemonía ideológica en la sociedad.

En suma, una clase social bien organizada, cohesionada, politizada, con conciencia de clase –con enorme cantidad de sirvientes de todo tipo–, sin adversarios significativos que la desafíen, clase que, aparte de lo dicho, mantiene una férrea conexión con las cúpulas de la Iglesia y con las Fuerzas Armadas, que son otros tantos recursos de su dominación, a los que normalmente utiliza cuando se halla en peligro. Súmese, en fin, el marco internacional que le es proclive, el capitalismo salvaje que predomina en el mundo, de acuerdo a cuyas lógicas el megaempresariado se mueve en Chile.

El máximo logro de esta verdadera oligarquía plutocrática fue el reemplazo de la dictadura por los gobiernos de la Concertación, aunque al principio ella no se diera cuenta del gigantesco beneficio que esto le significaba, razón por la cual debió ser Washington el que organizara la correspondiente transición, para lo que se valió de la clase política concertacionista y de los métodos transaccionales ya referidos en el capítulo anterior.

Las determinantes internacionales de los gobiernos de la Concertación: el capitalismo transnacionalizado

Tanto las concepciones como la práctica de los partidos concertacionistas –ambas orientadas a consolidar y profundizar el neoliberalismo en Chile–, no representan un fenómeno meramente nacional. Lejos de ello responden a las tendencias de desarrollo del capitalismo como sistema mundial. Solo considerando este hecho es que se puede comprender cabalmente no solo la racionalidad de dichos gobiernos, sino también los rumbos que ha seguido la historia reciente de Chile. Lo dicho nos obliga a hacer una breve y esquemática referencia a los rasgos adoptados por el sistema capitalista en su etapa contemporánea.

En relación con este punto, hay que tener en cuenta que el elemento principal que define al capital es la frenética y permanente búsqueda de su reproducción ampliada o, con otros términos, de su valorización, cualquiera sean los medios. Por eso su historia –que se halla plagada de guerras y violencias–, desde su acumulación originaria en adelante, no es sino la historia de la concentración de la propiedad y de la producción.

Por cierto, el sistema capitalista ha recorrido diversas fases. Roberto Regalado denomina a la actual como «capitalismo monopolista transnacional».⁵³ Si tuviéramos que mencionar algunas de las características más importantes de esta fase, tendríamos que anotar al menos las siguientes. En primer lugar, como lo señala Samir Amin, durante ella «la centralización del poder monopolista y su capacidad para controlar todo el sistema productivo alcanzó

⁵³ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos*, Ed. Ocean Sur, La Habana, 2006, p. 19.

cimas incomparables».⁵⁴ Y no menos importante, esa centralización se ha traducido en «la interpenetración de los capitales de las grandes potencias imperialistas y en la fusión de los ciclos nacionales en un solo ciclo transnacional de rotación del capital».⁵⁵ Tal sería la globalización. Ello, a su vez, estaría en la base de la alianza estratégica verificada entre los Estados Unidos, Europa Occidental y el Japón, la que en un primer momento también habría sido necesaria para enfrentar al campo socialista, y que después fue indispensable a los propósitos de «administrar el mundo de modo conjunto, en especial las sociedades sometidas, y por someter de las periferias».⁵⁶ Por cierto, el que encabeza esa alianza imperialista es el capital estadounidense.

Un segundo rasgo propio del capitalismo contemporáneo es la libre circulación de los capitales –tanto productivos como financieros– por todo el planeta, sin ningún tipo de regulación por parte de los estados, los que han quedado sometidos como nunca antes al total control del capital transnacionalizado. Lo dicho se expresa, entre otras cosas, en las garantías que las empresas transnacionales obtienen de los estados para sus negocios e inversiones bajo el concepto de «seguridades jurídicas» normalmente incluidas en los Tratados de Libre Comercio.

En esa función los estados han procedido a renunciar a su soberanía, la que trasladan a los mercados desregulados y a tribunales internacionales, los cuales se hallan bajo la atenta vigilancia de la Organización Mundial de Comercio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y de otros organismos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).⁵⁷ Estas entidades, de hecho, obedecen a los intereses de las empresas transnacionales. Dentro de esa lógica, estas últimas tienen la facultad incluso de denunciar a los estados –privados ya de verdadera soberanía– ante los tribunales internacionales controlados por aquellas, los cuales, a su vez, pueden imponerles a los

⁵⁴ Samir Amin: «El imperialismo contemporáneo», *El Clarín digital*, 3 de febrero de 2016. <<https://elclarin.cl/archivo/2016/02/03/el-imperialismo-contemporaneo/>>.

⁵⁵ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos*, ed. cit., p. 20.

⁵⁶ Samir Amin: «El imperialismo contemporáneo», art. cit.

⁵⁷ Al respecto, véase Pablo Dávalos: *La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina*, Ed. Quimantú, Santiago, 2013.

estados el pago de cuantiosas indemnizaciones en el caso de que sean encontrados culpables de impedir, con sus eventuales medidas, que las inversiones hechas en su territorio por las empresas transnacionales vean frustradas las ganancias esperadas por estas.

En ese contexto, los estados –que, como sabemos, son controlados por las empresas transnacionales y por las oligarquías locales, sea por la vía de financiamiento de la política, de los *think tanks*, el *lobby*, las coimas, etc.– han llegado a convertirse, a través de su legislación, de su control de las clases subalternas y de sus políticas neoliberales, en el principal instrumento de la reproducción ampliada que el capital lleva cabo a nivel planetario.

La otra cara de estos rasgos adoptados por el capitalismo contemporáneo es la criminalización de la protesta de las clases subalternas por parte de los gobiernos, a cuyos efectos han sido elaborados los correspondientes discursos sobre la violencia y el terrorismo, lo que tiene como correlato la instalación de un estado policial global.

Todo lo dicho significa que los estados pierden su carácter nacional y que las fronteras nacionales que enmarcaron la propiedad y la producción capitalista durante siglos, se han convertido en obstáculos para esta. De allí que se pueda decir que, superadas esas fronteras, «el proceso de transnacionalización y desnacionalización desplegado a partir de las últimas décadas del siglo xx convirtió al capitalismo en una genuina totalidad orgánica»,⁵⁸ expandida por todo el planeta. A estos efectos ha sido indispensable la firma de numerosos tratados de libre comercio entre distintas regiones del mundo, en lo que Chile, durante los gobiernos concertacionistas, ha destacado.

La otra faceta de este proceso es el desmantelamiento de los sistemas productivos nacionales, los que son abiertos al capital transnacional no regulado por los estados, lo que, particularmente en el tercer mundo, no solo liquida la posibilidad de tener proyectos de desarrollo propios, sino que también garantiza la creciente salida de recursos en dirección a los países centrales, que es donde las principales empresas transnacionales tienen sus sedes.

Esta transnacionalización, o mundialización, del capitalismo se complementa con la reestructuración de las instituciones del

⁵⁸ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos*, ed. cit., p. 9.

sistema internacional, como fueron los casos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos organismos fueron concebidos originariamente como instrumentos anticrisis bajo una lógica keynesiana, pero devinieron luego en entidades orientadas a forzar las aperturas de las economías del Tercer Mundo a la economía transnacional, condicionando a ello sus préstamos, materializando así el llamado «ajuste estructural». En esta tarea, dichos organismos predicaron «el fundamentalismo de mercado al tercer mundo, es decir, la eliminación de todas las barreras al comercio, de los subsidios, de las regulaciones para todos los productos y servicios en todos los sectores»,⁵⁹ propugnando la privatización de las empresas estatales, de la salud, la educación y la previsión social, las que de derechos sociales pasaron a ser concebidas como bienes de mercado y nichos de negocios.

Otros rasgos del capitalismo contemporáneo (monopólico y transnacional) son los siguientes:

- a) el sector financiero del capital pasa a ser el más dinámico, traduciéndose en negocios con títulos de propiedad del capital o capital ficticio;
- b) una creciente tendencia a la externalización de la producción industrial hacia países con mano de obra más barata, sobre todo China e India;
- c) una fuerte tendencia a la desaparición de la libre competencia, la cual se limita a la retórica de los ideólogos. En la práctica, las empresas transnacionales planifican sus montos de producción, fijan precios y venden sus productos en los mercados globales mediante la publicidad, lo cual no tiene nada que ver con el capitalismo de Adam Smith, ni con la libre competencia. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas venden cada vez más sus productos a las grandes empresas, de las que dependen, las que les pagan a plazo, a veces les proporcionan los insumos y, en fin, les imponen los precios. En otros países, como Chile, dado el alto grado de oligopolización de la economía, las grandes empresas se coluden;

⁵⁹ Stella Calloni y Víctor Ducrot: *Recolonización o independencia, América Latina en el siglo XXI*, ed. cit., p. 59.

- d) una acelerada acentuación de las desigualdades a nivel nacional y mundial. Según datos de Oxfam, «el 1 % más rico de la población mundial posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas. Mientras que, aproximadamente, 735 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema. Una factura médica o una mala cosecha bastarían para que muchas otras se vieran sumidas en la miseria»,⁶⁰
- e) en tanto en el centro como en las periferias, el esquema de acumulación del capitalismo transnacionalizado solo es compatible con la existencia de gobiernos que aseguren la continuidad de la acumulación que al capital transnacional le es inherente;
- f) cuando en las periferias no se da este tipo de gobierno y en su lugar se instalan otros, independientes y con proyecto nacional, el bloque imperialista central interviene intentando desacreditarlos y finalmente derrocarlos, sea mediante las «fuerzas internas» (esto es, sus aliados, las oligarquías locales y sectores anexos apoyados y financiados desde el exterior), sea mediante la intervención militar directa («guerras preventivas»). Para tales efectos los discursos de los imperialismos, difundidos por sus monopolios comunicacionales transnacionales, siempre alegan defender los derechos humanos, la libertad y la democracia, que curiosamente los gobiernos independientes invariablemente violarían;
- g) en las periferias del sistema mundial del capitalismo el poder está en manos de oligarquías burguesas que son aliadas subalternas del imperialismo, oligarquías que se valen de una clase política que le es funcional, que les administra los respectivos países, y por intelectuales y tecnócratas que legitiman ese orden, cuyo correlato es el total control de los medios de comunicación y de emisión de ideas, lo que se traduce no solo en la tendencial colonización de los intelectuales y las instituciones académicas, sino también en el control de la subjetividad de las grandes mayorías.

⁶⁰ <<https://www.oxfam.org/es/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla>>.

Por otra parte, el capitalismo descrito tiene en las doctrinas neoliberales el corpus de pensamiento funcional a sus necesidades. Bajo una apariencia técnica y neutral, esta doctrina racionaliza la concentración de la riqueza y del capital, con su correlativa tendencia a la polarización social, desigualdad y exclusión, invisibilizando su naturaleza íntima. Se trata de una ideología de clase, del gran capital transnacional, cuyo precepto más importante consiste –a diferencia del liberalismo de Adam Smith al cual dice remitirse– en rechazar toda intervención del Estado que obstaculice la reproducción ampliada del capital, preconizando a la par, la decidida intervención de este en lo que se refiere al dictado de las normas requeridas por dicha reproducción. Esto último, en los países periféricos como Chile, supone garantizar la creciente salida de recursos hacia los países centrales. El neoliberalismo, en fin, es por excelencia la ideología de la actual fase del capitalismo, razón por la cual se ha impuesto, en sus distintas facetas, en el mundo político y también en el académico e intelectual, y se ha constituido en el núcleo del pensamiento único que perfila un totalitarismo de nuevo tipo.

En el plano político, los países capitalistas han tendido a quedar gobernados por dos fuerzas neoliberales, una declaradamente conservadora y de derecha; y otra «progresista», a cargo principalmente de la socialdemocracia y otras «izquierdas». Ambas fuerzas se suceden en el control de los gobiernos sin modificar nada esencial del sistema, pero le otorgan a este la apariencia de alternancia para aspirar así a darle validez al régimen electoral.

El caso de América Latina

En América Latina, junto con la reorganización de la dominación norteamericana, la implantación del capitalismo descrito supuso la liquidación de los proyectos que desde los años treinta en adelante se intentara implantar en la mayor parte de sus países; desde ya, el de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que contemplaba un papel importante del Estado en la economía y la protección de las empresas nacionales, muchas de ellas de propiedad pública. Igualmente implicó la destrucción violenta de las fuerzas antimperialistas partidarias de un proyecto nacional y contrarias al

sometimiento del continente al imperialismo estadounidense. Tales tareas se empezaron a llevar a la práctica ya desde la década de los sesenta, y fueron impulsadas por los Estados Unidos, que a los efectos, en gran medida, se valió de las Fuerzas Armadas de la región, a las que luego de la Revolución Cubana les impusiera la Doctrina de la Seguridad Nacional. El resultado de ello fue la instauración de dictaduras militares en la mayoría de nuestros países, las que llevaron a cabo asesinatos de miles de personas, lo cual se tradujo en la destrucción física de las izquierdas y de los movimientos populares, y en la conversión de una parte de dichas izquierdas. Según Roberto Regalado, las dictaduras de la Seguridad Nacional fueron concebidas «para ejercer el poder de las armas como el único capaz de imponer en la región la reestructuración política, económica y social que el imperialismo norteamericano necesitaba para afianzar su sistema de dominación continental».⁶¹

Una importante faceta de las dictaduras de la Seguridad Nacional fue la Operación Cóndor, la que, a juicio de Josep Fontana, configuraba «la dimensión internacional» de las dictaduras del cono sur.⁶² Según Patrice McSherry: «el sistema Cóndor consistía en tres niveles. El primero era el de la cooperación mutua entre los servicios militares y de inteligencia»; el segundo

[...] contemplaba que escuadrones multinacionales de Cóndor realizaran operativos encubiertos transfronterizos para detener y desaparecer exiliados en otros países o trasladarlos a sus países de origen, donde la mayoría de ellos desaparecieron definitivamente. El tercer nivel y el más secreto de todos, era el de la capacidad de Cóndor de cometer asesinatos de dirigentes políticos que pudiesen movilizar la opinión pública mundial y organizar una amplia oposición a los estados militares.⁶³

A fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, asentadas las dictaduras –y derrotadas las izquierdas con los métodos señalados–, comenzó una nueva fase en la historia de la región

⁶¹ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos*, ed. cit., p. 149.

⁶² Josep Fontana: *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Ed. Pasado & Presente, Barcelona, 2005, p. 548.

⁶³ J. Patrice McSherry: *Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Ed. LOM, Santiago, 2009, p. 30.

marcada por la estabilización a un nivel más profundo e integral de la dominación norteamericana, con su correlato, la imposición de las empresas transnacionales. James Petras sostiene que esos años fueron «definidos por Washington y Wall Street como la “Edad de oro” de la relación entre Norteamérica y Latinoamérica». Por entonces, y aún antes, agrega:

[...] los regímenes [de la región] aceptaron y promocionaron la hegemonía norteamericana, de acuerdo a los términos dictados por el FMI, el Consenso de Washington y el modelo de acumulación capitalista. Esto incluyó la eliminación de las barreras arancelarias, la privatización de compañías públicas (entre ellas pozos petrolíferos, minas, fábricas y compañías de Telecomunicaciones) y su posterior desnacionalización o transferencia a corporaciones multinacionales norteamericanas y europeas. Tanto Norteamérica como la Unión Europea se apoderaron de esas compañías públicas a precios y condiciones excepcionalmente favorables, lo cual condujo a la transferencia masiva de los beneficios, los intereses y los pagos por concepto de alquiler a las multinacionales, lo que les proporcionó una amplia influencia sobre el sistema financiero y crediticio, así como el acceso a los ahorros locales en los países latinoamericanos.⁶⁴

Ya avanzado este proceso, cumplida la fase militar y restaurado del todo el control norteamericano sobre América Latina –tan amenazado desde la Revolución Cubana en adelante–, Washington, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, llevó a cabo un nuevo giro: se jugó por colocar a las Fuerzas Armadas en un segundo plano, para poner fin a las dictaduras de la Seguridad Nacional, que ya no le servían, lo que dio lugar a las denominadas como «transiciones a la democracia». El objeto de estas fue la instauración de las democracias de baja intensidad, de fachada o neoliberales, las que, sobre las bases sentadas por las dictaduras militares, debían implantar el neoliberalismo (que en Chile el régi-

⁶⁴ James Petras: «Las nuevas formas del imperio. Estados Unidos y América Latina en tiempos de Obama», en Franck Gaudichaud (coord.): *El volcán latinoamericano. Izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo*, Ediciones Escaparate, Concepción, Chile, 2011, pp. 46-47.

men pinocheteano ya había llevado a la práctica a plenitud). Durante esta fase, y aun antes, un segmento de las izquierdas derrotadas en los años sesenta y setenta se recicló y se proclamó progresista y defensor de la democracia, estando dispuesto a participar de la administración del orden triunfante.

En la medida en que, según lo planificado, las dictaduras se batían en retirada, los estrategas del Norte aspiraron a estructurar la nueva etapa del sistema de dominación de los Estados Unidos sobre América Latina. Este sistema, según James Petras, tenía como componentes la instrumentalización de gobiernos vasallos, con sus correspondientes diplomáticos, por una parte, a lo que se agregaba la implementación de tácticas orientadas a la conversión de antiguos adversarios políticos, por la otra.⁶⁵ A partir de lo dicho, el sistema tendría tres pilares principales, los que, como de costumbre, pronto serían ampliamente asumidos por las elites políticas, intelectuales y empresariales locales. Tales fueron: 1) un régimen político que se conceptuaba como de democracia representativa, de hecho, de fachada; 2) la adhesión al libre comercio, esto es, al neoliberalismo en su versión de lo que será el Consenso de Washington; y 3) la instalación de cada vez más numerosas bases militares en los países latinoamericanos (bases sobre las que Telma Luzzani hace detallada descripción).⁶⁶

Se aspiró así a instaurar lo que se denominó como «gobernabilidad democrática», cuyo supuesto era la «alternancia dentro del proyecto», y la homogeneización ideológica de los principales actores en torno a lo que, según dijimos, se conceptuó como compromiso con la democracia representativa y la economía de mercado, a lo cual se agregaron los derechos humanos.

Este entramado, que constituyó la superestructura ideológica y política de la actual fase de la dominación imperialista en el continente, con su correspondiente predominio de las transnacionales en el mundo, fue respaldado y reforzado por la principal institución

⁶⁵ James Petras: *El nuevo orden criminal*, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2003, p. 96.

⁶⁶ Véase Telma Luzzani: *Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica*, Ed. Debate, Buenos Aires, 2012, sobre todo el primer capítulo. Véase también, Atilio Boron: *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2014.

regional con que cuenta el dominio norteamericano en América Latina, es decir, la Organización Estados Americanos (OEA). En efecto, esta reformó su carta y estableció la llamada «cláusula democrática», por la cual pretendía garantizar que sus países miembros se mantuvieran dentro de los marcos de la democracia neoliberal, estipulando sanciones en contra de quienes la violaran.

Una de las particularidades fundamentales de las mencionadas democracias de fachada o de baja intensidad instauradas como producto de la mencionada reestructuración del dominio estadounidense sobre América Latina radicó en que ellas no debían permitir el establecimiento de medidas que pudieran obstaculizar la reproducción ampliada del capital local y transnacional. Su misión fue estimular dicha reproducción, atraer al capital extranjero, garantizarle su rentabilidad y su correlativa transferencia de recursos en dirección a los países centrales. Bajo tales supuestos, incluso sectores «progresistas» o de izquierda podrían acceder a los gobiernos siempre que cumplieran con las referidas funciones. A dichas particularidades se agregaron otras, también importantes, como la cooptación de la intelectualidad y de segmentos de las clases subalternas –algunos sindicatos, organizaciones sociales y/o comunales, etc.–, todo a través de mecanismos clientelares (y de una corrupción sistémica). Esto, por otra parte, debía contribuir a generar legitimidades y apoyos sociales al orden establecido, aislando a sus críticos y a las fuerzas sociales y políticas que se le opusieran, lo que creó condiciones para su eventual represión.

En ese contexto, el proyecto imperialista para América Latina requirió unificar los mercados de los países de la región, y abrirlos del todo a las empresas transnacionales y a las corrientes del capital financiero, que los Estados no debían regular. A tales efectos, en 1994 los Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. Paralelamente se propusieron avanzar en la misma dirección en América del Sur. Con esos fines diseñaron la Alternativa de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que debía ser ratificada en un plazo no mayor a diez años por todos los gobiernos de la región. De hecho, el ALCA implicaba la integración plena de las economías sudamericanas a la de los Estados Unidos. Suponía, por tanto, una apertura total de estas a las inversiones de las empresas transnacionales, garanti-

zándoles su rentabilidad y la transferencia de recursos hacia sus lugares de origen, lo que inevitablemente traería consigo la destrucción de los productores locales y la conversión de la economía del continente en un apéndice de la economía norteamericana. De allí que Stella Calloni definiera al ALCA como «el mayor proyecto recolonizador de América Latina en los tiempos modernos».⁶⁷

El Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos firmara con Chile en 2002 se inscribió dentro de esa lógica. Ciertamente, la integración dependiente de nuestras economías y de nuestros países, con los Estados Unidos y con el mundo de las empresas transnacionales cuenta en toda América Latina con el apoyo de elites políticas, empresariales e intelectuales (normalmente formadas en las universidades de los países metropolitanos). A juicio de Roberto Regalado, tales elites, a las que define como «socios locales del capital financiero transnacional [y sus] empleados de cuello blanco», han quedado «cercenados del resto de la nación». Y agrega: «son esas elites desarraigadas, que no viven, piensan, sienten ni padecen como latinoamericanos, las que ejercen, por delegación transnacional y dentro de márgenes limitados, los resortes del poder político en la región».⁶⁸

Los procesos descritos –entre otras consecuencias en las que no podemos detenernos– trajeron consigo adicionalmente una transformación de los partidos políticos, los que dejaron de ser expresiones de distintos segmentos sociales que luchaban por defender sus respectivos intereses impulsando sus correspondientes proyectos societales, como en algún grado con anterioridad ocurriera en ciertos países. En lugar de ello se convirtieron en entidades burocráticas y oligárquicas, de políticos profesionales y tecnócratas asociados, que se eternizaron en sus cargos, tanto partidarios como de la alta administración estatal y, en fin, en meras articulaciones de una clase política endogámica orientada a medrar del aparato fiscal estrechamente vinculado a los grandes negocios privados, dentro de la lógica de la dominación del imperialismo norteamericano sobre nuestros países.

Los gobiernos de la Concertación en Chile, lejos de toda originalidad, representan un caso, quizás el más ilustrativo, de la realidad

⁶⁷ Stella Calloni y Víctor Ducrot: *Recolonización o independencia*, ed. cit., p. 40.

⁶⁸ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos*, ed. cit., p. 224.

mundial y regional descrita, la cual los condiciona y sobredetermina, marcando su real carácter, el cual, por otro lado, es cuidadosamente ocultado no solo por la prensa y los discursos de los políticos, sino también por los centros de investigación y producción de ideas, del todo funcionalizados al nuevo orden y financiados por sus poderes fácticos.

La apología de la transición por los organismos internacionales y las fuerzas conservadoras internas

Los organismos internacionales de la globalización neoliberal vieron en la transición chilena la más exitosa de cuantas se ensayaron hasta el momento. En virtud de ello, no dudaron en ponerla como ejemplo para el resto de América Latina. Las buenas cifras macroeconómicas conseguidas por los gobiernos de la transición, al menos hasta la crisis asiática, ayudaron a ello. En el plano interno, el gran empresariado, sus políticos y tecnócratas –la Concertación misma– proclamaron a los cuatro vientos similares puntos de vista.

El reconocimiento que recibiera la transición chilena por parte de los países imperialistas se debió no solo a la mantención que ella hiciera del neoliberalismo, con su correspondiente garantía al capital extranjero, sino también debido a su explícita decisión en orden a seguir religiosamente las reglas del capital global y de sus instituciones internacionales. La tecnocracia concertacionista le prestó al punto una importancia fundamental, aun desde antes de asumir el gobierno. Como lo dice Manuel Gárate: «la sola idea de parecer irresponsables o populistas ante los organismo internacionales de crédito, o de alterar los buenos índices macroeconómicos de la economía chilena, surgió como el principal temor entre quienes, se suponía, tendrían que hacerse cargo del manejo económico».⁶⁹ Por su parte, las instituciones internacionales no dudaron en reconocer esa conducta y, aun más, de premiarla. Al respecto, el mismo Manuel Gárate sostiene que «la muestra más evidente [del reconocimiento por dichas instituciones] de la buena conducta de las autoridades económicas del país [fue] nada menos el que dos ex-Ministros de Hacienda de la Concertación fueran llamados para

ocupar puestos de alta responsabilidad en Washington, específicamente en el FMI». Gárate concluye diciendo que «resulta difícil encontrar una muestra de mayor reconocimiento internacional para un país pequeño, relativamente marginal, pero que ha seguido al pie de la letra e incluso *avant la lettre*, las propuestas de ajuste estructural fomentadas por las instituciones de Bretton Woods». ⁷⁰

Desde el punto de vista político, la transición en Chile dio lugar a un esquema bipartidista, o bicoalicional, como el existente en los Estados Unidos y Europa, el cual, en su versión tercermundista, también se caracteriza por garantizar la esencia de modelo económico y social en curso dándole, de paso, a su superestructura política una apariencia de democracia en la medida en que los dos bloques políticos que lo administran se suceden en el gobierno mediante elecciones.

Eugenio Tironi ilustró bien la lógica de este mecanismo para el caso chileno cuando declarara que «las bases de nuestro modelo económico-social se inspiran en el paradigma norteamericano». Esto, en el plano de la política, agregó, significa la existencia de dos bloques, la derecha y la Concertación. Ambos, añadió, «son algo así como fuentes de dirección alternativa de un mismo orden socioeconómico, mas no propuestas de modelos antagónicos». ⁷¹

Todo lo dicho representó un importante triunfo para el imperialismo internacional, pero también para los grupos del gran capital local. A este respecto, en el país dejó de existir la competencia entre diversos proyectos globales que caracterizara a los decenios anteriores, por cuanto la izquierda y el excentro hicieron suyo el proyecto de la derecha, que era el de los grandes grupos económicos y del capitalismo mundial. La derecha, por su parte, adquirió rápida conciencia del hecho, y lo reputó como su victoria.

El propio diario *El Mercurio* mostró su alborozo y su conciencia respecto del triunfo obtenido por el gran capital cuando sostuvo: «la mayor victoria de los gestores [del 11 de septiembre] la ha constituido, en definitiva, el que sus opositores, transformados en gobierno sobre la base de la propia institucionalidad que los primeros legaron, no han modificado nada fundamental de las nuevas

⁷⁰ *Ibíd*em, p. 400.

⁷¹ Eugenio Tironi: «El modelo americano», *La Tercera*, Santiago, 3 de agosto de 2000, p. 9.

estructuras». ⁷² En otro de sus editoriales, *El Mercurio* planteó: «la Concertación fue un pacto genial, que permitió darle gobernabilidad al periodo de transición y a los años posteriores. Sin embargo, ella no tenía un proyecto socio-económico, ni lo tiene, limitándose, sabiamente, a administrar lo que ya había». ⁷³

No es menos cierto que tanto el centro demócrata cristiano como la izquierda «renovada», en su conversión a lo que antes condenaran, también se consideraron vencedores pues, a su juicio, se había recuperado la democracia. Aunque la causa más de fondo de tales aseveraciones se vinculaba a que dicha democracia –que en realidad era de fachada– hizo posible que aquellos se convirtieran en una especie de clase administradora del Estado, con los negocios anexos que esto facilitaba, cuestión que les permitió a muchos de ellos ascender socialmente y vivir como las clases altas, lo que hasta el momento solo era propio más bien de los personeros copulares de la Democracia Cristiana. Mientras, la masa mesocrática y popular, aspirante al consumo –el que, a través del crédito empezó a parecer como si estuviera a la vuelta de la esquina–, en su heterogeneidad, hizo fe de que vendrían tiempos mejores, lo que era cierto en comparación con el periodo dictatorial. Así, unos más y otros menos, terminaron compartiendo la idea de Chile como país exitoso, tan propagandeada desde afuera.

Era la época de los consensos, y de la «reconciliación nacional», aunque con desaparecidos cuyo paradero seguía ignorándose, y con torturadores y asesinos circulando libremente por las calles. Esto último, por cierto, era lo que se requería olvidar. Esa fue la función de la empalagosa prédica sobre el «reencuentro entre los chilenos» que entonces se hizo cotidiana por parte de la clase política –cuya base objetiva era su adhesión al neoliberalismo–; temática que, en fin, no dejó de tener audiencia. Aquí no ha pasado nada. Todos reconciliados, con la izquierda («renovada») haciendo *mea culpa* y cantando loas al mercado y al orden; y los viejos golpistas, tipo Aylwin, proclamando, en referencia al Partido Demócrata Cristiano y a la izquierda conversa, el «reencuentro de los demócratas». Lo que esos discursos no admitían era el reconocimiento de que el triunfo del neoliberalismo había sido posible solo sobre

⁷² *El Mercurio*, Santiago, 14 de septiembre de 1997, p. 3.

⁷³ *El Mercurio*, Santiago, 15 de febrero de 1997, p. 3.

la base de infinidad de muertos, torturados, desaparecidos y exiliados; actitud que, en otros términos, significaba hacer abstracción de que este modelo había venido al mundo chorreando sangre y lodo por todos sus poros.

Fue entonces cuando el neoliberalismo, como concepción del mundo caracterizada por mercantilizar los más diversos aspectos de la vida, cuya otra cara es el control de todo por los grandes negocios –desde los alimentos hasta el arte, pasando por la información, el agua, los valores y también la política–, comenzó a ser visto como el orden natural de las cosas y, por tanto, como el único posible.

Los gobiernos de la Concertación como gobiernos proimperialistas

La adhesión de los gobiernos concertacionistas a los esquemas del neoliberalismo inevitablemente tenía que tener su traducción en política exterior. En este sentido, tales gobiernos desarrollaron una clara orientación proimperialista, la que muchas veces tendió a poner de espaldas a Chile respecto de otros países de la región, en particular de aquellos que intentaban una política más autónoma respecto de Washington y que, con tales miras, perseguían la unidad latinoamericana. Como lo señala un analista: «la política internacional de la Concertación estuvo más cerca de los Estados Unidos que de los gobiernos de Bolivia, Argentina (kirchnerista), Venezuela, Brasil y Ecuador, procurando con ello obtener un buen puntaje en las clasificadoras de Wall Street».⁷⁴

Desde un punto de vista formal, los gobiernos concertacionistas proclamaron que uno de los objetivos centrales de su política exterior era conseguir la reinserción de Chile en el escenario internacional para dejar atrás el aislamiento en el que lo había sumido la dictadura pinocheteana. Este objetivo suponía obtener el respaldo, la valoración y el reconocimiento de las principales potencias occidentales –en primer término, de los Estados Unidos–, de las

⁷⁴ Osvaldo Torres: «El pulpo del imperialismo», *El Mostrador digital*, 18 de diciembre de 2010, <<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/12/18/el-pulpo-del-imperialismo/>>.

cuales aspiró a convertirse en socios confiables. Sin embargo, tales propósitos terminaron enmascarando una cuestión de fundamental importancia: la funcionalización de la política exterior del país a los objetivos estratégicos de Washington. Algunas manifestaciones de esto último son las siguientes. En primer lugar, los gobiernos de la Concertación se adhirieron al proyecto norteamericano y europeo, de plena apertura de los mercados de los países latinoamericanos a las transnacionales –con sus correspondientes desregulaciones–, tal como lo planteaba el Consenso de Washington y las instituciones de la globalización neoliberal, el FMI y el Banco Mundial. Con ello, los gobiernos concertacionistas volvían la espalda a la formación de mercados latinoamericanos integrados orientados a permitirle a la región presentarse como una unidad económica dentro de la economía mundial. Una de las manifestaciones principales de tal política fue la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Este, como se dijo arriba, empezó a negociarse tempranamente, durante el gobierno de Eduardo Frei, y fue firmado en 2002 durante la administración de Ricardo Lagos. La otra cara del tratado consistió en la imposibilidad de que el país participara de proyectos de integración latinoamericana, como el Mercosur, el ex-Pacto Andino y, más adelante, del ALBA, que respondían a una lógica latinoamericanista.

Junto al referido alineamiento en el terreno económico, los gobiernos de la Concertación, así como también distintos personeros de esta se esforzaron por combatir y condenar a los países de la región que escapaban al control norteamericano, sirviendo por este concepto a los objetivos de Washington. Lo ya expresado se manifestó en cierta medida en el caso cubano y luego, en el de Venezuela.

En relación con este último país, en 2002 el presidente Ricardo Lagos reconoció al gobierno que por un corto lapso se instalara en Caracas producto del golpe llevado a cabo en contra del presidente Hugo Chávez, intentona finalmente fallida, que fuera apoyada de forma activa por los Estados Unidos.

En otro plano, si bien en el año 2003 el gobierno de Ricardo Lagos se abstuvo de apoyar la invasión estadounidense a Irak, consciente de que proceder de otra forma hubiera aislado aún más a Chile en América Latina, en compensación tuvo que dar posteriores muestras de lealtad a la potencia del Norte. Así, en 2004, a solici-

tud de George W. Bush, Ricardo Lagos resolvió con toda celeridad, y sin autorización del Senado, enviar tropas chilenas a Haití para contribuir a darle visos de multilateralismo a una intervención de carácter neocolonial llevada a cabo por los Estados Unidos, Francia y Canadá, potencias que, con pretextos humanitarios, en marzo de 2004, ocuparon militarmente el territorio haitiano para derrocar a su presidente constitucional, Jean-Bertrand Aristide. Téngase en cuenta que Haití es una isla que se encuentra entre Cuba y Venezuela, cuyos regímenes Washington también aspira a derrocar.

La intervención militar en Haití por parte de las señaladas potencias, a las cuales Chile se sumó, obedeció formalmente a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, controlado por aquellas. Se dio así lugar a una intervención militar tercerizada. Luego, otros países se sumaron a la ocupación, con lo cual, como Chile, aceptaron servir a los objetivos de las potencias mencionadas. En la misma línea, los gobiernos concertacionistas, al menos entre 2000 y 2004, siempre siguiendo las políticas de Washington, apoyaron votos condenatorios a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Y cuando la revolución bolivariana en Venezuela se fue radicalizando, dirigentes concertacionistas estrecharon relaciones con la oposición de ese país, cada vez más inclinada a impulsar otro golpe de Estado. En los años siguientes tal actitud se tradujo en declaraciones, visitas, actos de solidaridad y en acusaciones de personeros de la Concertación en contra del gobierno chavista, normalmente con el pretexto de que este violaba los derechos humanos.

Dentro de tal patrón de conducta, en 2012, Ricardo Lagos, acompañado por Felipe González y Fernando Cardoso, en un evento convocado por el Banco Banesto, hizo una disertación en Caracas que tituló: «Visiones de una economía con rostro humano». En ella expuso concepciones neoliberales, relevantes en la coyuntura venezolana, y fue emitida por el canal opositor Globo Visión y difundida a través de las redes sociales de las fuerzas encabezadas por Enrique Capriles.

Ya bajo la Nueva Mayoría, a comienzos de 2014, cuando los sectores más radicales de la oposición venezolana intentaron desestabilizar al gobierno de Caracas mediante «guarimbas», demostraciones callejeras y la acción de francotiradores, que dejaron más

de cuarenta muertos –entre ellos una chilena–, gran parte de los dirigentes de la Nueva Mayoría se solidarizaron con la intentona, particularmente con su principal exponente, Leopoldo López, quien luego fuera condenado por los tribunales de justicia de su país. Entonces, miembros de la Nueva Mayoría exigieron su libertad, y lograron incluso que el Senado chileno se pronunciara en su apoyo y condenara al gobierno venezolano. Pronunciamiento análogo obtuvieron de los Tribunales de Justicia.

De este modo, tanto personeros destacados de la Concertación, como luego de la Nueva Mayoría, intervenían en la política interna de Venezuela, formando, en consecuencia, parte de la subversión en contra de su gobierno, la que era impulsada por los centros del poder mundial imperialista. Cuando en 2015 Arabia Saudita ejecutó a más de cuarenta opositores, decapitándolos, y en otros casos crucificándolos, esos concertacionistas no dijeron nada. Menos aún lo hicieron cuando en los Estados Unidos solo durante el 2015 la policía, en sucesión de casos, muchos televisados, asesinó a unas mil doscientas personas, negros y latinos, a lo que se agrega el que Washington, desde mucho antes, mantenía en la prisión de Guantánamo a centenares de presos sin juicio, muchos de ellos objeto de torturas, a la par que, con el pretexto de la lucha en contra del terrorismo, en el Medio Oriente practicaba sistemáticos asesinatos selectivos a través de drones, que solían dejar gran cantidad de «daños colaterales» en vidas humanas.

Los partidos concertacionistas y sus dirigencias y representantes tampoco dijeron nada sobre los miles de presos políticos existentes en Colombia, ni sobre los asesinatos sistemáticos de periodistas y dirigentes sociales verificados recurrentemente tanto en este país como en Centroamérica; ni sobre los más de veintisiete mil desaparecidos producidos en México durante los últimos años, y así sucesivamente. ¿Cuál era la lógica de tal conducta? Se trataba de la lógica de la subordinación al país del Norte, de cuya política eran instrumento.

En otro plano, pero con similar racionalidad, los gobiernos concertacionistas se orientaron a la conformación del bloque del Pacífico, después denominado Alianza del Pacífico, el que fuera creado por los Estados Unidos con el fin de oponerse al ALBA y al surgimiento de un proyecto latinoamericano independiente. Mien-

tras que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, firmó su adhesión al Trans Pacific Partnership (TPP), el cual por años fuera negociado en secreto cuya eventual vigencia acabaría con lo poco que le quedaba al Estado chileno de soberanía, ello en beneficio de las empresas transnacionales.

De tal modo, los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría siguieron una política exterior del todo funcional a las estrategias de los centros del capitalismo mundial, de los cuales eran un mero apéndice.

¿Crecimiento y equidad?

En el marco descrito, una de las preocupaciones centrales de los gobiernos concertacionistas fue, por un lado, continuar con el crecimiento económico verificado durante los últimos años de la dictadura y, por otro, disminuir los grandes costos sociales asociados al modelo neoliberal al que nunca pretendieron reemplazar. La disminución de esos costos debía obtenerse mediante el incremento del gasto social.

El primero de los objetivos mencionados —el crecimiento— fue ampliamente conseguido, sobre todo entre 1990 y 1997. La economía creció significativamente durante ese lapso, alcanzando en promedio un 7,66 % anual. Ese crecimiento se vio interrumpido producto de la crisis asiática, que motivó en Chile una breve recesión, de la cual el país se recuperó desde el 2000 en adelante, aunque sin conseguir las anteriores tasas de crecimiento y siempre en dependencia de la demanda externa de los productos nacionales de exportación y de sus precios en los mercados exteriores. Tales productos, no obstante, se caracterizaron por poseer escaso valor agregado.

En relación con esto último, los gobiernos concertacionistas continuaron con la estrategia de desarrollo impulsada por la dictadura, que se basaba en la exportación de bienes primarios.⁷⁵ Al respecto, Hugo Fazio menciona un trabajo divulgado por la Cepal, con cifras del año 2011, que estableció que «un 95,9 % de las

⁷⁵ Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 380.

exportaciones del país se vinculaba a sus materias primas». ⁷⁶ Con estas características las exportaciones subieron fuertemente ya desde los años ochenta y siguieron subiendo durante los noventa. En efecto, «entre 1990 y 1997, las ventas al extranjero crecieron un 102 %, pasando de US\$8,370 millones a US\$16,920 millones», ⁷⁷ siempre predominando en ellas bienes de bajo valor agregado, de los cuales la economía nacional era dependiente.

La otra cara de lo señalado fue un claro proceso de desindustrialización de la estructura productiva del país. El mismo Hugo Fazio plantea que «en la década de los setenta, cuando se impuso el modelo económico vigente, la industria manufacturera representaba el 17 % del PIB nacional. Según un estudio efectuado por ASIMET, en 2012 ligeramente superaba el 10%». Ello, por cierto, dejaba a Chile «extraordinariamente expuesto a la evolución de las cotizaciones de los *comodities* en los mercados internacionales». ⁷⁸

Con todo, como lo señala Manuel Gárate, el crecimiento económico experimentado por el país permitió «la puesta en marcha de diversos programas asistenciales y de un aumento sostenido del gasto social, aunque sin cambiar mayormente el estatus ni la situación de precariedad laboral de la mayor parte de los trabajadores asalariados». ⁷⁹ Debido a esto no se produjo «una mejora sustancial de las condiciones laborales ni de los derechos sociales adquiridos durante el periodo del estado de compromiso». ⁸⁰ Pese a ello, se verificó un moderado aumento salarial real, que entre 1990 y 2000 alcanzó el 3 % anual. También aumentó y se hizo más variado el consumo, sobre todo estimulado por el crédito. En esta materia se generalizó el uso de las tarjetas, lo que vino de la mano de altas expectativas, por parte de amplios sectores del país, en orden a acceder a la adquisición de bienes. La otra cara de ello fue un considerable endeudamiento, que para la mayoría de las familias se tradujo en situaciones angustiantes, más aún si se mantenía la precariedad laboral y un desempleo no menor. Este, en

⁷⁶ Hugo Fazio: *El mundo del 1%, 0,1 % y 0,01 %*, ed. cit., p. 94.

⁷⁷ Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 382.

⁷⁸ Hugo Fazio: *El mundo del 1 % , 0,1 % y 0,01 %*, ed. cit., p. 94.

⁷⁹ Manuel Gárate: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, ed. cit., p. 383.

⁸⁰ *Ibíd.*, p. 384.

promedio, entre 1990 y 2000 fue de 7,46 %, y hasta antes de la crisis asiática, del 7 %.⁸¹

Los gobiernos concertacionistas proclamaron que la pobreza en Chile había disminuido sustancialmente producto de la bonanza económica y de sus políticas de gasto social. Se habría pasado de un 45 % de la población en condiciones de pobreza en 1987, a un 19 % en 2013.⁸² Marcel Claude cuestiona tales cifras sosteniendo que estuvieron condicionadas por el modo de llevar a cabo las respectivas mediciones. Sobre el punto afirmó que si estas se hicieran «como se harían en Estados Unidos la pobreza [en Chile] estaría entre el 30 y el 40 %», y si se las hiciera «siguiendo el método de medición de la Oficina Europea de Estadísticas [...] la línea de pobreza estaría entre el 40 y 50 % de la población».⁸³

A lo dicho se agrega que durante los gobiernos de la Concertación las grandes desigualdades se mantuvieron. Esto significa que las políticas sociales llevadas a cabo por ellos no lograron revertir significativamente los grados de desigualdad inherentes al modelo neoliberal. Según Hugo Fazio, para el lapso 2005-2010, el 1 % más rico de la población tenía casi el 31 % del PIB.

¿Cuáles eran –y son– las causas de estos indicadores? Se podría destacar, entre otras, el que los asalariados no disponían –ni disponen– de derecho a huelga efectivo, lo que permitía –y sigue permitiendo– altas tasas de explotación del trabajo, con su otra cara, la alta rentabilidad del capital. A ello agréguese el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP), que supone que sobre el 10 % de los salarios nominales de las distintas categorías laborales pasen mes a mes –en una verdadera política expropiatoria y estrechamente clasista– a los grandes grupos económicos, los cuales los utilizan para sus inversiones y especulaciones financieras, útiles a los efectos de la reproducción ampliada de su capital, cuya otra faceta son las bajísimas pensiones.

Pero aún más, las AFP, como otros negocios del gran empresariado, se hallan largamente subsidiadas por el Estado. Manuel Riesco, quien ha investigado a fondo el tema, señala que «el fisco ha venido aportando a las AFP enormes subsidios en dinero

⁸¹ *Ibíd.*, p. 383.

⁸² *Ibíd.*, p. 384.

⁸³ Marcel Claude: *Diario Uno*, del 18 al 24 de julio de 2010.

efectivo, que cubren la mayor parte de las pensiones pagadas a sus afiliados». Y agrega:

[...] los aportes en dinero contante y sonante al sistema de AFP casi triplican las pensiones pagadas a sus afiliados; los aportes totales desde la creación del sistema más que cuadruplican las pensiones pagadas por este. A pesar de este enorme excedente las AFP no guardan dinero alguno en sus cofres. Todo el remanente ha sido apropiado por los administradores o transferido a terceros bajo la forma de préstamos o capital accionario. De esta a manera, el grueso del dinero aportado ha ido a parar a los grandes grupos privados. El sistema está diseñado para que siempre opere de ese modo. Es decir, para generar grandes masas de excedentes destinados al financiamiento de los grupos empresariales.⁸⁴

No menos relevante para la concentración de la riqueza ha sido la política de endeudamiento para el consumo que incentivan los bancos e incluso el *retail* y otros negocios, la que se traduce en una considerable succión de recursos desde los bolsillos de los endeudados, por concepto de intereses, frecuentemente usurarios y no regulados.

No es raro entonces que Chile, según ciertas estadísticas, sea uno de los países más desiguales del mundo, como lo señala la tabla 24.2.

En base a estos datos, Hugo Fazio sostiene que Chile es «el país [...] por lejos [...] más concentrado entre todos los países para los cuales existen datos basados en declaraciones tributarias oficiales y estimaciones de las ganancias de capital de las que se apropian los estratos más ricos».⁸⁵

Estas desigualdades se correlacionan con la arriba referida extraordinaria desnacionalización de la economía, con el consiguiente control de los recursos del país por el capital extranjero.

⁸⁴ Manuel Riesco: *Nueva previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile*, Ed. Usach, CENDA, Santiago, 2014, pp. 14-15.

⁸⁵ Hugo Fazio: *El mundo del 1 % , 0,1 % y 0,01 %*, ed. cit., p. 27.

Tabla 24.2. Participaciones comparativas incluyendo las ganancias del capital (2005-2010)

	<i>Participación en el ingreso total del país del:</i>		
	<i>1 % más rico</i>	<i>0.1 % más rico</i>	<i>0.01 % más rico</i>
Chile	30.5	17.6	10.1
EE.UU.	21.0	10.5	5.1
Canadá	14.7	5.8	2.0
Alemania	12.1	5.0	2.3
Japón	10.9	3.5	1.3
España	10.4	3.9	1.5
Suecia	9.1	3.4	1.4
Promedio	15.8	7.2	3.5

Fuente: Documento de trabajo del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Citado por Hugo Fazio: *El mundo del 1 %, 0,1 %, 0,01 %*, ed. cit., p. 27.

Los cambios culturales del neoliberalismo

Uno de los aspectos más relevantes de la realidad descrita fueron los gigantescos cambios culturales asociados a ella, los que se tradujeron en la emergencia de un nuevo sentido común. Este se caracterizó por un radical individualismo articulado en torno a un frenético culto al consumo, aunque –como ocurriera entre las clases subalternas– fuese al costo de sobreendeudarse. La otra cara de lo dicho fue una intensa búsqueda del dinero, precisamente por cuanto, como lo señala Tomás Moulian, al ser el consumo una pasión, también lo es el dinero, que es su premisa. Se generó así «una cultura donde el ser se [convirtió] en tributario del tener», y donde «el dinero definió a las personas, mucho más que sus conocimientos intelectuales o sus virtudes morales. Todo pasó así a ser medido por el dinero: el mérito, el prestigio e incluso la autoestima personal».⁸⁶

Este sentido común era el de la ideología burguesa, la que parecía convertirse en la ideología de gran parte del país. Las clases

⁸⁶ Tomás Moulian: *El consumo me consume*, Ed. LOM, Santiago, 1998, p. 35.

medias, antes que nadie, y luego, en parte, las populares, hicieron suyo dicho sentido común, con más fuerza cuando se les entregó tarjetas de crédito, lo que les permitió comprar en cómodas cuotas y endeudarse hasta el desquiciamiento psicológico. Esto, por otra parte, trajo entre ellos gigantescos efectos políticos consistentes en su disciplinamiento, su conformismo y su miedo, en primer lugar, a perder el trabajo –que en todas partes se precarizó– y a no poder pagar sus deudas, lo que les impediría ulteriores endeudamientos y consumos, estos últimos convertidos en la razón de su existencia.

Así, pues, ocurrió que, avanzado este proceso, los ciudadanos devinieron en consumidores. Y lo que es más importante: en tal condición, con una mezcla de rabia, temor y desprecio, no pocos, particularmente situados entre ciertos sectores medios conservadores, pasaron a rechazar toda visión distinta a la que el sistema social y cultural inoculara en sus subjetividades, y se convirtieron –al mejor estilo de *Fahrenheit 451*– en zombis clonados listos para avalar el linchamiento de los disidentes. De allí su rechazo a las huelgas y a las luchas populares, rechazo siempre azuzado por los medios, claro está.

De tal manera, en fin, la plutocracia, reconfigurando ideológicamente a las clases subalternas de acuerdo con sus necesidades, no hizo sino consolidar su dominación.

Los cambios culturales del neoliberalismo y la clase política

Con antelación las cúpulas concertacionistas, a su modo, y también sus cuadros medios y bajos, se hicieron partícipes de la cultura referida. En torno a ella desarrollaron fuertes intereses corporativos, cuya otra cara era la existencia de «proyectos personales» que tenían como premisa la recepción de ingresos provenientes del presupuesto fiscal resultante de la integración de sus miembros a la alta burocracia estatal en sus distintos escalones.

Los partidos políticos –con las excepciones consabidas– vaciados ya de todo componente utópico y desligados de la sociedad civil, excepto por sus prácticas clientelísticas, fueron los instrumentos a través de los cuales esos intereses corporativos y personales buscaron realizarse. Ya durante el gobierno de Patricio Aylwin, las

diferencias ideológicas entre unos y otros perdieron toda relevancia práctica, con lo que, en virtud de ello, se formó una especie de partido transversal de administradores y tecnócratas normalmente de origen mesocrático, cuyo interés consistía en gestionar el modelo neoliberal, visualizando al Estado, en el que aspiraban mantenerse a cualquier precio, como un mero botín pagador. En tales condiciones generaron sus respectivas clientelas, proporcionándoles cargos menores en la administración pública y municipal a su cada vez esmirriada militancia partidaria; y a otros sectores de la población –cuyos votos eran requeridos para perpetuarse en el gobierno–, distintos favores burocráticos.

Bajo las administraciones de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos esta tendencia se consolidó. Entonces, sobre todo, los personajes provenientes de la antigua izquierda –muchos de ellos antes ultrarrevolucionarios– aspiraron a vivir en los barrios acomodados y a mimetizarse con los sectores que los habitaban. Quisieron tener casa en Cachagua y usar ropa de marca, como era propio de los empresarios y políticos de la derecha, con los cuales empezaron a anudar relaciones. A decir de un analista, era «la época en que [tales exizquierdistas] bailaban juntos [con representantes de la derecha] para la Teletón, que armaban transversales sociedades de asesoría comunicacional, que se visitaban mutuamente y cuando, más de alguno, empezó a ir a los matrimonios de los hijos de los otros. Otros pocos, incluso, se emparentaron».⁸⁷

Esteban Valenzuela, en su libro *La conversión de los socialistas chilenos*, se refiere a los cambios culturales que, en la dirección indicada, se dieran al interior del Partido Socialista. Valenzuela describe como, incluso antes de 1990, los dirigentes de dicho partido cambiaron «su forma de pensar, de vestir [...] el modo de ser».⁸⁸

Como parte de esa evolución, en los años siguientes, ya bien avanzado el proceso, no pocos miembros de la clase política concertacionista empezaron a integrarse a los directorios de los grupos económicos, que los consideraron útiles a los efectos de mantener

⁸⁷ Edison Ortiz: «Un cuarto de siglo después: La retórica de la transición en bancarrota», *El Mostrador digital*. <<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/11/un-cuarto-de-siglo-despues-la-retorica-de-la-transicion-en-bancarrotas/>>, 11 de marzo de 2016.

⁸⁸ Esteban Valenzuela: *La conversión de los socialistas chilenos*, ed. cit., p. 18.

contactos e influencia sobre los gobiernos y sus partidos, dando así lugar a una verdadera simbiosis. Otras formas adoptadas por este fenómeno consistieron en la formación por parte de la tecnocracia concertacionista de empresas consultoras que vendían sus servicios tanto al poder económico como al Estado. En otros casos crearon empresas de *lobbistas*, de hecho, al servicio del primero, cuyo epítome fuera la de Enrique Correa. No faltó la fundación de variados centros de estudios, normalmente financiados por dichas empresas y también con aportes europeos. Muchas veces tales centros servían a la tecnocracia concertacionista a los fines de dar empleo transitorio a su gente más calificada, la que quedaba a la espera de puestos mejor remunerados en el Estado o en los directorios de las grandes empresas. Lo dicho, en fin, era parte del proceso de articulación entre el gran capital y la clase política concertacionista y sus tecnócratas, relación que cada vez se pareció más a un subcontrato, lo que ciertamente le dio fuerza al modelo neoliberal.

La malla de redes que así se fue formando entre ese numeroso sector político y tecnocrático, que tenía su núcleo en el partido transversal de la Concertación, llegó a constituir un verdadero estrato social cuyo interés, como hemos dicho, radicaba en el acceso a los cargos de la alta administración del Estado, fuera en sus aspectos políticos como tecnocráticos, desde donde sus miembros amarraban vínculos con las empresas del gran capital, a veces circulando entre el sector público y el privado; y otras veces, como dijimos, formando sus propias empresas de servicios (consultoras, asesorías comunicacionales, lobbistas, etc.) que vendían sus servicios al megaempresariado.

De este modo, se llegó a conformar lo que algunos han denominado como una «burguesía fiscal», altamente endogámica, incluso de fuertes tendencias nepotísticas. El poder de esta especie de «nueva clase» no radicaba en la economía, sino en la política, particularmente en su capacidad para asegurarle al gran capital nacional y extranjero —a través de los partidos de la Concertación en el gobierno (y después mediante la Nueva Mayoría)—, la «paz social» y el «orden» que aquellos requerían, impidiendo así todo cuestionamiento desde abajo a los esquemas neoliberales. Dicho de otra forma, el poder de la «nueva clase» radicaba en su capaci-

dad para mantener tranquilos a los estratos subalternos, lo que la derecha no podía hacer por sí misma, ni aun a través de su total control de los medios de comunicación, ni menos a través del populismo conservador de la llamada «UDI popular».

Ciertamente, para cumplir sus funciones, la «nueva clase», que controlaba el Gobierno, requería hacer concesiones menores a los estratos populares, sea a través del gasto social u otras medidas legislativas; concesiones que, en todo caso, no debían alterar el modelo a través del cual el gran capital nacional y extranjero dominaba al país. En ese rol, los partidos de los cuales este segmento social era parte, a contrapelo de su práctica real, debían autopresentarse como «progresistas», «democráticos», e incluso, como «populares» o de «izquierda».

La derecha, en virtud de su incapacidad para controlar por sí sola a las clases subalternas (como no fuera a través de la dictadura militar que había quedado atrás), necesitaba vitalmente a la «nueva clase», tanto como esta necesitaba a la derecha, sin cuya soterrada alianza no podría satisfacer sus intereses corporativos. En tal sentido, se podría decir que la conformación de dicha nueva clase y su imbricación orgánica con el gran capital representan la clave para entender la transición chilena, la que en modo alguno consistió en avanzar desde la dictadura a la democracia, sino en una modificación –importante, sin dudas– de la forma de dominación del capital nacional y extranjero sobre el país.

Debido a que en el plano político institucional este nuevo sistema de dominación suponía la existencia de dos coaliciones que, administrando el mismo modelo, se sucedían en el gobierno, las elecciones desempeñaban en él un papel importante. A través de estas se dirimía cuál de las dos coaliciones controlaba el Ejecutivo y gobernaba durante un periodo determinado, aunque siempre manteniendo los consensos básicos con la otra.

Este mecanismo se volvió muy relevante a los efectos del control del conjunto de la clase política por parte del gran capital. Ello operó por la vía del financiamiento del gasto electoral de sus dos alas. Téngase en cuenta que las campañas electorales en Chile están entre las más caras del mundo, por cuanto tienen una lógica totalmente mercantil. Su ámbito es un mercado en el cual hay que vender al público un producto, que es la figura de un candidato. En este sentido, como se señalara en un artículo de prensa, «el

mercado electoral no es diferente al mercado de bienes y servicios. Los productos más vendidos son aquellos que más se vocean o pregonan. Los que más aparecen en los medios de comunicación, en los letreros luminosos o en los carteles que invaden los espacios de la ciudad. Los candidatos son productos arrojados a ese mercado,⁸⁹ y su presencia en él es extraordinariamente costosa.

De allí la creciente necesidad de los políticos de la Concertación –al igual que los de la derecha– de acudir a las grandes empresas para solicitarles su contribución al financiamiento de sus campañas electorales, de cuyo éxito dependerá tanto su permanencia en el gobierno y en la administración, como su presencia en el Parlamento. Dicha práctica originariamente era privativa de los partidos de la derecha, pero ahora se fue volviendo transversal. El resultado de ella fue simple: la conversión del conjunto de la clase política, salvo excepciones, en personal subcontratado por el capital monopólico, con su correlato, el enfeudamiento de los partidos a dicho capital. Tal resultado terminó siendo inevitable si se tiene en cuenta que va contra toda lógica que el megaempresariado traspasara, a cambio de nada, miles de millones de pesos a los políticos. No es esa su racionalidad intrínseca. Si procedía a financiar a la clase política en su conjunto, era por los imperativos de su reproducción ampliada y no por mera filantropía.

La estrecha imbricación que se fue produciendo entre los grupos del gran capital y la «clase política» explica por qué las empresas estatales formadas durante decenios por el modelo ISI, y que luego fueron entregadas a privados a precios irrisorios por la dictadura cívico militar, no se recuperaron cuando retornó la «democracia», como lo prometiera el programa de la Concertación. Explica también por qué se mantuvieron las AFP, que hacen cuantiosas inversiones con los fondos que mes a mes obligatoriamente les deben traspasar las personas (10 o 12 % de su salario), las cuales en promedio recibirán al momento de jubilar una pensión menor al sueldo mínimo. Y también explica que se mantuviera la privatización de la salud y la existencia de las ISAPRES, que tienen altísimas rentabilidades, que cubren a las personas jóvenes y sanas, de

⁸⁹ Manuel Acuña Asenjo: «Invitación a un debate sobre construcción de una nueva estrategia», *Rebelión.org*, <<https://rebelion.org/invitacion-a-un-debate-sobre-construccion-de-una-estrategia/>>, 21 de marzo de 2016.

ingresos medios altos, y cobran montos altísimos a las enfermas (preexistencias) y ancianas, cuando no las excluye. Igualmente explica que el mar haya sido privatizado (con votos de la Concertación) quedando en manos de siete familias; que el agua siga privatizada, lo que ocurre en muy pocos países del mundo; que la educación en su mayoría esté gestionada por un empresariado educacional subvencionado con dineros del Estado; que los grupos económicos reciban subsidios del Estado, como fuera el caso de las forestales del grupo Matte, o las clínicas privadas, entre otros; que la reforma de la ley laboral no contemple la negociación colectiva por rama, y quizás ni el derecho a huelga efectivo; que el 1 % del país tenga el 34% del PIB, etcétera.

Las elecciones

En ese contexto, es necesario insistir en el tema de las elecciones, por cuanto en el Chile neoliberal de la Concertación, las elecciones adquirieron un particular sello, que iba más allá del arriba referido *marketing* y su omnipresente propaganda subliminal. A ese particular sello se agregó la importancia que fue adquiriendo el clientelismo. Es cierto que este viene de antigua data –quizás desde fines del siglo *xix*–, aunque disminuyó, en todo caso, durante los periodos de politización de los estratos populares.

Bajo la Concertación el clientelismo se manifestó con particular fuerza, siendo practicado sobre todo por los partidos de la derecha, especialmente por la UDI, la que se valiera a los efectos de su presencia en las municipalidades, donde se había instalado durante la dictadura, montando allí poderosas redes clientelares. El objetivo de fondo que desde entonces este partido persiguió, más allá de proyectarse como la fuerza predominante en el país y en la derecha, había consistido en mantener el control sobre las clases subalternas, en especial de sus sectores más pobres, a los que aspiró, no sin éxito, a despoltizar.

El mecanismo operó y opera a través de redes que, por un lado, suponen densificar el tejido social de los estratos más postergados –centros de madres, clubes deportivos, etc.–, y, por el otro, disponer de un cierto control sobre el poder local, esto es, de las

municipalidades. Bajo tales supuestos, una parte importante de los recursos económicos de los municipios tienden a ser empleados en apoyar financieramente a las organizaciones populares de base social existentes en la circunscripción, estableciendo con ellas los correspondientes vínculos, incluso personales, a cambio de lo cual los beneficiarios suelen entregar su apoyo electoral –sea en elecciones municipales, parlamentarias o presidenciales– a la persona y/o partido que controla el municipio respectivo. Aníbal Pérez, en un libro titulado *La UDI tras el telón*, investigó en detalle el fenómeno tal como se ha dado en el municipio de Viña del Mar, y demostró que dicho fenómeno tiene un carácter sistémico.⁹⁰

Por cierto, los partidos concertacionistas no son inmunes a tales prácticas, aunque en proporciones menores. Estas, aparte de incentivar la corrupción en todos los niveles, se han convertido en una forma renovada de cohecho, ampliamente extendida. Formas análogas consisten en pagar –por parte de candidaturas de la derecha– las cuentas de luz y agua adeudadas por los pobladores a los que se les solicita el voto, a lo que se añade la entrega de regalos diversos y rifas de objetos entre los asistentes a sus concentraciones, etc. De este modo, los partidos de derecha captan una parte significativa de su apoyo electoral entre la base popular, prefigurando así una fuerte distorsión de la ciudadanía, todo lo cual contribuye a convertir a la «democracia» en un procedimiento formal que legitima la dominación de la oligarquía plutocrática, que es lo que caracteriza a la llamada «transición».

La corrupción

Correlativamente con los fenómenos referidos, en el país se fueron produciendo numerosos casos de corrupción, de clara naturaleza sistémica, los que afectaron tanto a la alta burocracia del Estado como a los grupos económicos. Entre los más conocidos figuran el llamado de «sobresueldos», el de MOP-GATE, el «caso coimas» y el

⁹⁰ Aníbal Pérez: *La UDI tras el telón. Agitación social, lavinismo y clientelismo. El caso de Reginato en Viña del Mar*, Ed. América en Movimiento, Valparaíso, 2016.

de Inverlink, este último de febrero de 2003. Como se comprobaría años después, ellos no constituían sino la punta del iceberg.

La evidencia de la mencionada corrupción dio lugar durante la administración de Ricardo Lagos a una emergente crisis de legitimidad del sistema institucional y de los partidos. Ante ello, la oposición de derecha, encabezada por la UDI y su entonces máximo dirigente, Pablo Longueira, lejos de aprovechar la coyuntura para desprestigiar al Gobierno y a la Concertación, y consciente de la fisura que se abría bajo los pies de todos, acudió en su ayuda. Entonces, en La Moneda se verificaron negociaciones directas entre Longueira y el jefe del Estado. Como consecuencia de ellas se acordó impulsar una agenda orientada a detener los recurrentes escándalos de corrupción. Con tales propósitos se creó un Comité Asesor en Transparencia y Probidad Pública, en el cual participaron prohombres tanto de la Concertación como de la derecha.

Dentro de esa agenda adicionalmente se acordó avanzar hacia una reforma a la ley electoral, la que enviada al Congreso, fue aprobada en el mismo 2003. Ella reemplazó lo que algunos denominaran como el sistema del maletín, que hasta entonces operaba sin regulación legal, el cual consistía en la entrega de dinero por ciertas grandes empresas a aquellos personeros políticos a quienes decidían apoyar. En reemplazo de este sistema, la nueva ley estableció un mecanismo mediante el cual las empresas podían donar dinero a los partidos y financiar sus campañas electorales, descontándolo de impuestos, operando a través del Servicio Electoral (SERVEL). Este recibiría esos aportes y los traspasaría a los beneficiados, los que supuestamente ignorarían el origen de aquellos. De tal modo quedaba legalizada la dependencia financiera de la clase política respecto del gran capital. Así, lo que antes era un hecho, ahora pasó a estar dentro del Derecho. La tercerización de la clase política respecto del megaempresariado pasó, pues, a formar parte del sistema institucional.

Los grupos económicos se mostraron muy activos sobre la materia. Años después, el vespertino *La Segunda*, con el título, «Quiénes son los mecenas de la política chilena», dio a conocer un estudio sobre el financiamiento de los distintos sectores de la clase política por los grandes grupos del capital local. El estudio sostuvo que entre esos financistas empresariales se encontraban «grupos económicos

cuyos rostros más visibles [eran] la familia Luksic, Eleodoro Matte y Álvaro Saieh, quienes repartían recursos casi en todos los partidos del abanico, a excepción del PC». El artículo de *La Segunda* agregaba que la familia Solari; Horst Paulmann, dueño de Cencosud, y el grupo Angelini sobre todo apoyaban a «algunos políticos demócratas cristianos», mientras que Carlos Cardoen hacía lo propio con Juan Pablo Letelier y, por su intermedio, con otros políticos del Partido Socialista de la sexta región. A su vez, el grupo Penta –siempre según el mencionado artículo– se concentraba en financiar a la UDI; el grupo Luksic se inclinaría más por financiar a los partidos de la Concertación, y, en fin, Soquimich se distinguía por repartir sus dineros entre todos (con la excepción señalada arriba, o sea, del Partido Comunista y quizás uno que otro más).⁹¹ Lo señalado, claro está, era estrictamente apegado a la ley. Pronto, en forma paralela, se generalizaría otro mecanismo de traspaso de dineros del gran capital a los partidos, esta vez ilegal por cuanto implicaba fraude al fisco. Consistió en las llamadas «boletas ideológicamente falsas», a las que nos referiremos en el próximo capítulo.

En otro plano, en el 2004 el Senado de los Estados Unidos hizo público un informe que reveló la existencia de millonarias cuentas secretas que Pinochet tenía en el Banco Riggs. Esa información luego fue seguida por ciertas investigaciones llevadas a cabo por el Consejo de Defensa del Estado, las que encontraron numerosos depósitos bancarios y de inversión en paraísos fiscales a nombre de Pinochet, de miembros de su familia y de cercanos colaboradores. El desprestigio del exdictador llegó entonces hasta sus propios seguidores, mientras que la corrupción se convertía en un tópico.

La reforma constitucional de 2005

Los desarrollos arriba señalados representaron un punto cualitativamente superior de la fusión orgánica verificada entre los partidos, sus tecnocracias asociadas y los grandes negocios, todos bajo patrocinio internacional, confundidos en un interés común,

⁹¹ Viviana Candia: «Quiénes son los mecenas de la política chilena», *La Segunda*, <<http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/04/737898/los-mecenas-de-la-politica>>, 14 de abril de 2012.

siempre disimulado u ocultado al conjunto del país por la retórica de los políticos.

En tales circunstancias dejaron de ser funcionales los llamados «enclaves autoritarios» de la Constitución de 1980 hasta entonces vigentes. Entre otros, lo fueron los senadores designados y por derecho propio, el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el enorme poder del Consejo de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; todos «enclaves» consagrados por la Constitución de 1980, y que no fueron incluidos en su reforma plebiscitada en 1989.

Dichos «enclaves» fueron mantenidos en 1989 no por casualidad, sino en virtud de que representaban otros tantos mecanismos disuasivos dirigidos a garantizar el poder del gran capital y de la derecha frente a cualquier «desconocida» que pudieran impetrar los gobiernos concertacionistas o algunos de las colectividades que los integraban. Sin embargo, la adhesión plena de tales gobiernos al neoliberalismo y la fusión orgánica del conjunto de sus partidos y personeros con el gran capital a través de los lazos descritos en la páginas precedentes, hicieron que tales enclaves no solo se volvieran innecesarios, dejando de tener razón de ser, sino todavía más, que se rebelaran como un obstáculo para la consolidación de los procesos en curso. Esto es, para la fusión orgánica de la política y los grandes negocios, con su correlato, los consabidos consensos universales frente a las cuestiones de fondo. De allí la necesidad de eliminar tales enclaves. Esto fue lo que se realizó durante la última parte del gobierno de Ricardo Lagos a través de una nueva reforma a la Constitución de 1980.

Así, luego de su correspondiente aprobación en el Congreso, el 17 de septiembre de 2005, el presidente Lagos procedió a firmar un texto constitucional que reformaba varios puntos de la Carta de 1980. Como consecuencia se eliminaron los senadores vitalicios y designados; se suprimió el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad; se puso fin a la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los que podrían ser removidos por el presidente de la República mediante decreto fundado, el que previamente debía ser informado al Senado; y se transformó al Consejo de Seguridad Nacional en un órgano

meramente asesor que no podría ser convocado por los comandantes de las ramas de la defensa. A ello se agregó que el mandato presidencial se redujo a cuatro años. Haciendo mención a estas reformas, el presidente Lagos dijo: «tenemos hoy por fin una Constitución democrática». Pero más allá de la retórica de los políticos, todo indica que lo obrado obedecía a la racionalidad indicada arriba. Incluso más, es posible pensar que hubo una conexión lógica entre la mencionada reforma a la Constitución y la legislación sobre financiamiento de los partidos aprobada el 2003; cuestión que pareciera clara si se interpreta esa legislación como el eslabón final del proceso de garantía al gran capital, el que terminó siendo legalmente reconocido como financista de los actores políticos. En las circunstancias que se vivían –con la adicional conversión de casi toda la clase política al neoliberalismo–, esto significa que la mencionada dependencia financiera, a la hora de garantizar al gran capital, resultaba mucho más eficaz que los «enclaves autoritarios», los que eran un factor de disenso que había que remover, tal como efectivamente se hizo.

Todo lo dicho evidencia el carácter plutocrático del régimen político implantado durante la «transición», a despecho de ciertas formalidades propias del régimen demoliberal. En resumen, una democracia de fachada orientada a encubrir el dominio del gran capital local y transnacional. Esta constatación lleva a concluir que no existió en Chile una transición a la democracia. Lo que hubo fue un cambio de modalidad en la dominación del capital monopólico. En efecto, por obra de la intervención norteamericana, se pasó desde la dictadura castrense, que ya no solo no era necesaria sino también contraproducente, a una democracia de fachada que desembocó en la mediación del dominio del gran capital nacional y extranjero por parte de una clase política subcontratada, un sector de la cual era de origen mesocrático y que antes había tenido posiciones ultrarrevolucionarias y críticas al capitalismo (la izquierda conversa), o, a lo menos, había sido cepaliana y partidaria del ISI.

En estas nuevas condiciones, la clase política siempre responderá ante sus financistas y no ante sus electores, los que, cada vez más desinformados y carentes de cultura –cuando no clientelizados–, podían ser engañados fácilmente por una multimillonaria y apabullante publicidad financiada por el propio capital.

CAPÍTULO 25

Hacia la crisis

*Hoy resulta que es lo mismo
Ser derecho que traidor
Ignorante, sabio o chorro
Generoso o estafador.*

Enrique Santos Discépolo

Al comenzar el siglo ^{xxi}, y aun antes, como consecuencia de los fenómenos descritos en el capítulo anterior, la mayoría de la ciudadanía ya estaba desencantada de la Concertación, al tiempo que paralelamente comenzaba una soterrada deslegitimación del sistema institucional. La población creyó entonces percibir que los políticos, desde ya los concertacionistas, perseguían a través de sus quehacer más bien sus intereses personales, particularmente su enriquecimiento, y no los del país; aunque todavía faltaba lo peor, como será el conocimiento por el hombre común del financiamiento por el gran capital, de los partidos, y de sus campañas electorales, con su secuela: la práctica generalizada de las «boletas ideológicamente falsas» y las correspondientes acusaciones de cohecho, que después se harían públicas.

En todo caso, los escándalos de corrupción, referidos en el capítulo anterior, no dejaron de tener ciertas consecuencias dentro de la propia Concertación, las que se tradujeron en un sedicente descontento entre algunos de sus representantes. Prueba de ello fue la entrevista que el 27 de diciembre de 2006 concediera a *El Mercurio* Jorge Schaulsohn, destacado parlamentario del Partido por la Democracia (PPD). Allí este afirmó que entre ciertos funcionarios de gobierno que tenían facultades para disponer de recursos públicos existía una verdadera «cultura de la corrupción». Schaulsohn sería expulsado de su partido; luego junto con Fernando Flores, formaría Chile Primero, agrupación que se desplazó hacia la derecha.

En ese contexto de desprestigio no solo de la Concertación, sino también de la política misma, emergió el liderazgo carismático de Michelle Bachelet, la que, ante los ojos del hombre común, parecía distinguirse del resto de las figuras públicas. En tales circunstancias, los partidos concertacionistas concluyeron en que si querían mantenerse en el control del gobierno administrando el modelo neoliberal y colocando a su gente en las diversas instancias de la administración estatal para beneficiarse de las prebendas fiscales, debían proclamarla como su candidata para los comicios presidenciales de 2005. Y así lo hicieron.

A la fecha Bachelet venía experimentando una ascendente carrera política. En 1979 había regresado al país desde su exilio en la República Democrática Alemana; pronto tomó parte activa en el quehacer de su partido, el Socialista, situándose en sus posiciones más de izquierda, aunque todavía sin una figuración muy destacada. El gran cambio vino después, durante los años noventa, cuando ya se había restaurado el régimen civil. Entonces Bachelet ingresó a cursar un diplomado en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), dependiente del Ministerio de Defensa, cuyos profesores y alumnos eran mayoritariamente militares incondicionales partidarios de Pinochet. Esos estudios la catapultaron. Cuando en ellos logró el primer lugar de la promoción, le fue otorgada la beca de honor Presidente de la República, lo que le permitiría llevar a cabo el curso de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa, que tenía su sede en Washington D. C. Este organismo había sido fundado en 1962, pocos meses después del fracaso de la invasión a Bahía Cochinos. Su objetivo era formar tanto «líderes civiles» como militares al servicio de lo que los círculos de poder de los Estados Unidos denominaban como «interamericanismo», esto es, el control estadounidense de América Latina con la decisiva colaboración de líderes nativos. Las clases del organismo eran impartidas exclusivamente por profesores estadounidenses, tanto militares como civiles. Allí, con los instructores del Norte, Bachelet cursó estudios en 1997 junto a treinta y cinco condiscípulos provenientes de distintos países latinoamericanos, principalmente uniformados, pero también algunos civiles.

Los estudios realizados por Bachelet en las mencionadas entidades militares favorecieron su posterior incorporación al Ministerio

de Defensa en la labor de asesora. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos fue nombrada ministra de Salud, desde donde luego pasó a desempeñarse como ministra de Defensa. En ambos cargos adquirió gran visibilidad pública, y sobresalió, además, por lo que se consideró era su cercanía con la gente. En tal contexto asumió la candidatura presidencial concertacionista para los comicios de 2005.

Ya revestida de la candidatura, Bachelet levantó durante su campaña presidencial la propuesta sobre un «gobierno ciudadano», no manejado por los partidos, planteamiento que respondía al generalizado desprestigio de la Concertación, de cuyos personeros convenía apartarse si se quería ganar. Otra idea fuerza postulada entonces por ella fue la referente a la protección social, la cual parecía diferir de la lógica del capitalismo salvaje en curso. Los comicios presidenciales, verificados en dos vueltas —la primera el 11 de diciembre de 2005, y la segunda, el 15 de enero de 2006—, le dieron el triunfo.

Apenas iniciada su administración, estalló la así llamada «revolución pingüina», que fue impulsada por los estudiantes secundarios quienes, a través de grandes movilizaciones y tomas de colegios, pretendían que se pusiera fin a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) dejada por la dictadura. Esta, de hecho, consagraba el lucro en el sistema educacional. Con el propósito de detener el movimiento, el gobierno de Bachelet, basándose en los estudios de una «comisión de expertos», promulgó la Ley General de Educación (LEGE), la que suscitó un apoyo transversal entre la clase política, aunque no consistió sino en un maquillaje de la LOCE. Los estudiantes se sintieron engañados. Su movimiento, con mucha más fuerza, reemergerá el 2011, incluyendo en él a los universitarios, quienes pasarían a ocupar el lugar principal.

La revolución pingüina, con sus correspondientes demandas y movilizaciones, vino a representar un emergente cuestionamiento a una de las caras más visibles del neoliberalismo en curso: el sometimiento de todo a la lógica de la rentabilidad del capital.

En cuanto al tema de la protección social, las medidas implementadas por el gobierno de Bachelet fueron muy modestas. Aparte de las relativas al gasto social instauradas desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, al respecto sobresale la promulgación

de la ley que estableció la pensión básica solidaria (PBS). Acorde con ella, el Estado entregaría la mencionada pensión a aquellas personas que, teniendo sesenta y cinco años de edad o más, no hubieran cotizado durante su vida en ningún sistema previsional. El monto de la pensión, sin embargo, no alcanzaba a la mitad del salario mínimo. A pesar de ello, el Gobierno consideró la medida como un logro significativo, materialización de su concepto de «protección social». Entretanto, de manera temprana se había diluido el «gobierno ciudadano» inicialmente propugnado por Bachelet. En su lugar, para abordar de mejor forma los problemas que enfrentaba, llamados por la misma presidenta, los viejos políticos concertacionistas de los que Bachelet durante su campaña presidencial se proclamara ajena, retornaron a ocupar los principales cargos del Ejecutivo.

Otro de los problemas importantes enfrentado por el gobierno de Michelle Bachelet durante esta su primera administración fue el relativo a la cuestión mapuche. Como es sabido, la esencia del problema consistía en la ancestral lucha de este pueblo por recuperar sus tierras (y su autonomía), las que durante el siglo ^{xix} el Estado chileno les había arrebatado mediante la guerra. En los años de la dictadura cívico militar, gran parte de esas tierras había pasado a los conglomerados económicos, principalmente a las empresas forestales. Cuando luego del retorno al régimen civil ciertos grupos mapuches comprobaron que nada cambiaría al respecto, comenzaron a llevar a la práctica, cada vez más atentos frecuentes contra instalaciones y medios de transportes de las mencionadas empresas. La respuesta implementada frente a ello por el Estado chileno y sus gobiernos fue la militarización de la zona, lo que vino unido a fuertes represiones, traducidas no solo en el encarcelamiento de muchos líderes mapuches, sino también en muertes. El gobierno de Michelle Bachelet, siempre buscando dar garantías a la derecha y al gran empresariado –que exigían fuera aplicada en la Araucanía la Ley Antiterrorista y la de Seguridad Interior del Estado–, se mantuvo rigurosamente dentro de esa misma lógica. Desde ya aplicó la Ley Antiterrorista. La consecuencia más extrema de esta política estuvo constituida por la muerte en manos de fuerzas represivas de varios comuneros mapuche. Así, el 29 de agosto de 2006 falleció baleado por carabineros Lorenzo Collihuín, de setenta y un años; el 3 de enero de 2008 encontró

análogo fin, siempre baleado por Carabineros, Matías Catrileo; el 30 de marzo del mismo año Johnny Cariqueo, joven de veintidós años, recibió una golpiza de parte de Carabineros luego de la cual alegó dolores de pecho: a las cuarenta y ocho horas falleció de un ataque cardíaco después de que se le negara atención médica; en tanto que el 12 de agosto de 2009 Jaime Mendoza Collío falleció impactado por una bala del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) cuando participaba de una toma pacífica de tierras.¹

La aplicación de la Ley Antiterrorista en la Araucanía había comenzado en 2002, bajo la administración de Ricardo Lagos. Junto con la interposición de querellas en contra de la Coordinadora Arauco-Malleco, que dio lugar al encarcelamiento de más de veinte líderes mapuches, la represión durante dicho gobierno se tradujo en la muerte de varios comuneros de este pueblo. Fueron los casos de Alex Lemun, de diecisiete años, fallecido el 11 de diciembre de 2002; Jorge Sáez Marihuan, de veintisiete años, que fue encontrado muerto en esta misma fecha después de permanecer seis días desaparecido; Julio Huentecura Llancaleo, de treinta años, muerto el 16 de septiembre de 2004; y Zenón Díaz Necul, que fuera asesinado el 10 de mayo de 2005.² Pese a estas represiones, la lucha del pueblo mapuche no cesaría.

Otro aspecto importante de la primera administración de Michelle Bachelet fue el referente a los temas medioambientales. Sus decisiones en estas materias, al igual como ocurriera en otros rubros, favorecieron al gran capital nacional y transnacional. Quizás el aspecto más relevante sobre el punto se refirió a la construcción de centrales termoeléctricas. Entre 2006 y 2010, su gobierno aprobó la construcción de cuarenta y dos centrales, varias de ellas a carbón, las cuales normalmente respondían a inversiones extranjeras, donde destaca la transnacional estadounidense AES Gener. Esas centrales estaban en buena medida destinadas a proporcionar energía a yacimientos mineros, los que igualmente se hallaban en manos de capital foráneo. Muchas de tales centrales terminaban

¹ Vanesa Vargas Rojas: «El legado de sangre mapuche que dejó Bachelet», *El Desconcierto.cl*, 11 de noviembre de 2013, <<https://www.eldesconcierto.cl/2013/11/13/el-legado-de-sangre-mapuche-que-dejo-bachelet/>>.

² *Izquierda Diario*, 16 de noviembre de 2018. <<http://www.laizquierdadiario.cl/15-mapuches-asesinados-en-los-gobiernos-de-la-Concertacion-y-la-derecha>>.

convirtiendo sus territorios colindantes en «zonas de sacrificio», que generaban serios problemas de salud entre su población, a la par que desaparecía el agua como recurso, todo lo cual provocó recurrentes protestas.

Una de las situaciones que, al respecto, suscitó mayor resistencia fue el denominado caso Campiche, generado a partir de la construcción de una central termoeléctrica altamente contaminante en la quebrada de ese nombre situada en la Quinta Región. La central sería construida por la transnacional estadounidense AES Gener. Pero considerando las graves consecuencias medioambientales que traería consigo, la Corte Suprema, luego de varias protestas sociales, decretó la paralización de la obra. Frente a ello, el embajador de los Estados Unidos hizo gestiones ante el Gobierno dirigidas a resolver el problema. Bachelet aceptó sus consideraciones de inmediato y, ante las dificultades que le ponía la Contraloría General de la República, para solucionar favorablemente la cuestión optó por cambiar mediante decreto el uso del suelo donde se levantaba la central, la que así pudo terminar de construirse. De tal modo, quedaba anulada la decisión de la Corte Suprema, demostrándose de paso que el embajador norteamericano, con solo presionar al gobierno «chileno», tenía sobre los asuntos internos del país mayor capacidad decisoria que el Poder Judicial, cuyas resoluciones, de hecho, podía anular.³

El Gobierno –que en ningún momento tomó alguna medida que perjudicara los intereses del gran capital nacional y transnacional– terminaría su periodo sin pena ni gloria. Al poco tiempo de finalizado su mandato, Michelle Bachelet fue nombrada como directora de ONU Mujeres.

Ante los comicios presidenciales de 2010, la Concertación levantó como candidato a uno de sus principales prohombres, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien había sido presidente de la república durante la segunda mitad de los años noventa. El desprestigio concertacionista quedó entonces del todo de manifiesto, particularmente cuando Frei en la primera vuelta obtuviera solo un 29,6 % de los votos y fuera derrotado cómodamente por el magnate Sebastián Piñera quien, apoyado por la derecha, también se impuso en la segunda vuelta.

³ Para más detalles sobre el caso Campiche, véase Luis Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, ed. cit., pp. 363 y ss.

Piñera, al igual como lo hiciera Jorge Alessandri Rodríguez cincuenta años atrás, instaló en su gabinete y en otros importantes cargos del Estado, a altos directivos de los más poderosos grupos económicos. De tal manera, a su juicio, se conformaría un «gobierno de excelencia».

Pese a ello, el régimen piñerista administró al país de un modo que no se distinguió mucho de como lo habían hecho sus predecesores, al punto de que algunos lo denominaron como el quinto gobierno de la Concertación. No obstante, cabe reconocer que en ciertas cuestiones puntuales fue más allá, como ocurriera con el cierre del penal de Cordillera donde, hasta el momento, en condiciones privilegiadas, se hallaban algunos de los principales criminales de la dictadura cívico militar. Estos debieron ser trasladados a otro lugar de reclusión. A lo dicho se agregó la condena que Piñera hiciera a lo que llamó como «cómplices pasivos» de la dictadura, entre quienes, obviamente, no solo figuraba gente de sus filas, sino también del Partido Demócrata Cristiano, el que, al menos hasta 1976, apoyara al régimen pinocheteano, al cual, por lo demás, ayudara a instaurar, según viéramos en un capítulo anterior.

Otra medida importante llevada a cabo durante la administración de Sebastián Piñera fue la reforma al sistema electoral, que puso fin al sufragio obligatorio y a la inscripción voluntaria, los cuales fueron reemplazados por la inscripción automática y el voto voluntario. A ello se añadió la Ley de Primarias, que dejó a estas sujetas al SERVEL. En tanto que en el plano social, el Congreso aprobó la Ley de Pos natal, que extendió este beneficio de tres a seis meses, y se hizo extensivo a los hombres. A ello cabe añadir la eliminación del cobro del 7% de cotización en salud a los jubilados cuyos ingresos fueran inferiores a \$255 000. Todas estas fueron medidas que los gobiernos de la Concertación no se atrevieron a tomar. Ellas, por cierto, no alteraron en nada al modelo neoliberal en curso. Por el contrario, contribuían más bien a legitimarlo.

Por su parte, el megaempresariado y el capital extranjero se sintieron a sus anchas bajo el gobierno de Piñera, lo que llevó a que la inversión privada se viera aumentada. Esto hizo que el crecimiento medio de la economía durante este gobierno superara al obtenido durante el anterior de Michelle Bachelet, aunque ello no alteró en

lo más mínimo las grandes desigualdades sociales existentes en el país, las que incluso se profundizaron. Desde esta óptica, no hubo una diferencia fundamental entre el gobierno de Piñera y los de la Concertación. Esta falta de diferencias confirmó el rasgo más saliente que se verificara en el país en el plano político desde los años noventa en adelante. Esto es, que el modelo neoliberal instalado por la dictadura –que implicaba la dominación de una oligarquía plutocrática– sería gestionado por dos bloques políticos que, según los avatares de los procesos electorales, se sucederían en La Moneda, sin alterar en nada esencial el modelo mismo. Eso fue lo que particularmente se confirmó a partir de 2010.

En el plano internacional, el gobierno de Piñera continuó con el alineamiento pronorteamericano de la Concertación. Así, negoció en secreto el Trans Pacific Partnership propiciado por Washington, tratado que terminaba de entregar el país a las transnacionales, frente a las cuales el Estado chileno carecería de soberanía, más aún cuando dejaba todo contencioso con aquellas bajo la competencia de tribunales extranjeros. Dentro de esa lógica de sometimiento al capitalismo mundial transnacionalizado y al imperialismo, a comienzos de junio de 2013 Piñera acudió a Washington, donde el presidente Barak Obama le encomendó encabezar en la subregión el proceso de fortalecimiento del bloque del Pacífico, a lo que Piñera se comprometió.

Volviendo al plano interno, la reemergencia del movimiento estudiantil en 2011, ahora encabezado por los universitarios, constituyó otro hecho relevante verificado durante el gobierno piñerista. Esta lucha de los estudiantes –que se manifestó de nuevo en grandes movilizaciones callejeras y tomas de locales– interpeló al país con fuerza, más aún cuando vino unida a discursos respaldados no solo ética sino también técnicamente, cuya otra cara era la desconfianza en los políticos. La demanda central levantada por el movimiento fue la del fin al lucro en la educación y la gratuidad de esta; demanda que recibió el apoyo mayoritario de la sociedad chilena. Piñera, por su parte, no cedió ante tales reivindicaciones y, por el contrario, insistió en declarar que la educación era «un bien de mercado». Los estudiantes nada lograrían, al menos por el momento. Los frutos de sus movilizaciones, en todo caso parciales, se verán solo en un futuro no lejano.

Obviamente, el problema aquejaba no solo a la educación universitaria, sino también a la básica y media. En efecto, en 2013, más del 90% de los colegios de la educación particular subvencionada por el Estado cobraba una cuota de dinero a las familias («copago»). Años atrás, en 1993, ese monto era mucho menor: alcanzaba solo al 8%. Pero, ya en 1997, había subido al 32%.⁴ Los movimientos estudiantiles de 2006 y de 2011 respondían a estas realidades, agravadas por el Crédito con Aval del Estado (CAE), instaurado bajo el gobierno de Lagos, medida que, como viéramos, involucraba a los bancos en el negocio de la educación.

Además de los referidos movimientos estudiantiles, durante el gobierno de Piñera cobraron fuerza otros movimientos sociales que expresaron públicamente sus protestas, fuera por problemas medioambientales, regionales, laborales u otros análogos, todo lo cual se tradujo en movilizaciones sociales que enfrentaron a la autoridad por tales conceptos. Entre ellos sobresale el paro de Magallanes, de enero de 2011, el que, en medio de masivas protestas, obligó a la renuncia del ministro de Energía e impidió que el Gobierno alzara el precio del petróleo para la zona. En ese marco Piñera concitó una baja aprobación ciudadana, confirmada por las encuestas de opinión, tendencia que el mandatario intentó revertir utilizando publicitariamente el rescate de los treinta y tres mineros que habían quedado atrapados a gran profundidad en una mina del norte.

Pero la baja aprobación ciudadana no solo afectó al gobierno de Sebastián Piñera. Se extendió también a los partidos, a los políticos en general y a la política, evidenciándose así un fuerte descontento ciudadano y una cada vez más clara crisis de legitimidad del sistema institucional.

La Nueva Mayoría

El descontento social exacerbado bajo el gobierno piñerista pareció evidenciar que la derecha no podría mantenerse por otro periodo en La Moneda. Los partidos de la Concertación estaban conscientes

⁴ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*, ed. cit., p. 149.

de ello, pero comprendían que, dado su desprestigio, no podrían presentarse a los próximos comicios con la misma cara de siempre. El ciclo de la Concertación se había terminado en medio de un profundo escepticismo ciudadano y descrédito de los partidos y de los políticos, los que habían devenido en una verdadera casta que se autorreproducía viviendo de los recursos del Estado (y del megaempresariado, como pronto se comprobará). Ante ese panorama, y careciendo de nuevos liderazgos, las cúpulas concertacionistas tuvieron que convencerse de que requerían acudir de nuevo a Bachelet, quien en su cargo de ONU Mujeres mantenía su aura de impoluta. Al mismo tiempo aceptaron ceder la primera línea de la política a equipos de jóvenes tecnócratas que Bachelet había venido cooptando y que contaban con su total confianza, conocidos como la G-90. Pero aún más, los políticos de la Concertación comprendieron que en las próximas elecciones presidenciales era imprescindible presentarse bajo un nuevo nombre incorporando a la alianza nuevas fuerzas políticas que ya no podrían seguir siendo excluidas. Comprendieron también que se requería sintonizar con el clima crítico y proclive al cambio que los movimientos estudiantiles y sociales en general habían impuesto en el país. Esta orientación de los partidos concertacionistas fue facilitada por la gran transformación que luego de la muerte de Gladys Marín empezó a experimentar el Partido Comunista. El resultado de todo será la conformación de la Nueva Mayoría.

El gran viraje del Partido Comunista

La conformación de la Nueva Mayoría no hubiera sido posible sin el gran viraje adoptado por el Partido Comunista después de la muerte de sus grandes líderes, sobre todo de Gladys Marín. Tal viraje encontró su expresión principal en el XXIV Congreso de la colectividad, verificado entre el 10 y el 12 de diciembre de 2010. En él, el Partido Comunista abandonó subrepticamente la línea política definida por los congresos que celebrara desde 1994 en adelante, sobre todo por el XX, XXI y XXII, fijando en su lugar otra orientación cualitativamente distinta.

El referido cambio consistió en transitar desde la «revolución democrática» antineoliberal encabezada por una alianza de iz-

quierda, hacia una alianza con la Concertación –a la que antes criticara-, todo en vista de la conquista de un “gobierno de Nuevo Tipo”, el que debía hacer reformas (no definidas de manera precisa) conducentes a la realización de la “justicia social”, todo esto sin referencia alguna a la oligarquía, al imperialismo y al neoliberalismo, que siempre constituyeran un tópico relevante en las formulaciones de la colectividad. Esta nueva orientación suponía desahuciar el Juntos Podemos, alianza de izquierda en la que entonces el Partido Comunista participaba, la que en los comicios presidenciales de 2005, encabezada por Tomás Hirsch, obtuviera el 5.4% de los sufragios.

El mencionado cambio de la política del Partido Comunista se percibe con nitidez si se tienen a la vista algunos de los hitos principales en los cuales este, desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, fijó su orientación. En tal sentido cabe tomar como referencia el XX Congreso partidario, celebrado entre el 11 y el 15 de agosto de 1994, en cuya convocatoria el Partido Comunista llamó «a democratizar el país construyendo una alternativa de izquierda para Chile». ⁵ En su capítulo IV, la convocatoria caracterizó en los siguientes términos la realidad nacional:

[...] el sistema económico y político impuesto violentamente por la dictadura permanece en lo esencial. El gobierno de la Concertación no ha provocado el cambio democrático al que se comprometió y su objetivo principal ha sido la consolidación del sistema neocapitalista. La democracia no ha sido lograda y permanece como objetivo a conquistar. *Para lograrlo se requiere de una revolución social*, que provoque el cambio de fondo en la orientación de desarrollo de nuestro país. ⁶

Para estos efectos se requería formar lo que el XX Congreso denominó como «una alternativa de izquierda». El XXI Congreso Nacional del partido, celebrado entre el 22 y el 25 de octubre

⁵ Citado por Iván Lubetic Vargas: «El Partido Comunista de Chile, joven combatiente de 100 años. Ensayos de historia política y social de Chile», Santiago, 2013, inédito, p. 573.

⁶ *Ibidem*, p. 574. Las cursivas son mías.

de 1998, mantuvo la misma política, aunque fue todavía más crítico con los partidos concertacionistas. Sobre el punto en su convocatoria señaló: «luego de ocho años de gobierno de la Concertación, el Estado actual es en su esencia prolongación de la dictadura y expresa el poder del capital financiero transnacionalizado».⁷

En 2001 el Partido Comunista aprobó un nuevo programa, el cual estableció que la contradicción principal del periodo era la que oponía democracia y neoliberalismo. La formulación que hizo al respecto fue la siguiente: «la forma de dominación actual es una nueva fase de desarrollo del imperialismo, sustentada en el neoliberalismo económico. La contradicción principal del periodo es entre esa forma de dominación en su conjunto y el proceso de democratización creciente de la sociedad». El programa adicionalmente estableció que para resolver la mencionada contradicción se requería la unidad de todos los sectores sociales afectados por la dominación en curso, cuestión que se materializaría a través de una «revolución democrática» que debía abrir paso al socialismo. Decía al respecto el programa: «Los chilenos debemos resolver las tareas históricas de una revolución democrática, popular y nacional, anti imperialista y anti oligárquica [...]. Su culminación exitosa despejará el camino hacia el socialismo, en tanto etapa superior de la democracia».⁸

En el XXII Congreso Nacional, verificado entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2002 –que fue el último en el que participó Gladys Marín–, el Partido Comunista mantuvo, y aun acentuó, las posiciones antes dichas. Su convocatoria afirmó: «Hoy está a la vista que el capitalismo es incapaz de resolver los problemas de la humanidad». «Ante el nuevo escenario, cada vez más amplios sectores ven reafirmarse el lema de Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”». En otra parte, muy en el estilo de Gladys Marín, el documento añadió: «hemos ganado la batalla por la mantención y desarrollo del Partido Comunista. No nos hemos sometido y plegado nuestras banderas, reafirmando el carácter rupturista y re-

⁷ *Ibidem*, p. 577.

⁸ Programa del Partido Comunista de Chile, aprobado el 2001, <<http://www.pcchile.cl/documentos/Programa.pdf>>.

belde de nuestra presencia en la sociedad. Este es nuestro triunfo principal en este periodo [...]».⁹

Y al caracterizar la realidad nacional, el XXII Congreso insistió en sostener que «en nuestro país la contradicción principal [seguía] siendo entre neoliberalismo y democracia». Insistió también en que «la Concertación [había] hecho suyo, administrado y profundizado el sistema neoliberal y [en que] esa [era] la razón de su fracaso y [del] riesgo de que la derecha [pudiera] hacerse de nuevo del gobierno».

La tesis del Partido Comunista en cuanto a que la contradicción principal que cruzaba al país era la que oponía democracia y neoliberalismo tenía un significado muy claro: que el contenido de cada lucha democrática era en su esencia antiliberal. Dicho de otra forma, que la democracia en Chile solo era posible en directa relación con el desmontaje del neoliberalismo, precisamente por cuanto había una incompatibilidad insalvable entre ambos. El otro componente de la misma tesis postulaba que resolver esa contradicción era la tarea presente –y no futura– a cuyos fines se requería conformar una alternativa de izquierda, más aún cuando el centro –o sea, la Concertación– se había vuelto un pilar del neoliberalismo, al que durante sus gobiernos había consolidado y profundizado.

Dos años y cuatro meses después de celebrado el XXII Congreso –en marzo de 2005–, moría Gladys Marín. Su ausencia muy pronto marcó un profundo cambio en la colectividad. Este se notó, aunque todavía de manera sutil, en su XXIII Congreso, celebrado entre el 1ro. y el 3 de noviembre de 2006. Si bien es cierto que el evento sostuvo que el Partido Comunista se proponía «alcanzar un nuevo tipo de gobierno» destinado a superar «el tipo de gobiernos neoliberales sustentados por la Concertación y la derecha»¹⁰ y que reconoció que «la contradicción principal del periodo» seguía siendo neoliberalismo y democracia tal como se había definido en los congresos anteriores, sutilmente insinuó algo distinto: la revolución democrática de contenido antiliberal que hasta entonces propugnaba y que era entendida como el objetivo inmediato del partido, se transformaba en un objetivo no inmediato, en la medida en que antes de su consecución había que cumplir una

⁹ Iván Lubetic: «El Partido Comunista de Chile, joven combatiente de 100 años. Ensayos de historia política y social de Chile», art. cit., p. 587.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 594.

etapa previa consistente en la realización de ciertas «reformas democráticas», cuyo contenido no precisó. Esto significaba que tales reformas precederían a la revolución democrática, la que quedaba así postergada para un futuro indefinido. Esto, por otra parte, trajo consigo un inevitable corolario en la política de alianzas del partido, que consistió ya no en conformar una alternativa de izquierda, como la que había impulsado hasta entonces, sino de centro, lo que significaba buscar la unidad con la Concertación, a la que antes el Partido Comunista responsabilizara de haber consolidado y profundizado el neoliberalismo en el país. Se trataba, pues, de cambios de fondo, que no fueron presentados como tales.

El XXIII Congreso formuló en los siguientes términos el objetivo inmediato propuesto por el partido. Este consistía en conquistar «[...] un nuevo tipo de *gobierno que realice reformas profundas de carácter democrático y de justicia social, abriendo la posibilidad de unir a todas las fuerzas políticas y sociales consecuentemente democráticas, de la izquierda y del centro tras ese objetivo*». ¹¹ Claro está, el punto era si el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana –ahora vistos como posibles aliados– ya ampliamente financiados por la oligarquía plutocrática, y que habían consolidado el neoliberalismo en el país de acuerdo con la lógica del capitalismo transnacional y del imperialismo mundial, eran fuerzas «consecuentemente democráticas».

Las ambigüedades o dobles lecturas que podrían hacerse del XXIII Congreso quedaron resueltas en el Congreso siguiente, el XXIV, verificado el 11 y 12 de diciembre de 2010. Casi tres años antes, en enero de 2008, a la edad de noventa y dos años, había fallecido Volodia Teitelboim, el último representante de la vieja guardia.

El XXIV Congreso del Partido Comunista completó el viraje apenas insinuado en el XXIII. Acorde con ello terminó de desaparecer la tesis sobre la revolución democrática antineoliberal y la que sostenía que la contradicción principal que cruzaba al país era la que oponía neoliberalismo y democracia, contradicción que debía ser resuelta en base a una alianza de izquierda. En lugar de ello el Partido Comunista asumió el objetivo de impulsar reformas (tácita-

mente al interior del neoliberalismo, al que, de hecho, se dejaba de cuestionar) para conquistar un «gobierno de nuevo tipo», no con la izquierda sino con la Concertación. El título del informe central al Congreso, titulado «A luchar, a vencer, a conquistar un gobierno de nuevo tipo», reflejaba bien el contenido del objetivo partidario. Dejando de lado la contradicción entre neoliberalismo y democracia, el Congreso postuló además la necesidad de «desarrollar un Partido abierto a procesar la realidad con toda su amplitud y nuevos problemas: los problemas de los adultos mayores, la defensa del medio ambiente, la lucha de nuestros pueblos originarios, *la seguridad ciudadana*, los temas de género y en particular la discriminación en contra de la mujer». Estos serían los temas en torno a los cuales, entre otros, «el Partido debía reorganizar su accionar». Agregó el Congreso: «Teniendo claro los principios fundacionales *podemos cambiar todo lo que sea necesario* para tener un partido más dinámico y atractivo en su vinculación con las masas». ¹² Bajo estos supuestos, prácticamente desaparecieron del centro del discurso partidario las menciones en contra del neoliberalismo, y las relativas a la «revolución democrática», las cuales, obviamente, serían del todo disfuncionales a los fines de llevar a cabo una alianza con la Concertación. En su lugar pasó a hablarse de «reformas» y de la «lucha por la democracia y la justicia social», siempre en abstracto. Por lo mismo, la democracia prácticamente dejó de aparecer en las formulaciones partidarias en contradicción con el neoliberalismo y el gran capital nacional y extranjero, como había sido lo propio de las formulaciones de los congresos anteriores, al tiempo que se prescindía del análisis de clase para caracterizar la realidad nacional. Lo mismo sucedió con el tradicional enfoque partidario que –para fijar su línea– definía antes que nada la contradicción principal del periodo, el enemigo principal y la política de alianzas, siempre en torno al proletariado concebido como la principal fuerza motriz de los cambios. Consecuente con ello también desaparecieron las formulaciones en contra del imperialismo, la oligarquía, y por el socialismo, como no fuera en contadas ocasiones, sin relevancia política –en eventos internos– y como meros saludos a la bandera destinados a mantener la cohesión interna del partido.

¹² *Ibíd.*, p. 596.

Se había consumado así el viraje. Su resultado fue la Nueva Mayoría, con la Democracia Cristiana y con todo el resto de la Concertación, la cual, según hemos dicho, requería de una cara progresista para ganar el gobierno en las siguientes elecciones presidenciales; gobierno que, en fin, también requería disponer de la necesaria gobernabilidad a la que tanto podría aportar el Partido Comunista, sobre todo en un periodo de fuerte insatisfacción ciudadana como el que se vivía.

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría

Aunque dijo ser portadora de «cambios profundos y estructurales», la Nueva Mayoría se agrupó tras un programa de gobierno que, en el fondo, era del todo neoliberal. Tal rasgo, no obstante, se hallaba oculto tras una fachada «progre» que sostenía que Chile estaba preparado para iniciar «un nuevo ciclo político, económico y social» sustentado en una ciudadanía que demandaba cambios. Estos cambios tendrían como elemento central la superación de la desigualdad, cuestión hacia la cual se avanzaría con base en tres grandes reformas: la reforma a la educación, que debía poner fin al lucro y a la segregación, avanzando hacia una educación gratuita y de calidad; una reforma tributaria que debía aportar los recursos necesarios para financiar la reforma educacional; y una nueva constitución, la que debía ser el resultado de un «proceso democrático, institucional y participativo».¹³ Sin embargo, más allá de estas formulaciones, una lectura atenta del programa muestra un contenido esencialmente neoliberal. Su texto es en este sentido inconfundible. Así, por ejemplo, sostuvo que, desde el gobierno, la Nueva Mayoría se proponía «potenciar la competitividad, la productividad y la innovación».¹⁴ Igualmente declaró su «disposición al emprendimiento [y a] impulsar la voluntad asociativa de cientos de miles de emprendedores, grandes y chicos».¹⁵ Con ese propósito dijo propugnar «un Estado moderno que asegure condiciones de

¹³ «Programa de gobierno de Michelle Bachelet», <www.sudere.gov.cl/sala-de-prensa/programa-de-gobierno-Michelle-Bachelet-2014-2018-2>.

¹⁴ *Ibidem*, p. 10.

¹⁵ *Ídem*.

competencia [...]»,¹⁶ entendiendo que ello debía permitir instaurar «una nueva forma de cooperación entre el Estado, la ciudadanía y el mercado». ¹⁷ De este modo se avanzaría hacia «un Estado que asegur[ara] [...] las condiciones apropiadas para el emprendimiento y la inversión privada, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y al desarrollo de tecnologías innovadoras». ¹⁸ Todo, como se ve, dentro de la más estricta ortodoxia neoliberal y proempresarial, y siempre enviando recados tranquilizadores al megaempresariado, el que, como después se supo, financiaba tanto la precampaña como la campaña de Bachelet. No es extraño entonces que el programa subrayara el imperativo de que «los cambios los hagamos con responsabilidad y cuidando la gobernabilidad y el crecimiento»; ¹⁹ es decir, salvaguardando los intereses de los grupos económicos, puesto que el programa estaría «pensado en el bien de todos los chilenos y chilenas», por lo cual no afectaría los intereses de ningún sector en particular, tampoco, por tanto, los del gran capital y menos aún los de las empresas transnacionales que controlaban la economía del país.

En relación con esto último, lejos de insinuar alguna recuperación de las riquezas básicas, el Programa de la Nueva Mayoría postuló la continuación de la política de entrega de los recursos mineros a las transnacionales por la vía de las concesiones ideadas bajo la dictadura pinocheteana (las concesiones plenas). En este sentido, el programa planteaba que, de llegar la Nueva Mayoría al gobierno, se crearían «nuevas normas para el perfeccionamiento del sistema de concesiones mineras, de forma que [el sector minero] foment[ara] la exploración y no se constituy[era] en una potencial barrera a la entrada de nuevos actores». ²⁰ Junto a estos planteamientos del todo abiertos a la entrega de los recursos del país a las transnacionales, el programa de la Nueva Mayoría manifestó su «preocupación ante la urgencia por negociar [por parte del gobierno de Piñera] el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP)». El riesgo principal que el programa dijo ver en ello se vinculaba a que

¹⁶ *Ibíd*em, p. 11.

¹⁷ *Ibíd*em, p. 10.

¹⁸ *Ibíd*em, p. 56.

¹⁹ *Ibíd*em, p. 11.

²⁰ *Ibíd*em, p. 73.

dicho tratado podría traer consigo una «renegociación indirecta de nuestro TLC con los EE. UU.».²¹

En el plano interno, el programa afirmó que el arriba mencionado sistema de concesiones también se mantendría en lo referente a las carreteras. Sostuvo: «Las inversiones de cientos de millones de dólares requeridas para avanzar en esta materia de preferencia deberían ser realizadas mediante nuevas concesiones licitadas y/o con los concesionarios actuales». Se evaluaría, además, si esta modalidad sería «conveniente en hospitales, cárceles, obras de riego, etc.».²² El programa también se refirió a la construcción de nuevos puertos mediante el sistema de concesiones al sector privado, o sea, al gran empresariado. Para fortalecer este mecanismo, el programa afirmó que el gobierno de la Nueva Mayoría crearía una «Agencia de Concesiones con personalidad jurídica propia, competencias y atribuciones. Esta agencia asesorará a los distintos ministerios, servicios y municipalidades que requieran ejecutar proyectos mediante mecanismos de concesiones».²³

En salud, aunque el programa reconoció que «las Isapres discriminaban a las personas según el riesgo que tienen de enfermarse y provocan segregación de la población», no se pronunció por ponerles fin, y se limitó a señalar que, una vez instalado el gobierno de la Nueva Mayoría, se propondría una ley de Isapres, cuyo contenido no precisó. En cuanto a la previsión social, el programa distó mucho de cuestionar a las AFP, las que, como hemos dicho, representan un mecanismo expropiatorio del gran capital sobre los salarios del común de la población, mecanismo que, según el programa de la Nueva Mayoría, sería mantenido. A lo más, al respecto se postuló la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal, que debía permitir una «mayor competencia en los precios» del sector. O sea, la epítome de la lógica mercantil en el terreno previsional.

Por otra parte, el programa definió a la educación como el ámbito en el que se impulsaría el cambio más importante. Esta definición no era casual en modo alguno. En efecto, se vinculaba a la demanda nacional, ampliamente compartida, sobre la gratuidad

²¹ *Ibíd.*, p. 154.

²² *Ibíd.*, p. 76.

²³ *Ibíd.*, p. 77.

de los estudios, y con su correlato, el rechazo del lucro en el sector, demanda que, como hemos visto, había popularizado el movimiento estudiantil de 2011.

En tal sentido, la Nueva Mayoría se esforzó por neutralizar, e incluso cooptar, al movimiento de los estudiantes, y a los amplios sectores sociales que apoyaban sus reivindicaciones, en el entendido de que sin ello no lograría acceder al gobierno. Bajo esa lógica su programa postuló una educación de calidad concebida como un derecho social.

Pero ¿cuál era el verdadero contenido de ese planteamiento? Desde ya, no suponía poner fin al predominante control de la educación por el sector privado. Lo que se perseguía, por el contrario, era subsidiar aún más a este sector, liberando con ello a las familias del correspondiente copago, todo a condición de que el respectivo centro educativo declarara no tener fines de lucro. «Poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular subvencionado»,²⁴ señaló el programa, en efecto.

Tal planteamiento no se limitaba a la enseñanza básica y media. Abarcaba también a la educación superior, es decir, a la universitaria y a los Centros de Formación Técnica (CFT), ampliamente en manos de capitales privados. Estas entidades, bajo ciertas condiciones, también serían subsidiadas por el Estado, lo que permitiría que la «gratuidad» operara en ellas. A este respecto, el Programa de la Nueva Mayoría señaló: la gratuidad «podrá ser ejercida por toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar acreditada [y] acatar estrictamente las normas que no permiten la exigencia del lucro».²⁵ Así, el subsidio también se aplicaría a las universidades privadas (y a los CFT), sin perjuicio de que se optaría por tener «un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado».²⁶ En resumen, el programa de la Nueva Mayoría contemplaba subsidiar a los inversionistas privados que habían colocado sus capitales en el sector educacional, pero siempre que se sometieran a ciertos controles. Dicho de otra forma, el programa proponía un mecanismo consistente en que, cumplidas ciertas condiciones, el financiamiento de las instituciones

²⁴ «Programa de gobierno de Michelle Bachelet», art. cit., p. 17.

²⁵ *Ibíd.*, p. 20.

²⁶ *Ibíd.*, p. 21.

educacionales que estaban en manos del capital privado –que era la gran mayoría– dejaría gradualmente de correr por cuenta de las familias para ser asumido por el Estado. El mismo criterio se aplicaría a las universidades del sector público. De este modo, se pretendía aplicar al empresariado educacional el mismo principio que se aplicaba a muchos de los capitales invertidos en otros sectores: subsidiarlo con fondos públicos, contribuyendo así a su reproducción ampliada, verdadera función de todos los gobiernos pos 1973.

A los fines de que el Estado financiara al empresariado privado que se desempeñaba tanto en la educación básica, media y superior –y con el propósito de hacer lo propio con la educación municipal y con las universidades públicas–, el programa de la Nueva Mayoría propuso una reforma tributaria que implicaba un alza impositiva a la ganancia de las empresas, a lo que se agregaba la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), el cual –reconoció el programa– «no existe en ninguna parte del mundo». De hecho, el FUT consistía en una especie de evasión tributaria legal por parte de las empresas –o si se quiere, en una forma de subsidio estatal al capital–, que se les otorgaba a las empresas con la sola condición de que los respectivos montos tributables adeudados al Estado se invirtieran productivamente. Esto en los hechos significa que los capitales beneficiados harían negocios con platas del fisco, y obtendrían las pertinentes ganancias. La existencia del FUT –que no tiene ningún símil en todo el mundo– muestra cuán total es el control del megaempresariado sobre el Estado chileno, ello a través de una clase política a la que financia.

Otros tópicos relevantes contenidos en el Programa de la Nueva Mayoría quedaron formulados de manera muy general. Tal fue el caso de los temas laborales. Al respecto, el programa manifestó su voluntad de impulsar iniciativas dirigidas a «fortalecer la actividad sindical» equilibrando las relaciones entre trabajadores y empresarios. A estos fines propuso facilitar la negociación colectiva, aunque no por rama, sino solo por empresa, cuestión que evidentemente favorece al capital. El programa, como se señaló arriba, también planteó la necesidad de elaborar una nueva constitución, aunque no mencionó el mecanismo a través del cual ello operaría; es decir, no precisó si la nueva carta fundamental sería confeccionada por los representantes del pueblo o por la clase política tercerizada.

No obstante lo dicho, el Programa de la Nueva Mayoría postuló algunas propuestas democráticas. Entre ellas cabe destacar las siguientes: el establecimiento de la «función social de la propiedad»; declarar «las aguas como bienes nacionales» y promulgar «una ley que determine los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social».²⁷ En todo caso, cuando accedió al gobierno, la Nueva Mayoría en ningún momento intentó llevar a la práctica estas propuestas. A las mencionadas medidas el programa sumó las atingentes a la igualdad de género. En este plano anunció que el gobierno de la Nueva Mayoría crearía el Ministerio de la Mujer y que enviaría un proyecto de ley al Congreso que contemplara la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Si dejamos de lado estas propuestas, el Programa de la Nueva Mayoría era del todo neoliberal, cuestión que intentaba ser velada, sobre todo a través de la reivindicación de la gratuidad en la educación, ello con el fin de cooptar o neutralizar al movimiento estudiantil, el cual había empezado a cuestionar el modelo neoliberal con sus movilizaciones de 2011, lo que suscitó un apoyo a sus demandas por parte de la gran mayoría del país, precisamente en lo referido al tema de la gratuidad. En este sentido, el programa de la Nueva Mayoría representó un componente importante de un paso táctico, de una hábil operación gatopardística –una «nueva pillería», diría Roxana Miranda– llevada a cabo por parte de aquel segmento de la clase política que requería retomar posiciones en el aparato estatal para, luego de ganar las presidenciales de 2013, colocar allí a su gente, siempre sin cuestionar la dominación de los poderes fácticos de los que recibía financiamiento y con los cuales aspiraba a cogobernar a través de los consensos y de las políticas de diálogo.

El segundo gobierno de Bachelet

En las elecciones presidenciales de 2013, Michelle Bachelet fue elegida para un segundo mandato en unos comicios que registraron una alta abstención, facilitada por la ley de 2009 que aprobara el

²⁷ «Programa de gobierno de Michelle Bachelet», art. cit., p. 31.

voto voluntario y la inscripción automática. En la primera vuelta de los mencionados comicios sufragaron 6 696 229 personas, el 49,3% del padrón electoral, diez puntos porcentuales menos que los emitidos en las elecciones presidenciales de 2009; mientras que en la segunda vuelta la participación fue aún menor, alcanzando a 5 697 524 votantes, el 41,9% del padrón electoral.²⁸

Ya por este solo concepto el gobierno de Bachelet emergió con claros visos de debilidad, lo que se vio acentuado por otros factores. Entre ellos cabe mencionar la heterogeneidad de su base política, compuesta por siete partidos, que iban desde el Partido Demócrata Cristiano al Comunista, a lo que se agregaba la propia figura de la presidenta, que vino a encarnar un liderazgo sin consistencia ideológica y política, el cual estaba basado más bien en lo que se reputó era su «simpatía» y su «cercanía a la gente». Según Manuel Cabieses, su destino tendría que ser el «de los liderazgos artificiales que se fabrican con técnicas de marketing y mucho dinero», en los cuales la «caudalosa publicidad, muchas veces asesorada por expertos internacionales, sirve de conexión del mercado con la política», *marketing* que, en fin, «se especializa en “vender” imágenes que pocas veces corresponden a la realidad».²⁹ Tal como había sucedido con su primera administración, el segundo gobierno de Michelle Bachelet no rebasó los estrechos marcos del modelo neoliberal, como había sucedido con los gobiernos de la Concertación, pese a que su coalición tenía mayoría en el Congreso. Las muy limitadas reformas que planteó, siempre motivadas por meros motivos de *marketing* electoral, sin cuestionar la vigencia del modelo neoliberal ni los intereses de los poderes fácticos —y sin apoyarse en los movimientos sociales a cuyas demandas supuestamente respondía—, fueron criticadas no solo por la oposición de derecha, sino también, aunque subrepticamente, por el propio Partido Demócrata Cristiano, en particular, por sus segmentos más conservadores.

A esos factores de debilidad pronto se sumarían otros, en esencia vinculados a la corrupción ambiente. Así, a los pocos meses de asumida, y ante la acentuación de los escándalos que afectaron a altos

²⁸ Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*, ed. cit., p. 467.

²⁹ Manuel Cabieses Donoso: «La revolución necesaria (III) Luz que agoniza», *Punto Final*, núm. 848, abril de 2016, p. 3.

personeros del Gobierno, en particular a la llamada G-90, Bachelet debió llevar a cabo un cambio de gabinete a cuya cabeza colocó a un representante del sector conservador del Partido Demócrata Cristiano (Jorge Burgos), mientras que en Hacienda, a un neoliberal (Rodrigo Valdés), quedando desplazada del gobierno –salvo una sola excepción y temporalmente–, la G-90, compuesta por jóvenes políticos de la total confianza de la mandataria, quienes durante los últimos años habían venido emergiendo bajo su alero. Casi paralelamente el Gobierno proclamaría que, ante las estrecheces fiscales derivadas de la negativa coyuntura internacional, las reformas contempladas en su programa no se harían con la amplitud considerada en los inicios, giro político que se expresó en el lema, «realismo sin renuncia».

Dentro de las medidas que en este cuadro el Gobierno intentó llevar a la práctica, figura la reforma tributaria, cuyo objetivo era acopiar los recursos necesarios para implementar los cambios en la educación. Esa reforma terminó negociándose en el domicilio particular de un alto tecnócrata de los grupos económicos, y con destacada participación de los prohombres del sector más conservador del Partido Demócrata Cristiano (Andrés Zaldívar), que la volvieron inocua para el megaempresariado sin que, por tanto, contribuyera a la disminución de las grandes desigualdades que cruzan al país, objetivo al que, por lo demás, formalmente no respondería.

Luego se avanzaría en la implementación de la reforma educacional, la cual finalmente no abordó la cuestión de la educación pública, sino la de la particular subvencionada, a la que consolidó aumentando el financiamiento proporcionado por el Estado a fin de eliminar con ello el copago de las familias. Mientras, en la educación superior, a través del sistema de *vouchers*, se inició la gratuidad, pero para un número muy limitado de estudiantes provenientes de los sectores «más vulnerables». Se declaró que el número de los afectos a ella se ampliaría durante la segunda parte del gobierno, y que su generalización, incluyendo a quienes estudiaran en las universidades –y CFT– privadas que declararan no perseguir fines de lucro, se llevaría a cabo por los gobiernos siguientes. Esto, como hemos dicho, en el fondo, conllevaba otro mecanismo de traspaso de recursos públicos al capital privado, en este caso, a los invertidos en la educación.

En cuanto a la nueva constitución, el Gobierno, de hecho, descartando la Asamblea Constituyente —que la derecha dijo no aceptar por ningún concepto—, declaró que iniciaría un proceso constituyente mediante «diálogos ciudadanos» (que en la práctica fueron verdaderos simulacros consistentes en responder, por sus partícipes, una serie de preguntas cerradas), cuyos consensos principales serían recogidos y traducidos en una propuesta que durante el gobierno siguiente sería sometida a la consideración del Congreso para luego ser plebiscitada. Es decir, se trataba de un mecanismo dirigido a disimular ante un pueblo manipulado la cuestión de fondo: que todo, una vez más, lo resolvería la clase política endogámica estructuralmente dependiente de la oligarquía plutocrática, que es el poder real en el país.

Mientras, la reforma laboral —con sus «adecuaciones necesarias» propuestas por los sectores conservadores del Partido Demócrata Cristiano— y la ley que autorizaría el aborto en tres casos se empantanaban en medio de la falta de acuerdos al interior de la misma Nueva Mayoría, o bien se aprobaban con la amenaza de la derecha de bloquearlas en el Tribunal Constitucional. Esto último, en relación con la reforma laboral, fue lo que luego aquella efectivamente hizo, y con éxito, con lo que logró que se declarara inconstitucional la «titularidad sindical», a pesar de que los cambios legislativos que en este campo fueran aprobados en el Parlamento distaban mucho de favorecer al sindicalismo, aparte de que no consideraron la negociación colectiva por rama, hicieron incluso difícil la negociación colectiva por empresas y aun la huelga, sobre todo al mantener el sistema de reemplazo. El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical fue emitido en abril de 2016. El significado de este fallo pareciera ser claro. En primer lugar, puso de manifiesto, una vez más, dónde reside el poder real, y evidenció que lo que les cabía tanto a los gobiernos de la Concertación como de la Nueva Mayoría era gestionar el modelo del gran capital local y transnacional, y favorecer la reproducción ampliada de ambos, y no ponerle obstáculos, como se consideró que ocurriría con la titularidad sindical. En segundo lugar, se demostró que los partidos representantes de los intereses del gran empresariado —esto es, los de la derecha— no estaban dispuestos a transigir en nada que afectara la tasa de ganancia

del capital, lo que pone de manifiesto que actuaban con criterios estrechamente clasistas orientados, entre otras cosas, a impedir la organización sindical de los sectores asalariados apuntando a estimular la fragmentación de estos. Y, en tercer lugar, el fallo del Tribunal Constitucional aportó evidencias adicionales que tendían a demostrar que una democratización del país no podía ser pactada ni operar por vía de reformas y consensos, sino mediante una ruptura democrática o, abiertamente, a través de una revolución.

No fue casualidad que la reforma laboral fuera rechazada por muchas organizaciones sindicales, como ocurriera con la Unión de Trabajadores Portuarios, el Frente de Trabajadores Mineros y los trabajadores forestales, entre muchos otros, entidades que la consideraron un retroceso

El caso del sistema binominal fue distinto, ya que no le servía a casi ningún actor político. Entonces fue reemplazado por un sistema proporcional corregido con un rediseño de las circunscripciones electorales acorde con las necesidades de las distintas fracciones de la clase política. El gobierno de Bachelet también logró la aprobación por el Parlamento de la Ley de Igualdad de Género, la que respondía a la demanda de movimientos feministas y de minorías sexuales. Lo mismo cabe decir de la despenalización del aborto en tres causales, medidas claramente democráticas. En otro plano, el respaldo al capital extranjero por parte del gobierno de la Nueva Mayoría continuó tan sólido como durante los gobiernos de la Concertación, incluyendo a aquel que se invirtiera en la megaminería extractivista y en el sector energético, particularmente dedicado a la construcción de centrales termoeléctricas destinadas a proveer de energía a las mineras.

Un ejemplo de ello, entre otros, fue el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Alto Maipo, por la transnacional AES Gener, cuya finalidad era proveer de energía eléctrica a la minera Los Pelambres, del grupo Luksic. «El proyecto recibió su resolución de calificación ambiental en 2009, durante el primer gobierno de Bachelet. Un informe posterior de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados estableció que su aprobación adolecía de vicios, como lo era el que se hubiera presentado como abastecedor del consumo público de energía cuando, en realidad, la energía que generaría estaba destinada a la minería privada. El informe

sostuvo además que el proyecto Alto Maipo pondría en peligro el abastecimiento de agua de la Región Metropolitana y que poseía una gran cantidad de impactos ambientales no declarados». ³⁰ No obstante, y pese a la protesta pública, el gobierno de Bachelet, hasta mediados de su segundo periodo, seguía prestándole su respaldo.

Como lo viéramos arriba, ya en 2010, durante su primera administración, aun en contra de una resolución de la Corte Suprema, la mandataria se había jugado para hacer posible que AES Gener, pudiera construir su central de Campiche, en la V Región, para cuyos efectos incluso, mediante decreto, cambió el uso del suelo en el que aquella estaba siendo levantada. En el año 2016, el Gobierno insistía en las mismas políticas garantistas al capital transnacional. Mientras, a lo largo de país otras empresas transnacionales, dedicadas al extractivismo, generaban graves daños ecológicos, desertificaban tierras, provocaban cánceres y otras enfermedades entre la población, sobre todo en la zona norte, lo cual obligaba a muchos, normalmente pobres, a emigrar.

A lo mencionado cabe agregar que acorde con su programa, el gobierno de Bachelet se propuso licitar aun otros recursos mineros, siguiendo la lógica del capitalismo transnacionalizado, una de cuyas facetas importantes es precisamente el extractivismo. En ese marco, el Gobierno procedió a entregar el litio a Soquimich, la cual, por su parte, dijo que lo explotaría en asociación con otras empresas internacionales.

Al llegar a la mitad de su periodo, ministros del gabinete de Bachelet declararon que la obra gruesa del gobierno estaba cumplida y que, por tanto, no cabría impulsar otras «reformas», sino más bien consolidar las ya hechas. De este modo, la dictadura de los grupos económicos locales y de las transnacionales, cuyo modelo neoliberal el gobierno de la Nueva Mayoría debía administrar, quedaba intacta, lo que evidenciaba, por lo demás, que el gobierno nunca tuvo otras miras. Con ello adicionalmente se puso de manifiesto que las supuestas reformas prometidas por la Nueva Mayoría habían tenido por objeto esencialmente contener al movimiento social e instrumentalizar su descontento haciéndolo funcional a los fines de la conquista del gobierno por dicha coalición, la que

³⁰ José Zúñiga: «AES Gener y la Nueva Mayoría: una relación destructiva», *Rebelión*, 26 de noviembre de 2015. <<https://resumen.cl/articulos/aes-gener-y-la-nueva-mayoria-una-relacion-destructiva>>.

de este modo satisfacía los intereses corporativos de su personal político y de sus clientelas.

Dentro de esa lógica, el gobierno de Michelle Bachelet no se avino a tener en cuenta al movimiento social constituido en torno a la demanda por un cambio del sistema previsional, movimiento que adoptó el nombre de «No más AFP». Este, rechazando el mecanismo de capitalización individual en curso, levantó como reivindicación central la instauración de un sistema de reparto, solidario y tripartito, que ciertamente afectaba los intereses de los grupos económicos, los que, hasta la fecha, disponían con regularidad de recursos monetarios frescos provenientes de las administradoras de fondos de pensiones, es decir, de las cotizaciones previsionales de sus afiliados. Ante la considerable movilización social generada en respuesta a esta verdadera expropiación, con su correlato, el escándalo constituido por las exiguas pensiones que las AFP otorgaban, el gobierno, lejos de atender la mencionada demanda, prefirió constituir una «comisión de expertos» —es decir, de tecnócratas vinculados a los poderes fácticos— que debía abordar el problema, lo cual tampoco tuvo resultados prácticos.

Otras medidas no hicieron sino confirmar la tendencia señalada. Así, por ejemplo, la «gratuidad» no puso fin a la educación de mercado y, de hecho, como se dijo arriba, se tradujo en un sistema de becas dirigidas a ciertos grupos más «vulnerables», cuya otra cara fue la aceptación del financiamiento estatal a ciertas empresas privadas establecidas en el área educacional, como Centros de Formación Técnica, universidades privadas y otros «emprendimientos» llevados a cabo en la educación media y en la básica, todo en perjuicio de la educación pública. En tanto, el centro de detención de Punta Peuco no se cerraría, como la mandataria llegó a prometerlo, ni se llevaría a cabo la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura cívico militar.

En cuanto al tema mapuche, hay que tener en cuenta que en 2013, durante su campaña electoral, Michelle Bachelet había declarado que la aplicación que hiciera de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche durante su primer gobierno había constituido un error que no se volvería a repetir si era electa para un segundo mandato. Igualmente prometió un nuevo trato para este pueblo. Sin embargo, durante su segunda administración, presionada por

la derecha y el mundo empresarial, sobre todo de la Araucanía, volvió a aplicar la mencionada ley; al tiempo que el nuevo trato que se daría al pueblo mapuche estuvo lejos de materializarse. Muy por el contrario, las viejas prácticas represivas en su contra no hicieron más que agudizarse. Así, se volvieron una norma los allanamientos de Carabineros a las comunidades mapuches, donde eran violentados incluso mujeres y niños. Igualmente, se criminalizó a determinados líderes, se les procesó y encarceló. En este contexto, como lo señala Manuel Holzapfel, en septiembre de 2017, casi al final del mandato de Bachelet:

[...] la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros, dependiente del Ministerio del Interior, detuvo a ocho mapuches acusados de asociación ilícita terrorista y los llevó a los tribunales. Sin embargo, una investigación posterior determinó que la unidad de Carabineros ejecutora de esta operación había manipulado las pruebas mediante las cuales se pretendía incriminar a aquellos, a cuyos efectos había intervenido de manera fraudulenta sus mensajes telefónicos. El gobierno de Bachelet no solo dio luz verde a esta operación, sino que también la validó comunicacionalmente como un éxito en la lucha contra el terrorismo en la Araucanía.³¹

Se trataba de la llamada Operación Huracán. Aparte de las represiones señaladas, el conflicto mapuche dejó nuevos muertos durante esta administración, aunque no como resultado de la acción directa de agentes del Estado. Organismos de las Naciones Unidas, con mucha antelación, habían hecho ver su inquietud ante la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Araucanía, e instaron a los gobiernos chilenos a renunciar a su uso.

En el plano internacional, el gobierno de Bachelet se mantuvo incondicional a las políticas norteamericanas. En febrero de 2015 su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, procedió a firmar el Trans Pacific Partnership (TPP), el cual se orientaba a quitarle al país uno de los últimos jirones de soberanía que le quedaban, respondiendo así a los intereses de las transnacionales y de los

³¹ Manuel Holzapfel G.: «Michelle Bachelet y su nuevo cargo en la ONU», *Rebelión*, 18 de agosto de 2018, <<https://contralapropagandamediatca.blogspot.com/2018/08/michelle-bachelet-y-su-nuevo-cargo-en.html>>.

Estados Unidos. Mientras, en marzo de 2016, acompañada de su ministro de Relaciones Exteriores, Bachelet viajaba a Washington, donde se reunió con la directora del Comité Interamericano de Defensa, contralmirante Martha Herb. Allí pronunció un discurso en el que, junto a referirse a los problemas de la seguridad hemisférica, recordó su periodo de estudiante en la entidad. El Colegio Interamericano de Defensa, por su parte, le entregó la medalla del Consejo de Delegados de la Escuela, al tiempo que le otorgó el título de Master Honoris Causa. Al año siguiente –agosto de 2017–, el gobierno de Bachelet fue uno de los catorce que confluyeron en la conformación del llamado Grupo de Lima, alineándose así, junto a otros gobiernos vasallos de la región, con la política de Donald Trump orientada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela.

2015: el Rey está desnudo

Un poco antes, durante el 2015, en el plano interno, al gran público le fue revelado el secreto –a voces al interior de la llamada «clase política»–, referente a cuál era el mecanismo principal que permitía la articulación entre casi todos los partidos y el megaempresariado. Como hemos visto, ese mecanismo consistía en el financiamiento de la mayoría de las colectividades políticas por parte de la plutocracia.

Más arriba hemos señalado que dicho financiamiento tenía dos grandes vertientes: la legal y la ilegal. La primera era la consagrada por la legislación sobre financiamiento de campañas, promulgada bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Esa legislación permitía a las empresas depositar en el Servel fondos para diversos candidatos supuesto que estos no conocerían su procedencia. Tal ley vino a dar una forma más refinada a la anterior práctica del maletín, mientras que la vertiente ilegal de financiamiento de los partidos por la oligarquía plutocrática operó a través de las llamadas «boletas ideológicamente falsas», las cuales el político respectivo, o un personaje de su confianza, extendía a la empresa donante señalando como contrapartida un servicio inexistente. De tal modo, la empresa aparecía aumentando costos y rebajando ganancias, lo que le permitía pagar menos impuestos. En consecuencia,

mediante esta práctica se defraudaba al fisco por elevados montos, y se cometían graves delitos tributarios. Hay que agregar que dicho procedimiento solía usarse no solo durante periodos electorales, sino en cualquier momento.

Hubo políticos que reconocieron que el financiamiento ilegal de los partidos era una práctica sistémica. En efecto, el diputado José Antonio Kast, entre otros, quejándose de que personeros de la UDI fueran formalizados por esa razón y no los de la Nueva Mayoría, sostuvo que dicho financiamiento era «una situación transversal que afectaba a todos los partidos políticos [por lo cual], no corresponde que se apunte a un solo sector».³²

Los escándalos comenzaron con el caso Penta, que involucraba a personeros de la UDI. Los costos políticos, en consecuencia, inicialmente afectaron sobre todo a la derecha, la que entró en una profunda crisis. Muchos de sus parlamentarios y prohombres (Moreira, von Baer, Orpis, Novoa, de la UDI; Zalaquet, de Renovación Nacional, entre otros) fueron acusados de estar involucrados en casos de financiamiento ilegal. Más tarde, dos de los candidatos que sucesivamente levantara la UDI para los comicios presidenciales de 2013 –Laurence Golborn y Pablo Longueira– llegarían a ser formalizados por casos análogos. Esto, debido a que fueron financiados por millonarias sumas por grandes empresas a través de boletas falsas. El senador Jaime Orpis, de la UDI, llegó a reconocer que recibía un pago mensual de cierta empresa, aunque dijo que ello no incidía en su actividad en el Congreso.

Los costos políticos vinculados al tema de la corrupción también recaerían en la Nueva Mayoría. Y no serían menores. En primer lugar, y tempranamente, afectaron a la propia familia de la presidenta, cuya nuera e hijo aparecieron enredados en actividades de enriquecimiento ilícito, por lo cual la primera fue formalizada. También se acumularon antecedentes que permitieron sostener que numerosos parlamentarios del sector fueron financiados por grupos económicos, muchas veces a través de sus entornos. La acusación recayó incluso en los directivos de la precampaña de la presidenta Bachelet, la que, según los datos disponibles, fuera financiada por el pinochetismo duro; esto es, por las empresas del grupo del «yernísimo» Ponce Lerou, cuestión que luego, en

³² Edison Ortiz: «Cristian Riquelme, la G-90 y los “jaleros” del poder», <<http://piensachile.com/2016/02/cristian-riquelme-la-g-90-y-los-jaleros-del-poder/>>.

la medida en que el caso empezó a hacerse visible –y habiendo la Nueva Mayoría ya accedido al gobierno–, obligó al jefe de esa precampaña, Rodrigo Peñailillo, a renunciar a su cargo de ministro del Interior. Incluso dos expresidentes de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Sebastián Piñera, fueron señalados por la prensa con motivo del financiamiento irregular de sus campañas electorales.

En ese contexto enrarecido, «en diciembre de 2015 se conoció un estudio del bufete de abogados Shearman & Sterlin, de EE. UU., realizado por encargo del directorio de SQM [Sociedad Química de Chile]. El estudio contabilizó los controles internos, los riesgos de sobornos y los pagos cuestionados efectuados por la minera». Para analizar el problema, «los abogados norteamericanos recopilieron 3,5 millones de documentos, revisaron más de 930 000 y entrevistaron a 24 personas». Finalmente, su investigación «[...] se concentró en 26 políticos asociados a 67 proveedores de boletas que recibieron 5,8 millones de dólares. El 45 % de ellos estaba ligado a la UDI, el 11 % a Renovación Nacional, otro 11 % al PDC, el 10 % al PRI, el 8 % al Partido Socialista, el 7 % al Partido Radical y el 3 % al PPD».³³ Esto significa que, solo en relación con Soquimich, casi todos los partidos se hallaban involucrados en prácticas ilegales de financiamiento.

Los escándalos se verían agravados ante acusaciones de cohecho, las que se plantearon al constatarse que ciertos parlamentarios informaban a altos directivos de las empresas de las que recibían financiamiento ilegal, sobre leyes en trámite en el Parlamento, recepcionando de ellos indicaciones sobre cómo tales leyes debían quedar redactadas. Tal fue el caso, sobre todo, de la llamada Ley de Pesca, que entregó el mar a siete familias, y que contó con votos favorables no solo de la derecha, sino también de muchos parlamentarios de la ex-Concertación. Entre las empresas que más aparecieron en los medios de prensa como financistas de la clase política sobresalen, aparte de Soquimich, las del grupo Penta, Angelini, Saieh, Matte, Luksic, Corpesca, Agrosuper y Ripley.

El gobierno de Bachelet, lejos de encabezar una fuerte arremetida en contra de la corrupción del sistema político, intentó bajarle el perfil al problema con los consabidos argumentos de que no había que prejuzgar a nadie y de la necesidad de respetar la

³³ Manuel Salazar: «Auge y caída de la UDI», *Punto Final*, núm. 848, abril de 2016, p. 7.

presunción de inocencia y dejar que las instituciones funcionaran. Adicionalmente, el Gobierno se esforzó por evitar que el Servicio de Impuestos Internos hiciera las correspondientes denuncias y presentara las querellas que permitirían a la Fiscalía Nacional llevar los casos descubiertos a los tribunales de justicia.

La clase política, por su parte, consciente de sus intereses corporativos, reaccionó solidariamente, minimizando los hechos y sosteniendo que correspondían a casos aislados, que no cabía prejuzgar, etc. Cuando se hicieron públicos los datos pertinentes –demoledores–, no condenaron a Pablo Longueira, que pronto sería formalizado y, por el contrario, los personeros que no permanecieron en silencio lo defendieron expresamente. Esas defensas vinieron sobre todo de personeros del Partido Socialista –José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Enrique Correa–, quienes conceptuaron al exlíder de la UDI como un estadista que había dado importantes servicios al país, en referencia al apoyo que Longueira había prestado a Ricardo Lagos cuando este tuviera que enfrentar el caso de MOP-Gate y la errónea inscripción electoral de la Democracia Cristiana. Otros políticos, aunque en privado, defendieron a sus colegas acusados. Lo hicieron relativizando la validez de las críticas a las prácticas de financiamiento ilegal de la política con el argumento de que era lo que hacían todos.

Los hechos demostraban así que la lealtad de la clase política siempre fue con sus propios intereses corporativos y con sus financistas y no con sus electores. Ella, en fin, consideró que a estos últimos, gracias al control casi total de los medios de comunicación, siempre se los podría manipular y clientelizar, manteniendo cautivo su voto y su adhesión. Esto demuestra que el régimen político chileno dista mucho de ser democrático, y es más bien una plutocracia disfrazada de democracia; disfraz indispensable a los efectos de su legitimación ante las clases subalternas. No es casualidad que Bachelet –al igual que sus predecesores– en ninguno de sus dos gobiernos se enfrentara a la oligarquía plutocrática. Muy por el contrario, sus ministros solían ir a Casa Piedra donde le daban cuenta de su quehacer a las organizaciones corporativas de aquella, buscando, por un lado, su aquiescencia y, por el otro, intentando otorgar plenas garantías a sus intereses. En función de ello asumían las demandas corporativas del sector, negociando con

sus representantes políticos, cuando no gremiales, sobre las «reformas» que pretendían llevar a cabo, buscando los consabidos consensos, que los discursos hegemónicos reputaron como «diálogo». De este modo, se ocultaba la realidad más profunda consistente en el control del Estado por la plutocracia empresarial a través de un personal político tercerizado cuyas dos alas –el «duopolio»– se rotaban en el gobierno.

Este carácter estrechamente clasista del Estado y de su institucionalidad fue el que en 2015 empezó a quedar en claro para no pocos sectores del país, antes cegados por la hegemonía ideológica del capital, de su personal político y de sus intelectuales orgánicos. De tal modo, se abrió una nueva fase en la crisis de legitimidad del sistema institucional y, hasta cierto punto, de la correspondiente dominación de clase.

En este contexto, en junio de 2015, el senador Alejandro Navarro publicó los datos que el Servel dispusiera sobre los aportes reservados que normalmente las empresas hicieran a los distintos candidatos a diputados y senadores, datos que quedan resumidos en las tablas 25.1.

Tabla 25.1. Aportes reservados a parlamentarios

<i>Diputado</i>	<i>Partido</i>	<i>Aporte reservado</i>
Matías Wlaker Prieto	PDC	\$54.500.005
Juan Morano Cornjo	PDC	\$12.000.000
Jorge Insunza Gregorio de las Heras	PPD	\$11.000.000
Jorge Tarud Daccarett	PPD	\$20.000.000
Daniel Farcas Guendelman	PPD	\$18.500.000
Marco Antonio Núñez Lozano	PPD	\$26.000.005
Pepe Auth Stewart	PPD	\$35.000.004
Cnstian Campos Jara	PPD	\$11.500.000
Cristina Girardi Lavín	PPD	\$15.700.005
Femando Meza Moneada	PRSD	\$8.000 000
Alberto Robles Pantoja	PRSD	\$2.000.000
Luis Lemus Aracena	PS	\$14.000.000
Clemira Pacheco Rivas	PS	\$23.000.000

C p/T ILO 25. Ha ia la cri:is

635

Tabla 25.1 (cont.)

<i>Diputado</i>	<i>Partido</i>	<i>Aporte reservado</i>
Osvaldo Andrade Lara	PS	\$25.000.000
Fidel Espinoza Sandoval	PS	\$12.800.000
Manuel Monsalve Benavides	PS	\$11.000.000
Marcelo Schilling Rodríguez	PS	\$8.000.000
Maya Fernández Allende	PS	\$14.000.000
Raúl Saldívar Auger	PS	\$5.000.000
Nicolás Monckeberg Díaz	RN	\$186.800.000
José Manuel Edwards Silva	RN	\$35.500.000
Bernardo Berger Fett	RN	\$36.000.000
René Manuel García García	RN	\$23.000.000
Paulina Núñez Urrutia	RN	\$28.000.000
Diego Paulsen Kehr	RN	\$20.000.000
Germán Becker Alvear	RN	\$48.000.000
Jorge Rathgeb Schifferli	RN	\$15.000.000
Cristian Monckeberg Bruner	RN	\$70.000.006
Gaspar Rivas Sánchez	RN	\$15.000.000
Leopoldo Pérez Lahsen	RN	\$24.000.000
Rosauro Martínez Labbénota 2	RN	\$14.500.000
Celso Morales Espinosa	UDI	\$42.000.000
Andrea Molina Olvia	UDI	\$48.374.500
Osvaldo Urrutia Soto	UDI	\$42.000.003
David Sanoval Plaza	UDI	\$5.000.000
Enrique van Rysselberghe Herrera	UDI	\$19.018.944
Marisol Turres Figueroa	UDI	\$9.000.000
Javier Macaya Danús	UDI	\$144.666.000
Juan Antonio Coloma Álamos	UDI	\$169651.732
María José Hoffman Opazo	UDI	117.264.190
Ignacio Urrutia Bonilla	UDI	\$67.666.149
Jaime Bellolio Avaria	UDI	\$128.166.000
José Antonio Kast Rist	UDI	\$94.749.000

Romiliob Gutiérrez Pino	UDI	\$37.432.250
Felipe Ward Edwards	UDI	\$52.874.500
Gustavo Hasbún Selume	UDI	\$123.435.977
Ernesto Silva Méndez	UDI	\$268.249.000
Arturo Squella Ovalle	UDI	\$97.206.964
Felipe de Mussy Hiriart	UDI	\$45.300.000
Patricio Melero Abaroa	UDI	\$110.419.000
Sergio Gahona Salazar	UDI	\$50.500.000
Renzo Trisotti Martínez	UDI	\$45.033.000
Javier Hernández Hernández	UDI	\$38.000.000
Claudia Nogueira Fernández	UDI	\$44.374.507
Jorge Ulloab Aguillón	UDI	\$47.632.667
Ramón Barros Montero	UDI	\$34.800.000
Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez	UDI	\$28.874.500
Joaquín Lavín León	UDI	\$94.675.400
Celso Morales Espinosa	UDI	\$42.000.000
Andrea Molina Olvia	UDI	\$48.374.500
Iván Noranbuena Farías	UDI	\$23.027.000
Alejandro Santana Tirachini	RN	\$8.000.000
Germán Verdugo Soto	RN	\$6.500.000
Nicolás Monckeberg Díaz	RN	\$186.800.000
Gonzalo Fuenzalida Figueroa	RN	\$25.500.000
José Manuel Edwauds Silva	RN	\$35.500.000
Bernardo Berger Fett	RN	\$36.000.000
René Manuel García García	RN	\$23.000.000
Paulina Núñez Urrutia	RN	\$28.000.000
Diego Paulsen Kehr	RN	\$20.000.000
Germán Becker Alvear	RN	\$48.000.000
Javier Macaya Danús	UDI	\$144.666.000
Juan Antonio Coloma Álamos	UDI	\$169.651.782
María José Hoffman Opazo	UDI	\$117.264.190
Ignacio Urrutia Bonilla	UDI	\$67.666.149
Jaime Bellolio Avaria	UDI	\$128.166.000
José Antonio Kast Rist	UDI	\$94.749.000

Tabla 25. 1 (cont.)

<i>Diputado</i>	<i>Partido</i>	<i>Aporte reservado</i>
Romilio Gutiérrez Pino	UDI	\$87.432.250
Felipe Ward Edwuads	UDI	\$52.874.500
Gustavo Hasbún Selume	UDI	\$123.485.977
Ernesto Silva Méndez	UDI	\$268.249.000
Arturo Squella Ovalle	UDI	\$97.206.964
Felipe de Mussy Hiriart	UDI	\$45.300.000
Patricio Melero Abaroa	UDI	\$110.419.000
Sergio Gahona Salazar	UDI	\$50.500.000
Issa Kart Garriga	UDI	\$41.751.167
Renzo Trisotti Martínez	UDI	\$45.083.000
Javier Hernández Hernández	UDI	\$38.000.000
Claudia Nogueiras Fernández	UDI	\$44.374.507
Jorge Ulloa Aguillón	UDI	\$47.632.667
Ramón Barros Montero	UDI	\$34.800.000
Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez	UDI	\$28.874.500
Joaquín Lavín León	UDI	\$94.675.400
<i>Senador</i>		
Lily Pérez	Amplitud	\$70.499.920
Jorge Pizarro	DC	\$110.000.000
Ignacio Walker	DC	\$190.379.650
Patricio Walker	DC	\$112.876.496
Andrés Zaldívar	DC	\$101.854.471
Alejandro Navarro	MAS	\$2.466.667
Guido Girardi	PPD	\$504.508.369
Felipe Harboe	PPD	\$272.111.116
Adriana Muñoz	PPD	\$33.000.000
Carlos Montes	PS	\$92.000.006
Juan Pablo Letelier	PS	\$85.077.785
Isabel Allende	PS	\$56.000.043
Andrés Allamand	RN	\$493.385.936

Manuel José Ossandón	RN	\$89.000.000
Ena von Baer	UDI	\$323.825.939
Jacqueline van Ryselberghe	UDI	\$278.785.814
Iván Moreira	UDI	\$218.040.500
Victor Pérez	UDI	\$74.077.778
Pedro Araya	Ind.	\$13.000.000
Carlos Bianchi	Ind.	\$0
Francisco Chahuan	UDI	\$88.532.253
Juan Antonio Coloma	UDI	\$335.452.611
Alfonso de Urresti	PS	\$13.000.000
Alberto Espina	RN	\$133.787.112
Alejandro García-Huidobro	UDI	\$73.577.783
José García Ruminott	RN	
Carolina Goic	DC	\$66.500.000
Alejandro Guillier	Ind.	\$51.000.000
Antonio Horvath	Ind.	\$53.842.453
Ricardo Lagos Weber	PPD	\$315.374.995
Hernán Larrain	UDI	\$248.569.480
Manuel Antonio Motta	DC	(reemplazó a Ximena Rincón)
Jaime Orpis	UDI	\$218.831.711
Baldo Prokurica	RN	\$126.273.387
Jaime Quintana	PPD	\$32.999.918
Rabindranath Quinteros	PS	\$26.990.000
Fulvio Rossi	PS	\$17.000.000
Eugenio Tuma	PPD	\$8.000.000

Fuente: <<http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150616/pags-20150616172423.html>17/06/2015> por Equipo de Cambio21.

Leyenda: Ind. = Independiente

A la luz de estos datos y otros análogos, Felipe Portales, en un artículo fechado el 2 de marzo de 2016, conceptuó al orden institucional del país como un «sistema corrupto». Al respecto, sostuvo: «el grado de corrupción a que ha llegado nuestra “clase política”

es tan alto, que ella ha “naturalizado” [los] apoyos [financieros de las empresas considerándolos] como “necesarios” para el financiamiento de la política; o, en sus expresiones más autocríticas, [los ha calificado] como “errores” o “irregularidades” que en absoluto han condicionado su conducta [...]».³⁴

Por su parte, el cientista político Claudio Fuentes, se refirió a la existencia en el país de un «gobierno plutocrático en la sombra donde unos pocos acaudalados concentran el poder o tienen un acceso directo o privilegiado a este. Se trata de un sistema de gobierno que distorsiona la representación y en donde los intereses de aquellos con grandes fortunas se expresan en forma constante, directa o indirectamente, en los asuntos públicos».³⁵

Mientras, Rafael Agacino, siempre a la luz de los hechos arriba señalados, sostuvo que:

[...] el régimen político y el Estado actuales en nada se parecen al ideal republicano liberal burgués, al estado de compromiso y benefactor declarado en la constitución de 1925 y aderezado a través de sus sucesivas reformas. El régimen político actual carece de su aura democrática y el Estado [ha perdido] su majestad como titular del bien común; incluso más, el mismo Estado corre el riesgo de lumpenizarse.³⁶

Otros, en fin, han hecho ver el carácter estructural de la corrupción, la que sería inherente al capitalismo. Como tal, dicen, ella se presenta como un fenómeno planetario. La corrupción del sistema institucional del país, ahondada bajo el gobierno de Bachelet, trajo consigo, en lo inmediato, consecuencias múltiples. Entre ellas destacan a lo menos tres. La primera fue la acentuación de la desconfianza generalizada en la política y en las instituciones por parte del hombre común, cuestión que fue traduciéndose en una

³⁴ Felipe Portales: «Chile: sistema corrupto», <<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/02/chile-sistema-corrupto/>>.

³⁵ Claudio Fuentes: «El gobierno plutocrático en la sombra», <<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/02/01/el-gobierno-plutocratico-en-la-sombra/>>, 1ro. de febrero de 2016.

³⁶ Rafael Agacino: «Contrarrevolución neoliberal en crisis», *Punto Final*, núm. 848, 640 abril de 2016, p. 17.

percepción delictual de la actividad pública y de quienes la practican. Una segunda consecuencia fue un estímulo inadvertido a la corrupción a niveles micro. La pregunta que en relación con este punto se hicieron muchos entre los sectores menos favorecidos fue: «¿si ellos roban, por qué nosotros no?». Una tercera consecuencia fue, junto al extendido apoliticismo, el tendencial aumento de la abstención electoral en la mayoría del país. En tal sentido, si el abstencionismo verificado en las elecciones municipales de 2012 alcanzó 57%, en las de 2016 esa cifra se elevó a 65%. Es decir, en estas últimas votó poco más de un tercio de quienes tenían derecho a hacerlo. Ello puso de manifiesto una verdadera crisis de legitimidad del sistema institucional.

Pero aún hay más. La crisis de legitimidad que producto de lo ya señalado afectó al sistema institucional se manifestó también en otros planos. En efecto, en primer lugar alcanzó al megaempresariado en la medida en que se fue poniendo en evidencia que él se hallaba penetrado por altos niveles de corrupción, no solo por el tipo de vínculo que estableciera con los políticos, a quienes financiara y a veces cohechara, sino también en virtud de los reiterados escándalos de colusión a que diera lugar (farmacias, pollos, papel higiénico, pañales, etc.). Lo mismo respecto a otros abusos cometidos (caso La Polar) o privilegios que le fueran propios (caso Johnson, subsidios estatales diversos, etcétera).

Los casos de colusión, a su vez, demostraron que la libre competencia –uno de los pilares de la ideología empresarial– no existía, y que, más aún, no podía existir en una economía oligopólica. Otra prueba de lo ilusorio de la libre competencia en una economía tal es la representada por la relación establecida tradicionalmente entre el gran capital y los pequeños empresarios, a quienes aquel normalmente subcontrata comprándoles sus productos a precios monopsódicos cancelándoselos en plazos prolongados.

En vista de los hechos descritos, y como lo han señalado muchos analistas, el país pareció hallarse inmerso en una espiral de corrupción generalizada y sistémica; fenómeno que también afecta a la Iglesia (caso Karadima, entre muchísimos otros), a las Fuerzas Armadas –el llamado Milicogate– y Carabineros, gran parte de cuya cúpula fuera partícipe de un fraude al fisco que supera los 26 000 millones de pesos. En relación con la extraordinaria magnitud

alcanzada por la corrupción en las instituciones de la defensa, es ilustrativo el libro de Mauricio Weibel: *Traición a la patria. «Milicogate»*. *El extraordinario desfalco a la ley del cobre. La historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile*.³⁷

A lo señalado cabe agregar la amplitud que fue revistiendo la delincuencia, así como también la generalización del consumo de la droga, que responde al agobio de la vida cotidiana del chileno común (volveremos sobre el tema); y aun la microcorrupción practicada cotidianamente en casi todos los intersticios de la sociedad. Todo esto marca una profunda crisis moral en los más diversos planos de la existencia nacional, que es propia de los periodos de decadencia de las sociedades.

La crisis de legitimidad del sistema institucional y de la dominación en su conjunto que conllevaba lo dicho no se tradujo, sin embargo, en la configuración de una alternativa; ello, en virtud de la inexistencia de fuerzas morales y políticas que tuvieran propuestas posneoliberales consistentes de levantar una contrahegemonía política y cultural; la mayoría de las que históricamente existieran, según vimos, fueron cooptadas por el neoliberalismo.

Por su parte, la clase política, tomando consciencia de la crisis de legitimidad que la afectaba, y de los potenciales peligros que se derivaban de ella, se esforzó rápidamente –bien o mal– por recuperar la confianza del país, estando dispuesta a hacer sacrificios y concesiones con este propósito. El más significativo consistió en la elaboración de una nueva ley de financiamiento de la política, la que prohibió el financiamiento empresarial de los partidos y de las campañas electorales, y traspasó ese papel al Estado y a personas naturales hasta cierto monto, a lo que se agregarían otras leyes de probidad. Como contrapartida, dicha clase intentó reforzar ciertos mecanismos autoprotectores, entre los que, por un lado, destaca el proyecto de ley que castiga con penas de cárcel a quienes filtren información sobre los procesos judiciales, a lo que se agrega aquella disposición legal que estableció que las violaciones a la nueva ley de financiamiento electoral prescribirían a los dos años, y no a los cinco como ocurre con los demás delitos.

³⁷ Véase Mauricio Weibel: *Traición a la patria. «Milicogate»*. *El extraordinario desfalco a la ley del cobre. La historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile*, Ed. Aguilar, Santiago, 2016.

Por otra parte, y al mismo tiempo, la clase política procedió a impulsar legislaciones represivas, como la referente al control policial de identidad y la reforma a la Ley Antiterrorista; esta última útil sobre todo para defender a las empresas forestales que operan en la Araucanía, territorio que, por lo demás, se halla por largos años altamente militarizado en respuesta a la lucha impulsada por sectores del pueblo mapuche por su liberación nacional.

No es menos cierto que la mencionada legislación represiva no concitó un apoyo unánime dentro de la Nueva Mayoría, y que ciertos sectores de ella, en relación con este punto, discreparon de la derecha.

Angustia y sobreexplotación. La realidad de Chile: otras tantas manifestaciones de la crisis sistémica

Representando otro ángulo de los problemas nacionales, en abril de 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de un informe, llamó la atención del gobierno chileno sobre los altos índices registrados por las enfermedades mentales en el país. El documento instó al gobierno a invertir más recursos para combatir la depresión, la que según el organismo afectaba al 17% de los habitantes del territorio, cifra que convertía al país en el más depresivo de todo el planeta. El informe de la OMS sostuvo además que Chile tenía la tasa más alta de suicidios de toda América Latina, y que, junto con Corea del Sur, mostraba un aumento en la tasas de suicidios de niños y adolescentes.³⁸

Otro aspecto de este problema viene dado por la situación laboral. Un informe del Ministerio de Salud, referido por *El Mercurio* el 9 de agosto de 2019, puso de manifiesto el fuerte aumento que han tenido en Chile las licencias médicas por trastornos mentales en el trabajo, como la depresión, la ansiedad, el estrés y el desgaste laboral. Mientras en 2013 hubo 616 000 permisos médicos por este tipo de patologías –dice *El Mercurio* en referencia al mencionado informe–, en 2018 esa cifra aumentó a más de 944 000,

³⁸ Alejandro Martínez Gallardo: «Opinión: la paradoja de Chile, el país más depresivo del mundo», *El Mostrador.cl*, 22 de abril de 2016, <<https://www.elmostrador.cl/autor/alejandromartinez/>>.

lo que significa que en cinco años dichas patologías experimentaron un alza de 53%.³⁹

Un hecho sintomático sobre la materia lo constituye el que Santiago en solo doce años vio elevado su consumo de antidepresivos en un 470%. Estos datos, como los indicados arriba, contrastan violentamente con los *rankings* internacionales que definieran a Chile como un país modelo.⁴⁰

Frente a los hechos referidos, no han escaseado los puntos de vista que sostienen que existe una correlación entre las negativas realidades de la salud mental del país y el neoliberalismo, en virtud de las exigencias que este hace al individuo en términos productivistas, competitivos, de obtención de ingresos y bienes materiales, los cuales son los indicadores del éxito o fracaso personal considerados por la ideología hegemónica. Tales valoraciones de la ideología sistémica coexisten con la precariedad dentro de la cual se desenvuelven los individuos, en la que nada está garantizado y, por tanto, todo es inseguro.

En este sentido el psiquiatra Sergio Zamora Delgado al abordar el tema afirmó que:

[...] los altos índices de trastornos afectivos y ansiosos que existen en Chile son expresión de una sociedad donde lo importante es la competitividad, el individualismo, el consumismo. Aquí las personas nacen amenazadas por los problemas familiares, laborales, el acoso en el trabajo, el daño medioambiental y el sistema político. Algunos seres son más vulnerables que otros y una de las formas de manifestar ese malestar agobiante es a través de patologías mentales.⁴¹

El endeudamiento de las familias es otro de los elementos que inciden en el estado de ánimo de los chilenos, y en su negativa calidad de vida en general. Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de agosto de 2011, a esta

³⁹ *El Mercurio*, 9 de agosto de 2019, cuerpo C, p. 8.

⁴⁰ Alejandro Martínez Gallardo: «Opinión: la paradoja de Chile, el país más depresivo del mundo», art. cit.

⁴¹ Sergio Zamora Delgado: «Santiago es la ciudad más enferma del mundo», *Diario Uno*, 4 al 10 de julio de 2010.

fecha el 83% de los chilenos se hallaba endeudado, y el 17 % no lo estaba. En 1999 el nivel de endeudamiento era menor: el 69 % se encontraba en esta situación y el 31 %, no, es decir, no registraba deuda. En tanto que durante la dictadura solo la mitad de la población declaraba no tener deudas, y la otra mitad declaraba que sí las tenía.⁴² Dicho de otro modo, el endeudamiento —es un elemento sistémico por excelencia que no ha hecho sino aumentar desde la dictadura en adelante. Esto ha traído, por otra parte, crecientes dificultades para evitar la morosidad, sobre todo entre sectores medios y bajos.

A este respecto, según la misma encuesta, mientras que el 78 % de las personas de ingresos altos y el 55 % del estrato medio-alto no tenían dificultades para pagar sus deudas, este porcentaje era apenas un 17 % en el estrato medio bajo y solo un 4 % entre los individuos de estrato bajo». ⁴³ Estos datos reflejan que el 96% de las personas de ingresos bajos, el 83% de ingresos medios-bajos y el 45 % de los estratos medios-altos tienen problemas para cancelar sus deudas.

Adicionalmente, debido a que un porcentaje creciente de los ingresos familiares deben ser destinados al pago de deudas, a la larga los niveles de consumo de las familias resultan rebajados. Lo dicho, junto a la precariedad laboral, la mercantilización de los derechos sociales —educación, salud, previsión social—, la privatización del agua, del mar y de los bosques en favor del gran capital representa un componente importante de la deficiente calidad de vida predominante en el país.

A ello agréguese el constante aumento de la tasa de explotación impuesta por el gran capital a las clases asalariadas. Un estudio de Narbona y Páez develó que en Chile la productividad del trabajo entre 1990 y 2009 aumentó en un 90%; sin embargo, durante ese lapso los salarios lo hicieron solo en un 20%.⁴⁴ La otra cara del mismo proceso es el considerable aumento de la tasa de ganancia

⁴² Carlos Huneeus: *La democracia semisoberana*, ed. cit., p. 487.

⁴³ Ídem.

⁴⁴ Francesco Penaglia: «En miras al 1 de mayo: ¿rearticulación de los contenidos clasistas?», *El Mostrador.cl*, 30 de abril de 2016, <<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/04/30/en-miras-al-1-de-mayo-rearticulacion-de-los-contenidos-clasistas/>>.

del capital, con sus inevitables efectos: su creciente acumulación, concentración, centralización y la consiguiente desigualdad en la distribución del ingreso. En 2016, «las empresas más grandes registraron ganancias por 12,1 billones de pesos, según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Mientras que la renta de la inversión extranjera directa fue de 6,5 billones de pesos según informara el Banco Central en la Balanza de Pagos».⁴⁵

El sistema de pensiones es otra faceta ilustrativa sobre la esencia de la realidad nacional. A este respecto cabe subrayar que las AFP, junto con apropiarse de 500 000 millones de pesos al mes, pagan pensiones que en promedio son inferiores al salario mínimo, haciendo insegura y angustiada la vida de las personas de la tercera edad, condenándolas a la pobreza, con el agravante de que las AFP pagan la gran mayoría de las pensiones con fondos estatales, verdaderos subsidios, con lo cual el Estado cumple su función en favor de la reproducción ampliada del gran capital. Un estudio llevado a cabo por Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) plantea que en el año 2012 el Estado pagó directamente dos veces más beneficios previsionales que el sistema privado; y financió el 80% del monto de las pensiones civiles, lo que significa que carga con casi todas las pensiones. En tanto, las cotizaciones se desvían en gran medida a las AFP. Estas, a su vez, las transfieren de inmediato a los mayores grupos económicos que operan en Chile, o las exportan a los mercados financieros internacionales. De pasada, las AFP y compañías de seguro relacionadas se embolsan comisiones y primas netas escandalosas. Esto significa que gran parte de las cotizaciones previsionales de los chilenos son expropiadas en los hechos por los grandes grupos financieros.⁴⁶

Por su parte, la salud registra graves problemas, que afectan a las clases subalternas, las que deben atenderse en el sistema público. Las deficiencias de este quedan reflejadas en que entre 2010 y 2015 fallecieron más de 67 000 pacientes esperando atención en él. En tanto, durante 2016, por el mismo concepto, se registraron 22 459 muertes, a lo que se suman otras 2 358 de pacientes que

⁴⁵ Editorial de *Punto Final*, edición del 9 al 22 de junio de 2017, p. 3.

⁴⁶ Manuel Riesco: *Nueva previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas*, Ed. USACH, Santiago, 2015, pp. 98 y ss.

esperaban ser atendidos quirúrgicamente. O sea, en total, casi 25 000.⁴⁷

Mientras otros cientos de miles de enfermos esperan hasta cuatro años –y a veces más– por la consulta con un especialista y por cirugías. Y frente a enfermedades de alto costo, que el sistema no financia, es frecuente que los afectados o sus familias deban hacer colectas, organizar bingos y actividades similares con el fin de reunir el dinero necesario para financiar tratamientos y operaciones quirúrgicas.

Al mismo tiempo, todos los hospitales tienen deudas gigantes, además de que los precios de los medicamentos están completamente desregulados y en la lógica del mercado.⁴⁸ Estos datos muestran una situación dramática: en Chile, como en el capitalismo en general, ser pobre supone una vida más corta, más mala, tener más enfermedades y menos acceso a los sistemas de salud.

A lo dicho se agrega el problema del narcotráfico. Según una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper) Chile, en el país «la internación por vía terrestre y marítima de cocaína [...] está fuera de control».⁴⁹ Al respecto, la investigación señala que «más que un lugar de paso, Chile es hoy un emergente mercado de destino. De hecho, el Reporte Mundial de Drogas de Naciones Unidas nos sitúa desde hace algunos años como uno de los mayores consumidores de cocaína del continente».⁵⁰ La otra cara de este fenómeno, dice el informe, consiste en que «los narco mayoristas asientan su poder».⁵¹ «Cálculos informales estiman en 1.5 millón las personas que en distintas zonas del país están a merced de bandas criminales que señorean en el negocio de la droga».⁵²

Mientras, «los puntos de venta de microtráfico crecen año a año y los niveles de consumo siguen al alza. En paralelo, la pasta

⁴⁷ Los datos son proporcionados por la oficina de prensa del senador Alejandro Navarro, quien, a su vez, los tomara de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Ministerio de Salud, 23 de febrero de 2017, vía correo electrónico.

⁴⁸ Arnaldo Pérez Guerra: «Miserias de la salud pública», *Punto Final*, núm. 864, noviembre de 2016, pp. 12-13.

⁴⁹ CIPER CHILE, <<https://www.ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/>>.

⁵⁰ *Ibíd.*, pp. 3-14.

⁵¹ *Ibíd.*, pp. 2-14.

⁵² *Ibíd.*, pp. 4-14.

base continúa arreciando entre adolescentes y jóvenes de menores ingresos». ⁵³ Aún más, según el Informe de Ciper Chile, las organizaciones de la droga «manejan mucho dinero, lo que facilita la cooptación de funcionarios». Dicho con otras palabras, las organizaciones de la droga han empezado a penetrar al Estado. En relación con este punto, a modo de ejemplo, el informe de Ciper Chile señala que «en junio [de 2018] el suboficial de ejército Víctor Roa Alburquerque que fue detenido y acusado de abastecer de armamento pesado a una banda narco de la población Santa Adriana en Lo Espejo. Roa es solo el último de una seguidilla de funcionarios del Ejército, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Aduanas y hasta el Servicio de Impuestos Internos, que han sido cooptados por el narco». ⁵⁴ Estos casos, entre muchos otros, son «focos de corrupción que son solo destellos de una realidad mayor de magnitud desconocida». ⁵⁵

Tan grave como lo dicho es el que «acusaciones contra narco-trafficantes por asociación ilícita no son comunes en la justicia y varias de las que se presentan quedan sin condena. Datos oficiales obtenidos por Ciper indican que entre 2012 y 2017 se dictaron solo 18 fallos por asociación ilícita vinculada al narcotráfico en todo Chile. De ellas, hubo solo 13 condenas y cinco absoluciones». ⁵⁶

A lo señalado, agréguese los datos proporcionados por el Informe sobre Consumo de Drogas en las Américas 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que apunta que los escolares chilenos son quienes más consumen tabaco, marihuana y cocaína en toda América superando por lejos a todos los demás países. ⁵⁷

En tanto, en las poblaciones las bandas de narcos se pelean por el control del territorio y reclutan «soldados» entre adolescentes que ni estudian ni trabajan, dando lugar a cada vez más frecuentes balaceras, que se traducen en víctimas inocentes. Mientras, las cuantiosas ganancias obtenidas en el tráfico de drogas se lavan a través de inversiones «legales», en la construcción, en bienes raíces,

⁵³ Ídem.

⁵⁴ Íbidem, p. 6-14.

⁵⁵ Ídem.

⁵⁶ Ídem.

648 ⁵⁷ *El Mercurio*, 22 de marzo de 2019, cuerpo C, p. 7.

depósitos bancarios y empresas de fachada. En el contexto de una delincuencia desatada, el panorama de decadencia y disolución social se hace así patente, teniendo su expresión en cada sector de la sociedad, cuya otra cara es la concentración de la riqueza en manos del 1%, que es el que, en los hechos, controla no solo la economía, sino también el Estado, los medios de comunicación y la política.

No menos dramático es el balance negativo que afecta al país en el plano de la destrucción del medio ambiente por obra de los negocios de los grupos económicos y de las empresas transnacionales. Al respecto, Arturo Muñoz subraya los siguientes daños:

- En el norte y centro del territorio las empresas mineras ocupan más del 50% de las aguas de ríos y lagunas (aguas que se hayan privatizadas siendo objeto de compra y ventas), contaminando el resto de ellas por la vía de vaciar material tóxico en sus respectivos cursos, perjudicando gravemente así a los pequeños agricultores de los valles vecinos, los que ven disminuidos sustancialmente los recursos de agua requeridos por sus cultivos, aparte de que muchas veces sus sembrados resultan envenenados y su ganado muerto de sed.
- También en el norte y centro del país, por obra de explotaciones mineras que se apropian del recurso, miles de personas han quedado sin agua corriente, debiendo ser abastecidas por camiones aljibes (que contrata el Estado entre privados, a los cuales, adicionalmente, les compra el agua que dichos camiones distribuyen), siendo el caso más dramático el de Petorca.
- En el sur del país las empresas madereras han envenenado ríos al tiempo que desforestan bosques de árboles nativos reemplazándolos por maderas de rápida industrialización como los pinos.
- A lo largo y ancho del país la instalación de termoeléctricas ha llevado a la ruptura del equilibrio medioambiental, destrozando ecosistemas, poniendo en peligro a la fauna local y sometiendo a grave riesgo la salud de la población.
- Se han producido, a la par, intoxicaciones masivas de personas por obra de industrias altamente contaminantes, siendo el caso más conocido el de la ciudad de Quinteros.

–En tanto que empresas madereras, mineras y salmoneras, vacían líquidos tóxicos tanto en el mar como en los ríos.⁵⁸

Sin duda, los daños producidos en este ámbito, así como en los otros arriba mencionados no pueden ser atribuidos exclusivamente a los gobiernos de Michelle Bachelet. En efecto, son la resultante de los decenios en que el modelo neoliberal fuera implementado en el país, a cuya lógica, en todo caso, la mandataria se ciñó estrictamente.

Por otra parte, cabe subrayar que, frente a la realidad descrita, desde muy temprano hubo luchas de los sectores afectados, aunque principalmente sectoriales. Entre ellas sobresalen las del movimiento No Más AFP, las que alcanzaron una muy considerable amplitud; la de los trabajadores de la salud y de otras numerosas organizaciones sindicales, la de los estudiantes, y las de las organizaciones medio ambientales, entre muchas otras.

Volviendo al gobierno de Bachelet y de la Nueva Mayoría, en base a los elementos señalados arriba, se puede decir que durante él no cambió nada esencial en el país, como no fuera el ahondamiento de la crisis institucional y moral que desde antes se hallaba en curso. En efecto, las «reformas» prometidas por la Nueva Mayoría y realizadas por su gobierno, más que indicadores de un cambio efectivo –junto con servir a los propósitos de cooptar al movimiento social– terminarían evidenciándose como ajustes necesarios a los fines de hacer posible la pervivencia de la dominación del capital monopólico local y transnacional, y, con anterioridad, a los fines de permitir que la «centroizquierda» conquistara el gobierno y satisficiera los intereses corporativos de su personal político y de sus clientelas. Coherente con ello, bajo el gobierno de Bachelet no hubo nueva constitución; la reforma educacional se evidenció como un mecanismo para subsidiar a la inversión privada hecha en este rubro; mientras que la reforma tributaria se volvió inicua para el gran empresariado negociada con personeros suyos; en tanto que la desigualdad se mantuvo, cuando no se ahondó. Tal fue el destino de los ejes principales del programa de la Nueva Mayoría.

⁵⁸ Arturo Alejandro Muñoz: «La derecha sudamericana estimula la destrucción del medio ambiente», <<https://kaosenlared.net/la-derecha-sudamericana-estimula-la-destruccion-del-medio-ambiente/>>.

Sobre ese trasfondo se celebraron los comicios presidenciales de noviembre y diciembre de 2017. En ellos, la Nueva Mayoría –al defraudar durante su administración a parte importante de quienes en un principio la apoyaron– se mostró incapaz de mantenerse en el gobierno. En efecto, en los mencionados comicios, su candidato, Alejandro Guillier, fue ampliamente derrotado por el representante de la oligarquía plutocrática, Sebastián Piñera. De este modo, se daba lugar a la rotación entre los dos bloques políticos intrasistémicos –el duopolio– que alternativamente se encargan de administrar el modelo neoliberal.

En ese contexto no está de más hacer una referencia a la forma como, luego de la mencionada derrota, llegó a su término el gobierno de la presidente Bachelet en marzo de 2018. Dicha forma es muy ilustrativa de la esencia de su administración. Solo cinco días antes de terminar su periodo, la mandataria mandó al Congreso un proyecto de Constitución cuyo debate no tenía ninguna viabilidad política por su tardanza en ser enviado. Casi conjuntamente, pocas horas antes de hacer entrega del mando, encomendó a su ministro de Justicia el cierre del penal de Punta Peuco. El ministro la desacató, negándose a implementar la medida.

Ambas postreras iniciativas presidenciales perseguían claros efectos mediáticos. Ante todo, permitirle a la mandataria decir que había cumplido con sus promesas electorales sin haberlo hecho en términos prácticos. En segundo lugar, le permitían a Bachelet evitarse los costos políticos que le hubiera podido inferir la derecha en el caso de que las mencionadas medidas hubieran sido presentadas en tiempos políticamente útiles. En cambio, al ser planteadas en la hora nona, serían percibidas por los sectores más conservadores como meros saludos a la bandera desprovistos de significación empírica, razón por la cual considerarían que no era necesario hacerles frente.

Análogamente, setenta y dos horas antes de hacer entrega del gobierno, el 8 de marzo de 2018, la presidenta Bachelet procedió a firmar el Trans Pacific Partnership, que con anterioridad había sido suscrito por su ministro de Relaciones Exteriores. El tratado –que todavía requiere ser ratificado por el Senado– aparte de haber sido negociado secretamente, otorga facultades para la supervisión externa de la legislación local sobre semillas y agua, entre otras,

dejando, adicionalmente, al país adherido al sistema internacional de «resolución de controversias», es decir, sujeto a tribunales exteriores, ante los cuales las transnacionales podrían demandar al gobierno chileno, con la correspondiente pérdida de soberanía que ello implicaría para el país. Esto, a su vez, responde a la lógica del desarrollo del capitalismo mundial del cual los estados nacionales, sobre todo los del tercer mundo, quedan convertidos en meras correas de transmisión.

No está de más mencionar que a los pocos meses de terminado su segundo gobierno, Michelle Bachelet, de manera análoga a lo que ocurriera luego de finalizar su primer mandato, pasó a desempeñarse en las Naciones Unidas, en esta segunda oportunidad con el cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos.

Por último, parece conveniente señalar que la realidad del país a fines del gobierno de Michelle Bachelet parecía evidenciar con cierta claridad el agotamiento del modelo neoliberal instaurado bajo la dictadura cívico militar, consolidado y ahondado bajo los gobiernos del duopolio. El fracaso de este modelo en los planos económico, político y social –con los arriba referidos sufrimientos que conllevó para la gran mayoría de la población– debía dar lugar, tarde o temprano, a un estallido social de no haber rectificaciones fundamentales, las que no se visualizaron por ninguna parte. Ese estallido –o rebelión popular– solo se verificó, y con particular furia, a partir del 18 de octubre de 2019, bajo la administración siguiente, es decir, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Incomprensible al margen de las luchas puntuales que por años venían llevando a cabo distintos sectores populares, esa rebelión, aunque huérfana de dirección política, vino a representar un cambio importante en la subjetividad social expresada en la sugerente consigna «Chile despertó». Los datos expuestos a lo largo de este capítulo y del anterior no constituyen sino algunos de los disparadores de la rabia con que ella llegó a materializarse.

El fin de un ciclo histórico

Con la formación de la Nueva Mayoría, con su posterior ascunción del gobierno, y ya durante este, con la subsiguiente evidencia de

que sus reformas no eran tales –o bien, que no alteraban el modelo neoliberal– parece completarse el proceso consistente en la cooptación del centro y de casi toda la izquierda (histórica) por parte del neoliberalismo. Este proceso, como se viera en capítulos anteriores, comenzó durante la misma dictadura, abarcando primero al Partido Demócrata Cristiano, sobre todo al núcleo concentrado en Cieplan, y luego al conjunto de la colectividad, para continuar con el «socialismo renovado» y luego con el conjunto del Partido Socialista ya reunificado, mientras que el PPD nunca tuvo una clara definición ideológica, habiendo sido fundado como un mero partido instrumental, por lo cual distó de cuestionar seriamente los esquemas neoliberales, lo que también terminó caracterizando al Partido Radical.

El último partido grande que quedaba pendiente en ese proceso era el Partido Comunista, el que, luego de la muerte de Gladys Marín, se unió a los partidos concertacionistas, reemplazando la revolución democrática encabezada por una coalición de izquierda –que hasta entonces propiciaba– por indefinidas reformas en alianza con los partidos de la Concertación, dando lugar a la Nueva Mayoría, que accedió al gobierno el 2014. Entonces el modelo neoliberal pasó a ser administrado por la alianza formada por los partidos que antes constituyeran la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano, o sea, por los dos bloques que antes tuvieran sus propios proyectos globales y que se opusieran al de la derecha. Dicho de otra manera, ambos bloques, los partidos de la ex-Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano –en el marco de grandes cambios mundiales–, no solo dejaron de tener proyecto propio, sino que, aliados temporalmente, pasaron a administrar el de la triunfante oligarquía plutocrática y las transnacionales, aunque con cambios menores. Esto sucedió en medio de consensos transversales, todo lo cual fortaleció al neoliberalismo y a la dominación de la oligarquía plutocrática. En cuanto a la alianza del Partido Comunista con los partidos de la Concertación en la Nueva Mayoría, hay que decir que otra de sus consecuencias fue la –al menos temporal– desaparición de una izquierda autónoma de carácter anticapitalista y significación nacional, cuyo núcleo históricamente fuera el mismo Partido Comunista. Como consecuencia de ello, las propuestas antineoliberales dejaron de tener expresión política, como no fuera por fuerzas marginales.

De este modo, mirado desde un plazo más largo, pareció cerrarse el ciclo histórico iniciado durante los años cincuenta, cuando emergieran tres proyectos globales que buscaban reemplazar al modelo ISI, entonces en crisis. Según viéramos en otra parte, esos proyectos se expresaron en el plano político a través de los tres tercios –derecha, centro e izquierda– que lucharon entre sí pre-munidos de sus correspondientes apoyos sociales, pugna resuelta el 11 de septiembre con el triunfo de los grupos del gran capital. Sin embargo, el proyecto de este –el neoliberal– se legitimó solo durante los gobiernos de la Concertación, con la cual más tarde convergió el Partido Comunista formando la Nueva Mayoría, y se cerró el mencionado ciclo histórico.

La otra cara de lo dicho fue la pasividad de cierta parte de la población, la que, aunque descontenta, subyugada por los medios de comunicación ultraconcentrados, se hallaba sujeta a la hegemonía intelectual y moral de las clases dominantes, sin ser capaz, por lo mismo, de imaginar un mundo distinto, convencida de que estaba frente a un sistema que no tenía alternativa. Sin embargo, pronto los duros hechos la obligaron a replantearse de una manera radical, como se comprobó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera cuando se produjo la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019. Esa rebelión, que vino a poner de manifiesto de manera nueva el agotamiento del modelo neoliberal, traerá probablemente en un futuro no lejano la emergencia de opciones alternativas al neoliberalismo, sea a través de algunos de los partidos tradicionales, o bien mediante la emergencia de nuevas entidades políticas, en uno y otro caso, expresando los intereses de amplios sujetos populares y con el apoyo de estos, para dar así lugar a un nuevo ciclo histórico.

Epílogo

A modo de epílogo es posible hacer algunas consideraciones que sintetizan los rasgos principales que, a nuestro juicio, han caracterizado a los procesos políticos que conforman la historia del Chile reciente.

Al respecto cabe constatar que cierta historiografía conservadora ha interpretado dichos procesos en torno a la dualidad entre la nación y las entidades que desde su interior atentarían en contra de su subsistencia. Frente a tales supuestos, esa historiografía postuló que, al final, la nación, a través de sus Fuerzas Armadas, se habría impuesto, erradicando mediante la violencia a esas entidades (básicamente la izquierda), para salvarse así de su desintegración.

Tales enfoques, cien por ciento ideológicos y apriorísticos, se caracterizan por recepcionar las matrices conceptuales del pensamiento europeo de extrema derecha –las que asumidas en el país dieron lugar al pensamiento antidemocrático chileno–, dentro de cuya lógica dicotómica –la nación *versus* sus enemigos internos– cierta historiografía conservadora ha leído el proceso político nacional. En tal calidad aquella ha cumplido la función de velar la verdadera naturaleza de este.

Desde nuestra óptica, el proceso político chileno –nuestra historia reciente– se ha articulado en torno a otras lógicas, particularmente en torno a las luchas de clases verificadas desde los años cincuenta en adelante, cuyo desenlace, a través de la dictadura

cívico militar resultante del golpe del 11 de septiembre, diera lugar a la instauración del poder sin límites de los grupos económicos y las transnacionales. Este hecho fundamental pretende ser velado por la historiografía conservadora cuando identifica los intereses de la triunfante oligarquía plutocrática con los de la nación.

Por nuestra parte, difiriendo de ese enfoque apologético, consideramos que los rasgos centrales que presentara el país durante los últimos decenios podrían resumirse en los siguientes tres puntos: a) los conflictos sociales y políticos verificados desde comienzos de los años cincuenta en adelante, a partir de la crisis del modelo ISI, la que dio lugar a la emergencia de tres proyectos globales –políticamente encarnados en la derecha, el centro y la izquierda–, cuyo enfrentamiento, con la decisiva intervención estadounidense, desembocó en el golpe del 11 de septiembre y en la subsecuente dictadura entonces instaurada, la que marcó el triunfo de los grupos económicos, de Washington y de las transnacionales políticamente representados por la derecha; b) la instauración, por parte de la dictadura resultante de lo anterior, del proyecto global de los mencionados grupos económicos, esto es, el modelo neoliberal, todo en indisoluble conexión con los crímenes masivos cometidos por el régimen dictatorial, los que fueron ideológicamente preparados por las concepciones nacionalistas (esto es, por el pensamiento antidemocrático chileno) y terminaran imponiéndose entre los diversos sectores conservadores, civiles y militares; y c) la consolidación del modelo neoliberal de la dictadura a través de los gobiernos civiles advenidos a partir de 1990, los cuales, a su vez, fueron la resultante de un diseño de «transición a la democracia» elaborado e impulsado por Washington.

Tales son precisamente las cuestiones analizadas a lo largo de estas páginas. Comenzamos su abordaje tratando sobre los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar. Al intentar precisar la conexión existente entre esos crímenes y la ideología, le hemos otorgado una gran importancia al análisis del pensamiento conservador antiliberal (nacionalista y corporativista), tanto en sus expresiones civiles como militares. Nos ha parecido indispensable tener en cuenta la existencia de ese pensamiento, por cuanto, a nuestro juicio, constituyó uno de los prerrequisitos más importantes al margen de lo cual no es posible explicar la magnitud de

los crímenes cometidos por el régimen salido del golpe del 11 de septiembre. Este pensamiento permaneció durante varias décadas en la marginalidad. Solo a mediados de los años sesenta del siglo ^{xx} pasó a la primera línea de la política cuando la derecha tradicional disolvió sus partidos –el conservador y el liberal– y formó el Partido Nacional (PN), mientras que en la Universidad Católica de Santiago, bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, se constituía el gremialismo.

Las bases objetivas de esta evolución política e ideológica de la derecha tradicional se encuentran en la década anterior. En efecto, a mediados de los años cincuenta, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) –máximo organismo corporativo del gran empresariado– empezó a ver en la institucionalidad existente, y en su correspondiente sistema de partidos, importantes manifestaciones de demagogia, las cuales, a su juicio, hacían posible una excesiva influencia de los trabajadores sindicalizados, lo que se traduciría en niveles salariales incompatibles con la rentabilidad de las empresas. Dicho de otro modo, el orden institucional le pareció al gran empresariado como un importante factor estructural que obstaculizaba la acumulación del capital, a la que, por otra parte, conceptuaba como la premisa del progreso del país. A juicio de las organizaciones del gran empresariado, los obstáculos a dicho progreso también operaban por la vía de las regulaciones estatales inherentes al modelo ISI a la fecha en curso.

Consecuente con ese diagnóstico, la derecha, expresión política de los grupos económicos, se embarcó –ya en los años cincuenta– en una enérgica campaña que postulaba la instauración de un gobierno fuerte sin injerencia de los partidos, lo cual debía venir acompañado por el reemplazo del modelo ISI por otro basado en el libre mercado, la gradual apertura de la economía al exterior, la creciente inversión extranjera y el término del «Estado empresario». El Proyecto Chile, celebrado en 1955 entre la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chicago, desempeñó un papel importante en este proceso, pues dotó a mediano plazo a los grupos económicos y a la derecha de una capa de intelectuales que servirá a los propósitos de criticar y combatir tanto al modelo ISI como a los proyectos levantados casi simultáneamente por el Partido Demócrata Cristiano y la izquierda, postulando frente a ellos el modelo neoliberal que gradualmente harán suyo los grupos económicos más poderosos, aunque todavía no toda la derecha.

Dentro de ese proceso, y con un discurso antipartidos, en las elecciones presidenciales de 1958 la derecha levantó como su candidato al líder empresarial Jorge Alessandri Rodríguez, quien entonces logró imponerse, aunque por un estrechísimo margen de votos. Se instaló así el llamado «gobierno de los gerentes», el cual –por las razones indicadas a lo largo de estas páginas– no pudo reemplazar el modelo ISI ni prescindir del sistema de partidos, terminando en una gran frustración. En los años sesenta, después del fracaso del gobierno de Jorge Alessandri, se hizo casi imposible para la derecha y los grupos económicos defender su proyecto de libre mercado y de apertura de la economía al exterior, cuya otra cara era la cancelación del «Estado empresario», con sus correspondientes regulaciones contrarias a la maximización de la rentabilidad empresarial y a la acumulación del capital. Esa imposibilidad se debió al alza del Partido Demócrata Cristiano y su proyecto de cambios estructurales apoyado por los Estados Unidos, proyecto que cuestionaba, sobre todo mediante la Reforma Agraria, la estructura tradicional en el campo y le asignaba a la propiedad una función social que, a juicio de la derecha, la amenazaba. A esto venía a sumarse la politización de las clases subalternas, radicalizadas en parte por la influencia de la Revolución Cubana. A lo dicho hay que agregar la pérdida por la derecha de su ascendiente cultural, de gran parte de su base electoral y de su representación en el Congreso, cuestión que se hizo evidente ante los adversos resultados obtenidos en los comicios parlamentarios de 1965.

En tales circunstancias casi desesperadas, la derecha disolvió sus partidos históricos –el conservador y el liberal– y formó el Partido Nacional, redefiniéndose como nacionalista.

Desde esas redefiniciones la derecha acusó al orden institucional vigente y a su sistema de partidos de ser una de las causas fundamentales de lo que le parecía era una crisis nacional. Tanto el nacionalismo del Partido Nacional como el corporativismo de los gremialistas devinieron así en críticos de ese orden, más aún cuando había sido democratizado por la Democracia Cristiana, por la izquierda, y por las luchas sociales y políticas de las clases subalternas. Todo lo cual, por otra parte, había estimulado la ulterior alza de estas últimas, las que ya con antelación habían levantado proyectos societales contrarios a los intereses de los grupos económicos. De este modo, el vuelco hacia el nacionalismo y el

corporativismo llevado a cabo por la derecha fue adicionalmente inseparable del ascenso de las mencionadas clases.

El conjunto de los factores señalados fue lo que, en resumen, hizo que el orden institucional demoliberal existente en el país pasara a ser visto por los sectores conservadores como un peligro y un elemento que favorecería lo que ellos consideraban era el caos y la anarquía que supuestamente prefigurarían la disolución nacional. En tales circunstancias, la derecha, ya definida como nacionalista, comenzó a orientarse hacia soluciones contrarias al orden institucional –es decir, se hizo golpista– en función de lo cual buscó una alianza con las Fuerzas Armadas, gran parte de cuyos mandos eran formados y adoctrinados por instructores estadounidenses en la Escuela de las Américas, con su tesis sobre el «enemigo interno» (que no eran otros que los sujetos populares antimperialistas y anticapitalistas), a los que habría que destruir mediante la guerra antisubversiva.

En ese contexto, el Partido Nacional, durante la segunda mitad de los años sesenta, desplegó sus discursos sobre el caos, la anarquía, la decadencia, la disolución nacional y la supuesta acción de fuerzas internas (los partidos) al servicio de una potencia extranjera, frente a lo cual propuso la instauración de un gobierno fuerte, de orden y autoridad, que le diera facultades a las Fuerzas Armadas para participar más activamente en la administración del país para así minimizar la influencia de los partidos. Con ello el pensamiento antidemocrático chileno –con su matriz conceptual articulada en torno a la dualidad de un bien absoluto (la nación) y un mal absoluto (la izquierda) vinculado a intereses foráneos–, por decenios marginal, ahora dejaba de serlo. De tal modo, la cultura y la ideología funcional no solo al golpe, sino también a los crímenes masivos (de hecho requeridos por el gran capital para instaurar a plenitud su proyecto), quedaban instaladas.

Tales ideologías, por otra parte, recibieron un considerable estímulo de parte de las campañas del terror impulsadas por la CIA, cuyo objetivo consistía en impedir el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970. En tal contexto, en octubre de 1969, encabezado por el general Roberto Viaux Marambio, se produjo el fallido intento de golpe de Estado en contra del presidente Eduardo Frei Montalva. Fue el llamado

Tacnazo, en el que estaban involucrados importantes personajes del Partido Nacional.

El triunfo de Salvador Allende en las presidenciales de 1970 y la conformación de un gobierno de base popular, cuyo programa de perspectiva socialista cuestionaba la existencia misma de los grupos económicos, así como también el control del capital extranjero sobre nuestros recursos naturales –gobierno que adicionalmente perseguía la independencia del país respecto de los Estados Unidos y la ubicación de Chile en el bloque de los países no alineados– agudizaron todas las contradicciones, al punto de que no pudieron ser sobrellevadas por el orden institucional.

La razón fundamental de esto último se situó en la sustancial ampliación de las fuerzas que se orientaron hacia el golpe, las que ahora excedieron con mucho a la sola derecha, empeñada desde antes en ese propósito. Dentro de tales fuerzas, la principal fue el gobierno de los Estados Unidos, el cual se empeñó en el golpe, primero con el fin de evitar el ascenso de Salvador Allende a la presidencia –golpe que se materializó en octubre de 1970–, el cual, según el Informe Church, fue organizado por la CIA y altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas (los generales Camilo Valenzuela y Roberto Viaux, entre otros), a quienes hay que agregar políticos de la derecha. Esa intentona fracasó con el asesinato, por parte de los golpistas, del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército. Frustrado el golpe, de inmediato empezó a prepararse uno nuevo, cuyo objetivo era el derrocamiento de Salvador Allende, que recién ascendiera al cargo de presidente de la República. A este segundo golpe (segundo contando desde 1970 en adelante, obviamente), se terminó sumando el Partido Demócrata Cristiano, el cual desde 1962 en adelante, según el Informe Church, se hallaba financiado por la CIA; financiamiento que entonces tenía como fin ayudar a la colectividad a conquistar un gobierno que debía implementar en Chile un contramodelo progresista a la Revolución Cubana (la «Revolución en libertad»). En 1970 los Estados Unidos continuaron con ese financiamiento –que era destinado al sector conservador del partido–, pero ahora con el propósito de que la Democracia Cristiana diera su aporte al derrocamiento de Salvador Allende.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la derecha fue, por cierto, la fuerza que más se empeñó en abrir paso al golpe a través de la deslegitimación del gobierno y de la generación de la ingobernabilidad en el país, sobre todo mediante los paros de los gremios empresariales. Dicha ingobernabilidad, no obstante, no habría sido posible sin el concurso del Partido Demócrata Cristiano, cuyo sector conservador tempranamente intentó ganar a la colectividad para llevar a cabo una alianza con la derecha golpista. Por lo demás, esta fue la política impulsada por la CIA. Sin embargo, el sector más democrático de la Democracia Cristiana no era partidario del golpe ni de la alianza con la derecha, pero distó mucho de mostrarse capaz de enfrentar al sector conservador de la colectividad vinculado a los Estados Unidos; sector que, bajo la dirección de Eduardo Frei y Patricio Aylwin, se impuso llevando al partido a apoyar los paros desestabilizadores de los gremios empresariales. Cuando la base popular de este partido –ya claramente derechizada– fue ganada por la campaña del terror e influida por la crisis económica, ese decurso partidario se tornó irreversible.

Esto hizo inútiles los permanentes esfuerzos de Salvador Allende orientados a llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana para darle una base jurídicamente sólida a la conformación del Área de Propiedad Social, así como también al conjunto del proceso de cambios, consolidando a la vez el régimen institucional que la derecha y los Estados Unidos buscaban quebrar. Mientras, por su parte, el gobierno de Washington llevaba a cabo su estrategia conformada por acciones encubiertas –que contemplaban el financiamiento de los partidos de oposición– y presiones económicas dirigidas a arruinar la economía chilena; todo manteniendo una cara «fría pero correcta».

El golpe del 11 de septiembre resultante de lo anterior resolvió el conflicto político en curso en favor de la derecha y los grupos económicos (además de los Estados Unidos), no así de la Democracia Cristiana. Esta, sin embargo –aun frente a la evidencia de los crímenes que el régimen estaba cometiendo–, apoyó a la dictadura mientras creyó que los militares la llamarían y organizarían en plazos medianos nuevas elecciones que le permitirían acceder al gobierno. Pero nada de eso sucedió.

Lejos de lo esperado por la Democracia Cristiana, como consecuencia del golpe se estableció en el poder un liderazgo genocida

—heredero del pensamiento antidemocrático chileno—, el cual creó una maquinaria de destrucción conformada por los servicios de seguridad, cuya tarea consistió en destruir, a través de crímenes masivos, a las organizaciones y los liderazgos de las clases subalternas, sin lo cual el proyecto neoliberal del gran empresariado instaurado por el régimen no podría ser sólidamente implementado. En el cumplimiento de esa tarea se traspasaron todos los límites del horror: se amaestraron perros para que violaran sexualmente a detenidas y detenidos; se les extrajeron a estos uñas de pies y manos, también dientes; se les cortaron pedazos de la lengua; se les aplicó corriente eléctrica en genitales y heridas; se introdujeron ratas en la vagina de prisioneras indefensas; se quemó y degolló; se torturó a detenidos a la vista de familiares cercanos, que eran a la vez torturados a fin de presionar a los primeros; se asesinó a pausas, como en el caso de la caravana de la muerte; y se tiraron los cadáveres al mar, entre muchas otras prácticas inhumanas y degradantes. Todo ello evidenciaba un odio ilimitado hacia las víctimas, exactamente el mismo que décadas atrás los uniformados demostraron en las masacres obreras de Marusía y La Coruña, entre muchas otras.

¿Cómo explicar ese odio infinito? Solo por la ideología (nacionalista) que profesaban los perpetradores de los crímenes y sus mandantes ubicados a la cabeza del Estado; ideología que también profesaba la derecha y un sector de la población influido por esta. Ideología que había construido un enemigo, encarnación del mal absoluto, que supuestamente pretendía destruir desde adentro el bien absoluto representado por la nación, entendida como una entidad indivisa, con intereses comunes, sin conflictos internos, como no fueran los artificialmente generados por agentes al servicio de potencias extranjeras que profesaban «ideas foráneas», verdaderos destructores de la supuesta idílica originaria unidad del ser nacional. Era a esos hipotéticos agentes contrarios a la nación a quienes había que eliminar mediante la acción salvífica de las Fuerzas Armadas (formadas primero por instructores alemanes, y con posterioridad, por estadounidenses). Después de los crímenes, la nación supuestamente recuperaría su unidad y armonía intrínseca, siempre bajo la vigilante tutela de las armas de la patria. Esta era la ideología de odio que estaba detrás de los crímenes de la dictadura.

La otra cara de dichos crímenes fue la privatización de casi todo, incluyendo las empresas que el Estado había creado durante décadas a través de la Corfo, las que fueron traspasadas a los grupos económicos y a ciertos burócratas del régimen, finalmente también a las transnacionales, siempre a precios mínimos. Con ello se evidenciaba el carácter de clase de la dictadura, la que, en contraposición a su práctica antinacional, decía actuar en nombre de «la patria». Pero de lo que se trataba era de la implantación –bajo las directivas de los economistas de Chicago asimilados al régimen (y de los gremialistas en lo político)– de los esquemas neoliberales requeridos por las cúpulas del gran empresariado.

Este proceso convirtió todo en nichos de mercado y de ganancias para el gran capital, incluso la salud, la educación, la previsión social y el agua. A diferencia de antes, el Estado asumió entonces la función de creador de todas las condiciones requeridas por la reproducción ampliada del capital, y removió las barreras legales e incluso culturales, que pudieran obstaculizarla. Los crímenes masivos de la dictadura y su legislación laboral minimizaron el rol de los sindicatos, con lo cual los anteriores niveles salariales, de los que desde los años cincuenta tanto se quejaron las organizaciones corporativas del gran capital, se derrumbaron. Lo mismo sucedió con las conquistas que los trabajadores obtuvieron durante años de lucha. En lugar de ellas se impuso el trabajo precario y el despido «por necesidades de la empresa». Era el sueño dorado de los grupos económicos hecho realidad. Era su triunfo como clase, obtenido en íntima alianza con los «salvadores de la patria». Las consecuencias se evidenciarían durante los años siguientes: una inédita concentración y centralización del capital y la riqueza, y una creciente desigualdad y polarización social.

A partir de estos hechos es posible sostener que el lugar de la dictadura cívico militar en la historia del Chile reciente consistió en resolver la contradicción que por años existiera en el país entre, por un lado, el modelo ISI y la fortaleza alcanzada por el movimiento popular; y, por el otro, las necesidades de la acumulación del capital, contradicción que la dictadura resolvió en favor de esta última, tanto poniendo fin a la institucionalidad demoliberal, como mediante la realización de crímenes masivos orientados a destruir

las organizaciones sindicales y políticas de izquierda, instaurando, a la par, el modelo neoliberal que en los años anteriores los principales grupos económicos habían venido haciendo suyo. Con ello, de paso, la dictadura revertía los procesos democratizadores en curso desde fines de los años treinta, y contribuía decisivamente, a su vez, a la derrota de los otros dos proyectos globales en competencia, el del centro y el de la izquierda.

Durante los años ochenta, con un país ya transformado y convertido en un coto de caza del gran capital y de las empresas transnacionales, luego de la gran recesión de 1982, advino la crisis de la dictadura, cuya expresión principal fueron las protestas nacionales y la pérdida del monopolio de la violencia armada por parte del régimen; violencia que, en el contexto de grandes movilizaciones de masas, empezó también a ser utilizada por un sector de los opositores, sobre todo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que contribuyó a la desestabilización de la dictadura. La profundidad de la crisis del régimen que así se abrió paso obligó a los Estados Unidos a intervenir con mayor fuerza en los asuntos del país. Su objetivo fue impedir que en Chile el régimen pinocheteano fuera derribado y, como consecuencia de ello, se generara un gobierno independiente de Washington, como había ocurrido en Nicaragua e Irán en 1979. Con el propósito de evitar ese posible decurso, el gobierno estadounidense organizó una «transición a la democracia», que no fue sino un recambio neoliberal unido a la restauración de las libertades públicas, lo que en lo exterior suponía mantener a Chile en la órbita del país del Norte y subordinado a la lógica del capitalismo transnacional. Con tales objetivos, Washington, como en los años sesenta y setenta, se valió de las «fuerzas internas», correspondiéndole una vez más al Partido Demócrata Cristiano desempeñar el papel principal en ese proceso, pero ahora con el inestimable apoyo de la izquierda conversa.

La instauración de gobiernos civiles a partir de los años noventa –resultantes de la salida estadounidense a la dictadura– consolidó y legitimó, al menos por un tiempo, al modelo neoliberal y a la dominación de los grupos económicos, los que constituían una verdadera oligarquía plutocrática. Ello fue posible no solo en razón de que la dominación de dichos grupos en parte quedaba invisibilizada por lo que aparecía como la restauración de la democracia,

sino también, y sobre todo, por la conversión de la Democracia Cristiana y del grueso de la izquierda al neoliberalismo, hecho explícitamente reconocido por uno de los dirigentes concertacionistas de entonces, Edgardo Boeninger.

Tal reconversión, particularmente en lo que se refiere a la izquierda, fue facilitada por factores de orden internacional y por la desintegración de su base social –en parte debido a la fragmentación de los procesos productivos y a la minimización de los sindicatos–. En ese contexto, y marcadas por la radicalidad de la derrota que sufrieran en 1973, gran parte de las cúpulas políticas de la izquierda tradicional –unas antes y otras después–, ya sin proyecto propio, optaron por privilegiar sus intereses corporativos y el de sus clientelas y, en función de ello, se reconvirtieron política e ideológicamente. Confluyeron así con la Democracia Cristiana, primero en la Concertación y después en la Nueva Mayoría, administrando el modelo neoliberal de los triunfantes grupos económicos. En este hecho, en gran medida, reside hasta hoy la fortaleza de la dominación del gran capital y la solidez que presenta su modelo neoliberal, que, *en la práctica*, casi ningún actor relevante cuestiona como tal.

A su vez, la derecha, adecuándose a la situación, se proclamó entonces partidaria de la democracia, y abandonó –ya al finalizar la dictadura–, sus anteriores definiciones nacionalistas y corporativistas asumidas durante los años sesenta y que ahora, a diferencia de antes, se mostraban inservibles y contraproducentes. La derecha incluso se declaró respetuosa de los derechos humanos, cuya violación avalara durante los diecisiete años de la dictadura. Esta «flexibilidad» demostró una vez más que la adhesión de la derecha a tal o cual ideologismo es estrictamente instrumental y que su verdadero compromiso es con la acumulación del capital y con las premisas políticas que la optimicen, de lo cual los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría dieron plenas garantías dentro del régimen «democrático».

Al interior de esta lógica, uno de los mecanismos más importantes que aseguraba la funcionalidad de los «gobiernos democráticos» recién instaurados respecto de la acumulación del capital consistió en la virtual fusión que se produjera durante tales gobiernos entre los negocios y la política, cuando el conjunto del personal político, salvo las excepciones que anotáramos, pasó a ser financiado en

mayor o menor medida por el megaempresariado, fuera por medios legales o ilegales, en el contexto de una generalizada corrupción sistémica. En tales circunstancias el sistema de partidos experimentó un cambio cualitativo respecto a las décadas anteriores. Ese cambio consistió en que, salvo excepciones, dejó de representar los intereses y las demandas de los diversos sectores sociales, con su correlativa práctica de trasladar esas demandas al Estado en aras de su satisfacción, con la excepción, claro está, de casos puntuales que no pusieran en peligro el orden neoliberal y que dieran réditos electorales. Menos aún levantaron proyectos societales alternativos, como ocurría antaño. En lugar de ello, los partidos desarrollaron consensos transversales –al interior de los cuales procesaron sus diferencias–, consensos explícitos o implícitos, cuyo contenido fundamental era, por un lado, la mantención y administración del modelo neoliberal, cuya vigencia, *en los hechos*, distaban de cuestionar; y, por el otro, la defensa de los intereses corporativos de su personal, lo que viniera unido a extensas prácticas clientelísticas funcionales a los apoyos electorales requeridos. No es raro que la política partidista deviniera entonces en una lucha por copar –al interior del mismo proyecto societal (el de los grupos económicos)– los cargos del Estado concebidos como botín pagador. La otra cara de este fenómeno consistió en que sectores de las clases subalternas, mesocráticas y populares, huérfanas de expresión política, intentaron a veces defender algunos de sus intereses a través de movimientos sociales, al tiempo que conceptuaban a la clase política y a la institucionalidad del país en los peores términos.

Se generaba así una verdadera pérdida de legitimidad del orden institucional instaurado en los años noventa. De este modo se fue insinuando una crisis que sería también la del modelo neoliberal –agotado y corroído por la precariedad de la vida de las mayorías, la corrupción, la desigualdad y la delincuencia–; crisis que era la del conjunto de la sociedad, sumergida en una creciente anomia. En tanto que en el plano internacional –a contrapelo de los discursos «patrióticos» de las elites civiles y militares–, el país era convertido en un mero apéndice, sin verdadera soberanía, del capitalismo mundial, del que los gobiernos locales y no pocos de sus prohombres, no son sino meros «palos blancos» (como lo graficó el caso Campiche, y después el apoyo, abierto o velado, de los gobiernos chilenos y

de la gran mayoría de los políticos a la guerra híbrida que desatara Washington contra Venezuela, a lo que se suma la entrega de las riquezas nacionales al capital extranjero, entre muchos otros casos. Todo esto en el marco de una clase política endogámica que vive a costa del Estado, y de la ausencia de fuerzas morales suficientemente poderosas capaces de concebir e inspirar un camino alternativo.

En el contexto señalado, para una parte importante de los chilenos, el miedo –acicateado por la inseguridad– se convirtió en su segunda naturaleza; miedo no solo a perder su precaria fuente laboral, sino también a no poder pagar sus deudas o a enfrentar una enfermedad catastrófica cuyo tratamiento no podría financiar y que los llevaría a la ruina o a la muerte. En tanto, entre ciertos sectores de las capas medias conservadoras se verificaba un irracional temor al conflicto, cierta intolerancia frente a toda disidencia, normalmente disfrazada de apoliticismo, lo que venía unido a una inconsciente adhesión a la idea de «orden», con su correlativa adhesión a-crítica al «pensamiento único», en el marco del ya señalado desprestigio de la política y de los políticos. No es menos cierto que, en la otra cara de la moneda, sectores sociales, principalmente de trabajadores asalariados, estudiantes y otros, desarrollaron importantes luchas por sus reivindicaciones. Corriendo la segunda mitad de 2019, no obstante, incluso parte considerable de los mencionados sectores conservadores de la población, y sobre todo aquellos otros que siempre se movilizaron por sus derechos, agobiados por las insoportables consecuencias vitales que para ellos significaba el modelo de la oligarquía plutocrática y de las transnacionales, reaccionaron en contra de sus excesos más visibles a través de un masivo estallido social, que comenzó el 18 de octubre del mencionado año, como una expresión más del agotamiento y crisis del neoliberalismo en el país, estallido del cual, en los dos últimos capítulos de este libro, se expusieron algunos de sus elementos determinantes. El análisis pormenorizado de ese estallido, en todo caso, escapa de los límites temporales que nos hemos propuesto en estas páginas. De allí que tenga que ser materia de otra investigación. Tal es, en resumen, la interpretación que a través de este texto hemos intentado argumentar sobre la historia del Chile reciente.

Fuentes consultadas

- abarCa, Claudia y otras: *Frente Nacionalista Patria y Libertad (1970-1973)*, Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas, Santiago, 1993
- aCuña, Gastón; FEderiCo WillouGHby y Pablo rodriGuEz: *¿Qué es el nacionalismo hoy?*, Artimpres, Santiago, 1983.
- aGaCino, raFaEl: «Contra revolución neoliberal en crisis», *Punto Final*, núm. 848, abril de 2016.
- aICayaGa, Julián: «Aylwin y las trasnacionales mineras». <https://rebelión.org/Aylwin-y-las-trasnacionales-mineras/>.
- áIVarEz, Rolando: *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, Ed. LOM, Santiago, 2015.
- aMin, SaMir: «El imperialismo contemporáneo», *El Clarín digital*, 1ro. de febrero de 2016.
- ánGEI, alan: *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1993.
- aHuMada, JorGE: *En vez de la miseria*, Ed. Bat, Santiago, 1990.
- aIEssandri rodriGuEz, JorGE: «La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001.
- aIIEndE, SaIVador: «Primer Mensaje ante el Congreso Pleno», en *Las grandes Alamedas*, Bogotá, septiembre de 1983,
- arCE, albErto y CaMPos MEéndEz (comp.): *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.
- Archivos secretos. Documentos desclasificados de la CIA*, Ed. LOM, Santiago, 1999.

- arEndt, HannaH: *Los orígenes del totalitarismo. I. Antisemitismo*, Alianza Editorial, Madrid, 1981.
- arnEllo, Mario: *Proceso a una democracia. El pensamiento político de Jorge Prat*, Talleres Gráficos El Imparcial, Santiago, s. a.
- arratE, JorGE: *Razón y pasión del socialismo chileno*, Ed. Ornitorrinco, Santiago, 1989.
- : *Exilio, textos de denuncia y esperanza*, Ed. Documentas, Santiago, 1987.
- : *La fuerza democrática del ideal socialista*, Ediciones Documentas, Santiago, 1985.
- arriaGada, GEnaro: «El pensamiento político de los militares. Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISEC)», en Eduardo Devés y otros (comp.): *El pensamiento chileno en el siglo xx*, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
- bErMan, MarsHall: *Brindis por la modernidad, en Nicolás Casullo: El debate sobre la modernidad*, Punto Sur Editores, Buenos Aires, 1989.
- bitar, sERGio: *El gobierno de Allende. Chile 1970-1973*, Ed. Pehuén, Santiago, 2013.
- boron, atilio: *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2014.
- braVo lira, bErnardino: *Una historia jamás contada. Chile, 1811-2011. Cómo salió dos veces adelante*, Ed. Origo, Santiago, 2016.
- brodErsoHn, VíCtor: «Sobre el carácter dependiente de la burguesía industrial», en *Chile, hoy*, Siglo XXI Editores, Santiago, 1970.
- brunnEr, José Joaquín: *Un espejo trizado*, Flacso, Santiago, 1988.
- CabiESEs donoso, ManuEl: «La revolución necesaria (III). Luz que agoniza», *Punto Final*, núm. 848, abril de 2016.
- CáCEREs, Gonzalo: «El neoliberalismo en Chile: implantación y proyecto. 1956-1980», *Revista Mapocho*, núm. 36, segundo semestre de 1994.
- Calloni, StElla y VíCtor EGo duCrot: *Recolonización o independencia, América Latina en el siglo xxi*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2004.
- Candia, ViViana: «Quiénes son los mecenas de la política chilena», *La Segunda*, <http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/04/737898/los-mecenas-de-la-politica>, 14 de abril de 2012.

- CaPutO, Orlando y GraCiEla GalarCE: «La entrega al extranjero del cobre que nacionalizó Salvador Allende», en L. Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, Ed. Usach, Santiago, 2012.
- CaVallo, asCanio: *Historia oculta de la transición*, Ed. Grijalbo, Santiago, 1998.
- CaVallo, asCanio, OsCar SEPÚlVEda PaCHECo y ManuEl Salazar SalVo: *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época, 1973-1988*, Ed. Grijalbo, Santiago, 2002
- CHEyrE, Juan EMilio: «Ejército de Chile: el fin de una visión», *La Tercera*, 5 de noviembre de 2004.
- CorrEa, SoFía: *Con las riendas del poder, la derecha chilena en el siglo xx*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2004.
- CorrEa, SoFía y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001.
- CorValán lEPE, Luis: *Tres periodos de nuestra vía revolucionaria*, Verlag Zeit im Bild, Berlín, 1982.
- CorValán MarquEz, Luis: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, Santiago, Ed. CESOC, 2000.
- : *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2002.
- : *Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo xx en Chile*, Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago, 2009.
- (comp. y pról.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, Ed. USACH, Santiago, 2012.
- : *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo*, Ceibo Ediciones, Santiago, 2012.
- : «Nacionalismo y corporativismo durante la década de los treinta y comienzos de los cuarenta en Chile», *Izquierdas*, núm. 18, marzo de 2014.
- : «Identidad, ideología y política en el Movimiento Nacional Socialista de Chile, 1932-1938», *Izquierdas*, núm. 25, octubre de 2015.
- Cristi, rEnato: *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, Ed. LOM, Santiago, 2000.
- Cristi, rEnato y Carlos ruiz: *El pensamiento conservador en Chile*, Ed. Universitaria, Santiago, 1992.

- daHsE, FErnando: *Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*, Ed. Aconcagua, Santiago, 1979.
- dáValos, Pablo: *La democracia disciplinaria. El proyecto posliberal para América Latina*, Ed. Quimantú, Santiago, 2013.
- dE MaEztu, raMiro: *Defensa de la hispanidad*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1975.
- dEutsCHER, isaaC: *Stalin. Biografía política*, Ed. Era S. A., México, 1965.
- dE la Cuadra Poisson, JorGE: «A los compañeros de la Milicia Republicana», *Boletín de la Milicia Republicana*, noviembre de 1932.
- donoso Cortés, Juan: *Escritos políticos*, Ed. Riald, Madrid, 1954.
- dorat GuErra, Carlos y MauriCio WEibEl baraHona: *Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura*, Ed. Ceibo, Santiago, 2012.
- droz, JaCquEs: *Historia general del socialismo*, Ed. Destino, Barcelona, 1983.
- EdWards, alBerto: «Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos», en Cristian Gazmuri (comp.): *El Chile del centenario, los ensayistas de la crisis*, Instituto de Historia, PUC, Santiago, 2001.
- : *La fronda aristocrática en Chile*, Ed. Universitaria, Santiago, 1982.
- EnCina, FranCisCo: *Portales*, Ed. Nascimento, Santiago, 1964.
- Fariás, ViCtor: *Los nazis en Chile*, Ed. Seix Barral, Barcelona, 2000.
- FASIC: *Colección documentos. Transición y democracia. Operativo Cóndor. Terrorismo y genocidio, juzgado no. 5, Audiencia nacional, Madrid, España, 1998*, Santiago de Chile, 1999.
- Fazio, HuGo: *El mundo del 1 %, 0.1 %, 0.01 %*, Ed. Usach, Santiago, 2014.
- Fazio, HuGo y MaGaly Parada: *Veinte años de política económica de la Concertación*, Ed. LOM, Santiago, 2010.
- Fontana, JosEP: *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Ed. Pasado & Presente, Barcelona, 2005.
- FoxIEy, alEJandro: «Algunas condiciones para una democracia estable», *Estudios CIEPLAN*, diciembre de 1982.
- FrEi, Eduardo: *El mandato de la historia y las exigencias del porvenir*, Ed. ICLA, Colombia, s. a.
- : *América Latina: opción y esperanza*, Ed. Pomaire, Barcelona, 1977.

- : «Discurso de la Patria Joven», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2003.
- FuEntEs, Claudio: *La transición de los militares*, Ed. LOM, Santiago, 2006.
- : «El gobierno plutocrático en la sombra», <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/02/01/el-gobierno-plutocratico-en-la-sombra/>, 1ro. de febrero de 2016.
- GáratE CHatEau, ManuEl: *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2014.
- GarrEtón, ManuEl antonio: *Reconstruir la política*, Ed. Andante, Santiago, 1987.
- : *Neoliberalismo corregido y progreso limitado. Los gobiernos de las Concertación en Chile, 1990-2010*, Editorial Arcis, Clacso, Santiago, 2012.
- GaudiCHaud, FranCk (coord.): *El volcán latinoamericano. Izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo*, Ed. Escaparate, Chile, 2011.
- GazMuri, Cristian: *Eduardo Frei y su época*, Ed. Aguilar, Santiago, 2000.
- GazMuri, Cristian y otros: *Perspectiva de Jaime Eyzaguirre*, Ed. Aconcagua, Santiago, 1977.
- GóMEz lEyton, Juan Carlos: *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990-2010)*, Editorial Arcis-Clacso, Santiago, 2010.
- GónGora, Mario: *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx*, Ed. Universitaria, Santiago, 2006.
- GonzálEz, Eduardo: «Las derechas chilenas», tesis de grado, Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, 2007.
- GonzálEz, MóniCa: *La conjura. Los mil y un días del golpe*, Ediciones B, Santiago, 2000.
- GonzálEz MEyEr, Raúl y Marilú trautMann: «Chile en manos extranjeras», en Luis Corvalán Marqunez (comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, ed. cit.
- GonzálEz Von MaréEs, JorGE: *El mal de Chile, sus causas y sus remedios*, Talleres Gráficos Portales, Santiago, 1940.
- : *Pueblo y Estado*, Imprenta y Litografía Antares, 1936.

- González Von Marés, Jorge: *La mentira democrática*. Versión taquigráfica del discurso pronunciado por Jorge González von Marés en Concepción el 7 de diciembre de 1936, con motivo de la Tercera Concentración del Movimiento Nacional Socialista. Imprenta La Ilustración, Santiago, s. a.
- Grayson, George: *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Ed. Francisco de Aguirre, Santiago, 1968.
- Herrero, Javier: Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971.
- Hitler, Adolf: *Mi lucha*, Ed. Moderna, Buenos Aires, s. a.
- Holzapfel G., Manuel: «Michelle Bachelet y su nuevo cargo en la ONU», *Rebelión*, 18 de agosto de 2018, <https://contralapropagandamediatica.blogspot.com/2018/08/michelle-bachelet-y-su-nuevo-cargo-en.html>.
- Huneeus, Carlos: *El régimen de Pinochet*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2002.
- : *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*, Ed. Taurus, Santiago, 2014.
- Jobet, Julio César: *El Partido Socialista de Chile*, 2 tt., Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971.
- Kapuscinski, Ryszard: «La cacería del otro», *Le Monde Diplomatique*, junio de 2001.
- Kornbluh, Peter: *Pinochet: los archivos secretos*, Ed. Crítica, Barcelona, 2004.
- Labarca, Eduardo: *Corvalán 24 horas. El PC chileno por fuera y por dentro*, Ed. Quimantú, Santiago, 1972.
- : «El golpe por dentro. Apuntes para una investigación», *Revista Araucaria de Chile*, núm. 1, 1978.
- LaGos H., Humberto: *El general Pinochet y el mesianismo político*, LOM, Santiago.
- Larraín, Rodrigo: «De cómo la posmodernidad impacta a la ciencia y a la religión», *CPU*, núm. 68.
- Lechner, Norbert: *Un desencanto llamado posmoderno*, Santiago, Ed. Del Ornitorrinco, 1988.
- Lubetich Vargas, Iván: «El Partido comunista de Chile, joven combatiente de 100 años. Ensayos de historia política y social de Chile», Santiago, 2013 (inédito).

- luzzani, tEIMa: *Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica*, Ed. Debate, Buenos Aires, 2012.
- lyotard: «Quién era la postmodernidad», en Nicolás Casullo: *El debate sobre la modernidad*, Punto Sur Editores, Buenos Aires, 1989.
- Maldonado, Carlos: *Entre la reacción civilista y el constitucionalismo formal: las Fuerzas Armadas chilenas en el periodo 1931-1938*, Documentos de trabajo núm. 55, Flacso, 1988.
- : *La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile, 1932-1936*, Flacso, Santiago, 1988.
- : *Acha y la proscripción del Partido Comunista en Chile, 1946-1948*, Programa Flacso Chile, núm. 60, marzo de 1989.
- : «Acercas de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945», *Estudios Sociales*, Corporación Promoción Universitaria (CPU), núm. 73, trimestre 3, Santiago, 1992.
- MCSHERry, J. PatriCE: *Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Ed. LOM, Santiago, 2009.
- MaGnEt, aIEJandro: *Nuestros vecinos justicialistas*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1953.
- Manns, PatriCio: *Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999)*, Ed. Sudamericana, Santiago, 1999.
- MaquiaVELO, NiColás: *El príncipe*, Ed. Ercilla, Santiago, 1988.
- MarCusE, HErbErt: *El miedo a la libertad*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1959.
- MartínEz Gallardo, aIEJandro: «Opinión: la paradoja de Chile, el país más depresivo del mundo», *El Mostrador.cl*, 22 de abril de 2016.
- Marx, Carlos: *El manifiesto del Partido Comunista*, Ed. Sarpe, Madrid, 1983.
- MEyEr, tHoMas: *El socialismo democrático, 36 tesis*, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, 1982.
- Millas, Orlando: «Memorias», *La Época*, Santiago, 11 de septiembre de 1994.
- Morandé, PEdro: «Cultura y modernización en América Latina», *Cuadernos del Instituto de Sociología*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1984.
- Moulian, toMás: *Socialismo y democracia*, FLACSO, Santiago de Chile, 1983.

- Moulian, toMÁS: *Chile actual, anatomía de un mito*, Ed. LOM, Santiago, 1997.
- : *El consumo me consume*, Ed. LOM, Santiago, 1998.
- Muñoz, VíCtor: *Historia de la UDI. Generaciones y cultura política (1973-2013)*, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2016.
- núñEz, natiE y JaVier lillo: *Hacia un nuevo modelo político. El pensamiento político económico de la derecha: un estudio de la Revista Economía y Sociedad (1978-1989)*, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 2016.
- OrtEGa FrEi, EuGENio: *Historia de una alianza*, CED-CESOC, Santiago, 1992.
- Ortiz Muñoz, PEdro: «La misión de las Fuerzas Armadas», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.
- Ortiz, Edison: «Cristian Riquelme, la G-90 y los 'jaleros' del poder», <http://www.elmostrador.cl>, 17 de febrero de 2016.
- : «Un cuarto de siglo después: La retórica de la transición en bancarrota», *El Mostrador digital*. <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/11/un-cuarto-de-siglo-despues-la-retorica-de-la-transicion-en-bancarrota/>, 11 de marzo de 2016.
- Otano, RaFaEl: *Nueva crónica de la transición*, Ed. LOM, Santiago, 2006.
- PalaCios, niColás: *Raza chilena, Imprenta y litografía alemana*, Valparaíso, 1904.
- PEnaGlia, FranCESCo: «En miras al 1 de mayo: ¿rearticulación de los contenidos clasistas?», *El Mostrador.cl*, 30 de abril de 2016.
- PÉRÉz, aníbal: *La UDI tras el telón. Agitación social, lavinismo y clientelismo. El caso de Reginato en Viña del Mar*, Ed. América en Movimiento, Santiago, 2016.
- : «Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista», Universidad de Valparaíso, Facultad de Humanidades, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, agosto de 2010.
- PÉRÉz GuERRa, arnaldo: «Miserias de la salud pública», *Punto Final*, núm. 864, noviembre de 2016.
- PEtras, JaMEs: *El nuevo orden criminal*, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2003.
- : «Las nuevas formas del imperio Estados Unidos y América Latina en tiempos de Obama», en Franck Gaudichaud (coord.):

El volcán latinoamericano: izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo, Ediciones Escaparate, Concepción, Chile, 2011.

PinoCHET, auGusto: *Visión futura de Chile*, clase magistral del presidente de la República, general de ejército Augusto Pinochet Ugarte, con motivo de la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, 6 de abril de 1979. División Nacional de Comunicación Social.

———: «Repaso de la agresión comunista a Chile», *La Nación*, Santiago, 1986.

———: «Discurso de Chacarillas», en Sofía Correa y otros: *Documentos del siglo xx chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001.

PonoMARIOV, boris y otros: *Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética*, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1960.

PortalEs, FEliPE: *Los mitos de la democracia chilena, vol. II, Desde 1925 a 1938*, Ed. Catalonia, Santiago, 2010.

———: «Gobiernos de la Concertación: colofón de un bicentenario excluyente», en Luis Corvalán Marquez (pról. y comp.): *Centenario y bicentenario, los textos críticos*, Ed. Usach, Santiago, 2012.

———: «Chile: sistema corrupto», *El Mostrador digital*, <http://www.elmostrador.cl>, 2 de marzo de 2016.

Prats, Carlos: *Memorias. Testimonio de un soldado*, Ed. Pehuén, Santiago, 1985.

Prat, JorGE: «Chile ¿Democracia sana?», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

———: «Chile, problema de juventud», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

———: «Hacia un nuevo estilo», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

———: «Indiferencia culpable», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

———: «Política nacional y joven para Chile», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

———: «Sentido de Patria», en VV. AA.: *Pensamiento nacionalista*, Ed. Gabriela Mistral, Santiago, 1974.

PriMo dE RiVEra, José antonio: *El pensamiento de José Antonio. Introducción y sistematización de textos por Agustín del Río Cisneros*, Ediciones del Movimiento, Madrid, 1971.

- «Proyecto Internacional de Derechos Humanos», Londres©, 1996-2015. Info@memoriaviva.com.
- PuCCio, OsValdo: *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado*, Ed. Emisión, Santiago, 1985.
- QuiroGa, PatriCio: «El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas», *Revista Andes*, núm. 1, septiembre de 1984.
- raMírEz nECoCHEa, HErnán: «El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970», *Revista Araucaria*, núm. 1, 1978.
- : *Origen y formación del Partido Comunista de Chile*, Ed. Progreso, Moscú, 1984.
- raVanal, ZEPEda, luis y FranCisCo Marín Castro: *Allende «Yo no me rendiré». Investigación histórica y forense que descarta el suicidio*, Ed. Ceibo, Santiago, 2013.
- rEbollEdo, JaViEr: *La danza de los cuervos : el mocito y el destino final de los detenidos desaparecidos*, Ceibo Ediciones, Santiago, 2012.
- REGalado, RobErto: *América Latina entre siglos*, Ed. Ocean Sur, La Habana, 2006.
- rEtaMal, Julio: «La posmodernidad y el fin de la historia» (fragmentos del discurso de incorporación a la Academia de la Historia), *El Mercurio*, 17 de mayo de 1992.
- riEsCo, ManuEl: *Nueva previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile*, Ed. USACH, CENDA, Santiago, 2014.
- SabroVsky, Eduardo: *Hegemonía y racionalidad política contribución a una teoría democrática del cambio*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1988.
- Salazar, ManuEl: «La historia que la DC prefiere olvidar», *Punto Final*, edición 631, 29 de diciembre de 2006.
- : *Las letras del horror, t. I, La Dina*, Ed. LOM, Santiago, 2011.
- : *Las letras del horror, t. II, La CNI*, Ed. LOM, Santiago, 2012.
- : «Auge y caída de la UDI», *Punto Final*, núm. 848, abril de 2016.
- SaManiEGo, auGusto: «Estructura y estrategia de la Central Única de Trabajadores (CUT) 1969-1972», *Cuadernos de Humanidades*, núm. 17, Facultad de Humanidades de la Usach.
- SEnado dE los Estados Unidos: «Acciones encubiertas en Chile», en Cristian Opaso (comp. y trad.): *Frei, Allende y la mano de la CIA: informes del Senado de los Estados Unidos*, Ed. Ornitorrinco, Santiago, s. a.

- SCHmitt, Carl: *Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía*, Ed. Struhart & Cia, Buenos Aires, 1985.
- SPEnGIEr, OsWald: *Años de decisión*, Ed. Ercilla, Santiago, 1937.
- Staub, ErVin: *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- tELLEz, índaliCio: *Recuerdos militares*, Imprenta del Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1949.
- tironi, EuGENio: «El modelo americano», *La Tercera*, Santiago, 3 de agosto de 2000.
- toMiC, radoMiro: «A qué obligan las rectificaciones», *El Siglo*, 30 de agosto de 1973.
- torrEs, OsValdo: «El pulpo del imperialismo», *El Mostrador digital*, 18 de diciembre de 2010, <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/12/18/el-pulpo-del-imperialismo/>.
- ValdiVia, VeróniCa: *Nacionalismo e ibañismo*, Serie de Investigaciones, núm. 8, Universidad Blas Caña, 1995.
- : *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas*, Serie de Investigaciones, núm. 11, Universidad Blas Caña.
- : *El golpe después del golpe*, Ed. LOM, Santiago, 2003.
- : *Las Milicias Republicanas. Los civiles en armas. 1932-1936*, DIBAN y Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 1992.
- : *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*, Ed. LOM, Santiago, 2008.
- ValdiVia, VeróniCa y otros: *Su revolución contra la nuestra. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*, Ed. LOM, Santiago, 2006.
- : *Su revolución contra la nuestra, vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta*, Ed. LOM, Santiago, 2008.
- ValEnCia aVaria, Luis: *Anales de la República*, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1986.
- ValEnzuEla, arturo: *El quiebre de la democracia en Chile*, Flacso, Santiago, 1989.
- ValEnzuEla, EstEban: *La conversión de los socialistas chilenos*, Ed. El Desconcierto, Santiago, 2014.
- Varas, auGusto: *Chile, Democracia, Fuerzas Armadas*, Flacso, Santiago, 1980.

- VaRgas RoJas, VanEsa: «El legado de sangre mapuche que dejó Bachelet», *El Desconcierto.cl*, 11 de noviembre de 2013, <https://www.eldesconcierto.cl/2013/11/13/el-legado-de-sangre-mapuche-que-dejo-bachelet/>.
- VErduGo, PatriCia: *Los zarpazos del puma*, Ed. CESOC, Santiago, 1989.
- Vial, Gonzalo: *Historia de Chile (1891-1973), t. II*, Ed. Santillana, Santiago, 1981.
- : *Historia de Chile. Triunfo y decadencia de la oligarquía (1891-1920), vol. II*, Editorial Santillana, Santiago, 1983.
- : *Historia de Chile (1891-1973), vol. III, Arturo Alessandri y los golpes militares*, Ed. Zig-Zag, Santiago, 2001.
- ViCuña FuEntEs, Carlos: *La tiranía en Chile*, Ed. LOM, Santiago, 2002.
- VodanoViC, HErnán: *Un socialismo renovado para Chile*, Ed. Andante, Santiago, 1988.
- WEibEl, MauriCio: *Traición a la patria: «Milicogate». El millonario desfalco de la Ley del Cobre. La historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile*, Ed. Aguilar, Santiago, 2016.
- WEiIMar, a.: «La dialéctica de modernidad y post-modernidad», en Nicolás Casullo: *El debate sobre la modernidad*, Punto Sur Editores, Buenos Aires, 1989.
- ZaMora dElGado, SErGio: «Santiago es la ciudad más enferma del mundo», *Diario Uno*, 4 al 10 de julio de 2010.
- ZaVala, José: «Diez años después. Entretelones del Acuerdo Nacional. Apuntes para cuando se escriba la historia», *La Segunda*, 26 de julio de 1995.
- ZúñiGa, José: «AES-GENER y la Nueva Mayoría: una relación destructiva», *Rebelión*, 27 de noviembre de 2015.

Documentos

- CoMité CEntral dEl Ps: «Documento de marzo de 1974», mimeografiado.
- «Dossier documental», *Revista Chile-América*, núm. 4, 1975.
- «El Movimiento Nacional Socialista de Chile: declaraciones fundamentales, plan de acción, organización, programa», <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8960.html>.

- Gobierno de Chile: «Declaración de principios», marzo de 1974.
- Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Secretaría de Comunicación y Cultura. Ministerio Secretaría General de Gobierno, Santiago de Chile, marzo de 1991.
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): «Declaración de principios», en Igor Goicovic: *Movimiento de Izquierda Revolucionario*, Ediciones Escaparate, Concepción, Chile, 2012.
- Partido Comunista de Chile: «Programa del Partido Comunista de Chile», aprobado el 2001, <http://www.pcchile.cl/documentos/programa.pdf>.
- Partido Nacional: *Declaración de principios*, s. n., s. l., s. a.
- : *La Nueva República: respuesta al desafío de Chile*, Santiago, 1970.
- PDC: «Declaración de principios del Partido Demócrata Cristiano», en George Grayson: *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, Santiago de Chile, 1968.
- «Programa de gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018», www.sudere.gov.cl/sala-de-prensa/programa-de-gobierno-Michelle-Bachelet-2014-2018-2.
- «Programa de la Concertación», <http://77www.archivopatricioaylwin.cl/xmlui/handle/123456789/7626>
- Programa de la Unidad Popular*. Editorial 30 años, s. a. Biblioteca nacionaldigital.gob.cl/visor/BND:7738.

Índice

Introducción 11

1. 12

2. 12

3. 16

4. 18

5. 22

CAPÍTULO 1

Dos palabras acerca de los crímenes masivos de la dictadura
cívico militar 23

Marta Ugarte 24

La operación Retiro de Televisores 32

Las interrogantes 33

CAPÍTULO 2

Los crímenes masivos desde el Estado. Una explicación
posible 37

Las raíces del mal, según Ervin Staub 37

Origen de las motivaciones de los genocidios: difíciles
condiciones de vida y cultura 38

La creación de chivos expiatorios por la cultura 39

El cumplimiento de las condiciones para el genocidio 40

El liderazgo genocida: ideología y psicología	41
Temáticas complementarias	42
«Bien absoluto» <i>versus</i> «mal absoluto»: la lógica de los crímenes masivos desde el Estado	44

CAPÍTULO 3

La democracia como antivalor	47
Rasgos principales del pensamiento conservador antiliberal	48
El conservadurismo antiliberal español	50
Conservadurismo antiliberal alemán	54
La recepción del conservadurismo antiliberal español y alemán en Chile	57
La derecha chilena y su recepción del ideologismo conservador antiliberal	58

CAPÍTULO 4

Las Fuerzas Armadas: algunos hitos de una trayectoria histórica	61
La acción de los instructores alemanes	61
La acción estadounidense	70

CAPÍTULO 5

Profesionalización e ideologización en el ejército chileno. Los orígenes de su ascensión del concepto de enemigo interno	73
La profesionalización del ejército chileno por instructores prusianos	74
La recepción del doctrinarismo de los instructores prusianos	74
Características del ejército alemán de fines del siglo ^{xix} y comienzos del ^{xx}	77
El ideologismo recepcionado por los militares chilenos	80
Conclusiones	84

CAPÍTULO 6

Las masacres de La Coruña y Marusía: un fruto de las concepciones conservadoras antiliberales en Chile	87
Marusía	88
La Coruña	90

CAPÍTULO 7

Notas sobre el pensamiento antidemocrático civil en Chile:

La derecha nacionalista y corporativista hasta 1958	97
La derecha nacionalista	100
El nacionalismo en la posguerra: Estanquero y Acción Chilena Anticomunista	110
El nacionalismo y el segundo gobierno de Ibáñez	121
Conclusiones	124

CAPÍTULO 8

El paso del pensamiento antidemocrático a la primera línea de la política durante la segunda mitad del siglo ^{xx} y sus consecuencias 127

Los comienzos del siglo ^{xx}	127
El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)	128
La crisis del modelo ISI	131
Diagnóstico y proyecto alternativo del gran empresariado	133
El proyecto Chile	137
Los otros proyectos y sus consecuencias para el gran empresariado y la derecha	139
Las elecciones presidenciales de 1958	141
El «gobierno de los gerentes»	142
Hacia la crisis de la derecha	144
La ofensiva final y el triunfo de la oligarquía	159

CAPÍTULO 9

La rearticulación posibañista del nacionalismo y del corporativismo 165

Tradicionalismo y nacionalismo antes de 1964	167
--	-----

CAPÍTULO 10

El Partido Demócrata Cristiano en los planes de los Estados Unidos y algunos textos representativos de la conversión de la derecha tradicional al nacionalismo 171

La influencia estadounidense en el Partido Demócrata Cristiano	172
--	-----

La metamorfosis conservadora antiliberal de la derecha según sus documentos	177
<i>La Nueva República</i> : consolidación del nacionalismo y del antiliberalismo en el Partido Nacional	180
Las otras organizaciones nacionalistas: gremialismo, Tradición, Familia y Propiedad, y Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista	186
La irrupción del nacionalismo de derecha en el Ejército: hacia el golpe de Estado	188
Los comicios presidenciales de septiembre de 1970 y la actitud de la derecha	190

CAPÍTULO 11

El gobierno de la Unidad Popular y la izquierda	193
El programa de la Unidad Popular	193
La izquierda chilena	198
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	203
La vía chilena de Salvador Allende	205

CAPÍTULO 12

La intervención de los Estados Unidos como factor del quiebre de la democracia en Chile según los documentos estadounidenses	209
Una constatación previa	210
Primera fase: desde el 4 de septiembre al 4 de noviembre de 1970	211
Segunda fase: reformulación de la política estadounidense hacia Chile	224
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional	227
Tercera fase: desde la reformulación de la política estadounidense hacia Chile y el 11 de septiembre	231
Conclusiones	250

CAPÍTULO 13

La derecha durante el gobierno de la Unidad Popular	253
El Partido Nacional	253
La extrema derecha nacionalista y corporativista	265
El empresariado	270

La complementariedad de las estrategias de los nacionalismos
y corporativismos 273

CAPÍTULO 14

La decisiva responsabilidad del Partido Demócrata Cristiano
en el quiebre institucional de 1973 277

La tesis de Arturo Valenzuela sobre el papel del Partido
Demócrata Cristiano en el golpe
del 11 de septiembre 278

La importancia del Partido Demócrata Cristiano
para los Estados Unidos 279

Los tres diseños golpistas de la oposición
a Salvador Allende 281

Los inicios de la relación entre el Partido Demócrata Cristiano
y los Estados Unidos 284

El Partido Demócrata Cristiano entre el 4 de septiembre
y el 4 de noviembre de 1970 285

Durante el gobierno de Salvador Allende 288

Conclusiones 313

CAPÍTULO 15

Notas sobre la izquierda durante el gobierno
de Salvador Allende 317

Las diferencias entre el Partido Comunista
y el Partido Socialista durante el gobierno
de Salvador Allende 318

Tomic y Fuentealba: la posición del sector
democrático del Partido Demócrata Cristiano 327

La salida plebiscitaria de Salvador Allende 328

La última crisis 329

Las tropas que asaltan La Moneda dan muerte
al presidente Allende 333

CAPÍTULO 16

Liderazgo genocida, maquinaria de destrucción y *continuum*
de destrucción 337

Liderazgo genocida, maquinaria de destrucción
y *continuum* de destrucción 338

El liderazgo genocida	339
La maquinaria de destrucción	342
La casi ausencia de <i>bystanders</i>	348
Los encargos estadounidenses al Partido Demócrata Cristiano pos 11 de septiembre	350
Otro factor a considerar: la dependencia económica del Partido Demócrata Cristiano respecto de los Estados Unidos	359
Los objetivos particulares del Partido Demócrata Cristiano	361
El <i>continuum</i> de destrucción	362

CAPÍTULO 17

Ideología antiliberal y conflicto entre neoliberalismo, corporativismo y nacionalismo al interior de los apoyos a la dictadura	379
El ideologismo conservador antiliberal del régimen	379
La imposición del neoliberalismo y la desaparición del nacionalismo y del corporativismo	386
Crisis y disolución del nacionalismo como corriente políticamente organizada	390

CAPÍTULO 18

Lugar de la dictadura cívico militar en la historia de Chile contemporáneo	395
Las Fuerzas Armadas no decidieron sobre el proyecto: su papel fue instrumental	395
La dictadura cívico militar como expresión de los intereses de los grupos económicos	398
La importancia de los civiles al interior de la dictadura	402
Augusto Pinochet concentra el poder en sus manos	407
Lugar de los gremialistas y de los Chicago Boys dentro de la dictadura y el proyecto de cooptación de las clases subalternas	409
El proyecto económico y su ejecución práctica	415
El proyecto político	427
La Constitución de 1980	434
Lugar de la dictadura cívico militar en la historia de Chile reciente	438

CAPÍTULO 19

- El viraje del Partido Demócrata Cristiano:
orígenes de la idea de Concertación 443
 La idea de Concertación en el Partido Demócrata
 Cristiano 444

CAPÍTULO 20

- Los inicios de la izquierda conversa 453
 Los antecedentes históricos 455
 La crisis (1973-1979) 459
 La división del Partido Socialista: el proceso de convergencia
 y renovación (1979-1983) 469
 El triunfo de la renovación en el Partido Socialista:
 el Congreso de unidad y el derrumbe
 de los no renovados 478
 ¿Renovación o cambio de identidad? 481

CAPÍTULO 21

- La evolución del Partido Comunista: hacia la política
de rebelión popular de masas 485
 Frente antifascista y «vacío histórico» 485
 El Frente Anti-fascista y «Nuestro proyecto
 democrático» 487
 La política de rebelión popular de masas 490
 El Frente Patriótico Manuel Rodríguez 494

CAPÍTULO 22

- La derecha: el retorno a la forma «partido» 497

CAPÍTULO 23

- La crisis de la dictadura de las Fuerzas Armadas y la mano
de los Estados Unidos en la imposición
de un recambio neoliberal 503
 La crisis de la dictadura militar y la actitud de los Estados
 Unidos frente a ella 504
 El contexto de la intervención estadounidense en Chile:
 la revolución conservadora de Ronald Reagan 506
 La conexión vaticana 508

El diseño político estadounidense	511
El Acuerdo Nacional	512
La implementación práctica del diseño estadounidense	512
El fracaso del Acuerdo Nacional: del «año decisivo» a la visita decisiva	518
La oposición se pliega a la salida plebiscitaria	522
La mano de los Estados Unidos en el plebiscito	524
El 5 de octubre: misión cumplida	529
Epílogo	532

CAPÍTULO 24

Gobiernos de la Concertación: consolidando lo instaurado con sangre	537
El Carmengate y el triunfo de Patricio Aylwin	537
El verdadero contenido de la transición	539
Algunos antecedentes sobre la negociación pre 1988	540
Un aspecto oscuro de la negociación: la entrega de las mayorías parlamentarias	543
El reconocimiento de la Concertación por el gran capital	546
Algunas medidas adicionales adoptadas por los gobiernos concertacionistas a fin de dar garantías a los poderes fácticos	552
La profundización del modelo neoliberal bajo la Concertación	556
La desnacionalización del cobre y otras áreas de la economía	561
Posteriores declaraciones proneoliberales de representantes concertacionistas	565
La clase vencedora	568
Las determinantes internacionales de los gobiernos de la Concertación: el capitalismo transnacionalizado	569
El caso de América Latina	574
La apología de la transición por los organismos internacionales y las fuerzas conservadoras internas	580
Los gobiernos de la Concertación como gobiernos proimperialistas	583

¿Crecimiento y equidad?	587	
Los cambios culturales del neoliberalismo		591
Los cambios culturales del neoliberalismo y la clase política	592	
Las elecciones	597	
La corrupción	598	
La reforma constitucional de 2005	600	
CAPÍTULO 25		
Hacia la crisis	603	
La Nueva Mayoría	611	
El segundo gobierno de Bachelet		623
El fin de un ciclo histórico	652	
Epílogo		
	655	
Fuentes consultadas		
	669	
Documentos	680	

El presente libro propone una interpretación de la historia contemporánea de Chile centrada en un intento por explicar los factores ideológicos y políticos, nacionales e internacionales, que desembocaron en la dictadura pinochetiana y en los crímenes masivos cometidos por esta. Pretende demostrar que existió una fuerte conexión entre esos crímenes y ciertas ideologías (nacionalistas y corporativistas), las cuales, profesadas desde comienzos de siglo xx por determinados sectores conservadores –civiles y militares–, se mantuvieron por mucho tiempo en la marginalidad. En estas páginas se analiza su evolución, a la vez que se argumenta que ellas, ante el alza de las luchas populares durante la segunda mitad de los sesenta, fueron asumidas por la derecha en su conjunto, la que renunció a las concepciones demoliberales. De tal modo, las mencionadas ideologías pasaron desde la marginalidad a la centralidad, justificando el golpe y la dictadura, y evidenciando que la democracia chilena tenía pies de barro.

A los efectos de demostrar esta tesis, el texto procede a reconstruir la historia política de Chile de la segunda mitad del siglo xx y de las primeras dos décadas del siglo xxi. En ese marco, estudia la «transición a la democracia» que fuera operada por los Estados Unidos, y analiza el papel de los gobiernos «democráticos» resultante de ella, demostrando que su función histórica fue consolidar el proyecto neoliberal implantado por la dictadura.

LUIS CORVALÁN MARQUEZ es profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso; es magister en Historia por la Universidad de Santiago y doctor en Estudios Americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la misma universidad. Ha investigado la historia política y de las ideas de Chile y Latinoamérica contemporáneas. Ha publicado los siguientes libros: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*; *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*; *Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo xx en Chile*; *Manuel Rodríguez, más allá del mito*; *Centenario y bicentenario, los textos críticos*; *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo*; *Ensayos sobre la lucha por un pensamiento propio en Nuestra América*; *El que no lo vea, renuncie al porvenir, historia de América contemporánea*; *Para una historia de las ideas en Nuestra América* y *Como la cigarra: Carlos Marx, 1818-1883*.

ISBN 978-959-260-612-8



casa de las américas

